

EDICIONES

MASAS

-1980-

**EL
PROLETARIADO
EN EL
PROCESO
POLITICO**

1952-1980

G. LORA

Ediciones

G. LORA



1980

EL
PROLETARIADO
EN EL
PROCESO
POLITICO

1952 - 1980

Advertencia

Capítulo I

El golpe contrarrevolucionario del 4 de noviembre de 1964

1. El enemigo: Los sindicatos	11
2. La lucha popular contra el gobierno de Paz	12
3. El golpe de Estado y las masas	21
4. La restauración oligárquica	26
5. La batalla de Sora-Sora	31

Capítulo II

Los acontecimientos de Mayo

1. La Junta Militar a la ofensiva	35
2. Apresamiento de Lechín y huelga general	37
3. Los decretos antiobreros de mayo	43
4. Sindicatos clandestinos	46

Capítulo III

El baño de sangre de San Juan

1. La resistencia obrera	53
2. Territorios libres	54
3. La masacre	56
4. Emergencias de la masacre	59
S. El foquismo y la represión	62
6. Plataforma de la resistencia	64

7. Agitación estudiantil 67

8. La lucha en las minas 68

Capitulo IV

Los mártires obreros

1. César Lora 72

2. Isaac Camacho 80

3. Julio Cesar Aguilar 81

Capítulo V

El control obrero

1. Planteamiento de la Tesis de Pulacayo 83

2. El control obrero movimientista 84

3. Control obrero colectivo 89

4. Destrucción del control obrero 93

5. Sentido revolucionario del control obrero 98

6. Desvirtuación y defensa del control obrero 103

7. Administración obrera mayoritaria en Comibol 108

8. La co-gestión obrera 110

Capítulo VI

Otros ensayos nacionalistas

1. Agotamiento de los métodos fascistas de gobierno 113

2. El Codep 116

3. Insurgencia foquista 124

4. Jerarquía castrense y CIA	126
5. El "demócrata" Luis Adolfo Siles	128
6. El cuartelazo de 26 de septiembre de 1969	133

Capítulo VII

El gobierno nacionalista de Tórres

1. Antecedentes	147
2. El gobierno de Tórres y la clase obrera	151
3. ¿Podía Tórres llevar al socialismo?	154
4. Táctica revolucionaria frente al gobierno de Tórres	160

Capítulo VIII

La experiencia de la Asamblea Popular

1. La Asamblea Popular y el gobierno de Tórres	164
2. Organización soviética	168
3. Asamblea y ejército	171
4. Problemas de la Asamblea	177
5. Los ultraizquierdistas y los obreros	178

Capítulo IX

El Frente Revolucionario antiimperialista

1. La contrarrevolución de agosto de 1971	187
2. Posición de la Asamblea Popular	190
3. Las minas	198
4. Actitud de Tórres	201

5. Rol de la universidad	203
6. Los triunviros	208
7. El Alto Mando y el FPN	216
8. La presencia de las masas	222
9. La clase media	223
10. Los sindicatos	231
11. Escesos gubernamentales	251
12. El Frente Revolucionario Antiimperialista	264

Capítulo X

Nuevo ascenso de masas

1. El problema económico	291
2. La respuesta obrera	295
3. La represión de fines de 1973	301
4. Las huelgas obreras	307
5. Intentos democratizantes	310
6. Nueva elevación de precios	317
7. Impotencia de la dirección sindical	325
8. Estremecimiento del equipo gubernamental	331
9. Otro golpe contra la economía popular	345
10. Respuesta: la Huelga	348

Capítulo XI

El autogolpe de noviembre de 1974 y la clase obrera

1. Tendencias que prefiguraron el autogolpe	369
2. Consecuencias del autogolpe	372
3. ¿La democracia es la imprescindible escuela política del proletariado?	379
4. Enseñanzas de las trágicas jornadas de noviembre de 1979	384
5. El ejército y la clase obrera	388

La crisis de la Central Obrera Boliviana Naturaleza de la crisis de la COB

- Naturaleza de la crisis de la COB.	394
- El papel nefasto del stalinismo y del colaboracionismo clasista	395
- Nos encontramos ante la crisis de las direcciones sindicales y no de la COB, organización de las masas	397
- Estrategia y táctica	399
- Acción directa de masas y el FRA	402

Opiniones y comentarios

Comentario de René López Murillo	404
Otro comentario de René López M.	405
Comentario de Joaquín Rojas G.	407
Algo sobre un historiador boliviano	409
Comentario de José Fellmann Velarde	411
Comentario de Luis Raúl Durán	411
Comentario de Inés Díaz (argentina)	411

Comentario de Sheldon B. Liss	417
Comentario de "Los Tiempos"	420
Comentario de "Ojo de Vidrio"	420
Comentario de Rosalid Boyc! J.	420
Comentario de G. Rodríguez	421
Comentario de Irme Lorini	424
Solapa del libro resumen traducido por Christine Whitehead	425
Introducción del editor, L. Whitehead	425
Comentario de Herbert S. Klein	428
Comentario de Paul Preston	430
Introducción del editor	430
Comentario de Herbert S. Klein	430
Comentario de Paul Preston	430
Revista Internacional de Historia social	430
Artículo revista M. N/A	430
Comentario de John Hillman	431
Comentario de D. Ortuño	433
Un libro nacional de este tiempo	435
Comentario de "Clarín"	436
Vive un anarquista	437
Opiniones sobre la obra de G. Lora por Juan Siles Guevara	439
Sobre la "Historia del Movimiento Obrero"	439
Comentario de Carlos Castañon	439
Comentario de R. Alexander	440

Advertencia

Con el volumen que tiene el lector entre las manos concluye la "Historia del Movimiento Obrero Boliviano", que comenzó a publicarse en 1967.

Su autor es, sobre todas las cosas, un militante revolucionario y la necesidad imperiosa de comprender la epopeya del admirable proletariado altiplánico se incorporó como parte de su actividad cotidiana, habiendo utilizado esa comprensión como otra arma más en el propósito de coadyuvar a la clase revolucionaria a cumplir su misión histórica. A lo largo de sus páginas es posible seguir el apasionante y contradictorio proceso de transformación de la clase en sí en clase para sí, es decir, capaz de consumir su destino. Los materiales que contiene esta "Historia..." han sido tratados desde el punto de vista de la evolución de la conciencia de clase en el volumen titulado "Formación de la clase obrera boliviana".

El partido político, portador de la ciencia marxista, es quien permite la transformación de la clase y al cumplir esta importantísima tarea se transforma a sí mismo, su práctica sobre ella es revolucionaria en el sentido que Marx daba a esta expresión.

Esta obra, instrumento de lucha ante todo, fue lentamente forjada en el calor de la batalla, a fin de que su protagonista pudiera utilizarla en su lucha liberadora; nacida en medio de la convulsionada lucha de clases, no pudo menos que soportar todas sus consecuencias. Cuando aparecieron los primeros tomos se dejó constancia de que los organismos de represión eran, acaso sin saberlo, los peores enemigos del libro, su autor no podía ni siquiera sospechar en ese entonces que su criatura sería materialmente destruida en tres oportunidades. Cuando, en vísperas del crucial 1970, se imprimía el tercer tomo en los talleres gráficos de la universidad paceña, una asonada falangista guillotiné todo lo trabajado, dejando así constancia de que fascismo y cultura son extremos que se excluyen. En agosto de 1971, los originales fueron a caer a manos del tenebroso coronel Loayza, un títere de la CIA. Luego, en el destierro, las huestes chilenas de Pinochet condenaron a la pena del fuego al cuarto volumen de esta "Historia...", que a su turno se convirtió en personaje de tan larga y accidentada historia. Las débiles fuerzas del que por necesidad recurrió a la pluma y entonces trotaba por los caminos del destierro, tuvieron que ser empleadas para volver a escribir una y otra vez los originales, que por fortuna ahora llegan a su culminación.

Teniendo que acomodarse a las bruscas mutaciones de la política boliviana se vio condenada también a modificar su forma. Hasta el cuarto volumen, que acaba de aparecer, se llama "Historia..." y ha sido editada por "Los Amigos del Libro", el quinto ostenta el rótulo de "Movimiento Obrero Contemporáneo" y este último el de "Papel del Proletariado en el proceso político". Escrito en el transcurso de varios años, no ha podido conservar la deseada unidad formal y estilística y es posible notar en sus páginas alguna incoherencia. Es el precio que paga el autor por su terco empeño de continuar peleando en las trincheras proletarias.

El plan inicial fue el de escribir un volumen de no más de 280 páginas, espacio

ciertamente muy estrecho para poder meter en él la apasionante historia del drama boliviano, y a nadie se le habría pasado por la cabeza la idea de que la obra en su conjunto abarcaría más de 3.000. El autor tiene que excusarse ante el lector por ofrecerle todo un mamotreto en esta época que rinde tributo a la brevedad.

La clase obrera boliviana, notable por tantos aspectos, merecía que otra pluma mejor tajada presentase su historia. El autor está seguro que lo que ha escrito no agota el tema ni puede considerarse como algo definitivo, es apenas una contribución al conocimiento del proletariado revolucionario.

En definitiva, la posición política de quien ha elaborado este libro se ha convertido en una ventaja para el lector, pues le ha constreñido a ajustarse a los hechos y a los testimonios que sobre ellos existen, a esforzarse por establecer la verdad, a revelar las leyes del desarrollo del proceso boliviano, porque todo esto constituye un arma poderosa en manos de los explotados cuando se encaminan a consumir su liberación.

Esta "Historia..." reclama se le reconozca un único mérito y que consiste en que puede transformarse en uno de los elementos para el conocimiento de la clase obrera, por tanto, de su propia transformación, del proceso de formación de la vanguardia revolucionaria. Y cada una de las líneas de estos gruesos volúmenes constituye rendido homenaje de un luchador a su clase, porque la considera tal al proletariado en la medida en que ideológicamente se identifica con sus objetivos históricos y porque todo lo que hace y dice está al servicio de la materialización de éstos.

La clase obrera, desposeída de la propiedad de los medios de producción y de la cultura, no tiene más remedio que apoderarse, en determinado momento, de la ciencia social, para afirmarse como clase y poder realizar su misión histórica. ¿Será irracional ambición del autor el pretender que ha contribuido de manera modestísima a esta colosal tarea, que es nada menos que el proceso más importante de la transformación revolucionaria de la caduca sociedad burguesa que nos impide realizarnos como hombres humanos?

En Bolivia casi no ha sido comentado el libro, lo que indicaría que los esfuerzos del autor han sido inútiles, pues anotemos que no ha logrado romper el cerco del silencio convencional y de intención política. En el exterior son numerosos y dispares los comentarios. A pesar de todo, parece que ha alcanzado un relativo éxito editorial, pues su editor emprende la ímproba tarea de la segunda edición. Tenemos pocos libros y carecemos de una auténtica crítica y no es tal la subalterna tarea de autoelogiarse que se asignan las capillas de "escritores".

La Paz, abril de 1980

Capítulo I

El golpe contrarrevolucionario del 4 de noviembre de 1964

1

El enemigo: los sindicatos

Recapitulemos el camino recorrido por los sindicatos en busca de su legalización:

Las primeras organizaciones obreras eran marcadamente mutualistas, incluso durante los primeros decenios del siglo XX, y dentro de estas limitaciones estaban amparadas por la ley y por los diferentes gobiernos. Cuando aparecieron los sindicatos propiamente estaban amparadas por la ley y por los diferentes gobiernos. Cuando aparecieron los sindicatos propiamente dichos fueron perseguidos por las autoridades y no pudieron ampararse en ninguna disposición legal. En cierta medida el sindicalismo comenzó a incorporarse clandestinamente o bien utilizando el mutualismo para encubrir su verdadero rostro. Los estatutos sindicales declaraban perseguir fines de ayuda mutua y beneficencia. No olvidemos que el movimiento huelguístico de los mineros de Uncía (1923) fue desencadenado para lograr el respeto a las organizaciones obreras por parte de la patronal y de las autoridades.

Antes de 1930 los sindicatos y federaciones ganaron el derecho a existir y moverse libremente, después de una cruenta y larga lucha, primero en el plano de los hechos, sólo más tarde fue consagrado por la Constitución Política y por las leyes secundarias. Las autoridades discutían y negociaban con los sindicatos y federaciones, a pesar de que ninguna ley autorizaba hacerlo y sólo porque así lo imponían las necesidades emergentes de la misma explotación de la clase obrera.

Las enmiendas constitucionales de 1931-32 incorporaron a la Constitución el capítulo titulado Régimen Económico y Social. El decreto de 22 de noviembre de 1933 dispuso que "Las corporaciones de funcionarios públicos y de obreros y aquellas que tengan fines gremiales, sólo podrán ser reconocidas oficialmente en lo relativo a fines de mutualidad y beneficencia". Siguiendo ajustadamente el espíritu que inspiró esta disposición se tiene que concluir, como lo hace Oscar Frerking ¹, que negaba la existencia de la organización sindical. Sin embargo, en la práctica impulsó el nacimiento de sindicatos, porque a éstos les fue sumamente fácil proclamar que sus fines no eran otros que los mutualistas.

En el camino de la legalización de los sindicatos constituye un hito de remarcable importancia el decreto de 19 de agosto de 1936, dictado por el Gobierno Toro y que

1- Oscar Frerking Salas, "Las formas sindicales y su problema en Bolivia", en "Revista de Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales", N° 11, Sucre, 1944.

establece la sindicalización obligatoria, "bajo la tuición y control permanente del Gobierno socialista". Se declaró que las organizaciones obreras estaban vinculadas al mecanismo estatal. No era difícil descubrir que el mencionado decreto era de corte fascista. Bajo esta legislación nace la CSTB como central nacional y afiliada a la CTRL. El artículo 125 de la Constitución de 1938, que ostenta características obreristas y de izquierda inconfundibles, proclama la libre asociación profesional y sindical.

La Ley General del Trabajo (24 de mayo de 1939) se ajusta a la disposición constitucional y regla la organización y vida de los sindicatos, dentro del marco de una amplia libertad que se ajusta a los convenios de la OIT sobre la materia.

El Gobierno Villarroel estatuyó el llamado fuero sindical, que importa una franca protección a las organizaciones obreras. El decreto correspondiente, establece que "Los obreros o empleados elegidos para desempeñar los cargos directivos de un sindicato no podrán ser destituidos sin proceso. Tampoco podrán ser transferidos de un empleo a otro, ni aún de una sección a otra dentro de una misma empresa sin su libre consentimiento". Este decreto fue dictado para evitar las represalias que la patronal y las mismas autoridades pudiesen ejercitar contra los dirigentes obreros.

Los gobiernos de la rosca o aquel los que representaban las tendencias restauradoras oligárquicas siempre se empeñaron en limitar la libertad sindical y en cercenar las atribuciones que las leyes confieren a las organizaciones laborales. Dos aspectos nunca han dejado de preocupar a las autoridades: la extrema politización de los sindicatos y la libertad ideológica de los dirigentes. Bajo el pretexto de combatir al comunismo, el gobierno Urriolagoitia dictó medidas encaminadas a erradicar a los marxistas de la dirección sindical. El gobierno del General Ballivián siguió el mismo camino. La Junta Militar que sucedió al régimen movimientista dictó el decreto N° 7204 de mayo de 1965 y que da tales atribuciones al Ministerio del Trabajo que prácticamente liquida no sólo la libertad sindical sino la misma existencia física de las organizaciones obreras. Los dirigentes no debían, imprescindiblemente, militar en determinados partidos y la voluntad de las bases fue sustituida por las determinaciones burocráticas del ministerio del ramo. Los trabajadores respondieron a estas medidas atentatorias organizando sindicatos clandestinos. Después del golpe reaccionario de noviembre de 1964 se dictaron draconianas medidas de reglamentación de los sindicatos.

2

La lucha popular contra el gobierno Paz

Desde la fecha en que fue dictada la estabilización monetaria (1956), toda demanda laboral, por modesta que fuese, amenazaba convertirse en un conflicto político. Esta tendencia se acentuó mucho más durante la presidencia de Víctor Paz. Los brotes de agitación social motivaban la inestabilidad gubernamental. Sin capacidad alguna para contener por sí mismo esta avalancha, el régimen movimientista pasó a depender completamente, y de una manera natural, de las fuerzas armadas, al extremo de que

éstas tenían en sus manos la posibilidad de barrer de los pasillos del Palacio Ouemado y cuando creyesen conveniente, a las gastadas figuras del civilismo emeenerrista.

Las tendencias fundamentales de la evolución política llevaron al país, de manera inevitable, hacia el régimen militar policíaco.

La arremetida popular fue iniciada por los mineros y otros sectores proletarios, que fueron los primeros en emanciparse de la influencia movimientista. La lucha antigubernamental de la clase obrera partía de una orgánica evolución ideológica, que le permitió superar las posiciones claudicantes del MNR en su conjunto.

Abierto el camino de la rebelión por el sector más revolucionario, el país no tardó en estremecerse ante el impetuoso empuje de los sectores avanzados de la clase media, que toda vez que se desplazan hacia la izquierda adoptan posiciones por demás estridentes. Hubo falta de uniformidad en el ritmo de movimiento del frente revolucionario. Por momentos fueron los estudiantes y los maestros los que liderizaron al pueblo anti-movimientista. Con todo, la agitación no llegó a su clímax porque fue frustrada por la intervención militar. En 1964 se produjo el golpe contrarrevolucionario y preventivo.

Antes y después de noviembre de 1964 la masa campesina se movió a la retaguardia de las huestes antimovimientistas de las ciudades, de las fábricas y de las minas, recién comenzaba a convencerse, partiendo de su dolorosa experiencia diaria que el gobierno del MNR, lejos de satisfacer sus impostergables exigencias, traicionaba hasta los limitados objetivos de la reforma agraria. Su falta de politización, su tremenda dispersión a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y hasta su incultura, contribuyeron a que este proceso fuese sumamente lento. Los campesinos fueron el último contingente social en el que pudo apoyarse el MNR; consentían en ser movilizados toda vez que hacía falta inflar las manifestaciones "espontáneas" de apoyo al régimen, se conformaban con ser utilizados como fuerza de contrapeso de la intolerancia de los obreros y de amplios sectores de la clase media, en fin, el oficialismo los manejó como simple rebaño electoralista. Después de 1964, en algunas regiones del agro retoñó la adhesión al MNR.

Mientras los políticos profesionales se agotaban en largas discusiones con Víctor Paz o conspirando con los generales que diariamente frecuentaban el Palacio de Gobierno, las masas batallaban tercamente utilizando la acción directa e inclusive la lucha armada. Los líderes de la "izquierda" seguían un camino diferente, y hasta opuesto al escogido por los trabajadores.

Correspondió a los trotskystas dejar sentado por escrito cuales eran los verdaderos objetivos de esta lucha, lo que sigue: aun ahora es preciso recalcar que el objetivo no era otro que vencer a Víctor Paz y a su ejército; este último había tomado en sus manos la tarea de destrozarse a los insurgentes. No pensaban de esta manera los políticos profesionales" ².

2- Guillermo Lora, "¡Abajo la bota militar!", La Paz, 1965.

Los partidos políticos, tanto los de derecha como los que pasan por izquierdistas, tenían como punto de partida la certeza de que el pueblo y sus organizaciones carecían de la suficiente fuerza para sobreponerse al monstruoso aparato represivo que había puesto en pie el MNR (se les antojaba que era su único y efectivo apoyo); sostenían que únicamente el ejército podía cumplir esta tarea. El que los jefes castrenses se hubiesen convertido en amos de la situación no quiere decir que sus ambiciones se identificasen con las aspiraciones populares. Se trataba de dos tendencias opuestas y que seguían direcciones totalmente diferentes. Los militares poristas fueron los únicos que dijeron en forma pública y documentada que "sumarse a la actividad conspirativa del militarismo significaba nada menos que traicionar al pueblo y a la revolución".

Los opositores golpearon las puertas de los cuarteles con la esperanza de que los generales se prestarían a hacer una revolución para ellos. Posteriormente se esforzaron por demostrar que ellos tenían pactos con los jefes castrenses victoriosos, que les ayudaron a derrocar a Víctor Paz y que más tarde y deslealmente fueron marginados de la política y hasta perseguidos. Lo evidente es que los caudillos militares en ningún momento, ni siquiera cuando hacían promesas a los políticos civiles o firmaban compromisos con ellos (en caso de haber existido éstos), pensaron trabajar en beneficio de terceros y esto porque poseían la suficiente fuerza para jugar su propia carta.

"Un virtual frente formado por todos los partidos, con la única excepción de los marxistas, apuntaló y alentó al militarismo en sus trajines golpistas. Un programa simple unía a estas tendencias: los generales cumplirían la limitadísima y peligrosa agenda de eliminar a Víctor Paz para luego entregar el poder a los políticos civiles. Su ingenuidad se apoyaba en el apotegma de que los soldados deben quedarse "patrióticamente" en sus cuarteles, cierto que después de ejecutar el golpe de Estado encargado por sus asesores.

Los que desbrozaron el camino para que los generales pudiesen llegar hasta el Palacio de Gobierno no hicieron otra cosa que trabajar en favor de la victoria de la anti-patria, ¡qué caro están pagando su ceguera y su credulidad! ³.

Tan curioso frente político, aunque en él estuvieron incluidos prinistas y stalinistas, tuvo un marcado e inconfundible carácter contrarrevolucionario, esto porque se empeñó en eliminar toda delimitación entre derecha y izquierda, en borrar las abismales diferencias que separan a la revolución de la rosca, a los obreros de los patrones. Objetivamente estuvo destinado a empujar a los explotados a sumarse al coro que recitaba una monótona homilía en honor del generalato. Esta tendencia dio nacimiento más tarde, al Comité Revolucionario del Pueblo, uno de los principales puntales políticos de la Junta Militar bicéfala (Barrientos-Ovando), que buscaba convertirla en un régimen popular colocado a la cabeza de las masas domesticadas. Únicamente el POR denunció a dicho Comité como "una cueva reaccionaria" a tiempo de negarse a participar en sus reuniones. Salvando las diferencias, el Comité Revolucionario del Pueblo cumplió precariamente las mismas finalidades que los

3- Guillermo Lora, Op. Cit.

famosos Comités Tripartitos creados por el stalinismo pirista al servicio de la rosca y la masonería en 1964; esta vez los amos eran los generales contrarrevolucionarios.

El Comité Revolucionario del Pueblo se autocalificó "parlamento popular" y, para que la farsa fuese completa, realizaba sus reuniones en el Palacio Legislativo y sostenía contacto cotidiano con los generales victoriosos. Tuvo corta vida debido a su inoperancia y por decisión de los dueños del poder, pues resultó un organismo indeseable no bien intentó hacer valer "su fuerza" ante la Junta Militar. El 14 de mayo de 1965, simplemente no hubo quorum en la reunión convocada en la sede de la Federación Universitaria Local. Mientras tanto había sido desconocido por la Junta y expulsado del local del congreso; la prensa se limitó a publicar una pequeña nota de defunción: "Algunos políticos admitieron que no existe razón para que el mencionado Comité continúe funcionando, por lo menos con ese nombre, una vez que la Junta Militar de Gobierno no lo reconoce legalmente como "parlamento del pueblo", pues su labor debía ser de colaboración con el gobierno militar y, por el contrario, ha sido desconocido y desalojado del edificio del Palacio Legislativo donde funcionaba hasta hace unos días.

"Dijeron los políticos que será conveniente, sin embargo, activar la organización de la Comisión Pro-defensa de la Constitución y la Democracia", procurando que tomen parte de ella todas las organizaciones políticas" ⁴.

La agitación estudiantil dominó el ambiente político a partir del veinte de octubre de 1964, tanto en La Paz como en el interior del país. El gobierno utilizó a carabineros y a fuerzas del ejército para aplastar a los rebeldes, como parte de la represión desatada contra el movimiento obrero y la izquierda en general. La movilización universitaria, que se realizó de modo paralelo a la actividad sindical y el permanente contacto con ella, concluyó siendo capitalizada por los generales golpistas. Los estudiantes, materialmente arrinconados por las fuerzas del orden y seguros de su derrota, confiaron sinceramente en que el sable se había convertido en el símbolo de la libertad. Los estudiantes demostraron, una vez más, su incapacidad para desarrollar consecuentemente una política independiente de clase; se desplazaron desde la trinchera proletaria hasta la burguesa.

Consideramos ilustrativo el diario de esas jornadas escrito en Cochabamba por el entonces estudiante cochabambino R. M. ⁵ y cuyas partes principales pasamos a glosar:

"Día martes, 20 de octubre, después de una asamblea realizada en Finanzas (Universidad de Cochabamba), a horas 17:30 salimos en manifestación en protesta por el apresamiento de Willy Camacho el sábado 17. Desembocamos en la plaza principal, donde hablaron Jorge Ríos Dalenz (Frente Universitario Católico), Carlos Zegarra y Jorge Lara. Estamos en estado de sitio y nos dispersan con gases lacrimógenos. Resistimos en algunas bocacalles, pero finalmente, por quedar pocos, nos retiramos".

4- "El Diario", La Paz, 15 de mayo de 1965

5- Diario inédito y una copia en los archivos de G. L. Omitimos el nombre completo por razones obvias.

El 21, cumpliendo una resolución de la asamblea universitaria del día anterior, se levantaron barricadas y se procedió a bloquear las calles adyacentes a la Universidad.

“Estoy en la esquina Oquendo y Bolívar y hablamos con el Prefecto accidental, teniente coronel Agustín Morales Dúran. Nos ordena destruir las barricadas, le contestamos que lo haremos cuando liberten a Camacho Flores, que se encuentra en las celdas del Control Político de La Paz”.

A esta altura se incorporan a la lucha los estudiantes de secundaria. “Alrededor de las diez de la mañana sufrimos el primer ataque de la policía que utiliza gases. Respondemos con piedras, ladrillos, etc. Con habilidad extraordinaria un estudiante arroja una bomba molotov, que casi cae sobre un carabinero en la esquina Oquendo y Perú.

“Cerca del medio día el combate se agudiza. Los estudiantes rebasan a la policía, por lo que intervienen las milicias del gobierno, que utilizando fusiles y ametralladoras nos obligan a replegarnos. Estos hechos exasperan a los estudiantes aún más y con singular heroísmo responden a las balas con piedras. En todos los sectores comienzan a caer heridos, en la Plaza Sucre defendemos una de nuestras barricadas”.

Según R. M., al promediar la tarde de ese día habían en las calles y en los lugares de refriega pocos universitarios, casi todos eran estudiantes de colegios secundarios.

Durante la tarde y por vía aérea llegaron, desde La Paz, refuerzos policiales. “Cae la noche y nos rodean gran cantidad de carabineros. Experimentamos cierto nerviosismo y temor. Radio Rebelde (un sistema de amplificación), que ha funcionado todo el día, guarda silencio. Capturamos como rehenes a un carabinero y dos agentes civiles, y los guardamos en la Facultad de Derecho”. El Ministro de Gobierno se trasladó hasta Cochabamba para charlar con los dirigentes universitarios, con la esperanza de poner fin a la tormenta. Prometió la libertad de Camacho y se acordó el canje de los tres rehenes con igual número de estudiantes que se encontraban detenidos en la Policía”. A las 23 horas se realiza una asamblea en el patio de la Universidad y se aceptan estos planteamientos”.

Resultado de estas acciones: un muerto (René Ferrufino) y diez heridos. Hay muchos policías contusos.

“Día 22.- Desde muy temprano se concentran los estudiantes en la Universidad, dispuestos a combatir. El Prefecto coronel Luis Reque Terán reasume sus funciones y prohíbe la salida de la policía. Funciona Radio Rebelde y los muchachos juegan en los jardines”. Se trata del mismo Reque Terán que, más tarde, asumirá la dirección de la lucha antiguerrillera en Camiri y, posteriormente lo encontraremos nuevamente como Prefecto de Cochabamba, con la misión de aplastar enérgicamente a la oposición obrero-estudiantil.

El 26 (lunes) se realiza en Oruro una belicosa manifestación estudiantil y cuyo saldo son dos muertos y muchos heridos. Los manifestantes expresan su repudio a la

conducta observada por las autoridades en Cochabamba.

Nuevos choques en Oruro (día 28). El entierro de las víctimas del lunes es dispersado a bala. Resisten los estudiantes junto a mineros y fabriles. Se registran nuevos muertos y heridos.

También en Sucre (día 28) los estudiantes luchan con la policía casi durante toda la jornada y caen muchos heridos.

Los jóvenes levantan barricadas, aunque no hay choques con las tropas gubernamentales.

En La Paz el Control Político ataca alevosamente a los estudiantes y éstos destrozan e incendian el Centro de Salud ubicado en la Plaza del Estudiante. Después de los encuentros entre fuerzas oficialistas y la avanzada de los estudiantes y obreros, éstos últimos se refugian en el edificio de la UMSA, que fue asaltada y se capturaron 1.300 presos.

El 29 se produce en Sora Sora el combate entre fracciones del Rangers y los mineros de Siglo XX que marchaban hacia Oruro con la manifiesta intención de asistir al entierro del dirigente estudiantil Darío Caballero. Esa misma mañana el ejército ocupa el campamento de San José y acalla la emisora de los trabajadores. Las radios mineras se convirtieron en instrumentos de propaganda subversiva y buscaban orientar a todo el pueblo en su lucha contra el gobierno de Paz Estenssoro.

“En Cochabamba los estudiantes atacan y destruyen “Prensa Libre” y la casa del jefe del Comité Político. Saldo de la operación: un muerto y tres heridos”.

El tres de noviembre fue un día crucial y, según el diario que glosamos, el estado de ánimo de los estudiantes era el siguiente:

“Han pasado cuatro días y nos domina la idea de haber sido derrotados”. Oruro ha sido declarada zona militar y los mineros se replegaron a sus distritos; en La Paz fueron apresados los dirigentes más combativos (tanto obreros como estudiantes); Cochabamba estaba cohibida por el cerco de los campesinos y porque flotaba en el aire la amenaza de reprimir a bala cualquier manifestación.

“Cuando las actividades parecía que iban a reiniciarse y los ciudadanos se dirigían a sus trabajos, soldados del CITE (Centro de Instrucción de Tropas Especiales) entraron en la Plaza 14 de Septiembre, rodearon la zona y en pocos minutos eran dueños de la Prefectura. Bastó una corta charla para que la policía se volcara en favor de los insurgentes y antes de las 8 y 30 estaba dominada la situación”.

“Los muchachos asaltaron el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz en busca de armas y se encontraron algunos fusiles. Se incendió la casa del teniente de tránsito René Jofré, fue destrozado el domicilio de Germán Lema Aráoz, etc.”

La agitación estudiantil y popular en la ciudad de La Paz llegó a su punto culminante el 29 de octubre, criterio impartido por el gobierno según se desprende de un documento suscrito por Jaime Calderón, Ministro Secretario General de la Presidencia en esa época ⁶.

Los opositores y los dirigentes estudiantiles convocaron para esa fecha la llamada "marcha de la libertad", que debía partir de la Universidad, convertida en ciudadela de los adversarios del régimen. "Frente a esta delicada situación, el MNR decidió contrarrestarla convocando simultáneamente a una manifestación pública de su militancia, obreros y campesinos".

Otero informa que el Presidente Paz Estenssoro, buscando evitar "sangrientas e imprevisibles consecuencias... decidió que, por conducto de su hombre de mayor confianza el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando, se conviniera que los opositores efectuaran sus actuaciones dentro del recinto de la Universidad, mientras él conseguiría que sus seguidores desistieran de la manifestación concentrándose en la Plaza Murillo".

La noche del 29 llovía torrencialmente y llegó a conocimiento del gabinete que se encontraba reunido, la noticia de que grupos desprendidos de la universidad estaban saqueando e incendiando el Ministerio de Salud Pública (plaza Franz Tamayo), atacando la Biblioteca Municipal y el local del diario La Nación. Los ministros estaban de acuerdo que la situación se había tornado abiertamente subversiva y que tenía como centro a la UMSA, por esto encomendaron a los generales Luis Rodríguez Bidegáin, Eduardo Rivas Ugalde y al coronel Guillermo Ariñez controlasen a los revoltosos de la universidad. Las operaciones se realizaron con la venia de Ovando. Según la versión de los movimientistas todo se limitó al "fuego de hostigamiento en torno al edificio de la universidad, mediante nutridos disparos al aire, para lograr la rendición de los amotinados, evitando el derramamiento de sangre". Para los generales revoltosos y sus parciales se trató de una criminal provocación: "el movimientismo, en sus últimas etapas, había no solo profanado universidades, sino atentado contra la vida misma de universitarios, estudiantes y obreros. La Universidad Mayor de San Andrés, fue uno de los blancos principales de la vesania, cuando fuerzas de represión y "milicianos" la abatieron la noche del 29 de octubre, colmando la paciencia del pueblo boliviano" ⁷.

En el Monoblock, se habían refugiado más de mil quinientas personas, que por trámites del falangista Guillo Straus y de Monseñor Andrés Kennedy, este último enviado por Paz Estenssoro, se entregaron presos. El oficialismo hacía esfuerzos desesperados por contener y obligara retroceder a las masas.

El 2 de noviembre, Oruro fue escenario de graves acontecimientos. Los opositores asaltaron y saquearon la radioemisora El Cóndor, la casa del jefe regional movimientista (Mazuelos) y la del jefe de Policía, coronel Lema. En respuesta a esta situación considerada grave, "el general Ovando ordenó reforzar Oruro con los regimientos Ranger y Motorizado". El Presidente Paz dispuso que el ejército resguardara el orden

6- Jaime Otero Calderón, "Dilucidación histórica", La Paz, noviembre de 1968.

7- "La revolución de noviembre", en "Bolivia" (Dirección de Informaciones de la Presidencia), La Paz, 1º de enero de 1965.

en esa ciudad. "Cerca de las dos de la mañana (día 3) se comunicó que la mina San José había sido ocupada y restablecido el orden en Oruro" La Paz daba la apariencia de estar preocupado en disuadir pacíficamente a los sectores mayoritarios aunque, en realidad, preparaba cuidadosamente la represión y así convertía a los generales en dueños de la situación política.

La comprobada deslealtad del general Ovando ha sido uno de los factores que ha contribuido a la rápida caída de Víctor Paz, pues mientras éste lo consideraba su sostén principal, abusando de su condición de Comandante en Jefe se dedicó activamente a montar el aparato conspirativo.

Posteriormente, los militares dieron la siguiente versión sobre dichos acontecimientos: "El 3 de noviembre, las fuerzas armadas encabezadas por los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia se levantaron en forma masiva en la guarnición de Cochabamba y veinticuatro horas más tarde, en las decisivas acciones del día 4, sellaron la suerte del tirano en La Paz... Previamente (1º. de noviembre), se anunció el levantamiento de los regimientos Ingavi y Politécnico, que adoptaron una posición institucionalista, al negarse a enfrentar al pueblo en una lucha fratricida... Toda intención de ofrecer resistencia quedó descartada cuando la guarnición de Oruro, dando una prueba de unidad total de las fuerzas armadas, se sumó a la rebelión" ⁸.

La Junta Militar quedó constituida en la siguiente forma: Presidente, general René Barrientos Ortuño; Ministro de Gobierno, Tcnl. Oscar Quiroga Terán; Ministro de Hacienda, Tcnl. Carlos Alcoreza Melgarejo; Ministro de Defensa, Gral. Hugo Suárez Guzmán; Ministro de Educación, Cnl. Hugo Bánzer Suárez; Ministro de Trabajo, My. Samuel Gallardo Lozada; Ministro de Minas, Cnl. Eduardo Méndez Pereira; Ministro de Agricultura, Tcnl. Rogelio Miranda Ayala; Presidente de Comibol, Cnl. Juan Lechín Suárez; Ministro de Salud Pública, Cnl. Dr. Carlos Ardites L; Ministro de Planificación, Cnl. David La Fuente Soto, y Ministro Secretario General de la Junta de Gobierno, Dr. Marcelo Galindo de Ugarte.

La rivalidad, unas veces sorda y otras escandalosa, entre los generales Barrientos y Ovando se hizo perceptible para el pueblo desde el mismo 4 de noviembre y se prolongará hasta la muerte del primero. Barrientos se vio obligado a renunciar a los servicios de los grupos falangistas para desplazar, en el primer momento y temporalmente, a su adversario del timón del aparato estatal. Muy pronto tuvo que ceder ante las maniobras de Ovando y permitirle cogobernar. La Junta Militar declaró que su primer objetivo era "el restablecimiento de las más amplias libertades públicas y el imperio irrestricto de los derechos humanos consagrados por la Declaración de las Naciones Unidas" ⁹. Siguen las protestas de que la "Revolución Libertadora" -así comenzó siendo bautizada la conjura por el propio general Barrientos-, logró imponer la paz y permitir "el reencuentro de la familia boliviana en el marco de un clima de concordia y convivencia pacífica". El equipo ministerial castrense creyó oportuno recalcar que era su firme propósito "atraer y garantizar las inversiones extranjeras hacia el emporio de riquezas inexploradas que posee la nación", y dejó sentado

8- Jaime Otero C., Op. Cit.

9- "La Junta de Gobierno define sus propósitos", en "Bolivia", La Paz, enero de 1965.

que era fervoroso partidario de la política del Buen Vecino y de los postulados de la Alianza para el Progreso. Finalmente, dijo que eran "irreversibles la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria, Tributaria y Educativa". Los sectores de la clase media que apoyaron la revuelta de los generales se complacían en subrayar que dicho movimiento buscaba ser una rectificación democrática a los excesos cometidos por la "dictadura pazestensorista".

Parece que los generales abrigaban la esperanza de que su sola presencia en el Palacio Quemado les permitiría ganar la confianza de los trabajadores y que éstos entusiastamente coadyuvarían en el cumplimiento de todos los planes ideados por la Junta Militar. Seguros de contar con la cooperación de los partidos políticos, se encaminaron a persuadir a los sindicalizados para que depusiesen toda actitud de intransigencia, abandonasen sus pedidos de mejoras económicas y más bien, respaldasen a los nuevos gobernantes y prestasen su apoyo a los planes de reordenamiento de la Comibol.

Estos antecedentes definieron la conducta del gobierno durante unos seis meses. Los trabajadores, particularmente los mineros (ciertamente que no sus más altos dirigentes), pasaron a la oposición desde el mismo 4 de noviembre. Sólo después de que la Junta Militar agotó tales métodos, que bien pueden llamarse pacíficos, pasó abiertamente a la represión sangrienta de los movimientos obrero y de izquierda.

El General Barrientos se apresuró en viajar a las minas y estuvo en Huanuni, Catavi, y Siglo XX. La manifiesta hostilidad de los obreros apenas si pudo ser disimulada por los recibimientos preparados cuidadosamente por las gerencias y por las autoridades, contando con la complicidad de algunos malos elementos obreros.

En Siglo XX le dio la bienvenida nada menos que el militante del Partido Comunista (PCB) Daniel Ordoñez, transcribimos algunos párrafos de su discurso:

"El depuesto Gobierno de Paz Estenssoro nunca pudo resolver nuestro principales problemas. Necesitamos diversificación para la industria minera en Bolivia; necesitamos hornos de fundición; y ante todo que no haya más miseria en nuestro país... "nosotros, general, le presentamos nuestros respetos y usted está en la casa de los mineros, en donde siempre se ha señalado que hay extremismo y que hay prepotencia. Usted habrá podido notar si efectivamente hay eso o no lo hay, porque los mineros sabemos tratar a las personas tal como son..."

Daniel Ordoñez, además de pecista, estaba estrechamente emparentado con el Mayor Plaza, que ha pasado a la historia como un monstruoso carnicero. En 1979, el mayor Elías, a la sazón Prefecto de Oruro, informó que las autoridades tenían en Ordoñez a su mejor aliado.

Nada permite sostener que los generales victoriosos confiaban directamente en el pueblo, su confianza -ya hemos indicado- se concentraba en los políticos profesionales. Contrariamente, se apresuraron en adoptar medidas encaminadas a reducirlo a la impotencia y a acallararlo y una de ellas fue, precisamente la llamada "Operación

Desarme”, que buscaba -como se dijo oficialmente- el retiro de las armas en poder del pueblo y su consiguiente devolución a las Fuerzas Armadas. “A la par del desarme espiritual, se impone también ahora el desarme material, para que solamente así se haga posible la convivencia pacífica y el entendimiento civilizado”, tal era el tono de la propaganda oficialista. Una sistemática y persistente campaña publicitaria rodeó la recolección de fusiles y ametralladoras, la mayor parte de ellos en desuso. Es sugerente que en las minas no hubiese funcionado la operación; la resistencia de los trabajadores no pudo ser vencida con halagos y métodos pacíficos.

Nadie puede dudar que los generales golpistas confiaban totalmente en el trabajo de los partidos políticos, muchos de ellos ubicados en la izquierda, para poder contener a las masas y para alinearlas detrás de la Junta Militar. Por esto inclusive contribuyeron al renacimiento de entidades ya muertas como el PIR, por ejemplo, y alentaron la estructuración partidista de sus incondicionales. El PIR no pudo sobrevivir a la convulsión social de 1952, pero más tarde volvió al escenario político gracias al apoyo que le prestó el gorilismo.

3

El golpe de estado y las masas

Si consideramos social y políticamente la dirección (el ejército) que acaudilló el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, sus objetivos y realizaciones y, básicamente, si no olvidamos que fue planeado por el imperialismo y ejecutado bajo su control, se tiene que concluir que se trató de un típico golpe contrarrevolucionario.

Es falsa y arbitraria la tesis de que dicho golpe de Estado constituyó el punto culminante de la movilización revolucionaria de las masas contra el desgobierno movimientista, como sostuvieron los izquierdistas entregados a los generales. La verdad es que la conspiración de los generales fue ignorada por las masas y se desarrolló independientemente de ellas.

Según las organizaciones imperialistas, el evidente deterioro de la economía boliviana sólo podía ser superado rechazando toda petición laboral de mejores condiciones de vida y de trabajo y, este era el planteamiento central, disminuyendo las remuneraciones y el volumen de los beneficios sociales, además de hacer trabajar a los obreros en un ritmo más acelerado. Este programa no pudo ser llevado a la práctica por el gobierno de Paz y ni siquiera pudo formularlo adecuadamente. En los países altamente industrializados la aceleración del ritmo de trabajo y la disminución de los costos generalmente se afrontan utilizando las innovaciones tecnológicas. En la atrasada Bolivia esa tarea se asignó, una y otra vez, a la espada de los generales.

Las medidas antipopulares y entreguistas del régimen castrense encontraron viva resistencia en las minas y ayudaron a las masas a movilizarse amenazadoramente; las autoridades, pese a sus deseos, no pudieron en los primeros momentos reprimir abiertamente a los obreros. Para el Pentágono la supervivencia por más tiempo de un gobierno civil movimientista importaba el peligroso crecimiento de la amenaza

comunista, vale decir, que las masas populares pudiesen concluir tomando el poder después de aplastar al MNR. Era llegado el momento en que sólo las metrallas podían defender los intereses y privilegios del imperialismo.

El golpe de Estado del 4 de noviembre fue básicamente preventivo. Se señaló esa fecha para la consumación de la maniobra contrarrevolucionaria debido a que la avalancha masiva estaba a punto de explosionar y porque se había cumplido el plan de arrinconarla momentáneamente, a fin de evitar el peligro de que por su irrupción, el golpe palaciego se transformase en una verdadera revolución popular. Más que contra Paz Estenssoro y sus amigos, el golpe de fuerza estuvo dirigido contra las masas subvertidas, contra las fuerzas motrices de la revolución.

El civilismo movimientista, que no tuvo la suficiente capacidad para desarrollar ampliamente la democracia burguesa, limitó con frecuencia sus medidas reaccionarias y antipopulares debido a su apego formal a ciertos principios democráticos y porque no se atrevió a sustituir el control burocrático y el soborno de los dirigentes sindicales por la represión sangrienta, como norma única en las relaciones obrero-gubernamentales. Es cierto que el civilismo movimientista apresó, encarceló, confinó y masacró a obreros y opositores de izquierda, pero utilizó estos extremos como recursos de emergencia y excepcionales. No podemos decir que bajo los gobiernos civiles emeenerristas la bala fue la única respuesta a las reclamaciones obreras. La represión brutal y sangrienta fue utilizada para obligare los sindicatos a retroceder, a hacer concesiones, pues inmediatamente venían las charlas y la firma de una paz temporal. Después de un tiempo se estaba frente a otra arremetida obrera y nuevamente se repetía la historia de la mano dura y las subsiguientes componendas. El Pentágono llegó a la conclusión de que ya no servía este método para imponer el orden en el país y menos para aplastar definitivamente al peligroso movimiento obrero. Después de cada tregua los sindicatos atacaban con mayor violencia, los revolucionarios se habían fijado como meta el asalto a la ciudadela gubernamental movimientista.

No se trataba de modificar o de introducir enmiendas en la ideología del MNR (lo esencial de esa ideología consiste en detener el proceso de transformación en los estrechos límites capitalistas y en pretender armonizar el desarrollo integral del país con los planes e intereses imperialistas), sino es sustituir los métodos de gobierno seudo democráticos por otros puramente castrenses. La tradición del MNR como partido popular y "revolucionario" actuó como lastre del gobierno Paz en esos momentos cruciales. El último presidente movimientista civil no podía arrojar por la borda toda esa tradición porque formaba parte de su capital político.

Actuando dentro de la línea fundamental del MNR era preciso para los yanquis encontrar un gobierno de mano más dura que la de Paz, capaz de reemplazar las maniobras dilatorias por los golpes directos sobre la misma columna vertebral de las organizaciones obreras. En esos términos se puede presentar el pensamiento que dominaba el Pentágono en vísperas del 4 de noviembre de 1964.

Es de dominio público que existe contradicción y fricciones entre la orientación de

la política internacional que siguen el Departamento de Estado y el Pentágono, particularmente en Latinoamérica. Mientras el primero apuntala a ciertos gobiernos civiles y "democráticos", el Pentágono propugna la instalación de dictaduras militares directamente subordinadas al imperialismo. Los hechos demuestran que en el Continente el Pentágono ha logrado arrinconar la política del Departamento de Estado.

Surge la pregunta, Por qué las organizaciones norteamericanas no designaron a un partido civil "popular", por ejemplo FSB, para sustituir al gobierno de Víctor Paz?. Se puede responder que se debió a que el golpe fue planeado por el Pentágono y que éste organizó a las Fuerzas Armadas desde mucho tiempo atrás con esta finalidad. Por otro lado resultó imposible encontrar al héroe de turno en otro sector; pues, por las propias características imperantes en ese momento, todo el movimiento político que podía interesar a los yanquis concluyó siendo monopolizado por el ejército. Los políticos profesionales estaban prendidos de la casaca de los generales y no tenían posibilidad alguna de ofrecer una alternativa propia que pudiese interesar a los americanos. Los que esperaban que la casta militar se sacrificase filantrópicamente el 4 de noviembre parece que ignoraban esta realidad.

El General Barrientos definió acertadamente las raíces de la contra revolución oligárquica al llamarla la revolución dentro de la revolución". El gorilismo, particularmente en los primeros momentos, se esmeró en subrayar que su misión inmediata no era negar totalmente la obra del MNR, sino, más bien continuarla, eliminando lo que llamó la nefasta herencia de la camarilla pazestensorista. Tan cierto es esto que la Junta Militar en sus inicios estuvo animada de cooperar con Siles Zuazo y otros líderes desafectos al Dr. Paz, aunque todos ellos alineados en la organización, movimientista, si posteriormente cayeron en desgracia fue debido a que a floraron en ellos desmedidas ambiciones y se resistieron a servir sacrificada y jesucristianamente al gorilismo. Se podrían llenar muchas páginas con sus declaraciones acerca del patriotismo y desinterés de los generales, a quienes atribuyeron la magna tarea de libertar al país de la dictadura pazestensorista.

El divorcio ideológico y organizativo entre las masas, principalmente el proletariado, y el régimen y partido movimientistas; la radicalización de la clase y su rechazo a los planes gubernamentales; en fin, la amenaza de que el pueblo pudiese llevar la revolución más allá de los límites impuestos por el régimen movimientista, obligaron a los yanquis a poner en marcha el aparato militar.

Los críticos que pretenden justificar y defenderla política antipopular y entreguista (antinacional) del movimientismo, particularmente de los últimos gobiernos, se limitan a señalar que la oposición de izquierda, la actividad de las masas y su intransigencia fueron los factores que coadyuvaron para el estallido del golpe de Estado del 4 de noviembre. La conclusión a la que llegan es por demás simplista: la tarea de los revolucionarios no era otra que cerrar filas detrás del gobierno del MNR y evitar toda actitud intransigente que pudiese alarmar a la jerarquía castrense. Este planteamiento lleva implícita la tesis de que era deber de los marxistas limitarse a desarmar ideológicamente a las masas, a fin de obligarlas a someterse dócilmente a la ley y a no rebasar el marco puramente gremial. Se insinúa que en esta forma no

habría habido motivo de alarma para los Estados Unidos y que éstos habrían dejado gobernar al MNR por tiempo indefinido.

Tal planteamiento importaba formular la estabilidad de los gobiernos movimientistas a cambio de que la clase obrera y la revolución misma renunciasen a su porvenir y las masas, sobre todo el proletariado, dejasen de luchar por sus reivindicaciones inmediatas e históricas. Había que sacrificar todo en aras de un gobierno que se tipificó como extraño al pueblo. Semejante táctica equivalía prácticamente al suicidio. El gorilismo, después de destruir físicamente a las organizaciones sindicales, pareció haber conseguido por lo menos momentáneamente, la materialización de los sueños movimientistas: todo un país soportando dócilmente las vergonzosas imposiciones norteamericanas.

Ciertos políticos que presumen de izquierdistas cometieron el crimen imperdonable de sumarse a la conspiración de los generales, bajo el pretexto de que estaban apoyando a un movimiento revolucionario y pro-obrerista. La ambición encegueció a estos personajes y les empujó a cometer un desatino incluso si se considera el problema desde el punto de vista personal, como han demostrado los acontecimientos posteriores. El equívoco, y a esta altura del desarrollo político ya no es posible tener dudas al respecto, consistió en presentar a la contra revolución como revolución; a la restauración oligárquica como rectificación izquierdista de las desviaciones cometidas por la camarilla pazestensorista, al gorilismo como gobierno popular y obrerista; al entreguismo sin paralelo como la misma liberación nacional y, en fin, a la dictadura de corte fascista como la democracia químicamente pura. Esta felonía buscó desorientar y desarmar a las masas, para así estabilizar la dictadura militar y prolongar su existencia, ocasionando así un tremendo perjuicio al pueblo y a la revolución misma.

La diferencia entre la Junta Militar y el Gobierno de Víctor Paz radica en que la primera alcanzó de un solo golpe y brutalmente la meta a la que gradualmente y utilizando la maniobra y la demagogia, se dirigía el gobierno civil movimientista. Ambos regímenes no representaban más que diversas facetas del mismo partido, de la misma ideología.

Augusto Céspedes, magnífico escritor que encubre en fulgurantes adjetivos sus arbitrarias conclusiones políticas, es el que con mayor amplitud ha desarrollado la especie de que los izquierdistas que combatieron al MNR (no importándole saber desde que posición lo hicieron) se identificaron con la rosca y el imperialismo.

El que antes del 4 de noviembre de 1964, tanto los revolucionarios como los instrumentos del Pentágono norteamericano, desde posiciones diametralmente opuestas, hubiesen llegado a la conclusión de que había que acabar con el desgobierno del MNR, no implica que entre ambas fuerzas hubiese entendimiento alguno o un frente político tácito o expreso. Es del todo arbitraria la tesis del Sr. Céspedes en sentido de que los ataques de la izquierda y de ciertas organizaciones imperialistas a los gobiernos de la llamada revolución nacional demuestran que esos extremos cooperaron entre ellos, empeñándose en borrar todas sus diferencias.

La derecha buscaba el cambio gubernamental a fin de acelerar la restauración oligárquica a través de los métodos castrenses. La clase obrera ganó las calles buscando sacar al proceso revolucionario de su empantanamiento, acabar con toda forma de entreguismo y estructurar el gobierno de los obreros y campesinos. Estos polos extremos de la política boliviana de los últimos años chocaron violentamente en Sora-Sora y esto en vísperas del 4 de noviembre. A ninguno de los contendientes se le ocurrió buscar un artificial entendimiento que implicase colaboracionismo clasista; en el campo de la teoría y de la acción desarrollaron una lucha a muerte.

Toda idea y todo gobierno puede siempre ser atacados y criticados desde la derecha y desde la izquierda, sin que esto importe que estas actitudes se identifiquen o confundan. Pueden citarse muchos ejemplos en apoyo de lo expresado, pero preferimos reproducir los proporcionados por Lenin ¹⁰.

a) "Los materialistas han reprochado a Kant su idealismo, han refutado los rasgos idealistas de su sistema... los agnósticos y los idealistas le han reprochado a Kant la admisión de la cosa en sí, como una concesión al materialismo, al "realismo"..."

b) "Purishkevich (monárquico reaccionario extremado) exclama: he criticado a los kadetes (partido de la burguesía liberal monárquica rusa, fundado en 1905) con más consecuencia y resolución que vosotros, señores marxistas" Sin duda, señor Purishkevich los políticos consecuentes puede criticar a los kadetes y los criticarán siempre desde puntos de vista diametralmente opuestos; pero será preciso, sin embargo, no olvidar que vosotros habéis criticado a los kadetes porque son demasiado demócratas. Los machistas critican a Kant desde la derecha y nosotros desde la izquierda".

Recapitulando lo dicho: el imperialismo atacó al gobierno del Dr. Paz Estenssoro porque creía que concluiría abriendo las puertas a la revolución obrera; los trotskystas lo combatieron partiendo de la certidumbre de que se había convertido en el mayor obstáculo para el advenimiento de esa revolución. Esas posiciones contrapuestas volvían a centrar la lucha alrededor de choque entre imperialismo y proletariado.

Si se hubiese alertado ampliamente al pueblo acerca del peligro del gorilismo; si el golpe del 4 de noviembre hubiese encontrado en las calles a un poderoso bloque popular dispuesto a evitar esa vergüenza, es claro que se habría evitado el ciclo militar o por lo menos abreviado su existencia.

El 4 de noviembre ha sido la piedra de toque para los marxistas bolivianos, pues les ha permitido prever los acontecimientos, sacar a primer plano la tendencia interna de un proceso nuevo y lanzar las consignas adecuadas para la acción de las masas. Ciertamente que muy pocos demostraron haber aprendido algo de los libros y de la práctica diaria. La mayoría se sumó simplemente a la contrarrevolución y ayudó con todas sus fuerzas al gorilismo a subir al poder. Otros, los más radicales, se limitaron a recitar los esquemas extraídos de los folletitos de propaganda, pretendiendo vanamente encajar la bullente realidad en su estrecho marco. El marxismo no es

10- Lenin, "Materialismo y empiriocriticismo", Buenos aires, 1956.

ciertamente un descomunal catálogo donde están incluidas todas las posibilidades sociales y políticas y sus consiguientes soluciones, es, más bien, un inapreciable método que permite conocer y comprender un determinado fenómeno.

4

La restauración oligárquica

Que el gorilismo significa la intervención norteamericana en la vida interna del País o las medidas gubernamentales destinadas a asegurar la ilimitada explotación de nuestras riquezas naturales no sería una gran novedad por sí sola, desde el momento en que el gobierno movimientista nos presentó su propia versión de estos hechos. Lo notable radica en que la rosca estuvo segura de que llegó el momento para que cobrase su venganza y en esto no estuvo del todo equivocada.

El golpe de estado del 4 de noviembre inauguró en el país el período de la franca restauración oligárquica debiendo entenderse no únicamente como la acentuación de la defensa de los intereses materiales de la rosca sino, principalmente como su intervención en la política y en la actividad gubernamentales. La confirmación de esta realidad la encontramos en el monopolio que fue progresivamente ejercitado en la vida cultural y social y hasta en la elaboración de la ideología oficial. A partir de entonces no solamente se acentuó la política pro-rosquera y de impulso de la economía privada, sino que la rosca físicamente se instaló en el palacio de Gobierno todo como en los mejores tiempos del liberalismo. Los cargos claves fueron ocupados no sólo por hombres de derecha sino por connotados representantes de la oligarquía.

Los niños bien y los mimados de la alta sociedad volvieron a llenar el escalafón del Ministerio de Relaciones Exteriores. La economía fue colocada en manos del gerente de una gran empresa industrial y el portavoz del pensamiento y voluntad de la rosca.

La Junta Militar propició la reorganización y resurgimiento de los partidos tradicionales de la derecha (PURS y PARTIDO LIBERAL), que desde entonces no únicamente se limitaron a llenar las páginas de los periódicos con solicitudes y avisos pagados, sino que su opinión fue escuchada y pedida para la fijación de la política oficial. Esta actitud -insólita para el observador desprevenido- no fue el resultado de un capricho o de la adhesión lírica de los gorilas a la democracia, sino de la naturaleza misma del régimen surgido el 4 de noviembre y, por esto mismo, correspondía a la línea general implantada.

Parecería contradecir lo dicho sobre el reagrupamiento del PIR y su forzada incorporación al gobierno. Se trató, en realidad, de una maniobra destinada a dar la falsa impresión de que el gorilismo era nada menos que un régimen popular y hasta izquierdizante.

El PIR de esta época ya no era de manera alguna el viejo grupo stalinista que conocimos, no únicamente por haber abandonado sus programa sino por haber perdido

a su militancia. Resulta difícil llamar partido político a un simple círculo de amigos formado alrededor del inefable Dr. Anaya. Su actuación política se explica porque esa izquierda degenerada apuntala las medidas más antiobreras y proimperialistas adoptadas por los generales. La presencia de personeros del PIR en el gabinete de Barrientos viene a confirmar el carácter reaccionario de dicho partido, que en el pasado selló un vergonzoso contubernio con la rosca. No hay mucha diferencia entre el Anaya títere de la gran minería y el ministro convertido en sirviente del conspicuo masacrador de obreros.

Lo dicho no significa que los últimos gobiernos movimientistas no hubiesen acentuado la defensa de los intereses rosqueros o no hubiesen asestado rudos golpes a las conquistas revolucionarias, pero lo evidente es que apenas se recorrían los primeros pasos de la reconciliación entre el MNR y la oligarquía, herida en lo más vivo por los ultrajes que había recibido y por la limitación despóticamente impuesta a sus intereses materiales, aunque conservando parte de su poderío económico se vio marginada de la vida nacional.

La verdadera reconciliación entre la oligarquía y el gobierno se produjo a través del gorilismo en el poder y tuvo como inmediata consecuencia su incorporación al mecanismo estatal como en los mejores tiempos de la reacción. Retornaron del exilio todos los jefes rosqueros y les fueron devueltos honores y condecoraciones; el Cóndor de los Andes tuvo que volver a posarse en los pechos flácidos de antiguallas de toda laya. Necesariamente se produjo un desplazamiento en la administración y burocracia estatales y fue a costa de las capas de la clase media, que tan vigorosamente habían sido empujadas por el MNR hacia adelante.

La rosca demostró tener mucha más inteligencia (o acaso instinto de mando) que todos los políticos profesionales que oficiaban de izquierdistas. Sigilosamente, partiendo de sus modestísimas posiciones de fiel servidora del gorilismo, se deslizó hasta el control de puestos claves y por momentos resultaba difícil saber si eran los generales o los oligarcas los que tenían el timón del Estado. Lo cierto es que las decisiones fundamentales eran tomadas por los gerentes de las grandes empresas y los políticos rosqueros.

La situación política a la que había llegado el país no permitía que la restauración oligárquica siguiese el camino del golpe directo asestado por algún partido tradicional de derecha y ni siquiera por Falange. El gobierno salido de semejante operación no habría tenido la fuerza suficiente para imponer las medidas excepcionales que la reacción precisaba. Obrando de manera tan cínica se habría contribuido a movilizar al pueblo contra el golpe de Estado. El ataque a fondo contra la revolución, para prosperar, tenía que encubrirse tras las poses populacheras y pseudo revolucionarias. Hay un otro aspecto que se olvida con frecuencia; ni la democracia, ni la consulta popular y ni siquiera sus remedos, podían conducir hacia dicha restauración, no eran sus canales propios, era preciso esgrimir dicha violencia y el sable.

El gobierno de Paz también se encaminaba hacia la restauración y su caída se debió, como se tiene indicado, a que las medidas que adoptó en ese sentido no pudieron

vencer la vigorosa resistencia de las masas. De esta manera el retorno de la rosca a la posición de la integridad de sus privilegios se convirtió en un proceso sumamente lento y que, por esto mismo, no aseguraba la victoria, existiendo el peligro de que las masas, aprovechando el plazo que se concedía, concluyesen barriendo al propio gobierno movimientista.

La Junta Militar cumplió el programa restaurador de manera inmediata y brutal, pisoteando todas las garantías democráticas y las formalidades constitucionales, ahogando en sangre a las organizaciones obreras y al movimiento revolucionario. Son estos diferentes métodos de gobierno los que tipifican y diferencian a ambos regímenes.

Con todo, hay un hilo conductor que establece la continuidad entre los últimos gobiernos movimientistas civiles y el gorilismo y ese hilo está constituido por las tendencias derechistas que en su seno contenía el MNR. Esas tendencias ligaban al movimiento con la rosca, porque buscaban utilizar al propio partido que acaudilló la movilización masiva del 9 de abril de 1952 para aplastar el proceso revolucionario y llevar a la oligarquía hasta el Palacio de Gobierno. La apasionada lucha fraccional dentro del oficialismo era la refracción, en el campo pequeño-burgués, del choque entre las fuerzas de la revolución y de la contrarrevolución. La derecha movimientista tenía como norte controlar directamente a Víctor Paz, arrinconar a la izquierda e inclusive expulsarla del partido de gobierno, por considerar que no era más que una variante del comunismo. Inmediatamente antes y después del 9 de abril, no dejó de actuar esta tendencia con resultado variable, pero fue la poderosa insurgencia de las fuerzas armadas la que le dio mayor fuerza y coherencia. El ejército no se limitó a apoyar a la derecha movimientista, hecho que podía haberse convertido en un simple episodio de su existencia, sino que encarnó su programa reaccionario y proporcionó los métodos adecuados para su inmediata realización. Las fuerzas armadas retomaron los objetivos derechistas y los llevaron hasta límites insospechados, hasta imprimirles rasgos fascistas.

En síntesis; el gorilismo no es la negación del MNR en su conjunto y ni siquiera del pazestenssorismo, que en su última etapa se identificó con la contrarrevolución, sino la acentuación de sus tendencias derechistas. Sin embargo, sería inexacto decir que la dictadura castrense no sea más que la repetición fiel del régimen movimientista, no olvidemos que entre ambos media un golpe de Estado. La eliminación violenta de la izquierda, dentro y fuera del MNR, es suficiente prueba para sostener lo contrario.

La ficción democrática del pazestenssorismo no permitió la ilegalización de los partidos políticos que se reclamaban del marxismo, pero lo hizo muy llanamente la bota militar y hubiera sucedido igual cosa en caso de triunfar el golpe de la derecha movimientista el 6 de enero de 1953.

La restauración oligárquica más furiosa no tiene la fuerza suficiente para extirpar de raíz todas las transformaciones revolucionarias operadas en el país, éstas se han convertido en patrimonio nacional y servirán para la construcción de la futura sociedad. La Sociedad Rural de Cochabamba, que agrupaba a latifundistas alicaídos, no llegó en su atrevimiento a formular la restitución de la pertenencia de las ex-

grandes haciendas, lo más que hizo fue reclamar una limitación de los alcances de la Ley de Reforma Agraria (la extrema pesadez del servicio de Reforma Agraria da lugar a tales chicanas). Los restauradores podrán desvirtuar o anular ciertos aspectos parciales de las grandes reformas, pero será imposible que se materialice su sueño de retornar al viejo orden. Lo contrario significaría que la revolución consumada no obedecía a una necesidad histórica, lo que es absurdo.

Sería justo decir que el gorilismo se limitó a llevar a la práctica, utilizando sus peculiares métodos, la política que ya fue formulada por la derecha movimientista, habiéndola llevado a extremos insospechados.

Por haber sido los primeros en formular la tesis de que el gorilismo era sinónimo de restauración oligárquica, los poristas han tenido que soportar la destemplada crítica de los ideólogos al servicio del militarismo. A esta altura del debate se impone resumir esa disputa.

La imputación más frecuente dice que las ideas del POR son la consecuencia obligada del antimilitarismo que informa la ideología trotskysta. Esta afirmación es falsa. El marxismo no es enemigo del ejército en abstracto, lo que equivaldría a caer en una desviación anarquista. Se declara enemigo jurado del militarismo pro-imperialista porque su objetivo es aplastar los movimientos de liberación nacional. Lucha contra los organismos castrenses que dentro del país sirven al enemigo foráneo. No es enemigo del ejército en su integridad, se levanta contra la casta militar que se ha convertido en instrumento de los yanquis y de la reacción criolla. No puede dejar de denunciar a la jerarquía militar antinacional y proimperialista. Es su deber elemental colocarse frente al gorilismo restaurador. Ha repetido en varias oportunidades que tiene plena conciencia de que la revolución obrera y el Estado que salga de ella tendrán que poner en pie un ejército que les permita aplastar a sus enemigos de dentro y fuera. Ciertamente que no se tratará de un ejército de casta, alejado del pueblo y enemigo de él, sino de una de sus fracciones armadas.

El marxismo al reconocer la inevitabilidad del Estado obrero como etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad sin clases también considera ineludible la defensa armada de la revolución y la constitución de cuerpos especializados que puedan efectivizar tal objetivo.

Por otro lado, no podrá encontrarse en los numerosos escritos trotskystas sobre la materia el rechazo a toda forma de ejército y la negación de la importancia de la defensa armada de la revolución.

Debe añadirse algo que cobra mucha importancia: no repudia al ejército en su integridad, incluidas todas sus capas. La lucha va dirigida contra la alta jerarquía que tan estrechamente está vinculada al Pentágono. Al mismo tiempo, es nuestro deseo ganar para el programa revolucionario a los otros sectores castrenses.

El grueso de la tropa se recluta entre los campesinos y los obreros, por esto es parte del pueblo y participa de sus inquietudes y esperanzas. Esta es también la causa de

su permeabilidad a la propaganda revolucionaria, a las ideas de izquierda. Esa masa armada puede convertirse, en el momento oportuno, en el bastión inexpugnable de la sagrada causa del pueblo y en el primer núcleo del futuro ejército popular. Los clases y suboficiales viven junto a la tropa y su vinculación diaria con obreros y campesinos no ofrece la menor duda y tampoco que mañana se aliarán con el pueblo para aplastar al gorilismo. La propaganda de la izquierda debe tender a ganar a estos amplios sectores, a educarlos políticamente y a soldarlos con las aspiraciones y lucha de los obreros y campesinos.

Los jóvenes oficiales por su honestidad e inteligencia pueden ser ganados por la propaganda revolucionaria y así convertirse en los auxiliares más eficaces en el lucha antigorilista. Para esta oficialidad, que forma parte, juntamente con suboficiales y clases de la mayoría de los efectivos, la tarea inmediata radica en la bolivianización de las fuerzas armadas, en la emancipación de la tutela norteamericana.

Algunos han lanzado la especie de que los trotskystas al atacar frontalmente a la dictadura instaurada por el gorilismo están defendiendo al MNR y sus fechorías. Es corriente escuchar el argumento de que poner reparos a la bota militar es nada menos que buscar el retorno del Control Político, de la corrupción sindical, etc., es decir, de los aspectos negativos del movimientismo. Tal imputación ignora que los planteamientos poristas parten del punto de vista de la clase obrera, los que importa que no pueden detenerse en los límites del MNR y menos reeditar sus facetas negativas. Las formulaciones de la izquierda movimientista, que gusta decir que está muy lejos de la utopía, carecen de significación porque buscaban realizar reformas radicales en el marco pequeño-burgués y siempre contando con la benevolencia norteamericana. El antigorilismo revolucionario busca sustituir a la bota militar con un gobierno propio de los obreros y de los campesinos y no el simple retorno a los superados esquemas del MNR.

Los generales entreguistas hacían gala de un nacionalismo lírico y a ultranza y, como era de esperarse, pretendieron desvirtuar los ataques obreros con el slogan de que obedecían las instrucciones impartidas por potencias extranjeras vivamente interesadas en controlar esta colonia yanqui; esas órdenes habrían contado con el respaldo de grandes cantidades de dinero. Estamos seguros que ni sus propios autores dieron crédito a semejante despropósito.

El 4 de noviembre de 1964 no es, como equivocadamente se ha sostenido hasta por algunos "izquierdistas", el punto en el que coinciden tanto la movilización masiva revolucionaria (antimovimientista desde la posición obrera y antiimperialista) y la conspiración castrense, extremo que permite presumir que entre ambos movimientos habían canales de comunicación y hasta identidad de objetivos. Esta "teoría" ha sido ideada, en verdad, para encubrir mejor la traición de los políticos profesionales. Los gorilas para triunfar tuvieron antes que golpear a las masas.

Tal afirmación violenta la realidad. La movilización del pueblo, bullente marcha de multitudes dispuestas a arrasar todos los obstáculos, podía ser palpada y sus objetivos estaban al alcance de la comprensión de todo el que quisiese conocerlos.

Los militares dijeron que conspiraron desde tiempo atrás, pero se movieron en las sombras, como casta cerrada y sin dar oportunidad a que el hombre de la calle pudiese participar en la conjura. Se puede asegurar que ni siquiera los partidos y los políticos profesionales estaban del todo informados sobre tales trajines, pese a que aquellos ya habían convertido a los generales en sus ídolos.

El severo secreto de los planes castrenses tenía su razón de ser. La decisión del Pentágono que buscaba someter a su control al futuro gobierno boliviano, no podía ser públicamente expresada por razones obvias y era de vital importancia que el golpe de Estado se consumase en seco, al margen de toda intervención de las masas, pues éstas podían convertirlo en el punto de arranque de una profunda insurrección antimovimientista.

Los generales no solamente conspiraron en las sombras y aisladamente sino que pusieron mucho cuidado en arrinconar y derrotar previamente a los trabajadores antes de consumar su propio golpe.

Actuando como garrote en manos de Víctor Paz, el ejército cercó prácticamente las principales minas y ocupó militarmente algunas ciudades claves, con la manifiesta intención de no permitir que prosperase el movimiento de los obreros y cuando éstos, venciendo una serie de vallas, se pusieron en marcha con la intención de precipitarse sobre Oruro, la jerarquía castrense no tuvo el menor reparo en ordenar que los mineros fuesen contenidos a bala, orden que al cumplirse ocasionó la masacre de Sora-Sora; así se detuvo la marcha de los obreros que se habían descolgado desde el distrito de Siglo XX. De haber prosperado la táctica proletaria y con Oruro convertida en fortaleza revolucionaria, es evidente a todas luces que se habría modificado sustancialmente la situación política y con seguridad que habría sido posible evitar la jornada vergonzosa del 4 de noviembre.

5

La batalla de Sora - Sora

El 28 de octubre de 1964 se concentraron en Oruro delegaciones mineras para asistir al entierro de los estudiantes muertos en las luchas callejeras (día 27) contra el gobierno de Paz y contra los propios militares. En esa oportunidad, los distritos de Catavi y Siglo XX estuvieron representados por grupos minoritarios. Fueron los estudiantes timoneados por el porista Hugo Reyes y por los alumnos del combativo colegio "PRIMERO DE MAYO" de Llallagua, los que se distinguieron por su número y por su belicosidad.

Después del entierro, por la tarde, se produjeron nuevos choques y las radioemisoras mineras de San José, "Nacional" de Huanuni, "La Voz del Minero" de Siglo XX y la de Machacamarca, acentuaron sus ataques contra el gobierno y denunciaron, con vehemencia, que se estaba masacrando a los trabajadores en Oruro. Estas noticias exacerbaban los ánimos y aumentaron la tensión reinante en los centros obreros.

Al atardecer del mismo día 28, pequeñas reuniones sindicales habidas en Catavi y Siglo XX, donde se mantenía latente la lucha política de los diversos partidos marxistas, resolvieron volcarse sobre Oruro, acaso empeñadas en enfrentarse de manera decisiva contra las fuerzas castrenses que controlaban esa ciudad, a nadie se le ocurrió que tendrían que librar una singular lucha unos treinta kilómetros antes de llegara "su destino. Los detalles de lo que ha dado en llamarse "Masacre de Sora Sora" fueron registrados por la revista VISTAZO ¹¹ de donde tomamos los párrafos que van a leerse.

"Catavi sólo pudo llenar un camión y Siglo XX tres. Así estuvo formada la pequeña columna de mineros armados que partió rumbo a Oruro el 28 de octubre por la noche. Marcharon únicamente los militares políticos (poristas, pecistas y unos pocos prinistas), quedó al margen el grueso de la masa obrera, viviendo momentos de tensa inquietud. En Huanuni habían no más de doscientos obreros en pie de combate y muy pocos portando armas, que ignoraban con exactitud la situación de los mineros de San José en Oruro y se limitaron a esperar a los de Siglo XX, seguros de que serían guiados por éstos.

"Mientras tanto, las radios rebeldes de todo el país comunicaban que los mineros marchaban sobre Oruro para derrocar al odiado régimen de Víctor Paz. Es fácil comprender que, dentro de tales circunstancias, las Fuerzas del orden tuvieron el tiempo suficiente para apostarse en puntos estratégicos y formar un cordón de fuego que impidiese la marcha de los obreros".

El primer camión de la columna de Siglo XX estaba totalmente copado por poristas y por elementos del llamado "Frente Democrático de Unidad Sindical", que obedecían las directivas de Pímentel. Los otros dos vehículos estaban ocupados por los parciales de la directiva, comandados por pecistas. Impresionó la organización y armamento de los poristas; eran cien hombres divididos en piquetes de diez y que portaban ametralladoras, fusiles y dinamitas.

En Huanuni se acordó marchar primero sobre Sora Sora, lugar convenido para el reparto de dinamita, para luego dirigirse hacia Oruro. En ese momento Ordoñez y otros dirigentes pecistas se metieron a una ambulancia para no abandonarla más, seguramente en la creencia de que este vehículo sería respetado hasta por el enemigo. "Los mineros de Huanuni se incorporaron a la columna en sus propios camiones".

En Sora Sora, Filemón Escóbar, que dirigía a los trotskistas, exigió la formación de un comando único, en el que pudiesen participar representantes de todos los combatientes, vale decir, de los diversos grupos políticos. La proposición fue rechazada con el argumento de que Ordoñez y los miembros del PC eran ya los dirigentes de la operación. También fue rechazada la exigencia de esperar que amaneciese, a fin de poder informarse sobre la situación de Oruro y ubicar debidamente las posiciones ocupadas por las tropas del gobierno. La respuesta fue que la ambulancia daría

esos informes, artimaña que le permitió a la dirección pecista zafarse del grueso de

11- "Así fue la Batalla de Sora-Sora", en "Vistazo", La Paz, 8 de noviembre de 1964.

la masa y evitar los futuros peligros. Se cometió el error inicial de no enviar a un piquete de satinadores que asegurase la marcha del grueso del contingente.

La ambulancia hizo saber que se podía marchar hasta el cruce de los caminos de Oruro y Machacamarca. Orden de los combatientes: la ambulancia, el camión venido de Catavi, el vehículo de los trotskystas, seguido por los otros dos ocupados por los adictos a la dirección sindical.

En el cruce del camino, al pie del cerro San Pedro, un campesino dio la noticia de que a pocos metros de ese lugar se encontraban apostados los soldados. Inmediatamente Filemón Escóbar dio la orden de descender y tenderse. Las fracciones de uniformados que se encontraban a ambos lados del camino, dispararon primero proyectiles luminosos que fueron seguidos por un tiroteo cruzado que duró más de veinte minutos. El camión de Catavi logró llegar al ingenio de Machacamarca, desde donde se llamó a los obreros con el ulular de la sirena. Los obreros reptaron hasta el ingenio, es decir varios kilómetros, y otros permanecieron tendidos en la cuneta y bajo el camión. A las cuatro de la mañana se escuchaba el gemido de los heridos, nueve en total (Pablo Rocha, Pedro Guzmán, Benigno Bastos, Francisco Sandoval, Francisco Alvarez, todos trotskystas; el chofer Campos; Juan Vargas y Ferrufino, prinistas. Muchos de estos obreros tuvieron que permanecer varios meses en el hospital curándose y otros arrastrando sus dolencias por mucho tiempo. A las cinco de la mañana apareció un camión con pasajeros que se dirigía a Potosí, movilidad en la que se embarcó a los heridos para trasladarlos hasta Sora Sora. Se comprobó que en esta población se encontraban los otros dos camiones con sus ocupantes pecistas, que fueron inmediatamente acusados como cobardes y traidores. Los militantes del PC, no bien escucharon los disparos, se dieron modos para retroceder y permanecieron en silencio en lugar de hacer fuego y evitar que toda la potencia de los soldados se centrara sobre los trotskystas. Algo peor aún, no se envió la ambulancia, permitiendo que los heridos se desangrasen. Este crimen inadmisible inaudito desde cualquier punto de vista, pretendió justificarse con el argumento pueril de que nadie quería ir con la ambulancia.

Es en estas circunstancias que Filemón Escobar subió sobre un camión "Mercedes" y dijo: "todos los obreros del Frente Democrático deben subir al camión y retornar a Huanuni, porque no se puede pelear junto a los stalinistas traidores y cobardes". En Huanuni fueron curados y hospitalizados los heridos.

A las once de la mañana arribaron a Huanuni otros trotskystas armados, bajo las órdenes de César Lora, Isaac Camacho y Cirilo Jiménez e inmediatamente se organizaron en grupo de combate. Prontamente se arribó a Sora Sora y de allí se avanzó cuatro kilómetros más, hasta alcanzar el cruce del camino.

Los trotskystas marchaban divididos en dos fracciones: una por el lado de Machacamarca y la otra por el cerro. Un grupo de Huanuni, comandado por Mercado, se desplazó por la parte central, por la pampa. Es aquí donde se libró la cruenta batalla de que tanto hablaron los periódicos. El encuentro duró más de cuatro horas y los mineros lograron hacer retroceder a las tropas del ejército.

Cayeron muchos soldados heridos y hubieron muertos, conforme informó después "La Patria" de Oruro. Los trabajadores lograron inclusive tomar prisioneros. Los trotskystas capturaron ametralladoras y fusiles automáticos, que en ese entonces recién comenzaban a utilizar los efectivos militares (trofeos únicos logrados en las acciones de Sora Sora).

Cuando los poristas ingresaron en la zona de Sora Sora, avanzando lentamente por los flancos de la serranía, se lanzaron al contra ataque más de doscientos soldados que disparaban sin tregua.

La relación de fuerzas era desfavorable para los obreros, resultaba sumamente difícil romper el cerco de fuego y para hacerlo habrían tenido que morir casi todos los trotskystas que participaban en el combate. César Lora conferenció con sus partidarios y se determinó el repliegue hacia la localidad de Huanuni (inexpugnable fuerte obrero en ese momento), operación que se ejecutó sin sufrir bajas. Los efectivos de la retaguardia se limitaban a mirar pacientemente la batalla y cuando los trotskystas se replegaron todos corrían despavoridos hacia Huanuni.

Cuando cesó el fuego llegaron recién los batalladores mineros de Santa Fe y Morococala, vinieron a pie y por el flanco derecho. Pedro Guzmán tenía dos heridas de bala en el tórax y muy difícilmente salió con vida.

Es claro que de no mediar la tradicional cobardía y y traición de los stalinistas, los mineros de Siglo XX, Catavi y Huanuni hubieran logrado controlar Oruro, apresurar la caída del antipopular gobierno de Paz Estenssoro y modificar todo el futuro de la revolución.

La prensa conoce estos acontecimientos con el nombre de masacre de Sora Sora y su importancia política radica en que constituye el choque entre la vanguardia obrera y los rangers, exprofesamente entrenados por instructores yanquis para ahogar en sangre al pueblo.

Algunos movimientistas y personas adictas a los generales han pretendido minimizar los ocurrido en Sora Sora y han llegado al extremo de negar su evidencia. El general Barrientos, en los primeros meses de 1965, sostuvo que "en Sora Sora las fuerzas armadas no dispararon". Los poristas se apresuraron a rectificar los sostenido por el Capitán General del ejército "En Sora Sora el ejército no solamente que disparó, sino que ejecutó a sangre fría una verdadera masacre, en su afán de arrinconar a los mineros. Los detalles de este crimen se encuadran en las informaciones que registró la prensa... Los trabajadores marchaban sobre Oruro para secundar a quienes luchaban contra el desgobierno movimientista... Ahora se dice... que las FF.AA. estaban animadas de sentimientos antimovimientistas y obreristas. Si esto fuese cierto, nada más lógico que hubiesen secundado a los mineros" ¹².

12- Guillermo Lora, "Carta abierta al general Barrientos", en "Vistazo", La Paz, 3 de abril de 1965.

Capítulo II

Los acontecimientos de Mayo

1

La Junta militar a la ofensiva

La lucha intransigente de los mineros contra el gobierno militar ganaba paulatinamente a los otros sectores laborales a sus posiciones que se vieron fortalecidas porque los partidos políticos, hasta ayer seguidores del general Barrientos, se iban sumando a la oposición, aunque algunos líderes se desplazaran más bien hacia las posiciones del general Ovando.

El 12 de mayo de 1965, se firmó en la ciudad de La Paz el pacto intersindical entre mineros, gastronómicos, fabriles, constructores, maestros urbanos y rurales, para luchar por la defensa de las organizaciones laborales y por el logro de conquistas sociales. Esto ocurría a pesar de que la COB seguía todavía existiendo. El magisterio se movilizaba peligrosamente tras la consigna de un sueldo de 470 \$b. mensuales, habiendo aparecido como mediador el general Ovando. Los universitarios todavía apoyaban a la Junta Militar.

El subsecretario de Gobierno, Antonio Arguedas, dijo a los periodistas que probará ante los tribunales de justicia, la doble identidad del líder obrero Juan Lechín. Los hechos posteriores demostraron que tan temeraria acusación fue lanzada para facilitar el descabezamiento de la dirección sindical. Políticos y sindicalistas habían sido sometidos a estrecha y severa vigilancia. El CEN de la COB decretó estado de alerta de los trabajadores organizados, a tiempo de denunciar que el Secretario Ejecutivo de dicha organización corría el peligro de ser apresado. En el pronunciamiento se leía "Juan Lechín O. es objeto de una insistente persecución por la Dirección de Investigación Criminal, cuyos agentes con gran despliegue de fuerzas tienen el propósito de capturarlo... La COB denuncia que la política de mano dura que se ha propuesto el gobierno, comienza a dar frutos en el asedio al compañero Lechín, demostrándose que la suspensión de las elecciones importa la marcha hacia la dictadura militar..." La Federación de Mineros, a su turno, remitió una circular a todas sus organizaciones afiliadas pidiendo que permanecieran en estado de alerta frente a la represión "que pretende desatar la Junta Militar de Gobierno contra sus máximos dirigentes".

Más tarde, en 1980, la jerarquía castrense volvió a referirse a la doble nacionalidad de Lechín. Esta vez también buscando así atacar encubiertamente al movimiento obrero. En el llamado período de democratización se reactualizó la campaña de la derecha, nuevamente representada por el gorilismo, contra la amenaza del caos precipitado por el movimiento obrero, catalogado como irresponsable.

El panorama se ensombreció mucho más cuando se supo que en el Paraguay la prensa anunciaba el inmediato arribo de Juan Lechín como desterrado y cuando el Ministro de Gobierno informó que el "gobierno sigue el rastro de ciertos brotes

subversivos, de los cuales las autoridades tienen la más completa evidencia”¹.

Para tener idea del creciente descontento laboral en ese momento, debe recordarse que el Primero de Mayo de 1965 los manifestantes escogieron a la Junta Militar como blanco de sus ataques y Lechín, aunque atemperando el estado de ánimo de las bases, asumió posiciones radicales, cuidándose mucho de confundirse con el comunismo:

“Al filo del mediodía, tocó hablar a Juan Lechín quien, desde los balcones de la FSTMB, pidió a la Junta una nueva línea política y económica, acorde con la actual situación del país... Más adelante condenó la intervención de Estados Unidos en Asia así como la intervención armada en la República Dominicana”. El Secretario Ejecutivo de la COB estaba interesado en la pronta realización de elecciones, en las cuales no interviniesen los militares, retrataba de su última esperanza para llegar al poder: “Al referirse a la actitud adoptada por el ejército en relación a la renuncia de la candidatura de Barrientos, Lechín indicó que constituía una esperanza para el pueblo el que las Fuerzas Armadas cumplieran la promesa de presidir limpias elecciones”².

La verdad que la Junta Militar tenía resuelto utilizar el apresamiento de Lechín como una provocación contra la clase obrera y proceder, venciendo todos los obstáculos, a reorganizar la Comibol, con miras a disminuir las pérdidas y elevar los índices de producción.

Una comisión de mineros planteó al gerente de Comibol, coronel Lechín, el normal abastecimiento de artículos alimenticios (especialmente de arroz) a los almacenes de las minas; la disminución de los precios de la leche hasta su nivel anterior; el pago del 50% de los salarios que adeudaba la empresa por el mes de abril, y la recategorización en las minas de San José y Machacamarca. El Presidente de la empresa rechazó de plano el planteamiento y dijo: “la bancarrota de Comibol es la pared donde se estrellarán, mientras subsista esa situación, todos los pedidos de mejoras salariales”. Propuso tres medidas para superar los agudos problemas de la minería nacionalizada: “alquilar las minas o cooperativas laborales o empresas privadas o liquidación y recontratación de obreros” (se supone que después de una severa purga de los “agitadores” y de la disminución de las remuneraciones)³. Los obreros se limitaron a rechazar tales sugerencias.

Simultáneamente, el Ministro de Trabajo, coronel Samuel Gallardo (que hizo esfuerzos para apropiarse de las direcciones sindicales, causa de su momentáneo alejamiento del gobierno), anunció que se reglamentaría el número de dirigentes laborales y de la vida misma de los sindicatos. El Ministro de Defensa, general Suárez Guzmán, denunció, con amenazadora energía, que “los pactos intersindicales significan una agitación y una amenaza, nos quieren atemorizar”, para dejar claramente establecido que no se dubitaría en recurrir a la política de mano dura.

Lechín fue presentado como la pieza clave de la alianza entre la extrema derecha y la extrema izquierda para reeditar las jornadas de julio de 1946. Un día antes de su apresamiento (14 de mayo), el general Barrientos hizo esa denuncia, ciertamente que no por primera vez, en una concentración campesina: “En este momento existe

1- “Gobierno sobre el rastro de ciertos brotes subversivos”, en “Jornada”, La Paz, 13 de mayo de 1965.

2- “Severos ataques a la acción de la Junta”, en “El Diario”, La Paz, 3 de mayo de 1965.

3- “Comibol plantea tres caminos para salvar la industria minera”, en “Presencia”, La Paz, 15 de mayo de 1965.

confusión en el país. Muchos creen que se pueden hacer enjuagues políticos, en su desmedido afán de confundir al país. Algunos quieren reeditar la atmósfera creada en 1946, año en que el gobierno interesado en el campesinado tuvo que enfrentarse contra la unión de las fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha" (Discurso de Barrientos en Pucarani).

2

Apresamiento de Lechín y huelga general

Juan Lechín, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y jefe del PRIN, fue apresado por efectivos del DIC, a horas 12 y 15 del día 15 de mayo de 1965, en su domicilio de la Avenida "6 de agosto" (edificio perteneciente a Comibol) y desterrado al Paraguay, a horas 14 y 05 del mismo día. Un comunicado del Ministerio de Gobierno dio una serie de razones justificativas de esa operación representativa relámpago:

"Si gobernar es prevenir, hemos evitado días de sangre y de caos al país, adelantándonos a la acción disociadora de los golpistas de extrema izquierda encabezados por el señor Lechín, que con recursos, dineros y planes enviados desde el exterior, pretendía convertir Bolivia en un nuevo foco de violencia y extremismo en el hemisferio Sur".

El documento añadió que la subversión que se decía estaba encabezada por Lechín se inspiraba en el comunista italiano Luigi Longo y contaba con su financiamiento económico. Para colmo se sostuvo que su apresamiento y destierro se justificaban por tratarse de un ciudadano chileno. El atropello contra el dirigente sindical fue presentado como una medida indispensable para defender a "las instituciones democráticas y la paz de la Nación". Finalmente, se dejó entrever que inmediatamente serían desencadenadas severas medidas represivas: "La Junta Militar mantendrá inflexiblemente el principio de autoridad, dentro del marco jurídico que rige sus actos, y respetará el fuero sindical y todos los derechos de las clases trabajadoras que no deben dejarse arrastrar a la irresponsable aventura a la cual pretendía precipitarlos este maestro del aventurerismo y de la inmoralidad, que durante treinta años engañó insistentemente a las masas obreras..."⁴.

Los organismos de represión entregaron a la prensa, en calidad de pruebas, copias fotostáticas de cartas en clave que se dijo fueron intercambiadas entre el líder prinista y los comunistas italianos. Lechín, no bien arribó a Asunción, negó la autenticidad de estos documentos: "Juan Lechín, líder sindical boliviano, que fue vicepresidente de su país, calificó hoy de 'farsa calumniosa' la especie lanzada en La Paz, sobre la existencia de una supuesta correspondencia política entre él y el líder comunista Luigi Longo. Lechín, que se halla desterrado en esta ciudad desde ayer, afirmó que el gobierno de Bolivia ha utilizado ese recurso para tratar de atenuar los efectos de su expulsión" (cable de la agencia UP, Asunción, 16 de mayo).

El PRIN sindicó a Siles Zuazo y al Ministerio de Trabajo Samuel Gallardo como autores de la celada de que fue víctima Lechín: "ha sido detenido mediante una celada en circunstancias en que retornaba a su domicilio, en virtud de los manifestado por el doctor Hernán Siles Zuazo y confirmado por el Ministro de Trabajo coronel Gallardo, en sentido de que el Jefe nacional del Partido, gozaba de garantías" (comunicado del Comité Ejecutivo del PRIN).

4- "Versión oficial del destierro de Lechín", La Paz, 15 de mayo de 1965.

El destierro de Lechín empujó materialmente a las masas a las calles y la medida fue censurada por casi todos los partidos políticos, desde el partido Revolucionario Auténtico de Guevara hasta los marxistas, pasando por Falange, la Democracia Cristiana, etc.

El día 16 las minas más importantes estaban ya en poder de las milicias obreras, esto sin esperar ninguna decisión de la dirección nacional de la FSTMB o de la COB. Con esta estremecedora información ganó las calles PRESENCIA de esta fecha ⁵: "Los acontecimientos políticos de La Paz determinaron la movilización armada de las milicias de los distritos mineros, habiendo tomado bajo su control el principal centro Catavi-Siglo XX.

"Según emisiones radiales de esos centros, el Sindicato de Catavi en comunicado de ocho puntos, advierte a las fuerzas armadas "no seguir provocando porque la unión de mineros, campesinos y clase media, les harán morder el polvo de la derrota, peor que a Víctor Paz".

Los dirigentes sindicales dijeron que ejercitaban el control armado del distrito para evitar un golpe sorpresivo de los "gorilas al servicio del imperialismo yanqui". Se sometió a vigilancia todo punto de acceso a las minas; las amas de casa comenzaron a aprovisionarse de víveres en espera de las futuras luchas, y se notificó a los agentes de la DIC para que abandonaran la localidad de Llallagua. Esta actitud fue imitada casi inmediatamente por, los otros distritos mineros y los universitarios ofrecieron su cooperación a los trabajadores del subsuelo.

El local de la FSTMB en La Paz fue controlado por efectivos policiales saqueados sus archivos y destruida la instalación telefónica. La COB que tenía sus oficinas en ese edificio tuvo que trasladarse a la sede de la Confederación de Fabriles (avenida Armentia).

Los dirigentes de la COB, bajo la presidencia de Daniel Saravia, se reunieron a partir de las 16 horas y por unanimidad acordaron decretar la huelga general desde las cero horas del día diez y siete (lunes), "hasta lograr el retorno de Juan Lechín y obtener respeto al fuero sindical y plenas garantías para el movimiento obrero". Simultáneamente, se decidió que a horas 15 del mismo día se realizaría una manifestación de protesta, que partiría de la avenida Montes. Menudearon los pronunciamientos laborales contra la conducta de la Junta Militar. Pese a que el mismo general Barrientos amenazó, desde la alejada Riberalta, con la adopción de severísimas medidas contra los extremistas, el Ministro de Gobierno indicó que sería tolerada la anunciada manifestación si ésta se realizaba pacíficamente. El Presidente de la República dijo que abrigaba la esperanza de que los mineros, revisando su conducta, se dedicarían a trabajar.

La huelga de las ciudades fue relativamente débil desde sus comienzos y puso en evidencia la quiebra de la dirección cobista. Para lograr el aplastamiento de los mineros fue preciso asaltar su campamentos, masacrarlos y declarar como zona militar los distritos de la Comibol.

En La Paz, fue acallada a morterazos la radio fabril Continental; en el asalto al local de los constructores fue asesinado el dirigente Arce. Siglo XX soportó toda la furia de los regimientos que fueron enviados para aplastar a los revoltosos. Milluni fue previamente bombardeado por la aviación y luego las tropas regulares tuvieron que

5- "Las minas en poder de las milicias obreras", en "Presencia", la Paz, 16 de mayo de 1965.

combatir contra los trabajadores que habían levantado trincheras en defensa propia. En las masacres de mayo cayeron cientos de obreros. Kami fue pacíficamente ocupada con la finalidad de decomisar el armamento que había acumulado el sindicato. En Siglo XX los soldados ingresaron a todas las viviendas, destriparon los colchones y requisaron los baúles y los techos en busca armamento y de dinamita.

Siguió una despiadada cacería de los dirigentes sindicales y políticos de izquierda. Los cuadros stalinistas, prinistas y algunos movimientistas se acogieron al destierro voluntario. Los militantes poristas dieron una singular prueba de valor al permanecer junto al grueso de los obreros que se vio condenado a soportar el terror impuesto por el régimen militar.

“Los movimientos huelguísticos habían alcanzado las zonas mineras de Kami, Viloco y Colquiri, así como San José, importante distrito minero próximo a la ciudad de Oruro, las tropas del ejército procedieron a dispersar con violencia a los trabajadores mineros y muchos dirigentes sindicales y políticos fueron desterrados al Paraguay; finalmente, para contener la ofensiva sindical, la Junta Militar Restauradora decreta la movilización, llamando bajo banderas a todas las personas de 19 hasta 50 años. Al propio tiempo se declara “zona militar” a los centros mineros”⁶.

La Federación de Mineros trasladó su sede a Catavi y desde allí, utilizando la radio, dirigía el movimiento de resistencia al avance de las tropas sobre las diversas minas. El 23 de mayo de 1965, pidió a las Fuerzas Armadas y al gobierno una tregua de 48 horas, buscando encontrar una rendija que le permitiese entablar un diálogo con el gorilismo. La petición fue casi inmediatamente negada por el general Ovando, que en su réplica exigió la inmediata libertad de los 70 rehenes (la cifra fue proporcionada por el gobierno) que tenían en su poder los obreros. “En tanto las tropas del ejército, que ya tomaron la mina de Kami, se aprestan a ocupar los otros distritos mineros. El Supremo Gobierno, mediante el Comandante en Jefe de las FF.AA. negó ayer, en forma terminante, el pedido de tregua de 48 horas, planteado por la FSTMB, mientras no sean libertados los 70 rehenes que tienen en su poder los mineros, en diferentes centros de la República” (“Presencia”, La Paz, 24 de mayo de 1965).

Los mineros de Kami habían tomado presos a los componentes de la patrulla de la Guardia Presidencial. En varios distritos los trabajadores prepararon emboscadas contra los efectivos del ejército, otra parte de los rehenes estaba constituida por técnicos. “Ayer (23), los mineros hicieron volar un puente del ferrocarril entre Uyuni y Atocha. La acción estuvo a cargo de los trabajadores de Telamayú. Ante la emergencia y, debiendo pasar por allá el tren internacional procedente de Antofagasta, las autoridades dispusieron que se traslade al lugar una patrulla militar para que repare dicho puente. Empero, los mineros tendieron, una emboscada e hicieron volar el autocarril en que viajaba la patrulla. Como consecuencia de ello, 16 soldados resultaron heridos, los que fueron tomados como rehenes”.

En una reunión del Comité Ejecutivo de la FSTMB que duró cerca de cuatro horas se acordó pedir la tregua, esto según informaciones propagadas por los radios del distrito de Catavi, “en el cual se planteaba la posibilidad de suspender inmediatamente la huelga a cambio del retiro del Ejército de los centros mineros y fabriles”. La medida fue adoptada sin previa consulta al resto de las minas y contrariaba el alto espíritu de combate de los trabajadores, que estaban seguros de que trataba, en ese momento preciso, no de conversar con los invasores, sino, de oponerles resistencia armada. La proposición de los trotskystas de sacar de los campamentos a los militantes

6- IBEAS, “Breve Historia del Sindicalismo Boliviano”, La Paz, 1968.

politizados y armados para poder contra atacar a las tropas del ejército, se basaba en esa realidad palpable: "según las conversaciones que anoche, a las 23 horas, sostuvieron miembros del Comité Ejecutivo de la Federación con dirigentes de Viloco, la medida no fue consultada con todas las minas, razón por la cual los planteamientos hechos no tenían la solidez necesaria, Viloco se mostró disconforme con levantar la huelga sin que antes se consigan beneficios económicos y la atención de otros planteamientos que decidieron hacer.

"Además, el secretario general de los trabajadores de Viloco, Alfredo Rojas, increpó a los dirigentes de la FSTMB por la forma inconsulta en que toman las decisiones". Destacó que ellos tenían un muerto y dos heridos en el choque que se produjo en Oruro y se quejó porque a ellos se los había enviado por delante, "como carne de cañón, mientras los dirigentes de la Federación se quedaron en Caracollo" ("PRESENCIA").

Siempre buscando, una forma de entablar conversaciones con los generales, los dirigentes de la Federación de Mineros encomendaron a la Confederación Universitaria Boliviana y a la Federación Universitaria Local la tarea de oficiar de mediadoras; fue a través de ellas que se hizo la proposición de tregua, recibiendo respuesta negativa.

La amplia red de radioemisoras mineras informó detalladamente acerca de los sucesos del día 23 de mayo, fecha clave en el enfrentamiento sangriento entre las fuerzas del ejército y los trabajadores mineros. Sintetizamos esas informaciones:

Hs. 9.30.- Radio 26 de Octubre de Telamayú pidió auxilio ante un ataque del Regimiento Loa que bajaba desde Uyuni.

Hs. 10.- La misma radio transmitió el informe del Consejo Central Sud: a Hs. 7.15 había capturado los depósitos de combustible de Pacaya y "proseguía su avance contra los campamentos". A las 10.15 se producía un combate encarnizado entre el ejército y los mineros, quienes continuaban controlando sus campamentos; ya se estaba luchando en las cercanías del cementerio de Atocha "con otro grupo del mismo regimiento, una de cuyas fracciones se suponía que avanzaba sobre Telamayú". A las 10.18 se generalizó el ataque militar en todo el sector de La Cumbre, Chocaya y Atocha, "estimándose que el plan militar consistía en tomar esos centros para desde allí ir a dominar los campamentos de Quechisla, Tatasi, Telamayú, Ánimas, Santa Ana y todo el grupo sur de minas que explota Comibol".

Hs. 11.15.- Desde la radio "La Voz del Minero" (Siglo XX) habló el Secretario de Hacienda de la Federación, Víctor López, denunciando el ataque de las FF,AA., afirmando que "no estaba destinado a perseguir al comunismo, sino que tendía a liquidar las organizaciones sindicales en todo el país". Hizo un pedido a la Nación y en especial a los obreros, universitarios, estudiantes y a quienes comprendían al trabajador, para que en las ciudades se sumasen a la insurrección para derrocar al gobierno.

Hs. 13.15.- La radio Kami informó que el distrito se encontraba rodeado por las FF.AA. y pidió a la Cruz Roja que envíe un médico y drogas "para auxiliar a la enorme cantidad de heridos".

A las 13.30 se informó que los muertos eran numerosos.

Hs 14.- Radio 26 de Octubre (Telamayú) "informó que en la lucha registrada durante la mañana los obreros habían capturado a 30 soldados como prisioneros y que el resto del Regimiento Loa, que pretendía capturar Telamayú, emprendió la fuga". En

el combate se habían producido muchas bajas y Luis Guevara, control obrero ante la CNSS de Atocha, se encontraba gravemente herido. A las 16.30 el Loa después de recibir refuerzos, volvía a atacar, produciendo numerosas bajas. A las 17 Hs. se pidió instrucciones a la FSTMB, "a objeto de definir en que forma habría de obrarse ante el ataque de las tropas militares". Un sacerdote y el Super intendente de la mina fueron nombrados como parlamentarios para sostener conversaciones con el comando militar. Implícitamente se entendía que el locutor de radio solicitaba permiso para rendirse ya que indicaba que era preciso salvar la vida de los mineros, ante el ataque de las Fuerzas del Ejército. Esa emisora sostuvo que hasta ese momento habían ya siete obreros muertos, decenas de heridos" y habían sido tomados presos dirigentes obreros de base.

Hs. 17.25.- Radio Viloco manifestó: "No se debe pensar con esto en una derrota, Tomaremos nuevas posiciones". Añadió que existían otros medios para seguir con la huelga.

Hs. 18.45.- Radio Nacional (Huanuni) anunció que había interceptado una transmisión del ejército en la cual el Cnl. Efraín Guachalla, comandante de la Segunda División (Oruro), preguntaba al jefe de operaciones, cuyo nombre no fue citado, "cuales habían sido las razones por las que no se había atacado Huanuni para apresar a sus dirigentes sindicales".

Llamó la atención a los mineros del Sur (Quechisla, Siete Suyos, Animas, Atocha, Tasna, Soledad, etc) por el derrotismo que cundía, exhortando a levantar los ánimos.

El jefe militar encargado en las operaciones de Huanuni respondió que no se tenía muchas posibilidades de éxito al avanzar contra Huanuni, por las ventajas que tenían los mineros al contar con una mayor disposición de fuerzas. El Cnl. Guachalla, en respuesta expresó que el Regimiento Chichas reforzaría la zona de operaciones de Huanuni.

Hs 19.10.- Radio Nacional (Huanuni) convocó a todos los obreros a encontrarse frente al local de la emisora con sus respectivas armas con el objeto de coordinar su desplazamiento para defender la región.

La Junta Militar declaró que el País vivía en estado de guerra civil, hecho que habría determinado se dicte la orden de ocupación militar de las minas ⁷. Para justificar las marchas punitivas a los centros de trabajo se culpó a los "comunistas" de haber desencadenado esa guerra civil "de guerra civil desatada desde las minas bajo la instigación comunista, calificó la Junta Militar de Gobierno a la actual situación política y, en consecuencia, acordó poner en ejecución medidas más enérgicas que las tomadas hasta ahora, tanto el orden político como militar, para desbaratar la subversión comunista. Como medida principal resolvió la ocupación militar de las minas, el recojo de material bélico de las manos de los mineros y el juzgamiento de dirigentes políticos y sindicales responsables del estado de conmoción interna". Estos acuerdos fueron tomados simultáneamente al pedido de tregua elevado por la Federación de Mineros. La posición extrema adoptada por el Poder Ejecutivo fue confirmada por el Ministro de Gobierno, Tcnl. Oscar Quiroga Terán: "hace algunos días -dijo- Guillermo Lora decretó desde la Universidad la guerra civil, la cual, de acuerdo a instrucción impartida por los Partidos Comunistas se está cumpliendo". Añadió que los elementos de tendencia internacionalista introducidos en las minas, dirigían desde allá con algunos mineros, actos de sabotaje, nuevas masacres y un plan de introducción de mineros armados a las ciudades. Dijo también que otro típico

7- "Presencia", La Paz, 24 de mayo de 1973.

procedimiento comunista era la declaración de "territorio libre" a la mina de San José, con autoridades propias. Anotó que la guerra civil decretada por Guillermo Lora había ocasionado el enfrentamiento de una acción defensiva contra ofensiva en una franca lucha. "Ante estas actitudes tan violentas -manifestó en Tcni. Quiroga- las FF.AA. han tomado determinaciones que conducen a medidas drásticas que, en este caso, son las más aconsejables para mantener el orden y reconquistar los territorios libres declarados por los comunistas, así como para librar a los trabajadores de la tiranía sindical comunista fermentada desde años atrás por el régimen de Paz Estenssoro, donde los extremistas tenían tantas garantías y amplitud de acción".

Mediante D.S. de 23 de mayo de 1965 los distritos mineros fueron declarados zonas militares: "considerando: Que en los sectores mineros dependientes de lo Corporación Minera de Bolivia como consecuencia de la declaratoria de la huelga general ordenada por la ex-Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la vida y seguridad del personal técnico y administrativo, así como los obreros mineros se hallan amenazados por las actitudes subversivas de los elementos extremistas que operan en la región; "Que es necesario, asimismo, salvaguardar los bienes de la Corporación Minera de Bolivia tomando las medidas necesarias con objeto de evitar se atente contra los mismos; Que es deber del Supremo Gobierno garantizar la tranquilidad y la paz social en los centros mineros".

" En Junta de Gobierno, DECRETA:

"Art. 1º.. Declárese zonas militares aquellas en las que están ubicadas las empresas y los establecimientos de la Corporación Minera de Bolivia;

"Art. 2º. El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la nación designará a los Comandantes de la zona, fijándoles su jurisdicción y atribución.

"Art. 3º. Quedan sometidos a las jurisdicción ya las disposiciones del Código Penal Militar todos los estantes y habitantes de las zonas militares declaradas en el artículo primero, el que incurriera en cualesquiera de los siguientes hechos:

"a) Posesión de armas de fuego de cualquier índole o procedencia sin autorización legal correspondiente.

"b) Los que usaran armas de fuego, explosivos, armas blancas o artificios para intimidar, atentar o cometer actos delictivos contra la vida de los miembros de las Instituciones o representantes de la ley y del orden.

c) Aquellos que organizaran o formaran parte de grupos que se enfrentaran o trataran de enfrentarse a los miembros o unidades de tropas regulares de las Instituciones del orden o impidieran el cumplimiento de sus misiones.

"Art. 4º. Asimismo quedarán sometidos a la jurisdicción y a las disposiciones del Código Penal Militar el personal de una mina, establecimiento o dependencia que hiciera abandono o retiro masivo del trabajo, por considerarse como sabotaje dirigido a impedir la recuperación de la Corporación Minera de Bolivia. Esta disposición no implica la supresión del derecho de huelga, el que se rige por el procedimiento legal ordinario".

Las minas ocupadas, militarmente y sometidas al Código Penal Militar, se vieron convertidas en verdaderos campos de concentración, estado de cosas que se prolongó hasta 1970.

La invasión militar de los centros mineros se realizó a los ocho días de la huelga protagonizada por los sindicatos que obedecieron las determinaciones de la Central Obrera Boliviana. El movimiento comenzó agonizar casi inmediatamente y solo fue parcial. "En La Paz, fuertes sectores "Fabriles" que todavía mantienen la huelga, se muestran reacios a continuarla y mas bien existe disposición a levantarla. La situación económica de los obreros fabriles se va tornando cada vez más difícil debido a que éste sábado no se pagaron jornales ni se dieron anticipos a los que no trabajan" (PRESENCIA, 24 DE MAYO). La patronal comenzó a presionar la amenaza de que no cancelaría jornales por los días de huelga. El 23. la Central Obrera Departamental de Cochabamba levantó el paro: "La Central Obrera Departamental resolvió levantar la huelga general decretada el domingo de la semana pasada. Al propio tiempo, en el pronunciamiento en el que levantan el paro, protestan por los atropellos", reza una información periodística. Habían sido ultrajados varios campesinos, los que concluyeron en las celdas policiales.

3

Los decretos antiobreros de mayo

Como emergencia de los anteriores acontecimientos vino la legalización de la destrucción de las organizaciones sindicales, la pretensión de someterlas a la estrecha vigilancia oficial, la disminución de los salarios nominales, la recontractación del personal de la COMIBOL, etc.

El 17 de mayo de 1965 se decretó la "liquidación" de los sindicatos, el desconocimiento de las direcciones y se dejaron sin efecto varias medidas que favorecían a los trabajadores. El 23 de mayo fue dictado el Decreto más importante dentro del plan de aplastamiento del movimiento obrero. El Cnl. Lechín, que había tomado en su puño totalitario el destino de COMIBOL, expresó que en ese momento se había "Firmado la verdadera acta de la independencia económica de Bolivia". Cuando se enfrentó con la prensa no ocultó los reales objetivos que buscaba el gobierno: "A raíz de los decretos serán retirados todos los dirigentes sindicales mineros, los trabajadores que desean retirarse podrán hacerlo, en tanto que los demás serán recontractados. Las disposiciones - dijo- significan la descalificación total de la dictadura sindical extremista en la cual vivió el País durante los doce últimos años"⁸.

En los considerandos del decreto se lee: "Que durante doce años se ejerció el más alarmante desenfreno demagógico que registra nuestra historia mediante una irresponsable política salarial que demandó y demanda la erogación improductiva de ingentes sumas para su satisfacción... Que dirigentes extremistas y anarquizantes, estimulados financieramente por el oficialismo, consiguieron la violación permanente de normas básicas de respeto y disciplina de trabajo entre los mineros, dándose casos de insurgencia armada bajo el mando de caciques que convirtieron algunas zonas mineras en verdaderos feudos, haciendo imposible una racional dirección técnica y administrativa, la cual ocasionó, a su turno, la explotación desordenada y antieconómica de los yacimientos... Que desde fines de 1963 hasta 1964 fue implantado, en la mayoría de las empresas un sistema de salarios irracional y contraproducente, en lugar de estimular una sana producción y un mayor rendimiento, sólo ha originado un desproporcionado incremento de los costos de labor y ha intensificado la inquietud

8- "La Comibol en emergencia adoptará medidas radicales para rehabilitar lasl minas", en "Presencia", 24 de mayo de 1965.

social en los sectores laborales...”

El Art, 1º. de dicha disposición declara en estado de emergencia a la Comibol mientras logre su recuperación...”

El artículo que le sigue habla de la necesidad de racionalizar las modalidades de trabajo, remuneraciones y contratos, a fin de equilibrar los costos de producción con los precios de venta “y permite a la Comibol ingresar a un nivel de rentabilidad”

Quedó establecido que a partir del primero de junio de 1965 las escalas de salarios y precios de contratos serían rebajados a los niveles siguientes en la empresa Quechisla el 13 de agosto de 1964, quedando sin ningún efecto “Todas las anteriores y actuales modalidades, sistemas, bonos, planes y convenios de pago pertinentes en todas sus minas y establecimientos”. Esta medida importó la disminución de las remuneraciones en un 40 %, las que fueron repuestas recién en 1970 a los niveles vigentes en la fecha de la dictación del decreto que comentamos.

El artículo cuarto establece la liquidación y pago de beneficios sociales al personal de la Comibol, que podrá recontractar a los trabajadores que juzgue conveniente, en cuyo caso retendrá esos beneficios sociales reconociendo el interés anual del 4% (muy inferior al que rige en la actividad bancaria). Así, legalmente, se canceló la inamovilidad de los obreros, uno de los grandes objetivos del sindicalismo, y se procedió a la despiadada purga de los agitadores. La disminución del número del personal (considerada como una premisa para rebajar los costos de producción) infló desmesuradamente al ya gran contingente de desocupados, que deambulaba por los alrededores de las minas y presionaba negativamente sobre las empresas.

La actividad sindical comenzó siendo considerada como algo perjudicial o de valor subalterno. “Se prohíbe en los centros mineros y dependencias de la Comibol la realización de reuniones sindicales, asambleas generales, ampliados o congresos en horas de trabajo... los infractores serán retirados inmediatamente sin pago de beneficios”. Hasta esa fecha la empresa estaba obligada a coadyuvar al desarrollo de las actividades sindicales.

Varios artículos están destinados a establecer normas para el castigo de los juqueadores (obrerros dedicados a la explotación clandestina de parajes de la mina); de los inasistentes al trabajo por más de seis días; de los dirigentes y grupos de obreros que expulsaran, retiraran o privasen de su libertad de algún modo a los técnicos y administradores de la empresa, que se opusiesen a la transferencia o retiro del personal y a los que se opusiesen al traslado de materiales o de equipos” dentro o fuera de las minas o establecimientos, así como la resistencia a la aplicación de disposiciones de orden técnico o administrativo”. Las sanciones eran nada menos que el retiro inmediato del trabajo y el enjuiciamiento criminal.

Un otro decreto, también del 23 de mayo, autoriza a Comibol a dar en “arrendamiento sus propiedades mineras pequeñas a Sociedades Cooperativas constituidas por los trabajadores que se retiren voluntariamente y manifiesten su deseo de organizarse en las minas bajo la orientación de Comibol” (Art. 1º.). También se le autorizaba a suscribir contratos con las cooperativas libres ya existentes (Art. 2º.). Se trataba, en realidad, de crear incentivos que animasen a los obreros a abandonar voluntariamente el trabajo.

Así se inició la superexplotación, por parte de Comibol, de los cooperativistas, que están obligados a trabajar en condiciones técnicas primitivas y al margen de todos los

beneficios sociales acordados por las leyes. Comibol encontró en el rescate de mineral producido por lo cooperativistas y por los jukos, una forma cómoda de disminuir sus costos y ajustar su maltrecha economía.

El artículo 4º. establece que los desocupados mineros serán contratados con preferencia dentro de los planes de colonización, vialidad, hidroeléctricos y "otros dependientes del Ministerio de Economía Nacional y de la Corporación Boliviana de Comercio".

Los obreros en ningún momento manifestaron su conformidad con las normas de reordenamiento de la empresa y particularmente con la disminución de las remuneraciones. Esta oposición, subterránea en los primeros momentos, ganó bien pronto el plano de la agitación. El gobierno tomó muchas providencias para inducir a los trabajadores a cumplir sus obligaciones en un clima de tranquilidad y abandonarse a la lejana esperanza de que el aumento de las utilidades de la empresa se reflejaría en su propio bienestar material. A mediados de junio de 1965 se hizo el anuncio de que la aplicación de las nuevas reglas permitió a la Empresa Catavi ganar "al rededor de cien mil dólares), según manifestó Lechín Suárez a la prensa ⁹. Como consecuencia y siempre siguiendo lo que dijo Comibol, en ese distrito se otorgó un bono que osciló entre 60 y 100 pesos, una pequeñísima parte de los obreros habían dejado de percibir como consecuencia del decreto del 23 de mayo.

El 9 de septiembre de 1965 fue dictada la llamada Ley de Seguridad del Estado, que autorizaba privar de libertad, residenciar, y enjuiciar a los elementos considerados como subvertores del orden público.

Las medidas antisindicales dictadas por el régimen militar fueron compiladas y ampliadas en el Decreto Supremo de 23 de septiembre de 1966, dictado desgraciadamente cuando era Ministro de Trabajo el Social Cristiano Vicente Mendoza López.

A lo largo de sus 27 artículos se reglamentaba minuciosamente la vida y actividades sindicales, al extremo de que concluía desnaturalizando las verdaderas finalidades de las organizaciones obreras.

El artículo 10 establece que "las organizaciones sindicales no pueden dedicarse a actividades políticas partidistas...". A pesar de que el gobierno militar hizo todo lo posible para controlar políticamente a los sindicatos y fracasó en su intento, el decreto buscaba arrancar de cuajo a los opositores del seno del movimiento obrero.

El inciso g) del artículo 19 incluye entre los requisitos para ser dirigente sindical el siguiente: "no ser miembro de ningún directorio de partido o agrupación política, con anterioridad de los seis meses de su elección".

Como novedad se introdujo la obligación de constituir las directivas sindicales con representantes de la mayoría y minoría (Art. 20).

Los dirigentes, según el texto del decreto, duraban en sus funciones dos años, "no pudiendo ser reelegidos sino después de un período y luego de que su rendición de cuentas haya sido aprobada", así se quiso poner coto a la creciente inmoralidad en el manejo de los dineros sindicales.

9- "No habrá aumento de jornales a mineros", en "Presencia". La Paz, 13 de julio de 1965.

Para evitar la excesiva proliferación de dirigentes laborales se estableció (Art. 25) que el número de éstos debía estar en relación con la cantidad de afiliados (3 para sindicatos con menos de 60 afiliados y el máximo de 10 para los que tengan más de 5.000).

También se disminuyó a dos el número de dirigentes de federaciones que podían ser declarados en comisión y con derecho de seguir percibiendo sus salarios.

Otra de las limitaciones de la actividad sindical aparece en el artículo 32: "las actividades de las organizaciones sindicales no podrán realizarse en perjuicio de la producción ni en los días y horas de trabajo. En caso de urgente necesidad para utilizar horas de trabajo será necesaria la autorización del empleador y los trabajadores compensarán las horas de trabajo que no serán pagadas como trabajo extraordinario".

La tuición del Ministerio de Trabajo entre los sindicatos (Art. 8) fue muy lejos. Estos no podían adquirir o transferir bienes de cualquier naturaleza sin previa autorización del Ministerio de Trabajo.

Se dio el plazo de seis meses para que todas las organizaciones sindicales regularizasen sus actividades, conforme a las nuevas disposiciones, lo que importó un virtual desconocimiento de sus directivas.

En la práctica, medidas tan draconianas resultaron insuficientes para domesticar a los sindicatos. Numerosas directivas no fueron reconocidas por existir sospecha de que pudiesen desarrollar en el futuro actividades contrarias a las autoridades.

4

Sindicatos clandestinos

Los regímenes castrenses destruyeron la vigencia de las garantías democráticas más elementales, pomposamente incluidas en la Constitución Política del Estado. Una gran cantidad de organizaciones sindicales internacionales (desde la proimperialista ORIT hasta los socialcristianos) hicieron escuchar su voz para denunciar que el Bolivia se había desconocido el derecho de asociación, lo que violentaba la tradición y normas que distinguen a los llamados países democráticos.

Los trotskystas fueron los que mejor interpretaron el sentimiento de las masas en ese momento: mientras los generales permaneciesen en el poder; los dirigentes, si se atrevían a salir en defensa de los obreros, corrían el inminente riesgo de ser echados de sus trabajos. Algunos elementos de segunda y tercera fila llegaron hasta las cumbres del sindicato como jurados amigos de la empresa o del oficialismo, pero bien pronto tuvieron que desplazarse hacia la izquierda debido a la creciente presión de las bases y, en esta medida, sus nombres quedaban inscritos en la lista negra del oficialismo.

Cuando los centros obreros fueron asaltados por las fuerzas del ejército y de carabineros, en mayo de 1965, los mejores militantes sindicalistas abandonaron sus distritos y se desplazaron a las poblaciones próximas, desde donde organizaron la resistencia al régimen militar, a las medidas reestructurales de Comibol. Así nacieron los sindicatos clandestinos, como organismos indispensables para la continuación de

la lucha de los obreros. César Lora, Isaac Camacho, Filemón Escobar, Pablo Rocha, René Anzoleaga, Pastor Peláez, Cirilo Valle, conocidos dirigentes obreros de Siglo XX, tomaron a su cuenta la reorganización de los cuadros sindicales, de los comandos destrozados, siempre en la clandestinidad. En estas organizaciones las normas de la más amplia democracia se vieron limitados en extremo y se dio mayor énfasis a la enunciación programática, porque tenía la virtud de agrupar a las huestes dispersas y unificar el pensamiento y la acción.

Los líderes de los sindicatos clandestinos incursionaban subrepticamente en los socavones, realizaban reuniones inesperadas, dejaban instrucciones y desaparecían de nuevo, gracias a disfraces o a las sombras de la noche. El sindicalismo clandestino pudo moverse y existir gracias a la cooperación de grupos de universitarios y al inteligente empleo de radio emisoras y periódicos.

Si Siglo XX fue la cuna del sindicalismo clandestino, esta modalidad organizativa de lucha fue llevada a otros centros y su verdadera capital fue Oruro, donde se establecieron los mejores dirigentes. Lo que sí resultó sumamente difícil fue poner en pie un comando clandestino nacional. Los esfuerzos realizados en este sentido chocaron con muchos obstáculos entre los que se contaban las maniobras del gobierno. Hubo una conferencia en Oruro y una reunión ampliada de la FSTMB clandestina en la universidad paceña, pero sus resultados se vieron debilitados por las pugnas entre los diversos sectores políticos de izquierda. El sindicalismo clandestino fue esencialmente político.

El gobierno pudo maniobrar con ayuda de Pimentel y sus amigos contra los sindicatos clandestinos, que no dubitaron en ofrecer la organización de sindicatos legales, capaces de discutir con las autoridades y lograr algunas reivindicaciones. La experiencia enseña que tal ofrecimiento no fue más que una trampa.

Los sindicatos clandestinos se dieron, en 1965, un programa de lucha (adoptado en forma expresa por Siglo XX, Huanuni, San José, Potosí) que tuvo vigencia por varios años:

- 1.- Rechazar por todos los medios al gobierno fascista de los generales. Luchar contra el militarismo sirviente de los yanquis. No desmayar hasta ver estructurado el gobierno obrero-campesino.
- 2.- Lograr que sean anuladas las medidas que disminuyan los salarios y conseguir la reposición de los que se encontraban en vigencia antes de mayo último.
- 3.- Pago de los precios de contrato conforme a las escalas que imperaban hasta mayo. Defensa de todos los bonos, trabajos extraordinarios y sobretiempos.
- 4.- Retiro de las fuerzas del ejército y de carabineros de los centros de trabajo. Que cese la persecución contra los obreros. Ningún trabajador debe ser castigado por sostener determinada ideología política. Retorno al trabajo de todos los obreros retirados después de mayo.
- 5.- Irrestricada libertad sindical. Las autoridades gubernamentales comenten un exceso cuando toman en sus manos la tareas de designar dirigentes. La voluntad de las bases obreras debe ser la que defina la suerte de las organizaciones sindicales. Respeto al fuero sindical.
- 6.- Mientras estén en pie las medidas totalitarias que destruyen la vida sindical, los

obreros deben designar Comités de Defensa Sindical Clandestinos.

7.- Repudio al entreguismo de la Junta Militar que ha decidido desnacionalizar las minas, siendo el primer paso la entrega de desmontes y relaves a empresas extranjeras para la explotación de Matilde y el Mutún, de las empresas de la Corporación Boliviana de Fomento.

8.- Garantías para que la Federación de Mineros y los sindicatos cumplan libremente sus funciones.

9.- Devolución de todos los bienes decomisados a las organizaciones obreras después de mayo. Indemnización a los deudos de los trabajadores que han fallecido en el transcurso de la huelga general ¹⁰.

El anterior programa puede reducirse a dos puntos, que guiaron la acción de los obreros en todos los momentos: reposición de salarios y retiro de las tropas del ejército de los centro obreros.

Intentando acallar la creciente agitación social, los generales hicieron uso una y otra vez de las ametralladoras, pero también ensayaron algunas reformas de tipo económico, sin haber logrado su objetivo en momento alguno.

A fines de 1965 estalló el conflicto, cuando las minas plantearon formalmente la reposición salarial. Comibol respondió con su propuesta de otorgar cuatro pesos bolivianos diarios a los trabajadores de interior mina y dos pesos a los de superficie, como participación garantizada "con cargo a utilidades a las empresas mineras" ¹¹.

Tal planteamiento fue trasladado a las bases, donde las gerencias distritales pudieron maniobrar a sus anchas. Partiendo de la aceptación de algunas minas del Grupo Sud, Comibol impuso como norma salarial en todo el país el "4 y 2". La Federación clandestina se pronunció en contra y el Ministro de Trabajo, Cnl. Samuel Gallardo, hizo el siguiente comentario: "mi despacho desconoce la existencia de esa Federación, porque no se ha sometido al Decreto de mayo, respecto a las organización de los sindicatos".

Por resolución de 7 de diciembre de 1965, el concepto de participación en las utilidades de la empresa fue sustituido por el de "incentivo a la asistencia" por mita ordinaria y efectivamente trabajada y considerando como bono no involucrado en los salarios y menos en los cálculos de beneficios sociales.

Con fecha 25 de abril de 1966, se introdujo otra modificación a este "aumento" económico: se extendieron sus beneficios al personal de los ingenios en la proporción de tres pesos bolivianos diarios. El 27 de diciembre de 1966, el bono fue elevado a cinco pesos, únicamente en favor de los trabajadores del interior de la minas.

Finalmente, el Presidente Siles, mediante Resolución de 21 de agosto de 1969, modificó las cantidades de dicho bono: 6.50 pesos bolivianos diarios para los obreros que cumplen tareas en el interior de la mina; cinco pesos para los de ingenio y secado de barrillar y cuatro pesos para los de superficie.

10- "Programa de los sindicatos clandestinos", en "Masas", La Paz, 21 de agosto de 1965.

11- "Comibol espera conocer respuesta de los mineros", en "Novedades", La Paz, 19 de octubre de 1965.

Los mineros protestaron invariable y sistemáticamente por la insignificancia de esos bonos, con relación al corte de las remuneraciones decretado en 1965.

El programa de sindicatos clandestinos fue difundido, por primera vez en el "Manifiesto del Comité Clandestino de Defensa Sindical", que está fechado en Oruro en agosto de 1965 y firmado por Agustín Nieto G. y Alberto Olañeta Sainz (que el mismo documento señala que se trata de seudónimos). En la introducción se justifica el sindicalismo clandestino considerando las siguientes razones: "La destrucción de las organizaciones sindicales por el gobierno fascista de la bota militar y el desconocimiento del libre ejercicio sindical" obligaban al proletariado, para seguir oponiéndose a las medidas antiobreras que se venían imponiendo a la clase trabajadora, especialmente al sector minero, a crear organizaciones revolucionarias clandestinas, "al margen de las direcciones sindicales que pretende imponer el gobierno" Se indica que el fin perseguido por el Comité Clandestino no era otro que "orientar a los compañeros trabajadores por el camino que deben seguir en sus luchas actuales, es decir, contra el despotismo de la bota militar que usurpa el poder" Al pie del suelto aparece la denuncia del apresamiento de Paulino Juaniquina Troncoso (conocido dirigente de los comités clandestinos y de San José, Oruro), acaecido en veinte de agosto ¹².

Los sindicatos clandestinos se presentaron como la expresión misma de la unidad de los obreros y demandaron a todas las tendencias políticas a sumarse a la riesgosa lucha subterránea contra la brutal dictadura. Esa nueva manifestación vigorosa del sindicalismo se orientó acertadamente a soldarse con los sectores populares de avanzada, particularmente con los universitarios; buscó por este camino fortalecerse y no quedar aislado como consecuencia del nuevo método de lucha adoptado. En los últimos meses de 1965 el Comité Sindical Clandestino de Siglo XX (la mayor parte de sus dirigentes viajaban ininterrumpidamente por los otros centros mineros en calidad de orientadores del nuevo sindicalismo) envió una carta a la Conferencia Nacional de la CUB pidiendo la ratificación del pacto minero-universitario que había sido suscrito con anterioridad en la ciudad de La Paz "con la finalidad de defender las garantías democráticas, el pan de los hogares bolivianos y el sagrado derecho al trabajo" ¹³.

En el indicado documento se explicaron las razones por las cuales fue preciso crear los comités clandestinos "Los métodos de lucha nos son impuestos autoritariamente por la realidad política que vive el país. Cuando el fascismo ha pisoteado la Constitución Política y las leyes; cuando de un solo plumazo ha anulado todas las garantías democráticas; cuando ha destruido físicamente a las organizaciones obreras..., entonces no queda más camino que organizar la resistencia clandestina y colocar en lugar preferente la acción directa de masas". Al fascismo castrense se le opone, como única posibilidad de victoria, la insurrección popular, "esto si realmente queremos superar la actual situación se miseria y opresión". El pacto minero-universitario era considerado como el primer paso hacia la "verdadera unidad de todas las tendencias bajo la bandera de lucha a muerte contra del fascismo de los generales". Se llamó a forjar esa unidad alrededor del programa de los comités clandestinos y "de la repulsa a la Ley de Seguridad del Estado".

La llamada Conferencia Nacional de Comités Sindicales Clandestinos de la Minería se realizó el 21 de octubre de 1965, en el local de la FUL de La Paz. Actuaron como Presidente Sinforoso Cabrera y como Secretario Noel Vázquez y Víctor López, conocidos elementos de la Federación de Mineros y que se habían quedado en el país. La FSTMB decidió soldarse con los comités clandestinos, actitud excepcional si no

12- "Manifiesto del Comité clandestino de defensa sindical", Oruro, agosto de 1965.

13- Comité Sindical Clandestino de siglo XX-Catavi. "Carta a la Conferencia Nacional de la CUB", s/f.

se olvida que muy pronto sus más altos exponentes pusieron todo de su parte para aplastar al sindicalismo clandestino.

Poco antes se había formado en el seno de la Federación, y alentado por los elementos más radicalizados, el Comité Clandestino de Coordinación Nacional de la FSTMB, que estuvo en cierto momento dirigido por Paulino Joaniquina de San José y buscó actuar como dirección nacional. La Conferencia fue convocada por el Comité Ejecutivo de la Federación, el Comité Clandestino de coordinación y el Comité Sindical Clandestino de Siglo XX-Catavi (en los hechos, este último cumplió las funciones de dirección nacional) ¹⁴. Cuando finalizaron las deliberaciones y los delegados se aprestaban a retornar a sus distritos, siete sindicalistas que representaban a los Comités de Colquiri, Catavi, Siglo XX y Huanuni fueron apresados por la DIC.

El documento de la Conferencia añade: "En cumplimiento de los pactos minero-universitarios, la FUL se encuentra gestionando la libertad de nuestros compañeros delegados de base".

La reunión conoció el informe de labores del Comité Ejecutivo de la FSTMB correspondiente al período posterior a 1964 (XVI Conferencia Nacional). La importancia de dicho documento radica en que contiene una severa autocrítica de la conducta de la dirección sindical: "mientras muchos dirigentes no habíamos acostumbrado a los procedimientos administrativos y a la secundarias de trámites burocráticos para solucionar nuestros problemas de clase, nuestros enemigos, más duchos y preparados que nosotros, ya habían decidido darnos batalla en servicio del imperialismo norteamericano que nos adormecía con la "Operación Triangular", la "Alianza para el Progreso", los "Alimentos para la Paz" y los "Cuerpos de Voluntarios", que se introducían en nuestras fuerzas combativas. Han sido necesarias dos espantosas masacres mineras para que trabajadores y dirigentes nos reencontremos nuevamente en la barricada proletaria de la que nunca deberíamos haber salido, pese a los "cantos de sirena de los aliados circunstanciales".

A esa defectuosa apreciación del momento político siguieron actitudes torpes y antisindicalistas: el sindicalismo minero se disgregó en los innumerables sindicatos de base, habiéndose precipitado el afán caudillista y de predominio personal de sus dirigentes. "Los dirigentes sindicales y controles obreros nos enfrentamos suicidamente en forma torpe y hasta con saña -unos contra otros- por el control de un sindicato, mientras nuestros enemigos de clase aplaudían nuestras disputas y estudiaban cuidadosamente nuestras debilidades, para atacar oportunamente en el lugar más apropiado, para lograr una victoria contra el movimiento obrero en su conjunto". Se señala como objetivo la unidad revolucionaria antiimperialista y la lucha intransigente contra la tiranía fascista de la Junta Militar del Gobierno. El golpe contrarrevolucionario del 4 de noviembre de 1964 es tipificado como un "mamertazo" contra los intereses nacionales y obreros. La influencia trotskysta en el mencionado informe y en los documentos aprobados es por demás evidente.

Se adoptaron únicamente tres resoluciones, cuya importancia salta a primera vista. En la primera de ellas se "actualiza la interpretación ideológica aprobada en la XVI Conferencia Nacional Minera, reunida del primero al cinco de diciembre (1964), la misma que ratificó la tesis de Colquiri que ha definido terminantemente nuestra posición antiimperialista intransigente y nuestra insobornable conciencia de clase revolucionaria contra todos los gobernantes civiles o militares que hipotequen las riquezas nacionales o que vendan su conciencia sea del Departamento de Estado o al

14- FSTMB. "Conferencia Nacional de Comités Sindicales Clandestinos de la Minería", La Paz, 1965.

Pentágono norteamericanos". Quedó ratificada la estructura clandestina de la FSTMB y de los Comités Sindicales que fueron organizados en una situación de emergencia. En vista de que varios líderes cayeron en la batalla se acordó incorporar "a la dirección nacional colectiva a los Comités Sindicales Clandestinos de cada región, de conformidad con su probada actividad revolucionaria".

Se recomendó combinar las actividades legal y clandestina para conquistar los siguientes objetivos:

Retiro inmediato de las tropas del ejército "y demás instrumentos, de represión de la tiranía castrense" de los distritos mineros convertidos en campos de concentración.

Respeto al fuero sindical, a la libertad de expresión y organización sindicales, "lo que implica el reconocimiento legal de la directiva construidas en congresos libres o las surgidas de asambleas generales..., asimismo la devolución de las radioemisoras asaltadas, destrozadas o decomisadas por el gobierno militar".

Se acordó que, mientras persistiese el clima de presiones, las organizaciones clandestinas lucharán por el programa ya acordado por los comités sindicales clandestinos, además de los siguientes puntos nuevos:

Rehabilitación económica y reajuste administrativo de COMIBOL "Por medio de la descentralización técnica y funcional en la dirección estatal y la autogestión obrera en las operaciones de trabajo y producción de cada uno de los grupos nacionales": establecimiento de plantas preconcentradoras y concentradoras mecánicas y químicas, de "recuperación de minerales y explotación de las colas y desmontes por los trabajadores mineros desplazados, organizados en empresas cooperativas o bajo administración estatal, sin ingerencia extranjera técnica ni administrativa": instalación de hornos de fundición y fomento financiero de los ya existentes; reorganización del Banco Minero "con criterio nacional de fomento y comercialización de los minerales entregados por la industria privada"; respeto a la autonomía empresarial de las cooperativas mineras y "financiamiento de las mismas por medio de Comibol o del Banco Minero"; comercialización de los minerales en todos los países del mundo; retorno de los dirigentes y trabajadores desterrados y libertad para los presos políticos sindicalistas, dictación directa de masas a la persecución y apresamiento de los trabajadores"; abolición de los campos de concentración donde son enviados los opositores políticos, los sindicalistas y los trabajadores de base; aprobación de los pactos minero-universitarios e intersindicales "y un mayor acercamiento a las organizaciones campesinas, de clase media urbana y a los oficiales, clases y soldados no comprometidos con la maquinaria represiva de la Junta Militar de Gobierno" ¹⁵.

La resolución número dos reitera el reconocimiento de la Conferencia y ratifica su confianza a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia "como entidad matriz y a sus miembros elegidos en el congreso de Colquiri". No se trataba, ciertamente, de una declaración formal y protocolar, sino de la formalización del deseo de lograr la unidad entre la FSTMB y los Comités clandestinos.

Silvio Tórres, de filiación falangista y que con anterioridad había sido elegido miembro de la FSTMB, fue reincorporado a sus funciones.

Fue también aprobada una resolución llamando al pueblo boliviano a sellar la unidad

15- "Comibol espera conocer respuesta de los mineros", en "Novedades", la Paz, 19 de octubre de 1965.

alrededor de la clases obrera para defender la revolución boliviana y sus conquistas, en ese momento seriamente amenazadas por el gorilismo. En el documento respectivo se comienza dejando sentado que la contrarrevolución iniciada el 4 de noviembre "ha nacido de las entrañas mismas del régimen del MNR", como su exposición derechista y reaccionaria. Se dice que la finalidad del gobierno militar no es otra que destruir físicamente al movimiento obrero, uno de los pilares fundamentales de la revolución. "Admitir la destrucción del proletariado es admitir la destrucción de la propia revolución. La revolución boliviana no ha fracasado, sino su fugaz dirección política". Se parte de la tesis de que el gobierno militar es fascista, al servicio de intereses antinacionales y antiobreros. "De mayo a septiembre, la Junta Militar ha masacrado a cientos de trabajadores (pasan de 500 los trabajadores asesinados vilmente por la metralla militar)". Se denuncia el carácter fraudulento de las elecciones que venía preparando el militarismo para perpetuarse en el poder.

Los regímenes castrenses agotaron todos los recursos para enfrentar a los campesinos y a los obreros, conducta que fue acremente censurada por la Conferencia.

La lucha clandestina se extendió de los sindicatos de base a las centrales, incluida la COB. Todavía en septiembre de 1969 se hablaba de la urgencia de que la Federación de Mineros y la Central Obrera pasasen de la clandestinidad a la lucha legal, pero las presiones castrenses ejercitadas sobre el gobierno civil de Siles obstaculizaron seriamente ese tránsito.

El 29 de abril de 1969 murió el general Barrientos, víctima de un accidente de aviación. Muchos abrigaban la esperanza de que la desaparición del más grande enemigo del movimiento obrero abriría un período de legalidad para los sindicatos. Las cosas no ocurrieron de esta manera, Siles, catedrático y hombre de derecho, no se atrevió a derogar las disposiciones referentes al reordenamiento sindical, la Ley de Seguridad del Estado y menos cancelar la condición de zonas militares de los distritos mineros. Las promesas acerca del respeto del fuero sindical y de la integridad de los sindicatos no pudieron en la mayor parte de los casos convertirse en realidad.

Capítulo III

El baño de sangre de San Juan

1

La resistencia obrera

La resistencia obrera y particularmente minera, a las medidas gubernamentales venía adquiriendo un enorme volumen masivo y comenzó a tornarse peligrosa para la estabilidad del gobierno militar. Era posible adelantar, partiendo de la experiencia pasada, que las autoridades del Poder Ejecutivo y de las fuerzas armadas descargarían un golpe preventivo con la finalidad de doblegar a los centros de trabajo más importantes. La resistencia obrera era, en cierta forma, una proyección del gran ascenso de masas que llegó a su punto culminante en 1964.

En febrero de 1967, Vicente Mendoza Nava, dirigente democristiano y Ministro de Trabajo, fue prácticamente expulsado del gobierno, esto porque ya había cumplido la sucia misión de imponer el famoso decreto de reordenamiento laboral y porque podía convertirse en obstáculo para la aplicación de una política de mano dura frente a los sindicatos. La democracia cristiana, que a veces asumió actitudes radicales, demostró ser un buen instrumento ocasional en manos de la burguesía. Mendoza Nava había prometido la solución favorable del pliego de peticiones presentado seis meses antes por los sindicatos legales ¹. La medida tomada despóticamente por el general Barrientos disipó todas las ilusiones que hubiesen podido abrigar las organizaciones obreras acerca de una posible superación pacífica de los conflictos económicos y contribuyó a acentuar el repudio al gobierno de parte de los trabajadores de Siglo XX-Catavi. "Barrientos y compañía estaban resueltos a responder nuevamente con la violencia al pedido obrero de reposición salarial".

El anuncio oficial de estallido de las "guerrillas" (mes de marzo) paralizó a los mineros, eso según el testimonio de los observadores que se encontraban en los lugares de trabajo, pero gradualmente volvieron a centrar su atención alrededor de la lucha por sus intereses inmediatos.

En las asambleas generales habidas el 19 de abril y realizadas en el distrito de Siglo XX-Catavi, se aprobó la convocatoria a un Ampliado nacional minero en el que debían estar presentes otros sectores laborales (fabriles, constructores, etc.) y también los universitarios. Inicialmente se acordó realizar el Ampliado el primero de mayo en siglo XX, resolución que fue revisada en la asamblea general de Huanuni de 6 de junio, a la que concurrieron delegados de Catavi, Siglo XX, Santa Fé, Morococala y San José. Los asambleístas acordaron los siguientes puntos:

1-Max Reynolds, "Masacre de San Juan", en "Masas", La Paz, 1º de enero de 1969

- 1) Reposición de los salarios vigentes hasta mayo de 1965;
- 2) Reincorporación de los dirigentes y obreros de base retirados después de mayo de 1965;
- 3) Apoyo a las "guerrillas" con víveres y medicamentos ;
- 4) Ampliado de la Federación de Mineros a realizarse en el distrito de Catavi-Siglo XX el 24 de junio;
- 5) Marcha de unidad popular en Oruro el día 8 de junio.

Al día siguiente, 7 de junio, asambleas simultáneas en Catavi y Siglo XX aprobaron lo acordado en Huanuni. Mientras tanto, el 6 de junio, el gobierno decretó el estado de sitio, con la manifiesta intención de evitar la realización de la marcha de unidad en Oruro y del Ampliado anunciado para el 24 de junio. Si se tiene en cuenta que la Ley de Seguridad del Estado permitía a las autoridades reprimir "legalmente" todo brote de agitación social, se tiene que concluir que la dictación del estado de sitio estaba demostrando la decisión gubernamental de aplastar violentamente a la ola revolucionaria que comenzaba a encrespase amenazadoramente.

Poco antes los mineros rechazaron concurrir a la mesa redonda que había sido convocada por el Presidente Barrientos para estudiar los problemas de la minería nacionalizada, por considerar que concluiría en un nuevo engaño y apenas si sería una maniobra destinada a obstaculizar la lucha de los trabajadores por la reposición de salarios y otros beneficios sociales, que durante toda esta etapa se convirtió en la bandera central de la movilización de masas.

Algunas semanas antes la Comibol denunció la caída de los índices de producción como consecuencia de la agitación extremista y los perjuicios económicos que este hecho ocasionaba la empresa estatizada. Estaba ya decidido que el gobierno volvería a aplicar su receta de la oportuna sangría para que, como por milagro, subiese la producción.

2

Territorios libres

La represión gubernamental había vuelto a señalar a las minas como a su objetivo inmediato y cautelosamente fueron enviadas a los centros de trabajo las mejores tropas del ejército y de carabineros. Se magnificó lo que dijeron e hicieron los dirigentes mineros y se utilizaron todos los recursos propagandísticos imaginables para vincular la lucha de los mineros con las "guerrillas" del Sudeste, con la finalidad de establecer anticipadamente la justificación de la futura masacre que ya estaba decretada. El foco armado se preparó y estalló sin ninguna vinculación orgánica con el movimiento de masas.

La memorable asamblea de Huanuni declaró a las minas como territorios libres y se tuvo la impresión de que esta determinación fue la gota que colmó la medida. El gobierno sostuvo que la declaratoria de territorios libres le obligaba a volver a ocupar

militarmente las minas. En tales declaraciones hay mucho de falsía. Lo cierto es que el slogan de territorio libre fue utilizado como pretexto para ejecutar la invasión armada. Las siguientes fueron las declaraciones hechas por el Presidente Barrientos después de la descomunal matanza:

*"Yo no estoy inventando una historia, el proceso subversivo se desarrolló en la siguiente forma: primero hubo reuniones agresivas en las cuales los participantes se declararon en favor de las guerrillas y recaudaron dinero para las mismas. Después vinieron las amenazas contra el poder constitucional. Más tarde, las radios de Huanuni, Catavi y Siglo XX, emitieron declaraciones y trataron de incitar al pueblo a derrocar al gobierno, para comenzar la lucha de clases e instalar un gobierno proletario. Últimamente, los rojos y los viejos líderes sindicales corrompidos declararon a las tres minas nacionalizadas más importantes territorio libre, donde nadie podría entrar sin su permiso. Debido a esto, el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que ocuparan las minas, para restablecer el orden y el principio de autoridad. Esto hubiera sucedido en cualquier país".*²

Durante los gobiernos movimientistas tanto los centros mineros como las universidades se declararon, una y otra vez, territorios libres y en la práctica funcionaron como tales, porque hasta ellos no ingresaban los organismos de represión e inclusive sirvieron de asilo a los opositores. El Poder Ejecutivo de ese entonces actuó como si no estuviese enterado de tales hechos, esto porque no les daba importancia o bien para evitar un enfrentamiento frontal y armado con los trabajadores. La declaratoria de territorio libre de una determinada zona constituye una vieja práctica en la lucha revolucionaria y no significa que se convierta en un Estado independiente, al menos desde el primer momento.

Al sitio siguió el apresamiento de dirigentes sindicales y políticos opositores, oficialmente sindicados de formar parte de la conspiración extremista. El ejército se encontraba apostado ya en las proximidades de Huanuni, Oruro, Playa Verde y Sora Sora, "con la orden de impedir el paso de los trabajadores a la ciudad de Oruro a cualquier precio".

Según la información proporcionada por Reynolds, el 8 de junio se encontraban en Huanuni los Sindicatos de Catavi y Siglo XX. Cuando los obreros se disponían a embarcarse en un tren de carga con dirección a Oruro, se informó que las tropas del ejército habían levantado cien metros de riel en Playa Verde y que alrededor de mil soldados ocupaban posiciones en la planicie: "El gobierno había ordenado no dejar pasar a los mineros a costa de cualquier cantidad de vidas. La masacre ya ordenada entonces se postergó hasta el 24 del mismo mes".

Los mineros, pese a los informes alarmantes que recibieron, se mostraron dispuestos a marchar sobre Oruro e incluso a enfrentarse con el ejército. Los dirigentes sindicales se opusieron terminantemente a la proyectada marcha, con el argumento de que las tropas asesinarían a los mineros, explicación que estuvo lejos de convencer a las bases. Como tantas otras veces, fue evidente la ruptura entre los obreros y sus

2- Rubén Vásquez Díaz, "Bolivia a la hora del Che", México, 1968.

dirigentes. Después de una larga y encendida discusión se resolvió realizar la que debía ser la "marcha de la unidad" en Huanuni y no en Oruro y se ratificó el 24 de junio como fecha de la realización del ampliado, el apoyo al movimiento foquista a través del aporte de medio salario diario por trabajador. Al anochecer de ese día los manifestantes retornaron a sus distritos.

3

La masacre

Del 9 al 23 de junio la tarea de los dirigentes se circunscribió a preparar el Ampliado Minero, que venía proyectándose como una reunión de varios sectores (fabriles y universitarios aseguraron su asistencia). El objetivo de la actividad represiva gubernamental era por demás concreto: evitar por todos los medios la realización del anunciado Ampliado, porque había el peligro de que en esa reunión se pusiese en pie un poderoso comando del ascendente movimiento revolucionario. Durante estas jornadas Siglo XX y Catavi, de un modo natural, volvieron a jugar el papel de dirección nacional del movimiento obrero.

En vísperas de la masacre llegaron al distrito de Catavi decenas de agentes del DIC, destacados desde La Paz, con la misión de apresara los dirigentes obreros. Circularon rumores alarmantes en sentido de que se pretendía eliminar físicamente a Isaac Camacho, que estaba actuando clandestinamente, a Reyes, a Chacón, a la sazón Secretario General del Sindicato de Siglo XX, y a Valle, este último notorio líder porista del interior de la mina. Los obreros aguzan su vigilancia en ese ambiente electrizado. Cirilo Valle murió más tarde en la región de Cochabamba cuando se desempeñaba como obrero caminero.

La zozobra creció cuando los trabajadores se dieron cuenta que el día 21 el gerente Sahonero (compadre de Barrientos, según el rumor popular) abordó una avioneta de la fuerza aérea para trasladarse a La Paz, de donde retornó al día siguiente. Se dijo que el director técnico de la empresa ultimó con el general Barrientos los detalles del inminente ingreso de las tropas del ejército a los campamentos. "El acompañante del gerente Sahonero fue el actual Superintendente, Carlos del Pozo, puesto creado gracias al favor político y que en la práctica tenía a su cargo la dirección de operaciones de los agentes de policía".

El Secretario de Relaciones de la FSTMB proporcionó la información que sigue: "El día 23, en las primeras horas de la noche, comenzaron a llegar algunas delegaciones fraternales, como fabriles de Oruro y Cochabamba invitados al ampliado minero. Sorteando la persecución sistemática nos constituimos con anticipación para el verificativo del ampliado en representación de la FSTMB. Correspondió al Secretario de Relaciones que suscribe esta información adoptar las medidas de organización para el examen democrático de los problemas".

Los militantes poristas proporcionaron datos más amplios y según ellos arribaron

ese día a Siglo XX gran parte de las delegaciones mineras, representantes fabriles de Santa Cruz, además de los indicados más arriba, y Íos universitarios paceños. Mientras tanto, los obreros se disponían a festejar, como siempre lo hacen cada año, la noche de San Juan, festividad tradicional en el campo, los centros mineros y hasta en las ciudades; para el grueso de las gentes los demás problemas (sindicales y políticos) pasaron a segundo plano.

Poco antes, los trabajadores en asamblea acordaron un pacto político-sindical con los partidos de izquierda (POR, los dos partidos comunistas, PRIN y MNR). Una de las finalidades de este frente era la de luchar por la defensa de los sindicatos y la reposición de sueldos y salarios. Los partidos que intervinieron en el pacto se comprometieron a realizar guardia en el local del sindicato de Siglo XX. En la noche de San Juan le correspondió el turno al Partido Comunista pro-Moscú, lo que explica que uno de sus dirigentes fuese fusilado por las tropas invasoras.

A las ocho de la noche Siglo XX y Catavi cambiaron totalmente de aspecto, a la tremenda tensión social siguió el ambiente de fiesta. Las fogatas agigantaban las sombras de los hombres y de las edificaciones chatas.

“Dos días después de que el Presidente René Barrientos dijo a la nación que había sostenido conversaciones satisfactorias con los representantes de los mineros, el choque más serio que se haya producido en los últimos años tuvo lugar entre esos mismos mineros y las Fuerzas Armadas Bolivianas, el sábado 24 de junio” (R. Vásquez Díaz).

Sin que los obreros en fiesta se pudiesen enterar, fracciones del regimiento Rangers ocuparon los dispersos campamentos de Siglo XX. A los pocos minutos las tropas se desplazaron hacia la Plaza del Minero, dominada por un monumento, el local sindical de piedra, donde funcionaba la notable radioemisora “La Voz del Minero”.

Cobra singular interés la crónica publicada por “La Patria” sobre estos acontecimientos: “a las 4 y 55 de ayer, las poblaciones mineras de esta zona, amanecieron con un intenso tiroteo. Se escucharon disparos de fusiles, ametralladoras y explosiones de dinamita, cuando las fuerzas del ejército y de la Policía Minera ocupaban los campamentos mineros en sangrienta acción” ³. El matutino orureño describió la ocupación del distrito de Catavi: “Las fracciones del Regimiento Rangers y de la Policía Minera descendieron por las faldas del cerro San Miguel, con intermitentes disparos, que continuaron hasta las 6 y 30 horas. Las mayores víctimas se registraron en el campamento denominado “La Salvadora” cerca de la estación (ferroviaria) de Cancañiri”.

Los obreros fueron sorprendidos por un nutrido tiroteo en la zona de “La Salvadora” y Llallagua y, en los primeros momentos, pensaron que se trataba de dinamitazos y de disparos de armas de fuego que siempre se producen en festividades similares. Las detonaciones cobraban mayor volumen cada minuto que pasaba y corrió velozmente, como una estremecedora descarga eléctrica, la noticia sobre la presencia de tropas

3- “La Patria”, Oruro, 25 de junio de 1967

del ejército en los campamentos. No se dejaron esperar las lamentaciones de los heridos y los gritos desesperados de las mujeres y niños. Las balas cruzaban en todas direcciones y ya no era posible dudar de que las fuerzas armadas habían ingresado en tren de combate. Sólo a esta altura los trabajadores lograron reponerse de la sorpresa, pero, como es lógico suponer, no tuvieron tiempo para oponer resistencia ordenada a los invasores. Los franco tiradores ocuparon el lugar de la acción coordinada de los obreros.

A pesar de todo, los datos de "La Patria" resultaron fragmentarios. Las tropas habían desembarcado a unos dos kilómetros de la estación de Cancañiri, precaución elemental que les permitió filtrarse sigilosamente hasta el corazón mismo de Siglo XX, a fin de evitar que los mineros tuviesen tiempo para organizarse. Los soldados se descolgaron por la zona de "La Salvadora" y también por el campamento llamado Villarroel, ubicado en una hondonada. Las fracciones de carabineros y de agentes civiles avanzaron por Llallagua hacia los campamentos. Esta operación envolvente y sorpresiva (preciso es subrayar que se ejecutó sin tener que vencer la menor resistencia) buscaba, al cerrarse, atenzar al local sindical, que a las seis de la mañana ya estaba en poder del ejército.

"Los soldados al ingresar al local sindical asesinaron a Rosendo García. Al clarear el día se pudo observar que la mayoría de muertos y heridos eran moradores del campamento "La Salvadora" que se dirigían al trabajo para cumplir la primera punta. Los invasores disparaban contra toda persona que trataba de escapar. A las seis y treinta el ejército era dueño de todo Siglo XX; el sindicato apareció ocupado y rodeado de uniformados. En los lugares estratégicos se veía la boca de las ametralladoras. Las sirenas de las ambulancias hacían estremecer el ambiente y los centenares de heridos y decenas de muertos eran recogidos y llevados a Catavi. La única reacción de los mineros fue de huir a las bocaminas, allí se hizo un recuento de lo sucedido. En la tarde muchos cadáveres estaban tendidos en el local de! Club Racing" (Reynolds).

Inicialmente se dijo que fueron muertos 16 mineros y heridos unos 71, pero "La Patria" del 2 de junio subió el número de occisos a veinte: "De acuerdo a la lista oficial recogida ayer en Siglo XX, la lista de muertos es la siguiente:

- Ponciano Mamani
- Alejandro Mamani
- García Maisman
- Nicanor Tórrez
- Barroso, Sección Azul
- Maximiliano Achu, Sección Siglo XX
- Isaac Casorla, venerista
- Bernardino Condori, niño de ocho años
- una señora en estado de gravidez
- un joven de 13 a 14 años, una criatura de horas de nacimiento
- un obrero de 29 a 30 años, herido en la cabeza
- un obrero muerto por el impacto de proyectil en la cabeza
- un joven de 22 a 25 años

- Gabriel Sequeiros de la "Guardia Nacional"

Está demás decir que las informaciones oficiales se esforzaron por disminuir el número de víctimas. Muchos heridos no fueron al hospital y algunos obreros simplemente desaparecieron, sin que se hubiese podido establecer con exactitud la suerte corrida por ellos.

La prensa orureña creyó de su deber dejar sentado que no se produjeron "enfrentamientos de grandes proporciones, pero hubo fricción en el local del sindicato. Los mineros se encontraban festejando las fiestas de San Juan". Los trabajadores no se engañaron acerca del objetivo buscado por los invasores: "El propósito del ejército era hacer fracasar el Ampliado Minero pero para ello no tuvieron por qué enfrentarse y ofrendar tantas vidas, y sólo se ha conseguido consolidar la unión de los trabajadores, se indicó" (Reynolds)

El día 25 se efectuó el entierro de los obreros cobardemente asesinados. El acto se transformó en un grandioso mitin de repudio al gobierno y al ejército. Asistieron cerca de treinta mil personas enfurecidas, que vehementemente protestaban por la nueva masacre. Tiene que admirar que inmediatamente después de una colosal sangría los trabajadores ganasen tan impetuosamente las calles para seguir luchando. Todos los moradores del distrito conocían el menor detalle de lo ocurrido gracias al dramático relato que de los luctuosos acontecimientos hizo la radio católica Pío XII el día 24.

4

Emergencias de la masacre

Como quiera que no tuvo lugar una batalla frontal entre los efectivos obreros y militares no se registró un inmediato retroceso de los sindicalizados.

Tras la ocupación, el distrito minero de Siglo XX y las zonas circunvecinas fueron declaradas zonas militares, medida que sobrevivió al mismo general Barrientos. Se procedió así para consumir una rigurosa purga en las filas obreras, para apresar a todo sospechoso y para colocar un cordón sanitario alrededor de la mina más grande del país (Siglo XX). "La corriente eléctrica fue cortada de tal modo que ayer no funcionaron los servicios telegráficos y los de transporte fueron suspendidos. Se ha intensificado la vigilancia en las carreteras, con grupos de soldados del ejército y en una que otra tranca cooperados por funcionarios del DIC. Este servicio de vigilancia impidió que nuestros reporteros pudieran pasar con el vehículo que ocupaban al distrito de Huanuni, ya que las fracciones que controlaban la tranca indicaron que sólo obedecen una autorización del Comando de la II División del Ejército para viajar a la zona convulsionada. Desde las 9 de la mañana de ayer, varios aviones militares sobrevolaron Siglo XX y Catavi, con la consiguiente alarma de los pobladores,. Varios de estos aparatos siguieron sobrevolando hasta pasado el mediodía. Circularon rumores de que éstos bombardearon los dos distritos mineros, aunque estas versiones no pudieron ser confirmadas" (La Patria).

“El Diario” (La Paz) de 25 de junio transcribe una información proporcionada por el Comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Belmonte Ardiles, en sentido de que “el propósito de las Fuerzas Armadas era tomar por sorpresa los centros mineros, apresar a los dirigentes y normalizar las actividades en los campamentos de Comibol”.

Parece que efectivamente el proyecto original era ejecutar un golpe sorpresivo sobre Siglo XX y Huanuni, en ese momento considerados como los núcleos obreros más explosivos, que les permitiese apoderarse de los locales sindicales, destruir las radioemisoras (las autoridades denunciaban diariamente que se habían dedicado a propalar falsedades y mensaje subversivos, bajo la inspiración del Che Guevara) y apresar a los dirigentes y trabajadores que habían sido catalogados por los servicios de inteligencia como peligrosos activistas tanto en el campo sindical como político. En los medios castrenses esta operación fue bautizada con el nombre de “Plan Pingüino”. Las declaraciones oficiales y militares tenían como denominador común la especie de que la ocupación de las minas evitó que una mayor cantidad de mineros muriesen como consecuencia de la subversión extremista, que la consideraban inevitable.

La opinión pública quedó horrorizada ante la descomunal masacre y no se dio cuenta de la purga de grandes proporciones que tuvo lugar en los centros mineros. El día 26 de junio por la noche, soldados y agentes civiles se dieron a la tarea de rodear los domicilios de innumerables trabajadores que fueron apresados sin que mediase formalidad alguna. A algunos se los atrapó en las mismas bocaminas, ciento cincuenta obreros que vestían sus gruesas ropas de trabajo fueron enviados a los campos de concentración que funcionaban en el corazón mismo de la selva tropical, otros acabaron encarcelados y, finalmente, enjuiciados criminalmente por delitos ideados por los fiscales.

En Siglo XX las tropas tuvieron, para poder cumplir su misión represiva, que reducir previamente la resistencia opuesta por los trabajadores. Al asesinato colectivo siguió un régimen de terror sin paralelo y que continuó por mucho tiempo. La oposición al gorilismo no fue quebrada del todo y adquirió las modalidades más insospechadas.

El 26 estalló la huelga general del nivel 411 del interior de la mina. Los obreros no encontraron ningún otro medio que les permitiese expresar su repudio a la política gubernamental. Al día siguiente tuvo lugar, en el mismo paraje, una nueva asamblea a la que lograron llegar algunos altos dirigentes sindicales. Fue faccionada la lista de los obreros apresados y confinados, se acordó mantener la huelga y se efectuaron cambios en la dirección de la FSTMB: Simón Reyes fue designado Secretario General e Isaac Camacho de Relaciones, nadie dudaba (desgraciadamente tampoco las autoridades) que en ese momento este último era el caudillo más valeroso y que, por esto mismo, constituía el mayor peligro para el gobierno antiobrero. En este momento de aguda crisis para el movimiento obrero, las bases marginaron de la Federación a Irineo Pimentel. La prensa publicó los acuerdos más importantes:

- 1) Retiro inmediato de las tropas del ejército de los distritos mineros. A fin de evitar choques más serios y de consecuencias imprevistas.

- 2) Devolución a la organización obrera las llaves del local sindical y de la radio "La Voz del Minero".
- 3) Libertad inmediata de los dirigentes y obreros apresados y confinados.
- 4) Pago por Comibol de las sumas adeudadas a los trabajadores desde mayo de 1965, para que los familiares de los mineros puedan emigrar a las ciudades donde sus vidas puedan estar a salvo.
- 5) Cuarenta y ocho horas de huelga general.
- 6) Persistir en el frente conformado con los partidos de izquierda, como una forma de fortalecer al movimiento obrero.
- 7) Cuota quincenal de diez pesos por obrero para solventar los gastos del sindicato y adquirir armas.
- 8) Indemnización por parte del gobierno a los familiares de los obreros muertos y heridos.
- 9) Los obreros garantizarán las actividades de los técnicos en los centros de trabajo.
- 10) Apoyo a los dirigentes sindicales y exigencia de que las autoridades respeten el cumplimiento de sus funciones.

Los comisionados de las bases entregaron el anterior pliego al coronel A. Villalpando, jefe de la zona militar y con asiento en Catavi. Después de una conversación de dos horas y media no se llegó a ningún resultado fructífero. "Después de la reunión, el coronel de los rangers dijo a la prensa que sus tropas rehusarían abandonar la zona y que su presencia en la región minera tenía un carácter pacífico" (Vásquez D.).

El 30 de junio se organiza el Comité de Huelga encabezado por Berríos y Córdoba (este último elemento de la ORIT, según G. Lora), los mismos que inician las negociaciones con las autoridades gubernamentales. El documento que puso fin al conflicto es por demás humillante. Se impusieron todas las condiciones ordenadas por el régimen Barrientos-Ovando. En julio fueron apresados Isaac Camacho y René Chacón. Este último comenzó como socialcristiano, pero bien pronto fue obligado por las bases a colocarse frente al gobierno. Más tarde cayó también Simón Reyes. La liquidación física, aunque momentánea, de los sindicatos, obligó a una docena de dirigentes a permanecer hasta fines de 1968 en el Panóptico Nacional de La Paz. El gobierno fue desconociendo y persiguiendo a todo elemento que tuvo la debilidad de aceptar cargos sindicales, no soportó ni siquiera a quienes podían acomodarse a sus intereses. De esta manera fue cerrada la posibilidad de existencia de los sindicatos legales. El totalitarismo se mostró incompatible con las organizaciones obreras libres.

En Huanuni la Operación Pingüino de San Juan comenzó siendo ejecutada incruentamente, pues sólo algunas horas después, cuando se procedía a la destrucción

de la Radio Nacional, cayeron los primeros heridos y un obrero muerto.

“Efectivos del ejército ingresaron la noche del lunes (26 de junio, horas 22) a Huanuni, desmantelaron Radio Nacional de ese distrito minero y se llevaron presos aproximadamente a cuarenta personas”⁴.

Tardíamente el gobierno descubrió una nueva justificación de la masacre. Se dijo que los extremistas de Siglo XX tenían proyectado asaltar el cuartel de Lagunillas para desarmar a los soldados; todo esto como parte de un complot subversivo. La ocupación militar de las minas habría buscado evitar la consumación de este atentado.

5

El foquismo y la represión

Desde la aparición del movimiento foquista en Ñancahuazú, los servicios de inteligencia del Ministerio de Gobierno y del ejército quedaron supeditados a la CIA norteamericana, que seguramente tuvo a su cargo la elaboración de gran parte de los planes de la ocupación militar de las minas y su misma ejecución.

A la operación se le asignó el objetivo central de erradicar del escenario a todo activista político y sindical. Es por esto que la represión se extendió también a las ciudades, donde fueron aprehendidos los principales dirigentes míneros.

En la primera página de “Presencia” de primero de agosto apareció un recuadro de una columna con el título de “Líder minero del POR apresado”, La noticia se refería a la captura de Isaac Camacho, que en los momentos más difíciles supo colocarse a la cabeza de los trabajadores e inició la organización clandestina de los sindicatos como la única forma de burlar la feroz represión gubernamental. Camacho logró salir de Siglo XX después de la carnicería de San Juan y gran parte

De la resistencia al gobierno militar fue obra suya. Cuando retornó clandestinamente al distrito de Catavi, su escondite en Llallagua fue ubicado por la policía, seguramente gracias a una delación. Las fuerzas represivas arrojaron una bomba a la casa donde se encontraba y lo sacaron en camilla pensando que estaba muerto. Con seguridad que ya en ese entonces se buscaba asesinarlo. Con todo, el dirigente sindical y porista logró salir con vida e inmediatamente se vio sometido a un régimen de tortura, se le querían arrancar confesiones acerca del lugar donde habían sido escondidas las armas de los mineros, etc. Con posterioridad dijo el Ministro de Gobierno, Antonio Arguedas, -que entonces oficiaba de perdonavidas y de jurado enemigo de la izquierda-, que el “Líder minero” fue desterrado a la Argentina el 9 de agosto. Su Partido, después de haber hecho minuciosas investigaciones en los posibles lugares en los que podía encontrarse, llegó a la conclusión de que fue asesinado por órdenes de la CIA y seguramente en manos de Arguedas. Algunos días antes de la captura de

4- “Presencia”, La Paz, 28 de junio de 1967.

Camacho cayó preso en Oruro el dirigente Chacón, que por suerte fue inmediatamente conducido a la cárcel. La leyenda acerca del peregrinaje del dirigente minero por el exterior fue ideada por el gobierno y por Arguedas para ocultar su crimen.

La cacería de los revolucionarios continuó a lo largo del país. En Siglo XX muchos sindicalistas fueron perseguidos a bala en plena vía pública, pensando que así se verían obligados a abandonar el distrito. Citemos el caso de Pastor Peláez, porista, viejo obrero y dirigente sindical a quien se le hicieron disparos de arma de fuego en la misma plaza de Llallagua. Peláez, como algunos otros, sobrevivieron a la tremenda noche de terror, demostrando de esta manera su gran temple revolucionario.

Como un anticipo de esta descomunal cacería de brujas fueron apresados, a mediados de enero de 1967, dirigentes políticos de izquierda y enviados a la jungla del Noreste, más tarde se los acusará de ser autores del estallido de las "guerrillas" e incluso de los sucesos de San Juan. Entre los confinados se encontraban Guillermo y Miguel Lora.

Los trabajadores, muy especialmente los mineros, demostraron no estar dispuestos a agachar la cabeza frente a la prepotencia gubernamental. Los obreros de San José, Huanuni, Siglo XX y la semi-clandestina COB, respondieron con un paro de 24 horas a la dictación del estado de sitio. Las organizaciones laborales siguieron fustigando duramente al régimen calificado por ellas como entreguista y antiobrero. Las autoridades llegaron al convencimiento de que, debían extremar aún más las medidas represivas. En Oruro, en la tarde del mismo día 6 de junio, se realizó una belicosa manifestación de protesta, al día siguiente y muy dificultosamente pudo restablecerse el orden.

El gobierno estaba interesado en demostrar que los "extremistas" habían incluido en su plan actividades terroristas que debían desembocar en una insurrección. El país quedó sorprendido cuando la prensa del 10 de junio informó que el día anterior fue asaltado y destruido el local del DIC de Llallagua. En un comienzo los medios oficiales dijeron que los autores eran "grupos juveniles que se dedicaron al saqueo"; a esta presunta explicación demasiado abstracta siguió, al día siguiente, la especie de que los ejecutores del atentado eran militantes extremistas y, entre otros, se citó a Chacón, Secretario General del Sindicato, y al porista Cirilo Valle. No puede haber la menor duda de que con estas mentiras se pretendía convencer a la opinión pública que el complot fraguado por el Ejecutivo correspondía a la realidad.

El estado de sitio no logró contener la arremetida obrera y menos hacerla retroceder; contrariamente, obligó a imprimir mayor energía a la movilización masiva y a afinar la coordinación de las actividades obrero-estudiantiles con la de los otros sectores populares, tras el objetivo de libertar a los presos políticos y rechazar los atropellos de las autoridades.

La lucha por el retorno a las garantías democráticas y sindicales estaba inconfundiblemente timoneada por el proletariado.

A la masacre de San Juan siguió -como tenemos indicado- la huelga general de mineros que duró diez y seis días y una impetuosa ola de protestas, en la que jugaron un papel importante los estudiantes. El 27 de junio la universidad paceña fue declarada territorio libre y asilo de los perseguidos políticos. En el voto resolutivo que fue lanzado al respecto se señaló como enemigos del pueblo a los generales Barrientos y Ovando. Un franco espíritu de desafío alentaba la medida, sobre todo si se tiene en cuenta que siguió a la sangrienta represión del 24 de junio. El cabildo abierto convocado por los estudiantes contribuyó en mucho a acelerar la lucha revolucionaria. Barrientos se vio obligado a sostener, en uno de sus innumerables discursos, que su misión era la de libertar a los estudiantes de la nefasta influencia del castro-comunismo. El Ministro de Gobierno Arguedas, haciendo gala de cinismo, aseguró que en la UMSA los opositores habían almacenado armas para hacer posible la subversión. El despropósito fue enérgicamente respondido por la FUL paceña, cuya declaración registraron los periódicos del 30 de junio. En dicho documento se decía que no habían armas en la universidad; que ésta no provocaba y que no existían "condiciones para aceptar la invitación del Presidente Barrientos para abrir un diálogo en procura de la pacificación nacional". El gobierno dio pruebas suficientes que confirmaban la tesis de que el próximo objetivo era la universidad y toda la campaña de provocaciones que puso en práctica buscaba por lo menos hacer retroceder a los belicosos y bullangueros estudiantes. Los hechos enseñan que esto no se pudo lograr porque los jóvenes continuaron siendo los dueños de las calles, incluso después de las innumerables derrotas sindicales. Nadie podía dudar que las autoridades habían decidido ampliar el ámbito de su acción represiva, extremo que se evidenció por la afirmación del señor Arguedas en sentido de que "no habrá fuero para los subvertores". La movilización popular se convirtió en la mejor defensa de la universidad.

6

Plataforma de la Resistencia

El movimiento revolucionario de las ciudades se vio fortalecido por la terca persistencia de los mineros en la batalla, que continuaron deliberando en el interior de los socavones para poder señalar los mejores métodos de lucha y el camino de la fusión de los movimientos sindical y político. Las noticias propaladas por el oficialismo hicieron saber que las asambleas en el subsuelo se realizaban bajo el control de Isaac Camacho, Chacón y Reyes. Se explica que la captura de estos elementos fuese especialmente recomendada por la DIC. Las resoluciones adoptadas por los mineros adquirieron mucha importancia, tanto porque señalaban con anticipación el camino que debía recorrer el movimiento revolucionario como porque la dirección nacional volvió a concentrarse en Siglo XX, el núcleo obrero más maduro, políticamente hablando. Se acordó constituir un Comité Nacional clandestino, afirmar y generalizar los pactos intersindicales, además de persistir en el frente de izquierdas. Muchos de estos puntos no pudieron cumplirse debido al apresamiento de los principales dirigentes y porque no se tomaron las providencias necesarias para que continuasen funcionando las

comisiones clandestinas.

El 29 de junio, en Huanuni, al concluir el paro de 24 horas, se organizó una comisión de bases encargada de tramitar el retiro de las tropas del ejército, la libertad de los presos y la indemnización de los deudos de las víctimas del día 24. Esta especie de programa será esgrimido por los obreros una y otra vez en los meses y años próximos. Los contactos con las autoridades se establecieron por intermedio de los obispos de Oruro y Potosí, que actuaron como mediadores.

Todavía en junio de 1969 una asamblea de los obreros del Sindicato Central de Trabajadores de la Empresa Minera Unificada de Potosí acordó, entre otros puntos, exigir el cumplimiento de las siguientes demandas:

“Repliegue de las Fuerzas Armadas a sus respectivos cuarteles, dejando los centros mineros en los que se encuentran y que se confabulan contra la tranquilidad de los hogares mineros,

“Abolición de la Policía Minera por ser este organismo de represión y una carga económica para la Comibol y los trabajadores.

“Retorno al trabajo de los obreros retirados por causas sindicales y políticas.

“Pago de indemnizaciones a los trabajadores que sufrieron rebaja de sueldos y jornales el año 1965 y que indebidamente retiene Comibol.

“Aumento de sueldos y jornales y reajuste de precios de contratos en sus diferentes sistemas.

“Devolución de nuestras emisoras con sus equipos de ondas larga y corta”.

Por la misma época los mineros desocupados de Huanuni amenazaron con recurrir a la huelga de hambre a fin de poder ser admitidos de nuevo en la empresa.

El gobierno castrense siempre se esforzó por aparecer como popular. Se fraguaron votos de aplauso por la ocupación de las minas. Organizaciones fantasmas y presuntas federaciones campesinas, que proliferaron a la sombra del poder, se apresuraron a emitir comunicados; pero, todo esto no fue suficiente para ocultar la creciente impopularidad del régimen. El Presidente Barrientos pareció adquirir conciencia de este hecho cuando en su conferencia de prensa del primero de julio dijo: “en las minas se conoce mal mi figura”.

El pueblo no se contentó con sindicarlo al Presidente como autor directo del asesinato de los trabajadores, sino que subrayó el papel jugado por Ovando y por la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas en esos crímenes. No se dejó esperar la respuesta del gorilismo.

El Comandante de las Fuerzas Armadas (general Ovando)_ proporcionó, el 30 de junio, amplias informaciones a la prensa, cosa desusada en él. El astuto jefe salió a la palestra para justificar cuidadosamente la ocupación de las minas, esgrimiendo como argumento principal la tesis de que el sindicalismo se había ligado peligrosamente con las guerrillas de inspiración internacional y dirigidas por el Che Guevara ⁵.

La segunda reunión del Alto Mando de las Fuerzas Armadas emitió un sugerente comunicado con fecha 20 de julio y que buscaba demostrar la estrecha vinculación de las guerrillas, "organizadas por el castrismo" con la llamada "conmoción en las minas sistemáticamente preparada desde muchos meses atrás por los mercenarios al servicio de la aventura castrista". El objetivo del documento (en el que parecieron coincidir accidentalmente Barrientos y Ovando) fue presentar como parte de la actividad castrista o guerrillera a "las agitaciones y otras en gestación". El oficialismo partía de la evidencia que no había sido suficiente la matanza de San Juan, tipificada como acto encaminado a defender el orden público según mandato constitucional. Ni duda cabe que fue sellado un efímero entendimiento de mutua defensa entre Barrientos y Ovando, para poder hacer frente exitosamente a la oposición que volvió a tornarse amenazante y que tenía como común denominador el antimilitarismo. Hipócritamente los generales se presentaron como los más interesados en el esclarecimiento, de los luctuosos sucesos de Siglo XX y Huanuni. El documento del ejército decía: "En resguardo del prestigio de las Fuerzas Armadas, el gobierno pedirá y pide al Honorable Congreso Nacional el acta de la interpelación sin demagogia para que se esclarezca la verdad y se deslinden responsabilidades ante la conciencia del pueblo, debiendo aplicarse las sanciones de ley más severas contra los autores de este hecho tan doloroso". Para los dueños del poder los autores eran nada menos que los agitadores que agonizaban en las cárceles.

En enero de 1967 fueron confinados varios dirigentes mineros al campo de concentración de Puerto Rico (Departamento de Pando). En agosto del mismo año se los trasladó a La Paz e inmediatamente fueron encarcelados en el penal de San Pedro, bajo la acusación de haber participado en la descomunal masacre de San Juan. Los mineros presos demostraron la falsedad de dicha acusación, esto porque en la fecha de la masacre se encontraban internados en una guarnición militar a más de mil kilómetros de distancia del escenario de los luctuosos acontecimientos. A pesar de lo expuesto y de haberse presentado como testigo de descargo al propio Ministro de Gobierno y como pruebas -los comunicados oficiales y recortes de prensa- la Juez Clara Tórres (que demostró no tener nada claras las ideas), con la sinvergüenzura característica de los agentes al servicio del gobierno, rechazó la libertad de los trabajadores mineros, acusándolos de haber realizado "ataque en cuadrilla" a tropas del ejército en el mes de junio y calificando dicho acto como "delito común" ⁶.

5- "Presencia", La Paz, 1 de julio de 1967.

6- "Masas" N° 342, La Paz, 19 de marzo de 1968.

7

Agitación estudiantil

A medida que crecía la protesta estudiantil se acentuaron las provocaciones del gobierno. La supuesta actividad pro-guerrillera en las ciudades fue utilizada para hostigar a la universidad. La FUL paceña denunció, el 4 de julio, que agentes de la DIC colocaron banderas rojas en el edificio de la UMSA. Esta sistemática campaña parecía estar destinada a preparar el terreno para hacer posible la intervención castrense en las casas superiores de estudio.

Pese a las advertencias y amenazas de las autoridades, el 4 de julio se realizó el anunciado cabildo abierto en la UMSA. Concurrieron bastante público y representantes laborales. Menudearon los ataques al gobierno. Las conclusiones aprobadas hicieron suyas las peticiones de los obreros y añadieron como novedad la exigencia de que renuncie Barrientos a la Presidencia (exigencia que será reiterada después por la derechista FSB). Cuando la masa se desconcentraba se produjeron choques de aquellas con las fuerzas policiales. La prensa habló de más de cuatro heridos. Con todo, el acto no alcanzó las proporciones esperadas. Los trabajadores mineros, basándose en las informaciones optimistas de los dirigentes estudiantiles, estaban seguros de que el cabildo daría la oportunidad para que todo el pueblo paceño saliese en defensa de los huelguistas y de la víctimas de la represión gubernamental.

El 6 de junio los universitarios de Cochabamba realizaron su propio cabildo. Los periódicos hablaron de 1.500 asistentes y de violentas arengas antigubernamentales. Ampliaron y concretizaron algunos aspectos de las peticiones de sus compañeros de La Paz: plazo de 48 horas para el retiro de tropas de los centros obreros y exigencia de renuncia de Barrientos y Ovando de sus cargos, tipificados como autores confesos del genocidio de los mineros. La manifestación que siguió al cabildo fue disuelta dos cuadras antes de llegar a la plaza principal.

El movimiento político y la acción universitaria centraron su atención alrededor de la consigna de libertad de los confinados y del retorno a la vigencia de las garantías democráticas. La creciente presión popular arrancó al general Barrientos la promesa de una casi inmediata amnistía. El gobernante creyó oportuno hablar de sus inclinaciones pro-izquierdistas y anti-imperialistas. El estado de sitio fue suspendido el 2 de agosto, poco antes de los dos meses de su dictación, aunque es cierto que continuó la represión contra los elementos considerados como líderes de la oposición izquierdista.

La agitación estudiantil volvió a adquirir mucha importancia, se convirtió en el canal de expresión del repudio popular al desgobierno castrense, en la palanca de movilización de las masas y en el polo catalizador de las energías sociales que habían sido dispersadas por la bestial represión. El Ejecutivo puso todo su empeño en abatir este bastión de la resistencia popular y comenzó por minarlo internamente. Los fanáticos de la cruz y del escapulario se organizaron en una minúscula capilla barrientista y

antiguerrillera y abusivamente hablaron a nombre de la masa estudiantil.

Los estudiantes muestran muchas facetas negativas. Partiendo de la evidencia de que por momentos, constituyen el sector más osado de la lucha y que más fácilmente se radicaliza, llegan a la conclusión de que sólo ellos pueden dirigir con éxito a la mayoría nacional, La arrogancia pequeño-burguesa no es obstáculo para que en los momentos críticos pongan en evidencia su inclinación natural hacia el compromiso y la capitulación. Por suerte que los elementos estudiantiles más avanzados maduraron políticamente en la adversidad y, por esto mismo, se despojaron de sus absurdas pretensiones. Buscaron aproximarse al proletariado, sabiendo que a éste le corresponde la dirección política del proceso revolucionario.

8

La lucha en las minas

La lección de estos acontecimientos a pesar de la masacre, los trabajadores persistieron en sus peticiones, debido a que éstas eran la expresión de sus necesidades más premiosas. En el reportaje publicado por IBEAS sobre las minas (27 de julio) se lee que "los trabajadores, al tiempo de levantar la huelga, no han renunciado a la reposición de salarios". Toda vez que los mineros tuvieron oportunidad de expresar sus desesos y su pensamiento reiteraron con energía sus reivindicaciones que fueron enarboladas antes de la noche trágica de San Juan.

A veces, en la última época, llegaron momentáneamente hasta las direcciones sindicales elementos amarillos, dependientes de la ORIT o de las organizaciones católicas, y, sin embargo, cediendo a la poderosa presión de las bases, aquellos se vieron obligados a hablar un lenguaje radical. En los lugares mismos de trabajo los obreros no se cansaron de reiterar sus exigencias de mejoras económicas, de libertad de los presos y de vuelta a la empresa de los trabajadores cesantes. Las peticiones y las protestas no se tradujeron, necesariamente, en huelgas ni acciones callejeras, las masas tenían que darse un respiro, llenar el vacío dejado por la dirección tradicional y reagrupar sus fuerzas.

La Comibol se resistió a dar paso incluso a las reivindicaciones más pequeñas, actitud que se ajustaba a la orientación gubernamental. El coronel Juan Lechín, que al decir de los marxistas estaba por encima del Ejecutivo y únicamente reconocía como a sus superiores a los personeros del BID y al embajador norteamericano, rechazó de plano la exigencia laboral en sentido de incluir en el aguinaldo anual el incentivo a la asistencia y otros beneficios menores, con el argumento que importaría convertir los bonos en salarios y, por tanto, inflar las incidencias sociales. Algo más, hizo saber que recontrataría únicamente a los que ostentasen inocencia en materia política y calculó que éstos no pasarían de diez.

El 26 de julio el oficialismo presentó a los periodistas a algunos elementos que decían ser portavoces de los mineros de siglo XX, era posible percatarse a primera vista

que habían sido seleccionados por los agentes de la ORIT. Es cierto que pidieron "escuelas de sindicalismo que les ayuden a liberarse del extremismo", pero no tuvieron más remedio que demandar la satisfacción de las reivindicaciones económicas que habían sido formuladas por los extremistas. Estos visitantes casi nunca daban sus nombres porque sabían que a su vuelta a las minas serían hostilizados por sus sufridos compañeros que permanecían fieles a lo que dio en llamarse lucha antigorilista.

La prensa del 14 de julio publicó la noticia de que los mineros de Siglo XX, según comunicado firmado por el Comité de Huelga, reiteraron su pedido de libertad de los obreros detenidos, devolución del local sindical (en ese momento ocupado por efectivos militares) y formación de comisiones (parlamento, iglesia, prensa, Cruz Roja, etc) para que investigasen los sucesos de San Juan.

Es preciso volver a la finalización del movimiento huelguístico, que importó la imposición al Comité de Bases de las draconianas condiciones gubernamentales ⁷. El convenio de catorce puntos buscaba estrangular toda actividad de las organizaciones laborales.

El primer párrafo marginó de la empresa toda manifestación de proselitismo político y prohibió que se planteasen cuestiones políticas en las asambleas ("Toda asamblea será con carácter social y económico y se realizará en la forma establecida con previa autorización de la empresa")

La Comibol se comprometió (es el punto que obligó a algo a los empleadores) A reincorporar a sus trabajos a los obreros que fueron apresados y que mereciesen la absolución de la justicia ordinaria (punto 8). En el aparte décimo se reiteró que los obreros no tenían por qué inmiscuirse en los aspectos técnicos y administrativos de la empresa. La vieja disputa sobre si la gerencia puede o no, conforme a su capricho, despedir a sus obreros cuando crea conveniente encontró su solución en el convenio y, claro está, a costa de los sindicalizados. La empresa anunció que en el futuro retiraría a cualquier obrero que creyera conveniente (punto 13). Como cuadra en un campo de concentración, ningún obrero podía portar arma de fuego o dinamita (punto 12).

El documento fue íntegramente redactado por la empresa y los obreros se vieron obligados a firmarlo, pues por el momento no veían ninguna otra salida al conflicto. Huanuni, reaccionando ante la mentalidad ultimativista del coronel Lechín, persistió algunos días más en la huelga. La opinión pública se sintió ofendida y molesta por semejante "acuerdo" (lo exacto sería decir imposición).

Una asamblea de Siglo XX rechazó el documento de 14 puntos, a pesar de haber sido suscrito por los llamados representantes de base. Los asambleístas de Huanuni pusieron mayor énfasis en su rechazo.

La situación del gobierno se vio agravada porque simultáneamente a estos acontecimientos las organizaciones fabriles reiteraron su pedido de mejores remuneraciones.

Los conflictos docente-estudiantiles se elevaron a su punto culminante. Los maestros venían agitando la consigna del sueldo básico de novecientos pesos por mes desde su congreso de Potosí y los alumnos ganaron las calles buscando recursos económicos para la refacción de locales y dotación de mobiliario para las escuelas. Esta agitación desembocó en la huelga general de maestros que no pudo lograr sus objetivos. El 24 de julio la Federación de Estudiantes de Secundaria de La Paz rechazó el plan gubernamental de edificaciones escolares por considerarlo deficiente en extremo. Fue decretada la huelga y los alumnos del Colegio Ayacucho adoptaron

7- "Presencia", La Paz, 10 de julio de 1967.

medidas aún más radicales.

El Presidente Barrientos pidió a los maestros (27 de julio) desistiesen de su pedido de aumento de remuneraciones y el sueldo catorce. La conferencia económica extraordinaria del magisterio, después de conversar con el Presidente a sugerencia del dirigente Dávila, retiró todo el pliego económico (sueldo básico de 900 \$b-particularmente) para únicamente exigir el sueldo catorce o prima. Muy fácilmente y a cambio de nada fueron olvidados los acuerdos del congreso de Potosí; el Presidente se limitó a responder que el pliego sería considerado cuando mejorasen las condiciones económicas del país.

El general Ovando, que decidió la designación de Crespo Gutiérrez, hombre de la rosca, como Ministro de Defensa, reveló algunos aspectos de la política del Ejecutivo que se desarrolló en el futuro inmediato: romper el frente opositor interno, adoptando medidas que permitiesen ganar a la juventud, que se la consideraba "fuertemente influenciada por el comunismo" y auspiciar medidas de cooperación internacional en materia de lucha anti-extremista. Así se hizo público el sometimiento de la política interna a los dictados imperialistas. Barrientos dijo que uno de sus objetivos era procurar la intervención armada de Cuba por los gobiernos latinoamericanos.

Preocupado porque la resistencia popular no hubiese disminuido pese a las premeditadas masacres, el gobierno ensayó un nuevo viraje izquierdizante. Barrientos consignó en sus discursos el repudio a las ocultas intenciones de la derecha, pese a que el Partido Social Demócrata, cerebro de la rosca, se convirtió en el puntal más serio de su gobierno. Al reorganizar su gabinete dio a entender que se inclinaba abiertamente en favor de la izquierda: el PIR elevó a dos su cupo ministerial (Anaya apareció como Ministro de Minas y Petróleo) y el mismo Guevara se convirtió en Canciller. Después de mucho tiempo el presidente habló de su orientación antiimperialista, claro que su antiimperialismo no pasó de ser una palabra sin sentido:

"Y debo reafirmar una definición que ha hecho mi gobierno en forma rotunda: si bien nosotros somos antiimperialistas, pero estamos con la Alianza para el Progreso, porque en esta nueva oportunidad encontramos todas las posibilidades para poder cumplir un verdadero plan de gobierno" ⁸.

No debe perderse de vista la declaración del Presidente Barrientos en sentido de que su gobierno permitiría la presencia del marxismo, "si éste se desenvuelve dentro del marco democrático".

En su mensaje al congreso de 1967 vuelve a su intento de dividir al país en demócratas y pro-comunistas, por encima de cualquier otra consideración partidista o ideológica. Salta a la vista su afán de llevar al marco nacional lo ya logrado en el seno de las Fuerzas Armadas; se vuelve a magnificar el peligro de las guerrillas y se anuncia la posible intervención armada de los países vecinos (estuvo de moda referirse a la balcanización de Bolivia), para obligar a todos, moros y cristianos, a unirse alrededor de su figura. En ese documento volvemos a encontrar la curiosa definición de la línea

8- "Presencia", La Paz, 3 de agosto de 1967.

supuestamente antiimperialista del gobierno castrense, a pesar de que no se niega que en materia económica el país se encontraba estrechamente vigilado por los organismos norteamericanos”⁹.

9- Gral. René Barrientos Ortuño, “Mensaje al H. Congreso Nacional”, La Paz, 1967.

Capítulo IV

Los mártires obreros

1

César Lora

La lucha del gobierno contra los organizadores de los sindicatos clandestinos se distinguió por su drasticidad, por el empleo de todos los métodos imaginables para poder aplastar a los que habían tenido el atrevimiento de permanecer en el país y hacer frente a los planes de la Comibol y de los generales. El asesinato político se convirtió en método favorito de los gobernantes. La dirección porista, tanto en el campo sindical como propiamente político, fue la que soportó en mayor medida las tremendas consecuencias de la represión.

César Lora, una de las grandes figuras de la oposición revolucionaria y de la historia del movimiento obrero en los últimos decenios, cayó en plena batalla, cuando se encontraba poniendo en pie, con remarcable éxito, a los sindicatos clandestinos.

Durante las jornadas de mayo de 1965, el sectarismo de algunos grupos dentro de la Federación de Mineros hizo fracasar su propuesta, la única razonable en esos trágicos momentos, de utilizar las guerrilla para expulsar a las tropas del ejército de los centros de trabajo. En ese entonces prínistas y stalinistas estaban interesados en concluir acuerdos con los generales victoriosos y no en luchar. Después de la ocupación, Lora y otros dirigentes poristas abandonaron Siglo XX para insumirse en la clandestinidad y seguir peleando.

Se trataba de que los grupos obreros armados utilizaran los métodos de la guerra irregular en su lucha contra el ejército. ¿Había otra forma de preservar a la clase y a los campamentos mineros frente a un poderoso ejército que en ese momento no presentaba fisuras visibles?

Cuando César Lora e Isaac Camacho se alejaron del distrito, después de los acontecimientos de mayo, dijeron que se iban a la cordillera a preparar sus grupos armados. Se trataba de una maniobra tendiente a desorientar a las autoridades, para poder iniciar su actividad en la clandestinidad, ellos se dirigieron a la ciudad de Oruro, disfrazados de campesinos de la región. El gobierno inmediatamente destacó fracciones armadas en su persecución; los piquetes se dirigieron a la mina Matilde, próxima a Siglo XX. Era evidente que ya en ese entonces, los servicios de inteligencia del ejército resolvieron asesinar a los dos luchadores. El POR hizo la siguiente denuncia: "La prensa hace saber que piquetes de gente uniformada han salido de Catavi en persecución de los poristas y particularmente de César Lora e Isaac Camacho, obreros del interior de la mina de Siglo XX.

“La persecución es pan de todos los días en un período de restauración oligárquica. Lo que tiene que alarmar a los obreros es la orden dictada por los generales fascistas en sentido de que asesinen a César Lora e Isaac Camacho allí donde sean hallados. Si tan siniestro plan se cumple se tiene que convenir que se ha preparado con alevosía uno de los más asquerosos crímenes.. .

“El POR alerta al pueblo boliviano. Si César Lora e Isaac Camacho pierden la vida, responsabilizaremos del crimen a la Junta Militar y sabremos cobrar venganza, en el momento oportuno. Los generales fascistas han convertido en su deporte favorito la caza de seres humanos. La dignidad de los bolivianos les exige que se pronuncien contra semejante monstruosidad que atenta contra todo criterio de convivencia humana. Exigimos que se respete la existencia física de los trabajadores”¹.

Equivocadamente la dirección del POR consideraba que la denuncia tan enérgica sería suficiente para obligar a los generales a desistir de sus planes de eliminación física de los líderes trotskystas.

Con fecha 7 de junio de 1965, se difundió una carta abierta de César Lora (se dice haber sido escrita en Juschum una montaña de los ramales cordilleranos del norte potosino) a la Junta Militar. Se trata de una pieza sumamente rara y que no ha sido incluida en sus ESCRITOS. Reproducimos su texto:

“La radio informa sobre la sistemática campaña en contra de mi persona y de quienes me siguen. Se dice que, a la cabeza de un pequeño grupo, pretendo enfrentarme a las fuerzas del ejército.

“La verdad es que todo el pueblo y, sobre todo, los obreros están en contra de la alta jerarquía militar, que ha consumado una descomunal masacre obrera. Efectivos castrenses se preparan para tomar los distritos mineros y, a título de requisar armas, saquean humildes viviendas, como ya ha ocurrido en Villa Victoria de La Paz. Han sido rebajados los salarios en un 45% y se proyecta el despido de 7.000 mineros. Así se ha decretado la efectiva destrucción de la Comibol. Es contra estas monstruosidades que se rebela el pueblo.

“Se pretende que el trabajo se ciña a las ordenanzas militares. Bolivia ha sido convertida en un campo de concentración y el objetivo de la Junta es evitar que los obreros se organicen y busquen su propio camino. La violencia está siendo empleada para ejecutar este nefasto plan. Es esto lo que combatimos.

“Los trabajadores hemos sido colocados ante el dilema de o somos esclavizados o logramos la victoria en la lucha contra la Junta Militar, que no está haciendo más que desarrollar las tendencias fascistas que contenía en germen el régimen del MNR, del que formaba parte el general Barrientos.

“Un pequeño grupo, y peor un hombre solo, no podrían crear el ambiente de zozobra

1- “Masas”, N° 297, la Paz, 19 de junio de 1965.

e inquietud que reina en los centros mineros. Tenemos plena conciencia de que el fascismo desde el poder y pese a sus promesas líricas, constituye una permanente amenaza contra nosotros y contra todos los bolivianos, contra las organizaciones sindicales y contra las garantías democráticas.

“La lucha franca o encubierta (esto según las circunstancias) contra el gobierno tiene que continuar. Este enfrentamiento de los bolivianos con la alta jerarquía militar sólo podría evitarse si la Junta revisase sus medidas sobre la Comibol, retirase los efectivos del ejército de los centros de trabajo y permitiese el libre desenvolvimiento de los sindicatos.

“Los obreros hemos señalado, en su debida oportunidad lo que entendemos por reordenamiento de la Comibol. Nadie puede discutir que, en último término, la base para la buena o mala marcha de una empresa son los obreros, por esto la tarea más importante de todo reordenamiento efectivo consiste en ganar la confianza de éstos hacia los planes gubernamentales. Por otra parte, hace tiempo que hemos recalcado la necesidad de renovar la maquinaria en las minas. La Comibol ha engañado al país cuando ha dicho que la “rehabilitación” importaba llevar nuevos equipos a los centros de trabajo. La verdades que las máquinas que se emplean hoy son las mismas que instalaron las ex-empresas privadas. En el ingenio de Catavi las instalaciones semi-destruidas han sido colocadas sobre piedras. En estas condiciones no puede haber mayor producción.

“Es humillante que la autoridades pretendan reglar nuestras convicciones. La politización de las masas es un paso progresista y constituye la premisa indispensable de una auténtica democracia. Lo que busca la Junta es designar con el dedo a los “dirigentes” que puedan servirle incondicionalmente.

“No creemos que los soldados, que son nuestros hermanos de clase, marchen voluntariamente contra nosotros y no perdemos la esperanza de que formen filas a nuestro lado.

“Se nos persigue sin cuartel, a pesar de que hemos combatido a los dirigentes burocratizados del MNR. No hemos estado en la dirección sindical ni hemos manejado dineros de ninguna entidad fiscal. Ahora, cuando otros huyen o entran en componendas con el gobierno, nosotros seguimos en el puesto de combate junto a nuestra clase. Esta fidelidad desinteresada es un delito para los gobernantes, por esto estamos prófugos, seguros de que sabremos ayudar a los obreros en su lucha contra el fascismo”.

César Lora era uno de los muchos militantes trotskystas que, para soldarse realmente con el sector fundamental del proletariado boliviano, se decidió a trabajar en las minas, no como un empleado que busca ahorrar algún dinero para luego emigrar a las ciudades, sino como obrero del socavón, palpando los filones de estaño y, al mismo tiempo, a los hombre topes que horadan las montañas y persiguen un porvenir mejor. Se convirtió, a cambio de su salud y sacando ventaja de su formidable contextura física, en uno más de los miles de mineros de la empresa Catavi, viviendo

la misma vida de éstos, habitando una covacha, alimentándose apenas con el magro salario. Pero todo eso era para él nada ante la enorme satisfacción de educar a los trabajadores, de enseñarles a luchar por una sociedad mejor, de ayudarles a asimilar el elevado programa trotskysta. El militante revolucionario se empleó a fondo en la tarea de promover la evolución de la conciencia clasista.

Desde sus años de adolescente dio pruebas inequívocas de su vocación de rebelde y de político. Jovenzuelo estuvo mezclado en los trajines conspirativos y secretos de los líderes campesinos del Norte de Potosí. Pero, fue en el movimiento sindical minero donde se perfiló toda su personalidad, todas sus grandes aptitudes de caudillo y, sobre todo, de revolucionario.

“Alrededor de once años permaneció en los socavones para poder luchar mejor por la liberación del proletariado, para conocer de un modo directo sus formas de vida y de trabajo”².

Los años 1947-48 fueron de prueba y sufrimiento. Alistado en el ejército mostró bien pronto su resistencia a la absurda y servil disciplina de cuartel. Se lo envió como castigo a Curahuara de Carangas, inhóspita y frígida planicie. Intervino en un motín contra la jerarquía castrense, tan dada a ultrajar la dignidad humana. Luego vinieron la prisión y las torturas en los calabozos. Procesado por el Consejo de Guerra y sentenciado a dos años de prisión, tuvo que cumplir esta pena en el Panóptico de La Paz. En estas y otras oportunidades dio pruebas de su gran temple, de su coraje y de su solidaridad a toda prueba con sus compañeros de causa y con los humildes en general.

1952 fue decisivo para él. Ya tenía su pasado de opositor, había intervenido en algunas acciones conjuntas con elementos del MNR en el último período del sexenio y su nombre estaba incluido en las listas de agitadores, lo que le obligó a observar las reglas elementales de la clandestinidad. Se cobijaban bajo el mismo techo otros camaradas, que acababan de ingresar a la empresa Catavi, frente a los cuales mostraba una gran fraternidad.

Desaparecieron sus dudas y oscilaciones políticas, esto porque vio con sus propios ojos el rol decisivo jugado por el proletariado y particularmente por los mineros, en el proceso revolucionario. Desde ese momento su idea central será la de forjar la conciencia de clase de los trabajadores y fortalecer a su partido de vanguardia. La Tesis de Pulacayo tuvo una enorme influencia sobre él y concluyó definiéndolo.

Como marxista, Lora consideraba que la actividad sindical debía estar subordinada a la política revolucionaria, es decir a la política del partido de la clase obrera. Su objetivo no era capturar por cualquier medio, inclusive utilizando los más sucios, la dirección sindical, sino convertir a la organización obrera en un baluarte revolucionario y preservar su carácter de defensora de los intereses de sus afiliados. Para cumplir la tarea que se había impuesto no pudo menos que enfrentarse con la bien cimentada

2- Alberto Sáenz, “Así Asesinaron a César Lora”, la Paz, 1966.

burocracia sindical, que se enriquecía contando con la protección gubernamental. Se colocó a la cabeza del admirable grupo trotskysta que desde la base misma de los sindicatos batalló sin tregua y soportando la represión gubernamental, contra quienes prostituyen a los dirigentes obreros y se apropian de los fondos sindicales. Su voz era la primera en escucharse en los congresos nacionales de trabajadores o en las asambleas sindicales para colocar en la picota del escarnio a los traficantes, sin tomar en cuenta para nada su ocasional fortaleza. Los dirigentes sindicales de Siglo XX tenían como norma invariable no rendir cuentas del manejo de los dineros de la organización laboral; utilizar su situación de privilegio para asociarse con comerciantes que traficaban con la empresa; convertirse en importadores de ropa usada o máquinas o, en fin, patrocinar la formación de consorcios con la finalidad de explotar determinados renglones de la actividad de la Comibol. Lo que hizo en el campo sindical puede considerarse como un ejemplo de conducta revolucionaria.

Se lo cita como a un modelo de honestidad. La verticalidad de su actuación lo llevó a presidir la Comisión Revisora del movimiento económico del sindicato de Siglo XX, organizada a fines de 1962. Cumplió, sin haber exigido remuneración alguna, largas jornadas revisando personalmente libros y comprobantes, deliberadamente presentados en forma confusa y deficiente. El informe (que llevaba, además de la suya, las firmas de Isaac Camacho, Oscar Ruiz, Erasmo Hermosa, Félix Véliz, Silvio Tórres y Juan Arias), llegó a conclusiones realmente aterradoras: el dirigente Pimentel había malversado en un año 204.935.127 Bs.

Ya en 1949 lo encontramos trabajando en el interior de la mina y con el tiempo llegó a ser uno de los buenos perforistas del distrito de Catavi. Su inteligencia natural le ayudó a conocer y adentrarse rápidamente en todos los vericuetos de la explotación minera. Podía discutir en pie de igualdad con los ingenieros y mejores técnicos de la empresa. Los peones más humildes veían en él a su indiscutible defensor. Era el hombre indispensable en las mediciones, pues tomaba a su cargo enmendar errores y evitar engaños.

A comienzos de 1951 fue despedido por la Patiño y tuvo que soportar la persecución a la que el superestado minero sometía a quienes se distinguían en la lucha sindical. Inmediatamente tomó parte activa en la organización del sindicato de desocupados, habiendo llegado a ser uno de sus dirigentes. En calidad de tal y con el fusil al hombro intervino en la revolución de 1952.

A fines de 1952 ingresó a Comibol y comenzó a exteriorizar su antimovimientismo, en una época en que el MNR contaba con el apoyo casi total de los trabajadores. Los trotskystas podían hablar en los centros obreros gracias al gran prestigio que habían ganado en el pasado. La prédica sin tregua de Lora y su actividad organizativa, despertaron bien pronto las susceptibilidades de los organismos de represión. Al finalizar el año 1953 fue detenido y enviado preso al Panóptico de La Paz, juntamente con otros poristas, donde permanecieron hasta 1954. Al año siguiente logró reingresar a Catavi, habiendo trabajado primeramente en la sección Block-caving Azul y luego en la sección Beza, a la que no dejó de representar como delegado. Su persistente y abnegada labor y sus virtudes personales le permitieron cobrar autoridad moral

e intelectual sobre sus compañeros. A lo largo de su vida de minero fue el caudillo indiscutido, aunque no ostentase título de dirigente oficial. Lo que decía y hacía tenía mucho peso para los trabajadores. En 1956 fue elegido Secretario de Conflictos Mina, cargo al que renunció para combatir mejor a la burocracia sindical.

Sus adversarios políticos tramaron eliminarlo físicamente. Un buen día descarrilaron un carro metalero con la intención de triturarlo contra la roca. Como consecuencia del accidente resultó con la clavícula destrozada, que con dos operaciones no pudieron sanarla completamente.

A partir de 1955 asiste, en condición de delegado de base, a todos los congresos y conferencias de la Federación de Mineros y a dos reuniones de la Central Obrera Boliviana. Los diversos documentos del movimiento sindical minero fueron inspirados o bien íntegramente elaborados por él.

En 1958 fue nuevamente apresado, esta vez por el dúo Siles-Guevara, y solamente la amenaza de una huelga general pudo arrancarlo del Panóptico.

La conferencia minera de Oruro (febrero de 1959) ratificó la petición de aumento de salarios de 29 de julio de 1958 y, después de rechazar las proposiciones de Comibol, acordó ir a la huelga. Los obreros designaron a César Lora. Presidente del Comité Nacional de Huelga. En el transcurso del conflicto chocaron la fracción trotskysta y la quinta columna gubernamental timoneada por el lechinismo.

El silismo, representante de la derecha movimientista, pretendió liquidar al movimiento obrero escisionándolo, corrompiendo a los dirigentes y creando sus propios sindicatos totalmente sometidos al control gubernamental. Con esta finalidad nacieron los sindicatos reestructuradores, que convirtieron a Huanuni, en su fortaleza, fuertemente controlada por las huestes silistas bien armadas. La finalidad era vigilar de cerca los movimientos de Siglo XX-Catavi y aislar a este distrito del resto de las minas del país. La propia lucha reivindicatoria se vio seriamente entorpecida por la actitud de los reestructuradores que se esmeraban en hacer fracasar todo movimiento en pro de mejores condiciones de vida y de trabajo.

“Los heroicos obreros de Huanuni lograron vencer a las ametralladoras en las elecciones del 24 de diciembre de 1959; los desplazados en una competencia democrática retomaron a bala el sindicato”³.

Lora estuvo a la cabeza de los assembleístas de Siglo XX que decretaron la huelga general en apoyo de los dirigentes de Huanuni, de quienes repudiaron la disolución a bala de una pacífica manifestación promovida en respaldo de los que fueron elegidos por voluntad de los obreros. Como respuesta a estos vergonzosos hechos, los trabajadores de Siglo XX marcharon sobre la plaza fuerte del silismo y después de una cruenta batalla lograron dominarla. En esas acciones César Lora fue el dirigente que se jugó la vida varias veces.

3- A. Sáenz, etc., “La Masacre de Huanuni”, La Paz, 1960.

A mediados de 1958, fue disuelto el IX congreso minero de Colquiri por los agentes de Guevara-Siles y trasladado a San José. En esa reunión cumplió un papel decisivo, que en su calidad de relator de la resolución política dio una verdadera lección teórica y explanó las razones por las cuales los mineros no podían identificarse con el MNR en el poder.

A partir de 1962 encabezó la lucha obrera contra el Plan Triangular, por considerar que éste pretendía solucionar las dificultades de la Comibol mediante la disminución de los salarios reales, la masacre blanca y el empeoramiento de las condiciones de trabajo; él y otros connotados poristas (Isaac Camacho, Cirilo Jiménez, etc.) volcaron sus ideas en el folleto "Respuesta al plan antiobrero. Problemas de la Comibo". No se trataba -según los trotskystas- de disminuir el número de obreros o de limitar sus ganancias (ese era el criterio del gobierno y de la alta jerarquía de Comibol), sino de condicionar los ingenios a la baja ley de la carga extraída de la mina.

Cuando en La Paz se discutió con Comibol la aplicación de la Triangular, César Lora denunció el carácter antiobrero de la medida y puso de relieve la irresponsabilidad del equipo técnico. Las decisiones oficialistas no eran discutidas, sino simplemente impuestas. Reaccionando contra este lamentable estado de cosas, Lora e Isaac Camacho abandonaron la conferencia, no sin antes denunciar las maquinaciones de Comibol, en una carta pública. Bedregal (el mismo que más tarde le dedicará uno de sus folletos) se apresuró en ordenar el despido de ambos militantes revolucionarios.

En el congreso de Colquiri de 1962 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros, esto cuando el lechinismo había roto tardíamente con Víctor Paz.

En 1963, setecientos obreros abandonaron la empresa Catavi, subrayando así su oposición al Plan Triangular, cuya aplicación determinó la rebaja de los precios de contrato. César Lora, cooperado por otros militantes trotskystas, tomó para sí la misión de organizar a los desocupados, proporcionarles trabajo y ayudarles a reorganizar sus vidas. La "Cooperativa mina Italia" cobró importancia y hasta llegó a adquirir un camión volqueta, que fue secuestrado por las autoridades después de los acontecimientos de mayo de 1965.

En diciembre de 1963 las tropas del ejército tendieron un cerco de fuego alrededor de Catavi exigiendo la libertad de los rehenes que habían sido capturados por los obreros. El conciliador Lechín tuvo que soportar el repudio de los trabajadores, cuando su vida corría peligro, le correspondió a Lora asegurar su salida de la zona minera y su llegada a La Paz. Posteriormente, en 1964, evitó que algunos burócratas cobardes fuesen colgados por los mineros.

Durante las jornadas de mayo de 1965, fue uno de los dirigentes del Comité de Huelga, en calidad de tal llegó, burlando la vigilancia policial, hasta La Paz, para sacar a los fabriles a las calles. Después pasó a la ilegalidad y volcó todos sus esfuerzos hacia la organización de los sindicatos clandestinos.

Cuando, juntamente con Camacho, marchaba con rumbo a Siglo XX para reunirse con los obreros, cayó en una trampa preparada por el oficialismo para eliminarlo físicamente. "El 29 de julio (1965) llegamos a las proximidades de Sacana, que está a tres leguas de San Pedro de Buena Vista. Cuando alcanzamos a la confluencia de los ríos Toracarí y Ventilla, chocamos con un piquete de civiles que estaba al mando de Próspero Rojas, Eduardo Mendoza y otro a quien llamaban Osio... Una vez apresados, estábamos siendo conducidos a San Pedro, pero en el camino, a pocos metros del mencionado cruce de ríos, comenzaron a golpear bestialmente a César Lora. Cuando yo forcejeaba para libertarme, escuché un tiro de revólver. No bien voltee la cabeza vi a César Lora en el suelo con la cabeza que le sangraba, casi instantáneamente murió" ⁴. En 1978 Próspero Rojas fue designado subprefecto de San Pedro. Las diligencias judiciales sobre el asesinato de Lora no pudieron ser llevadas adelante por interferencias del oficialismo.

Así, utilizando a esbirros criollos, se cumplió la sentencia de muerte contra César Lora que había sido dictada hace tiempo por los generales masacradores. Las autoridades tenían plena conciencia del peligro que para el régimen castrense significaba el magnífico luchador. Sus pasos eran seguidos muy de cerca. Tenemos entre las manos un informe reservado de uno de los espías del gobierno y enviado desde Llallagua. El informante era nada menos que Mamerto Pinto C., Alcalde de Llallagua (Tercera Sección de la Provincia Gustillo), que cumplía labores de espionaje para el Ministerio de Gobierno.:

"Llallagua, 31 de mayo de 1965.

"Señor General René Barrientos O.

"Excmo. señor Presidente:

"En cumplimiento de mis obligaciones de autoridad y ciudadano, tengo el honor de elevar a su digno conocimiento, los siguientes hechos relacionados con la última huelga:

"1. Durante el tiempo que duró la huelga se ha establecido que el grupo político que dirige César Lora (POR) tiene buena cantidad de armamento; una parte adquirido del anterior régimen cuando organizaban milicias y otra comprada en esa ciudad, Oruro y otros centros de oficiales de carabineros. El armamento consiste en metralletas, fusiles, pistolas y revólveres ...

"2. Tengo conocimiento que en el interior de la mina se viene organizando grupos de sabotaje para neutralizar las medidas que pondrá en práctica la Empresa en cumplimiento de los últimos Decretos Supremos; estos grupos serán asesorados por los comunistas y poristas".

Más tarde las autoridades torturaron a Camacho buscando ubicar los depósitos de armas del POR.

4- "Relato de Isaac Camacho", en "Escritos" de César Lora, La Paz, 1969.

Las autoridades secuestraron el cadáver de Lora con la intención de evitar que fuese trasladado a Siglo XX. Sólo la poderosa presión de los trabajadores permitió que fuese sepultado en el escenario de su lucha, de sus victorias y de sus derrotas. Quince mil personas trasladaron sus restos, menudearon los discursos desafiantes y las descargas de dinamita.

2

Isaac Camacho

Isaac Camacho, nacido en la localidad minera de Llallagua, hizo sus estudios en el Instituto Americano de La Paz y fue en esta ciudad que más tarde tomó contacto con el Partido Obrero Revolucionario.

Ingresó como obrero al Block-caving de Siglo XX, una sección donde trabajan los mineros suicidas, dadas las tremendas condiciones de insalubridad que imperan en estos parajes. Desde allí libró singular batalla buscando mejorar en algo el trabajo de sus compañeros. Pronto ganó nombradía como abnegado dirigente. Isaac Camacho llevó su proletarización hasta sus últimas consecuencias.

Compañero inseparable de César Lora, acompañó a éste en todas sus luchas. Sobrevivió a la emboscada de Sacana y pasó a ocupar el puesto dejado por su camarada en la organización de los sindicatos clandestinos y en la militancia del POR.

Los generales nunca le perdonaron el haber sido testigo ocular del asesinato alevoso de César Lora. Las autoridades pusieron especial interés en aislarlo y perseguirlo.

Efectivos de las fuerzas armadas lo apresaron en Siglo XX en el mes de septiembre de 1965, habiendo sido conducido al campo de concentración de Alto Madidi y finalmente recluido en el Panóptico de La Paz. Aún en estas circunstancias el luchador no dejó de batallar en favor de los obreros. Poseemos una carta escrita a los mineros y universitarios de Potosí (15 de marzo de 1966), felicitándoles por haber prestado ayuda material a los deudos de los masacrados en Siglo XX en mayo y septiembre de 1965, al mismo tiempo que les insta a seguir peleando contra el gorilismo.

Fue libertado gracias a un movimiento de solidaridad sindical e inmediatamente se alineó junto a los que entonces cumplían funciones sindicales en la empresa Catavi. Fue Camacho el que elaboró el pliego de peticiones dirigido al Presidente de la República general Ovando (marzo de 1966) sobre la urgencia de reincorporar a los obreros despedidos por motivos sindicales y políticos, reconocer a los obreros retirados el derecho de inscribir a sus hijos en las escuelas de la empresa y que éstas mejoren sus sistemas de enseñanza; otorgar prestación médica a los obreros despedidos y a sus familiares, etc.

Fue el cerebro y el líder durante la huelga general que siguió a la masacre de San Juan, habiendo sido detenido como castigo por su viril y honesta actuación. Fue

asesinado cuando se encontraba de Ministro de Gobierno Antonio Arguedas.

Conocemos las calumniosas imputaciones que hizo Chacón (Entonces, Secretario general del sindicato de Siglo XX.) contra Camacho en sus declaraciones prestada en la Segunda División del Ejército (Oruro). Esas sindicaciones (dicen que Camacho tenía organizaciones preparadas para asesinar a jefes militares, etc) fueron utilizadas para justificar su eliminación física. Por lo que hasta ahora se ha podido investigar, se sabe que fue ultimado en una de las prisiones secretas que mantenía Arguedas, el que dio numerosas pistas falsas para distraer la opinión pública y a los trotskistas; en cierta oportunidad sostuvo que Camacho había sido atropellado por un camión en La Plata (Argentina).

3

Julio César Aguilar

El dirigente gráfico Julio C. Aguilar nació en Cochabamba y en esa ciudad tomó contacto con los trotskistas. Formó parte, juntamente con Octavio Montenegro, del Comité de Huelga durante las jornadas de mayo de 1965. Perseguido por la policía se trasladó a Oruro con la intención de radicarse en esta ciudad. Sin embargo, después de tomar contacto con las organizaciones sindicales clandestinas y con César Lora, volvió en el mes de julio a Cochabamba, con el propósito de realizar igual actividad en esta ciudad.

Aguilar, de 35 años, ha dejado, en una carta dirigida a su esposa, la constancia de que estaba realizando trabajos políticos. Con toda seguridad que la DIC lo tenía sometido a vigilancia, sobre todo después de saber que era portador de instrucciones de Lora.

Un sábado a fines del mes de julio de 1965 fue secuestrado por la policía e inmediatamente asesinado. No ha sido posible encontrar sus restos y tampoco conseguir una explicación de las autoridades policiales sobre el asunto.

Las organizaciones sindicales de gráficos y el propio POR hicieron múltiples reclamos y averiguaciones para saber algo acerca de la suerte corrida por Aguilar; todo ha sido inútil hasta ahora.

Aguilar se incorporó al movimiento trotskista siendo ya un obrero de amplia trayectoria sindical y bien pronto demostró poseer excelentes cualidades de luchador político.

Lo que hemos dicho demuestra que Aguilar cayó víctima del amplio plan elaborado por la alta jerarquía castrense para destruir físicamente a la máxima dirección porista y particularmente a quienes estaban más íntimamente vinculados con el movimiento obrero.

El Cuarto Congreso de la COB (1970) declaró a César Lora, Isaac Camacho, Julio C.

Aguilar, junto a otros sindicalistas que cayeron en la lucha, Mártires del movimiento obrero boliviano.

Capítulo V

El control obrero

1

Planteamiento de la Tesis de Pulacayo

El control obrero, junto a la Central Obrera Boliviana, a las milicias y al sindicalismo campesino, constituyen las más valiosas experiencias de la revolución y del propio movimiento sindical.

Lechín ha dicho, una y otra vez, que a él se debe la inclusión del control obrero en el decreto de nacionalización de la gran minería. Sin embargo, tal planteamiento es extraño a la ideología movimientista y su filiación porista resulta inconfundible. La idea del control obrero llegó a Bolivia a través del Programa de Transición de la Cuarta Internacional ¹.

Si se revisa la propaganda y documentos programáticos del MNR no se encontrará en ellos la menor idea acerca del control obrero en las empresas estatizadas o privadas. El primer documento que habla del control obrero como de una reivindicación básica de la clase obrera es la Tesis de Pulacayo (1946). Cuando su texto fue difundido, los stalinistas y reaccionarios en general, acusaron a sus autores de haber acabado en el anarquismo. Según estos críticos propugnar el control obrero en Bolivia significaba una actitud ultraizquierdista, afirmaban que este país aún no había alcanzado un alto desarrollo capitalista y hacía falta todavía que el proletariado constituyese una gran mayoría y la industria conociese un descomunal desarrollo. Se hacían estas salvedades porque el control obrero fue incluido en los programas de los partidos comunistas europeos y constituyó motivo de agitación y de experiencia directa en muchos países.

En la Tesis de Pulacayo el control obrero adquirió una fisonomía indiscutiblemente revolucionaria y estaba ligado íntimamente a la cuestión del poder. No en vano sus consignas expresaban la radicalización de las masas. El desarrollo de los acontecimientos dio posteriormente la razón a dichos postulados. El control obrero, inclusive el burocratizado, no podía coexistir indefinidamente con el gobierno pequeño-burgués. No cabe la menor duda de que el que controla las minas controla también la economía y la política. Lo que preocupó al oficialismo no fue únicamente la posibilidad de asimilar y prostituir a los controles obreros individuales, sino y principalmente, las proyecciones que necesariamente llevaba en su seno la conquista revolucionaria. "Si el MNR lo combate sin tregua es porque tiene la posibilidad de

1- "La agonía mortal del capitalismo y las tareas de la IV Internacional", Buenos Aires, 1940.

convertirse en el canal de movilización de los trabajadores”². No debe olvidarse que dicha consigna fue lanzada como parte inseparable de la ocupación de las minas.

En 1946 se trataba de que el control obrero colocase a la clase obrera a la cabeza de la dirección de las minas y, de esta manera, le obligase a luchar por el poder político. La esencia del control obrero radica en esta perspectiva y es ésta la que queda en pie después de la negativa experiencia consumada durante el régimen movimientista.

La Tesis de Pulacayo irrumpió en el escenario político cuando los trabajadores se encaminaban firmemente hacia la ocupación de las minas que se encontraban entonces en manos de la gran minería (Patiño, Hochschild, Aramayo). En tales circunstancias, el control obrero no podía significar más que la administración de las minas por la clase obrera, es decir, por los órganos que expresasen la voluntad colectiva. La consigna de la ocupación de las minas flotaba en el ambiente, como la generalización de experiencias varias y aisladas. Al subrayar el control obrero se quería poner en guardia a los mineros frente a una nueva y posible desvirtuación de su reivindicación más sentida. Todos estaban de acuerdo en que la ejecución de la táctica revolucionaria debía efectuarse bajo la vigilancia militante de toda la clase. No era posible hablar de realizar la nacionalización de las minas cuando el poder estaba en manos de la rosca.

Ya entonces la ocupación de las minas bajo control obrero adquiriría un carácter esencialmente transitorio. La contradicción generada por ella no podía resolverse en otra perspectiva que no fuera la de la lucha por el poder político.

El control obrero puede englobar una serie de formas de participación de los trabajadores en la vigilancia o dirección de las empresas y habría sido más exacto llamar gestión obrera a la modalidad de control enunciada por la Tesis de Pulacayo. Con todo, las circunstancias imperantes en 1946 obligaron a formularla como control obrero. Se buscaba eliminar toda interferencia ajena al proletariado en la dirección de las minas con el objetivo de que este control permitiera concentrar en manos de los trabajadores todos los resortes del manejo de las empresas. En este sentido se trataba de una perfecta gestión obrera, integral y directa. Sólo más tarde, cuando el MNR desvirtuó los enunciados de Pulacayo, fue necesario, en medio de una gran polémica, precisar los verdaderos alcances de la consigna.

2

El control obrero movimientista

En el artículo diez y siete del decreto de nacionalización de la gran minería (31 de octubre de 1952) se establecía lo siguiente: “En las minas nacionalizadas se ejercerá control obrero, con la participación de los trabajadores, mediante delegados, en la administración local de cada una de ellas”³. Entre los firmantes de este Decreto

2- Guillermo Lora, “El Control Obrero”, Siglo XX, 1959.

3- “El Libro Blanco de la Independencia Económica de Bolivia”, La Paz, 1952.

se encontraban los siguientes izquierdistas o portavoces de la COB: Juan Lechín, Germán Butrón, Ñuflo Chávez. Tal disposición legal se limitó a incorporar a su texto lo que hasta entonces era una sentida aspiración del movimiento obrero, pero lo hizo de un modo abstracto, sin mostrar en ningún momento su verdadero contenido.

Un año más tarde, el 15 de diciembre de 1953, fue dictado el Decreto Supremo que reglamentó el funcionamiento del control obrero. De su texto se desprende que el gobierno movimientista, a sugerencia de Lechín y de sus amigos, dio al control obrero un contenido muy diferente al espíritu que lo animaba en la Tesis de Pulacayo.

Analicemos en qué consistía el decreto sobre control obrero con derecho a veto (el veto fue introducido recién por el decreto reglamentario), que al decir de Lechín constituía "una de las más profundas y serias conquistas revolucionarias de nuestra época, porque pone en manos de la clase trabajadora un instrumento que le permite asumir la dirección administrativa de las minas nacionalizadas"⁴.

Teóricamente el control obrero comprendía dos aspectos:

1) Supervigilancia e inspección, "por todos y cada uno de los trabajadores de las empresas incorporadas a la Corporación Minera de Bolivia", de las actividades en los centros mismos de trabajo, ya sean éstas administrativas, económicas y financieras, con excepción de las técnicas (artículos V y 21. El artículo diez establece el funcionamiento de este control. Los obreros estaban llamados a vigilar "el normal y eficiente desarrollo de las actividades del trabajo, evitando y denunciando" todo acto que perjudicase la propiedad y la producción de las minas y también "los actos abusivos de los jefes" contra los trabajadores. En el exterior de las secciones debían evitarse actos contrarios a los intereses de la empresa (aprovechamiento con fines personales de los materiales, vehículos, etc. y todo acto que "implique un privilegio injustificado para los jefes") e igualmente los actos que importasen sabotaje. El procedimiento consistía en denunciartoda anormalidad "ante los delegados" de sección, los dirigentes sindicales, "o bien en las asambleas generales celebradas por los trabajadores". Lo anterior apenas si es una enumeración de lo que siempre ha ocurrido en los sindicatos... Las denuncias han tenido algún efecto cuando los sindicatos, gracias a su fortaleza, han podido imponer rectificaciones en el nivel administrativo. El control era considerado como un auxiliar de los administradores y no como una verdadera dirección política o administrativa.

2) Control obrero en forma "de participación de los trabajadores en las funciones administrativas, tanto en la Central de la Corporación como en las minas nacionalizadas, para cuyo fin la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia estará representada en el Directorio Central y cada uno de los sindicatos en el Directorio Local respectivo" (artículo tercero). En los hecho, esta fue la única forma de control obrero que funcionó.

La Federación de Mineros estaba representada en el Directorio Central de la Comibol por "dos Directores designados por el Supremo Gobierno, a propuesta en terna de la

4- FSTMB, "Control Obrero", La Paz, 1954.

misma Federación" (artículo cuarto).

En las diferentes empresas las asambleas sindicales designaban al control obrero ante las empresas de Comibol, que sea boliviano y que tenga una hoja de servicios no menor de tres años continuos en la respectiva empresa y que por su labor específica esté ligado directamente a la producción de minerales" (artículo quinto).

El control obrero duraba un año en sus funciones y podía ser reelegido indefinidamente. Sin embargo, había la posibilidad de que fuese removido en cualquier momento por decisión de la asamblea sindical. (artículos octavo y noveno). Esta democracia, aparentemente ideal, no funcionó en la práctica porque los controles individuales, con la finalidad de defenderse situación de privilegio, montaron grandes aparatos burocratizados que ahogaban la voluntad de las bases.

Eran atribuciones del control obrero a nivel administrativo concurrir con voz y voto a las sesiones de los correspondientes directorios; informarse de "todos los aspectos relacionados con las actividades de las empresas; intervenir en los contratos de compra de mercaderías de consumo, contratos de transporte y otros que efectúe la empresa, a fin de comprobar que los precios y condiciones sean los más favorables que se pueda obtener", supervigilar el cumplimiento de las leyes y de los contratos individuales y colectivos, evitar perjuicio cualquiera a los trabajadores en la distribución de artículos de pulpería; intervenir en la contratación y despido de trabajadores, en los ascensos, modificaciones de jornales, movimiento y transferencias del personal; "conocer y vigilar el movimiento de materiales y explosivos a fin de evitar robos y derroches"; transmitir a la administración de la empresa las iniciativas de los trabajadores para el incremento de la producción y las críticas acerca de los acuerdos sobre las condiciones de explotación, régimen de trabajo, funcionamiento de pulperías y aplicación de las leyes sociales; inspeccionar los lugares de explotación para conocer las deficiencias y las reclamaciones de los obreros; vigilar los sistemas de seguridad e higiene industrial (artículo once).

El obrero en función de control estaba obligado, según el artículo doce del indicado decreto, a presentar mensualmente un informe escrito sobre sus actividades y el movimiento de la empresa tanto al sindicato como a la asamblea de trabajadores, "remitiendo copia de dicha información a la FSTMB y al Director o Administrador Local", Era también su deber proporcionar a los dirigentes sindicales y trabajadores de base, "las aclaraciones que éstos soliciten".

El control obrero debía dedicar todo su tiempo al cumplimiento de sus funciones, con exclusión de cualquier otra actividad. Por esta razón se lo consideraba trabajador en comisión, "conservando su trabajo, haber, antigüedad y derecho de ascenso" en la empresa en que trabajan (artículos trece y catorce).

En los artículos quince al diez y nueve inclusive se establecieron las normas del funcionamiento del veto obrero. Podía ser utilizado en los siguientes casos: cuando las compras, contratos y provisión de productos de consumo y de transporte "se consideren perjudiciales para los intereses económicos de la Nación por existir

condiciones o precios más favorables de los concertados"; en caso de violación de las leyes sociales o de los contratos de trabajo; cuando se otorgue al personal ascensos, aumentos individuales de salarios u otros beneficios, en condiciones no ajustadas a la ley y cuando la situación financiera de la empresa no lo permita; "cuando considera excesivo el aumento del personal de trabajadores, en especial de la planta burocrática".

Igual que el control obrero en su integridad, el veto no alcanzaba a los aspectos técnicos de la vida de la empresa. "Queda expresamente establecido que no podrán ser vetadas, en ningún caso, las medidas de carácter técnico, pero se podrá hacer todas las observaciones y recomendaciones de solución que considere adecuadas, en el seno del Directorio o Administración Local de la empresa" (artículo diez y siete).

El veto del control debía ser aprobado por los trabajadores en asamblea, hecho que determinaba que la medida vetada quedaba en suspenso y sometida al procedimiento que detallamos: debía ser elevado a conocimiento de la administración, para que se pronunciase; en caso de que se persistiese en la aplicación de la medida vetada, la administración y el control estaban obligados a elevar a consideración del Directorio Central de la Comibol y la Federación de Mineros los informes y antecedentes, "a efecto de que ambas entidades consideren conjuntamente la situación creada y se pronuncien sobre la procedencia del veto"; persistiendo el desacuerdo, los antecedentes se elevaban a conocimiento del Ministerio de Minas y Petróleo, "cuya decisión será definitiva y deberá ser acatada". Las mismas reglas se observaban tratándose de quejas, denuncias y reclamaciones contra los administradores de la empresa. El veto era de alcance relativo, puesto que las decisiones de la administración de la Comibol acababan por imponerse gracias al carácter definitivo de las resoluciones del Ministerio de Minas. En último término, el veto se reducía a ser una recomendación que se ponía en conocimiento de los administradores de las minas.

Según la FSTMB, el control obrero hacía "imposible la burocratización de los servicios organizados para explotar las minas que fueron revertidas". Su aplicación fue considerada "una consecuencia de la participación de los trabajadores en el poder político". Los hechos se encargaron de desmentir tales vanas esperanzas. El sentido de las mencionadas disposiciones legales se explica si se tiene en cuenta que se vivía la lucha de miel de co-gobierno.

La participación de algunos elementos sindicales aislados en la administración de las minas, sin derecho a conocer e intervenir en la dirección técnica, no era más que un remedo del control obrero que venían propugnando los trabajadores y no tenía nada que ver con el pensamiento ni la voluntad de éstos. La crítica en este sentido fue desarrollada por la izquierda y particularmente por los trotskistas, estos últimos dijeron que "la mezquindad de los 'teóricos' del MNR conduce a utilizar la caricatura de control para enriquecer a los aúlicos del oficialismo. En manos del partido pequeño-burgués el control obrero se ha convertido en un insignificante adorno 'obrero' de las viejas formas de administración".

Entre la gestión obrera y el control de tipo movimientista existía una gran diferencia.

La primera buscaba llevar a la cabeza de las empresas a la clase misma y el segundo no era más que un pretexto para sustituir a ésta por algunos elementos aislados, que utilizando el título de dirigentes sindicales realizaban maniobras políticas contrarias a los intereses obreros. Nos parece que de este hecho arrancaron las características de la forma de control que se implantó en las minas. Por otra parte, toda la doctrina laboral del MNR se redujo a consumir y justificar dicha sustitución en todos los aspectos. El oficialismo confió, en último término, en la burocracia sindical y no en las bases obreras.

La gestión obrera, al poner la empresa en manos de toda la clase, hace responsables a los trabajadores del destino de la producción; por esto mismo, el monopolio de los resortes estatales se convierte en una necesidad inaplazable. El control de modalidad movimientista tenía la finalidad de alejar a los obreros de la conducción de las empresas nacionalizadas y responsabilizarlos de los descalabros, alentados por la pequeña-burguesía en el poder. Era una especie de jefe de pulpería, de agente de compras y jefe de bienestar, pero no podía determinar la política de la empresa.

Discutióse el tema fundamental de ¿cómo puede la clase ejercitar la gestión obrera? Los partidos del oficialismo e inclusive muchos izquierdistas dijeron que se proponía que las masas, como un verdadero rebaño, asaltasen la dirección de las empresas y sustituyesen todo ordenamiento legal con el caos. El argumento buscaba convencer a los trabajadores acerca de su incompetencia para intervenir en la dirección de las empresas y mucho más del Estado. La razón principal esgrimida por el MNR contra la ampliación de la actividad del control obrero se refería a la presunta ignorancia obrera en materia técnica.

La gestión obrera se ejercitará por medio de los organismos de masas. Sólo así puede la clase expresar adecuadamente su voluntad y su capacidad creadora. La gestión obrera permitirá basar la administración de las empresas en la rica experiencia de la clase, adquirida en mucho tiempo y a través de la lucha diaria contra los patrones. Los obreros cuando actúan en forma individual demuestran poca o ninguna capacidad creadora, saltan a primer plano los aspectos negativos emergentes de su poca cultura y de la carencia de instinto de mando. Pero, los organismos de masas tienen la particularidad de permitir que la capacidad creadora de la clase encuentre en ellos un canal natural de expresión. Para las masas la crítica es un método de control de las instancias superiores de dirección, de autoeducación y de asimilación de toda la experiencia vivida por la clase. Estos objetivos sólo pueden alcanzarse mediante el trabajo colectivo dentro de los organismos de masas y no en la actividad puramente individual y aislada. Según los trotskistas "la gestión obrera sería inconcebible sin la debida utilización del arma de la crítica". El control obrero burocratizado rechazó a los opositores y críticos con la misma saña y violencia con que obraron la burocracia cobista y el mismo oficialismo.

3

Control Obrero Colectivo

La gestión obrera directa e integral de las empresas nacionalizadas fue presentada, cierto que en el plano teórico, como una medida que puede eliminar a las fuerzas sociales y políticas ajenas o contrarias al proletariado. Dicho en otras palabras: la clase obrera toma en sus manos el control total de la dirección de las empresas, incluyendo los aspectos técnicos. Para que la clase misma participe en la gestión es indispensable que ésta sea colectiva. Esto quiere decir que la suerte de la gestión sea decidida, en último término, por los trabajadores reunidos en asamblea, por los comités que funcionen en los lugares mismos de trabajo. Los cargos de dirección, individuales en el control movimientista, deberían ser ejercidos por cuerpos colegiados, fuertemente soldados al grueso de la clase. Dicho de otra manera, la dirección de las empresas tenía que ser fundamentalmente colectiva.

El control obrero fue arrancado al gobierno movimientista por el poderoso empuje de las bases obreras, empuje que puso en el más serio riesgo los intereses imperialistas. Cuando se habló de nacionalización de minas se recalcó que ésta debía realizarse bajo el control de la clase obrera. Su inclusión en el decreto de 31 de octubre de 1952 estuvo destinada a dar satisfacción a quienes no podían menos que sentirse defraudados por haberse concedido indemnización a los ex-grandes mineros. Se puede decir que el control obrero le fue impuesto al MNR desde el exterior. La complicidad de los burócratas dio lugar a que el gobierno desvirtuase totalmente la concepción revolucionaria del control obrero (al convertirlo en individual, burocratizado, políticamente controlado por el gobierno y extraño a la clase) y le imprimiese el sello emeenerrista, es decir, pequeño-burgués.

Hemos visto que el control obrero, originariamente concebido como antesala de la toma del poder, quedó reducido a un simple coadministrador con atribuciones limitadas y secundarias. Es explicable que en los primeros momentos los sindicalizados hubiesen recibido con alborozo la nueva del control obrero, pues no tenían la posibilidad de comprender en todo su alcance sus consecuencias futuras. Fue preciso vivir la larga y dramática experiencia post-revolucionaria para llegar al convencimiento de que el control obrero impuesto por el MNR era algo contrario a lo que los trabajadores habían propuesto. Los explotados no tienen más que la práctica diaria -que es experiencia en carne propia- para valorar la corrección de los planteamientos teóricos.

Según los izquierdistas, "la limitación más odiosa impuesta al control obrero se refiere a la intangibilidad de la orientación técnica de las empresas nacionalizadas. El mismo lechinismo no se cansa de argumentar en favor de dicho cercenamiento de las atribuciones del control. Si se trata de colocar en manos de la clase obrera la suerte de la minas, es claro que a nadie se le puede ocurrir abogar en sentido de que la dirección técnica no debe subordinarse a la orientación política de los dueños de las minas" (Lora). Se denunció con energía que el MNR buscaba añadir un adorno obrero a su propia administración de las empresas nacionalizadas y, por esto mismo, que se le antojaba que sería sumamente peligroso permitir que los obreros ignorantes se

inmiscuyesen en las actividades propias de los ingenieros.

No se trata, en verdad, de que los obreros sustituyan a los técnicos, sino de subordinar a éstos al control y orientación política del proletariado. Esto es elemental si se considera que los técnicos provienen o están vinculados a los sectores sociales que son extraños a los sindicatos. La inversión de capital financiero casi siempre ha ido acompañada de una invasión de técnicos extranjeros, políticamente afines a los intereses imperialistas. Si los trabajadores toman en sus manos el destino de las minas tienen que estar seguros que los técnicos no sabotearán su labor. Por otro lado, sólo el control de los trabajos técnicos puede permitir que los obreros vuelquen la experiencia adquirida en su trabajo diario. Se argumentó, además, que el problema de la mayor producción -problema capital de la revolución- exigía que la técnica se subordinase totalmente a la política de la clase trabajadora.

La cuestión de las relaciones entre la técnica y la clase obrera fue profundizada por la militancia porista, que osadamente planteada causó sorpresa entre los oficialistas y también en el ánimo de algunos izquierdistas. A mediados de 1960 Comibol preguntó a sus trabajadores qué opinión les merecía el plan técnico de reordenamiento de la minería que estaba poniendo en práctica. La maniobra buscaba arrancar la conformidad laboral frente a los planes patronales, pero también venía a destruir toda la argumentación oficialista sobre la incapacidad de los obreros para conocer y opinar acerca de cuestiones técnicas. En esa oportunidad, los sindicalizados y sus portavoces señalaron las medidas técnicas que, de manera impostergable, debían adoptarse para poder superar los bajos índices de producción. Al analizar el plan de Comibol se dijo que se limitaba a proponer "remiendos a las viejas máquinas, quiere ampliar ingenios sin modificar la técnica. ¿Para qué? Para trasladar más rápidamente el mineral de los cerros a los desmontes"⁵. Los ingenios Sink and Float, los más modernos en ese entonces, recuperaban parcialmente minerales de más del 0.80% de ley de estaño. Arrancando de esta realidad, a las minas se les asignaba una vida demasiado corta. Comibol calculó que Catavi no tenía más que seis años de futuro; sin embargo, han transcurrido cerca de dos decenios desde esa época y ese distrito sigue siendo considerado como el más importante de las minas nacionalizadas. "No podemos permitir -respondieron los marxistas- que el país se hunda con el agotamiento de las reservas de minerales de 0.80% de ley ... para salvar (a la minería) tenemos que dar la única respuesta que aconsejan la técnica y la ciencia: construir ingenios capaces de tratar minerales de 0.50 y 0.80% de ley y, entonces, Siglo XX-Catavi tendrá de 30 a 40 años más de vida. La respuesta es, pues, adaptar los ingenios para recuperar minerales de ley más baja". Oficialistas y técnicos capitalistas se han limitado a especular, en el futuro, alrededor de esta tesis.

Hasta 1960 las minas nacionalizadas habían sido dirigidas técnicamente al margen de toda ingerencia obrera y, según testimonio del mismo "Plan de Recuperación", concluyeron siendo empujadas al abismo y la desorganización. Apoyándose en esta confesión de parte, la vanguardia obrera explanó la tesis de que la solución del agudo problema de las minas exigía "el reconocimiento a la clase obrera de su derecho a intervenir en la dirección técnicas".

5- Guillermo Lora, "Respuesta al plan antiobrero", Siglo XX, diciembre de 1960.

Se reiteró que la cuestión no era otra que el sometimiento de la técnica a la política de la clase obrera. "No es suficiente que los buenos técnicos tengan sensibilidad social, es necesario que la técnica esté subordinada al interés de los trabajadores y no al interés del imperialismo ni al interés de la reacción. Que los buenos ingenieros no sean enemigos de los obreros y que, finalmente, los buenos ingenieros tengan también responsabilidad ante la clase obrera".

El primer gobierno movimientista se vio obligado a consignar el control obrero en el decreto de nacionalización de las minas. Mas, inmediatamente y cediendo a las presiones ejercitadas por el imperialismo, inició una sistemática campaña contra los llamados excesos del control. Esta campaña se la hizo a nombre de la mayor producción y del principio burgués de que los obreros no deben rebasar la acción puramente sindical ni obstaculizar la ejecución de los planes de las gerencias. Los lechinistas, pertenecientes al sector obrerista del partido que estaba en el poder, corearon las tesis del oficialismo.

El segundo gobierno movimientista, que llevó a extremos insospechados el entendimiento con el imperialismo, culpó al sindicalismo y a los controles obreros de la quiebra de la Comibol, habiendo tipificado a estos últimos como a vulgares aprovechadores. "La industria minera ha tenido que luchar con las condiciones más complicadas y adversas: ... una baja línea de comprensión de los dirigentes sindicales, que de una parte le niegan a la minería nacionalizada un tratamiento de empresa del pueblo y de otra transforman la institución revolucionaria de los controles obreros en un sistema de coadministración irresponsable y arbitraria disposición de bienes del pueblo" (Hernán Siles).

Siles debutó como Presidente de la República con su famoso Decreto de reorganización de la Comibol y en él se dice que el control obrero no tiene más misión que atender las relaciones industriales. "Relaciones industriales" que en la jerga norteamericana es sinónimo de relaciones entre el personal y la administración. En los Estados Unidos esta función la cumplen los sindicatos. Es claro que el gobierno se encaminaba firmemente hacia la destrucción del control obrero. Durante todo este período, la alta dirección movimientista acentuó su campaña por una mayor producción y la reducción de los costos, campaña que tuvo como objetivo inmediato, la eliminación de la ingerencia del control obrero en la dirección de las minas.

El gobierno y los lechinistas sostenían que la solución de los agudos problemas de la Comibol se lograría reorganizándola dentro del llamado "criterio de empresa privada". En el plano de la teoría, los movimientistas no se tomaron la molestia de precisar qué entendían por esa consigna. Los hechos reiteraron que la ganancia de la empresa privada capitalista se basa justamente en la explotación de los obreros y la eliminación de estos de toda ingerencia en la administración. El imperio de los principios de la empresa privada no podía ser realizada mientras quedase el menor vestigio del control obrero estatuido en 1952. Se había convertido en un anacronismo merced a la evolución política operada inclusive dentro del partido de gobierno y tuvo que desaparecer.

El criterio empresarial impuesto por la Revolución de Abril no pudo menos que comenzar subvirtiendo los principios que inspiran a las empresas privadas e hizo tímidos tanteos encaminados a establecer una dirección colectiva, basada en la voluntad de las masas y en la disciplina inspirada en la más alta conciencia política.

El silismo, que en su tiempo desarrolló toda una teoría sindical, deseaba que inmediatamente se convirtiese a los controles obreros en modestos consultores de las empresas. Esta consigna fue incluida en la Tesis que hizo aparecer en el congreso minero de Telamayú. "Funcionamiento democrático de los controles obreros, como fiscales en el manejo de las empresas públicas y no como co-administradores y funcionarios privilegiados de la clase trabajadora; posibilidad de que los sindicatos realicen juicio de responsabilidad a los controles obreros"⁶. No se debe olvidar que todo ese planteamiento partía de la convicción de que los sindicatos y los dirigentes obreros debían subordinarse a los programas y planes gubernamentales, sólo así se explica que se hubiese atrevido a formular ante la reunión minera que se incluyese en la plataforma de la FSTMB la separación de los "cargos de influencia sindical de todos aquellos que conspiran contra la estabilidad del Estado revolucionario y propician, amparan o estimulan el golpismo contrarrevolucionario".

El control individual resultó ideal para el MNR porque pudo fácilmente subordinarlo en el aspecto político (en el más alto nivel, era el Presidente de la República el que lo elegía) y controlar todos sus movimientos. Fue arrastrado por la ola de corrupción y de negociados que caracterizaron al régimen y muchas veces deliberadamente empujado a esa vorágine, porque así se lo podía neutralizar. La corrupción y la conducta escandalosa concluyeron hundiendo a los controles obreros, que se convirtieron en pretexto de la campaña antisindical del oficialismo y tuvieron que enfrentarse con el creciente descontento de las masas.

El control individual se burocratizó fácilmente al haberse emancipado de la vigilancia y presión de los cuadros de base de los sindicatos. Por la mala fe fueron imputados sus actos a toda la clase obrera, pese a que se inspiraban en intereses personales o en los del partido de gobierno.

La vigilancia militante del grueso de las masas sólo puede efectivizarse en el marco del control colectivo o de la gestión obrera. El control individual convierte en imposible esa vigilancia, desde el momento en que todo el mecanismo se concentra en manos de una sola persona y porque no está obligado a subordinarse a la voluntad de las asambleas sindicales o a rendir cuenta de sus actos ante ellas.

Como quiera que los controles obreros lograron organizar alrededor de sus personas aparatos económicamente poderosos, pudieron, en algunos casos, decidir las elecciones sindicales y subordinar a su voluntad a los dirigentes. El divorcio entre el control y las bases llegó a tales extremos que en determinado momento siguieron direcciones totalmente opuestas.

En la Tesis de Pulacayo se encuentran los requisitos mínimos que deben cumplirse

6- "Tesis de Telamayú. Carta del sindicalismo revolucionario", La Paz, 1960.

para evitar la burocratización de los dirigentes obreros en general y entre ellos de los controles. Esos requisitos quedaron enumerados de la siguiente manera: alternabilidad en los puestos de dirección y revocabilidad en el momento mismo en que así lo decidiesen las bases; percepción por los dirigentes, cualesquiera que fuesen su influencia o su responsabilidad, solamente del salario medio que corresponde a los obreros calificados; convertir las decisiones de las asambleas sindicales y de los comités de base en mandatos imperativos; control activo de las bases sobre la orientación y conducta diaria de los dirigentes.

Partiendo de ese antecedente los poristas puntualizaron en su propaganda que el control obrero ejercitado por equipos que funcionasen colectivamente debía asentarse en el principio de la alternabilidad. "La práctica diaria debe permitir la selección de los más capaces y de los más honestos. A fin de que la dirección de las empresas sea la más eficaz posible debe tenderse a acelerar el ritmo de rotación de los cargos de dirección". Como garantía de eficacia y honestidad se demandó la militancia y educación de los controles en el seno del partido político de la clase obrera. "Por esta razón elemental todo cargo directivo debe ser considerado como un puesto de sacrificio al que se ve obligado un revolucionario por ser tal. Debe ser considerado puesto de sacrificio por exigir mayor trabajo y por no suponer ninguna ventaja personal, ninguna granjería. Todo lo que hemos observado en la práctica, todo lo que hemos aprendido en la vida diaria nos enseña que solamente pueden llegar a esa concepción los elementos educados en el partido revolucionario".

Excepcionalmente y en el plano empresarial, la dualidad de poderes se desplazó de la COB y hasta de los sindicatos al control obrero. En estos casos, el control se convirtió naturalmente en el canal de expresión del descontento y de los objetivos de las masas. En los agudos conflictos sociales, el control se vio transformado en caudillo y autoridad suprema. Fueron estas proyecciones revolucionarias las que mayormente asustaron al imperialismo, a la reacción y al gobierno movimientista.

4

Destrucción del control obrero

El control obrero sufrió pues un doble ataque. El gobierno, expresando los intereses del imperialismo y de la reacción, lo combatía buscando su desaparición, mientras que la oposición de izquierda, que imprimió un carácter político al descontento de las masas, se empeñaba en defender lo que se consideraba una valiosa conquista de la revolución a través de su superación, del reemplazo del control individual por otro colectivo y desburocratizado.

Guillermo Bedregal, a la sazón Presidente de la Comibol y prominente miembro de la fracción silista, batalló incansablemente, primero, para convertir al control obrero en un simple funcionario dependiente de la dirección de las empresas y, finalmente, para destruirlo. Tales argumentos eran parte inseparable de la teoría sindical silista.

En una larga carta dirigida a la Federación de Mineros ⁷, con fecha primero de diciembre, el presidente de la empresa estatal propuso establecer la "responsabilidad pública de los controles obreros, ya que son administradores y no simples agitadores de pliegos de peticiones, a fin de conservar su prestigio sindical". Esta responsabilidad fue formulada como requisito para lograr "el aumento de la productividad del trabajador", lo que equivalía a pedir que el control funcionase como auxiliar de la administración y no como un portavoz de los intereses obreros. La coadministración obligaba, según Bedregal, a modificar sustancialmente la estrategia sindical: las organizaciones laborales debían cooperar con las gerencias lejos de utilizar la acción directa para el logro de sus objetivos. "Si la FSTMB es coadministradora de Comibol y participe en la responsabilidad administrativa de su manejo, ¿cómo puede mantener la misma posición que cuando era un frente sindical aherrojado a los socavones e inexorablemente opuesto a los grupos patronales que controlaban las antiguas empresas mineras?". Como quiera que legalmente el control representaba a la FSTMB, la dirección de Comibol consideró oportuno recordar que esta entidad era responsable de los errores y de los aciertos de las minas nacionalizadas. "¿Los controles obreros son o no parte de las directivas de Comibol y si son parte fundamental, por qué la FSTMB no es solidariamente responsable de los errores o fallas de la dirección de Comibol? Los controles obreros no desempeñan sus funciones a puro título personal, sino como representantes de la FSTMB. Sus yerros, sus pecados, sus delitos, sus éxitos, lo son también de la FSTMB".

Cuando fue cancelado el control obrero, la oposición interpeló al Ejecutivo por esta y otras medidas consideradas como antinacionales y antiobreras (1963). Los ministros Bedregal y Franco Guachalla (Trabajo) no dijeron ni una sola palabra sobre el atropello a una de las conquistas básicas de la revolución ⁸.

Víctor Paz en su, primera presidencia dictó las disposiciones legales sobre el control obrero y, por extraña ironía, no tuvo más remedio que ratificar la cancelación de su propia obra. En su Mensaje al Congreso de 1964 no da ninguna explicación de su conducta y se limita a consignar una brevísima referencia que se distingue por su inocuidad y confusión: "Se estableció que el control obrero no debe ser considerado como un dirigente sindical más, sino como una conquista de los trabajadores en la co-administración de la empresa de que forman parte" ⁹. Paz había concluido su viraje hacia posiciones pro-imperialistas y antiobreras y esto le obligaba a repudiar al control obrero.

La supresión del control obrero aumentó el malestar, ya entonces agudo, que se había apoderado de las masas mineras, que estaban seguras de que el gobierno movimientista arremetía frontalmente contra ellas. Los controles obreros, al igual que los sindicatos, tuvieron que colocarse a la cabeza de los trabajadores que ya hostigaban sistemáticamente al régimen.

A las reclamaciones de los sindicatos, a los pies de huelga y a las amenazas de

7- Guillermo Bedregal, "La nacionalización minera y la responsabilidad del sindicalismo", La Paz, 1959.

8- Guillermo Bedregal, "Comibol: una verdad sin escándalo" , La Paz, 1963.

9- V. Paz E., "Mensaje al H. Congreso Nacional", La Paz, 1964.

un paro general, la Comibol y el Ejecutivo respondieron con una medida dilatoria: formación de una comisión que estudiase la mejor forma de reponer el control obrero. Una vez más la alta dirección de la FSTMB cayó en la trampa, pese a las advertencias que se hacían desde las bases para que concurriese a las discusiones propiciadas por el mismo señor Bedregal. El oficialismo buscaba simplemente prolongar el asunto y utilizar la comisión como tribuna para realizar una sistemática campaña en contra del control obrero, presentándolo como una institución que conspiraba contra los altos intereses nacionales. Las discusiones tuvieron, sin embargo, un algo interés teórico, desde el momento en que los gobernantes expusieron francamente la opinión que les merecía esa conquista.

Por Decreto Supremo de mediados del año 1964 se creó la comisión encargada de señalar las normas para la reposición del control obrero en las minas nacionalizadas. De entrada se dijo que los obreros no podrían usar el derecho de veto. La comisión quedó integrada por tres ministros: Guillermo Bedregal (Comibol), Aníbal Aguilar Peñarrieta (Trabajo) y René Zabaleta (Minas) y dos delegados de la Federación de Mineros, entre ellos Lechín. La situación de este último era por demás incómoda, aunque parece que él no se dio cuenta de lo que sucedía. Había formado su propio partido, el PRIN, y llegado a desconocer la legalidad del gobierno Paz Estenssoro, seguramente por eso, cuando asistió puntualmente a las reuniones del Ministerio de Trabajo, se creyó obligado a declarar que su presencia no significaba "el reconocimiento de la legalidad del gobierno del doctor Paz Estenssoro" ¹⁰.

Demás está decir que se trataba de una batalla perdida de antemano para los trabajadores. La mayoría oficialista impuso todo lo que deseaba y los delegados de la FSTMB se limitaron a legalizar con su presencia semejante despropósito. Es indiscutible que el control obrero incurrió en muchos excesos e hizo mal uso de su poder, lo que Comibol aprovechó para acumular una montaña de demoleedores antecedentes contra su reposición en su forma original. La Comisión encontró el terreno abonado para legalizar la voluntad de Víctor Paz. Lechín tenía ante sí dos caminos: a) oponer a los ejemplos ofrecidos por Comibol otros que demostrasen las bondades del control obrero con derecho a veto y b) llegar a la raíz de esos errores formulando como remedio el control obrero ejercitado por toda la clase, vale decir, la gestión obrera, como la calificaban los trotskistas. El líder sindical no hizo nada de esto y se limitó a reclamar la reposición de lo establecido por las viejas disposiciones legales.

La Federación de Mineros había ordenado a los numerosos controles replegarse a sus bases, como emergencia de un conflicto huelguístico surgido en Catavi. El gobierno aprovechó esta coyuntura para cancelarlo virtualmente y luego se esforzó en amputarlo de manera que no significase nada, como se demostró en las discusiones dentro de la mencionada comisión, cuyo Presidente era el Ministro Aguilar Peñarrieta. Mientras tanto, los sindicatos de base tenían acordado reponer el control con todas sus atribuciones utilizando el método de la acción directa. El conflicto se encontraba a este nivel cuando sobrevino el golpe contrarrevolucionario del 4 de noviembre de 1964.

10- "Vistazo", No 7, La Paz, 29 de agosto de 1964.

Aguilar Peñarrieta expresó en la primera reunión que era intención de los personeros del Poder Ejecutivo sentar las bases de la teoría boliviana del control obrero y adelantó que si éste significaba co-administración no podía tolerarse a su lado el derecho de los obreros de ir a la huelga, extremo que ya había sostenido en anterior oportunidad ¹¹. Zavaleta planteó el contrasentido de que esta discusión debía realizarse por encima de todo objetivo político. En la segunda reunión se escuchó la larga exposición de Guillermo Bedregal que se había convertido en el teórico de la destrucción del control obrero. Incurrió en gruesos errores que, desgraciadamente, no fueron oportunamente rectificadas y menos hechos públicos. Identificó las tesis contenidas en las encíclicas del Papa León XIII con la doctrina marxista. Refiriéndose al congreso de creación de la Primera Internacional (Londres, 1864) dijo que llegó "a la conclusión de que la intervención obrera en un conglomerado industrial era una parte esencial de la producción, planteándose la doctrina de la cooperación estrecha entre las fuerzas que se organizan en los cuadros obreros y las fuerzas empresariales. Se adopta como norma la necesidad de que participen en una tarea comunitaria los hombres que tienen la responsabilidad de la conducción y el resguardo de sus inversiones y aquellos que, con su fuerza de trabajo hacen posible que esas inversiones puedan materializarse en la creación de la riqueza" ¹². Partiendo de esta necesaria colaboración clasista era fácil concluir que el control obrero -como entidad coadministradora- tenía la misión de cooperar para el mejor manejo de la empresa y no la de generar conflictos. Es comprensible que el Ejecutivo rechazase de plano al control obrero con derecho a veto, pues lo consideraba no sólo un co-administrador, sino un verdadero dictador que podía imponer sus caprichos.

Posteriormente, en 1979-1980, el MNR y particularmente Guillermo Bedregal, volvieron a referirse al control obrero, esta vez para presentarse como sus defensores incondicionales. A los movimientistas no se les puede exigir consecuencia en sus ideas y en su conducta.

A todo lo largo de la historia del pensamiento marxista ortodoxo no es posible encontrar la tesis de la co-administración de las empresas por burgueses y proletarios, ya que esto importa necesariamente la colaboración clasista, esto según la versión dada por los puristas en la serie de artículos que publicaron en la misma revista "Vistazo", los datos que siguen han sido tomados de esas publicaciones ¹³.

Cuando la Alocución Inaugural de la Primera Internacional, redactada por Marx, habla del movimiento cooperativista no lo hace para dar a entender que debe buscarse la coadministración, sino, contrariamente, para dejar sentado que "demuestran, con hechos y no con argumentos, la posibilidad de una gran industria organizada y dirigida sin intervención de la burguesía" ¹⁴. Sin embargo, los discípulos de Marx no son cerradamente cooperativistas, pues remarcan que las cooperativas no pueden

11- Comibol, "Reposición del Control Obrero", en "Vistazo", La Paz, 29 de agosto de 1964.

12- Comibol, "Lo que era y lo que debe ser el control obrero", en "Vistazo", La Paz, 15 de septiembre de 1964.

13- "Qué deben entenderse por control obrero", en "Vistazo", La Paz, 14 de noviembre de 1964.

14- C. Marx y F. Engels, "Obras Escogidas", Moscú, 1956.

jamás, bajo las condiciones de la sociedad actual, impedir por sí solas el desarrollo del capitalismo y menos emancipar a la clase obrera. Los fundadores del socialismo científico subrayaron con energía que la liberación del proletariado sólo puede realizarse a través de la conquista del poder político. "La emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de la clase obrera misma... Que la supeditación económica del obrero a los monopolizadores de los medios de trabajo, es decir, de las fuentes de vida, es lo que sirve de base a la esclavitud en todas sus formas, a la miseria social... Que, por tanto, la emancipación económica de la clase obrera es la gran meta a que debe subordinarse, como medio, todo movimiento político" ("Estatutos" de la AIT). No es necesario recalcar que Marx preconizó la lucha de clases y no la colaboración clasista en la administración de las empresas y ni siquiera en las cooperativas. La teoría de la co-administración de las clases o de la realización de la "democracia industrial" dentro del capitalismo aparece en el período de degeneración de la Segunda Internacional e importó una profunda revisión del marxismo y el abandono de sus tesis básicas. La idea central de la cooperación entre explotados y explotadores dentro de una empresa es totalmente extraña a la teoría del valor marxista y se basa, más bien, en la llamada teoría de los tres factores de la producción, que fuera enunciada en 1803 por Juan Bautista Say, padre de la economía vulgar. "Los valores de los productos tienen su origen en la cooperación del trabajo, el capital y las fuerzas naturales; sólo estos tres factores engendran valor, nueva riqueza". Marx consideró que la plusvalía, independientemente de sus formas específicas, tenía un único origen: el trabajo no pagado, aunque al realizarse adquiriera determinada modalidad. La teoría de los tres factores de la producción tiene una particular significación de clase: elimina el antagonismo entre obrero y capitalista y sostiene que entre ellos puede reinar una total armonía y reciprocidad de intereses: "el capitalista, el obrero, el terrateniente vendrán a ser como los tres copartícipes de un negocio común, que no podrán existir el uno sin el otro o los otros dos" ¹⁵. Esta teoría reaccionaria y procapitalista se apoderó de la socialdemocracia (hecho enérgicamente denunciado no solamente por los bolcheviques, sino por la verdadera izquierda alemana dirigida por Rosa Luxemburgo) a través de Oppenheimer, fundador del "socialismo liberal" y que explanó la doctrina de la "democracia económica" del socialdemócrata de "izquierda" Alfredo Braunthal y de Nölthe.

Si bajo el capitalismo, conforme sostienen los economistas burgueses, la lucha entre el proletariado y la burguesía no es una lucha entre explotadores y explotados, sino simplemente una pugna entre socios que gira en torno a la distribución del producto social, existe un objetivo común dentro de los fines y medios de la empresa, que aconseja establecer una coadministración obrero-capitalista. Esto fue expresado por Braunthal en su "Economía Política" del modo siguiente: "Por otra parte, hay que reconocer que la productividad del trabajo pone un límite a la lucha por la distribución. No se puede, naturalmente, distribuir más de lo producido, y cuanto más se produzca, tanto más podrá distribuirse. Por eso el obrero está, indudablemente, interesado en intensificar todo lo posible el rendimiento". Los gobiernos movimientistas, los ejecutivos de la Comibol, los militares desde el poder e inclusive la burocracia sindical (Ej.: la Tesis Económica cobista de 1979), repitieron este argumento con machacona insistencia.

15- Duncker y otros, "Economía Política, Madrid, 1931.

De una manera más concreta: según los socialdemócratas, el obrero y el capitalista tienen los mismos intereses, como si fuesen socios de un mismo negocio. La aplicación de esta teoría ha sido nefasta. Los socialdemócratas se convirtieron en campeones de la nacionalización del proceso del trabajo, es decir, del refinamiento de la explotación. Ellos alentaron la formación de los llamados "Comités paritarios" y de los "Consejos de Industria", encaminados a armonizar los intereses económicos supuestamente comunes de patronos y obreros. La Iglesia coincide en muchos puntos con los socialdemócratas; para aquella los proletarios no son explotados como consecuencia de la misma naturaleza de la sociedad, sino seres injustamente tratados por patronos que desoyen sus sabias enseñanzas. Piensa que si se logra imponer un salario justo quedará superada la pugna obrero-capitalista.

Tampoco es exacto decir -como lo hizo Bedregal en su exposición- que las conquistas básicas del movimiento obrero mundial se han debido a la participación laboral en la administración de las empresas, no importando la forma que hubiese adquirido en la práctica. Esas conquistas han sido logradas por las masas y por los sindicatos que han actuado como organismos de presión; han sido arrancadas a la clase dominante con las armas en las manos. Citemos un caso: la masacre de Chicago y las consecuencias que ha motivado fueron las que permitieron generalizar la consigna (más tarde convertida en ley) de la jornada de ocho horas diarias de trabajo. Tal masacre se consumó nada menos que en un país que se precia de haber permitido que los trabajadores se convirtiesen paulatinamente en accionistas minoritarios de las grandes empresas y que pregona por doquier su democratismo.

En resumen: el marxismo rechaza la coadministración obrero-patronal de las empresas capitalistas por constituir una trampa para obligar a los obreros a trabajar a un ritmo más acelerado (a aumentar su grado de explotación).

En Bolivia se confirma lo dicho anteriormente de manera elocuente. El control obrero como sinónimo de coadministración fue tolerado durante el período del llamado co-gobierno MNR-COB, pero inmediatamente que la orientación política de los trabajadores y del gobierno siguió direcciones opuestas fue preciso destruir o limitar la participación laboral en la administración de las empresas nacionalizadas.

5

Sentido revolucionario del control obrero

Los teóricos del marxismo han hablado del control obrero e inclusive lo han establecido, pero en ningún caso como co-administración de dos clases sociales antagónicas, sino como una palanca utilizada por el proletariado para tomar el poder y para desenmascarar la verdadera esencia de la administración capitalista de las empresas. Dicho de otra manera, para el marxismo el problema del control obrero y el del poder son dos aspectos inseparables y que se condicionan mutuamente.

Lenin en septiembre de 1917, en su folleto "La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla", propugnó la aplicación del control obrero, la vigilancia, contabilidad y reglamentación por el Estado de las empresas y bancos privados. Sostiene que por este camino se puede evitar la catástrofe ocasionada por la miseria y el sabotaje de los capitalistas. Se trataba de un desafío al gobierno de coalición para que pusiese atajo a esa lamentable situación, con la finalidad de desenmascararlo, puesto que se encontraba seriamente comprometido con la burguesía. Esta táctica llevó al bolchevismo a la insurrección.

Cuando el proletariado conquistó el poder político, el control obrero que en muchos casos se tradujo en la gestión pura y simple de las empresas paralizadas, sirvió para conducir la economía hacia el socialismo. Este pensamiento está condensado en el proyecto que sobre el control obrero escribió Lenin a fines de noviembre de 1917. Estando el proletariado en el poder el control no se estableció sobre ciertas empresas únicamente, sino sobre todas ellas, sobre el comercio y sobre toda la economía. "Ejercerán el control obrero todos los obreros y empleados de la empresa, ya directamente, si la empresa es tan pequeña que lo hace posible, ya por medio de sus representantes, cuya elección tendrá lugar inmediatamente en asamblea general. Todos los libros de contaduría y documentos, sin excepción, así como todos los almacenes y depósitos de materiales, herramientas y productos, sin excepción alguna, deben estar abiertos a los representantes elegidos por los obreros y empleados. Las decisiones de los representantes elegidos por los obreros y empleados son obligatorias para los propietarios de las empresas y no pueden ser anuladas más que por los sindicatos". Como se ve, el control obrero tenía la misión e someter a los capitalistas a la voluntad de los trabajadores y no co-administrar con ellos. Los Comités de empresa funcionaron, en realidad, como órganos de poder controlados por el proletariado.

Bedregal dio una interpretación capciosa al retiro del control obrero durante la NEP. El estancamiento de la producción en Rusia se debió a un desajuste creado por la prematura ejecución de ciertas medidas socialistas y la terca resistencia opuesta por los productores individuales. Esta realidad obligó a recurrir a la NEP, que contempló una serie de concesiones al sector privado de la economía a fin de permitir un aumento de la producción, que al hacerse realidad, exigió su coordinación y planeamiento. Es esta la razón por la que la participación obrera en la producción fue desplazada de las empresas particulares a los organismos estatales encargados de la producción. Lenin señaló: "Sin hacerse cargo directo de ninguna clase de funciones de control sobre la producción en las empresas particulares y arrendadas, los sindicatos toman parte en la regulación de la producción mediante su participación en los organismos estatales correspondientes".

En una sociedad de corte capitalista no puede darse una real coadministración obrero patronal y tampoco un efectivo control obrero. Este último sirve únicamente como consigna transitoria, que puede permitir a las masas colocarse ante la necesidad de luchar por el control del Estado. Trotsky sostuvo que este tipo de control daría lugar a que la sociedad se defendiese del sabotaje capitalista, que trae, inevitablemente, la desocupación y la miseria. El control obrero debe permitir que el pueblo conozca

las ganancias y los manipuleos que realizan los grandes capitalistas, llegando a abolir el secreto comercial. "En esta forma el control obrero pasará a ser la escuela de la economía planificada".

Cuando el stalinismo planteó en España (1936), como consecuencia de su entendimiento con la burguesía "progresista", la efectividad del control obrero dentro del capitalismo y como una forma de colaboración clasista, es decir, de coadministración, Trotsky la denunció como una postura contra revolucionaria.

Fácil es comprobar que para los marxistas el control obrero, dentro del capitalismo, debe significar una verdadera fiscalización en manos del proletariado, fiscalización, que debe permitirle movilizarse masivamente contra el régimen imperante.

Guillermo Bedregal se refirió con preferencia a los casos de control, dentro de la modalidad reformista, ocurridos en los países altamente desarrollados y que, indiscutiblemente eran formas de una pretendida coadministración de la burguesía y de las burocracias sindicales con miras a lograr mayores índices de producción. Al entonces Presidente de la Comibol se le antojó que esta experiencia era el modelo acabado del control obrero. "Al Estado le interesa fundamentalmente la paz social duradera, permanente y, naturalmente, en sus actividades industriales una mayor productividad que repercuta en el mejoramiento de la renta nacional que deviene en un bienestar general". Ya que le interesaba únicamente la mayor producción de las minas nacionalizadas incurrió en el despropósito de identificar al stajanovismo con las experiencias europeas del reformismo, poniendo a un lado toda consideración clasista.

Al elogiar al stajanovismo -y esto porque no se atrevió a alabar públicamente al taylorismo-, olvidó la concepción de Lenin acerca de la emulación socialista, llamada a sentar las nuevas bases administrativas de las futuras empresas. En el artículo "Cómo debe organizarse la emulación", escrito en diciembre de 1917, se lee: "Sólo ahora (cuando el proletariado ha llegado al poder) las masas adquieren la posibilidad de manifestarse, amplia y realmente de un modo general, el espíritu emprendedor, la emulación y la iniciativa audaz... es ahora, y sólo ahora, cuando el hombre del trabajo puede manifestarse en todo su valor, enderezar un poco el espinazo, erguirse, sentirse hombre. Por primera vez, después de siglos trabajando para los demás, bajo el yugo, para los explotadores, se tiene la posibilidad de trabajar para sí propio y de trabajar beneficiándose de todas las conquistas de la técnica y de la cultura más moderna".

Lenin añade que los organizadores de talento, que abundan en el seno de la clase obrera y de los campesinos, comienzan entonces a tener conciencia de su verdadero valer, a despertar y a "ambicionar el gran trabajo vivo y creador, a emprender por sí mismos la construcción de la sociedad socialista".

De lo anterior deduce que la tarea más importante consistía en desarrollar en todo lo posible la libre iniciativa de los obreros, que debía traducirse en obra creadora de organización.

No se trataba ciertamente de una actividad puramente individual, sino más bien de la acción creadora de las masas. "La contabilidad y el control necesarios a la transición al socialismo, sólo pueden ser obra de las masas. La colaboración voluntaria y concienzuda de las masas obreras y campesinas, colaboración entusiasta y revolucionaria en la contabilidad y en el control sobre los ricos, los vividores, los parásitos, los maleantes, es la única que puede vencer esas supervivencias de la maldita sociedad capitalista..."

La labor creadora de la clase obrera sólo podía darse venciendo todo esquema elaborado de antemano y a través de la emulación. "Hay que organizar la emulación entre los organizadores prácticos obreros y campesinos. Hay que combatir toda tendencia a crear formas estereotipadas y a establecer la uniformidad desde arriba, a lo que son tan aficionados los intelectuales".

El caudillo bolchevique habló de iniciativa libre de la clase, de la entusiasta emulación socialista y no de la imposición arbitraria, por parte de la burocracia gobernante, de ciertas cuotas de producción, con la finalidad de encadenar en la superexplotación a los trabajadores. El surgimiento de la iniciativa creadora y de la disciplina voluntaria se basan en algo que no puede darse en el capitalismo, en la certidumbre que tienen los obreros de que trabajan para sí mismos. La emulación voluntaria se explica porque las masas se identifican con el poder político.

Bedregal incurrió en una inexactitud histórica cuando sostuvo que Lenin suprimió los comités de fábrica, que en su momento cumplieron una gran tarea al poner en pie la producción sabotada por los capitalistas, al comprobar que ocasionaron el desastre económico. Se utilizó el equívoco para dar a entender que la intervención de las masas en la dirección económica es desastrosa.

El Presidente de la Comibol expresó que la forma de elección del control obrero, establecida por el decreto que reglamentaba su funcionamiento, viciaba su verdadera finalidad de contribuir al aumento de la producción. Se buscó el efecto de esta disposición legal en el hecho de que hacía depender la elección de los controles obreros de la voluntad de las bases. "Un candidato para ser elegido tiene necesariamente que ofrecer algo a sus electores, mucho más si estos electores están conformados, anímica e intelectualmente, para confundir la tarea del control obrero con la tarea del secretario de un sindicato". Se le antojaba que esta situación se veía agravada en extremo al permitirse la reelección del control obrero en forma indefinida, "abriendo de esta manera el camino a la fácil demagogia, no por la voluntad personal de éste, sino por el hecho de dotarlo de un instrumento que está completamente alejado de uno de los propósitos que informa el propio deseo de establecer control obrero, pues no podemos suponer racionalmente que en un ambiente caldeado por la lucha sindical -que generalmente deviene en las minas en lucha y antagonismo políticos- pueda existir la tranquilidad de espíritu necesaria para que prevalezca la cordura y el sano juicio". Para los personeros del MNR el control obrero carecía de capacidad para orientarse debidamente frente a los problemas.

El panorama se veía ensombrecido -siempre según Bedregal- porque los controles

obreros podían, al menos según lo establecido por la disposición legal y en el plano de la teoría, ser removidos en cualquier momento por los trabajadores reunidos en asamblea, “vemos que este delegado se lo hemos visto en la práctica) anulado en absoluto en sus tareas de coadministración y está imposibilitado de denunciar, en su caso, algunos delitos, sistemas de mala administración, o todo aquello que no cumpla el objetivo fundamental que es la producción, el incumplimiento del contrato de trabajo por los sindicalizados, y otros tipos de irregularidades”.

Pese a que Bedregal decía no objetar la calidad personal de los controles, se percibe que sus palabras dejan como sedimento un indisimulado desprecio por los obreros incultos que se atreven a sentarse junto a los especialistas en el manejo de las empresas. Lo que objeta abiertamente es el hecho de que el sometimiento de los controles a la voluntad de las asambleas sindicales no les permitía cumplir adecuadamente las funciones de co-administrador, ni tampoco de control, porque está prácticamente funcionando como un super dirigente sindical”. Para el Ejecutivo de Comibol el control obrero se habría convertido en una institución perfecta con sólo evitar, mediante la ley, que los sindicatos y los trabajadores interviniesen en su funcionamiento o ejercitasen sobre él alguna influencia. Las atribuciones del control no le parecieron del todo malas, lo que rechazó fue el método que se seguía para su materialización: “la fuerza que le otorgan esos dos incisos se anula completamente con el inciso c), que dice: estas facultades se ejercen haciendo las denuncias del caso ante los delegados seccionales y el sindicato, o ante los dirigentes sindicales, o bien en las asambleas generales celebradas con los trabajadores”.

En un país atrasado como Bolivia, la importancia política y revolucionaria del poco numeroso proletariado está en relación directa a la caducidad e insignificancia de la burguesía nacional. El gobierno burgués (o pequeño-burgués) está condenado, por su incapacidad o debilidad congénitas, a realizar un continuo movimiento oscilatorio entre el imperialismo y el proletariado. Si el régimen burgués criollo precisa alcanzar cierta independencia de maniobra frente a los grandes consorcios foráneos o se ve obligado a materializar algunas reformas antiimperialistas, por muy limitadas que éstas sean, no tiene más remedio que buscar el apoyo del proletariado a cambio de algunas concesiones (en la efectividad de este apoyo radica su fortaleza transitoria frente al imperialismo). Partiendo de estos antecedentes, los trotskystas llegaron a la conclusión de que un partido pequeño-burgués para poder “realizar un programa de nacionalización (o estatización) de ciertas ramas de la economía y que se encuentran controladas por el imperialismo (solamente un programa de nacionalizaciones puede permitir, en cierto momento, el desarrollo relativo de un país atrasado), no tiene más remedio que apoyarse en la clase trabajadora, contra su deseo se ve obligado a movilizar masivamente a todo el país, por esto permite que los obreros participen en la administración de las empresas expropiadas. La concesión hecha por el gobierno imperante abre al proletariado la posibilidad, de tomar posiciones dentro del aparato económico para acaudillar al pueblo hacia su liberación total ... Cuando el régimen se apoya en los trabajadores, cuando vive su período de radicalización, ve con simpatía la participación obrera en la administración de las empresas nacionalizadas (ese sentido le dio el MNR al control obrero en su primera época) y aparentemente hay total coincidencia de intereses y ninguna contradicción entre trabajadores y

empresarios. Inmediatamente que el gobierno pacta con el imperialismo se vuelca contra su aliado de ayer y bombardea todas sus conquistas, así comienza la etapa en la que se desacredita a la administración obrera y en la que se pretende obligar a los sindicatos a reducir su actividad al trabajo silencioso”.

Comibol consideró que el derecho a veto concedido a los controles obreros por disposiciones legales constituía, además de una insensatez, una usurpación de atribuciones propias únicamente del Presidente de la República, tratándose de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo. “Es un arma unilateral y devastadora desde el punto de vista del mantenimiento de todo principio de organización y autoridad”. Cuando Bedregal habla de una rectificación a fondo de la modalidad imperante del control, parte del supuesto del total desconocimiento del derecho a veto.

El procedimiento establecido para la tramitación del veto, que comenzaba a dejar en suspenso la medida objetada por el control obrero, fue calificado de engorroso y dilatorio. “El veto en la práctica -añade Bedregal- se convierte en un rechazo definitivo de la medida por parte del control obrero, desvirtuando de este modo su propia naturaleza que, en el fondo, significa una suspensión temporal de la medida hasta poder establecer su procedencia o improcedencia”. El Presidente de la minería nacionalizada dijo que en diez años sólo un caso (despido de cuatro obreros en la Empresa Minera San José) fue tramitado conforme a dicho procedimiento. “Ese conflicto persiste aún pese a que se ha dictado una Resolución del Ministerio de Minas”. En otras palabras, el veto fue denunciado como inoperante tratándose de una armonización de objetivos entre el control obrero y las empresas y su papel fue señalado como estrictamente obstruccionista.

Si bien fue evidente que los administradores regionales descaraban su responsabilidad sobre la acción negativa de los controles y los sindicatos, no es menos cierto que la alta jerarquía de Comibol siguió camino tan trillado para explicar los fracasos constatados en la conducción de las minas.

6

Desvirtuación y defensa del control obrero

En las discusiones Comibol expresó que una de sus preocupaciones era la de mejorar las relaciones humanas, siempre con referencia al aumento de la producción. La transformación del control obrero debía cumplir tal finalidad, esto al dejar de ser el canal de la radicalización de las masas, del enfrentamiento de los trabajadores con las empresas, y convertirse en un organismo de armonización de los intereses contrapuestos de las clases en pugna.

José M. Centellas ¹⁶ fue uno de los pocos movimientistas que abogó por el restablecimiento del control obrero dentro de la concepción de la auto-gestión obrera

16- José M. Centellas, “Comibol: El calvario de la revolución en abril”, La Paz, junio de 1964.

de tipo yugoeslavo. También para él todo el mal residía en el derecho a veto, si no como principio al menos como práctica. "Este desordenado panorama socio-económico tuvo un corolario inequívoco: control obrero con derecho a veto... El veto se convirtió en el eje del trastorno funcional de Comibol... La lectura del Decreto-Ley que produjo su alumbramiento, proporciona tal agudeza de bolivianidad y sentido de responsabilidad que ennoblece más su clarividente objetivo: un presentimiento de auto-gestión obrera. El jaleo es producido por la ejecución de la medida. La medianía determinó una interpretación y práctica falsas de su contenido y mandato. El dirigente se dejaba llevar por su celo hasta el atolondramiento y por su solidaridad de clase a la prodigalidad y el despilfarro, mientras la dirección política del proceso era inocua, vaga, confusa".

Cuando los regímenes militares arremetieron frontalmente contra el sindicalismo no se olvidaron de incluir en esta campaña al control obrero, en ese entonces ya en receso. Inmediatamente después del golpe de Estado del 4 de noviembre todavía se habló en los medios obreros de la reposición del control, pero por poco tiempo, pues luego toda la atención se centró alrededor de la reconquista de reivindicaciones mucho más elementales como el derecho de asociación, por ejemplo. En el informe de la Comisión Investigadora Nacional sobre "daños y costos del sindicalismo a Comibol"¹⁷ se incluyó en el mismo rubro a los controles obreros y a los dirigentes sindicales. La acusación buscaba hacer creer que estos elementos eran los únicos causantes de todo el desbarajuste de la minería: "Los controles obreros y los dirigentes sindicales, en la práctica, se constituyeron en patronos en lo que les convenía y disponían a su arbitrio de los fondos, transportes y equipo, en favor de su demagogia sindical y beneficio personal. La presión de ellos originó entregas cuantiosas de recursos a los sindicatos, controles obreros, dirigentes sindicales, cooperativas, ranchos, clubes, negocios, amigos, parientes y a todos los trabajadores en general". Las cifras menudearon y una de ellas indicó que a Comibol le costó el mantenimiento "de controles obreros y dirigentes sindicales" algo más de cinco y medio millones de dólares.

Juan Lechín Suárez, en 1967, volvió a la vieja tesis del carácter comunista del control obrero, acusación que puede ser considerada como el punto culminante de la campaña antiobrera iniciada por el MNR¹⁸.

Un viejo escrito de Trotsky (1931) echa luz sobre el problema del control obrero, pues se refiere a antecedentes teóricos e históricos.¹⁹

El líder bolchevique pregunta si el "control obrero sobre la producción" puede concebirse como un régimen estable, y se responde: "evidentemente no eterno, pero sí bastante largo. La respuesta es negativa si setiene en cuenta la naturaleza de clase del régimen imperante. Los obreros tienen el control. Esto significa que la propiedad y el derecho de dirección quedan en manos de los capitalistas. Así este régimen tiene un aspecto contradictorio, caracterizándose a su manera como un intervalo económico".

17- Comisión Investigadora Nacional, 'Daños y Costos del sindicalismo a Comibol', la Paz, 1965.

18- J. Lechín S., "Ayer, Hoy y Mañana", La Paz, 1967.

19- León Trotsky, "Escritos" (1928-1940), París.

Los obreros no buscan el control por el control, sino para materializar un objetivo que tiene vital importancia para ellos: influenciar prácticamente en la producción y en las operaciones comerciales de las empresas. De aquí arranca que el control obrero ejercitado por la clase lleve en su seno la tendencia a transformarse en gestión directa, pues sólo así podrían efectivizarse sus finalidades básicas. "Así bajo su forma amplia, el control obrero significa una suerte de dualidad, de poder, en la fábrica, en los bancos, en el comercio, etc. Para ser durable, resistente, normal, la participación de los obreros en la dirección de la producción debería estar basada en la colaboración de clases y no en la lucha de clases".

El control obrero adquiere un carácter de reivindicación transitoria, que puede llevar al proletariado a lucha por la conquista del poder. En este sentido puede ser formulado aún antes de que la situación política esté totalmente madura para que las masas hagan la revolución; puede acortar este proceso. Es la lucha de clases la que imprime esta característica al control.

La colaboración de clases se da entre la cima de las direcciones sindicales y las organizaciones capitalistas. La usurpación de la voluntad de las masas por la burocracia puede permitir la sustitución del auténtico control por su ficción. Trotsky cita como antecedentes "la democracia económica" en Alemania y el "mondismo" en Inglaterra. "Pero en todos estos casos no se trata de control obrero sobre el capital sino de la domesticación de la burocracia por el capital". Esa domesticación puede durar bastante tiempo, "esto depende de la paciencia del proletariado". La experiencia boliviana confirma también, a su manera, este extremo.

El control obrero de la producción permite que todo el proceso se desarrolle ante los ojos de los trabajadores, echando por la borda el secreto comercial. Este control no puede concebirse como un obsequio de la burguesía, es más bien una conquista revolucionaria, no cimentada sobre el colaboracionismo clasista sino resultado de la agudización de la lucha de clases.

Si la clase dominante se siente segura y está bien asentada, sencillamente no permitirá el control obrero, aunque servilmente se lo soliciten algunos de sus secuaces incrustados en el campo sindical. La conquista del control se dará cuando la clase obrera aumente su poderío y logre imponer sus condiciones al régimen imperante. "El control obrero no es pues realizable más que a condición de un cambio brutal en la relación de fuerzas en contra de la burguesía y de su Estado. El control no puede serle impuesto a la burguesía más que por la fuerza por un proletariado en vías de arrancarle el poder y, por ende, la propiedad de los medios de producción". El control obrero es, pues, provisorio y transitorio por su misma esencia y "no puede más que corresponder al período de descomposición del Estado burgués, de ofensiva del proletariado, de retroceso de la burguesía, es decir, en el período de la revolución proletaria entendida en el sentido más amplio del término".

Cuando se establece el control obrero en la producción, el dueño de los medios de producción no es más el patrón en el sentido tradicional del término, se puede decir que no es ya el dueño absoluto de su fábrica, "se deduce que no lo es tampoco de

su Estado". Automáticamente se plantea la dualidad de poderes en las empresas, dualidad que no tardará en proyectarse en el plano estatal. El panorama se vio tremendamente agravado en el caso boliviano, porque se trataba del control obrero con derecho a veto, es decir, de un control capaz de revocar las decisiones de las gerencias empresariales, ejercitado nada menos que en la industria básica de un país monoprodutor, se demostró que era exacto el principio de que los dueños de las minas son también los dueños del Estado. La dualidad de poderes fue resuelta en favor de la reacción y el control obrero dejó de existir.

En Bolivia el control obrero fue agitado en el momento de ofensiva del proletariado y realizado cuando los trabajadores parecían ser los dueños del poder. Su mismo funcionamiento empujó a las masas a estudiar el destino del poder político.

Muchos pretenden reducir el control obrero al reclamo de "apertura de los libros de cuentas patronales" de parte de los sindicatos, para poder discutir con conocimiento de causa, o al menos con un mínimo de conocimiento, a nivel nacional o a nivel de la empresa, las relaciones entre salarios, ganancias, productividad y precios" ²⁰. Es claro que este planteamiento excluye cualquier participación en la administración de las empresas. Se trata, en el mejor de los casos, de una estrecha interpretación de la consigna lanzada por Trotsky, olvidando lo que escribió acerca de la participación de la clase trabajadora en la dirección de las empresas nacionalizadas en los países atrasados, en los que la burguesía o clase media se ven obligadas, para oponer resistencia al imperialismo, a apoyarse en el proletariado.

El control obrero en Bolivia resulta notable no únicamente por haber ejercitado el veto, sino por haber tenido ingerencia en la dirección de la minería, impuesta por los trabajadores en armar, y no graciosamente concedida por el gobierno del MNR. Si pasamos por alto los casos de defección individual de los controles, se puede decir que el control obrero entró inmediatamente en choque con la administración de Comibol y sus empresas y con el mismo gobierno central, y por eso mismo fue una de las manifestaciones de la dualidad de poder. Como tenemos indicado, esa dualidad se resolvió en favor del partido que se alió con el imperialismo en el afán de estrangular el proceso revolucionario.

La lección más importante de la experiencia boliviana, radica en que la derrota del control obrero no salvó a la minería, sino que agudizó sus problemas. La dirección de Comibol no tuvo más remedio que seguir el camino de la destrucción física de la fuerza de trabajo para disminuir en algo los costos de producción. Esto ocurrió cuando comprobó que no le era posible asimilar los sindicatos y el control obrero al aparato gubernamental y a las gerencias.

Después de la muerte del general Barrientos (abril 1969) y cuando el sindicalismo volvió a levantar cabeza, la reposición del control obrero en las minas fue inmediatamente incluida entre las reclamaciones planteadas al gobierno por los sindicatos de base. Sólo una nueva profunda conmoción social puede hacer posible la reposición del control obrero.

20- E. Mandel, J. M. Vincent, F. Block-Laíne, G. Mathieu, "Reforma de la empresa o Control Obrero", Buenos Aires, 1968.

En 1971 fue planteado el problema en toda su agudeza, cuando la Asamblea Popular lanzó la consigna de la administración obrera mayoritaria en Comibol, que pretendía superar el control obrero de tipo movimientista y sustituirlo por el colectivo.

El control obrero individual y burocratizado llevó en su seno y en germen las tendencias revolucionarias, es por esto que su experiencia adquiere enorme significación. No se trata de borrar de plano toda esta experiencia, sino de superarla críticamente y teniendo presente todo lo que puede dar la clase proletaria en este terreno; tal sentido tiene el planteamiento del control obrero colectivo.

Es evidente -como se indica más arriba- que los trotskistas bolivianos se inspiraron en el Programa de Transición de la Cuarta Internacional, que resume la experiencia revolucionaria mundial, para plantear la consigna del control obrero; las circunstancias políticas concretas, la acelerada marcha de las masas radicalizadas hacia el poder, para decirlo con mayor claridad, les permitieron ir mucho más allá de lo que indica ese documento programático.

Para Trotsky, el control obrero, planteado como una consigna que puede permitir a los explotados, partiendo de sus necesidades premiosas y actuales, encaminarse hacia estadios superiores de la lucha política, hacia la conquista del poder, tenía un sentido limitado: "Los primeros objetivos del control obrero consisten en aclarar cuáles son las ganancias y gastos de la sociedad, empezando por la empresa aislada; determinar la verdadera parte del capitalismo aislado y de los capitalistas en conjunto en la renta nacional; desenmascarar las combinaciones de pasillos y las estafas de los bancos y de los trusts; revelar, en fin, ante la sociedad, el derroche espantoso de trabajo humano que resulta de la anarquía del capitalismo y de la exclusiva prosecución de la ganancia".

Los intentos gubernamentales y burgueses de controlar la actividad de los capitalistas individuales son impotentes y se detienen ante el secreto comercial, sólo "los comités de fábrica y solamente ellos pueden asegurar un verdadero control sobre la producción".

Los menores intentos de planificación de la economía el punto de vista de los trabajadores, precisan del control obrero. "La elaboración de un plan económico... es inconcebible sin el control obrero, sin que la mirada de los obreros penetre a través de los resortes aparentes y ocultos de la economía capitalista". En este sentido hablaba de que el control obrero "pasará a ser la escuela de la economía planificada".

Sólo tratándose de la puesta en marcha de 'las fábricas paralizadas como una forma de atenuar la cesantía, se habla del control obrero transformándose en administración directa. "En particular, la lucha contra la desocupación es inconcebible sin una amplia y atrevida organización de "grandes obras públicas... En el cuadro de un plano semejante los obreros reivindicarán la vuelta al trabajo, por cuenta de la sociedad, en las empresas privadas cerradas a causa de la crisis. El control obrero en tales casos sería sustituido por una administración directa por parte de los obreros" ²¹.

21- "La agonía mortal del capitalismo y las tareas de la IV Internacional".

Los bolivianos convirtieron la consigna de control obrero en palanca impulsora de la lucha directa por el poder, de ahí que adquirió perspectivas insospechadas.

7

Administración obrera mayoritaria en Comibol

El planteamiento de la superación del control obrero de tipo movimientista por el colectivo asumió diversas formas según la coyuntura política de determinado momento.

En 1971, cuando el país vivía momentos de extrema radicalización y cuando las masas se movilizaban al margen del nacionalismo de izquierda representado por el general Tórres, se abrió la oportunidad de retomar la consigna del control obrero. En ese entonces la Asamblea Popular mostró la perspectiva de la marcha hacia la conquista del poder.

El gobierno, buscando ganar la confianza de los trabajadores dispuso su participación minoritaria en YPFB y se encaminó a extender esta medida al sector minero.

Es en tales circunstancias que los obreros sindicalizados en la FSTMB y á través de la Asamblea Popular plantearon la necesidad de luchar por la administración obrera mayoritaria en la más importante empresa estatizada del país. El aspecto más relevante de la formulación consistía en el reconocimiento del derecho de los obreros para designar al gerente general de la Comibol, que de manera natural concentra mucho poder en sus manos. Los mineros no pedían una concesión a un régimen que lo consideraban caduco, sino que se encaminaba a imponerlo mediante la acción directa. Esta administración obrera mayoritaria de las minas no podía darse en el marco del Estado burgués, la lucha por su efectivización suponía la marcha hacia la conquista de todo el poder político. Esta conclusión no fue elaborada a posteriori o como una especulación de los teóricos o de los líderes políticos, sino que fue iniciada con toda nitidez en el seno de la Asamblea Popular. Se trataba de una reivindicación transitoria destinada a movilizar a la mayoría nacional alrededor de la batalla por la administración obrera en Comibol, de manera que la colocase ante la imperiosa necesidad de apoderarse del poder.

La mayoría obrera al formular dicho planteamiento permanecía fiel a su concepción de que la revolución sólo podían realizarla, las masas y no pequeñas minorías a nombre de ellas. El problema político central en ese momento radicaba en la urgencia de encontrar los medios que permitiesen incorporar a la lucha a la mayoría nacional y en lograr que ésta hiciese suya la estrategia del proletariado. Contrariamente, los sectores ultraizquierdistas de esa época (MIR, PC-ML, principalmente) se aglutinaron alrededor de la tesis de que la idea acertada era la de desencadenar, en ese mismo instante, la guerra prolongada y que los afanes por profundizar la movilización de las masas no eran más que distraccionistas y propias del reformismo.

Como se ve, la administración obrera mayoritaria de la Comibol no planteaba la colaboración, en el plano empresarial, entre la clase obrera y el gobierno burgués o cosa parecida, esto porque partía de la certidumbre de que se trataba de imponer la entrega de las minas a los explotados y porque fue ideada dentro de la batalla que se estaba librando por alcanzar el control del Poder Ejecutivo. Hasta ahora nadie se ha atrevido a sostener que la Asamblea Popular hubiese sido colaboracionista, esto porque nació y se desarrolló en el marco de la dualidad de poderes y como una voluntad que fácilmente sobrepasó al débil gobierno nacionalista burgués de Tórres. No había pues lugar para que pudiese prosperar el colaboracionismo. Sólo más tarde se le ocurrió a la burocracia sindical sostener que ese planteamiento revolucionario constituía un antecedente de sus proposiciones reformistas y de cooperación con el gobierno. Durante los días de la Asamblea Popular ni siquiera el PCB se atrevió a desarrollar semejante tesis, pues se limitó a plegarse al planteamiento revolucionario.

Sí se analiza todo el texto del esquema de administración obrera mayoritaria de Comibol, se tiene que llegar a la conclusión de que se trataba de efectivizar el control obrero colectivo. La tensión de la lucha de clases permitió que aflorase toda la experiencia de los explotados en la materia. Como tantas veces ha sucedido, las masas grises se movilizaron tras consignas que correspondían al punto más elevado de la evolución política. El mencionado documento establece el funcionamiento de equipos de trabajadores encargados de cumplir las decisiones de la asamblea y funcionando en los parajes mismos, con la finalidad de efectivizar la administración obrera. En todos los escalones empresariales debían ser los equipos y no los individuos los portadores de la voluntad de la masa obrera. Con anterioridad, correspondió a los sectores marxistas oponer esta modalidad del control colectivo al control obrero individual.

Cuando se desencadenó el golpe gorila preventivo de 1971 esta idea de control obrero colectivo, que bien puede considerarse el punto más elevado al que pudo llegar el proletariado en este terreno, fue sepultado por los acontecimientos. Si se exceptúan a los sectores obreros poristas, nadie volvió a hablar del control obrero, como si el fracaso del experimento movimientista hubiese importado la total superación de esta consigna que es fundamental dentro del programa revolucionario.

Hay que preguntarse por qué razones la burocracia sindical ha relegado al olvido el control obrero colectivo, que a partir de la Asamblea Popular forma parte del arsenal ideológico de los explotados. La respuesta sólo puede ser una: obra así porque se encuentra totalmente sometida a la política burguesa; hablar del control obrero significaría exteriorizar el propósito de acentuar la lucha de clases y de darle un contenido político, lo que ciertamente violenta al colaboracionismo.

8

La co-gestión obrera

La llamada co-gestión, obrera fue planteada por la burocracia sindical de la FSTMB y de la COB en 1979. Aunque en ninguna parte se ha dicho con claridad, lo evidente es que la co-gestión a ser aplicada en la Comibol aparece como una consigna que reemplaza no sólo al control obrero colectivo, sino a toda forma de control en las empresas estatizadas.

La co-gestión formulada por la FSTMB puede ser tipificada como paritaria, esto en el mejor de los casos. Sin embargo, el problema no radica en el porcentaje en el que los obreros participarán en la administración empresarial, sino en el sentido político que puede adquirir esa participación. El mismo control obrero adquiere diferente significación según la orientación que se le imprima. La burocracia, y no de manera casual, se ha esforzado por identificar formalmente la co-gestión de 1979 con la administración obrera mayoritaria de 1971, esto en su pretensión de sepultar las profundas diferencias políticas que existen entre ambos planteamientos y que, indudablemente, es lo que cuenta en el proceso revolucionario y para la clase obrera.

El control obrero puede adquirir un sentido revolucionario porque proyecta la lucha de clases en el plano de la administración empresarial, porque se convierte en el canal de oposición a la administración burguesa y porque se encamina a demostrar que las empresas pueden funcionar mejor con la prescindencia de los burgueses. El control obrero puede degenerar y convertirse en instrumento de la patronal o del gobierno, pero en este caso extremo se trata de su total desvirtuación.

La co-gestión no tiene nada en común con el control obrero y mucho menos con el colectivo, porque se empeña en efectivizar la colaboración de la clase obrera con la burguesía en las empresas estatizadas, con el propósito confeso de poner a salvo las fuentes de trabajo asegurando su rentabilidad, un viejo argumento que siempre esgrimieron los empresarios y su gobierno para rechazar las demandas laborales de mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. Como se ve, se trata de un caso de indiscutible colaboración de clases, que es todo lo contrario de la lucha entre la burguesía y el proletariado.

El control obrero y su versión colectiva que adoptó el rótulo de administración obrera mayoritaria, fueron propugnados para impulsar la lucha de los explotados por la conquista del poder, la co-gestión busca prolongar indefinidamente la permanencia de la burguesía en el timón del Estado, que es el propósito central del colaboracionismo.

Cuando el control obrero demuestra que las empresas pueden funcionar sin capitalistas, se convierte en una escuela que enseña a los explotados la necesidad y la viabilidad de la destrucción del régimen de la propiedad privada burguesa, esto porque se parte de la certeza de que el capitalismo ha caducado; la co-gestión planteada por la burocracia lleva implícita la tesis de la posibilidad del desarrollo capitalista pleno e independiente del país en el marco de la coexistencia con el imperialismo. Si el

control obrero es básicamente anticapitalista, la co-gestión ha sido acuñada para preservar al régimen imperante de su ruina.

El control obrero se orienta a desarrollar la dualidad de poderes en el plano de la administración empresarial; la cogestión tiene la finalidad de servir a la burguesía y de viabilizar su administración empresarial en los períodos de aguda crisis económica. El control obrero tiene como objetivo elemental mostrar el mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo y del funcionamiento de la empresa, lo que le permite convertirse en canal de educación de los explotados, la co-gestión busca exclusivamente lograr la rentabilidad de las empresas, es decir, asegurar las ganancias patronales.

El control obrero puede convertirse en una consigna revolucionaria, esto si la dirección política del movimiento obrero logra que se subordine a la estrategia de la clase; la cogestión, en cambio, no tiene ninguna posibilidad de actuar como palanca revolucionaria, esto porque por su esencia es contrarrevolucionaria, desde el momento que busca materializar la imposible colaboración entre explotados y explotadores y porque no tiene posibilidades de proyectarse hacia la destrucción de la propiedad privada.

En 1946 y en 1971, el control obrero fue formulado como parte inseparable del ascenso anticapitalista y revolucionario de las masas, como parte inseparable de la independencia de clase y de la ideología propia de la clase obrera; en 1979, la co-gestión ha sido acuñada por la burocracia sindical para someter a los obreros a la política de la burguesía.

La co-gestión fue planteada como parte inseparable de la llamada tesis económica de la COB y sus propiciadores señalaron una y otra vez que ambos documentos debían complementarse en su ejecución. La tesis económica, vaciada en los moldes del desarrollismo cepalino no busca ir más allá de los límites de la propiedad privada y ella misma se autocalifica como capitalista y reformista. No parte del análisis de la estructura del país, sino que pretende sacar a la economía de sus crisis con ayuda de medidas bancarias, financieras, impositivas, etc., todo como si la perennidad del capitalismo estuviera garantizada. Es explicable que se diga que la co-gestión no es más que el punto culminante de estas reformas capitalistas a la economía boliviana.

Tanto la co-gestión como la tesis económica tienen como punto de arranque el planteamiento de que primero se debe sacar a las empresas de su quebranto económico, asegurar su bienestar y sus ganancias, dotarles de una eficiente administración y liberarlas de las pesadas cargas tributarias, para luego poder formular las mejoras salariales. Hace tiempo que los capitalistas y su gobierno vienen sosteniendo la teoría de que primero hay que crear riqueza para tener algo que distribuir. La novedad de los planteamientos de la burocracia cobista (técnica y políticamente son una cosa muy vieja) radica en que los puntos de vista de la clase dominante aparecen ahora expresados a nombre de las organizaciones laborales. La política económica burguesa puede, de esta manera, trocarse en popular y su cumplimiento se vería facilitado por la cooperación de los sindicatos. Las organizaciones obreras no están estatizadas aún, pero la equivocada conducta de la burocracia puede concluir obligándolas a

jugar el papel de puntales de los planes del gobierno. No en vano la co-gestión y la tesis económica han sido aceptadas en principio por la clase dominante y por el Poder Ejecutivo.

La experiencia boliviana demuestra o enseña que el control obrero colectivo forma parte del programa revolucionario anticapitalista y que la co-gestión constituye el punto básico del programa de adaptación a la política burguesa.

La bancarrota de las empresas estatizadas forma parte de la crisis de la economía boliviana, que es estructural y no simplemente de coyuntura. La persistente quiebra de la Comibol, pese a las cotizaciones excepcionalmente elevadas de los minerales y a las bajísimas remuneraciones que perciben los trabajadores, no es más que un reflejo del choque de las fuerzas productivas tanto contra la propiedad privada burguesa y la opresión imperialista, como contra la pequeña parcela del campesino. Es cierto que la mala administración y la inmoralidad agravan esta crisis, pero la superación de estos aspectos secundarios no puede por sí sola permitir que las minas trasmonten la crisis.

Capítulo VI

Otros ensayos nacionalistas

1

Agotamiento de los métodos fascistas de gobierno

Es explicable que el general Barrientos haya sido convertido en ídolo y modelo de los regímenes fascizantes, desde el momento que, contando con la estrecha y directa cooperación del general Ovando, tuvo el atrevimiento de ahogar en un descomunal mar de sangre al movimiento obrero y revolucionario. La derecha en general vuelve, de tarde en tarde, la mirada hacia Barrientos, porque desearía que un gobierno fuerte esté presente en el escenario para poner a salvo sus intereses. Todo esto a pesar, o acaso por esto mismo, de que el general gustó ostentar el rótulo de Presidente Constitucional, habiendo para este efecto convocado a las elecciones de 1966. Sus fechorías fueron seguidas con entusiasmo por un parlamento imbécil y debidamente domesticado. Se trata, como se ve, de otra faceta más de la "democracia " criolla.

Resulta más difícil comprender que un intelectual y escritor como Fernando Diez de Medina, que a sí mismo se considera una criatura excepcionalmente genial, deje constancia escrita de su admiración del ilimitado "talento de stadista" del general Barrientos y lo coloque a la altura de Bolívar, Santa Cruz, Campero o Sócrates. Nos estamos refiriendo a "El General del Pueblo" escrito por el literato de manera deliberadamente promiscua. De las 399 páginas del volumen pulcramente editado (tenemos entendido que el apoyo oficial le ha permitido alcanzar grandes tiradas) se dedica no menos de un tercio a la reproducción de las piezas maestras (discursos, mensajes, etc) del general; y quien se ha atrevido a formar esta antología es porque considera insuperables e imperecederos esos escritos. Resulta que es el propio Diez de Medina el autor de los discursos y mensajes que leyó atrevidamente el general. Este dato y parte del diálogo que transcribimos revelan la clave del escrito:

"Presidente: Ahora dígame: ¿cree Ud. en la dictadura?" "Consejero (Diez de Medina): No, Presidente. No creo en ella, más bien la temo. Acuérdesse de Busch, el gran incomprendido. La fuerza no solucionó sus problemas. Y la fuerza de usted, mi General, radica justamente en lo contrario de la dictadura: el poder que emana de la voluntad popular, el espíritu democrático con que acata las leyes..."

En el párrafo anterior está íntegro Diez de Medina y también está revelado el sentido del libro. Más que Barrientos, el personaje es, pues, el literato oficiando de político de alto vuelo. No oculta el escritor que era la eminencia gris del gobierno Barrientos, que todo lo que hizo (se atribuya deliberadamente la genialidad de cada paso dado) fue su obra y que si el héroe escaló las cumbres de la inmortalidad fue gracias a sus sabias orientaciones y a su dirección, Barrientos es el accidente feliz y Diez de Medina

el demiurgo, por eso mismo, el gobierno de aquel es presentado por el escriba, como uno de los más notables de nuestra historia. A nosotros el literato nos parece más condotiero que otra cosa, pero éste tiene la seguridad de haber realizado su destino sin paralelo y su pensamiento premonitorio a través del general que no dejó de girar por los límites de la insania mental. La impostura es tan descomunal que casi nadie se atreve a tomarla en serio.

Qué equivocados están los que quieren descubrir en "El general del pueblo" la crítica desinteresada y el sacrificio en aras de la amistad (ese es el criterio, por ejemplo, de José Romero Loza, otro servidor de Barrientos). No; Diez de Medina busca inmortalizarse y recomendarse como sabio e infalible consejero de presidentes. La alabanza desmedida de la criatura, la puesta de relieve de su genialidad precoz, ayudan a insinuar los ilimitados recursos y talento del padre putativo. El libro de referencia busca demostrar que Diez de Medina es el patriarca de las letras bolivianas y el árbitro de la alta política: el amo espiritual de Bolivia.

En el libro hay afirmaciones que es preciso poner en su verdadero lugar. No puede dudarse que en sus inicios el gobierno nacido del golpe contra revolucionario de noviembre de 1964 arrastró detrás de sí algunos sectores de la pequeña-burguesía: se apoyó en la desesperación de parte de la clase media ciudadana, incluyendo a los universitarios, y resultó beneficiado por la gran oscilación de considerables sectores campesinos, que vieron en la espada del general una garantía para la conservación de sus parcelas (se movían bajo la presión de una sistemática propaganda que sostenía que la tierra de los agricultores corría el riesgo de ser usurpada tanto por el falangismo gamonalista como por el comunismo, declarado enemigo de la propiedad privada). En las ciudades el antimovimientismo, actuando a través de la clase media, concluyó teñido de un acentuado derechismo; el ejemplo de las universidades es aleccionador, muestra cómo rápidamente parte de la inteligencia pequeño-burguesa identificó sus veleidades marxistas con el entusiasta respaldo que prestó a los conspiradores de noviembre de 1964. La barrientización de las ciudades fue el punto de arranque para el exitoso asalto a las minas. Los estudiantes -que pueden jugar un importante rol en el proceso revolucionario, pero no dirigirlo- bien pronto reaccionaron positivamente ante la presión poderosa de una clase obrera que no cejó en su lucha contra los métodos fascistas de gobierno y puso en pie a los sindicatos clandestinos, se fueron desplazando rápidamente hacia la izquierda y lanzando denuestos contra la dictadura.

Diez de Medina hizo creer al general que la magia de la palabra era capaz de forjar un mundo a gusto del "temperamental" (es lo menos que puede decirse) Presidente, que se rompió las narices queriendo convencer a los estudiantes soliviantados acerca de las bondades de su genio y de su gestión gubernamental. "El general del pueblo" registra los estridentes silbidos que marcaron la peregrinación de Barrientos por las Universidades. El escritor parece no haberse dado cuenta, pese a su habilidad de "consejero", que se trataba sólo de exteriorizaciones del proceso de radicalización de la pequeña burguesía, sobre todo de su capa estudiantil, es decir, de prontas respuestas a las incitaciones de la clase obrera y que les llevaron a desembocar en la trinchera antigorila. Ante el abandono progresivo del apoyo de la clase media, los regímenes totalitarios no tienen más remedio que acentuar, aún más, los métodos

fascistas de gobierno o bien ser reemplazados por otro héroe más afortunado.

La torpeza del escritor se torna ceguera, deliberada o no, cuando obligadamente tiene que referirse a las relaciones del general Barrientos con el movimiento obrero. No puede concebirse la política ni la dictadura actuales al margen del movimiento sindical; y la presencia del "general del pueblo" en el escenario político se explica por su papel de verdugo del pueblo, de metralla descargada contra el sindicalismo. Con una admirable sangre fría -por no decir otra cosa- Diez de Medina estampa la especie de que Barrientos era indiscutible "amigo de los obreros". Resulta imposible olvidar que el déspota debutó como autor de descomunales sangrías en las minas (trágicas jornadas de mayo de 1965), los campamentos fueron asaltados por las tropas del ejército y bombardeados por la aviación que hicieron correr nuevamente un río de sangre. Y así transcurrió toda su gestión, más tarde vino la dantesca masacre de San Juan. En descargo del ánimo de "su" general, el carnicero Barrientos, Diez de Medina dice que los obreros dispararon primero. El problema no se reduce a establecer quién fue el agresor y quién el agredido, sino de saber si Barrientos masacró o no a los obreros, si destruyó ó no físicamente a las organizaciones sindicales, si asesinó o no a los líderes revolucionarios, si canceló o no las garantías democráticas cuando estas se referían a las masas. La historia ya ha dicho su verdad: el Presidente general fue un dictador reaccionario que utilizó los métodos fascistas de gobierno y esto basta para concluir que el libro de Diez de Medina está equivocado. En el hipotético caso de que los mineros dispararon primero, hay que preguntarse por qué lo hicieron; en ese caso los obreros se vieron obligados a usar las armas para rechazar a un gobierno de corte fascista.

Nadie puede negar que Diez de Medina tiene la vocación de las letras, pero pocos se han dado cuenta, de su extrema debilidad por los hombres fuertes que detentan el poder. Siempre lo hemos visto en las graderías del Palacio de Gobierno, buscando los favores de los mandones de turno. La pluma sirve para muchas cosas, hasta para recomendarse a los dictadores. Cuando el que cabalga el potro del poder es un izquierdista, el que presume de incomparable estilista enmudece y repta para poder acomodarse a la sombra de aquel (eso hizo con el MNR); pero, cuando el que manda es un fascista se deshace en ditirribos y zalamerías.... esperando siempre jugosa recompensa. Diez de Medina ya está viejo, lo que es fácil darse cuenta leyendo sus últimos libros, pero no se cansa de arrastrarse ante los dictadores uniformados. No bien Bánzer anunció su decisión de no candidatear a la Presidencia de la República (26 de noviembre de 1973), Diez de Medina estuvo seguro de que la oportunidad era propicia para recomendarse al dictador gorila. En "El Diario" de 28 de noviembre escribió un artículo para poner de relieve que Bánzer dio "un alto ejemplo de patriotismo, de ética política, de desprendimiento personal raro en nuestra historia". Y como se vivía el cuarto de hora de los mandones uniformados, añadió: "Verdad que tuvo antecedente en la conducta honesta de otro militar, el general Carlos Blanco Galindo, presidente de la Junta Militar de 1930, quien entregó el mando constitucional al Dr. Daniel Salamanca".

Bánzer sería el maestro que da lecciones y, sobre todo, el líder nacional (el general ha debido frotarse las manos de placer al leer todo esto): "Digna decisión, aleccionadora

en lo moral para quienes piensan que política es sólo juego de ambiciones y de intrigas. Pero los actos de los líderes -Bánzer es, sin duda, un líder nacional- repercuten directa o indirectamente en la marcha del país”.

Diez de Medina, el mismo que escribió el más estrambótico panegírico en honor de Barrientos, se declaró sostenedor de las ideas que animaron el golpe contrarrevolucionario de agosto de 1971 y dispuesto a secundar los deseos del general Bánzer. “Sería un error convocar a elecciones para junio de 1974”, difícil olvidar que la alta jerarquía castrense ya se pronunció por la postergación de las elecciones, teniendo como inconfesada finalidad central evitar que las izquierdas levantasen la cabeza. En el atildado escritor la consigna se trocó en cinismo: “No compactados los sectores independiente”, roto el FPN, dispersas otras fuerzas de tendencia nacionalista y democrática, podría repetirse el caso del “allendismo” en Chile, que con sólo el 36% de votos ganó en las urnas el poder”. Diez de Medina proclamó a grito pelado y poco elegante, lo que calladamente ansiaba Bánzer: “Tampoco es improbable que un pronunciamiento nacional proclame al ciudadano Hugo Bánzer Suárez”. Cómo no va a ser probable si, como dice el escritor, Bolivia necesitaba que alguien la gobierne “con firmeza”.

2

EL CODEP

El general Barrientos se convirtió en el eje aglutinante de las fuerzas derechistas de la clase media y de los otros sectores y supo apoyarse en los resabios de la rosca. El verdugo golpeando contra la izquierda obligó a ésta a adoptar compromisos temporales de autodefensa y siguiendo este camino se actualizó la formación de un frente de izquierdas dentro del marco de la táctica del frente único anti-imperialista hegemonizado por el proletariado. Éste último aspecto flotaba en el ambiente como la consigna impuesta por la evolución política de las masas. Nos estamos refiriendo al Comité Democráticodel Pueblo (CODEP), experiencia de poca duración y extrañamente olvidada por los analistas políticos. Se trata de uno de los antecedentes del Frente Revolucionario Antimperialista, uno de los ensayos más acabados en su especie y organizado después de la catástrofe de agosto de 1971, y también, en cierta medida, de la Asamblea Popular. Con todo, el ensayo no pudo prosperar.

Constituyeron el CODEP los trotskystas, que en ese momento ensayaban una fugaz unidad bajo la sigla del POR y teniendo como vocero a “Masas”; el PCB pekinés; el PRIN, incluida su organización sindical OSIN y el ala radicalizada del MNR (Alderete-Sandoval Morón); el grupo Espartaco, el PRIN estuvo representado por Lidya Gueiler, que más tarde llegó a la Presidencia de la República por un extraño accidente de la tortuosa política burguesa. Para satisfacer su sed de figuración no tuvo reparo, en 1979, en escisionar a su partido y sumarse al frente timoneado por Paz Estenssoro (Alianza-MNR).

La organización frentista comenzó moviéndose en las sombras de la clandestinidad y pugnando por ganar la legalidad. Tuvo, en sus inicios, una rápida expansión. Las juventudes del POR, del PRIN, del MNR (de izquierda), la JCB y Espartaco dieron nacimiento en la universidad al Frente Unico de la Juventud Antiimperialista (FUJA), que era la fracción juvenil del CODEP, que el 25 de junio de 1966 realizó en la Garita de Lima (La Paz) un mitin impresionante de repudio al fraude electoral. En algunas minas funcionaron filiales del Comité; en Siglo XX se desempeñó como su presidente el porista Isaac Camacho, que el 23 y 30 de junio encabezó las concentraciones de masas en las que se explicó el sentido de la abstención en las elecciones. El CODEP llegó a tener ramificaciones en las principales ciudades del país.

El crecimiento y el mismo funcionamiento del CODEP, que no en vano estaba dando sus primeros pasos, encontraron un obstáculo insalvable en el funcionamiento independiente del stalinismo moscovita, que se apresuró en poner en pie una ficción frentista. Por lo menos los trotskystas comprendieron con claridad que un frente antiimperialista, si mediante esta táctica se buscaba que las masas siguiesen a la dirección del proletariado, no podía efectivizarse prescindiendo del PCB pro-Moscú, pese a que en ese momento vivía una de las etapas más agudas de su crisis interna. El POR, por propia decisión, charló con los dirigentes comunistas para animarles a integrar el CODEP, pero estos habían decidido emplearse a fondo para hacer fracasar al naciente frente, porque consideraban que así asestarían un rudo golpe a los pro-chinos, que habían sacado una buena tajada de la fractura del stalinismo. El PCB infló el volumen y actividades del FLIN, una organización fantasma creada por los pecistas para funcionar como un frente "independiente" y capaz de cazar incautos. El FLIN, timoneado por Mario Miranda P., por ese entonces profesor universitario, logró incorporar a sus filas a Fernando Siñani, lo que se tradujo en el acercamiento de éste al viejo PCB y en la puesta a disposición del frente pecista, del semanario "El Pueblo", que entonces todavía gozaba de alguna popularidad. El CODEP sólo podía transformarse en una organización de masas y continuar el rápido crecimiento inicial que tuvo, a condición de presentarse como un frente sin fisuras de las fuerzas marxistas. Contrariamente, se tuvo que dedicar parte de las energías de que se disponía a combatir al FLIN, a responder a su campaña contra el CODEP, al que acusaba de ser un contubernio con los nacionalistas burgueses, etc, a identificarlo con el PCB, cosa que no aparecía del todo clara en la actividad diaria. Esta fue una de las razones, acaso más importante, por la que el CODEP no logró transformarse rápidamente en el polo aglutinante de la izquierda boliviana, de los grupos independientes y de los grandes sectores radicalizados que peregrinaban en busca de una dirección fuerte y capaz. En estas condiciones, el tiempo se transformó en un factor que conspiraba contra el porvenir del nuevo frente. No logró movilizar, organizar y dirigir a la clase obrera, aunque es cierto que ejerció alguna influencia sobre ella.

El CODEP, aún antes de su verdadera consolidación, se jugó entero y zozobró en el problema electoral. Apenas nacido fue arrastrado a la ruidosa campaña para las elecciones generales del 3 de julio de 1966. No podía obrar de otra manera, los partidos que lo componían debían obligadamente adoptar una actitud común frente al problema político central del momento.

El general Barrientos adaptó a sus necesidades la Ley Electoral movimientista y como candidato oficial tenía ganada de antemano la carrera hacia la Presidencia, en un país en el que tradicionalmente logra la victoria la cabalgadura del corregidor. El movimientismo vació la Ley Electoral en el molde del fraude anticipado: la utilización del abrumador peso del campesinado (descomunal cero o voto negro) para aplastar a la oposición que primeramente se perfiló en las ciudades. Esta situación podía modificarse, es decir, la mayoría campesina podía convertirse en el martillo que golpee duro al oficialismo nacionalista, sólo en el caso de que el proletariado lograra timonear políticamente a los explotados del agro, pero, en esta situación las elecciones estarían demás y llegada sería la hora de la insurrección. El problema en 1966 no consistía en ganar las elecciones en el campo, extremo que no se planteaba por materialmente imposible, sino en aglutinar y dirigir a la oposición antigorila en las ciudades. A la propaganda del CODEP le faltó plantear con claridad este objetivo.

La fórmula destinada al triunfo estaba constituida por el general Barrientos, representando a los grupos castrenses que habían consumado el golpe contrarrevolucionario de 1964, y por Luis Adolfo Siles Salinas, seleccionado en las filas del diminuto y económicamente poderoso partido de los gerentes (PSD). No se necesita decir más para tipificarla como a la fórmula de la restauración. Las elecciones estaban destinadas a institucionalizar la contrarrevolución que se había impuesto en la punta de las bayonetas. Otra cosa es que este objetivo no se hubiese podido plasmar debidamente como consecuencia del proceso de desintegración de las fuerzas armadas y de las contradicciones internas del propio imperialismo.

Parece extraño que la Falange, que un poco más tarde apuntaló incondicionalmente al gorilismo representado por Bánzer, hubiese opuesto su propia fórmula a la candidatura presidencia del Barrientos. La verdad es que FSB enarboló reivindicaciones democratizantes frente a la "dictadura" del general Presidente y hasta llegó a pedir su dimisión. La ocurrencia falangista demostraba el deterioro del gobierno timoneado por Barrientos, claro que FSB tenía como objetivo inmediato participar decisivamente en el cupo de parlamentarios "opositores", que concluyeron como magníficos colaboradores del gorilismo. La fórmula presidencial de FSB no pasaba de ser simbólica: el general Bernardino Bilbao, una achacosa gloria militar, iba del brazo de Gonzalo Romero, nigromante de la política y paradigma del transfugio.

La caída del MNR como partido gobernante tuvo repercusiones internas inmediatas: sus tendencias internas (aunque formadas alrededor de caudillos y ambiciones personales, llevaban implícitas formulaciones políticas que exteriorizaban diversos intereses clasistas) actuaron como fuerzas centrífugas que casi siempre concluyeron provocando escisiones. El Movimiento Revolucionario Popular (MRP) se llamó así para poder inscribirse en los registros de la Corte Electoral, que había dado certificado de nacimiento al primer grupo que se presentó ostentando la sigla del MNR, buscaba arrastrar a los campesinos detrás de un símbolo, El binomio formado por Mario Diez de Medina y Mariano Baptista, carecía de luz propia y para poder identificarse se vio obligado a estampar en su papeleta a un Víctor Paz con vasta sonrisa. Corrió el rumor de que Ovando tuvo mucho que ver con esta candidatura. El pazestensorismo cumplió una meta modestísima: hacerse presente en el escenario político después

del descalabro de 1964 y aprovechando la aparición de indicios de desintegración en el seno del equipo dirigente del gorilismo.

Víctor Andrade se movía manejado por dos hilos bastante visibles: uno conducía a las oficinas de Nelson Rockefeller, el otro estaba manejado por los generales criollos. Dividió al MNR en servicio directo de los gorilas más que de su persona, consideraba que convertido en cabeza de "su" partido y contando con los dólares norteamericanos podría fácilmente llegar a la Presidencia, extremo sugerido por su seguidor y escritor "antiimperialista" Augusto Céspedes. Paradójicamente resultó la variante democrática en el ajetreo electoral y exteriorizó, a su modo, las contradicciones entre los organismos imperialistas.

Los stalinistas pro-Moscú presentaron el opaco binomio Iñiguez-Miranda, con la finalidad de convertirse, con ayuda de la papeleta electoral, en el único partido comunista, para así aplastar al CODEP y a su adversario el PC-ML.

Los resultados electorales dieron la victoria a Barrientos-Siles por abrumadora mayoría y le proporcionaron al nuevo gobierno una oposición parlamentaria a su medida, formada por la minoría falangista.

El CODEP decretó la abstención activa en las elecciones y asumió similar actitud el Partido Demócrata Cristiano, aunque partiendo de posiciones diferentes. No bien se conocieron los resultados, el PDC se apresuró a exteriorizar su admiración por la naturaleza "democrática" del gorilismo barrientista y lo que podía parecer una postura dictada por una extrema ingenuidad no fue más que cálculo que permitió al PDC incrustar un ministro en el gabinete del carnicero Barrientos.

Los resultados de las elecciones no pudieron menos que ser decepcionantes para los componentes del CODEP y que sólo podían explicarse a través de un agudo análisis político, cosa que estuvo lejos de realizar el frente. En la presentación de las cifras la abstención, quedó mucho más minimizada con referencia a su verdadero volumen.

Se inscribieron 1.270.000 ciudadanos, de los cuales sufragaron sólo 1.025.455. La diferencia, 244.545, importó una abstención del 20%; pero, hay que añadir los votos blancos y nulos, por lo menos parte de ellos, que arrojaron 85.022; lo que daría un total de abstenciones de 329.567 votos, es decir, el 25.95% del total de los inscritos. Se comprende que no todos esos votos pueden atribuirse a los abstencionistas, existe un porcentaje de abstencionismo en todas las elecciones. Si cargamos a este último un 10%, restaría el 16%, que sigue siendo importante. Es evidente que el PDC no tenía posibilidades de arrastrar un volumen considerable de votos.

Equivocadamente el CODEP partió del falso esquema de que la abstención se convertiría en un volumen abrumador, al extremo de mostrarse de manera indiscutible la impopularidad del general Barrientos. Esto era imposible si tenemos en cuenta que el mayor porcentaje de electores estaba concentrado –y aún lo está– en el agro, donde las autoridades tenían posibilidades de obligar a casi todos a sufragar. La explicación política más elemental debería haber comenzado demostrando el significado del

volumen de la abstención en función del electorado de las ciudades y no de la totalidad de los sufragantes o inscritos en el país, lo que autorizaría a multiplicar por lo menos por dos el peso real de los resultados obtenidos. Otras veces se tomó como abstención únicamente los votos blancos y nulos y no los que no concurrieron a las urnas después de haberse inscrito en los registros electorales y menos los que dejaron de cumplir inclusive con este requisito. Es sugerente, por ejemplo, el análisis hecho por "Presencia" (La Paz, 7 de julio de 1966): "Aproximadamente el 19 por ciento en diez y ocho minas nacionalizadas y privadas. Este porcentaje se considera escaso, si se tiene en cuenta que el PRIN, PDC, PC pekinés y el POR trabajaron arduamente para obtener una "mayoría" de votos contra el calificativo que dieron a las elecciones de "fraude electoral".

"La consigna del voto en blanco solamente alcanzó mayoría en las secciones del Consejo Central Sud, Japo y Negro. En Siglo XX y Colquiri se ha denunciado que algunos miles de personas quedaron marginadas del proceso electoral, en vista de que no fueron inscritas por falta de material, extremo que habría influido para aumentar los votos en blanco.

"Causó sorpresa el escaso porcentaje obtenido por el FLIN en los centros mineros, considerados como principales núcleos de la actividad del extremismo, especialmente en Siglo XX, donde alcanzó 168 votos, llegando a 2.780 votos en diez y ocho distritos, cantidad ínfima ante la acción del FLAN y el PC soviético. Ha sido notoria la oposición por parte del comunismo pekinés y el porismo, como demostración de la crisis imperante entre las fuerzas de extrema izquierda".

A posteriori es fácil comprender que el volumen de la abstención fue notable, pese a todos los factores negativos que se tuvieron que afrontar, pero para servir de base a la actividad del CODEP, que bien podía haber utilizado los resultados electorales como prueba de su real influencia sobre las masas trabajadoras y la clase media, debería haber sido parte del análisis anticipado de las tendencias del proceso electoral. En lugar de procederse así se permitió que la propaganda contraria actuase como eficaz disolvente.

El PCB moscovita, actuando siempre a través del FLIN, tomó y distorsionó los datos de las elecciones para acentuar su ataque frontal contra el CODEP, el trotskysmo y el PCB pekinés. "El Pueblo" del 9 de julio de 1966 contiene comentarios como los siguientes:

"En consecuencia -se dice en una nota titulada 'Derrota del voto en blanco'- no se puede decir que aquellos pregoneros de la abstención hubieran salido gananciosos con su postura que reflejaba y refleja su impotencia para que puedan participar en un vasto movimiento democrático donde las masas encuentran el camino que deben seguir; por el contrario, este porcentaje de baja significación expresa la realidad de que la ciudadanía boliviana se inclina más hacia el camino de las soluciones democráticas, antes que a la aventura impotente.

"¿Cuántas son las organizaciones políticas que pueden disputarse el número no crecido

de votos blancos? Allí están el MNR unificado de Siles y Paz Estenssoro, el Partido Demócrata Cristiano y el PRIN, como partidos de peso político y como organizaciones que tienen militancia y que hicieron propaganda con demasiado alarde; luego les siguen los trotskystas del POR, también unificado, y el grupo de nuevos trotskystas llamados "pekineses", todos unidos en una sigla conocida como CODEP, donde están incluidos los grupitos de la burocracia sindical lechinistas, conocida como OSIN, los jóvenes ex-movimientistas intelectualizados de Espartaco y los otros jóvenes todavía no intelectualizados de la llamada FUJA, que reúne a universitarios de diversas capillitas de San Andrés. Planteadas así las cosas, ¿quiénes pueden ser los dueños de las pocas decenas de miles de votos en blanco? Dirán los del MNR unificado que su militancia es la que mayoritariamente ha votado en blanco. ¿O serán los cristianos de Remo y Miguel? Los del PRIN no pueden permanecer callados, también desean llevarse la parte del león; por último los trotskystas de uno y otro modelo, los antiguos y los modernos, quieren sacar tajada del asunto. Ni qué decir de los adolescentes del FUJA, Resultado: cinco partidos y tres grupos no convencieron a nadie".

Desde un punto de vista revolucionario intervenir en un proceso electoral quiere decir estar presentes con un programa y con respuestas políticas y no, precisamente, contar con candidaturas propias. Las elecciones sirven para llegar hasta las masas con respuestas adecuadas al momento que se vive y en función de la finalidad estratégica que se persigue. Las leyes bolivianas obligan a sufragar bajo la pena de sanciones de diversa índole. El voto en blanco o el motivado programáticamente es cosa muy diferente a no participar en las elecciones.

Los adversarios políticos de quienes propician el voto en blanco se esmeran en confundir a éste con la abstención porque así tienen allanado el camino para sindicarse a aquellos de ultraizquierdistas o anarquizantes.

Muchos de los componentes del CODEP no veían más que el camino democrático y no eran capaces de ligar el método electoral con la acción directa de las masas. Ellos contribuyeron al aflojamiento de la organización frentista, que dio pruebas evidentes de su capacidad para movilizar a las masas. En el aniversario del 9 de abril se realizó una imponente manifestación, disuelta a bala por efectivos del Ministerio del Interior (encabezados por el mismo Antonio Arguedas), en las proximidades de las oficinas del Servicio de Tránsito. Con la finalidad de hacer conocer la táctica electoral, fue convocado un mitin en el cine Roxi, cuyas puertas permanecieron cerradas por orden policial. El considerable número de asistentes se concentró frente a las graderías de la calle Pichincha, donde hicieron uso de la palabra representantes de obrero! y campesinos. Pero, resultaba evidente que estas acciones callejeras no eran garantía de una segura victoria electoral, se puede decir que las circunstancias empujaron prematuramente al CODEP a la batalla electoral y ésta le fue adversa.

El gobierno tenía decidido aplastar al CODEP en sus primeros pasos y contaba para esta finalidad con la ayuda del stalinismo pro Moscú. El retardo en el entroncamiento con las masas se convirtió en su lado más débil.

Finalmente, los celos y el sectarismo de los pekineses concluyeron estrangulando un

frente que nació auspiciosamente. La dirección era rotativa. Cuando el PC-ML debía poner la presidencia en manos de los trotskystas, sencillamente no convocó más a reuniones, motivando un rápido desbande. Se puede concluir que los pekineses llegaron al convencimiento de que no podrían crecer con ayuda de la muletilla del CODEP y menos sobreponerse a sus adversarios trotskystas. Las sucias maniobras del PC-ML contaron con la complicidad de Lidya Gueíler del PRIN.

Que sepamos, en el seno de la izquierda no se ha realizado un balance crítico de esta experiencia, que tuvo la ventaja sobre el FRA, por ejemplo, de haber nacido entroncado en los sectores más interesantes de la clase obrera.

Entre los factores que conspiraron contra el CODEP debe también mencionarse la frustración sufrida con motivo del congreso constituyente de la OLAS y que, en gran medida, fue consecuencia de la irresponsabilidad de los pekineses. Conocida la convocatoria a La Habana a todos los movimientos antiimperialistas, para aunar esfuerzos y coordinar la lucha revolucionaria en el marco continental y de los países atrasados, el CODEP creyó que era su obligación elemental asistir a ese encuentro, a fin de poderse integrar de manera efectiva al movimiento antiimperialista mundial.

No se trataba de arriar banderas y entregarse al castrismo, sino de discutir una verdadera estrategia revolucionaria. Por lo menos los trotskystas habían expresado públicamente sus reparos a la dirección de la revolución cubana, desgraciadamente confirmados con el correr del tiempo. En ese entonces estaba en tela de juicio la política interna y la táctica foquista y no la política internacional timoneada por Fidel Castro, que ha concluido revisando sus posiciones radicales, adoptando posturas moderadas, entregándose a la tutela rusa, a fin de poder lograr un entendimiento con el imperialismo norteamericano, el opresor y explotador del continente.

La invitación le llegó al CODEP a través de los canales chinos, que tomaban parte en el comité organizador. La delegación fue designada democráticamente; todas las tendencias estaban representadas en ella sin ninguna limitación. Posteriormente hubieron maniobras encaminadas a eliminar a los trotskystas de la delegación y que, finalmente, no prosperaron.

Los pekineses ocultaron al CODEP la verdadera relación de fuerzas dentro de los organismos que retenían en sus manos la organización y control del encuentro de La Habana. Los soviéticos habían logrado alinear a su favor al castrismo en la lucha contra los seguidores de Mao, esto pese a que Cuba estaba más cerca de Pekín que de Moscú, debido a las posiciones radicales sostenidas por los dos primeros. De conocerse todos estos detalles acaso se hubiera acordado no asistir a la Tricontinental, sobre todo porque no había forma de zafarse de la pugna entre los dos colosos del mundo stalinista.

La delegación del CODEP encontró las primeras dificultades en México (el viaje por esa vía resultó sumamente perjudicial para los delegados, pues fueron debidamente fichados por los servicios de inteligencia controlados por los yanquis) y se tuvo que realizar una seria larga de trámites para lograr la visa de ingreso a la capital del

foquismo. Ahora se puede afirmar que la autorización fue dada no por consideración al CODEP, sino para evitar cualquier tipo de propaganda contra la reunión de La Habana y después de que se tenía preparado todo para aislar a la delegación boliviana y reducirla a la impotencia.

En La Habana la delegación del CODEP fue recibida con las debidas atenciones protocolarias e inmediatamente trasladada al Hotel Riviera (la revolución había expropiado la pertenencias de las empresas hoteleras norteamericanas), donde cuidadosamente fue rodeada de un cordón sanitario. El hotel destartalado, donde, sin embargo, era posible descubrir algunas hilachas de su pasada suntuosidad, estaba ocupado por poca gente y algunas de ellas permanecían allí prácticamente recluidas, esto porque las autoridades las habían catalogado como peligrosas en caso de que pudiesen asomar las narices por las reuniones de la Tricontinental. No había aire acondicionado (se dijo que faltaban repuestos de marca norteamericana para permitir el funcionamiento de la maquinaria respectiva), pero sí abundante y variada comida, en contraste con lo que ocurría en el resto de la ciudad, donde todo estaba sometido a un riguroso racionamiento, se podía hasta tomar café a discreción.

Los rusos habían logrado apoderarse de los servicios de inteligencia cubanos y fueron aquellos los que más se esmeraron en inmovilizar a los bolivianos. Después de complicadas tramitaciones con el Partido Comunista cubano se pudo llegar al convencimiento de que el congreso de la Tricontinental no se apartaría un solo milímetro de las decisiones ya tomadas por los castristas. Los cubanos se habían comprometido a trabajar utilizando los canales de los partidos comunistas prosoviéticos, lo que les permitiría continuar reteniendo en sus manos el liderazgo de las luchas revolucionarias en América Latina, a cambio del apoyo a la burocracia del Kremlin en su arremetida contra los chinos.

Los cubanos no tuvieron el menor empacho en hacer saber a la delegación del CODEP que para ellos no existía en Bolivia más partido comunista y revolucionario que el dirigido por el señor Mario Monje, que más tarde fue despiadadamente atacado por traidor por el mismísimo Fidel Castro; la decisión autocrática del PCC suponía que el CODEP no podía asistir a la Tricontinental; en efecto, no se le permitió ni siquiera traspasar los muros del Hotel Habana Libre, convertido en escenario del mencionado congreso.

Así, burocráticamente, fue decretado el aislamiento del movimiento antiimperialista continental del prometedor frente de los partidos de izquierda de Bolivia, el más serio esfuerzo, hasta ese momento, hecho para poner en pie el frente antiimperialista políticamente dirigido por la clase obrera. Es bien sabido que la OLAS, precisamente por su marcado sectarismo y por la influencia del stalinismo moscovita en su seno, no pudo convertirse en realidad.

En La Habana se recibió una nueva muestra de las enormes posibilidades que tenía el CODEP para convertirse en un polo aglutinante de las tendencias de izquierda. Los estudiantes bolivianos que se encontraban becados en esa ciudad (habían recibido la beca por ser izquierdistas o se convirtieron en tales después de su arribo a Cuba),

expresando su adhesión a dicho frente y ansiosos de discutir con ellos los problemas de la revolución boliviana. Los cubanos se limitaron a prohibir toda reunión de los indicados estudiantes con el CODEP. Los castristas no estaban dispuestos a discutir con los revolucionarios latinoamericanos, se limitaban a imponerles despóticamente sus decisiones.

Un buen día se notificó a los bolivianos que debían abandonar el país a fin de evitar ulteriores complicaciones en el transporte; la notificación venía acompañada de los respectivos pasajes de avión. Los delegados del CODEP salieron por el Canadá rumbo a Europa. Mientras ellos volaban, Castro tronaba contra el trotskismo e incitaba a los guerrilleros a expulsarlos de sus filas. De mala fe confundía a los payasos posadistas (una acentuación hasta el ridículo de las posiciones pablistas) con los seguidores de León Trotsky.

Los resultados negativos de la reunión de La Habana se convirtieron para la joven organización boliviana en una especie de muro infranqueable que la separaba de las masas, particularmente de las estudiantiles, tan vivamente impresionadas por la constitución de la OLAS.

Paradójicamente, los foquistas iniciaron sus pasos bajo el amparo de los moscovitas, sus adversarios de derecha, recorriendo los canales señalados por ellos y elaborando sus planes de acuerdo con las informaciones interesadas que les proporcionaba el ojo de Moscú. De manera consciente se abandonaron en brazos de sus verdugos y así prepararon las condiciones para la derrota. Los foquistas de la primera época no ocultaron su furioso anti-trotskyismo; era la orden venida desde La Habana y que complacía en gran manera al stalinismo, que en Bolivia colaboraba estrechamente con el Ministro de Gobierno Antonio Arguedas, agente confeso de la CIA.

La política frentista en Bolivia venía desde muy lejos. Después de la Guerra del Chaco se vio fortalecida. Con todo, aparecía como un "frente revolucionarios", pero no como un frente de las clases sociales que componen la nación oprimida. Durante el sexenio (1946-1952) fue lanzada la consigna del frente antiimperialista, pero no se subrayó la necesidad de que estuviese dirigido políticamente por el proletariado.

El CODEP constituyó, pues, el punto culminante de toda esta tradición y, al mismo tiempo, su superación.

3

Insurgencia foquista

Durante el gobierno de Barrientos y cuando ejercía las funciones de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el general Alfredo Ovando C., se desarrollaron las operaciones protagonizadas por el foco armado organizado y dirigido por Ernesto Che Guevara. Así el territorio boliviano del sudeste (serranías abruptas, de clima tórrido y cubiertas de monte bajo y espinoso) se convirtió en escenario del ensayo

foquista más perfecto, esto por haber sido realizado por su teórico más y contando con todos los recursos materiales imaginables. Los movimientos de una treintena de cubanos y de algunos bolivianos se hicieron públicas el 7 de noviembre de 1966. Estos acontecimientos coincidieron con la agitación social que ganaba las ciudades y los centros de trabajo y contribuyeron, en cierta medida, a acentuarla. Se trató de una mera coincidencia y no de la deliberada búsqueda de una situación política favorable para el estallido de las acciones armadas. Coyuntura tan excepcional no volvió a presentarse posteriormente. Las masas se encontraban en franca lucha contra el gobierno Barrientos y no pudieron menos que ver con simpatía lo que sucedía en Ñancahuazú, aunque no comprendían en toda su significación los acontecimientos que se desarrollaban. Los sectores más radicalizados y esclarecidos del movimiento de masas -mineros y universitarios- no ocultaron sus sentimientos y, contrariamente, exteriorizaron su apoyo a la lucha armada. En realidad, y contrariamente a lo que sostienen Augusto Guzmán y otros, no eran los agentes del Che los que crearon este estado de cosas, sino que el desarrollo de la política interna del país, que en momento alguno fue tomado en cuenta por los foquistas (estos se preocuparon únicamente de perfeccionar técnicamente a su pequeño grupo), evolucionó hacia los canales de una profunda y vasta movilización de masas que coincidió con el estallido de las acciones armadas. Sabemos ahora que esto se debió, más que al cumplimiento del programa de acción de los foquistas, a las operaciones realizadas por el ejército. Esta situación objetiva abrió la excepcional coyuntura para que el foco armado pudiese soldarse con el ascenso revolucionario de los explotados, convertirse en una de sus manifestaciones, es decir, de foco en auténtica guerrilla, cosa que no ocurrió en ningún momento. No nos engañemos, los foquistas no buscaron ni se encaminaron hacia este objetivo, vivieron, lucharon y murieron encerrados en los estrechos límites del esquema que habían elaborado a priori: utilizar a Bolivia como puente para el establecimiento de un eje foquista que uniese la Argentina con el Perú. Se descubre de lejos que el esquema no tuvo en cuenta para nada el desarrollo de la conciencia del proletariado en escala continental (sabemos que se trata de un proceso por" demás desigual), sino que partía de la certeza de que la larga acción armada permitiría sustituir las condiciones subjetivas de la revolución con la heroicidad de los elegidos de la gloria. La orientación política del Che y la rápida liquidación del grupo armado de Ñancahuazú impidió la transformación del foco ubicado en el Sudeste del país en una manifestación armada integrante del gran ascenso de las masas explotadas. No habría dejado de ser paradójico que el mismo teórico de las bondades ilimitadas, y sobrenaturales del foquismo hubiese contribuido a negarlo en la práctica. Los izquierdistas pequeño-burgueses sacaron una conclusión arbitraria de todo este proceso: interpretaron la actitud de los trabajadores mineros y de las masas explotadas de las ciudades como una incondicional adhesión al método de lucha y a las concepciones políticas del castrismo y también como un abandono de su línea política tradicional, calificada como de auto-defensa.

La vanguardia del movimiento obrero había participado de alguna forma en la discusión acerca de la naturaleza, limitaciones y desviaciones del foquismo, con referencia a la concepción marxista de los métodos de lucha. La crítica del foquismo, no bien apareció el folleto del Che Guevara sobre las "guerrillas", fue llevada a cabo por el trotskismo (distingue el foco propiamente dicho de la guerrilla como una de las

manifestaciones de la lucha de las masas). A pesar de que el stalinismo pro-Moscú dio pruebas inequívocas de su oposición al foquismo desde posiciones derechistas, "tácticamente" creyó conveniente callarse y dar, más bien. La impresión de que apoyaba las acciones del castrismo; la maniobra concluyó en una vulgar traición a las promesas hechas de mala fe. Todo esto fue denunciado por Fidel Castro en persona desde La Habana. No es, pues, casual que el foquismo hubiese motivado una profunda crisis en las filas stalinistas. Contrariamente, el POR se fortaleció y estructuró en el calor de la batalla contra el aventurerismo pequeño-burgués y que entronca en las más recias tradiciones del bolchevismo.

A diferencia de lo sucedido en otras latitudes, el castrismo tuvo en Bolivia poca influencia, si se considera que fue el escenario de las andanzas del mismo. Guevara y que sus actividades quedaron prácticamente circunscritas al ámbito estudiantil; inclusive en este sector ganó terreno rápidamente la crítica a la táctica foquista.

Lo esencial del reparo opuesto al foquismo se refiere a que se trata de una forma de lucha concebida y ejecutada a espaldas de las masas, que no responde a la necesidad de éstas de vencer los obstáculos que encuentran en su camino, sino a la voluntad de direcciones políticas que son extrañas a los explotados. En otras palabras, su defecto principal radica en que es un núcleo extraño al proletariado, aunque se reclame de éste y aunque esté constituido por obreros. Su actuación no se subordina a consideraciones políticas y al estado de ánimo de los explotados, sino a esquemas puramente técnicos. Los más inclinados al marxismo han pretendido ver en el foco al verdadero partido revolucionario de nuestra época o su núcleo generador más importante. No siendo la expresión de la conciencia de clase ni el elemento propulsor básico de ésta, no puede sustituir ni dar origen al partido de la clase obrera.

4

Jerarquía castrense y CIA

El 20 de agosto de 1968 fue sorprendida la población con la lectura, a través de una radioemisora paceña, de una proclama subversiva firmada por el general Marcos Vásquez Sempértegui, hasta la víspera uno de los jefes militares protegidos por el Presidente Barrientos y que logró escalar altos cargos en la jerarquía castrense. Se pudo comprobar que los elementos que montaron el aparato conspirativo dependían directamente de la CIA, que, después de haber colocado a Barrientos en su lugar de incondicional instrumento de la política norteamericana, abandonaron al subvertor a su suerte. Fue apresado y bestialmente golpeado, malherido concluyó con su humanidad en el extranjero, después de deambular por varios países volvió a reaparecer como encargado de personal de un ministerio durante el gobierno del general Hugo Bánzer. Vásquez Sempértegui confesó amargado, desde el ostracismo, que fue engañado por políticos y universitarios que le habían ofrecido su incondicional apoyo. Todo quedó como una revuelta sin trascendencia. Seguramente los políticos, que afanosamente buscaban el medio de derrocar a Barrientos, vieron con mucha simpatía que uno de los engranajes de la maquinaria militar se rebelara contra el despótico presidente.

Con todo, la fallida conspiración de Vásquez Sempértegui constituye uno de los

factores que permite explicar el trágico destino del general Barrientos. Este último se encaminaba a consolidar un régimen dictatorial de tipo personal, que sólo podía darse si lograba mantener su control sobre las Fuerzas Armadas, consideradas como el partido político eje de los gobiernos castrenses. La experiencia le enseñó que el control del ejército equivalía a conservar la lealtad de los mandos más importantes y a neutralizar a los conspiradores uniformados (manteniéndoles en minoría con referencia al resto del ejército, haciendo abortar sus trajines golpistas o bien anulándolos con la tentación de las funciones gubernamentales o los cargos diplomáticos), pero el apoyo real sólo podía venir de fuerzas estructuradas alrededor de la persona del caudillo. Barrientos se asentaba en las bayonetas del FURMOD y del CITE, la primera una organización de inconfundibles rasgos pretorianos. Trabajaba incansablemente para fortalecer su propia fuerza de choque, que le permitiese mantener a raya a todo elemento que pretendiese oponerle la capacidad de fuego del ejército regular y a quienes soliviantasen a las masas, que tan empeñosamente acentuaban su posición opositora. Al mismo tiempo, consideraba que otro de los elementos de su fortaleza política radicaba en el apoyo de las organizaciones campesinas y en su capacidad de rápida movilización. No podía menos que haber llegado al convencimiento de que las medidas puramente represivas del movimiento obrero habían fracasado, pues éste levantaba la cabeza una y otra vez y siempre de manera más amenazadora. El empleo de la violencia material debía estar acompañado de medidas políticas atrevidas.

Tenía Barrientos como a su más grande competidor, fuertemente entroncado en el ejército, al general Ovando Candia. No era peligroso únicamente por su indiscutible felonía y astucia, sino porque en ese momento tenía la posibilidad de arrastrar detrás de sí al grueso de las Fuerzas Armadas. Pretextando el precario estado de su salud, realizó una retirada estratégica a los Estados Unidos, para poder, en realidad, observar con tranquilidad el desarrollo de los planes que había puesto en marcha dentro del país y asegurarse el respaldo del Pentágono y la CIA.

En los medios políticos bien informados e inclusive en el grueso de la población sostenía que el general Barrientos ultimaba los detalles para dar un sensacional golpe político con motivo del Primero de mayo de 1969. El Presidente boliviano buscaba solucionar heroicamente muchos de los problemas que le atormentaban: mantenerse indefinidamente en el poder y destruir políticamente a su adversario (había jurado varias veces que Ovando no llegaría al Palacio de Gobierno), asegurar su imagen de gran caudillo latinoamericano, volcar a las masas obreras en su favor y liquidar físicamente a la dirección de la izquierda marxista. A estar con esos informantes, Barrientos tenía decidido declararse dictador, tomar medidas económico-sociales mucho más radicales que las adoptadas por el general peruano Velasco Alvarado (llegado al poder en octubre de 1968) y pasar por las armas a por lo menos cien dirigentes izquierdistas (intelectuales y obreros).

El 12 de marzo de 1971, un año después del misterioso asesinato del periodista Alfredo Alexander (14 de marzo de 1970), publicó "Hoy" de La Paz las sorprendentes declaraciones del súbdito alemán Richard Herber, estrechamente vinculado a los servicios de inteligencia de países extranjeros y asiduo cliente de los recintos policiales, relacionadas con una serie de crímenes políticos que se entrecruzan con la política boliviana después de 1964. En un párrafo de las mencionadas declaraciones se lee:

"H.- Barrientos quería declararse dictador.

"P.- ¿En qué época?

"H.- Cuatro meses antes de su muerte. Para ello tenía que eliminar físicamente a

Ovando. Para eso creó FURMOD. El primero de mayo tenía que declararse dictador. Seguramente llegó a oídos de Ovando y él decidió eliminar a Barrientos. Yo les voy a decir ahora, se trata del capitán que era Ayudante del General Ovando, es el capitán Faustino Rico Toro.

"P.- ¿De qué manera llegaron a enterarse de los preparativos para el asesinato del general Barrientos?

"H.- A mi me lo contó un miembro de la guardia de seguridad de Barrientos. Es posible que Rico Toro también hubiera sido autor del asesinato de Otero.

"P.- ¿Eran oficiales de la Guardia de Barrientos?

"H.- Pueden ser dos militares de la guardia de Barrientos o de la Fuerza Aérea o puede ser el teniente Chirique. Eso lo digo porque Chirique trató de victimar a Arguedas".

Esta versión, si se le quita sus contornos truculentos y los nombres citados y otros detalles, flotaba en el ambiente y el hombre de la calle estaba seguro que el general Ovando en alguna forma contribuyó a la desaparición de Barrientos. La aparición del súbdito alemán en el escenario fue obra del Ministro del Interior Gallardo, que pensaba que así podía arrinconar a la derecha militar, en ese momento muy activa en sus trajines conspirativos.

La verdad es que en uno de sus numerosos viajes, el general Barrientos dejó de existir en una quebrada abrupta de Arque, como resultado de un accidente de su helicóptero. Si su muerte fue obra de un atentado, éste sólo pudo ser consumado por la CIA o con permiso de ella. Posteriormente, se comprobó, en necropsia de sus restos, que no le había alcanzado ningún proyectil. El accidente ocurrió el 27 de abril de 1969.

Ovando retornó rápidamente de los Estados Unidos y en Cochabamba se hizo proclamar sucesor de su enemigo y "líder" de turno de los campesinos. Esperando dominar toda la situación y convertirse en caudillo indiscutido, aconsejó respetar la Constitución y permitir que el Vicepresidente Siles Salinas ocupase el lugar del occiso.

5

El "demócrata" Luis Adolfo Siles

Luis Adolfo Siles no podía escapar del puño de acero del ejército y ni siquiera emanciparse de la herencia del arbitrario general Barrientos, lo que tenía algún significado para quien se precia de ser hombre de derecho. Dirigente del diminuto pero influyente Partido Social Demócrata, formado por la crema de los capitalistas bolivianos y seriamente comprometido con los intereses foráneos ¹, buscó infructuosamente imprimir su propia huella en los acontecimientos. La casi ninguna trascendencia de su paso por el poder es sólo un reflejo exacto de la insignificancia de la burguesía industrial boliviana: no puede señalar rumbos distintos a los ya fijados por el imperialismo. En política no ha podido jugar un rol definitivo porque en ningún momento ha tenido la capacidad ni posibilidades de convertirse en el caudillo nacional.

1-El inocuo Robert J. Alexander ("La Revolución Nacional Boliviana") está totalmente equivocado cuando sostiene que el PSD fue "fundado por un grupo de jóvenes social cristianos y marxistas". Nos parece que este, autor ha hecho una deducción puramente mecánica de... nombre de dicho partido.

Hizo un gobierno tolerante y en lo posible legalista. Después de su caída confesó que desde el primer momento Ovando no le dejó gobernar con sus trajines golpistas. Para muchos el gran mérito de quien parece ya haber sido olvidado por la historia, consistió en su terco afán por permanecer apegado a la ley, la verdad es que no encontró fuerza social alguna, si se exceptúa a la reacción rosquera, en la cual apoyarse. "Fue un hombre que llegó a la Presidencia por las vías constitucionales, que hizo cuanto tuvo en su mano para ceñir sus actos a la ley, que obró con honradez ejemplar, que no reaccionó con odio ni con venganzas... Un gobernante que se retira sin que se levanten contra él quienes lo acusen de falta de honradez o que lo miren con odio Luis Adolfo Siles ha caído pero no con vergüenza" ².

Siles Salinas, que conocía perfectamente los trajines conspirativos de Ovando y los observaba impotente, sabía lo que le esperaba, por esto pudo decir: "Entré solo al gobierno y seguramente saldré solo". Fue Presidente por el acaso y no porque encarnase una poderosa fuerza política o hubiese alcanzado a ser un carismático caudillo. "Era acaso el único gobernante solitario, sin una fuerza política organizada y de significación que lo respalde, los pocos hombres que se agruparon alrededor de su figura, lo hacían empujados por las ventajas del poder" ³.

Con todo, quiso hacer su propio juego, dividir a las Fuerzas Armadas y oponer a Ovando un otro candidato militar capaz de ensombrecer a aquel con su prestigio. Para nadie era un misterio que el Presidente alentaba la campaña proselitista del general Escóbar Uría, que con su incansable trabajo desde la Alcaldía Municipal paceña había logrado ganar muchos adeptos. El año 1970 fue señalado para el verificativo de las elecciones y los candidatos se lanzaron eufóricos a realizar su campaña a lo largo del país. Pocas horas antes de su caída, Siles Salinas anunció la realización de elecciones municipales como paso previo hacia los comicios generales.

La actitud de Siles Salinas sólo puede interpretarse como la decisión del sector de los industriales de zafarse del control secante del general Ovando con ayuda de otro jefe militar al que le prestarían su decidido, aunque no incondicional apoyo.

El MNR, el PRIN y el PDC afanosamente discutían los lineamientos de un acuerdo electoral, que, ni duda cabe, habría tenido alguna influencia en los centros urbanos y en los campamentos mineros. El general Escóbar tenía posibilidades de penetrar en el agro y dividir el voto campesino, considerado como el factor decisivo en toda elección. De esta manera el general Ovando corría serios riesgos, en el mejor de los casos (una victoria de ninguna manera aplastante) sería elegido Presidente de la República muy difícilmente. Contando con el apoyo del Alto Mando Militar no tenía más camino que eliminar a Siles Salinas, que se había convertido en un obstáculo para sus ambiciones.

El candidato de las Fuerzas Armadas no ocultó sus intenciones. En un discurso pronunciado en Santa Cruz expresó que el ejército sabría jugar su rol histórico si llegaba el caso de que el resultado de las elecciones pondría en riesgo la línea trazada

2- "Presencia", La Paz, 17 de septiembre de 1969.

3- "Primicia", La Paz, octubre de 1969.

a partir del golpe castrense de noviembre de 1964.

Periodistas al servicio de Ovando y del Nacionalismo, que tantos seguidores ha recolectado entre los intelectuales pequeño-burgueses, han recordado, en su afán de justificar históricamente el golpe militar, que Siles encarnaba un "régimen restaurador del pasado, débil, de política vacilante y definida como derechista" ⁴. Contrastando con esta caracterización de su debilidad -Siles hacía el modestísimo papel del ratón tembloroso con el que jugueteaba regalón el gato con charreteras- se le asigna la siniestra misión de desnacionalizar las minas y torpedear la construcción de los hornos de fundición de estaño: "El gobierno (después del 27 de abril de 1969) pasó a manos del vicepresidente de la República, Luis Adolfo Siles Salinas, máximo representante del Partido Social Demócrata, partido del ingeniero Roberto Arce que había estado aplicando, desde 1964, la política contra la nacionalización de minas y, principalmente, la política contra la instalación de fundiciones de estaño estatales en Bolivia, o sea contra el plan del general Ovando.

"Una vez en el gobierno el PSD, la política del ingeniero Arce se profundizó y se iba a completar implacablemente. El retorno de Bolivia a una situación colonial estaba decretado. Conspicuos miembros que habían servido a la derecha, en aquello que se llamó "tiempos de la oligarquía", gobernaban el país. Las instituciones del Estado estaban dirigidas por esos personajes, y el país todo iba por un camino contrario a su destino".

Todo lo anterior parece haberse dicho para poner de relieve que Ovando era nada menos que el abanderado de las nacionalizaciones y de los hornos de fundición, que encarnaba la revolución y que por eso se oponía al derechista Siles: "Ovando impulsó, con pocos civiles revolucionarios, la negociación para instalar en Bolivia los hornos de fundición de estaño del Estado, como obra básica para solucionar el problema nacional.

"En agosto de 1966, Ovando entregó la Presidencia al general Barrientos, elegido primer mandatario en elecciones. Ovando se mantuvo como primer jefe de las Fuerzas Armadas, pero, en ningún momento, dejó de alentar las fundiciones de estaño, que empezaron a levantarse en Vinto".

Se trata de conclusiones interesadas, pues el general Barrientos tuvo su parte en el programa de las fundiciones de estaño; sin embargo, se da a entender todo lo contrario, pues se dice que si "desde agosto de 1966, la política de las fundiciones estañíferas marchaba bien" -se añade que esto era sólo aparente- "otra política económica tendía a torpedear esa instalación que, indudablemente, constituye la base de la independencia económica de Bolivia".

El sabotaje a las fundiciones estaba representado por el ingeniero Roberto Arce, asesor del general Barrientos: "posiblemente no comprendía que la política minera

del ingeniero Arce estaba llevando sus buenas intenciones hacia el fracaso más absoluto". Debemos añadir que el 27 de abril de 1969 Ovando se declaró el continuador 4- "Confirmado Internacional", La Paz, octubre de 1969.

de Barrientos.

Cuando ya el piso se movía amenazadoramente bajo los pies del Presidente, éste volvió a reiterar su confianza en las fuerzas armadas y en su apego a la ley. Con todo, presa de vacilaciones y temores se fue a Santa Cruz con algunos de sus colaboradores. Al recibir la noticia del golpe de Estado se refugió en una casa particular y se tomó el tiempo necesario para convencerse que estaba perdido. Cuando nadie salió en defensa de la legalidad que representaba, tomó una avioneta el día 28 de septiembre y se trasladó al puerto chileno de Arica.

Augusto Guzmán, cuyo pensamiento y limitaciones se acomodaban perfectamente al democratismo de Siles, apenas si le dedica ocho líneas de su "Historia de Bolivia" de 465 páginas: "Luis Adolfo Siles Salinas, abogado, profesor universitario y político, nació en La Paz el año 1924. Ejerció la presidencia de abril a septiembre de 1969. Trató de completar el período del general Barrientos dentro la misma orientación política con un estilo legalista. Fue derrocado por un golpe militar notoriamente preparado en el comando de las fuerzas armadas".

Más para notificara la población acerca del advenimiento del nuevo estado de cosas que para amedrentar a los adversarios políticos, las tropas del ejército ocuparon los lugares más visibles de la ciudad de La Paz. Nadie atinó a salir en defensa del Presidente derrocado y su mismo partido tardó bastante en publicar la siguiente protesta:

"El Comité Nacional del Partido Social Demócrata ha preferido postergar hasta ahora la emisión del presente comunicado respecto de los acontecimientos políticos en vista del duelo nacional que acongoja a la Nación con motivo del accidente de aviación del Lloyd Aéreo Boliviano, pero considera que no es posible retener más tiempo la declaración contenida en los siguientes puntos:

Repudiar el golpe militar que ha roto la continuidad institucional del país en circunstancias en que el Presidente de la República ratificó su confianza al Comandante en Jefe y el Canciller de la República reafirmó en la más alta tribuna mundial, la Asamblea de las Naciones Unidas, la fe institucionalista de la Fuerzas Armadas.

Rechazar las imputaciones del "Presidente Revolucionario" general Alfredo Ovando quien, como justificativo del cuartelazo ha expresado que la "derecha afirmaba su posición y buscaba someter a la Nación a los monopolios extranjeros". Esta afirmación es absolutamente falsa ya que durante el régimen del Presidente Constitucional Dr. Luis Adolfo Siles S. no se enajenó ningún recurso natural. Por el contrario, fue durante el gobierno provisorio del general Alfredo Ovando C., cuando éste definió su posición al entregar la mina Matilde a un consorcio extranjero, en condiciones contractuales que el Dr. Siles Salinas se proponía modificar tal como lo anunció oficialmente.

"El Comité Nacional del PSD emplaza al general Ovando a probar su acusación.

"Esta acusación no constituye sino una cortina de humo para ocultar la verdadera razón del cuartelazo que fue el hecho de que el general Ovando, huérfano de opinión,

vio perdida su elección presidencial.

Aunque la historia se encargará de dar su veredicto final sobre el corto paso del gobierno presidido por el Sr. Luis Adolfo Siles Salinas, entre los meses de mayo a septiembre del presente año, el Comité Nacional considera necesario señalar algunas de las realizaciones importantes logradas en los cinco escasos meses de su actuación:

“Asignación a YPF de todas las reservas fiscales y áreas libres potencialmente petrolíferas del país, haciendo imposibles nuevas concesiones a intereses privados y cancelando en el hecho el entreguista Código del Petróleo, cuya “derogación” fue pomposamente anunciada después por el “Gobierno Revolucionario”. Obtención de la entrega gratuita por parte de la Gulf Oil Co. de un volumen considerable de gas, el cual representará una poderosa palanca para promover la industrialización del país.

“Negociaciones ya avanzadas con Bolivian Gulf Oil Co, para implementar al máximo la participación del Estado en las utilidades de la empresa. Seguramente al concluir dichos acuerdos en poco tiempo más, el “Gobierno Revolucionario” se atribuirá también este éxito.

“Fiscalización de la Bolivian Gulf Oil Co., por intermedio de la empresa auditora para evitar la evasión de sus tributos.

“Aprobación de los planes de la Corporación Minera par la instalación de una fundición de bismuto en el sud de la República.

“Creación de la “Corporación de Desarrollo Rural” que permitirá profundizar la Reforma Agraria dándole su verdadero sentido económico y social y convirtiendo al campesino en un positivo factor de producción y de consumo.

“Iniciación de relaciones diplomáticas y comerciales con países del área socialista como la Unión Soviética, Checoslovaquia, Rumania, etc.

“La administración del Presidente Siles Salinas fue un régimen de libertad de garantías; de respeto a la dignidad humana y al derecho de libre expresión en una medida sin precedentes en los últimos tiempos. El Dr. Siles Salinas, con su amplia sensibilidad social, había llegado a todos los sectores populares, a quienes otorgó las más amplias garantías para la libre acción sindical.

“Se mantuvo dicho régimen a pesar de la constante acechanza de la subversión y la traición que el Presidente denunció varias veces.

“Finalmente, el Comité Nacional del PSD reafirma su solidaridad con el Dr. Siles Salinas y con los actos de su gobierno, caracterizado por la más intachable moralidad y rectitud legalista. Asimismo, reafirma su fe inquebrantable en el respeto a las normas constitucionales y en su credo socialdemócrata como el mejor medio para asegurar el desarrollo integral del país al margen de la violencia, en el ambiente de armonía, trabajo y concordia que busca todo el pueblo de Bolivia, campesinos,

obreros, militares de honor, clase media, artesanos, profesionales, universitarios y gente de empresa para realizar sus anhelos de paz, de justicia y de progreso.

La Paz, 9 de octubre de 1969”⁵

6

El cuartelazo del 26 de Septiembre de 1969

El cuartelazo comenzó a las dos de la madrugada y a las once del día 26 de septiembre todo el país estaba controlado por el nuevo gobierno. Las Fuerzas Armadas, en un mensaje especial, hicieron saber a los bolivianos que ellas habían tomado el control del aparato estatal. Ese mensaje ingresa a la historia con el nombre de “Mandato Revolucionario” y que, por tanto, debía extenderse como un programa del que no podían salirse los gobernantes. Reproducimos todo el texto:

“Las Fuerzas Armadas de la Nación mediante esta decisión institucional, se ponen al servicio de la Revolución y comprometen su concurso en la lucha por la justicia social, por la grandeza de la patria y por la auténtica independencia nacional hoy en riesgo de zozobrar por el sojuzgamiento extranjero.

“Las Fuerzas Armadas advierten la necesidad inaplazable de enfrentar la anarquía desde un gobierno verazmente revolucionaria que oponga la revolución integral al simple uso de la violencia que se agota en sí misma; que realice una rápida y profunda transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales para enfrentar la dependencia, la pobreza, la desorientación y la ignorancia. Sólo un gobierno semejante podrá evitar la polonización y la vietnamización de Bolivia y una nueva y estéril inmolación fratricida.

“Se instituye el Poder Revolucionario para poner fin a un orden pseudo democrático, antinacional y falsamente estable, caracterizado por:

“La intervención armada extranjera en forma de guerrillas, que intenta suplantar la necesidad y voluntad de cambio de nuestros compatriotas por la acción terrorista que ignora nuestra tradición revolucionaria y pretende mutilar el derecho que los bolivianos tenemos a determinar nuestros propios caminos de cambio y de independencia.

“La existencia de un gobierno que, infiltrado por la “rosca” e ideológica y prácticamente dependiente de la reacción y la derecha, está descalificado para librar la batalla nacional contra la aventura terrorista y contra el atraso y la dependencia. Su permanencia en el poder, en oscura, contradictoria e indirecta connivencia electoralista con grupos

políticos pseudo izquierdistas habría agravado la descomposición política y social del país y creado las condiciones para el retorno a un orden de gobierno ya superado y que se caracterizó por sus resultados de ruina y de mayor dependencia.

5- “Los Tiempos”, Cochabamba, 11. de octubre de 1969.

“La pretensión de imponer a las Fuerzas Armadas una conducta de prescindencia y de neutralidad y de someternos a la pasiva expectación de una competencia electoralista de la que no surgiría un Estado vigoroso con capacidad de acción revolucionaria orgánica. La aceptación de esta conducta habría demostrado a la Institución Militar como imprevisora, indigna de su responsabilidad o ignorante de la compleja realidad social.

“La comprobación de la existencia de un plan antinacional por el que, con el estímulo del Poder Ejecutivo, se intentaba un enfrentamiento entre civiles y militares con el propósito de evitar la integración política de las fuerzas revolucionarias. Este plan buscaba aviesamente una alternativa electoral para la derecha y la consolidación de su poder económico y político, sin advertir que su ejecución favorecía al aventurerismo de la izquierda infantil y a los traidores de la Revolución Nacional.

“En consideración de estas circunstancias y convencidas de que sin su intervención la Patria habría sido arrastrada a la contrarrevolución o a la anarquía, las Fuerzas Armadas de la Nación han decidido encomendar al general Alfredo Ovando Candia, por su probada posición revolucionaria, su ejemplar trayectoria militar y su experiencia y dotes de estadista, la presidencia y organización de un Gobierno Revolucionario civil militar que procure la unidad nacional y la integración de los trabajadores, campesinos, intelectuales y soldados, en la gran línea del nacionalismo económico, la justicia social y el desarrollo liberador.

“El desarrollo de un país que, como Bolivia, pertenece al área de la miseria y la dependencia no puede basarse en un sistema exclusivamente capitalista ni en un sistema excluyentemente socialista, sino en el modelo revolucionario nacional, donde coexiste la propiedad estatal, la propiedad social cooperativa y comunitaria de los medios de producción y la propiedad privada.

“La opresión externa afecta a todas las clases sociales y deforma el ser nacional. De esta realidad surge la necesidad de la alianza social por la Revolución Nacional que es la vía del desarrollo e independencia de los pueblos pobres del mundo.

“El desarrollo no es un fin en sí mismo, por cuya obtención deban sacrificarse la dignidad humana y la soberanía nacional, sino un instrumento para la conquista de la independencia nacional y la implantación de la justicia social en Bolivia.

“Guiada por estos principios, la acción nacional del Gobierno Revolucionario deberá encausarse en las siguientes direcciones en procura de estos objetivos:

“1. Asegurar la soberanía de la Nación sobre las fuentes de producción del país. En resguardo de este objetivo, recuperar las riquezas naturales enajenadas en condiciones lesivas al interés nacional o disponer una justa participación del Estado en la explotación de las mismas.

“2. Consolidar, extender y diversificar la industria minera; asegurar el establecimiento de fundiciones y refinerías para los minerales de producción nacional y procurar el

establecimiento de la industria pesada.

"3. Planificar y ejecutar una política económica que tienda a la sustitución del financiamiento externo, incentivando la capacidad económica reproductiva nacional.

"4. Definir una política monetaria en consonancia con el Plan General de desarrollo económico nacional. Racionalizar las importaciones y determinar un orden prioritario y selectivo en el empleo de divisas con vista a su mejor utilización en fines reproductivos. Proteger a la Banca Nacional.

"5. Reorganizar la estructura del comercio exterior de minerales y metales.

"6. Proteger el capital nacional y otorgar garantías a la inversión privada extranjera, cuando ésta contribuya real y efectivamente el desarrollo de la economía nacional y en estricta observancia de nuestras leyes.

"7. Proteger la industria nacional y extender la política de sustitución de importaciones.

"8. Adoptar medidas responsablemente eficaces para elevar los sueldos y salarios de los trabajadores mineros y estudiar el pronto mejoramiento y la racionalización del régimen salarial del país.

"9. Velar por el derecho que tiene el obrero de recibir, en justicia, una participación en la utilidad proporcional a su esfuerzo.

"10. Encarar el problema de la desocupación y de la subocupación mediante la adopción de un plan destinado a la creación de nuevas fuentes de trabajo y la sistematización de las existentes.

"11. Desarrollar un plan de construcciones que tienda a eliminar el déficit habitacional, canalizando la política crediticia en el sentido y las posibilidades populares e incentivando la acción directa comunal de autoayuda.

"12. Instaurar un régimen de la más escrupulosa moralidad administrativa y de severo ahorro de recursos materiales y servicios en los sectores de la economía estatizada y de la administración pública.

"13. Reestructurar la economía rural con la organización cooperativa y mecanizada de la explotación agropecuaria y la popularización del crédito agrícola de fomento

"14. Desarrollar como un objetivo nacional prioritario la revolución industrial en la explotación de la agricultura y la ganadería.

"15. Adoptar una política internacional independiente basada en el derecho irrenunciable del "Estado Nacional" a determinar libre y soberanamente su propia política exterior. Establecer relaciones diplomáticas y económicas con los Estados socialistas, relaciones fundadas en el interés recíproco, en la necesidad de cooperación

y resguardando el principio de la no intervención en asuntos internos. Fijar como misión fundamental de nuestra política exterior la contribución del país a la causa de la unidad política y económica de la América Latina.

“16. Sostener el sagrado derecho de la Nación a la reintegración marítima.

“17. Movilizar el país para la lucha contra el analfabetismo, comprometiendo en esta empresa el mayor esfuerzo del Estado.

“18. Defender la cultura del país exaltando los valores de la cultura popular y de la tradición india y mestiza, orientándola hacia la formación, particularmente en la juventud, de una sana conciencia de independencia y orgullo nacionales y de amor a la Patria y al Pueblo.

La Paz, 26 de septiembre de 1969”.

Vale la pena consignar los nombres de los firmantes de este documento, pues muchos de ellos jugaron un rol de importancia en los acontecimientos políticos posteriores.

La lista aparece encabezada por el general de Brigada Juan José Tórres Gonzáles, que un año después llegará a la Presidencia de la República como uno de los hombres de Ovando y, acaso empujado por el desarrollo de los acontecimientos, intentará jugar su propio juego.

Luego siguen los generales de Brigada César Ruiz Velarde; León Kolle Cueto; Rogelio Miranda, que se rebelará, a la cabeza de un grupo uniformado fascista, contra el Presidente Ovando; David Lafuente Soto; Fernando Sattori y el Contraalmirante Alberto Albarracín, que formarán parte del fugaz triunvirato gorila de octubre de 1970; Capitán de Navío Orlando Roca Castedo.

Alfredo Ovando Candia fue declarado revolucionario y estadista por excelencia, cualidades por las cuales el ejército le encargó presidir y organizar un gobierno revolucionario civil-militar. Sin embargo, un año después, y siguiendo una tradición dentro del ejército, esas mismas Fuerzas Armadas decretaron su caída del poder mediante un plebiscito de la alta jerarquía castrense. En 1936, el coronel David Toro fue ungido Presidente por voluntad del Alto Mando Militar y esta misma organización lo depuso un año después; el revolucionario de ayer resultó un traidor. En 1970, el general Tórres llega al poder porque logra inclinar la correlación de fuerzas dentro del ejército en su favor y cae cuando pierde el apoyo de los jefes con mando de tropa. De estos antecedentes es posible sacar una conclusión política de importancia. La declaratoria de revolucionario o contrarrevolucionario ha determinado jefe militar que cumple algún papel político no debe tomarse como una definición ideológica, sino como un simple y necesario pretexto para justificar y encubrir ciertos actos consumados por la jerarquía castrense. Las Fuerzas Armadas carecen de ideología propia y de un programa político, aunque, en ciertos momentos, jueguen un papel partidista, intentando así suplir el vacío político originado en la clase dominante, formado, nutrido y dirigido por ésta, refleja a su modo, es decir de una manera por

demás particular, la lucha de clases. En el caso de nuestro ejército sirve los intereses del imperialismo, de la burguesía nacional y en el futuro, tendrá que disolverse en servicio de la victoria y política proletarias. En ninguno de los casos mencionados elabora una teoría y programas particulares, sino que toma prestadas las ideas de otras organizaciones y movimientos, sin dar mayor importancia a las cuestiones ideológicas y programáticas. Si de una manera general las Fuerzas Armadas no pueden desarrollar consecuentemente una línea política clasista particular, extraña a las clases en pugna dentro de la sociedad; en Bolivia, los sectores uniformados más avanzados se empeñan por sustituir a la pequeña burguesía nacionalista, pues los otros, los gorilas, no son más que dóciles instrumentos en manos de los yanquis, lo que tampoco es una novedad desde el momento que no hace más que reproducir una tradicional conducta de la clase dominante.

El llamado "Mandato Revolucionario" de las Fuerzas Armadas fue un documento cuidadosamente redactado para dar la impresión de que el movimiento de 26 de septiembre estaba dirigido tanto contra la extrema izquierda "aventurera" correo contra la restauración rosquera. Dos eran los destinatarios, diametralmente opuestos, de las frases rebuscadas: el imperialismo norteamericano, al que no había que espantar a fin de que continuasen viniendo los inversionistas, y, por otro lado, las masas mayoritarias, cuyo apoyo se buscaba afanosamente.

Aunque se habla de que el golpe militar estuvo también dirigido contra un gobierno infiltrado por la rosca e ideológica y prácticamente dependiente de la reacción", lo cierto es que se buscó su verdadero justificativo en la urgente necesidad de aplastar a la izquierda extremista y de arrancarle el control de las masas.

La verdadera filiación del gobierno militar se encuentra en el siguiente párrafo:

"El desarrollo de un país que, como Bolivia, pertenece al área de la miseria y la dependencia no puede basarse en un sistema exclusivamente capitalista ni en un sistema excluyentemente socialista, sino en el modelo revolucionario nacional..."

Una postura pretendidamente sociológica, aunque no es más que descriptiva (la miseria y la dependencia), sirve de punto de partida para colocar en el mismo nivel al capitalismo y al socialismo, como sistemas sociales que harían imposible el desarrollo de los países atrasados. Una revolución que desemboque en el gobierno obrero (es esta posibilidad la que niega el Mandato Revolucionario) no depende del mayor o menor grado de miseria de un país, sino de su evolución política, de la madurez de la clase obrera. Si por dependencia se entiende el sometimiento a la explotación y opresión imperialistas, es absurdo sostener que esta situación se convierte en obstáculo insalvable para la búsqueda del socialismo; contrariamente, sólo la clase obrera en el poder puede asegurar se efectivice la liberación nacional como una de las tareas de la revolución acaudillada por ella.

Los jefes militares firmantes del documento definen, de una manera indirecta, lo que ellos llaman nacionalismo revolucionario: sería una línea intermedia entre capitalismo y socialismo, algo así como la "tercera posición" del peronismo y un poco más a la

derecha que las posiciones explanadas por Velasco Alvarado, que se había convertido en el obligado y máximo punto de referencia de todas las posturas nacionalistas. Esta actitud no era ninguna cosa nueva, se trataba de una reiteración del nacionalismo pequeño-burgués, que tenía un indiscutible contenido burgués. Lo que buscaba, en realidad, era el desarrollo del país dentro de los estrechos límites democráticos, capitalistas, reordenando las relaciones con el imperialismo y acentuando las tendencias estatistas que permitiesen poner orden en la economía caótica, lo que importaba meter las manos en los negocios privados.

Las nacionalizaciones fueron presentadas como una excepción de una política de corte capitalista. Si desde este punto de vista el Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas no era más que una prolongación de la política iniciada por el MNR, que, por otra parte, se distinguió por su temeridad verbal, no alcanzó a los proyectos y realizaciones del primer gobierno de Víctor Paz. Se podría argüir que las minas ya estaban estatizadas; pero, resulta difícil cerrar los ojos ante la declaración de que la máxima aspiración del gobierno militar consistía en "recuperar las riquezas naturales enajenadas en condiciones lesivas al interés nacional..." No se trataba, como se ve, de expulsar al capital financiero mediante la estatización de las riquezas naturales que le fueron entregadas, sino anular las concesiones hechas en "condiciones lesivas", lo que llevaba a la conclusión que habían algunas concesiones hechas al imperialismo que por ser beneficiosas debían ser respetadas. Se estaba a un paso de la teoría que sostiene que el capitalismo se inspira en principios éticos y que hay uno malo y otro bueno. La misión del nacionalismo no sería otra que descubrir al capitalismo bien intencionado para abrirle las puertas del país. Se olvidó que el capital financiero lleva en sus entrañas no sólo la tendencia a penetrar en todos los rincones del mundo, sino a explotar y oprimir políticamente allí donde llega, no como resultado del abandono de principios morales sino debido a su propia naturaleza. Ovando y sus compañeros dijeron con toda claridad que su objetivo no era otro que nacionalizar alguna empresa odiada por la opinión pública, concretamente la Gulf Oil, y "otorgar garantías a la inversión extranjera, cuando ésta contribuyera real y efectivamente al desarrollo de la economía nacional y en estricta observancia de nuestras leyes". Se puede siempre demostrar, si se quiere, que una inversión foránea contribuye al desarrollo, etc. La liberación nacional consiste en cortar las ataduras del país con referencia al imperialismo, ataduras que tienen, ni duda cabe, naturaleza económica y política. El Mandato Revolucionario declaró paladinamente que no deseaba consumir la liberación nacional, sino simplemente reordenar las relaciones de Bolivia con la metrópoli imperialista.

En resumen: el gobierno Ovando fue burgués nacionalista, que momentáneamente se desplazó hacia la izquierda para luego retornar a las posiciones derechistas.

Los propagandistas del nacionalismo se apresuraron en lanzar la consigna, repetida hasta el cansancio, de que el general Ovando sería un otro Velasco Alvarado, llamado a sellar un frente ideológico con el gobierno del vecino país. "La histórica Confederación Perú-Boliviana -dice el editorial de "Primicia"-, ha cobrado vigencia ante el anuncio de ejecutar una revolución que conforme junto con Perú una real y

verdadera confederación ideológica de los dos países”⁶. Un comentario de “Confirmado Internacional” lleva el sugerente título de “Ovando, ¿otro Velasco Alvarado?” y añade que los anuncios de abrogación del “Código del Petróleo, la ley antisindical del PDC, y una serie de medidas que le daban la fisonomía de un gobierno tipo Velasco Alvarado del Perú”⁷. El flamante equipo gubernamental no ocultó su ambición de identificarse ideológicamente con Velasco Alvarado y de realizar una acción común con el Perú. Uno de los periodistas testaferreros del régimen escribió: “el gobierno de Ovando Candia tenía el propósito de conformar una confederación ideológica con la Junta Revolucionaria del Perú... En honor a la verdad debemos reconocer que hoy por hoy, el gobierno de Velasco Alvarado se encuentra en una posición antiimperialista bastante más definida. Recordemos que la violenta ocupación de Talara, la nacionalización de la IPC y la agudización del problema pesquero definieron a la Junta Peruana desde sus inicios. Con referencia a las medidas adoptadas en nuestro país, si bien expresamos nuestra absoluta complacencia e identificación con ellas, debemos admitir que ninguna afectó todavía a los intereses de los consorcios extranjeros”⁸ Los gobiernos burgueses tipo Velasco rápidamente adquieren un carácter bonapartista, que también, aunque momentáneamente, distinguió al de Ovando.

El supuesto ensayo velasquista criollo muy pronto mostró su verdadero rostro derechista y concluyó en manos del gorilismo fascista.

Los obreros combatieron sin tregua contra la reglamentación sindical dictada bajo el gobierno de Barrientos y con directa participación del PDC. La odiada disposición fue derogada; pero, para ser luego sustituida por las normas contenidas en la circular firmada por el Ministro de Trabajo Mario Rolón Anaya -considerado por algunos como el estratega de la revolución ovandista- y hecha conocer el 27 de octubre de 1969 y que en nada tiene que envidiar a la política social explanada por el gorila Bánzer dos años después. El documento de referencia dice en sus partes principales:

“El Ministerio no aceptará ninguna solución social bajo presión o acción de fuerza. En consecuencia, en los casos concretos de los arrendatarios de minas el anteproyecto de ley ya presentado se procesará mientras los mineros devuelvan los parajes que tomaron arbitrariamente”. En esos días trabajadores arrendatarios se encontraban en conflicto con Comibol y habían ocupado, a viva fuerza, algunos parajes de la empresa. La actitud de los obreros estuvo impulsada, en cierta manera, por las promesas democratizantes y obreristas del nuevo gobierno, que, al afrontar el problema, dio pruebas de su decisión de arreglar los conflictos sociales sin tomar debida cuenta de los intereses obreros.

Uno de los afanes de Rolón Anaya fue el de sentar el precedente de que se rechazase toda presión que pudiesen ejercitar las masas sobre las autoridades, punto de vista grato a los empresarios y a los inversionistas, pues se consideraba, y aún se considera, uno de los elementos decisivos de la estabilidad social: “Los votos de amparo y resoluciones de apoyo pseudo-sindicales no serán tomados en cuenta una

6- “Primicia”, La Paz, octubre de 1969.

7- “Confirmado Internacional”, La Paz, octubre de 1969.

8- “Con el ceño fruncido”, por Lino Tipo, en “Confirmado Internacional”, octubre de 1969.

vez que constituyen el retornó a los antiguos sistemas de presión artificial a través del abuso de masas o bases por parte de dirigentes o autoridades que pretenden encubrirse "popularmente" con votos o resoluciones fraguados". El Mandato buscaba también complacer, o por lo menos neutralizar, a la empresa privada.

Parecía que la Cámara de Industrias hablaba por boca del Ministro de Trabajo cuando éste sentó la premisa de subordinación de toda mejora salarial a las posibilidades de cada empresa y del rechazo de movimientos salariales generales y de carácter nacional: "No hay aumentos generales de salarios. Sin embargo, todas las peticiones se procesarán en forma individual estudiando las condiciones de cada empresa y de cada sector de trabajo". Se estaba saliendo de la negra noche barrientista, que utilizó la violencia para mantener congeladas las remuneraciones y Ovando insistía en esta política con argumentos sutiles.

Se trataba de pasar del sindicalismo clandestino al tradicional régimen laboral en el que, pese a todos los obstáculos y las presiones gubernamentales, concluye imponiéndose la voluntad de las bases. El ministro ovandista no ocultó su decisión de amañar a su antojo al movimiento sindical, seleccionar a los dirigentes e imponerles algunas normas ideológicas, propósito que siempre ha encontrado la terca resistencia opuesta por una rica y larga tradición de independencia de clase: "Los organismos sindicales gozan de absoluta libertad para organizarse (esta pretendida "absoluta libertad", era en realidad, una libertad condicionada, G.L.) en forma democrática, en busca de una auténtica representación popular... El gobierno no intervendrá en las direcciones sindicales, tampoco convalidará organizaciones o direcciones autonombradas... Los trabajadores deben elegir nuevos personeros (lo que equivalía a vetar a la experimentada y politizada vieja dirección, es decir, a seleccionar dirigentes afectos al oficialismo, G.L.). Los dirigentes profesionales y las personas que son auténticos trabajadores, igualmente, los agitadores con membrete laboral, deben abstenerse de intervenir en los organismos sindicales que requieren de su propio encausamiento a través de los verdaderos trabajadores de base". La política sindical así esbozada, bien puede considerarse antiobrera y de corte gorila, en cierta medida subordinada a la tendencia que busca estatizar los sindicatos.

Por si todo esto fuera poco, Rolón Anaya arremetió contra la sindicalización de los empleados públicos, una reivindicación secularmente enarbolada por los explotados: "La sindicalización de los funcionarios públicos está prohibida por la Ley General del Trabajo y por el Estatuto del Funcionario Público ... la sindicalización de los funcionarios públicos deforma el verdadero sentido del sindicalismo".

Se señalaron con claridad las normas a las que debía sujetarse, según el Ministerio de Trabajo, la reorganización sindical (los obreros habían luchado tenazmente por la conquista de las garantías sindicales y democráticas necesarias para el libre funcionamiento de las entidades laborales): "La Federación de Mineros debe reorganizarse en las minas a través de un ampliado, al que puede convocar con absoluta libertad cualquier distrito. Lo propio debe ocurrir con la COB... No puede atribuirse la dirección sindical ninguna persona. Los dirigentes deben surgir de los cuadros de base a través de ampliados y congresos nacionales y en elecciones

probablemente democráticas por los mismos obreros”.

“El Ministerio de Trabajo ha de cuidar responsablemente del mantenimiento del orden social, sin parcialización ni intervención en ninguno de los sectores de la producción y del trabajo, bajo una estricta aplicación de las leyes. Un Estado revolucionario persigue la transformación de estructuras, no la destrucción de las mismas y mucho menos el desorden y el caos.

“No se permitirá el retorno a la anarquía, a la prepotencia y al desorden de parte de las empresas (sic) y de las organizaciones laborales que antes de ahora causaron graves perjuicios a la clase trabajadora y a las fuentes de producción con el empobrecimiento general del país y con ello, con una mayor miseria de los sectores populares... No se permitirá el retorno del superestado de las empresas ni el superestado los sindicatos”⁹.

A ese tipo de sindicalismo dependiente de las decisiones gubernamentales se refería el general Ovando cuando en el distrito minero de Telamayu, el 29 de octubre de 1969, dijo que “reconoce a los sindicatos” y que la Federación de Mineros debía llamar a elecciones.

Leyendo la circular firmada por Rolón Anaya se podría pensar que se trató de una prueba incontrovertible del carácter bonapartista del gobierno militar, oscilante entre los empresarios y los obreros, pero bien pronto se inclinó inconfundiblemente hacia los patrones. Conocemos bien al que entonces oficiaba de Ministro de Trabajo para darnos cuenta que toda vez que se refería a los empresarios y a sus inclinaciones anárquicas lo hacía para encubrir su no desmentido antiobrerismo.

La Federación de Mineros se apresuró en expresar públicamente su repudio a la reglamentación sindical antiobrera contenida en la circular del Ministro de Trabajo y reiteró su decisión de defender la independencia de clase e impedir toda ingerencia gubernamental en el campo laboral.

En la IV conferencia de la Central Obrera Departamental de La Paz, realizada a fines del mes de octubre de 1969, se acordó, entre otras cosas, pedir al gobierno la expulsión de la ORIT, CETRA y otras organizaciones dependientes del imperialismo, que actuaban bajo el pretexto de impartir educación sindical; el retiro de las tropas del ejército de los centros mineros; la reincorporación de los despedidos por motivos político-sindicales; el retorno de Lechín, que a la sazón se encontraba desterrado. El 1º de noviembre la COB reiteró el pedido de expulsión de la ORIT y de otras entidades similares¹⁰. El gobierno cedió a la presión de los sindicatos obreros y decidió acentuar su fisonomía obrerista a un costo no muy elevado, el marginamiento de la ORIT. En efecto, el día 2 de diciembre se invitó al representante de la ORIT en Bolivia, el mejicano Juan José Osorio, a abandonar el país. Rolón Anaya en sus declaraciones a “Presencia” dijo: “El gobierno boliviano es revolucionario y se identifica con la clase obrera... La medida contra la ORIT fue tomada para prevenir toda ingerencia nacional o internacional en las organizaciones sindicales”.

9- “Presencia”, La Paz, 28 de octubre de 1969.

10- “Presencia”, La Paz, 2 de noviembre de 1969.

El Presidente Ovando en su mensaje del 31 de octubre, aniversario de la nacionalización de las minas, reiteró su adhesión y respeto a los principios de la libertad sindical y anunció solemnemente el retiro de las tropas del ejército de los lugares de trabajo. En el mismo discurso advirtió que no habría aumentos salariales; los obreros habían convertido en una de sus consignas centrales la reposición de los salarios a los niveles de mayo de 1965.

El 2 de noviembre la prensa publicó la decisión de los maestros de pedir una mejor de sus sueldos, al mismo tiempo que se oponían al sistema cooperativista en la educación fiscal, que por entonces resultó el tema favorito de los aficionados a la reforma educacional. Se perfiló en el horizonte la amenaza de huelga de los mineros pidiendo la reposición de sus salarios disminuidos por el gobierno Barrientos. A los seguidores de los generales se les antojó una actitud contraproducente: "Para los grupos llamados de intelectuales o de elite intelectual, como el caso de los maestros, no es secreto que la economía nacional poco menos que anda en los bordes de la quiebra, pero, sin embargo, son precisamente ellos quienes exigen al Tesoro Nacional que fabrique mejoras para sus cuadros sindicales. Los mineros, que hasta la muerte del General Barrientos se encontraron ante la opresión de un régimen de fuerza apenas logran su apertura democrática amenazan con el fantasma de la huelga para lograr la reposición de sueldos y salarios"¹¹.

La derogatoria del Código Davenport no pasó de ser una formalidad, pues prácticamente había caído en desuso.

El gobierno de Víctor Paz, con ayuda del programa imperialista llamado Punto IV, contrató los servicios de la empresa de abogados norteamericana Davenport, Evans y Fernández, para la redacción del Código del Petróleo que fue promulgado en 1956. Se trató de una medida destinada a atraer capital financiero a cambio de la entrega de la riqueza petrolífera, es decir, de una actitud claramente proimperialista que no mereció la repulsa pública de ningún jerarca movimientista, ni siquiera del líder obrero Lechín.

Cuando se dictó el Código tan discutido estuvo en Bolivia, y no por casualidad ciertamente, Henry Holland, abogado de consorcios petroleros y a la sazón Secretario Asistente de Estado para Asuntos Latinoamericanos.

La CEPAL comentó que el Código Davenport, "aunque manteniendo la dominación directa (del Estado) sobre el petróleo... permite la intervención del capital privado en las actividades petroleras..."

Juan Fernández Solís, abogado de la Gulf, buscando subrayar las bondades del Código pro-imperialista anotó que "El objetivo del Código era establecer la base "mitad y mitad" en las relaciones entre el Estado y las empresas privadas alrededor del

aprovechamiento de la producción de petróleo, aunque la fórmula no aparece escrita con claridad en el mencionado cuerpo legal.

11- "Confirmado Internacional", La Paz, julio de 1970.

El acto más trascendental del gobierno Ovando fue, ni duda cabe, la reversión en favor del Estado de las concesiones petroleras hechas a la Gulf Oil Cía. El 17 de octubre de 1969 fue dictado el decreto respectivo y que tuvo resonancia nacional e internacional. Esta medida marca el punto más elevado de la osadía y capacidad de realización del gobierno militar. Demás está decir que esta estatización (algunos ministros civiles del gobierno burgués, entre ellos Marcelo Quiroga, desarrollaron la peregrina teoría de que capitalismo de Estado era sinónimo de socialismo) fue realizada bajo la promesa de una "justa" compensación. En pequeño se quiso reeditar la nacionalización de las pertenencias de la IPC del Perú: efectivos militares ocuparon las oficinas de la Gulf, situadas en la céntrica avenida Santa Cruz, a pocos metros del tradicional paseo de "El Prado". El remedio adquirió caracteres de farsa. Por breve tiempo dominó el terror en los medios capitalistas y bursátiles; hubo necesidad de cerrar oficialmente los bancos para poner atajo a una espectacular "corrida de dólares". El equipo ministerial se frotaba las manos de contento: su imagen aparecía como inconfundiblemente antiimperialista. Una sistemática campaña anti-ovandista fue difundida desde los círculos próximos al capital financiero.

El 29 de octubre fue solemnemente posesionada la comisión encargada de inventariar los bienes de la Gulf y que estaba constituida por representantes de los Ministerios de Minas y Petróleo y de Hacienda, de YPFB, de la Gulf y de la Federación de Petroleros.

La prensa del 30 de octubre registró la noticia de que la empresa norteamericana Gulf Oil Cía. exigió al gobierno de Washington que aplique la enmienda Hickenlooper contra el gobierno boliviano, sindicado de haber atentado contra los intereses de los inversionistas de los EE.UU. Al día siguiente, 31 de octubre, el Ministro de Minas dio una respuesta que denunciaba el afán del gobierno de capitalizar políticamente en su favor la campaña desencadenada por los consorcios contra la nacionalización de las pertenencias de la Gulf: "El gobierno llamará a una movilización nacional para la defensa del país frente a la agresión económica yanqui y a la piratería de la Gulf"¹². Esta movilización, que ciertamente no se operó y no fue motorizada ni dirigida por el equipo ministerial, habría fortalecido momentáneamente al gobierno "nacionalista", pero bien pronto habría permitido a la clase obrera colocarse a la cabeza de ese movimiento antiimperialista y amenazar a la propia estabilidad del gobierno Ovando.

Los consorcios extranjeros lograron cerrar por algún tiempo los grifos de la comercialización del petróleo boliviano. El gobierno se orientó a entrar en tratativas directas con los países compradores de hidrocarburos, a fin de romper el cerco. Los contactos con la Argentina no dieron resultados positivos, pues este país expresó que vería con simpatía un arreglo amigable con la Gulf, esto se desprende de las declaraciones de Marcelo Quiroga Santa Cruz (18 de noviembre de 1969), que juntamente con otros dos ministros se trasladó a Buenos Aires: "El gobierno argentino acordó revisar el acuerdo sobre el gas, pero parece no estar dispuesto a adoptar un gesto de solidaridad con la nación hermana (por ejemplo, importar

algunos millares de barriles de petróleo suplementarios por día) y todavía menos afrontar la conspiración internacional de los petroleros. Buenos Aires preferiría que

12- "Presencia", La Paz, 1º de noviembre de 1969.

el gobierno boliviano negocie un acuerdo con la Gulf y se declara dispuesto a ofrecer, en este caso, sus buenos oficios”¹³.

La situación por momentos se tornó dramática: el 26 de octubre se suspendió el bombeo de petróleo a Arica por encontrarse llenos los tanques de almacenaje. La producción diaria quedó reducida a 20.000 barriles, de los cuales se consumían 12.000 dentro del país y se exportaban 8.000 a la Argentina. La extrema fragilidad de la economía boliviana quedó al descubierto, una vez más. La producción y exportación de hidrocarburos importaba y todavía importa un mínimo porcentaje con relación a la comercialización del estaño, por ejemplo.

Las garantías democráticas, una vez derogada la Ley de Seguridad del Estado, fueron devueltas a medias y el movimiento sindical se incorporó rápidamente a la lucha.

La Revolución del 9 de abril de 1952 fue para la izquierda boliviana la piedra de toque en lo que se refiere a la actitud a adoptarse frente a los movimientos nacionalistas pequeño-burgueses y a otras cuestiones. Sin embargo, el problema volvió a plantearse una y otra vez en nuestra historia. Ante el gobierno Ovando irrumpieron en el escenario las ya tradicionales tendencias en las que se divide el marxismo.

El Partido Obrero Revolucionario, que tan estoicamente había soportado la represión barrientista, tipificó al golpe del 26 de septiembre como un cuartelazo concebido y ejecutado a espaldas de las masas, como una de las variantes del ciclo nacionalista inaugurado por el MNR. No confundió a Ovando con Barrientos, pero señaló las inevitables limitaciones de las medidas democratizantes, de la nacionalización de la Gulf y de sus protestas estatistas. Los avances de la democracia y del mismo capitalismo de Estado sólo podían concebirse como obra de la clase obrera dueña del poder político. Por tratarse de un nuevo intento de realización del nacionalismo democrático, era deber primordial de los revolucionarios alertar a las masas acerca de la inevitable capitulación ante el imperialismo; no despertar ilusiones acerca de su consecuencia política o de su capacidad de realización de su propio programa. A eso hubiera conducido el apoyo llano y simple a las medidas gubernamentales consideradas positivas, sin que esté acompañado de un análisis crítico de sus inevitables limitaciones y peligros congénitos. Imperante en el país un régimen que gustaba llamarse a sí mismo nacionalista revolucionario y antiimperialista, los poristas creyeron oportuno acentuar su propaganda en favor de la independencia de clase y de un programa propio del proletariado, expresión de sus intereses históricos. Esta actitud impidió que los obreros se sumasen al gobierno y deliberadamente se señaló que la presión de las masas no era un recurso suficiente para transformar a Ovando en socialista. Muchas de estas ideas están contenidas en la Tesis Política aprobada por el Cuarto congreso de la COB.

Una posición diferente y hasta opuesta fue adoptada por el Partido Comunista, que esta vez comenzó defendiendo sus ideas tradicionales con referencia a los

movimientos nacionalistas democráticos. Con posterioridad se aproximó mucho a la línea trotskysta, hecho que contribuyó a que olvidase lo que el stalinismo comenzó

13- "Presencia", La Paz, 18 de noviembre de 1969.

sosteniendo acerca del gobierno de Ovando. Tenemos a mano su "Declaración" de octubre de 1969 ¹⁴, documento que nos permite establecer su posición con toda exactitud.

La "Declaración" comienza atribuyendo al "levantamiento militar" del 26 de septiembre "el inicio de un proceso de reforma y cambio, proceso que buscaría desandar el viejo camino reaccionario iniciado en la gestión movimientista y culminado violentamente en el régimen de mayo de 1965 (tales elementos están expresados en el Mandato de las FFAA; la derogatoria de la Reglamentación Sindical; la derogatoria del Código del Petróleo; la declaración sobre política exterior; la derogatoria de la Ley de Seguridad del Estado)". Para el stalinismo se trataba cuando menos de una rectificación de las desviaciones derechistas de los últimos años de los gobiernos movimientistas, de manera que permitían retomar las corrientes puras que arrancaban de abril de 1952. Ya sabemos que con motivo de esta revolución el PCB consumó una completa capitulación ante la pequeña-burguesía nacionalista y en 1969 debuta reeditando la misma postura. Se habla llanamente de "un proceso de reforma y cambio", acentuando la tesis se le asigna esa finalidad al apoyo militante de las masas a los gobiernos nacionalistas y se cree que así se puede llegar al socialismo. Si no se añade, de manera ineludible, que ese proceso de reforma y cambio tiende a detenerse en los límites capitalistas, como consecuencia de los intereses de clase que representa el gobierno militar (y estos intereses hacen que, en último término, el nacionalismo concluya identificándose con el imperialismo opresor; ciertamente que la política revolucionaria tiene que tomar en cuenta también las actitudes anti-metrópoli a que se ve empujada la burguesía nacional y su sucedánea pequeño-burguesa), se corre el riesgo de apoyar la política burguesa.

Seguidamente dice el PCB: Ovando "abre las posibilidades reales para el proceso de cambios en el sentido democrático, progresista, con cierto contenido patriótico, de soberanía, si esta gestión vertical encuentra su identidad con fuerzas sociales que la motoricen e impongan". Como se sabe, el stalinismo considera indispensable el cumplimiento del proceso "democrático" antes de que la clase obrera pueda plantearse y consumar la revolución socialista. Si Ovando era capaz de cumplir tal tarea, nada más lógico que prestarle el necesario apoyo, a fin de motorizar su acción e imponerle el cumplimiento de los propósitos anunciados en el Mandato Revolucionario. De esta manera se llega a la conclusión de que la diferenciación entre el nacionalismo "revolucionario" del gobierno castrense y las posiciones stalinistas era mínima, que de ninguna manera podía justificar la beligerancia entre ambas fuerzas.

A esas conclusiones se llega con la ayuda "teórica" de que la contradicción fundamental en Bolivia no es otra que la existente entre nación oprimida e imperialismo (no entre imperialismo y proletariado, en calidad de caudillo nacional), lo que determinaría la atenuación de la lucha de clases y la postergación de los postulados propios del proletariado.

Reconociendo que el gobierno militar tenía una "declarada determinación" revolucionaria, lamentó que las masas se encontrasen al margen de dicho proceso y

14- "Hoy", La Paz, 8 de octubre de 1969.

propugnó su incorporación a un movimiento dirigido por el general Ovando, a fin de "garantizar un avance cualitativo (seguramente se quiere insinuar un avance hacia el socialismo, G.L.), que rechace el retorno contrarrevolucionario". Incorporarse al gobierno como su ala izquierda y garantizar así el desarrollo indefinido del proceso democrático hasta desembocar en el socialismo, tal fue la línea política señalada por el PCB.

Ovando en el poder no pudo extirpar de raíz los gérmenes fascistas dentro de las Fuerzas Armadas, que al desarrollarse concluyeron convirtiendo al Presidente de la República en su dócil instrumento. Tal la limitación congénita del nacionalismo castrense de izquierda y que volverá a ponerse en evidencia con Tórres.

Capítulo VII

El gobierno nacionalista de Torres

1

Antecedentes

Los gobiernos nacionalistas de Ovando y de Tórres pueden ser calificados como burgueses de izquierda, democratizantes y obreristas, en esta medida se diferencian de los regímenes de Barrientos y de Bánzer, de esencia gorila y fascistizante. Ambos extremos no pasan de ser diversas expresiones de la clase dominante y los golpes de Estado que protagonizan sólo constituyen revoluciones políticas. La clase obrera subrayó su propia fisonomía, sus aspiraciones y su política independiente, al afirmarse frente a estos ensayos nacionalistas. Para ella se trataba de continuar la línea de diferenciación política con los sectores burgueses que se reclaman antiimperialistas, iniciada ostensiblemente durante el gobierno movimientista de Hernán Siles Zuazo. En este hecho radica la importancia de la experiencia del gobierno Tórres, que forma parte de la misma estructuración de la clase. Nuevamente se demostró que cuando se agotan políticamente los partidos nacionalistas civiles son los grupos castrenses los que pugnan por ocupar su lugar, intentando cumplir a su modo las tareas democráticas pendientes, es decir, impulsando el desarrollo capitalista independiente. No resulta sorprendente que estos ensayos nacionalistas hubiesen, vuelto a fracasar, eso si no se olvida que el período 1952-64 probó la incapacidad de la burguesía nacional para poder cumplir las tareas que históricamente le correspondían. Ninguno de los ensayos castrenses de nuestra historia ha podido ir más allá de lo hecho y dicho por el nacionalismo de contenido burgués encarnado por el MNR. No es casual que todos ellos se reclamen de la revolución nacional y del antecedente de Villarroel.

La diferencia de mayor volumen entre los gobiernos de los generales Ovando y Tórres y los del MNR de la primera época, particularmente de Víctor Paz, no se encuentra en el hecho de que los primeros lucían casacas militares y los otros no, sino en que los generales nacionalistas no pudieron reeditar el sorprendente caso de la popularidad movimientista, que contó con el apoyo multitudinario de obreros y campesinos, popularidad que constituía un factor más que podía coadyuvar al cumplimiento del proceso democrático. Los regímenes castrenses de izquierda se agotaron en gran medida en su terco empeño por ganar el apoyo popular y por arrastrar detrás de sí a sus compañeros de armas. El MNR tuvo la ventaja relativa de actuar inicialmente cuando el ejército estaba ausente del escenario.

Una parte de la izquierda, que en alguna forma tenía algo que ver con los explotados, se empeñó a fondo en su afán de demostrar, o difundir bulliciosamente, su tesis en sentido de que el nacionalismo castrense constituía, más que ningún otro, una

postura que era preciso diferenciarla tanto del capitalismo como del comunismo, es decir, que actuaba por encima de toda referencia clasista, aunque conservando sus rasgos populistas. Estos izquierdistas pusieron todas sus energías al servicio del propósito de empujar a las masas hacia las trincheras del oficialismo, en esa medida actuaron en contra de los intereses históricos de la clase obrera, contribuyeron a hacerle perder su independencia política y en cerrar las puertas a todo posible acceso al socialismo. Dicho .de otra manera, se movieron buscando perpetuar el régimen de la propiedad privada mediante su perfeccionamiento, que no otra cosa es el capitalismo de Estado, por ejemplo. Si tenemos en cuenta que en nuestra época de desintegración del imperialismo, es la referencia de la destrucción de la propiedad privada la que nos permite considerar si una posición es o no revolucionaria, se tiene que concluir que la teoría del "nacionalismo marxista" era reaccionaria.

La postura más peligrosa, esto porque su revisionismo podía penetrar en la misma izquierda que se reclamaba de las posiciones marxistas consecuentes y del programa revolucionario de contenido clasista, era aquella que sostuvo la posibilidad de que desde dentro del gobierno nacionalista se podía contribuir, de manera decisiva a su evolución nada menos que hasta el socialismo, que así ya no sería necesario fijarse como objetivo la lucha por la constitución del Estado obrero. Este planteamiento en sentido de que el Estado burgués puede transformarse gradualmente en su contrario, todo dentro del marco democrático, partía del convencimiento de que la opresión imperialista nivela a todas las clases, les hace perder todas sus diferencias, de manera que sólo el renunciamiento a la propia diferenciación clasista podía dar fortaleza al antiimperialismo y no debilitar al frente nacional, uno de los pivotes indispensables para hacer posible la liberación nacional, objetivo insoslayable.

De esta manera, uno de los grandes problemas de la lucha revolucionaria de nuestra época superó los límites de la pura discusión teórica para convertirse en eje de la actividad práctica de las masas. No se trató únicamente de una afirmación del marxismo frente a una de las muchas expresiones del nacionalismo de contenido burgués, sino del avance del proletariado en el camino de su formación de clase, de la evolución de su conciencia y de consolidación de su independencia política.

Los numerosos planteamientos que fueron hechos partieron de la inviabilidad o no de la revolución democrático-burguesa, esto para usar una designación tan del agrado del stalinismo, arsenal ideológico del nacionalismo burgués, en definitiva, no en vano ofrece recalentado el plato menchevique. Por un lado, esto contribuyó a fortalecer los planteamientos teóricos y políticos que coincidían con la estrategia de la clase obrera, pero cuando las ideas que venían de la fuente primigenia de la revolución permanente penetraron en la ideología del stalinismo coadyuvaron en mucho a desfigurar el rol de la izquierda en general y del Partido Comunista en particular; la radicalización de éstos permitió alentar en el seno de las masas e inclusive en las capas más rezagadas del trotskysmo, la ilusión de que nuestro PCB tenía todavía algo que ver con la revolución, que la presión de las masas lo convertiría en uno de los elementos de la dirección del proceso de destrucción del capitalismo. Lo que en realidad sucedió fue que la poderosa presión de las masas obligó al stalinismo a adoptar posiciones insospechadas para él, lo que de ninguna manera importaba

que se hubiese trocado en revolucionario. Este proceso determinó que se agravase en extremo la confusión acerca de cuál era el verdadero partido revolucionario, que ciertamente sólo puede ser uno de los de izquierda, el que programáticamente expresa los objetivos estratégicos del proletariado, y no todos ellos. De esta manera se puso en pie uno de los obstáculos que retardó en cierta manera un mayor avance de la conciencia de clase que, como siempre, concluyó actuando como un serio escollo en el camino del proceso revolucionario.

Esta vez los explotados no fueron únicamente el sujeto de las especulaciones de los teóricos y de los líderes izquierdistas, sino que se movieron como los protagonistas que, con ayuda de su práctica, tuvieron a su cargo probar la validez o no de las postulaciones del "nacionalismo marxista" o revolucionario, contribuyendo así a configurar la verdadera fisonomía de la política revolucionaria de ese momento y también de la posterior. Se trata, pues, de uno de los períodos más fecundos no sólo para los trabajadores sino para la revolución en su conjunto y para la misma teoría revolucionaria. Todo gobierno nacionalista, entre nosotros encarnado en las expresiones políticas de la pequeña burguesía pero llamado a intentar la materialización de los grandes objetivos de la burguesía nacional, constituye siempre la piedra de toque de la teoría y de la política de los partidos "izquierdistas" y particularmente de los que se dicen marxistas. Esto es así porque en un país atrasado el problema fundamental consiste en saber qué clase social es capaz de cumplir las tareas democráticas, que el nacionalismo considera que constituyen su propio contenido, la respuesta que se da lleva ya implícita la naturaleza de la relación entre el proletariado y la nación oprimida, una cuestión capital en el proceso de formación de la conciencia de clase y del partido revolucionario.

La accidentadísima historia del proceso de transformación de Bolivia se resume en la estructuración de su teoría revolucionaria, constituyendo sus ingredientes más valiosos el pensamiento y acción del partido político. En lo que se refiere a la formación de la clase obrera, el hecho más importante es su liberación en el seno de la nación oprimida, que es tanto como decir su diferenciación del resto del conglomerado oprimido por el imperialismo, para que luego pueda aquél liberarla, consumir la liberación nacional, que sólo puede ser consecuencia de que devenga caudillo de las clases mayoritarias no proletarias. La afirmación clasista frente al nacionalismo de contenido más osado y obrerista adquiere este significado trascendental. La lucha de los explotados contra el radicalizado régimen torrista, cuanto más radicalizado más sugerente esa actitud, tuvo ese sentido.

El nacionalismo popular sostiene que en el momento de la realización de las tareas democráticas, que exigiría una granítica unidad de las clases mayoritarias, no le está permitido al proletariado enarbolar sus propias tareas y mucho menos su estrategia. Esta consigna, que aparentemente correspondería a un análisis científico de la realidad nacional, le ha servido a la política burguesa para engrillar a los explotados por mucho tiempo, para ungirlos a su carro triunfalista. Para la clase obrera diferenciarse ha significado vencer este tabú, oponer su propia ideología, vale decir, su estrategia, a la ideología burguesa por muy avanzada que ésta fuese, pero burguesa al fin, defensora de la propiedad privada de los medios de producción y de la insoslayable

explotación del proletariado. Desde este punto de vista no dice nada sostener que "el gobierno de Tórres fue muy izquierdista", como gustan afirmar los "izquierdistas" democratizantes. Surge la primera interrogante: ¿"muy izquierdista" con referencia a qué y a quién? Ciertamente que muy izquierdista con referencia a Ovando y mucho más si se lo compara con Bánzer, por ejemplo. Pero derechista si se hace el paralelo entre lo que propuso y lo poco que hizo con las metas que señaló el radicalizado movimiento de masas y que va a tener su cabal expresión en la Asamblea Popular.

El enfrentamiento insoslayable y cotidiano con un fenómeno social, una idea política, filosófica, en fin, un gobierno, etc., permite comprender que siempre pueden ser y son juzgados desde puntos de vista extremos y antagónicos, actitudes que tienen relación estrecha con los intereses divergentes de las clases sociales; esto es inevitable porque el objeto de la crítica se encuentra ímerso en la lucha de clases, a veces es su producto y siempre sufre sus consecuencias. Las respuestas que puedan darse están ineludiblemente teñidas de contenido de clase y por esto son opuestas o por lo menos diversas. No es suficiente decir que algo es criticado, todavía falta añadir desde qué punto de vista clasista son lanzadas las críticas.

El gobierno nacionalista de contenido burgués y los gobiernos populares que genera son de mucha importancia, particularmente para que la clase obrera pueda afirmarse como tal, por eso que su indispensable juzgamiento, que forma parte de la teoría revolucionaria, no puede menos que traducir, en el campo de las ideas, la contradicción fundamental entre imperialismo, que en gran medida usurpa económica y políticamente el lugar de la burguesía nacional, y proletariado, como la expresión cabal y legítima de la nación oprimida.

En el caso concreto del régimen nacionalista de izquierda del general Tórres, de igual manera que de otros gobiernos similares, fue analizado y combatido sin tregua desde las trincheras derechistas e incluso imperialistas, así como desde la izquierda revolucionaria, de la izquierda marxista o proletaria. La definición frente al fenómeno nacionalista resultó imprescindible en el camino de la fijación de posiciones por parte de las descomunales fuerzas que no cesaban de chocar en el escenario nacional. Fácil es comprender que la lucha de clases se concretizó, en cierto momento, en esa apasionada pugna acerca de las posibilidades revolucionarias del nacionalismo: los negadores de la lucha de clases no pudieron permanecer al margen de la influencia decisiva de ésta. El imperialismo y la derecha combatieron sañudamente a Tórres porque lo consideraban totalmente identificado con el comunismo (dictadura del proletariado), como factor que impulsaba a éste hacia el control total del país, cuando apareció la Asamblea Popular, sostuvieron, violentando los hechos, que era nada menos que una creación del oficialismo. En resumen: la derecha lo atacó por muy comunista y revolucionario. La izquierda revolucionaria se puso frente a él porque comprendió desde el primer momento que ese gobierno le cerraba el paso hacia el poder al proletariado, porque no tenía la suficiente capacidad, dada la caducidad de la burguesía nacional, para consumir la liberación nacional o cumplir las tareas democráticas, en fin, porque sabía, partiendo de la importante experiencia histórica nacional y también internacional, que no podría menos que concluir capitulando ante el opresor extranjero y la derecha criolla. Se podía constatar que era por demás

evidente su extrema debilidad frente a la impostergable tarea de desmontar el aparato que tenían montado los conspiradores gorilas, no pudo salir en momento alguno del esquema de la unidad y fraternidad entre todos los componentes del ejército, un esquema ciertamente confusionistas y que ayudó a los golpistas, La trayectoria de la burguesía nacional, esta vez sintetizada en la tragedia del gobierno Tórres, consistió en su necesidad de encontrar una fórmula que le permitiese gobernar y coexistir junto a la alta jerarquía castrense gorila, que se erige como portavoz de las fuerzas armadas. Los sectores democratizantes no pueden desarrollarse y menos cumplir su programa, porque concluyen totalmente sometidos a la voluntad de los generales, personificación del verdadero poder.

2

El gobierno de Torres y la clase obrera

El débil gobierno de Tórres exteriorizó muchos de los lados flacos de la burguesía boliviana, consecuencia de que no ha podido estructurar, ni siquiera sumariamente, un régimen democrático. Prácticamente se agotó, sin haber logrado éxito alguno, en su intento por arrastrar detrás de sí a las masas, en ese momento extremadamente radicalizadas, y por lograr el apoyo del conjunto de las fuerzas armadas, vale decir, de su alto mando, una cueva de gorilas conspiradores. En tal medida y porque constituía un nuevo intento de realizar las tareas democráticas en el marco capitalista, fue más un propósito que una realidad. Prometió e hizo mucho menos que el general Ovando, tan oscilante entre los polos obrero y derechista, este último representado por la propia reacción uniformada. Su escasa significación no arranca sólo de su corta duración, sino del hecho de que no contó con un sustentáculo social de alguna importancia, careció de fuerza para materializar sus propósitos, tan difusa y contradictoriamente enunciados, por otra parte.

Llegó al Palacio Quemado dando la impresión de que venía a horcajadas en la cresta del empuje huelguístico, sin que esto signifique que en momento alguno hubiese sido la expresión política de los protagonistas del nuevo ascenso de las masas que se vivía, la prueba la tenemos en que los obreros y el resto de los explotados no se convirtieron en el basamento del nuevo régimen, que no se cansó de manipular un supuesto apoyo popular abstracto, sin delimitación precisa y sin contenido real. Ya en el poder sólo atinó a constituir la Confederación Campesina, la de Genaro Flores, que luego la veremos actuando como una de las tantas expresiones sindicales y políticas del atomizado movimiento del agro en el seno del amplio frente democrático. En ese momento no se contaba ya con los poderosos sindicatos-soviets de campesinos en armas que dejaron su impronta en la realidad política boliviana que siguió a 1952; tampoco había retornado la desesperación de los pequeños propietarios agrarios amenazados con la pérdida de sus parcelas, que fue tan típica después de 1964 y que convirtió a la espada del temperamental general Barrientos en garantía de la persistencia de la liquidación de latifundio, pese a que llegó a ser Presidente por obra y gracia del Pentágono y de la CIA norteamericanos. Desde la postrimerías de los gobiernos movimientistas los sindicatos campesinos dejaron de ser tales,

expresión de la voluntad de las masas y marco ampliamente democrático dentro del cual podían éstas expresarse libremente. En los primeros momentos, después de 1952, esas poderosas organizaciones del agro se convirtieron en el basamento de un gobierno popular, que de ahí arrancó el necesario vigor para iniciar el cumplimiento de su programa pro-capitalista; pero como el nacionalismo para poder consumir libremente su profundo viraje hacia las posiciones pro-imperialistas y reaccionarias ya no precisaba de los vigorosos sindicatos-soviets de los hombres del agro, contribuyó a destruirlos, partiendo de la momentánea depresión de las masas, a fin de convertirlos en sus dóciles instrumentos, en rótulos vacíos de todo contenido militante, así nació el caciquismo o éste fue adaptado a las necesidades de los dueños del poder. Tórres, pese a su afán de apoyarse en las masas, no pudo ni siquiera devolver al sindicalismo campesino su vieja pujanza.

El movimiento obrero, representado por los sindicatos y los partidos de izquierda, llegó a 1970 siguiendo las líneas maestras de su propia historia, con sus propias leyes y como parte integrante e inseparable de la estructuración del proletariado como clase. Tórres tenía muy poco que ver con todo esto, pero sí el nacionalismo de contenido burgués en su conjunto, pues la clase obrera se estaba definiendo como tal diferenciándose y oponiéndose a ese nacionalismo, precisamente.

La huelga general de fines de 1969 estuvo dirigida a oponerse al triunvirato que habían constituido los golpistas gorilas y que prácticamente no funcionó. A nadie se le ocurrió declararla para apuntalar a Tórres en su marcha hacia el poder, aunque éste encontró la oportunidad de apoyarse, por lo menos momentáneamente, en esa acción multitudinaria. Los explotados salían de un período dictatorial y de extrema persecución, apenas si habían logrado volver a poner en pie a sus organizaciones gremiales. En cierta medida la declaratoria de la huelga fue un ensayo hecho por los dirigentes sindicales que, a su vez, ejercían funciones políticas; si se tradujo en un éxito sin atenuantes se debió a circunstancias favorables del momento y porque la radicalización de los trabajadores que ya se había iniciado encontró un adecuado canal de expresión. Una prueba de todo esto se tiene en el hecho de que la llegada de Tórres a la Presidencia no contuvo el ascenso de las masas y menos las obligó a tornarse oficialistas, éstas siguieron su marcha, la huelga general las impulsó hacia adelante en la evolución de su conciencia y en la consolidación de su independencia. Concretamente, la huelga general y el nacionalismo de Tórres recorrieron dos caminos diferentes y contrapuestos, esto desde el primer momento y como tendencias políticas claramente tipificadas.

Las actitudes del nacionalismo movimientista y la de Tórres frente al sindicalismo no pueden ser simplemente identificadas. El movimientismo tuvo ingerencia directa en la estructuración de los sindicatos y dejó en éstos sus huellas, que aún ahora son perceptibles. Organizó sindicatos y federaciones, pretendió darles una ideología particular y contrarrevolucionaria, sobre todo durante el gobierno del derechista Hernán Siles Zuazo, movilizó a una parte de la clase obrera para poder más fácilmente aplastar a sus adversarios políticos, por todo esto se esmeró en impedir el desarrollo de una ideología propia de los explotados, buscó por todos los medios imponerles sus propias ideas, que ciertamente no tenían nada de revolucionarias. El marxismo

no habría podido contribuir a la formación de la clase trabajadora sí no hubiera rechazado y luchado contra estas pretensiones. La historia del proletariado en el período movimientista puede sintetizarse en el sostenido esfuerzo que hace por emanciparse de la ideología nacionalista burguesa.

Sería incorrecto hablar de un simple apoyo de los obreros organizados a los gobiernos del MNR, esto porque lo que en realidad se tuvo fue una oscilante y contradictoria lucha de los explotados por acentuar su propia fisonomía frente al control ideológico de la clase dominante, esta vez expresada por los canales equívocos del nacionalismo "antimperialista" y acentuadamente obrerista. Se puede redondear esta cuestión indicando que los sindicatos tenían mucho que ver con el nacionalismo encarnado en los diversos gobiernos y tendencias emeeneristas. Ya hemos indicado anteriormente que el lechinismo, la izquierda del MNR, su expresión más acabadamente obrerista, no era más que la quinta columna nacionalista-burguesa (que a su modo traducía la política de la clase dominante) en el seno del sindicalismo. Pero, nadie puede poner en duda que ese lechinismo, que por su empirismo rudimentario y su inmediatez casi anarquista está hecho a medida para las necesidades de la política burguesa, es parte integrante e inseparable de la historia del sindicalismo y se puede decir que el grado de liberación de los explotados está señalado por su liberación de la influencia de esta secta movimientista. Lechín constituye la negación misma de la política revolucionaria, lo que se evidencia por su terco apego al nacionalismo (inconfundible expresión de los intereses de la burguesía nacional), aunque éste sea presentado como "obrero", porque también hay una poderosa corriente burguesa en el seno de las filas sindicales.

El gobierno de Tórres, hay que subrayar que en su momento la expresión más izquierdista del nacionalismo burgués (será muy difícil la aparición de una tendencia tan radical de la clase dominante), no tuvo nada que ver con la formación del sindicalismo, muy poco con su existencia diaria y fue del todo extraño con su porvenir. El movimiento obrero y el torrismo, en éste se concretizó la amorfa y capitulante "izquierda nacional", no tuvieron nada en común, no coincidieron en momento alguno y el régimen nacionalista, pese a sus deseos, no alcanzó a encarnar las aspiraciones proletarias, sobre todo porque éstas aparecieron como objetivos socialistas, es decir, como la negación del nacionalismo más osado. Contradicción y no identidad fue el signo dominante de las relaciones entre la clase obrera y el gobierno nacionalista.

El mismo Tórres creía que su destino no era otro que el de retomar la política ovandista tan brutalmente interrumpida por el golpe gorila y de esta manera entroncarse en el proceso de la revolución nacional. Durante el gobierno Ovando era ya perceptible la disparidad entre la política de éste y la orientación seguida por el ascenso de las masas que se iniciaba, lo que llevó al gradual y acentuado aislamiento de aquel con referencia a las masas. Tórres heredó de este pasado las tendencias básicas que fisonomizaban al movimiento obrero y contribuyó a su mayor acentuación, no tuvo posibilidades ni fuerza para trastocar esta realidad.

Hemos visto que los trabajadores venían diferenciándose gradualmente como clase en el seno de la nación oprimida, proceso que se concretizó en la diferenciación con

referencia al nacionalismo de contenido burgués, inclusive de aquel que ostentaba un matiz acentuadamente izquierdista. Como todo proceso social, no siguió una línea recta y siempre en ascenso, una serie de circunstancias políticas podían interrumpirla. Sin embargo, Tórres no tuvo ninguna posibilidad de introducir profundas modificaciones en lo que apareció como una de las fuerzas más poderosas y subterráneas que se agitaban en el seno de los explotados: la necesidad de ir más allá del nacionalismo capitalista y de luchar por la efectivización de la estrategia tradicional del proletariado.

El radicalismo de la clase obrera venía de lejos y no hizo más que acentuarse gracias a su choque con el débil gobierno burgués nacionalista de Tórres. El hecho de que éste no pudiese manejar a su antojo a ese colosal aparato represivo que es el ejército, esto pese a su condición de Capitán General, determinó en alguna forma su inoperancia frente a las masas que no dejaron de serle hostiles. El destino de Tórres estaba ya contenido en germen en el pasado histórico de los trabajadores.

Cuando estalló la huelga general obrera ya estaba constituido el Comando Político de la Central Obrera y del Pueblo, que agrupó a todas las organizaciones políticas que se encontraban luchando contra la conspiración gorila, de espaldas a los ensayos foquistas que en ese momento tenían lugar. Ese Comando, fiel reflejo del poco desarrollo político que supone el inicio de una movilización de masas, tuvo mucho de impreciso y de falta de una clara orientación ideológica. La gran referencia estaba dada por la Tesis Política adoptada por el cuarto congreso de la Central Obrera, que, pese a sus tremendas contradicciones y a sus ambigüedades, constituía una enunciación ajustada al tradicional radicalismo proletario. El Comando, que bien pronto adquirió gran autoridad para las masas, observó una actitud por demás oscilante con referencia al gobierno Tórres: de una manera general observó una línea crítica y opositora, traduciendo así la tendencia predominante en el seno de los explotados, pero por momentos se aproximó "críticamente" al nacionalismo y esta postura correspondía exactamente al sentimiento predominante entre la pequeña-burguesía, ansiosa de integrarse al gobierno no importándole en qué forma. Con todo, es por demás sugerente que hubiese aparecido el Comando como síntesis de toda la anterior experiencia de los explotados alrededor del esfuerzo por desarrollar una política independiente.

3

¿podía Torres llevar al socialismo?

A Tórres inicialmente le dio resultados favorables, sobre todo con referencia a la alta jerarquía castrense, la leyenda de que tenía en un puño el control de las masas; como era de esperarse, la leyenda se disipó muy pronto y entonces el ataque de la derecha uniformada, que personificó a toda la reacción, no se dejó esperar. Si hubiera sido real el multitudinario respaldo al nacionalismo, la arremetida gorila se habría tomado más tiempo simplemente.

La maniobra más osada del solitario Tórres consistió en su oferta al Comando Político

de otorgarle un tercio de su gabinete, esto en el primer momento, porque luego fue mejorada hasta la sorprendente proporción el cincuenta por ciento. La discusión que se abrió fue importante no sólo por sus implicaciones principistas sino porque puso en claro la situación política que se vivía.

El hecho de que proposición tan tentadora fuese motivo de discusión estaba demostrando que el Comando Político no se identificaba con el gobierno nacionalista, de ser así se habría limitado a designar a las personas que debían integrar el gabinete y en caso de ser evidente el oficialismo de dicha organización es poco probable que se le hubiese cursado invitación parecida. Tórres estaba seguro que incorporando a los representantes del Comité al equipo ministerial, su gobierno se transformaría automáticamente en popular, convirtiéndose en poderosísimo factor de presión sobre el ejército, que no habría tenido más remedio que colaborarle o por lo menos postergar indefinidamente sus trajines golpistas.

En ese entonces, el Comando estaba muy lejos de ser la expresión de las masas y de sus organizaciones de base, su estructura y orientación se definían por la posición que adoptaban las organizaciones políticas, no todas revolucionarias por cierto, entre ellas se encontraban pequeños burgueses y nacionalistas, como el MNR de Siles, por ejemplo, que no tardó en ser expulsado. Se señala este antecedente para poner de relieve la creciente preponderancia de la clase obrera en el panorama político y la extrema debilidad del torrismo que no pudo arrastrar detrás de sí a los grupos y personalidades de la pequeña burguesía politizada. Para la izquierda marxista se trató de fijar las posiciones ideológicas y también de apuntar acerca de la política que debía desarrollar la clase obrera.

La posición proletaria fue formulada con nitidez por el Partido Obrero Revolucionario, que prácticamente timoneó todo el debate, opacando a quienes se colocaron detrás suyo y en clara actitud polémica con el stalinismo (PCB). El planteamiento decía, en síntesis, que a la clase obrera no le estaba permitido colaborar, bajo ninguna condición, en un gabinete burgués, que el Comando sólo podría enviar a sus representantes a un gobierno obrero. Se partía de una clara tipificación del gobierno nacionalista de Tórres como burgués de izquierda, ciertamente que no idéntico al de Barrientos, por ejemplo, pero de ninguna manera identificado con el proletariado o con los intereses de la nación oprimida.

El Comando rechazó participar en el gabinete en una proporción del 33%, lo que ciertamente fue sorprendente si se toma en cuenta la ilimitada ambición que domina en los medios pequeños burgueses y que les empuja a los desvaríos más inesperados. ¿Cómo interpretar esta actitud? Únicamente como el resultado de la poderosa presión de las masas en alza, particularmente de las proletarias. El mérito del trotskismo, en verdad no insignificante, consistió únicamente en haber dado expresión política a esta tendencia. El rechazo se logró después de una áspera lucha con el stalinismo pro-Moscú, que en esa oportunidad expuso abierta y francamente su tesis en favor de la revolución por etapas y del carácter antiimperialista y revolucionario de la burguesía nacionalista. Para el PCB la tarea del momento no era otra que la de cooperar con el gobierno Tórres de manera incondicional y sin esperar ninguna

ventaja partidista o en favor de la clase trabajadora. En oposición, el trotskismo formuló la no participación en el gobierno burgués bajo ningún pretexto y a pesar de todas las ventajas y concesiones que pudiese ofrecer.

Cuando le fue planteada al Comando la concesión del 50% de ministros del gabinete, el POR ya no pudo lograr la ratificación de la original resolución de rechazo y por escaso margen se aprobó nominar una terna para la designación de los colaboradores de Tórres. El trotskismo estaba seguro que este paso era sumamente grave, al extremo de que concluiría desarmando políticamente a la clase obrera y cerrándole el paso hacia el poder. Se sabía por la experiencia histórica y también por la teoría, que los ministros "obreros" concluyen como simples adornos de los gobiernos burgueses y como quintas columnas de la política de la clase dominante, como enemigos jurados de la revolución social. Por estas consideraciones, los poristas ejecutaron una maniobra abiertamente pregonada y destinada a inviabilizar el proyecto de incluir en el gabinete a representantes del Comando Político. Después de una larguísima discusión se acordó que el cupo de ministros asignado a aquella organización sería llenado directamente por ella y no por el Presidente como indica la Constitución Política, debiendo llevar como mandato imperativo las decisiones adoptadas por la organización política cobista; serían revocables en cualquier momento, responsables ante el Comando y percibirían únicamente el salario medio de obrero. Para subrayar la voluntad de que tales portavoces no fuesen asimilados por el gobierno ni por la clase dominante, se dejó sentado que los "ministros" no serían dirigentes políticos de primera fila y menos los componentes del Comando, sino elementos designados por las bases, de manera preferible obreros, los mismos que actuarían asesorados por un equipo de comisarios políticos. En resumen, ya no serían ministros en el sentido tradicional del término.

Pese a que todos comprendían que en el equipo ministerial habían dos o tres puestos claves y que prácticamente determinaban toda la orientación del Ejecutivo, algunos pensaban que tener el 50% de votos en las reuniones de gabinete importaba tener ya el control de todo el aparato estatal. Esta idea errónea fue sistemáticamente combatida por el POR. Un equipo numéricamente considerable de delegados obreros, oficiando de ministros, no podría interpretarse como sinónimo de gobierno obrero, esto porque el aparato estatal burgués quedaba intacto, porque el régimen de la propiedad privada, basamento de toda la sociedad, no había sido tocado, y porque los "ministros obreros" no tendrían más remedio que ajustar sus actos a la Constitución, ley maestra destinada a preservar la permanencia del estado de cosas imperante. El ministerialismo es una desviación aún mucho más grave que el cretinismo parlamentario, esto porque los ministros, según el ordenamiento jurídico, son corresponsables de la política aplicada por el Poder Ejecutivo y porque resulta inconcebible que puedan desarrollar en el seno del gabinete una política opositora desde el punto de vista de la clase obrera.

Tórres al conocer las condiciones previas que había acordado el Comando para el envío de sus candidatos a ministros, se apresuró en hacer conocer que no se incluirían en el gabinete a los portavoces "obreros" porque el alto mando del ejército había amenazado con consumir un nuevo golpe de Estado si persistía el peligro comunista,

etc.

Tal fue la máxima concesión que hizo Tórres a las masas y su respuesta dada al Comando permite formarse idea de la verdadera proyección política que daba a aquella. No buscaba subordinarse a los explotados o colocar el aparato estatal al servicio de éstos, como insinúan algunos ingenuos; obró así buscando convertirse en popular y embridar a a los primeros.

Según el testimonio de Jorge Gallardo, que se autocalifica cerebro del gobierno Tórres, éste se movió bajo el temor constante de que en cualquier momento las masas pudiesen tomar el poder y buscando controlarlas. Esto explica por qué en los primeros momentos se declaró abiertamente contrario al funcionamiento de la Asamblea Popular, porque -dijo- había nacido al margen de la ley, aunque al final se limitó simplemente a dejar hacer.

Los nacionalistas, stalinistas y los partidarios de la izquierda nacional, sostienen que la táctica correcta en ese entonces debía consistir en plegarse al gobierno Tórres y en integrarlo, para permitir que las masas lo empujasen hacia posiciones avanzadas y algunos llegan al extremo de sostener que así se podría haber llegado de modo seguro al socialismo, lo que habría evitado la dolorosa experiencia del 21 de agosto de 1971. El planteamiento lleva una gran carga de subjetivismo y parece apoyarse en la supuesta buena voluntad de Tórres para encaminarse hacia el socialismo, a condición de contar con el apoyo de la mayoría nacional.

Ese apoyo popular habría asegurado la estabilidad gubernamental del régimen y la ejecución de un amplio plan de reforma dentro del capitalismo, imprescindible para ganar a las masas en favor de las posiciones oficialistas. Pero, el reformismo no es socialismo, sino, más bien, un recurso puesto al servicio de la conservación del régimen de la propiedad privada. El gobierno Tórres concedió amplias garantías democráticas a las organizaciones sindicales y políticas populares, pero también extendió esos beneficios a la reacción y a los gorilas golpistas. En esta actitud contradictoria tiene que verse, además de los propósitos de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y de la mayoría nacional, la extrema debilidad del nuevo régimen.

Tórres cayó como una experiencia inconclusa, sin que hubiese podido desarrollar a plenitud lo que era ya tendencia en los momentos iniciales de su gobierno. Estuvo condenado a batirse en dos frentes y a maniobrar desplazándose de un extremo a otro, sin haber llegado a ser en momento alguno un verdadero gobierno. Estos frentes no eran otros que la creciente oposición venida tanto del polo imperialista como del proletario y popular. El desarrollo de la situación le llevaba a un frontal choque con la reacción, expresada por el gorilismo, así como con el movimiento de masas en pleno ascenso. Para sobrevivir habría tenido que neutralizar y ganar para sus posiciones a uno de esos polos extraños, cosa imposible en ese momento porque el torrismo no ofrecía ninguna respuesta atrevida y propia a los agudos problemas. El desarrollo total del torrismo sólo podía conducir a la completa capitulación ante el imperialismo y la reacción criolla.

Según la izquierda nacional, el "nacionalismo revolucionario" sería una posición política propia de las tendencias nacionalistas en los países atrasados y particularmente de los grupos militares. Es evidente que la pequeña burguesía y las organizaciones políticas que genera, no desarrollan una línea política independiente y consecuente pequeño-burguesa, sino que sirven como canales de expresión a los intereses de la burguesía nacional o bien de la clase obrera. En el caso concreto del torrismo, se trató de un movimiento pequeño-burgués timoneado por un militar de humildísimo origen, pero asimilado por su carrera a la clase media, que intentó nuevamente materializar los intereses generales de la burguesía indígena y que pueden resumirse en el afán de lograr el desarrollo capitalista pleno del país. La historia personal de Tórres ejemplifica la afirmación: comenzó como falangista para acabar como nacionalista burgués de izquierda. La política de Tórres fue -repetimos- oscilante en extremo, se desplazó continuamente de las proposiciones burguesas hacia las proletarias y viceversa, debido a su contenido clasista pequeño-burgués. La idea de que en nuestra época, de predominio y destrucción de la economía mundial capitalista, puede haber en los países atrasados una particular política, diferente en extremo tanto del capitalismo como del socialismo, es atribuida como rasgo diferencial a la burguesía nacional, obligada a luchar contra el imperialismo ya apoyarse en las masas explotadas, que está, sin embargo, muy lejos de plantearse objetivos socialistas.

Si se toma en cuenta el contenido de clase del gobierno Tórres, aparece por demás evidente que los revolucionarios (consideramos tales a los que expresan los intereses históricos del proletariado y no únicamente los inmediatos) no podían participar en él, porque esto habría significado nada menos que abandonar el programa del proletariado para pasarse al campo enemigo. La posición radical que se explanó en el Comando Político fue justa y hay que felicitarlo de que se hubiese resistido a ser arrastrado por el oportunismo y el arribismo típicos de las agrupaciones pequeño-burguesas.

El problema de que el régimen nacionalista encabezado por el general Tórres tenía la posibilidad o no de transformarse en socialista, planteó y aún plantea un importante problema principista. Si se responde afirmativamente se está partiendo del convencimiento de que el Estado burgués (puede ser que aquel adopte formas democráticas muy generosas) se transforma internamente y de manera gradual en su contrario: en la dictadura del proletariado, salvo que se hubiese descubierto una forma intermedia o diferente a los Estados burgués y proletario.

Si no se olvida que el Estado es la organización política de la clase dominante y, como escribió Lenin, "una máquina destinada a mantenerla dominación de una clase sobre otra", su esencia tiene que ser buscada en el régimen económico que defiende, pues de aquí arranca su naturaleza de clase. Este fenómeno superestructural no puede de ninguna manera ser todo lo contrario de la estructura económica a la que debe corresponder inevitablemente. En el seno del capitalismo o de una economía pre-capitalista no puede estructurarse un Estado Obrero (socialista).

La teoría marxista del Estado enseña que el proletariado no se limitará a tomar en sus manos el viejo aparato estatal burgués para ponerle a funcionar en su beneficio,

reacondicionado o no, sino que tendrá imprescindiblemente que destruirlo para poder edificar su propio Estado que nada tendrá que ver con la obra de la burguesía en este terreno. Los órganos de poder de las masas, que aparecen en el período de las grandes movilizaciones y de radicalización, constituyen el basamento material de ese nuevo Estado.

No hay, pues, lugar a la transformación interna, a través de graduales reformas o de la creciente participación de los socialistas en su seno, en el parlamento, por ejemplo. Si se cae en este grave error, que en la época que estamos analizando es compartido por parte de la izquierda presuntamente marxista y por la llamada izquierda nacional, no puede menos que conducir al ministerialismo, que importa un franco desplazamiento hacia las trincheras del enemigo de clase y el repudio a la estrategia de la revolución y dictadura proletarias. Durante el gobierno de Tórres el mínisterialismo presionó poderosamente sobre las organizaciones que se reclamaban de la izquierda y del programa obrero, que, pese a sus tremendas dubitaciones, se mantuvieron dentro de los grandes lineamientos señalados por la Asamblea Popular gracias a la presencia de un belicoso proletariado que tan firmemente pugnaba por efectivizar su liderazgo sobre toda la nación oprimida. Excepcionalmente la izquierda ministerialista (entre la que hay que incluir al stalinismo, cuyo programa menchevique le empuja a colaborar incondicionalmente con los gobiernos burgueses y mejor desde el seno del gabinete, como ha sucedido en 1980), no cayó en la catástrofe y salió de la prueba ostentando el rótulo de revolucionaria.

Dentro de la estrategia proletaria debía descartarse la posibilidad de la transformación interna del Estado burgués timoneado por Tórres en socialista, como resultado de la victoria de la revolución el destino de aquel no era otro que el ser destrozado, lo que no impide que tácticamente se podía marchar junto al nacionalismo torrista en determinadas condiciones y para obligar al fascismo y al imperialismo a retroceder o lograr que perdiesen sus mejores posiciones, etc. Pero una cosa es un compromiso temporal, una coincidencia en ciertas acciones tácticas y otra muy distinta colaborar con la política burguesa nacionalista y llamada "progresista", integrarse al Estado de la clase enemiga.

La tesis en sentido de que el apoyo multitudinario de los explotados al gobierno Tórres lo hubiese transformado automáticamente en revolucionario y en socialista, no es más que una variante del planteamiento de la posibilidad de que el Estado burgués puede transformarse interna y gradualmente en su contrario. Cuando las masas, incluido el proletariado, se suman a un gobierno burgués, aunque sea temerariamente radical, comienzan abandonando su estrategia particular y se pliegan a la política de la clase dominante, traicionan sus aspiraciones más profundas para convertirse en instrumentos de una política que les es totalmente extraña.

Los que alientan la ilusión de que una mayoría socialista en el seno del parlamento podría modificar la estructura de la sociedad no hacen otra cosa que expresar de manera por demás sofisticada la posibilidad de la interna y pacífica transformación del Estado burgués en obrero. El parlamento es parte integrante del Estado, es uno de sus poderes, allí donde efectivamente llega a serlo, por esto que no puede

convertirse en instrumento revolucionario y modificar la esencia clasista del aparato estatal. El parlamento más atrevido puede limitar e introducir modificaciones y reformas en el régimen de la propiedad privada, pero no puede sustituir la propiedad privada burguesa (sobre los medios de producción) en colectiva, por ejemplo. El cretinismo parlamentario conduce directamente a la colaboración con la burguesía dueña efectiva del poder.

Las masas cuando pusieron a un lado al gobierno nacionalista de Tórres y atrevidamente plantearon, a través de la Asamblea Popular, la perspectiva de la conquista del poder, repudiaron con toda energía la posibilidad de la transformación interna del Estado burgués en la dictadura del proletariado y por medio de la acción directa se encaminaron a destruirlo. La inoperancia de parte de la izquierda consiste en su incapacidad de sacar todas las conclusiones teóricas y políticas de tan soberbia lección dada por los explotados. Los que se colocan al servicio de la política burguesa están orgánicamente impedidos para aprender de lo que hacen las masas en el período de acentuación de la lucha de clases.

4

Táctica revolucionaria frente al Gobierno Tórres

Debido a que el gobierno nacionalista de izquierda del general Tórres no tuvo posibilidades de arrastrar a su campo a la clase obrera y a las masas en general, fue posible que la vanguardia revolucionaria pudiese desarrollar, desde el seno mismo de las organizaciones populares, la táctica adecuada frente a tan interesante experiencia burguesa.

La estructuración de la clase y la fijación de la teoría de la revolución, que tanto vale decir, del programa, pasan por el planteamiento de esa táctica revolucionaria, que necesariamente se incorpora al arsenal del proletariado como una conquista valiosa y definitiva, no en vano se refiere a la delimitación de la fisonomía de la clase llamada a transformar estructuralmente a la sociedad.

El marxismo en los países atrasados tiene que resolver el problema de qué actitud observar frente a la burguesía nacional, particularmente cuando ésta se radicaliza, lo que puede permitirle ganar a las masas para sus posiciones y controlarlas políticamente. Esas conclusiones merecían ser aplicadas al caso concreto del gobierno nacionalista de Tórres. No tiene por qué extrañar que el Partido Obrero Revolucionario hubiese sido la única organización marxista capaz de señalar con precisión y toda oportunidad, cuál debía ser la actitud que las masas debían observar frente al gobierno Tórres, pues desde hacía mucho tiempo y partiendo de la aplicación del materialismo histórico para el mejor conocimiento de la realidad nacional, venía desarrollando una política consecuente de clase frente al nacionalismo de contenido burgués. Cuando las condiciones del momento permitieron la posibilidad de dar expresión política a las tendencias más profundas que se agitaban en las masas, la política revolucionaria del

trotskyismo apareció como la encarnación misma de aquellas.

La ley más general de la revolución en los países atrasados de nuestra época consiste en que el nacionalismo, que bien puede debutar como dirección de las masas y osadamente antiimperialista, pues no en vano se trata de la solución de las tareas democráticas pendientes, no podrá menos que, en cierto momento, realizar un profundo desplazamiento hacia la derecha, hacia las posiciones de la metrópoli opresora. Ese momento está señalado no sólo como una emergencia del período de desintegración del capitalismo que se vive, sino por la presencia militante del proletariado, que no puede menos que formular sus propios objetivos de clase y que instintivamente es ya socialista, negación de la propiedad privada, que le pisa los talones a la burguesía nacional porque busca afanosamente acabar con el fundamento mismo del orden social imperante, que no se detendrá en el camino de sepultar revolucionariamente a su aliada de ayer. La comprensión de este proceso sólo podía darse a través de la debida aplicación de la teoría de la revolución permanente a la realidad nacional, que eso hizo el trotskismo a partir de la Tesis de Pulacayo (1946). Contrariamente la teoría stalinista de la revolución por etapas, que sostiene que en la actualidad los países atrasados sólo han madurado objetivamente (económicamente) para hacer posible la revolución democrático-burguesa (un rótulo apenas encubierto para designar a la revolución burguesa), obliga a la clase obrera a subordinarse a la política de la burguesía, a cooperarla en el llano o el poder, hay que recalcar que esta cooperación significa para el stalinismo subordinación sobre todo.

Si la victoria del proletariado será posible acentuando su independencia de clase (independencia ideológica y organizativa), quiere decir que debe imprescindiblemente diferenciarse políticamente con referencia al nacionalismo de contenido burgués y particularmente de aquel que asume rasgos acentuadamente izquierdistas, esto porque es el que en mayor medida puede desorientar a las masas y arrastrarlas detrás de sus particulares objetivos. La táctica revolucionaria debía, pues, comenzar por esforzarse en acentuar las diferencias clasistas del proletariado con referencia al gobierno Tórres, esto lejos de empeñarse en confundirse con él, de integrarse a su seno. Toda difuminación de los límites entre clase obrera y el nacionalismo burgués no habría hecho otra cosa que poner en serio peligro la independencia de clase, la estrategia revolucionaria del proletariado, pues necesariamente habría significado la subordinación a la política de la clase dominante, que no en vano es la dueña de los medios de producción y ejerce poderosa presión sobre los explotados. El proletariado para rechazar esa presión no tiene más remedio que aferrarse a las ideas revolucionarias, que son heréticas en su esencia. Toda la historia de la clase obrera y que ha sido descrita a lo largo de las páginas de esta "Historia", se puede resumir como el esfuerzo que hace por delimitar con nitidez sus contornos, por diferenciarse enérgicamente frente a las otras clases o dentro del conglomerado de la nación oprimida, diferenciación que forma parte de su conciencia de clase.

No tiene que extrañar que los izquierdistas que propugnaron el apoyo a la política gubernamental del torrismo, muchos de ellos muy tarde, ensayaran afanosamente someterse a la burguesía democratizante entre 1979-1980. En arribos casos el apoyo a la Política burguesa significó simplemente el abandono total de la estrategia del

proletariado, por eso dieron tantas volteretas para demostrar que la táctica debía imperar sola, ya sabemos que el resultado no podía ser otro que convertir la táctica en finalidad estratégica.

El proletariado, cuando avanza por el camino de su estructuración como clase, no puede apoyar la política de los gobiernos burgueses, por muy radicales que estos sean; a fin de poder preservar su independencia de clase, tiene que criticarla, para así demostrar ante las masas de la nación oprimida sus limitaciones, su tendencia a quedarse en medio camino, a capitular ante el imperialismo. No se trata del apoyo crítico, que parte del convencimiento de que la burguesía nacional puede desarrollar con cierta consecuencia una política antiimperialista y revolucionaria, todo para justificar el apoyo de la izquierda y de la clase obrera a esa política, sino de relieves la inviabilidad de la solución burguesa a las tareas democráticas que permanecen incumplidas.

La independencia de clase, que es independencia política, lleva en sus entrañas la posibilidad de que el proletariado desplace del poder a la burguesía, que en su momento se enseñoreó sobre la mayoría nacional, esta tendencia para desarrollarse tiene que acentuar la diferenciación clasista de aquel frente a la política de la clase dominante, la clase obrera tiene que dejar de ser sostén y colaboradora del dueño del Estado. El apoyo crítico, la actitud más atrevida de los que se subordinan a la burguesía, enturbia y distorsiona este proceso.

No se puede apoyar la política de la burguesía y menos confundirse con ella, hay que oponerle la política revolucionaria del proletariado, consecuencia del carácter revolucionario de esta clase, del hecho de que para realizarse como tal debe convertirse en caudillo nacional. Cuando el Partido Obrero Revolucionario y la Asamblea Popular desarrollaron una política propia, nítidamente diferenciada de la del nacionalismo torrista, cuando alentaron la dualidad de poderes, que por ser tal ya constituía un preanuncio de la posibilidad de la estructuración de la dictadura del proletariado, actuaron correctamente y conforme a los objetivos históricos del proletariado, que actuó como portavoz de las masas en general.

Sin embargo, no puede ni debe perderse de vista la diferencia que existe entre nación oprimida (país atrasado o semicolonial) y nación opresora (metrópoli imperialista). Para el proletariado y para su partido, la lucha por la liberación nacional es una tarea que incumbe a la mayoría del país y que debe ser afirmada en todo momento, no les está permitido aliarse con el opresor foráneo para poner en orden la casa, para arreglar el mecanismo de la democracia, por ejemplo.

Todo ataque a la nación oprimida de parte del imperialismo, independientemente de la naturaleza del gobierno que impere en cierto momento (democratizante, nacionalista de izquierda o francamente fascista) debe ser enérgicamente rechazado.

La diferenciación frente al gobierno de Tórres y el desarrollo de una política revolucionaria propia no importaban la identificación con el imperialismo que lo combatía. La línea de conducta invariable fue la de rechazar de manera terminante

todo ataque y toda ingerencia imperialista en la política interna. Con todo y hay que recalcarlo, este rechazo de la agresión imperialista no supone identificación con la política del gobierno nacionalista.

Hay que decir con toda claridad que tal política permitió la construcción de la Asamblea Popular como órgano de poder de las masas y, por lo tanto, el planteamiento de la perspectiva de la conquista del poder por el proletariado convertido en caudillo nacional. Ni duda cabe que esta línea de conducta no podía menos que ser totalmente diferente a la formulada por el gobierno Tórres en su propósito de mediatizar a las masas y de someterlas a su control político.

En 1970-71, los diferentes matices de la izquierda no mostraron su verdadero rostro, en alguna forma se mimetizaron en medio de la política desarrollada por la Asamblea Popular, permanecieron agazapados en espera de su cuarto de hora y buscando no quedar aislados con referencia al grueso de las masas. Sólo más tarde y cuando el gorilismo en el poder se desarrolló plenamente, esos pretendidos revolucionarios dieron rienda suelta a su descomunal odio a esa auténtica creación de las masas revolucionarias que fue la organización soviética boliviana y llevaron a términos insospechados su política de apoyo y colaboración con la burguesía democratizaste, esta vez en el llano. Los resultados ya los conocemos: empujaron a las masas hacia el polo burgués y pretendieron inútilmente estrangularlas dentro del parlamentarismo.

La política revolucionaria a desarrollarse en el período próximo no podrá menos que partir de la valiosa experiencia de una política independiente por parte de la clase obrera que se vivió durante el gobierno nacionalista de Tórres. El camino de la victoria de los explotados no pasa por la política nacionalista burguesa, sino por la diferenciación de la estrategia proletaria frente a ella y esa fue, en resumen la conducta observada por la Asamblea Popular y el POR frente al gobierno Tórres. Si la izquierda en general ha renegado de este pasado, a fin de que su capitulación ante la burguesía no ofrezca la menor duda, únicamente el trotskismo ha asimilado críticamente esa experiencia de las masas y le ha dado un elevado contenido político.

Capítulo VIII

La experiencia de la Asamblea Popular

1

La Asamblea Popular y el Gobierno de Tórres

Las Bases de Constitución de la Asamblea Popular fueron presentadas al Comando Político, en forma de proyecto, por los delegados poristas y del PC-Moscú, aunque su redacción original corresponde al POR. Después de acalorados debates se aprobaron por unanimidad. Movimientistas y prinistas se limitaron a callar en la reunión pública, aunque en el seno de la comisión designada para estudiar el proyecto persistieron en su idea de transformar el Comando en Parlamento y en su tenaz oposición a que se declarase órgano de poder de la clase obrera y de las masas. La Asamblea nació en franca lucha contra el intento de estrangular el proceso revolucionario con ayuda del parlamentarismo burgués.

El documento comienza, precisamente pasando revista a la quiebra del parlamentarismo y a los esfuerzos hechos por los trabajadores para constituir sus propios órganos de poder: "Sin embargo, hay que recoger una experiencia que confirma a plenitud la teoría a seguir: el funcionamiento de la COB como asamblea popular después del 9 de abril. En los hechos se erigió en un poder real y no legal. Obligó al gobierno a dictar las medidas reclamadas por las masas populares. El poder de la clase obrera y de las organizaciones populares y políticas representó en ese breve período la fuerza concentrada del proletariado, cuya primacía sobre los demás sectores se manifestó en la acción ejecutiva propia, sin acondicionarse al gobierno de la Nación".

Polemizando tanto con movimientistas y prinistas, por un lado, y con el gobierno Tórres, por otro, sostiene: "La Asamblea Popular no puede ser una variante del parlamento burgués, tanto por su contenido como por sus funciones. El error fundamental consistiría en confundir la Asamblea Popular... con una de la modalidades del Legislativo tradicional... Tal planteamiento puede despertar ilusiones en el seno de las masas, que no podrá menos que hacer consentir a éstas que ya se encuentran en el poder. Las limitaciones parlamentarias pueden conducir las a la frustración y momentáneamente apartadas de los objetivos revolucionarios". La Asamblea aparece como la pieza clave de la contradicción existente entre nacionalismo y revolución proletaria.

La Asamblea a tiempo de nacer y a lo largo de toda su existencia proclamó muy alto su independencia frente al gobierno nacionalista de Tórres y, al mismo tiempo, dejó claramente sentada su adhesión a la política revolucionaria desarrollada por la clase obrera. Esto no significaba que ignorase las enormes diferencias que habían entre el gorilismo fascista, en permanente conspiración, y el nacionalismo de izquierda

y democratizante encarnado en Tórres en ese momento. Ante la agresión fascista e imperialista se decidió rechazarla sin temor a aparecer junto al gobierno y sin olvidar de combatirlo toda vez que adoptase medidas antinacionales y antipopulares: "la Asamblea Popular, al luchar por la liberación nacional, sostendrá las medidas revolucionarias, actuará conjuntamente con el poder Ejecutivo contra el fascismo y el imperialismo, o, alternativamente, se pondrá frente al gobierno cuando las medidas de éste atenten contra los intereses del pueblo y se aparten del proceso revolucionario". Esta táctica, que a muchos se les antoja contradictoria, debe ser considerada dentro de la gran estrategia de la Asamblea: la conquista del poder por la clase obrera.

Desde las primeras líneas se opone el órgano de poder de la clase obrera y de las masas a las posibles variantes del parlamentarismo. "La Asamblea Popular (autoridad suprema para los trabajadores y sus dirigentes) y los cabildos populares, actuarán como la instancia unificadora del pueblo. Las organizaciones citadas se caracterizan porque toman decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida de las masas, ejecutando al mismo tiempo esas decisiones. En ese sentido se diferencian radicalmente del parlamento burgués y sus variantes posibles... La clase obrera no tiene posibilidades de transformar el parlamento tradicional en órgano de su propio poder. Lo más que puede hacer es asumir una actitud opositora y de denuncia de los excesos del gobierno central, actitud cuya eficacia es por demás discutible y que depende de condiciones favorables y concretas".

Seguidamente se señalan las características de la Asamblea como órgano de poder. "En todas las revoluciones populares ha sido destruida la separación de los poderes del Estado y los organismos deliberantes, al mismo tiempo, han concluido convirtiéndose en organismos ejecutivos. Tales son las características de un verdadero órgano de poder revolucionario... La Asamblea Popular, concebida como órgano de poder popular debe cimentarse en los Comités Revolucionarios instaurados en los centros obreros y populares. No se trata de que los miembros de estos organismos se limiten ahora a discutir incansable y bizantinamente sobre los problemas nacionales, sino de que los resuelvan y utilicen su fuerza para ejecutar sus decisiones".

La parte considerativa concluye justificando la preeminencia del proletariado dentro de la Asamblea Popular, que se tradujo en la proporcionalidad de las delegaciones: "Para evitar frustraciones, la Asamblea Popular debe estructurarse asignando a la clase obrera por lo menos el sesenta por ciento de delegados en su constitución, como garantía y seguridad de qué, el proceso revolucionario no se detendrá ni desviará. En esta forma se expresa su condición de clase dirigente". La Asamblea remarcaba las características diferenciales del Estado-comuna.

La Asamblea tiene que considerarse como una organización en constante proceso de transformación, como un germen que, debido a su cortísima duración, no pudo dar todo lo que llevaba potencialmente en sus entrañas. Debe ser tomada como una tendencia cuyo desarrollo y realizaciones dependió del grado de movilización, radicalización y madurez de las masas.

Sus primeras declaraciones adolecen de falta de claridad y contradicciones en muchos lugares, que denuncian la existencia de tendencias contrapuestas en su seno. Sin embargo, esas deficiencias fueron siendo superadas, de una manera general, en beneficio de la afirmación de la línea proletaria, de la preeminencia de la estrategia de esta clase. La dualidad de poderes y su acentuación siguió este camino, que conducía a la conquista del poder.

Los que la critican tomando algunas frases aisladas de sus declaraciones, muchas de ellas no concordantes, olvidan que constituía un proceso en constante evolución y sustituyen el análisis de sus tendencias básicas por los datos anecdóticos y hasta ocasionales.

Los delegados debían ser portadores del mandato imperativo de sus organizaciones y eran responsables ante ellas, pudiendo ser relevados de sus funciones en cualquier momento. Se buscaba, por todos los medios, asegurar la vigilancia masiva sobre los delegados.

La fracción porista propuso reducir al mínimo el número de delegados de las seis organizaciones políticas que participaban en la Asamblea (dos para cada una de ellas). Se buscaba evitar que los partidos pequeño-burgueses inflasen artificialmente su influencia y se creía que los partidos populares ya estaban representados en el seno de la Asamblea a través de su militancia en los sindicatos y en las organizaciones de masas. De un total de 218 delegados, 132 correspondían a las organizaciones proletarias, 52 a las de clase media, 23 a las campesinas y 11 a los partidos políticos.

El artículo primero de los Estatutos de la Asamblea Popular la define como "frente revolucionario anti-imperialista dirigido por el proletariado" y añade que está "constituida por la Central Obrera Boliviana, las confederaciones y federaciones sindicales de carácter nacional, las organizaciones populares y por los partidos políticos de orientación revolucionaria"¹. Se trataba de un frente anti-imperialista constituido por las clases sociales que conforman la nación oprimida.

En el artículo segundo se lee. "Reconoce como a su dirección política al proletariado y declara que su programa es la Tesis Política aprobada por el cuarto congreso de la Central Obrera Boliviana... Toda actitud contraria a esa Tesis o a la Declaración que sirvió de base para la constitución de la Asamblea Popular (se refiere a las Bases Constitutivas, G.L.) ... es incompatible con la participación en esta organización".

Se reconoció carácter el ejecutivo e imperativo a las resoluciones de la Asamblea, que debían cumplirse "a través de los métodos propios de la clase trabajadora" (artículo cuarto), lo que importaba relieves la acción directa. Las decisiones de las asambleas de base tenían también carácter de mandato imperativo para sus portavoces.

Sólo podían admitirse en el seno de la Asamblea Popular a las organizaciones que expresaban su "acuerdo con el programa de la Central Obrera Boliviana, que posean estructura nacional (artículo 28). En la práctica, para decretar las nuevas admisiones

1-"Rebelión", La Paz, junio-julio de 1971.

se consideró que no era suficiente la protesta de adhesión a los principios cobistas, sino que se investigaron los antecedentes y la conducta diaria para constatar si no se apartaban de la línea revolucionaria. Tratándose de los partidos políticos los requisitos a llenarse eran mucho más severos: "Si un partido político pide su admisión, presentará por escrito su solicitud, acompañando su programa puntualizando su completa conformidad con el programa de la Central Obrera Boliviana y los demás documentos de la Asamblea Popular, demostrando su estructura nacional. Esta solicitud será pública, a fin de que cualquier organización o ciudadano pueda impugnar la línea política de la organización solicitante. Es causal de rechazo el que la conducta pasada y presente de dicho partido contraríe la línea revolucionaria y antiimperialista. La admisión de la solicitud precisa dos tercios de votos del pleno de la Asamblea Popular" (artículo 29). Estas draconianas condiciones fueron adoptadas deliberadamente a fin de evitar que la avalancha de organizaciones de dudoso origen y de más dudosa conducta concluyese desnaturalizando el carácter revolucionario de la organización que nacía. En alguna forma se procedió de la misma manera que la Internacional Comunista cuando adoptó sus famosas "Veintiún condiciones de admisión": no se buscaba amontonar siglas o partidos, sino garantizar la hegemonía de la estrategia del proletariado, que no otra cosa significa su dirección política.

Muchos partidos y organizaciones sindicales y populares formaron cola pidiendo ser admitidos por la Asamblea (algunos de ellos, más tarde, notuvieron el menor reparo en combatirla sañuda y públicamente) y muy pocos pudieron satisfacer las severas exigencias que demandó aquella. Los acontecimientos posteriores demostraron que la conducta adoptada en ese entonces era acertada.

Algunos creyeron descubrir en los primeros documentos de la Asamblea una actitud marcadamente anti-partidista y favorable al sindicalismo de corte tradeunionista, al llamado revolucionario e inclusive al anarquismo. No debe olvidarse que sus Estatutos fueron proyectados y defendidos por la fracción porista, que representaba con nitidez y fidelidad la tendencia proletaria dentro de la nueva organización, y aprobados con pequeñísimas enmiendas. Los partidos y la política no deben considerarse de una manera abstracta, sino de un modo concreto, con relación a la política revolucionaria de la clase obrera, que busca la destrucción del régimen social pasado en la propiedad privada de los medios de producción. Durante la discusión de los documentos básicos de la Asamblea Popular y a lo largo de toda su existencia, ocupó un primer lugar la lucha ideológica y táctica de los partidos obreros contra los pequeño-burgueses, contra las expresiones políticas del socialismo universitario, así se exteriorizó en los hechos, el choque entre la estrategia de la clase obrera y la conducta aventurera de los grupúsculos pequeño-burgueses, ansiosos de convertir a las masas en el punto de apoyo de las maniobras inspiradas en el mesianismo de las capillas extrañas al desarrollo de la política boliviana. La decisión proletaria, puesta en evidencia de manera insistente, era la de poner freno y controlar a los movimientos de la clase media. La vanguardia política del proletariado actuaba a través de las organizaciones sindicales más poderosas y podía decir que los documentos básicos de la Asamblea Popular se ajustaban a su programa. Todos tenían plena conciencia de que los otros partidos se limitaban a bajar la cabeza ante la belicosa arremetida proletaria, en espera de una ocasión propicia para transformar desde la base a la Asamblea, para

reducirla a la condición de instrumento del terrorismo y del golpismo aventureros.

2

Organización soviética

Como se ha visto, la Asamblea Popular comenzó auto definiéndose como organización soviética, es decir, como órgano de poder del proletariado y de las masas. Los críticos posteriormente desarrollaron la tesis de que eso de los rasgos soviéticos de dicha organización fue una invención a posteriori de los teóricos poristas. La discusión pone en tela de juicio la existencia misma de la Asamblea y no es casual que esta objeción se hubiese convertido en el centro de las impugnaciones lanzadas contra el Partido Obrero Revolucionario. Este partido aparece, tanto para el gorilismo, para la derecha, como para casi toda la izquierda, como el creador de la Asamblea Popular. El análisis del programa de la organización trotskista, la línea política que viene defendiendo desde hace decenios en el seno del movimiento obrero, su decisiva participación en la elaboración de las bases ideológicas de la Asamblea Popular y en la actividad cotidiana de esta organización, confirman tal conclusión lanzada provocativamente. Ha sido el Partido Obrero Revolucionario el que, después de agosto de 1971, ha tomado en sus manos la dura tarea de explicar el verdadero contenido de la Asamblea y defenderla de los ataques venidos desde todos los lados, tanto de la derecha como de la misma izquierda. El Partido Comunista pro-Moscú, que ingresará a la historia como uno de los firmantes del proyecto de las Bases Constitutivas, ha dado las espaldas a la Asamblea, como consecuencia de sus posiciones políticas y actividad posteriores, de las presiones ejercitadas sobre él por el stalinismo internacional.

En 1971 apenas se pudo encubrir la evidencia de que la Asamblea Popular era una criatura del trotskismo, su obra más importante; pero como las masas pasaban por este canal en su radicalización, las tendencias políticas más diversas se sometieron o aparentaron someterse, a la política porista, a fin de no quedar aisladas del todo. Que el POR hubiese lanzado la idea de la Asamblea y que ésta hubiese cuajado de manera tan vigorosa se debieron a que dicho partido se limitó a dar un alto contenido político a una tendencia que tenía vida y que se agitaba en el seno de los explotados. El hecho de haber descubierto y sacado a primer plano esta tendencia constituyen méritos invalorable dentro del trabajo revolucionario y que a su modo confirman el programa trotskista.

Los que se atreven a negar la existencia de la Asamblea Popular y dicen que no fue más que una ficción, un fantasma nacido de la descomunal propaganda trotskista, lo hacen, en verdad, buscando negar la existencia de la organización soviética, pues ésta es la que ha invalidado en la práctica diaria a todas las teorías revisionistas y reformistas que pretenden pasar como marxismo. Los que tan abundantemente han escrito acerca de la inexistencia de la Asamblea pertenecen a la tendencia denominada de la "izquierda nacional". La aparición de un soviético en cualquier punto de América Latina tiene la virtud de demostrar que el proletariado se encamina a dirigir el proceso revolucionario y a tomar el poder político en sus manos, echando así por tierra

todas las especulaciones nacionalistas en sentido de que las condiciones objetivas y subjetivas han madurado únicamente para hacer viables las tesis fundamentales del nacionalismo revolucionario, llamado a concluir su obra gracias al apoyo que le preste la clase obrera. La existencia de un soviets importa, al mismo tiempo, el anacronismo de la izquierda nacional. Los ataques de ésta partieron de la Argentina e inmediatamente fueron retomados por el MNR, que, como todos saben cooperó con el gorilismo en el poder después de 1971.

¿Es posible formular con alguna seriedad la cuestión de saber si la Asamblea Popular fue o no una ficción? Se entretienen con este juego de palabras aquellos que se niegan a ver de frente a la realidad. La respuesta fue dada, con bastante anticipación, por los enemigos de clase. El golpe gorila del 21 de agosto de 1971 inscribió en su bandera la lucha a muerte contra la Asamblea y hasta nuestros días la reacción sigue combatiendo su simple recuerdo; a su vez, los obreros organizados o no, defendieron y defienden lo que consideran que es su propia creación. Como todo esto es demasiado evidente, los predicadores de capilla pretenden desvirtuar la realidad con el argumento de que la guarnición militar de La Paz tomaba "al pie de la letra las profecías acerca de la implantación de los 'soviets' en Bolivia". La derecha castrense jugó su última carta (el golpe preventivo fascista) no en respuesta a profecías, sino después de palpar a una organización que abierta y efectivamente se dirigía a tomar el poder. Se puede lanzar muchas profecías, innumerables consignas tenebrosas, pero si las condiciones políticas no les permiten movilizar a las masas y motorizar su acción, desaparecerán como simples palabras, sin turbar para nada la tranquilidad de los dueños del poder. Los fantasmas, las profecías sin contenido no pueden modificar el curso de la historia. La Asamblea Popular constituye uno de los hitos fundamentales e inamovibles del desarrollo histórico boliviano. No hay que extrañarse que los enemigos de la Asamblea sustituyan el método marxista con especulaciones dignas de la mentalidad policial.

No carece de valor el testimonio de uno de los personajes del gobierno Tórres, el señor Jorge Gallardo. Para éste la Asamblea Popular fue una potente realidad que obligó al equipo ministerial a delinear una táctica que le permitiese ganar fuerza frente a la derecha militar y lograr en alguna forma dirigir o controlar a aquella. Como se ha visto, Tórres adoptó una línea zigzageante con referencia a la Asamblea. "A pesar de todo -dice Gallardo-, convinimos gustosos en cooperar con su instalación pensando en otra estrategia que posiblemente sin desencadenar los fenómenos políticos subyacentes, podría haber coadyuvado en forma efectiva para convertir a la Asamblea Popular en un instrumento sólido y responsable que, además, fuera la verdadera expresión de una fórmula democrático-popular jamás vista en Bolivia", El Ejecutivo abrigaba la esperanza de que la Asamblea se convirtiese en su poderoso sostén y no pudo ocultar su sorpresa no bien la organización popular proclamó abiertamente sus verdaderas intenciones, llegando a espantar de esta manera a la derecha y al imperialismo, que ciertamente ya sabían a que atenerse en adelante.

Los más no niegan la realidad de la Asamblea Popular, pero se resisten a otorgarle características soviéticas. Los argumentos al respecto pueden reducirse a los siguientes: 1) los soviets sólo pueden aparecer en el momento mismo de la

insurrección; 2) no puede haber organización soviética si no cuenta con un ejército revolucionario propio; 3) un órgano de poder es aquel que dicta leyes para toda la nación; 4) los soviets deben contar en su seno con la representación de los soldados (las exigencias de este tipo, que no son, por otra parte, más que la repetición de las modalidades que adquirieron los soviets en otras latitudes, llegan al infinito); 5) no puede existir un soviet si no decreta la insurrección o no resuelve el problema de las armas; 6) en los soviets no se discute, simplemente se actúa, etc.

Trotsky ², al referirse a las experiencias de la revolución de 1905, dice que el soviet "era y continuaba siendo la expresión organizada de la voluntad de clase del proletariado... El secreto de su importancia (y la diferencia con otras organizaciones revolucionarias que también trabajan por organizar a los obreros y dirigir sus luchas, G. L.) radica en que esta asamblea (soviet) surgió orgánicamente del proletariado durante una lucha directa, determinada en cierto modo por los acontecimientos que libró el mundo obrero (por la conquista del poder). Si los proletarios, por su parte, y la prensa reaccionaria por la suya dieron al soviet el título de gobierno proletario fue porque, de hecho, esta organización no era otra cosa que el embrión de un gobierno revolucionario. El soviet detentaba el poder en la medida en que la potencia revolucionaria de los barrios obreros se lo garantizaba; luchaba directamente por la conquista del poder, en la medida en que éste permanecía aún en manos de una monarquía militar y policíaca... El soviet se transformó inmediatamente en la organización misma del proletariado; su fin era luchar por la conquista del poder revolucionario".

La experiencia histórica, la teoría y todo lo que se ha escrito sobre los soviets enseñan que su aparición, obra de la propia clase obrera, se produce en la etapa previa al estallido de la insurrección, cuando las masas se incorporan decididamente a la lucha y se encaminan a la conquista del poder. Une y organiza a las vastas masas que se incorporan a la lucha, lentamente, a través de las vicisitudes de su lucha diaria, se transforma en dirección indiscutida de las luchas de las masas, marco adecuado para que se exprese libremente la capacidad creadora de los explotados, de la orientación en los momentos más difíciles y así adquiere una autoridad indiscutida. Autoridad para los explotados, ciertamente, y no para los opresores o para los dueños del gobierno. A medida que se acentúa la movilización y radicalización de las masas, crece la fuerza y autoridad del soviet y en esta medida entra en fricción con el gobierno central (dualidad de poderes). Los explotados recurren a su organización en espera de solución de sus problemas cotidianos y en esta medida dan las espaldas al gobierno oficial. En los pasillos del local donde sesionaba la Asamblea Popular se podía ver gentes venidas de todos los rincones del país para plantear sus necesidades, quejarse por los excesos de las autoridades, solicitar la construcción de escuelas, etc. De una manera general, así paulatinamente, junto a las masas, el soviet llega al momento de la insurrección. Para que pueda actuar como dirección en este momento es preciso que ya exista y que haya probado su capacidad de dirección, que ya sea órgano de poder, si se quiere en germen pero ya autoridad indiscutida para los explotados.

2- L. Trotsky, "1905, Resultados y Perspectivas", París, 1971.

En los cincuenta días de vida del soviets de San Petersburgo, en 1905, no se habló en momento alguno de la insurrección, estuvo preocupado en movilizar a las masas, en ponerlas en pie de combate y el proceso fue cortado por el apresamiento de su Comité Ejecutivo.

Es preciso no deificar a los soviets. Por sí solos no garantizan la conquista del poder, pueden agotarse como simples embriones de gobierno obrero. El que conduzcan o no a la victoria revolucionaria depende de qué partido político controle su dirección; es de vital importancia que imponga la estrategia proletaria. Esto explica por qué se aviva la lucha política por el control de la organización sovieta.

Ya hemos indicado que en el seno de la Asamblea Popular, la fracción proletaria libró singular batalla para doblegar a las tendencias pequeño-burguesas y someterlas a su dirección. El que ésto se hubiese logrado demuestra que las masas irrumpieron en el escenario político y no que estaban en retroceso o totalmente decepcionadas, como insinúan algunos. Fue la presencia física del proletariado la que obligó a los partidos "universitarios" a agachar la cabeza.

La violencia revolucionaria, que en verdad no es más que la expresión de la rebelión de las fuerzas productivas contra las relaciones de producción, se encarna en la acción directa de las masas y que no siempre supone que los obreros empuñen las armas o se haga correr sangre. El infantilismo ultrista llega a la conclusión de que cuanto mayor sea el número de muertos ocasionados por acciones militares, esquemáticamente preparadas, será mucho mejor, porque sostiene que solamente esto es la violencia revolucionaria.

3

Asamblea y ejército

No puede haber la menor duda de que es necesario el armamento de las masas, particularmente del proletariado, y la constitución de destacamentos de combate, esto porque en el momento insurreccional la política se manifestará a través de los métodos militares. Pero, sería un grueso error considerar este problema al margen de la evolución política del país, proceso del que la movilización de las masas constituye uno de sus elementos más importantes. Son los propios explotados los que, al radicalizarse, se ven enfrentados ante la necesidad de armarse y de poner en pie los destacamentos de combate nacidos de su misma entraña y controlados por sus organizaciones. La actividad militar debe estar subordinada a la estrategia política de la clase obrera. La ultraizquierda planteó el problema de una manera invertida. Para ella el armamento de pequeños grupos entrenados para consumir actos terroristas era igual que armar a la clase. La actividad de los foquistas (necesariamente extraños a las masas) fue confundida con los destacamentos de combate de la clase. Si todo se reduce a organizar pequeños grupos de elegidos para el martirologio, de entrenarlos y armarlos, es claro que no hay para qué tomar en cuenta la situación política que se vive y menos el estado de ánimo de las masas (todas estas consideraciones se les

antoja a los ultristas como pura pérdida de tiempo, como pretextos distraccionistas utilizados para no actuar); una cuestión política, en su esencia, es convertida en algo puramente técnico y militar.

En La Tesis de Pulacayo se dice acertadamente que en materia de armamento lo fundamental radica en que la clase obrera sepa que debe armarse, que esté convencida de que se encamina a un enfrentamiento armado con los detentadores del poder político. En el momento oportuno los explotados sabrán encontrar los medios para materializar ese objetivo. En este terreno las masas han demostrado tener una capacidad creadora admirable y esto desde épocas lejanas ³. Para los ultristas la cuestión compleja y subordinada al desarrollo político de todo el país, se limita a encontrar un generoso proveedor de armas para los diminutos grupos foquistas. Si esta postura infantilista correspondiese a la realidad, todo estaría resuelto de antemano. El arsenal natural del pueblo boliviano se encuentra en los cuarteles, lo que supone que la avalancha revolucionaria repercute en el ejército (desintegración de la clase dominante y del aparato represivo del Estado). Ni en agosto de 1971 ni antes se dio esta situación en toda su plenitud, apenas si aparecieron las primeras y casi invisibles fisuras en el aparato militar (manifiesto de los clases y suboficiales de aviación, etc). No se puede deducir mecánicamente de este hecho la conclusión de que el ascenso de las masas era demasiado incipiente o que no habían posibilidades de victoria. En Bolivia se atravesaba y se atraviesa una situación especial al respecto y que es consecuencia de la experiencia de 1952. El tremendo sacudimiento social del 9 de abril importó la destrucción física del ejército por parte de las masas insurrectas; este recuerdo acentúa el espíritu de cuerpo de los militares, que están seguros que aún la victoria popular significará su pérdida total y que el hombre de la calle armado constituye uno de los mayores peligros para la estabilidad de la institución castrense y del mismo Estado. Así se ha creado un muro defensivo que obstaculiza que la presión y propaganda revolucionarias se filtren en las filas del ejército. Sin embargo, los mismos acontecimientos de agosto de 1971 demuestran que el ascenso revolucionario tiene, tarde o temprano, que escindir a las fuerzas armadas y ganar a una parte de ellas para la revolución. En 1952 los obreros y las gentes de la clase media casi desarmados pudieron dar fin con el ejército regular, muy bien pertrechado y organizado, esto porque virtualmente se encontraba profundamente escindido y había perdido casi toda su capacidad de fuego. Los que indican que ya no es época de la lucha defensiva de los obreros contra las fuerzas armadas olvidan esta valiosa experiencia. Nos estamos refiriendo al aspecto crucial del problema del armamento de las masas y que sigue siendo una cuestión básicamente política. Al ejército (soldados, clases, suboficiales, jóvenes oficiales) sólo se lo puede ganar a través de las ideas políticas de la clase obrera y no de actos de terrorismo individual. El que controla políticamente a parte del ejército tiene también el control de las armas. Otra cosa es que los partidos se vean obligados a formar sus brazos armados como una actividad puramente partidista y permanente, esas organizaciones constituyen las células armadas iniciales de la clase.

Es tiempo de preguntarse si la Asamblea Popular tuvo o no poderosa influencia

3- G. Lora, "La lucha armada", Santiago de Chile, 1973, cuya edición íntegra fue destruida a raíz del golpe de Pinochet. Con posterioridad muchos de los materiales que habían sido agrupados bajo ese título aparecieron en Bolivia en "Revolución y foquismo", La Paz, 1978.

sobre el ejército. Hemos ya indicado que la derecha uniformada (el sector gorila), representando los amenazados intereses de la clase dominante, se movilizó de inmediato para destruirla. Al mismo tiempo, su existencia y la agitación que provocó a lo largo del país, alentaron a los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas (esos sectores constituyen su izquierda hasta el momento) a concentrarse y a bosquejar respuestas a la conspiración gorila. Solamente mucho después los protagonistas de la Asamblea Popular llegaron a percatarse que una parte de las fuerzas armadas pidió en Cochabamba su inclusión en la Asamblea regional. No puede haber la menor duda de que el desarrollo posterior del ascenso revolucionario y el consiguiente fortalecimiento de la Asamblea, hubiesen concluido arrastrando detrás de sí al ejército. Dadas las condiciones bolivianas de ese entonces, se explican y justifican todos los esfuerzos que hicieron los elementos de la dirección política de la Asamblea para acortar los plazos (en vista de la inminencia del golpe contrarrevolucionario) y efectivizar la profundización de la movilización de las masas.

El ejército es una criatura del nacionalismo pequeño-burgués convertido en dueño del poder, proyecta las características y las limitaciones de este sector social. No es simplemente la prolongación del ejército oligárquico, que fundamentalmente sirvió a la aristocracia terrateniente y en calidad de mercenario al imperialismo. Destruído físicamente el viejo ejército (1952); fue el imperialismo el que impuso su reorganización, utilizando para sus propósitos a la plana mayor movimientista y dentro de ella al dirigente sindical Lechín ⁴; que no sólo le proporcionó recursos materiales y económicos, sino que lo modeló para que le sirviese de dócil instrumento, para cuyo fin fue reducido a la condición de gendarme. La finalidad de la reorganización del ejército no fue otra que la de crear un poder neutralizador del pueblo en armas; las milicias obrero-campesinas eran, prácticamente, las dueñas de la calle y demostraron tener la suficiente capacidad para imponer sus decisiones al gobierno, encargado de garantizar la estabilidad política, social y jurídica. Alguien tenía que obligar a los obreros a trabajar disciplinadamente (el desarrollo de los acontecimientos demostró que la convicción política podía traducirse en los obreros en trabajo sacrificado y consciente), esa misión le fue señalada al nuevo ejército, que a los corifeos del oficialismo se les antojaba ser el "ejército del pueblo".

Pese a lo dicho anteriormente, en el interior del ejército formado en las entrañas del nacionalismo pequeño-burgués surgió un ala izquierdista, que, sin romper el marco del nacionalismo burgués, pretendió realizar las tareas democráticas y sustituir políticamente a los partidos nacionalistas, que tan ruidosamente han fracasado en el poder y como caudillos de las masas, pues éstas tienden a sobrepasarlos. Los grupos y líderes castrenses chocan con el imperialismo dentro de los estrechos límites del régimen de la propiedad privada, y pueden hasta colocarse a la cabeza de las masas que se movilizan contra el opresor foráneo (en Bolivia tales posibilidades están agotadas). Los revolucionarios tienen que trabajar sobre este sector castrense, no con la ilusión de convertirlo en marxista, sino de arrastrarlo en la lucha diaria. Lo dicho no impide que el partido de la clase obrera se esfuerce por forjar militantes bolcheviques entre los elementos más avanzados del ejército. La ultraizquierda es incapaz de distinguir estos matices y se complace en catalogar a todos los uniformados como

4- En 1979 Lechín sostuvo que no fue partidario de la organización del ejército y que su error consistió en no haber expresado públicamente su oposición.

contrarrevolucionarios o fascistas. El "nacionalismo marxista", contrariamente, ve en todo militar a un socialista natural.

La Asamblea Popular fijó el esquema de la organización de las milicias, pero no pudo, en el corto tiempo de su existencia, resolver prácticamente el problema del armamento de las masas y no lo pudo por las razones políticas señaladas más arriba. A partir de las jornadas de octubre de 1970 existía, en capas muy vastas de las masas, la creencia de que las propias dificultades políticas por las que atravesaban los sectores democratizantes del ejército en su lucha contra el gorilismo, les obligaría a entregar las armas a los obreros. El que las capas de la vanguardia rápidamente se hubiesen convencido que se trataba de un grosero malentendido no importaba la total separación de estas ilusiones, hacía falta que el grueso de las masas viviesen la experiencia negativa al respecto. Por esto que las reiteradas peticiones de la Asamblea a Tórres para que le entregase armamento e inclusive para que desarmase a los gorilas, tuvieron sólo un carácter pedagógico. Finalmente, Tórres y sus colaboradores pusieron a disposición de la Asamblea, el amanecer del 21 de agosto de 1971, unas pocas armas, muchas de ellas en mal estado. El problema central en ese momento era el desplazamiento de casi la integridad del ejército hacia posiciones sustentadas por los gorilas.

Ciertamente que los destacamentos de combate de la clase obrera son los gérmenes del futuro ejército proletario, lo que no importa que la Asamblea Popular estaba obligada a poner en pie ese ejército. La concepción ultrista acerca del ejército revolucionario, destinado a ser el eje de la tan pregonada guerra popular, es por demás arbitraria. Este ejército debe organizarse con miras a derrotar al ejército regular, lo que exige que tenga mayor capacidad de fuego que éste. Si el proletariado fuese capaz de realizar tal obra, querría decir que es dueño de los medios de producción y del aparato estatal, o por lo menos que, con su lucha, ha escindido al país y que controla una de sus partes. En 1971 la situación boliviana era diferente. Se trataba de colocar a la mayoría del país ante la necesidad de tomar el poder, lo que suponía el aplastamiento físico del gorilismo. La victoria debía pasar necesariamente, por la conquista, por parte de la Asamblea Popular, de un sector considerable de las Fuerzas Armadas. Hay que volver a repetir que las condiciones políticas no habían madurado para el cumplimiento de esta tarea. La lucha revolucionaria, al encontrar la terca resistencia del fascismo, podía limitarse, en una primera etapa, al control de parte del territorio nacional. Desde el poder la clase obrera tendrá la obligación de estructurar su propio ejército.

La ultraizquierda sostuvo que si no se organizaba el ejército revolucionario no podía desencadenarse la lucha por el poder y que sin él no podía hablarse de poder obrero y de soviets. El poder obrero no quiere decir, en puridad, que los soviets estén empuñando las armas, sino que se han convertido en la autoridad suprema de las masas y que motorizan su movilización, esto con o sin armas.

La cuestión del armamento de la clase obrera y de la lucha armada se proyectó de la Asamblea Popular al Frente Revolucionario Anti imperialista. Los trotskistas han sostenido y sostienen que una línea política justa al respecto debe partir de la

rica experiencia que en este terreno tienen el proletariado organizado y las masas bolivianas en general. La ultraizquierda tiene muy poco que enseñar y haría bien en asimilar atentamente las enseñanzas que ofrecen los explotados.

Ya en 1946 fue posible constatar que los trabajadores habían pasado por la experiencia de armarse, de luchar militarmente con las fuerzas represivas y también ser desarmados. La Tesis de Pulacayo lo que hizo fue elevar esa experiencia a la categoría de principio programático. Los teóricos del foquismo, al negar la vigencia de la llamada táctica de autodefensa de las organizaciones obreras, renegaron de esa valiosa experiencia.

En la propia lucha guerrillera los foquistas casi nada pueden enseñar a las masas, éstas han enriquecido, con su acción, la táctica de la guerra irregular. Lo que corresponde es sistematizar esa experiencia. Los foquistas sólo saben de acciones de pequeños grupos al margen de las masas y que tienen muy poca importancia para la lucha revolucionaria.

Repetimos que se llama germen de poder obrero a la organización soviética porque se convierte en la única autoridad para las masas y en esta medida resuelve todos sus problemas y sus decisiones son leyes supremas para éstas. El argumento de que el poder obrero, para ser tal, debe dictar leyes de validez en todo el ámbito nacional es absurdo, eso ocurrirá cuando la dualidad de poderes sea superada en favor de la clase obrera. En la medida en que el soviét toma decisiones de carácter ejecutivo, al margen del ordenamiento jurídico del país y del gobierno oficial, está planteando la dualidad de poderes con éste. Dualidad que es transitoria, pues debe resolverse en favor de alguno de los polos extremos en pugna.

Uno de los reparos más sorprendentes lanzados contra la Asamblea-soviét fue aquel que se extrañó porque los soldados no hubiesen estado representados en su seno. Sus autores argumentaron que sólo puede hablarse de soviets cuando se integran en ellos delegados de la tropa de las Fuerzas Armadas. Para satisfacer esta exigencia -producto de un esquematismo sorprendente- se hubiera tenido que esperar un alto grado de descomposición de las Fuerzas Armadas. En Bolivia, de igual manera que en Rusia después de la primera guerra mundial, la presencia circunstancial de los soldados en la organización soviética equivale a decir la presencia de los campesinos. La lucha porque éstos se incorporen efectivamente a la Asamblea correspondió a la evolución real de la política.

En el polo opuesto están los que sostienen intransigente y también esquemáticamente, que la Asamblea-soviét era nada menos que una elevada expresión del frente único de clase, esto por ser, precisamente, soviét. Para estos "marxistas" la táctica apropiada en un país atrasado es el frente único proletario y no el antiimperialista que está conformado por varias clases sociales.

El soviét de San Petersburgo (1905) fue exclusivamente proletario, reflejando así una de las debilidades del proceso revolucionario de ese entonces la ausencia del campesinado en ese proceso. Trotsky dice que los soviets de 1905 constituyeron una

“forma de organización irreemplazable de frente único proletario en la revolución”⁵. Sólo un especulador de gabinete puede elevar a categoría intangible y un universal, esta característica de los soviets de 1905. La revolución en los países atrasados no será, de manera alguna, puramente obrera o socialista; será, más bien, el levantamiento multitudinario de las clases no proletarias, dirigidas políticamente por el asalariado. La organización soviética tiene que reflejar esta realidad. Los soviets de obreros y soldados (campesinos) son ya una organización de alianza de clases y no únicamente de todas las gamas que existen en el seno del proletariado.

Si se hubiera dicho que en la Asamblea Popular no estuvo presente el campesino, el reparo hubiera sido sumamente grave. La realidad fue otra. Los explotados del agro estuvieron parcialmente en la Asamblea, de una manera que reflejaba exactamente la situación política del momento. Desde hacía tiempo se observaba una ruptura en el ritmo de movimientos de las clases obrera y campesina, esta última se movía muy lentamente y no había logrado aún emanciparse de los caciques locales, es decir, de la influencia del gobierno. El pacto militar-campesino, suscrito en la época de Barrientos seguía teniendo vigencia parcial por lo menos. Los sindicatos campesinos conocieron, en el período de florecimiento revolucionario, una amplísima democracia interna (más que sindicatos eran organizaciones de características soviéticas), pero después la voluntad de las bases fue sustituida por un sello que le sirve al cacique para obtener privilegios del gobierno. Con todo, las masas campesinas soportaban y soportan, la presión de las otras clases y, sobre todo, del proletariado minero, alrededor del cual tradicionalmente ha estado girando. El ascenso revolucionario y la constitución de la Asamblea Popular impactaron seriamente en toda la estructura campesina, incluidos sus sindicatos.

En el período de Barrientos se pretendió nuevamente imponer el impuesto único a la tierra poseída por los campesinos, el primer ensayo se hizo bajo el último gobierno movimientista y obedeciendo presiones de los organismos financieros norteamericanos, vivamente interesados en universalizar las contribuciones, sanear y aumentar las rentas de su semicolonias. La respuesta del agro fue categórica: no pagar ningún impuesto y el gobierno tuvo que retroceder. Al amparo de estas reacciones se organizó el llamado Bloque Independiente, que vanguardizó las luchas campesinas, aunque sus acciones se distinguieron por ser periféricas, generalmente protagonizadas por campesinos asentados desde hace tiempo en las ciudades. En su organización jugaron importante papel las entidades universitarias. Con todo el Bloque Independiente cumplió un papel progresista, lo que no permite decir que en su seno estaba el grueso del campesinado, éste seguía manipulado por la Confederación oficialista. Esta Confederación comenzó a agrietarse por la influencia de la creciente oleada revolucionaria. Lo correcto era precipitar un congreso controlado por la Asamblea Popular, a fin de ayudar a los campesinos a emanciparse completamente de los caciques y a evolucionar francamente hacia la izquierda. Era palpable que se estaba generando una tendencia de aproximación a la Asamblea. En vísperas de las jornadas de agosto de 1971, la misma Confederación Campesina ofreció su cooperación a la izquierda.

5- L. Trotsky, “¿Qué es la revolución de Octubre?”, Buenos Aires, s/f.

Las razones anteriores explican por qué solamente parte del campesinado, liderizado por el Bloque Independiente, estuvo representado en la inauguración de la Asamblea. Había acuerdo para incorporar al grueso de los explotados del agro a su seno.

4

Problemas de la Asamblea

La Asamblea no decretó la insurrección, violentando así los deseos de la ultraizquierda, esto porque su sector proletario consideraba que el ascenso revolucionario no había llegado aún a su punto culminante. Al terrorismo aventurero que aconsejaba empuñar las armas de inmediato, se opuso la táctica de acentuar la movilización de la mayoría nacional y colocarla ante la necesidad inaplazable de tomar el poder. No serían las operaciones militares precipitadas y aisladas las que conducirían a la insurrección, sino su cuidadosa preparación en el seno de las masas. Estos métodos de lucha diferentes eran consecuencia de dos estrategias también diferentes. La tarea central de los soviets, al constituirse y después, es la de conducir a las masas a través de su movilización y de sus luchas diarias hacia la insurrección, no la de decretarla desde las cumbres, sin tomar en cuenta la situación política del momento.

Muchos observadores han quedado horrorizados por las apasionadas discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Asamblea Popular entre los sectores proletarios y pequeño burgueses. Se añade que ese escenario de torneos oratorios es más un parlamento que un soviet, pues éste debe distinguirse por encarnar simplemente la acción, por encima de toda teorización y de todo programa.

Tales reparos han sido invocados por los grupos ultraizquierdistas, que tienen en común la creencia de que es la acción la que une y genera los programas. La misma propaganda, para ellos no precisa de las palabras y de los impresos, sino de la acción y de las armas.

Si el destino de la organización soviética depende de qué partido político lo dirige, es claro que las discusiones acerca de la estrategia y de la táctica adquieren vital importancia. La acción misma precisa que previamente se fije con claridad la orientación política y esto sólo puede hacerse a través de la discusión alrededor de las ideas programáticas. Las resoluciones sobre la constitución de las milicias y otras cuestiones menores no fueron más que una repetición de acuerdos que, con anterioridad, ya había adoptado el movimiento obrero. La Asamblea se movió dentro de la línea tradicional de nuestro sindicalismo revolucionario. Se puede decir que los trabajos organizativos fueron más importantes. A lo largo del país y sin que la Asamblea de La Paz hubiese desarrollado una decisiva actividad en este sentido, fueron apareciendo organizaciones similares. Muy lenta y dificultosamente se fue engranando la acción entre estas diversas organizaciones. La Asamblea llevaba en su seno la tendencia de convertirse en nacional.

En el brevísimo período de reuniones de la Asamblea, que resultó el único, casi

todos los delegados habían sido elegidos democráticamente por sus bases, pero faltaba generalizar esta práctica. Uno de los problemas que acaparó muchas sesiones se refiere a las demandas de nuevas adhesiones. Existía la tendencia en todas las organizaciones laborales y populares, incluyendo a las que no tenían carácter nacional, a demandar su incorporación al seno de la Asamblea Popular de La Paz. Fue preciso rechazar a muchas de ellas para evitar la duplicidad de las representaciones. Puede decirse que todas estas cuestiones eran formales. El proletariado boliviano y la clase media de las ciudades estaban detrás de dicha organización y el problema no era otro que el de englobar también al campesinado.

Dos problemas tenían directa relación con el porvenir de la Asamblea y de la revolución y se entrecruzaron con la agria polémica librada entre las tendencias proletaria y pequeño-burguesa. Para la vanguardia obrera la cuestión clave radicaba en encontrar un camino que permitiese acentuar la movilización de las masas y obligarles a plantearse la toma del poder como hecho inminente. Para la ultraizquierda la victoria de la lucha se reducía a una cuestión puramente militar y éste era su mayor error.

5

Los ultraizquierdistas y los obreros

El ELN, que había ingresado a la crisis ideológica provocada por el fracaso del foquismo y moviéndose bajo la presión de las tendencias revisionistas venidas desde el exterior, quedó al margen de la Asamblea como organización, aunque algunos de sus componentes, que en ese momento practicaban la militancia doble dentro del flamante MIR, eran delegados. La organización ultrista tuvo la ocurrencia de difundir un comunicado en el que manifestaba que se constituía en vigilante de la organización que debutaba. En esta actitud se combinan la presunción y la miopía. El grupo foquista se colocaba por encima de lo que estaban haciendo apasionadamente las masas y se atribuía el papel de vigilante, para evitar así que la Asamblea Popular se desviase de la línea revolucionaria. Surge la pregunta: ¿quién fijaba la línea revolucionaria?, ¿quién podía declararse su árbitro? El comunicado del Ejército de Liberación Nacional, producto de la desesperación y no de un sereno análisis político, podría alentar la creencia de que fue esta organización la que señaló el camino de la lucha revolucionaria. Hemos visto que la estrategia de la Asamblea Popular fue fijada por la vanguardia proletaria, en franca lucha con los grupos ultraizquierdistas. El ELN no tenía nada que vigilar, porque la Asamblea había señalado ya un camino diferente al del aventurerismo foquista. La enorme importancia que adquirió la organización de masas, la evidencia de que todo el proceso revolucionario giraba alrededor de ella, obligaron a los ultras a ligarse en alguna forma con ella; lo hicieron de una manera negativa.

La crítica pretendidamente izquierdista no ha podido menos que reconocer que la Asamblea Popular aprobó varias medidas de importancia; sin embargo, de manera sospechosa, calla acerca de la más trascendental: la resolución que determina la urgencia de imponer la participación obrera mayoritaria en la administración de la

Corporación Minera de Bolivia (empresa de la minería estatizada).

No se trataba de una invención de la Asamblea Popular, sino de que ésta, a sugerencia de los delegados mineros, tomaba en sus manos una reivindicación que los trabajadores del subsuelo venían agitando desde hacía tiempo, para imprimirle una inconfundible proyección nacional, que fue posible gracias al ascenso revolucionario de las masas que se vivía. El planteamiento minero, casi ignorado por el grueso público, tampoco era sorpresivo, pues entroncaba en la larga lucha librada alrededor de la defensa y superación del control obrero en las minas nacionalizadas.

La polémica sobre la participación obrera mayoritaria en las minas estatizadas y la desencadenada con motivo de la creación de la universidad única boliviana bajo la dirección política hegemónica del proletariado, puso en evidencia la verdadera naturaleza de las diversas tendencias políticas.

Se presentó un hecho extraño a la Asamblea que obligó a actualizar el problema de la participación obrera en Comibol. El gobierno Tórres, angustiado por su aislamiento y debilidad y en un supremo esfuerzo por ganar el control de las masas, lo que le habría permitido fortalecerse y ser realmente gobierno, hizo conocer a los mineros un proyecto de participación laboral en las minas estatizadas y una medida similar impuso, mediante decreto, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En ambos casos se partía del supuesto de que la participación laboral se efectivizaría en la misma proporción que la estatal. Era lo máximo que podía, ofrecer un gobierno nacionalista pequeño-burgués frente a los planteamientos que habían hecho los trabajadores.

Gallardo, ex-ministro de Tórres, no dice, en un voluminoso libro de cerca de 500 páginas y de muy difícil lectura por su enrevesada compaginación, ni una sola palabra acerca de la anterior proposición, "olvido" que era por demás sugerente. Parecería que los colaboradores de Tórres consideraban un grave error táctico la oferta de coparticipación paritaria estatal-laboral en las empresas nacionalizadas. No funcionó como señuelo y la aceptación por los trabajadores petroleros careció de significación política debido a su poco número. El ofrecimiento a los mineros permitió la radical respuesta de parte de la Asamblea Popular y que por sí misma ponía al desnudo la incapacidad del nacionalismo de contenido burgués para solucionar los problemas fundamentales del país. Hay un otro hecho que hace enmudecer a los que gobernaron hasta agosto de 1971. La imposición de la participación obrera mayoritaria en Comibol era una táctica que no podía menos que conducir a la insurrección de la nación oprimida ya la toma del poder, esto como consecuencia de la movilización de las mayorías nacionales. Es simplista la crítica en sentido de que la Asamblea, debido a la influencia nefasta de los trotskistas, se limitaba únicamente a hablar sin límite sobre la revolución, sin hacer nada concreto para convertirla en realidad. La conclusión de los foquistas: era un organismo inoperante, donde la acción fue reemplazada por los discursos. Si se toma en cuenta la táctica de la lucha por el control de los obreros sobre las minas, la crítica anterior cae por su base. La polémica encuentra otro eje: la imposición de la administración obrera mayoritaria en Comibol, ¿conducía o no a la insurrección?; ¿acentuaría la movilización de las masas o las empujaría al conformismo?

El ofrecimiento del gobierno no dejaba de ser atrevido y debe ser juzgado de acuerdo a la situación política imperante en ese momento. Durante mucho tiempo se ha luchado por la reposición del control obrero movimientista, pese a tenerse plena conciencia de sus defectos y limitaciones. Claro que la clase obrera no dejó de señalar la necesidad de superar ese control, a través de su desburocratización y de su transformación de individual en colectivo. A pesar de todo, entre la supresión de toda forma de control obrero y la vigencia del control tipo MNR se estaba obligado a inclinarse por la segunda variante. Si el ofrecimiento de Tórres se hubiese producido en una etapa de tranquilidad social o de retirada de las masas, no habría habido lugar para discutir su carácter progresista. La cosa quedó totalmente modificada por el acuerdo adoptado por la Asamblea, que buscaba que las minas pasasen a manos de la clase obrera y que le sirviese a ésta de palanca que le permitiese tomar el poder. Las indiscutibles concesiones anunciadas por Tórres buscaban contener la avalancha revolucionaria y perpetuar las minas en poder del Estado nacionalista. Apuntalar la proposición de Tórres en oposición a lo acordado por la Asamblea, equivalía a pronunciarse en contra de la revolución y en defensa del orden burgués.

La tan pregonada paridad obrero-estatal, que se convirtió en el punto central de la propaganda oficial, no pasaba de ser una impostura. Según el esquema del gobierno, en las diversas instancias de la dirección y administración de las empresas se reconocía igual número de delegados obreros y empresariales, pero, todos bajo la presidencia de un elemento directamente dependiente de las gerencias o del Poder Ejecutivo. Este elemento, convertido en supremo dirimidor de las posiciones antagónicas, tenía en sus manos la posibilidad de decidir con su voto los problemas más importantes. Por este mecanismo, los obreros se verían condenados a participar en la dirección de las empresas en calidad de subordinados, pero se les negaba el derecho de decidir de la suerte de la empresa y, en cierta medida, de la suya propia. Es esto lo que pusieron en claro los trabajadores y la Asamblea Popular.

No era difícil descubrir el sentido de la maniobra gubernamental: se les decía a los obreros que su participación en la administración de las empresas en la proporción de un cincuenta por ciento los convertía virtualmente en dueños de ellas. Como hemos señalado, la realidad era diferente: las gerencias y el Poder Ejecutivo seguían siendo los amos de Comibol y la coparticipación obrera serviría para encubrir la ilusión de la propiedad de los obreros sobre las minas nacionalizadas. Si en el pasado la nacionalización de las minas marcó el punto de arranque de la momentánea depresión de las masas, el proyecto de coparticipación de Tórres, en las condiciones de franco ascenso que se vivía, podía haberse convertido en un enorme obstáculo para su futuro desarrollo. En último caso, como ya sucedió con la nacionalización, los explotados podían sentirse satisfechos con la mayor de sus demandas. Los obreros, enceguecidos por la ilusión de que eran dueños de Comibol, habrían tenido que tomar a su cargo el desbarajuste y la bancarrota de empresas estranguladas por la burocracia, por la opresión imperialista (Plan Triangular), el compadrerío y que funcionaban (y siguen funcionando) como bancos privados de la camarilla gobernante de turno. En ese entonces (como también antes y ahora), el problema inmediato más importante radicaba en la disminución sensible de los costos de producción; la proyectada participación obrera habría permitido descargar sobre las

débiles espaldas del trabajador la solución del problema. Esta misma concepción volverá a aparecer, más tarde en la llamada co-gestión. La confianza política puede permitir a los explotados producir más, pese a la disminución de sus salarios o de sus beneficios sociales. La creencia de que la dirección de las empresas estaba en manos de los obreros, podía haber obligado a éstos a trabajar más y marginarse de la lucha elemental por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. No se habría tratado, en verdad, de una consecuencia del colaboracionismo clasista, sino del falso supuesto de que las minas se encontraban en poder de los sindicatos. A los gobiernos militares, interesados y obligados a financiar sus necesidades mediante el saqueo de las empresas estatales, no les quedaba más camino que hacer trabajar a los obreros mediante el uso de la violencia (Barrientos, Bánzer) o la demagogia. Tórres pretendió salir adelante utilizando la segunda variante.

Los petroleros, debido a la excesiva burocratización de sus organizaciones sindicales, al hecho de que sus cuadros dirigentes se reclutan entre los empleados, muchos de ellos de confianza de la empresa y bien remunerados, y a su escasa politización, cayeron en la trampa y entusiasmados aprobaron el decreto gubernamental.

Correspondió a los mineros tomar al toro por las astas y plantear con meridiana claridad la posición de los trabajadores con referencia a la administración de las empresas estatizadas en función del proceso revolucionario.

En la proposición gubernamental la dirección de la empresa quedaba en manos del Poder Ejecutivo, porque éste se reservaba la facultad privativa de designar al gerente general de Comibol. El gerente es una autoridad ejecutiva que monopoliza en sus manos los resortes vitales del funcionamiento de las minas, a estos verdaderos privilegios se le añadía la tarea de presidir a los delegados obreros y gubernamentales en el más alto nivel empresarial. De esta manera los delegados del Poder Ejecutivo contaban con un poderoso voto potenciado. El gerente (agente de confianza del gobierno) habría seguido decidiendo los destinos empresariales, con la ventaja de contar con la forzada complicidad obrera. Lo propuesto para la presidencia de Comibol se proyectaba a todos los estadios de la administración empresarial.

Los obreros comprendieron que quien designaba al gerente general era el dueño virtual de Comibol. La Federación de Mineros decidió inclinar la balanza en su favor reclamando para sí el derecho de designar al gerente general y anulando el voto del presidente en el directorio, que bien podía corresponder a la autoridad ministerial. De esta manera los trabajadores tendrían en sus manos la solución efectiva de los problemas de Comibol y los delegados gubernamentales pasaban a un segundo plano.

Partiendo de la experiencia negativa del control obrero durante el régimen movimientista, cuyo defecto básico, como se tiene indicado, radicaba en su carácter individual y en su burocratización (el dirigente concluía emancipándose de la vigilancia de las bases), se proyectó colocar en el punto de arranque de la participación obrera mayoritaria en la administración de Comibol a la asamblea sindical, como autoridad máxima. En los primeros escalones, en los lugares de trabajo, la participación debía ser colectiva y también mayoritaria, con referencia a los personeros empresariales.

En el pasado, el control obrero individual, concluía generalmente duplicando las tareas sindicales y convirtiéndose en un competidor del sindicato en la tramitación de los beneficios sociales. En el nuevo planteamiento laboral se trataba de reconocer a la clase tareas nuevas de administración. Como se ha indicado, no era para los obreros simplemente una cuestión de participar en la administración de Comibol en cualquier condición, sino de lograr el manejo y orientación de las minas de acuerdo a los intereses de la clase y del país.

La objeción más generalizada al planteamiento de los mineros sostenía que la coparticipación en la administración de Comibol no sería más que colaboracionismo clasista, que tendría como consecuencia obligada el abandono de la lucha revolucionaria e inclusive por las reivindicaciones inmediatas. El avanzadísimo planteamiento de los trabajadores bolivianos fue mecánicamente asimilado a los consejos obrero-patronales creados en algunos países imperialistas o por la legislación fascista, con la manifiesta intención de poner a salvo la empresa privada capitalista y de aminorar la arremetida obrera. Para llegar a esta conclusión, aparentemente justa, se ha tenido que identificar al país atrasado con la metrópoli y se ha olvidado que Bolivia es un país sometido a la opresión imperialista, lo que determina que las nacionalizaciones adquieran proyecciones nuevas con referencia a la lucha por la liberación nacional.

Trotsky, en su artículo acerca de la participación obrera en la administración de las empresas nacionalizadas, constata que los gobiernos nacionalistas se ven obligados, para lograr fortalecerse frente al enemigo foráneo, a llamar a la clase obrera a participar en la dirección de las empresas nacionalizadas (expropiadas al imperialismo) y, sin desconocer los peligros que involucraban, atrevidamente se pronunció en favor de esa participación. Este paso no sólo que contribuiría a capacitar a los obreros en el manejo empresarial, sino que podría convertirse, por medio de la incesante crítica a los errores de la administración o de la denuncia de la incompatibilidad entre el desarrollo de las empresas nacionalizadas y la economía de corte capitalista, en palanca capaz de impulsar al proletariado hacia la toma del poder. Trotsky hablaba de la participación obrera minoritaria y de una concesión gubernamental y no de una imposición de las masas. Alertó contra la ligereza de confundir la participación en la administración con el ministerialismo. Los peligros son, indiscutiblemente, la burocratización de los dirigentes, de manera que dejen de representar los intereses de los obreros y concluyan convirtiéndose en otros funcionarios más de la burocracia. El remedio tiene que encontrarse en el fortalecimiento de la vida interna de las organizaciones laborales. En Bolivia nos encontrábamos entonces en un período de gran ascenso de las masas.

La estatización de las empresas detentadas por el capital financiero y los esfuerzos que hacen los gobiernos nacionalistas para llevar adelante su funcionamiento son parte de la lucha antiimperialista, de la liberación nacional. De esta realidad arranca la justificación de la participación obrera en la administración de esas empresas.

Todo lo dicho se aplica al planteamiento de los mineros y con mucha mayor ventaja porque se trataba de una participación mayoritaria, de entregar, en una palabra, las minas al proletariado.

Se dijo en la Asamblea Popular que tratándose de Comibol el problema se presentaba con meridiana claridad. El que domina las minas en Bolivia se convierte en amo de toda su economía y también en amo del poder político, esto a la corta o a la larga. Plantear el control de las minas por la clase obrera significaba reducir al gobierno a la inoperancia, a la condición de trasto inservible. Si el general Tórres, como se rumoreaba y debido a su tremenda debilidad e incertidumbre, tenía decidido sorprender al país accediendo a la demanda laboral, es claro que la jerarquía castrense se habría opuesto categóricamente al desvarío del Presidente mediante un golpe de Estado, como efectivamente lo hizo el 21 de agosto, a pesar de no haber habido ninguna entrega gubernamental de las minas a los obreros. Poco contaban las dubitaciones del general Tórres frente a la tendencia dominante dentro de la jerarquía castrense de perpetuarse en el poder y de convertirse en gran potencia económica, a semejanza de lo que ocurre en los Estados Unidos, el Brasil o la Argentina. El ejército pugna invariablemente por lograr el control de las empresas nacionalizadas y autárquicas y resulta problemático que abandone pacíficamente el manejo de Comibol.

La ultraizquierda miope no comprendió que la lucha por la imposición de la administración obrera mayoritaria abría, al mismo tiempo, la lucha por el control total del poder político. Fue lanzado a correr el malintencionado rumor en sentido de que los propiciadores de la participación obrera mayoritaria buscaban concluir un acuerdo con Tórres. Esto, pese a que desde el primer momento se dijo que se trataba de imponer la medida por los métodos propios de la clase obrera. Aún en el caso improbable de que el gobierno Tórres hubiese entregado simplemente Comibol a los mineros, el manejo de la empresa y sus implicaciones (comercialización, trato con las importadoras controladas por consorcios norteamericanos, necesidad de lograr créditos de una banca manejada por intereses foráneos, etc.) habrían obligado a generalizar la nacionalización a todos los medios de producción. Los roces crecientes entre la dirección obrera de Comibol y un gobierno constantemente acuciado de dinero, habrían obligado a los trabajadores a plantearse, de manera perentoria, la cuestión del control del poder político.

No debe olvidarse que los trabajadores plantearon, simultáneamente, la integración de la industria minera, paso decisivo si se considera el carácter esencialmente minero del país. Se buscaba incorporar a Comibol a la Empresa Nacional de Fundiciones, al Banco Minero, al Instituto Metalúrgico y a otras pequeñas entidades. Los trabajadores argumentaron acertadamente que Comibol no podría superar sus problemas como empresa aislada. La fundidora de Vinto, por ejemplo, podría ganar mucho dinero comprando a Comibol mineral de estaño al precio mundial y vendiendo estaño fundido en el mercado mundial. A costa de los obreros que perforan las rocas, se habría superado en algo el problema de los elevados costos de producción del mineral.

Los propugnadores de la administración obrera sabían perfectamente que su planteamiento importaba el control de los dólares provenientes de la exportación de minerales y no únicamente contribuir al manejo de la empresa minera de estaño más grande del mundo. No se pudo probar, en el terreno de las realizaciones, la justeza de la posición de la Federación de Mineros, esto porque, precisamente, se precipitó el golpe fascista destinado a evitar que prospere la lucha por el control de Comibol

por parte de los mineros. La formulación quedó como una simple propuesta política.

Debe dejarse claramente establecido que la coparticipación obrera mayoritaria en Comibol sólo podía lograrse -cosa que se dijo con toda claridad en el seno de la Asamblea Popular- a través de una poderosa movilización de la mayoría nacional y de una tenaz lucha revolucionaria, que tarde o temprano tenía que plantear la cuestión del poder. Algo más y que adquiere decisiva importancia, la lucha por la imposición de la coparticipación comenzó a convertirse en el verdadero canal de movilización hacia la insurrección. Esta lucha estaba destinada a colocar a los explotados ante la necesidad de tomar el poder. Asambleas obreras en todas las minas discutieron el plan de coadministración y se pronunciaron en favor de ella.

El gobierno Bánzer bien pronto puso al desnudo su intención de cortar de raíz toda forma de participación obrera en las empresas nacionalizadas, que dadas las condiciones políticas imperantes se tradujo en el programa de destrucción física de las organizaciones laborales. Pese a su carácter totalitario y en contradicción con él, ha dado pruebas inequívocas de su decisión de abandonar el estatismo, esto no por razones principistas, sino para complacer las exigencias del capital financiero.

Bajo Tórres fue creado el Instituto Boliviano del Café (Inbolca), que tenía la finalidad de comercializar este producto en el exterior, medida que importó un serio golpe a algunas empresas dedicadas a esta actividad. El Decreto supremo de 16 de septiembre de 1971 destruyó Inbolca, "restableciendo el comercio interno y externo del café". Este retorno a la empresa privada y libre mostró sus aspectos negativos cuando, más tarde (1973), se trató de combatir la especulación con el precio del café.

Las dificultades e importancia creciente de la industria azucarera (destinada a cubrir el mercado interno y a satisfacer las necesidades de exportación), obligaron al gobierno Tórres a estatizarla progresivamente y dentro de esta política fue creada la Empresa Nacional del Azúcar, entidad que desapareció, como emergencia del Decreto de 17 de septiembre de 1971, "por haber resultado -dijeron los dueños del poder en realidad- contraproducente su ejecución".

Lo expresado se confirma plenamente por el texto del Decreto que echa por tierra la intervención del Poder Ejecutivo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, empresa que en los últimos años fue duramente atacada por su extrema burocratización y por haberse convertido en refugio de la inmoralidad. El 19 de mayo de 1971, el general Tórres había decidido asumir la Presidencia de YPFB. La centralización administrativa de las entidades autárquicas era en sí misma una medida progresista. Según el decreto de intervención, el directorio de YPFB estaba constituido por tres ministros de Estado y tres representantes obreros. El Presidente Bánzer creyó de su deber borrar toda huella de obrerismo tan acentuado y retrocedió a lo establecido por el Decreto de 14 de enero de 1971: directorio integrado por tres subsecretarios de Estado (Hidrocarburos, Planeamiento y Finanzas), tres miembros de YPFB (gerentes General, de Planeamiento y Finanzas), dos representantes de la Federación de Trabajadores petroleros y uno de los técnicos. El nuevo régimen dijo claramente que buscaba la autonomía completa de las empresas estatizadas: "que

uno de los objetivos del gobierno Nacionalista es el de devolver al país su normalidad institucional, determinando, en consecuencia, que las empresas públicas desarrollen sus actividades dentro de la autonomía que les fijan sus estatutos y disposiciones legales”.

Un otro problema político de importancia resuelto por la Asamblea Popular fue el de la universidad. Poner orden y remozar la enseñanza universitaria interesaba a la mayoría del país y la resolución aprobada al respecto inquietó a vastos sectores nacionales.

Al movimiento obrero y revolucionario preocupaba la cuestión estudiantil por dos consideraciones:

- 1) por su enorme importancia en la lucha diaria y en la agitación, en muchas ciudades los universitarios juegan el papel de fuerza decisiva y
- 2) porque en el seno de la inteligencia pequeño-burguesa fructificaban entonces generosamente las tendencias foquistas y aventureras.

Los estudiantes dijeron reconocer a la dirección política del proletariado, formaban parte de la Central Obrera Boliviana y de la Asamblea Popular y protestaron acatar las disposiciones programáticas contenidas en la Tesis Política de la COB; sin embargo con demasiada frecuencia se desplazaban hacia la ultraizquierda, amenazando comprometer el porvenir de la revolución con sus posturas aventureras y provocadoras. Teniendo en cuenta tales consideraciones, la FSTMB propuso organizar la universidad única dentro de la cual quedaría incluida la ya proyectada universidad obrera, con sede en Siglo XX, bajo la dirección hegemónica del proletariado.

En la ciudad de Potosí se dio un anticipo de tal proposición. La dirección superior de la universidad estaba compuesta de diez y nueve delegados obreros (representantes del sindicato minero, de la Central Obrera Departamental y de otras organizaciones laborales) frente a nueve que representaban a los estudiantes y otros nueve al cuerpo docente. No se trataba sólo de aprovechar mejor los recursos económicos y humanos (era notoria la escasez de profesores capaces y la insignificancia del presupuesto), de coordinar planes y programas de estudio, etc (ciertamente que todo esto se hubiese hecho), sino de colocar efectivamente al movimiento universitario bajo la dirección política del proletariado. En otros términos, la finalidad era la de convertir a la actividad universitaria en uno de los aspectos de la política revolucionaria del proletariado.

Durante el desarrollo de las deliberaciones en la Asamblea Popular se pudo descubrir que los sectores ultraizquierdistas del estudiantado y los partidos políticos por ellos animados, no podrían menos que desencadenar una sorda campaña contra tal proyecto, como efectivamente lo hicieron bajo el pretexto de defender la autonomía universitaria en abstracto; ésta, una reivindicación inconfundiblemente democrática, es progresista sólo si permite actuar a la vanguardia revolucionaria y orientarse a la masa estudiantil contra los gobiernos entreguistas y antiobreros. La autonomía puede

o no servir a la revolución y todo depende de quien la oriente políticamente. Tratándose de la lucha revolucionaria del proletariado sería absurdo invocar la autonomía para que los estudiantes puedan inclusive actuar en contra de la revolución. Si es legítima la autonomía con referencia al Estado de corte burgués no puede existir tratándose del proletariado.

En definitiva, se buscaba someter a los estudiantes a la dirección política del proletariado. No debe confundirse la lucha por la creación de la universidad única con la intervención movimientista de la universidades en 1954, en este último caso se trataba de destruir la autonomía con referencia a un gobierno que estaba girando hacia posiciones pro-imperialistas y se buscaba convertir a la universidad en una agencia del oficialismo. En 1971 se dijo que, dadas las condiciones políticas vigentes, la defensa de la autonomía seguía siendo una posición progresista.

El golpe fascista de agosto de 1971 impidió la actuación política de la Asamblea. Se ha incorporado como valiosa conquista al arsenal de la clase obrera. Seguramente llevará vida larvaria en la subconciencia de las mayorías explotadas, para luego, en el nuevo período de agudización de la lucha, volver a resurgir en un plano político superior.

La aparición de la Asamblea Popular significó una tremenda sacudida tanto en Bolivia como en el exterior. Las reacciones que se produjeron se explican por la situación de verdadera convulsión social que se vivía en esos momentos. Muchos de sus actuales adversarios no ocultaron su entusiasmo frente a las posibilidades revolucionarias de la Asamblea, que apareció a tiempo de transformarse el Comando Político del Pueblo y de la COB en febrero de 1971.

Conviene recordar que "Rebelión" de la COB anunció que la "Asamblea Popular deberá significar poder obrero" y que la "Decisión revolucionaria de las masas laborales bolivianas" permitió el nacimiento del órgano de poder de los explotados.⁶

6- "Rebelión", La Paz, Nos. de mayo-junio y de junio-julio de 1971.

Capítulo IX

El Frente Revolucionario Antiimperialista

1

La contrarrevolución de agosto de 1971

El 19 de agosto de 1971 estalló, en la periferia del país, el tan esperado y publicitado golpe de Estado de la derecha del ejército, teniendo como soporte civil a la desmembrada Falange Socialista Boliviana de Mario Gutiérrez (el sector timoneado por Riveros y otros se reclamaban de la izquierda) y al MNR, fisonomizado inconfundiblemente como la carta segura del imperialismo norteamericano en el llamado Pacto de Lima. Bien pronto, fracciones emeeneristas inspiradas por el ex-Presidente Hernán Siles Z. repudiaron la conducta de Víctor Paz Estenssoro y formaron el MNR de Izquierda, que se mantuvo distante de la llamada "izquierda extremista" y del FRA, actitud explicable si se considera que se señaló como finalidad el convertirse en dirección o eje principal de un agrupamiento de las fuerzas nacionalistas y de parte del ejército que dio muestras de oponerse a Bánzer.

El Ministro del Interior Jorge Gallardo, hizo el anuncio oficial de la subversión y añadió que se había declarado estado de emergencia nacional ¹(1). "El Gobierno Revolucionario comunica que ha estallado el golpe fascista en Santa Cruz, encabezado por Mario Gutiérrez, jefe de la Falange Socialista Boliviana y grupos minoritarios de la derecha del MNR.

"Ante la subversión derechista, cuyo esquema golpista ha sido perfectamente detectado, se declara estado de emergencia nacional y se convoca a las organizaciones populares y revolucionarias movilizarse en torno al Gobierno Revolucionario para defender las conquistas del pueblo boliviano y destruir a la contrarrevolución fascista. El gobierno controla la situación en el país y se mantiene firme en los postulados del 7 de octubre junto al pueblo".

Por Decreto de 19 de agosto de 1971 se encomendó a los ministros del Interior y de Defensa el mantenimiento del orden y "la movilización total y activa del pueblo en torno al gobierno".

Casi nadie se percató que en los anteriores documentos oficiales estaba implícita una confesión: el gobierno había perdido el control de las Fuerzas Armadas y confiaba que la movilización y apoyo populares podrían ayudarle a recobrar sus posiciones. El ejército actuaba como partido político y como tal se unificó y se colocó contra el general Tórres, acusado de aliado de los comunistas, el desarrollo político anterior había creado un profundo abismo entre los objetivos políticos de las masas y del

1- "El Nacional", periódico oficialista, La Paz, 20 de agosto de 1971.

gobierno nacionalista pequeño-burgués. La tardía convocatoria al pueblo para que marchase contra los fascistas era producto de la desesperación más que de una línea política consecuente y cuidadosamente meditada. En esas condiciones políticas, la pérdida de la confianza del ejército en su "Capitán General" y el hecho de que el control efectivo de sus movimientos se concentraba en el Gran Cuartel de Miraflores y no en el Palacio Quemado, tenían que ser fatales para el Presidente Tórres.

El golpe castrense iniciado el 19 de agosto de 1971 (castrense, pese al apoyo prestado por dos viejos partidos políticos, porque las fuerzas decisivas y la dirección política eran militares, el frente político civil actuaba como relleno y simple apoyo), fue contrarrevolucionario, fascista (esto es lo que tercamente se pretende olvidar) y esencialmente preventivo. El plan golpista fue concebido para asestar un rudo golpe a las masas, antes de que éstas llegasen al punto culminante de su movilización, es decir, antes de que la Asamblea Popular desencadenase la insurrección.

El movimiento subversivo se inició en Santa Cruz y rápidamente se extendió desde las Divisiones de Riberalta, pasando por las de Camiri, Bermejo, hasta la de Tarifa. Esta tenaza de fuego -tenaza poderosa, ciertamente, porque en ella se encontraba comprometida gran parte del ejército- fue presionando y encerrando más y más a La Paz, no tanto a la población como a la jerarquía castrense. La dirección de las guarniciones de Cochabamba y Oruro, ocurrida a un ritmo veloz, tornó en insostenible la situación del Presidente Tórres. El Desarrollo de los acontecimientos planteó como tarea ineludible la retoma de la última ciudad, que se encontraba fuertemente cercada por el Rangers de Challapata y a donde varios aviones trasladaron tropas y material bélico desde el Oriente. Oruro es punto estratégico fundamental para las operaciones militares y también políticas, suficiente señalar que puede decidir el control sobre minas importantes: Siglo XX, Huanuni, San José, Colquiri. Bien pronto se demostró que Tórres ya no tenía la suficiente autoridad ni poder para expulsar a los facciosos de Oruro, hecho que aseguró anticipadamente su derrota, esto porque la movilización popular no pudo desarrollarse en toda su plenitud.

La insurrección castrense se esmeró en diferenciarse tanto del gobierno Tórres, al que gratuitamente le atribuyó el carácter comunista, como del movimiento de masas. Se presentó ante el país buscando ganar el apoyo militante de las capas mayoritarias de la clase media y de los intimidados capitalistas, con un programa furiosamente anticomunista (en el enunciado y en la práctica se incluyó la eliminación física de los izquierdistas); de lucha franca contra la decisión de las organizaciones de masas y revolucionarias de implantar en el país un régimen socialista y un gobierno de los obreros y campesinos; de eliminación física de la Asamblea Popular, como órgano de poder de las masas y del proletariado y cauce de movilización que objetivizaba la consigna de conquista del poder; de oposición al peligro que significaba para la derecha y el imperialismo la participación obrera mayoritaria en Comibol y la creación de la universidad única bajo la dirección hegemónica del proletariado.

La campaña encaminada a preparar y justificar el golpe, centró sus fuerzas contra los objetivos del proletariado (en ese momento representado por la Asamblea Popular y

en el espectro político por el Partido Obrero Revolucionario) y sólo tangencialmente se refirió al general Tórres. La verdadera lucha se libró entre la mayoría nacional y el gorilismo y en esa lucha Tórres jugó un papel de poca importancia.

El régimen de Bánzer, como expresión de una poderosa tendencia derechista dentro del ejército, fue fascista y no únicamente policiaco-militar. Descargó la violencia estatal contra las organizaciones obreras y revolucionarias, buscando eliminarlas físicamente, y se apoyó en amplios sectores de la clase media atemorizada frente a la posibilidad de perder su propiedad y sus diminutos privilegios.

Tórres permaneció equilibrándose en la punta del alfiler durante nueve meses, gracias a la aguda tensión establecida entre los extremos en pugna, que acumulaban fuerzas sin atreverse aún a iniciar el ataque. Se poseen datos en sentido de que la Embajada Norteamericana veía con mucha desconfianza al régimen castrense nacionalista, porque prácticamente había dejado de gobernar y detrás de él asomaba amenazadoramente el movimiento radicalizado de las masas explotadas. De una u otra manera, los bandos en pugna se esforzaron por utilizar al gobierno nacionalista como a punta de lanza contra sus adversarios; también la clase obrera procedió así. De esta realidad nace la tendencia torrística hacia el bonapartismo. El régimen que apareció el 7 de octubre de 1970 se agotó en los esfuerzos que hizo por ganar o por lo menos neutralizar a los generales conspiradores, a cambio de las concesiones cada vez mayores que les hacía, al extremo de que los conjurados pudieron moverse con bastante libertad; después de cada golpe de Estado fallido, los gorilas, en la mayor parte de los casos, eran simplemente cambiados de destino (muchas veces no se les privó de ejercer mando sobre la tropa) y excepcionalmente enviados al destierro con cargos diplomáticos. El plan contrarrevolucionario consistió, como era lógico, en quitarle a Tórres todo apoyo militar y en vísperas del 19 de agosto muy difícilmente habría sido obedecido por el 20% de los mandos militares. Inspirándose en la experiencia de octubre de 1970 (Tórres se convirtió en Presidente gracias a la intervención de las masas), el gorilismo trabajó firme y pacientemente para lograr una correlación de fuerzas que le fuese clara e indiscutiblemente favorable, a fin de poder ahogar en sangre a los obreros. Descontaba que la multitudes saldrían en defensa de Tórres y se preparó afanosamente para sellar su victoria con el aplastamiento físico de las organizaciones sindicales y revolucionarias, considerando que en este hecho radicaba la garantía para la estructuración de un gobierno fuerte y duradero.

Desde el momento de iniciación de la revuelta fascista en Santa Cruz hasta la partida de Tórres al asilo diplomático, transcurrieron sólo tres escasos días y sin embargo, fue un lapso suficiente para poner en evidencia que existió una verdadera movilización de masas y éstas buscaban aplastar al fascismo y no otra cosa. Ciertamente que esta movilización fue muy desigual y con peculiaridades según los diferentes sectores de trabajadores. Más de cien muertos y cerca de un millar de heridos caídos en los combates constituyen elocuentes y trágicas pruebas.

2

Posición de la Asamblea Popular

A las once de la noche del día veinte de agosto de 1971, se reunió el Comando Político, organismo de la Asamblea Popular encargado de tomar en sus manos la dirección del movimiento de masas entre uno y otro período de sesiones de aquella, y determinó convocar a todos los explotados a ganar las calles para combatir activamente a la conspiración gorila. El Comando Militar fue ampliado con representantes de los partidos políticos pertenecientes a la Asamblea. En la misma reunión se acordó conminar al Presidente Tórres a entregar armas a la Asamblea, bajo la amenaza de denunciarlo públicamente si no procedía así.

Transcribimos la resolución aprobada por el Comando Político:

“Los últimos acontecimientos registrados en el país, ponen en evidencia, una vez más, que el gorilismo, la reacción fascista y los sirvientes del imperialismo, utilizarán el golpe de Estado, el terrorismo y todos los medios en su vano intento de aplastar al movimiento revolucionario y a la clase obrera.

“El Comando Político a nombre de la Asamblea Popular, reitera que su objetivo fundamental es la construcción del socialismo, que sólo podrá lograrse a través del total aplastamiento del gorilismo fascista y de la reacción, aplastamiento que supone la destrucción de su poderío económico, desgraciadamente intacto en muchos sectores. “El golpe fascista, que ha venido avanzando y proclamando a tambor batiente la catástrofe nacional que tanto desea, tiene un carácter preventivo con referencia a la inevitable participación obrera mayoritaria en Comibol, a la victoria segura del pueblo boliviano y de su clase proletaria, que será la victoria definitiva del socialismo. La defensa de nuestra causa, que es la causa de los hombres y de las mujeres que habitan este país, nos obliga a rechazar con toda energía y decisión la provocación fascista.

“En este momento crucial creemos de nuestro deber puntualizar que la reacción puede conspirar cómodamente, utilizar parte del aparato y recursos estatales, debido a las dudas, debilidad y peligrosas oscilaciones de derecha a izquierda del gobierno del general Tórres. El pueblo boliviano no puede estar de acuerdo ni complicarse con esta conducta y señala que toda concesión al gorilismo fascista, todo acuerdo con él, importan un rudo golpe al proceso revolucionario, una traición a los intereses nacionales y un marcado servicio al imperialismo.

“Por todo lo anterior, el Comando Político, dirección del frente único antiimperialista y revolucionario, llama a todos los bolivianos, a los hombres y mujeres, a los trabajadores e intelectuales de avanzada, a los soldados, clases y jóvenes oficiales revolucionarios a ponerse en pie de combate, a ganar las calles para aplastar total y definitivamente al gorilismo golpista, a la derecha cavernaria y a los sirvientes del imperialismo.

“El Comando Político llama a todos los bolivianos a defender su revolución, que es su propio porvenir, a salvar al país del descarado gorilismo y a arrancar de cuajo a la contrarrevolución.

“Bolivianos: el pueblo está en guerra a muerte contra el gorilismo fascista. Como en toda guerra, el objetivo central consiste en vencer y aplastar al enemigo.

“Los explotados confían únicamente en sus organizaciones y en su propia fuerza y es alrededor de aquellas que deberán movilizarse”.

El documento está fechado el 19 de agosto de 1971. Lo que debe subrayarse no es el vehemente llamado a la lucha contra la reacción, no cabía hacer otra cosa, sino el que, en el momento en que comenzaba a ser pública la conspiración, se persistiese en mantener a todo trance la independencia del proletariado y a movilizar a la nación oprimida alrededor de las reivindicaciones fundamentales que había proclamado la Asamblea Popular. El rechazo a la conjura no importó sumarse a la política oficial, tan acremente censurada, sino movilizarse con perspectivas de consumir la revolución acaudillada por el proletariado.

Las masas ganaron las calles. El viernes veintiuno por la tarde tuvo lugar, en La Paz, una multitudinaria y combativa manifestación antifascista y antiimperialista. Los trabajadores respondieron prestamente al llamado que hicieran el Comando Político y la COB. La imponente marcha duró aproximadamente cuatro horas. Estaba programado que la concentración se efectuaría frente al local de la Asamblea Popular (ex-Palacio Legislativo); sin embargo, la conducta dual y llena de dobleces del conciliador Lechín determinó que el Palacio de Gobierno sirviese de testera al acto. Los oradores, desgraciadamente, estuvieron muy por debajo del espíritu que animaba a los manifestantes y ninguno de ellos expresó los objetivos de la clase obrera. Tórres y Lechín fueron abucheados con frecuencia y este último, hablando bajo el látigo de sus adversarios, buscó aparecer radicalizado con la consigna de expropiar a las empresas de los conspiradores fascistas. Tórres nuevamente dio muestras de los conspiradores fascistas. Tórres nuevamente dio muestras de su seguidismo servil ante las masas: los manifestantes gritaban “Jota Jotita dale duro” y el Presidente respondió como un chiquilín “les daré duro”.

La manifestación, entre risas y rechiflas, volvió a demostrar que Lechín era ya una figura totalmente envejecida y superada, si tenemos en cuenta que ya no podía ofrecer ninguna respuesta política movilizadora y conforme a los intereses históricos del proletariado. El vespertino “Ultima Hora” (22 de agosto), que le era totalmente adicto en ese entonces, escribió: “Lechín habló entre rechiflas y voces de definición política. Este veterano dominador de multitudes con su oratoria revolucionaria, esta vez fue incapaz de imponer su dominio. Dijo, tal vez, conceptos diferentes a los que esperaba hacerlo, alcanzando a pedir la unidad de todas las fuerzas de izquierda y que se apoderen de las propiedades y empresas de quienes se hubieran alistado en la conspiración”.

Lo transcrito es sugerente, si se tiene en cuenta, sobre todo, que dicho periódico representaba y representa el pensamiento y los intereses de la minería mediana. Los

empresarios sabían que Lechín apareció como un achacoso Belzu sólo por demagogia, que su pensamiento y conducta eran y son diferentes y muy gratos a la minería y al capitalismo.

La marcha antifascista tuvo un rostro sonriente, explicable si se tiene en cuenta que todos, hombres de la calle y gobierno, estaban seguros que sus descomunales dimensiones habían ya aplastado a la conspiración fascista. Algunas horas más tarde se comprobó que la rebelión militar ya no retrocedería ante una simple manifestación, por muy grande que ésta fuese, pues el gorilismo había logrado arrastrar al grueso del ejército tras la consigna de aplastar futuras manifestaciones obreras y de impedir su realización por todos los medios.

El trabajador de base fue víctima de una ilusión: estaba seguro que se estaban repitiendo las jornadas de octubre de 1970, cuando la sola presencia física de los explotados definió el porvenir de la revolución. Este malentendido empujó a grandes sectores de las masas a la inactividad.

Desde el primer momento se comprobó que resultaba sumamente problemática la aplicación de la táctica -aprobada por la Asamblea- consistente en aplastar el golpe de Estado gorila decretando la huelga general. En las zonas periféricas, donde ya dominaban los fascistas, la huelga se tornaba problemática, en lo que se refiere tanto a su declaratoria como a sus consecuencias, esto porque no hubo tiempo de prepararla y por el poco número de los obreros. La huelga en La Paz, donde era factible, habría resultado contraproducente, un apoyo indirecto a la conspiración gorila.

El Comando Político, en su reunión del 20 por la noche, centró su atención alrededor del problema del armamento, que se tornaba apremiante en vista de la ya declarada conjura reaccionaria. Los delegados dijeron que había que recordar al gobierno que el presidente Tórres y sus ministros habían ofrecido, una y otra vez, entregar armas al pueblo; que la conspiración fascista, que avanzaba constantemente y cuya amenaza de victoria se tornaba cada vez más seria, exigían una categórica definición por parte de las autoridades. El Comando acordó enviar una última comisión (Lechín, Mercado, Lora, López, Reyes y Eid) al Palacio de Gobierno, para hacer saber al Presidente que si no cumplía su promesa de entregar armas, la Asamblea Popular lo denunciaría públicamente, además de que seguiría su propio camino, sin tomar más contactos con el oficialismo. La discusión con Tórres, realizada al filo de la media noche, fue sumamente áspera; aquel, para justificar su negativa al pedido, dijo que si él desarmaba a los soldados, para poder entregar fusiles a los obreros, los oficiales responderían rebelándose. En tono dramático añadió: "Créanme que no tengo armas ni siquiera para defender mi palacio", La impotencia de Tórres, en medio de la conspiración ya desencadenada, adquirió contornos trágicos. No sabríamos decir si en algún momento el Presidente pensó seriamente entregar armas a los trabajadores (más parece que utilizó la promesa como chantaje contra sus oponentes de izquierda y de derecha), pero lo evidente es que se encontraba fuertemente presionado por los militares para no hacerlo. Circuló insistentemente el rumor en sentido de que la jerarquía castrense conminó a Tórres a no entregar armas bajo alternativa de rebelión. El resultado de la entrevista molestó en extremo a los miembros de la Asamblea Popular, que, en la sede

de la FSTMB (Avenida "16 de Julio"), se encontraban esperando reunidos la vuelta de sus delegados. Algunos de los ministros de Tórres habían llegado a la conclusión de que no entregar armas "al pueblo" era nada menos que actitud equívoca y hasta contrarrevolucionaria, conclusión que ellos se encargaban de difundirla en voz alta. Había una presión izquierdista sobre el Presidente y que nacía en el seno mismo del gabinete, presión que obligó a las autoridades respectivas a poner a disposición de la Asamblea, al amanecer del día 21, un pequeño lote de armas. ¿Era lo único que podían dar? La respuesta se torna difícil.

En la reunión con los comisionados de la Asamblea Popular, Tórres hizo conocer su plan de retoma de Oruro, operación que, según él, estaría consumada a las seis de la mañana del día 21. Pidió ayuda (que se le concedió de inmediato) para enviar emisarios clandestinos que tomaran contacto con los trabajadores, a la sazón concentrados en San José y cercados por efectivos militares. Los satinadores deberían procurar que los mineros no recibiesen con hostilidad a los uniformados, todas estas exigencias gubernamentales fueron satisfechas. Los encargados de las operaciones militares bautizaron a la maniobra con el nombre de "cien pies, aguilita voladora", que horas más tarde sería popularizada por Radio Illimani y otras emisoras. Los delegados izquierdistas de Oruro, entre ellos Emilio Pérez (que se presentaron al Comando Político exigiendo una solución para la sitiada ciudad de Oruro), quedaron satisfechos por los acuerdos adoptados en el Palacio de Gobierno. Al promediar las deliberaciones del Comando se hicieron presentes dos militantes poristas, enviados por los mineros de Siglo XX y Huanuni, que al no poder vencer a los rangers que controlaban todas las vías de acceso a Oruro permanecían acantonados en las proximidades de Vinto, a pocos kilómetros de la ciudad, aprovechando las ondulaciones del terreno. Estos trabajadores no tenían más que dinamitas y aunque lo sensato habría sido que se replegasen de inmediato a sus bases en espera de armas, pues existían lejanas posibilidades de conseguirlas, como era de conocimiento de la dirección político sindical en sus más altos niveles, permanecieron en sus precarias posiciones en espera de la llegada de las tropas leales. Los enviados de los mineros tenían la misión de informarse sobre el panorama político, la táctica adoptada por el Comando Político y recibir las instrucciones precisas sobre la conducta inmediata que debían seguir los efectivos movilizados desde las minas más grandes. Los comisionados retornaron a su base casi inmediatamente.

Más tarde se supo que los regimientos enviados por Tórres para rescatar el punto estratégico del altiplano prontamente se sumaron a los rebeldes y otros destacamentos sencillamente no abandonaron sus bases. Debido a que las masas se encontraban desarmadas, las verdaderas batallas se libraban no en las calles, sino entre los mandos militares que utilizaban a los regimientos de soldados como a fichas de ajedrez.

A pesar de que ya las tropas encargadas de recapturar Oruro habían defecionado, la radio estatal "Illimani", durante todo el día 21, siguió enviando mensajes cifrados a aquella ciudad en sentido de que la operación "Cien pies – Aguilita voladora" iba a consumarse al anochecer. Esta mentira criminal, dicha en clave muy comprensible para que los trabajadores creyesen en ella, desorientó a los combatientes de La Paz, les hizo dar pasos en falso y fue la causa de que parte de los mineros apostados en

Vinto intentasen tomar Oruro.

“Presencia” de 23 de agosto proporcionó el siguiente informe: “un insensato enfrentamiento de trabajadores mineros con las fuerzas del ejército del día domingo 22, a horas 17, dejó por lo menos 8 muertos y 27 heridos en las proximidades de la fábrica Rockett, a seis kilómetros de esa ciudad, entre la aeropista Juan Mendoza y la Fundición de Estaño en Vinto”. En el choque, que según la prensa tuvo poca duración participaron unos 1.500 mineros venidos de Siglo XX y Huanuni, en cerca de cuarenta camiones, contra el Rangers (Challapata) y “el Batallón Divisionario y del Centro de Instrucción de Operaciones en la Selva, que en horas de la mañana, a bordo de un transporte aéreo militar, llegaron fuertemente armados de Riberalta”, Hubieron también choques incruentos en Machacamarca, a veinticinco kilómetros de Oruro, entre avanzadas mineras y efectivos del regimiento “Loa”, que desde Uyuni se trasladaban hacia aquella ciudad.

El día sábado 21, aproximadamente a horas 10, se apersonaron al local de la COB, donde funcionaba el Comando Político y su Comando Militar (se habían declarado en sesión permanente), los ministros del Interior, Jorge Gallardo, y de Salud Pública, Javier Tórres Goitia, para hacer saber a la dirección del Comando que el regimiento Castrillo se había rebelado y que se tenía dispuesto que dentro de algunos minutos comenzaría un apabullador ataque armado contra el Gran Cuartel General de Miraflores para capturarlo. El plan aprobado por el gobierno y que se lo propuso al Comando (todo esto lo hicieron las autoridades por su propia iniciativa y sin haber demandado la opinión de los organismos obreros y menos su consentimiento) estaba henchido de falsos supuestos y totalmente alejado de la realidad; consistía en que formasen un cerco de fuego alrededor del Gran Cuartel (ubicado entre dos grandes y profundas quebradas y que puede rápidamente controlar la estratégica colina de Laika Cota, que permite dominar enormes zonas de la ciudad y defender muy bien al Gran Cuartel de ataques terrestres) los regimientos “Colorados”, comandado por el mayor Rubén Sánchez, y el acantonado en el cuartel San Jorge, ubicado frente al Gran Cuartel y llave maestra que puede inmovilizar las zonas de Obrajés y Calacoto, donde está ubicado el Colegio Militar; el pueblo, multitudinariamente organizado, debía presionar desde la avenida Saavedra (el local de la Facultad de Medicina estaba ya en poder de los facciosos) a fin de asaltar a la ciudadela militar en el momento oportuno, es decir, cuando hubiese sido reducida por las tropas leales a Tórres. En la Confederación de Fabriles (avenida Armentia) se repartieron alrededor de 200 fusiles mauser y garat, una parte de ellos en mal estado, y dos mil proyectiles. No todas estas armas fueron llevadas al lugar de los posibles combates, algunos de los que las recogieron se retiraron a sus casas. El enemigo no fue señalado con precisión, esto para el grueso de los trabajadores, y no se percibía con claridad, en ese momento, los objetivos inmediatos de lucha ni las posibilidades de la victoria. Esperar pacientemente, bajo el punzante sol de invierno, que el Cuartel fuese aplastado por parte del ejército para luego asaltarlo, es algo que no puede apasionar a las masas. También se puede esperar cómodamente en la casa que se produzca el desenlace. Esto pese a que el día sábado amaneció en medio de una gran tensión. La noche anterior, los dinamitazos de los mineros de Mílluni hicieron estremecer a La Paz. Lechín, con su voz casi infantil que tan bien exterioriza la ingenuidad de su

pensamiento, leyó por radio una convocatoria a todo el pueblo para que, con sus armas, se concentrase en la plaza del Stadium Hernando Siles. Rápidamente se reunieron unas dos mil personas, entre las que los universitarios eran mayoría y el resto estaba constituido por elementos de la clase media y unos pocos obreros. Se trataba principalmente de militancia partidista, que había vaciado sus propios arsenales.

El Ministerio del Interior había prometido que sus efectivos ocuparían la estratégica colina de Laika-Cota, que separa el Barrio de Miraflores del centro de la ciudad. La verdad es que el regimiento Castrillo se adelantó y sus efectivos apostaron nidos de ametralladoras en ella, adquiriendo así mucha ventaja frente a las tropas leales y la multitud concentrada en la avenida Saavedra. La posesión de Laikacota se convirtió en una finalidad estratégica y alrededor de ella se libró la batalla más importante.

El comando Militar de la Asamblea se ubicó en las proximidades del stadium para poder dirigir las operaciones, pero no pudo hacerlo de manera eficiente porque carecía de datos precisos sobre la situación general, no contaba con canales propios y dependía exclusivamente de la cadena timoneada por radio Illimani, que difundía una serie de falsedades, seguramente por razones tácticas y propias del oficialismo, y de las informaciones que proporcionaban las autoridades del Ministerio del Interior a través de una unidad de radio patrulla que se ubicó junto al puesto móvil del Comando Militar. Llegó al stadium otro lote de viejos fusiles mauser, que virtualmente desaparecieron en medio de las sed de armas de la gente. De tarde en tarde se distribuían pequeñísimas cantidades de municiones. Muchas de las armas no disparaban por falta de detonadores. Bien pronto se pudo notar que los mejores combatientes, los que actuaban coordinadamente e inclusive tenían objetivos tácticos claramente establecidos, eran los militantes de partidos políticos.

La preocupación central de los obreros y estudiantes que estaban en las calles era la de armarse; se tenía la impresión de que en ese momento había que cumplir esta tarea previa para luego, algunos días u horas después, combatir contra los gorilas. Se requisaron los edificios y almacenes donde se suponía podían haber armas, todo fue en vano. La multitud concentrada en la avenida Saavedra (Miraflores) asaltó la Intendencia de Guerra y extrajo una gran cantidad de armamento que había sido utilizado en la guerra del Chaco y casi totalmente inservible, lo que sí se utilizó fue la munición. "Hoy" de 22 de agosto, en una crónica a cinco columnas y titulada "Asalto a la Intendencia fue el inicio", dice: "Las fuerzas de la COB avanzaron y en su primer intento lograron ocupar la Intendencia de Guerra de la Avenida Saavedra, de donde lograron obtener más de 1.200 viejos fusiles de sus almacenes. La Intendencia de Guerra contaba con solo una docena de soldados que no hicieron mayor resistencia a los efectivos civiles de la COB, que ingresaron a la vetusta edificación militar".

El Comando Político y la gente concentrada en Miraflores, habían llegado a la conclusión de que nada podrían hacer si no lograban dominar Laika-Cota y a este objetivo le dedicaron toda su atención. A nadie se le ocurrió asaltar inmediatamente el Cuartel General, pues la capacidad de fuego del Castrillo era muy grande. La dirección del Comando esperaba que se cumpliera el plan gubernamental, para luego

arreglar cuentas con la fortaleza del gorilismo. Los planes y esperanzas naufragaron estrechamente ante la evidencia de que a medida que pasaba el tiempo era menor el control del gobierno sobre los efectivos militares. La verdad es que el regimiento de San Jorge no se movió de su base y que, en lugar de atacar al Gran Cuartel, se plegó a los insurrectos. La defección del Grupo de Combate de El Alto fue el golpe de gracia que sus "compañeros" de armas dieron al general Tórres.

A horas 18 o 19, el Ministerio del Interior pidió a la dirección del Comando que los civiles armados se descolgasen hasta el Parque triangular, ubicado a 200 o 300 metros del Gran Cuartel, la sugerencia fue desestimada, porque habría importado llevar al matadero a la gente. Las autoridades, al saberse perdidas y abandonadas por el ejército, querían utilizar su última carta: presionar con las masas sobre el Gran Cuartel, buscando su rendición.

Desde la colina Laika-Cota se hostigó sin cesar a la gente concentrada en las proximidades del stadium y resultó mucho más grave la acción de los francotiradores ubicados en los edificios de la zona de Miraflores y también de otros barrios de la ciudad, todos ellos identificados como conspiradores de derecha (militantes de FSB, principalmente). Muchos muertos y heridos cayeron como resultado de ese fuego combinado. Miraflores es una región habitada por la clase media deseosa de ascender en la escala social y la derecha tuvo el acierto de convertir muchas edificaciones en trincheras invisibles, desde donde daba caza a los izquierdistas. En esta forma se atemorizó y desmoralizó a los combatientes.

Ya dijimos que obreros y estudiantes se fijaron como objetivo capturar Laika-Cota. Cuando la operación se realizaba exitosamente, se pidió a la gente bajar del cerro, porque, se dijo, sobrevolarían aviones para atacar a los facciosos. La verdad era otra y el haberla ocultado ocasionó serios contratiempos. Desde horas 17:35 la fuerza aérea, que a las 15:30 había retirado su apoyo al gobierno y lanzado un ultimátum al mayor Sánchez para que depusiese las armas, pasó ametrallando la zona convulsionada, buscando aplastar al Colorados y a los civiles izquierdistas. Los universitarios y obreros atacaron una y otra vez las fortificaciones ocupadas por las avanzadas del regimiento Castrillo y a costa de mucha sangre y de muchas vidas lograron, finalmente, acallar a las ametralladoras de Laika-Cota. En esta acción fue posible capturar algún armamento moderno.

Sólo más tarde se supo que a las 13:30 horas, el general Reque Terán, Comandante en Jefe del Ejército, se trasladó al Palacio de Gobierno para notificar a Tórres que debía abandonar el poder, actuando como emisario de los rebeldes y como totalmente entregado a ellos. Reque fue detenido por las milicias populares y éstas se limitaron a pedirle armas, en el entendido de que permanecía fiel al Presidente. "Sin embargo, la entrevista entre ambos no dio resultado, al parecer se suscitó un altercado verbal"². El mismo Reque tuvo que cumplir la incómoda misión de parlamentar con los efectivos del regimiento Colorados, a fin de suspender el fuego y efectivizar el sometimiento a

los facciosos. "Al haber sido rechazado su intento se embarcó en un

2- "Ultima Hora", La Paz, 23 de agosto de 1971.

jeep, circunstancias en las que se escuchó una ráfaga de ametralladora. El capitán Terrazas, cuando se aprestaba a cubrir con su cuerpo a su jefe, cayó acribillado por la espalda, juntamente con un suboficial, mientras Reque sufría una herida en el pie, de la que fue atendido en el Hospital Militar". Los jefes del golpe gorila no depositaron su total confianza en el general traidor, que en ningún momento dejó de ser tratado con desconfianza. Merodeando por las graderías del Palacio de Gobierno, concluyó comprometiéndose en un golpe militar contra el Presidente Bánzer, lo que motivó su destierro a la Argentina. Recién después de haber sido arrojado ignominiosamente del poder, se creyó obligado a revelar que el militarismo brasilero ayudó a los golpistas de agosto de 1971 con enorme cantidad de armamento, el mismo que habría sido trasladado en aviones hasta el lugar de los sucesos. Reque continuó intrigando y conspirando con militares y civiles de derecha y hasta acarició el proyecto de organizar su propio partido político.

Hombres y mujeres del pueblo, dispuestos a oponerse a la conspiración gorila, se apostaron en las zonas marginales (Alto San Pedro, Villa Victoria, Agua de la Vida y el Calvario) y lanzaban intermitentemente cargas de dinamita.

A mediodía estaban de retorno a La Paz los regimientos Andino y Motorizado de Viacha, después de haber defecionado en las inmediaciones de Oruro; estos efectivos reforzaron al gorilismo.

A las 16 y 30, jóvenes, estudiantes y mineros que se encontraban en La Paz, corrieron al Ministerio de Defensa en busca de armas, alguien tuvo la ocurrencia de propalar el rumor de que ahí se estaban distribuyendo fusiles y fueron recibidos a bala. El resultado: más heridos y muertos.

Los carros de asalto del regimiento Tarapacá (hasta la víspera Tórres sostenía que se trataba de uno de sus soportes armados), que sembraron terror y desolación en las calles paceñas, hicieron su aparición alrededor de las 20 horas en las zonas altas de la ciudad (Munaypata y Villa Victoria). La aviación y las tanquetas del Tarapacá sellaron la derrota de Tórres. El factor sorpresa jugó su papel; nadie esperaba enfrentarse con esos monstruos y, cuando bajaban hacia la ciudad, la radioemisora estatal difundía instrucciones no realizables para sabotear su marcha. La radio Illimani enmudeció cuando los tanques se aproximaban a la Plaza Murillo. A la misma hora se reunieron por última vez los dirigentes del Comando Político que quedaban en Miraflores (Lechín, Alandia, Lora) y acordaron trasladarse al centro de la ciudad, para luego volver a reunirse en el local de la Federación de Mineros, encuentro que no se realizó, las descargas de dinamita y de ametralladoras tornaron intransitable la avenida "16 de Julio". Esos elementos ignoraban la verdadera situación reinante. Seguían llegando rumores en sentido de que el Gran Cuartel estaba a punto de rendirse.

Tres tanques se posesionaron de la Plaza Murillo y otros cuatro se dirigieron hacia la universidad y Laika-Cota; la marcha de estos gigantes de fuego causó la mayor cantidad de los muertos. Descargas de dinamita y ametralladoras se prolongaron hasta la madrugada. Al día siguiente, veintidós, la aviación continuó su tarea de limpieza, teniendo siempre como a su primer objetivo al cerro de Laika-Cota.

Mientras tanto, casi toda la plana mayor de los partidos izquierdistas logró sumergirse en la vida clandestina o ganar las embajadas, para evitar así ser eliminada físicamente por el gorilismo. Los golpistas no pudieron cumplir uno de sus objetivos principales: acabar con los cuadros más esclarecidos de la izquierda.

3

Las minas

Lo ocurrido en los centros mineros mostró características diferenciales y no se limitó a ser una simple réplica de los acontecimientos de las ciudades, es por esto que le dedicamos un comentario especial.

La movilización de los trabajadores mineros en la región de Oruro para aplastar al gorilismo fue gigantesca. Consignamos algunos detalles.

En siglo XX, se supo del levantamiento fascista en Santa Cruz el día 19 de agosto e inmediatamente la dirección sindical decretó estado de emergencia y convocó a las milicias armadas para resguardar los campamentos y el local del sindicato.

Al día siguiente (20), a horas 10, los dirigentes determinaron que los obreros abandonasen el trabajo para trasladarse a la ciudad de Oruro, a fin de asistir a la manifestación antifascista propiciada por la Federación de Mineros. En efecto, aproximadamente a las trece horas, partieron los efectivos obreros en treinta camiones. A la altura de Playa Verde (un poco más allá de Huanuni) se pudo comprobar que dirigentes y trabajadores retornaban de Oruro, los mismos que informaron que los rebeldes, más concretamente el regimiento Rangers, habían ocupado la ciudad. Frente a esta nueva situación, una mitad de los camiones retornó a Huanuni y la otra siguió rumbo a Oruro, sin dar mayor importancia a los datos de la ocupación. A la altura del puente sobre el río Tagarete, a dos kilómetros de la ciudad, una avanzada de San José ratificó las anteriores informaciones. En ese momento se destacó una comisión, formada por dos militantes poristas y el radialista Mancilla, para constatar en el terreno, es decir, en la misma ciudad, la situación reinante; a su retorno informó en una asamblea que la ocupación militar de Oruro era total, lo que determinó el repliegue táctico hasta las instalaciones de la Empresa Nacional de Fundiciones de Vinto. Simultáneamente, fueron enviados delegados a La Paz (obreros de Siglo XX y Catavi), con el objeto de tomar contacto con la Federación de Mineros y de recibir instrucciones, a ese equipo se integraron tres radialistas. Posteriormente, a horas 20, se determinó, después de un breve cambio de ideas, la retirada hasta Huanuni, donde se verificó una reunión de dirigentes y delegados de Siglo XX, Catavi y Huanuni, en la misma que se organizó un comando único que determinaría la conducta de los trabajadores, a dicho comando se sumaron representantes de Santa Fe, Japo, Machacamarca y de las minas pequeñas próximas a Oruro. Los mineros paralizaron toda actividad y se movilizaron hacia Oruro, con la finalidad básica de controlarlo. De una manera particular, conforme a las circunstancias imperantes, se cumplieron las determinaciones de la Asamblea Popular.

El día sábado 21, a horas 9, se realizó otra asamblea para escuchar la información de los comisionados que ya habían retornado de La Paz. Se determinó esperar últimas instrucciones de la Federación de Mineros. A esta altura se informó que se realizaría una asamblea general en Siglo XX, la misma que acordó marchar sobre la ciudad de Oruro para retomarla. Se eligió un comando político-militar, a cuya cabeza se encontraba un trotskysta, que debía ser la única autoridad capaz de decretar el avance o repliegue de los obreros, sin embargo, cuando aparecieron los camiones procedentes de Siglo XX toda la masa los siguió. En el trayecto se conjuncionaron los comandos formados en Siglo XX y Huanuni, incluyendo al representante de los locatarios del distrito de Catavi. Se marchaba deliberadamente a un choque armado con las fuerzas del ejército, es decir, a cumplir una acción militar y, sin embargo, los mineros consideraban que tenía preeminencia la dirección política; a su comando, encargo de dirigir las operaciones militares, le llamaron político-militar, colocando a su cabeza a uno de los elementos más politizados.

A la altura del camino que va a Machacamarca, llegó el informe en sentido de que entre esta localidad y Antequera se encontraba un convoy ferroviario que llevaba refuerzos y armamento a Oruro, inmediatamente una parte de los trabajadores se encaminó a capturarlo y la otra continuó su marcha hacia Oruro. En las proximidades de la estación de Machacamarca se libró una batalla desigual. Ciento cincuenta soldados armados hasta los dientes resguardaban el convoy y los obreros sólo contaban con cinco fusiles y veinticinco proyectiles. La Operación sorpresa fracasó y el choque arrojó cuatro muertos (fue identificado rápidamente el joven porista Ramón Troncoso) y varios heridos.

Los obreros que intentaron ingresar a Oruro se vieron obligados a librar escaramuzas con las bien pertrechadas tropas del ejército y que fueron del todo adversas a los primeros; sin embargo, algunos satinadores lograron filtrarse hasta el mismo corazón de la ciudad, los mismos que retornaron al siguiente día sin novedad a su base. Se buscaba coordinar las acciones con los obreros de San José.

La imponente movilización en la zona minera no se tradujo en enfrentamientos de gran volumen con las fuerzas del ejército, que eso es lo que buscaban afanosamente los gorilas, para ahogar en sangre al sindicalismo revolucionario y eliminarlo del escenario. Contrariamente, se operó un repliegue de los trabajadores, cuando éstos comprobaron la imposibilidad de armarse a costa del mismo ejército y de hacerlo retroceder de las posiciones que había ocupado. En La Paz se registraron choques una larga batalla entre estudiantes, algunos pocos obreros y los efectivos militares. Se puede decir que la universidad se empleó a fondo en estas operaciones. En la región minera de Oruro no hubieron encuentros de tales dimensiones y los trabajadores efectuaron una gran maniobra de retroceso táctico. Los que han escrito sobre los acontecimientos de agosto olvidan esta realidad y gusta referirse al total y sangriento aplastamiento del movimiento revolucionario durante las jornadas de agosto de 1971, que, no podía menos que ser el punto de partida de un larguísimo período contrarrevolucionario, dominado por un gobierno totalitario y despótico. Ese también era el esquema de los generales gorilas: acabar con la izquierda, del modo más sangriento posible, para, sobre sus escombros, levantar un poderoso

Estado nacionalista. El repliegue táctico de los mineros, el sector fundamental del proletariado y del movimiento revolucionario, impidió el cumplimiento, por lo menos momentáneamente, del programa fascista.

Podría argumentarse que no hay derrota más trágica que perder una batalla sin combatir, limitándose a ceder pacíficamente el terreno al enemigo. Estas conclusiones no pueden aplicarse al caso de los mineros, pues éstos realizaron una maniobra buscando postergar la batalla definitiva, dado su estado de extrema inferioridad material con referencia al ejército. No entregaron el terreno de sus luchas cotidianas, ni se desbandaron; contrariamente, se concentraron en los lugares de trabajo para continuar la resistencia al gorilismo (claro que de activa tuvo que pasar a pasiva), para defender sus organizaciones y prepararse para una nueva arremetida. Un proletariado minero intacto en gran medida se convirtió, desde el primer momento, en punto vulnerable del régimen fascista. No dejaron de luchar, siguieron combatiendo utilizando métodos particulares.

La historia social boliviana está llena de masacres de obreros, ocasionadas generalmente porque éstos resistieron desarmados a las tropas del ejército o arremetieron contra ellas. En agosto de 1971 deciden no librar batalla en pésimas condiciones y se repliegan ordenadamente. El discernir con claridad en qué condiciones se van a librar los combates es uno de los elementos de la táctica revolucionaria. Por mucha madurez política que tengan las masas una decisión como la comentada no puede ser resultado exclusivo de la espontaneidad, está denunciando la presencia de la dirección política. En efecto, la retira táctica y temporal fue decidida por la dirección porista, ella presionó sobre su militancia y los cuadros obreros medios en ese sentido. En "MASAS" se sostiene que los trotskistas tomaban para sí la responsabilidad de esa maniobra de grandes dimensiones. Los acontecimientos posteriores han probado que lo hecho por los mineros sirvió para preservar el porvenir de la revolución y dejar sentadas las premisas para un nuevo y rápido ascenso de las masas.

Después de estos acontecimientos, en el distrito de Siglo XX imperó un tremendo revisionismo. El día domingo 22, por la mañana, se realizó una asamblea conjunta de delegados y dirigentes de Siglo XX, Catavi y del Sindicato de arrendatarios "20 de Octubre", con la finalidad de analizar el momento político y el radiograma enviado por la oficina central de Comibol, instruyendo la inmediata reanudación de labores en vista de haberse posesionado el nuevo gobierno. Los asambleístas aprobaron los siguientes puntos:

1. Inamovilidad de todos los trabajadores. Fundados temores de que el gorilismo iba a proceder al despido de los mejores sindicalistas, catalogados como agitadores, sobretudo, después de que no lograron eliminarlos físicamente.
2. Respeto irrestricto al fuero sindical y amplias garantías para los dirigentes sindicales y políticos. Como se ve, se pasó a la defensa de las garantías democráticas más elementales, a la lucha por la preservación de las organizaciones sindicales, que eso supone la defensa de sus cuadros dirigentes. Se agrupaba y organizaba a los obreros alrededor de objetivos concretos.

Los dirigentes sindicales de Siglo XX cursaron un cable a la Presidencia de la República, transcribiendo lo acordado por la asamblea.

Los trabajadores tenían plena conciencia de que habían tenido que retroceder, apretando los dientes, lo que no era para ellos una derrota sangrienta los esperaban una ocasión propicia y armarse debidamente para volver a arremeter a la bestia fascista.

En las cuestiones más pequeñas se patentizaba la repulsa de los trabajadores al nuevo estado de cosas. El 25 de agosto de 1971 se realizó en Llallagua un cabildo abierto para designar al Alcalde Municipal, acto en el que participaron los poristas. Violentando los deseos del oficialismo, se ratificó, por amplia mayoría, al anterior Alcalde. El gobierno Bánzer mostró inconfundible fisonomía totalitaria desde el momento mismo de su nacimiento, actuando al margen del ordenamiento jurídico, subordinando las leyes a su capricho, por todo esto tiene que extrañar que las capas populares que rodean Siglo XX hubiesen convocado nada menos que a un cabildo para designar a la autoridad municipal.

4

Actitud de Torres

A las 20:45, el general Tórres abandonó el Palacio de Gobierno, en ese momento rodeado de sombras trágicas y del rugir de las tanquetas que se aproximaban amenazadoramente. El fascismo, que disparaba sin tregua y aparentemente casi sin plan, buscando sembrar el terror, avanzó en medio de un silencio tétrico y tenso. Tórres no se cansaba, inclusive hasta las 19 horas, de convocar al pueblo para que siguiese combatiendo con firmeza en defensa del gobierno por él personificado. El general que en momento alguno logró controlar a las fuerzas sociales, concluyó perdiendo el control sobre sí mismo. El presidente nacionalista abandonó físicamente el Palacio, vale decir, el poder, ante el empuje del ejército que se tornó irresistible, eso porque no contaba con un efectivo apoyo militar ni civil. Ante esta evidencia está demás toda discusión acerca de la gran popularidad de un gobernante que no supo ni pudo defender su propio palacio. La prensa del día 24 confirmó que el ex Presidente (la impetuosidad de los acontecimientos lo convirtió mecánica y definitivamente en un ex), que no se tomó la molestia de renunciar, estaba asilado en la Embajada del Perú y, según informaciones que se apresuró en proporcionar el Ministerio de Relaciones Exteriores, también varios de sus parciales, entre ellos el mayor Sánchez, que dio muestras de fidelidad al Jefe de Estado más que de firmeza política.

Asilarse en una embajada supone la decisión de abandonar el país, entonces, ¿por qué no renunció Tórres? Creía posible jugar la carta del gobierno en el exilio, como demuestra el que por bastante tiempo mantuviese alrededor suyo a su equipo ministerial, etc. Tórres se equivocó al creer que un futuro gobierno popular y democratizante tenía que pasar necesariamente por su persona y, sin cortar sus vinculaciones con los conspiradores de uniforme, se esforzó por convertirse

en dirección de las fuerzas populares y de izquierda. Es claro que los generales y coroneles golpistas, que vivieron todas las vicisitudes dentro del país y jugaron apoyados en su mando sobre las tropas, sólo podían considerar al depuesto Tórres como posible sostén, pero nunca como la cabeza directriz. Tórres, como conspirador, cometió gravísimos errores, lo que despertó creciente desconfianza hacia su persona por grandes sectores militares no tuvo el menor reparo en aparecer como identificado con las tendencias extremas de izquierda e inclusive como manejado por éstas. Bien pronto fueron conocidas por todos sus vinculaciones con el castrismo, con los partidos comunistas y no vaciló en estampar su firma en el documento constitutivo del Frente Revolucionario Antiimperialista y sólo muy tardíamente se apartó de esta última organización, cuando alguien le dijo que ponía en peligro su porvenir político al identificarse como elemento comprometido con la extrema izquierda. No se puede impunemente peregrinar por todas las tiendas políticas. Finalmente, un cable de Buenos Aires ³ hizo saber que, como si se tratar de un ensayo cualquiera, propició la formación de un organismo nucleador de los sectores de la izquierda nacional: el documento de convocatoria a tan curioso contubernio era una mescolanza de consignas nacionalistas y socialistas, todo a medida del general Tórres y de sus seguidores, o mejor, de los que se aprovecharon de su gastada de imagen.

El general Tórres, desde una de las Villas Miseria de la gran urbe, propuso nada menos que un "gobierno democrático, popular y revolucionario", que tendría la misión central de continuar su obra gubernamental, brutalmente "interrumpida por el golpe oligárquico extranjerizante del 21 de agosto de 1971 ", a eso le llamó "restituir el cauce del proceso de liberación nacioñal".

Esta postura constituyó un franco retroceso con referencia a los planteamientos programáticos del FRA, que partían del rol hegemónico del proletariado. Un gobierno democrático, popular y revolucionario puede ser cualquier cosa menos una fórmula que corresponda a la evolución política del país.

El planteamiento de Tórres seguía dentro del nacionalismo de contenido burgués, partía de que la liberación nacional se lograría por "el camino de la revolución democrática y nacional". Pero ocurre que en 1971 las masas ganaron las calles para imponer el socialismo.

La tesis torrística fue lanzada en el mismo nivel que los decretos gubernamentales que había redactado el coronel Méndez Pereira, para justificar el golpe de Estado que esperaba consumir.

Detrás de Tórres y de Méndez Pereira estaban los grupos políticos nacionalistas y stalinistas, desesperados de encontrar personajes capaces de reeditar la experiencia peruana. La desgracia para los conspiradores radicaba en que Bolivia había superado hace tiempo esas posibilidades.

3- "Tórres formuló en Buenos Aires plan de alianza de la izquierda", en "Presencia", 21 de mayo de 1973.

5

Rol de la universidad

Mientras tanto, en las ciudades el gorilismo vencía los últimos focos de resistencia y efectuaba una severísima operación de limpieza en el seno de las organizaciones de la clase media.

En La Paz, durante las primeras horas del día domingo 22 de agosto, fue ocupada militarmente la universidad, considerada por todos como la trinchera principal de la izquierda intransigente, y se dijo que en su interior quedaban una veintena de estudiantes armados. Al día siguiente, 23, se constituyó en el monoblock una comisión mediadora (Arzobispo paceño, diplomáticos, Cruz Roja, representantes de catedráticos y universitarios), para lograr la salida de los presuntos refugiados. Se hicieron esfuerzos extremos para salvar a la universidad como entidad autónoma, cosa que interesaba al movimiento revolucionario en general.

Al promediar el medio día del 23, aproximadamente 500 universitarios bloquearon la Avenida Villazón y acordaron reunirse en asamblea. Muchos se sentaron frente a los tanques, a fin de impedir el retorno de las tropas a la universidad. Los generales se movían envalentonados por su victoria y es claro que no cederían a las exigencias de los estudiantes; se conminó al tumulto a disolverse de inmediato. Se dijo que a esta altura se escuchó un disparo proveniente de alguno de los pisos superiores del monoblock. Con una rapidez sorprendente, los aviones, los tanques y los soldados se emplearon a fondo en su tarea de disolver a bala a los asambleístas, habiendo muerto -según informes de la prensa- siete personas y quedando heridas más de veintisiete. Los estudiantes sostuvieron que fueron fusilados cuatro de sus compañeros y apresados otros. Con todo, se logró hacer circular el siguiente pronunciamiento:

“La asamblea docente-estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, reunida el 23 de agosto de 1971, resuelve:

“1. Declarar que la autonomía universitaria constituye un principio básico de la vida institucional boliviana, sobre el que no se puede transigir.

“2. La autonomía universitaria lograda a través de un acto democrático director en el referéndum de 1932 y plasmada en la Constitución Política del Estado es violada cuando el cambio de autoridades políticas del país determina el desconocimiento de las autoridades universitarias y cuando fuerzas armadas irrumpen en los predios y edificios universitarios.

“3. La UMSA será intransigente en la defensa de la autonomía universitaria.

“4. La asamblea docente-estudiantil dispone que en tanto las autoridades surgidas de las elecciones de 1970 puedan ejercer sus funciones, o se constituyan las nuevas autoridades en el acto plebiscitario que se realizará próximamente, designa una directiva universitaria integrada por los decanos y delegados estudiantiles de las

facultades más antiguas: Derecho, Medicina y Farmacia, que se encargarán de la conducción y administración de la universidad.

“5. Solicitar al Gobierno de la República el inmediato retiro de toda la tropa y policía de los edificios y predios universitarios.

“6. Demandar garantías y libertad para los docentes y estudiantes perseguidos y detenidos.

“7. Ratificar su adhesión plena a los postulados de la revolución de 1970.

“8. Declarar duelo universitario por los docentes y universitarios muertos en los últimos acontecimientos”.

Después de la brutal represión las fuerzas armadas apresaron a varios cientos de universitarios, que fueron conducidos con los brazos en alto hasta la prisión.

Como han demostrado los acontecimientos que se sucedieron inmediatamente después, el gorilismo tenía como finalidad central destruir la autonomía y a una universidad que siempre podía alinearse junto a las fuerzas revolucionarias y no únicamente asesinar y apresar a algunas decenas de agitadores estudiantiles. El pronunciamiento docente-estudiantil transcrito adquiere el carácter de un enunciado de buenas intenciones solamente, porque su ejecución precisaba la posesión de fuerza material capaz de hacer retroceder a las tropas del ejército.

Acaso sin darse cuenta cabal, profesores y estudiantes sentaron las bases de la lucha que se libraré en el futuro en el plano universitario: la defensa de la autonomía y el retorno a los principios sentados por la revolución universitaria de 1970, consumada bajo la poderosa presión de una clase obrera profundamente movilizada.

La “revolución” universitaria fue un movimiento estudiantil excepcional, aunque no inexplicable, si se toma en cuenta el contexto de la evolución política del país.

En el mes de marzo de 1970 se inició en la universidad páceña (la mayor concentración estudiantil del país, moviéndose en el centro político más activo) y rápidamente adquirió dimensiones nacionales. Una disputa a nivel docente, en la Facultad de Derecho de la UMSA, desencadenó un conflicto insospechado por sus dimensiones, que modificó internamente a la universidad y la movilizó dentro del proceso revolucionario general. “En realidad -dijo uno de los protagonistas-, un conflicto entre dos sectores de la misma camarilla, fue el pretexto que abrió las esclusas que contenían al torrente del descontento estudiantil. Vanos fueron los intentos de la vieja dirección universitaria por neutralizar al movimiento de los estudiantes. Rápidamente las demás facultades fueron plegándose al movimiento iniciado en la Facultad de Derecho. En cada facultad la lucha adquirió ribetes particulares. Los estudiantes comenzaban abordando problemas propios de su facultad, para relacionarlos inmediatamente con el problema general de la universidad y, finalmente, llegar a la misma conclusión consignada en las “Bases Ideológicas” (documento programático de la revolución

universitaria). Una a una las direcciones estudiantiles y docentes de las diferentes facultades fueron desconocidas y sustituidas por otras nuevas elegidas directamente por aclamación en las asambleas estudiantiles. Se eligieron delegados al Comité Central Revolucionario, que se constituyó en la máxima autoridad estudiantil. Este, a su vez, desconoció a la alta dirección universitaria y decretó la expulsión física del Rector Carlos Terrazas, del Secretario General y del Tesorero (troika que controlaba despóticamente todos los aspectos de la vida universitaria), procediendo a precintar sus oficinas y todas, las dependencias administrativas. Se convocó a la designación de un nuevo Consejo Supremo Revolucionario, formado por los decanos y delegados estudiantiles elegidos por las asambleas facultativas, quienes debían elegir a las tres máximas autoridades universitarias, con las que harían paridad en todas sus funciones los tres ejecutivos (estudiantes) del Consejo Central Revolucionario. Se instituyó el veto político estudiantil, por el cual el Comité Central Revolucionario tenía la facultad de vetar a todo docente que se le comprobase responsabilidad o colaboración en actos anti-obreros y antiautonomistas” 4.

Un militante porista se convirtió en el eje humano del comienzo de la revolución en Derecho y expresó los objetivos del movimiento a la prensa, reportaje del que extractamos algunos conceptos: “Sosa, juntamente con otro universitario, Reinaldo Peters (del MNR), también de la Facultad de Derecho fue el detonante humano de la Revolución Universitaria. Al desconocer al decano Alipio Valencia Vega (la ironía estudiantil lo llamaba Valencia Vega, por su insaciable sed de acumular cargos y sueldos) provocaron un pequeño y doméstico revolucionario, que en el acto se convirtió en un terremoto cuyas grietas llegan hasta las oficinas del propio rector de la universidad... Para ellos... La “revolución se mueve a través de la aguda pugna entre sectores opuestos: unos que encarnan la tendencia renovadora, y otros que se confunden con la reacción encaramada en el rectorado y otros niveles de dirección” 5. Tradicionalmente la universidad en Bolivia, y particularmente la paceña, han estado dirigidas por la masonería, identificada como centro orientador de la reacción y agencia pro-imperialista. Los movimientos estudiantiles de izquierda se han proclamado invariablemente, por lo menos en sus inicio, antimasonicos.

Muchos consideraron a la revolución universitaria como estrictamente pedagógica y administrativa (renovar los métodos de enseñanza, adecuarlos a los adelantos de la ciencia y erradicar la inmoralidad de las casas superiores de estudio). Eso buscaban los demócratas, los nacionalistas y otros elementos pro-burgueses. Un periodista, Miguel Angel Flores, escribió en el vespertino paceño “Jornada” (3 de abril de 1970) lo que va leerse: “A raíz de un fallido golpe interno contra el decano de la Facultad de Derecho, se determinó la revolución reformista, llevada a cabo con indiscutible éxito por estudiantes de avanzada revolucionaria, poseídos de la firme decisión de reestructurar los sistemas académicos, administrativos y económicos de la Facultad de Leyes, en base al análisis profundo de reforma y al planteamiento de soluciones positivas que doten a Derechode mayor efectividad pedagógica y de

4- “Homenaje de la juventud del POR a la revolución universitaria”, en “Masas” N° 427 (suplemento) , s/f, probablemente abril de 1973.

5- “Una incógnita: ¿Hacia dónde va la revolución universitaria?”, por Mariio Rueda Peña, “Jornada”, La Paz, 3 de abril de 1970. Los documentos básicos de la “revolución” universitaria fueron redactados por la dirección del POR.

organización interna. La intención del Comité Revolucionario es evitar la injusticia y la desproporción en la designación de cátedras, dirección de seminarios y otros institutos jurídico-penales (se dio el caso de que un profesor acumulaba varias cátedras, siendo la lógica consecuencia la ineficacia)". Se comenzó por exigir que el movimiento se limitase a ser excluyentemente universitario y esencialmente apolítico: "Pero es indiscutible que la revolución iniciada debe ser llevada con espíritu altruista, sin intereses personales, ni consignas políticas, ni de logia ..."

La revolución universitaria fue, sobre todo, una gran movilización multitudinaria bajo la presión de la clase obrera y, seguramente sin que muchos dirigentes estudiantiles esperasen o quisiesen, rebasó los límites del claustro universitario y desembocó en la gran avalancha boliviana en busca del socialismo. Inicialmente todos los planteamientos fueron limitadamente académicos y administrativos, impuestos en forma nada académica, utilizando la violencia sin atenuantes; pero, estas mismas reivindicaciones adquirieron rápidamente un radicalismo insospechado y se confundieron con planteamientos indiscutiblemente políticos. El poder y veto estudiantiles concluyeron subordinando a los catedráticos a la voluntad de sus alumnos, se hizo públicamente una selección política en el serio del cuerpo docente, la enseñanza fue concentrada alrededor de los problemas bolivianos y se utilizaron gran parte de los recursos materiales para efectivizar la unidad de la universidad con las masas.

Los dirigentes estudiantiles de la revolución tenían plena conciencia de que no se trataba únicamente de remozar las normas pedagógicas o las formas de organización de la universidad, sino de alinear a ésta junto al proletariado en la lucha por el socialismo. "Pero... se define ideológicamente y nos da un indicio sobre la identidad doctrinal de la corriente universitaria que desde muchas puntas engrosa el caudal revolucionario... "O triunfa el socialismo o vuelve a aplastarnos la pezuña fascista. Los universitarios de Derecho hemos comenzado la revolución en la UMSA para salvar al país de este riesgo. Ideológicamente, el movimiento de San Andrés no puede ser otra cosa que izquierdista. No se trata de una izquierda abstracta y hueca. La izquierda universitaria es parte del movimiento revolucionario proletario. La revolución universitaria, en último término, sintetiza la lucha entre clase dominante y proletariado. En este momento, los universitarios nos soldamos con la clase obrera y seguimos su política clasista".

Los universitarios adoptaron como suya la Tesis Política de la COB y se incorporaron al Comando Político y a la Asamblea Popular. Las "Bases Ideológicas", redactadas por la plana mayor porista, recapitulan la Tesis cobista, como ya lo hizo el documento lanzado por los estudiantes de la Facultad de Derecho. Aunque existía un virtual frente único entre estudiantes y catedráticos revolucionarios, la garantía de la efectivización del programa de renovación dependía de la acción de los primeros, que constituyeron los llamados Comités Revolucionarios, de ahí que fue necesario llevar a sus manifestaciones más extremas el co-gobierno paritario (un triunvirato estudiantil al lado del rector, del secretario general y del tesorero). La finalidad era colocar la universidad autónoma al servicio del movimiento revolucionario acaudillado por la clase obrera. Esta tendencia volvió a exteriorizarse en la Asamblea Popular cuando

se planteó e impuso la estructuración de una universidad única bajo la dirección hegemónica del proletariado.

El gobierno Ovando, que se esforzaba por aparecer inclinado hacia los intereses populares, mantuvo un hipócrita silencio ante el desarrollo de la revolución estudiantil, mientras bajo cuerda armaba a las fuerzas fascistas extrañas a la revolución e inclusive a pandillas de hampones, a quienes, finalmente, lanzó contra la universidad. La ocupación armada del edificio central de la UMSA tuvo como consecuencia una mayor movilización del movimiento estudiantil, la consolidación de sus vínculos con el movimiento de masas y su radical politización. Las autoridades no tuvieron el menor reparo en sacrificar a sus instrumentos, para seguir manteniendo la ficción de las buenas relaciones con la universidad.

El golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 destruyó todas las conquistas radicales logradas durante la revolución universitaria y a la misma universidad autónoma. Canceló el año universitario y dictó normas para el funcionamiento de una casa superior de estudios totalmente sometida al Poder Ejecutivo. La autonomía fue reemplazada por un régimen que permitía al Poder Ejecutivo tener en sus manos el control de toda la vida universitaria. El co-gobierno docente estudiantil fue también negado. La universidad, que está lejos de ser apolítica, ha concluido siendo sometida a los menguados objetivos del fascismo gorila.

Es cierto que los estudiantes ofrecieron una recia resistencia al gorilismo y se movilizaron, venciendo los innumerables obstáculos que les opuso el oficialismo, alrededor de las reivindicaciones centrales de la reconquista de la autonomía, que básicamente es autonomía frente al gobierno central, y del co-gobierno paritario docente-estudiantil, conquista máxima de todo el movimiento universitario, efectivizada en 1970-71. En esta medida esta nueva faceta de la "reforma" universitaria se fue integrando como uno de los componentes de importancia del proceso revolucionario.

Sin embargo, la materialización de la reconquista de la autonomía fue posible sólo gracias a la decidida actuación proletaria. La huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras en diciembre de 1977 empujó a toda la nación oprimida, dentro de ella a la universidad, hacia adelante y la radicalizó, obligó al gorilismo a retroceder y acceder a la demanda de vigencia de las garantías constitucionales y sindicales. De esta manera se allanó el camino para la derogatoria de la Ley Fundamental anti-autonomista.

Cuando las masas se desplazaron hacia el polo burgués (elecciones generales de 1978 y 1979), los universitarios ocuparon las primeras filas en esta marcha, demostrando así su incapacidad de desarrollar consecuentemente una política propia de clase. Durante el retorno del proletariado a su eje revolucionario, los estudiantes muy difícilmente fueron emancipándose del control secante de los sectores burgueses democratizantes. Habiendo desembocado masivamente en el seno del MIR, convertido en tienda nacionalista y burguesa, no tuvieron más remedio que vivir la experiencia de las luchas internas y de las escisiones de esta corriente, para así aproximarse nuevamente a las posiciones del proletariado.

6

Los triunviros

En Santa Cruz fue dictado el Decreto que creó el triunvirato militar conformado por Jaime Florentino Mendieta, Hugo Bánzer Suárez y Andrés Selich Chop, destinado a sustituir al depuesto Presidente Tórres. Sin embargo, el triunvirato no pasó del papel. El 22 de agosto de 1971 juró, ante sí mismo, el cargo de Presidente de la República Hugo Bánzer y seguidamente besaron el signo de la cruz los ministros recolectados entre la militancia del MNR y de FSB que, juntamente con el gorilismo, habían formado el llamado Frente Popular Nacionalista, soporte político-civil del nuevo régimen, que indiscutiblemente se asentaba en las bayonetas.

Muy pocos han parado mientes en que sólo uno de los triunviros llegó a ocupar la silla presidencial, los otros dos fueron destinados a puestos secundarios. Se trata de un acontecimiento de importancia para que pueda ser pasado por alto tan fácilmente. Los ingenuos razonan en sentido de que un gobierno totalitario tiene que ser necesariamente homogéneo, sin fisuras y sin contradicciones internas. En el transcurso de la misma rebelión se hizo evidente que entre los triunviros no sólo habían intereses y ambiciones encontrados, por encima del principio castrense de que el soldado debe limitarse a cumplir las órdenes de sus superiores jerárquicos, sino también diferencias de matiz sobre la política fascista a seguirse, que entonces y después traducían y traducen al lenguaje de los uniformados las presiones sociales encontradas e inclusive las contradicciones internas de los organismos imperialistas y de los gobiernos "amigos", de los que son sus instrumentos.

Desde el primer día se hicieron perceptibles profundas fisuras en las cumbres gubernamentales. Bánzer debutó como la figura central, mostrando una firme voluntad de asentarse como caudillo, como árbitro en medio de la creciente pugna entre movimientistas y falangistas, pugna que necesariamente se reflejó en el seno de las fuerzas armadas. Los Estados Unidos, conocedores de las contradicciones internas del equipo gobernante, volcaron su confianza en favor de Bánzer, por considerar que era sumamente útil su flexibilidad de maniobra, que le permitió comenzar equilibrándose entre los diversos grupos militares en lucha por el control del poder y también, adaptarse a las exigencias de las masas, para finalmente perfilarse como el caudillo único. Selich apareció como el hombre brutal y fuerte entre sus iguales y Bánzer como si fuera su virtual prisionero. El Ministro del Interior Selich no ocultó su profundo resentimiento por haber sido desplazado de la primera magistratura. Exigió y logró carta blanca para barrer impunemente a toda la izquierda; dijo con firmeza que él sabría cómo hacerlo. Se llegó al extremo de que algunos allegados del mismísimo Presidente de la República tuvieron que soportar las consecuencias de la brutal represión puesta en marcha por el coronel Selich, que orgulloso se presentaba como el hombre malo del régimen, título que le caía bien para tipificarlo como el cazador de brujas número uno. Por su oficio de torturador de indefensos hombres de izquierda, le concedieron condecoraciones y honores los "gusanos" cubanos refugiados en los Estados Unidos.

Se sostiene, sin que el aserto pueda ser comprobado ahora, que el intrínquilis de la rápida desaparición del triunvirato radica en que hubo, entre bambalinas, un pacto de caballeros entre Bánzer y Selich, mediante el cual el primero se habría comprometido a entregar al segundo el Palacio Quemado en agosto de 1973. Si realmente existió tal pacto no fue otra cosa que el preludio de una descomunal tragedia. El combatido y perseguido coronel Selich habría sido muerto por el delito de exigir a Bánzer cumpla su promesa de "caballero". El asesinato fue digno de bandoleros y no de caballeros.

Selich, después de arreglar cuentas con la oposición revolucionaria, dirigió sus fuegos contra el mismo Bánzer, pero fue vencido por los sectores castrenses y las ambiciones de los partidos políticos al servicio del fascismo, a los que se refirió el ex-rangers en el momento de su caída.

Se desempeñó como Ministro del Interior no más de cuatro meses (el 22 de agosto de 1971 juró el cargo y fue relevado el 28 de diciembre del mismo año), pero fue un lapso por demás bravo y suficiente para que ensangrentase todo el territorio nacional. Comenzó ultimando con su propia pistola a presuntos extremistas, instauró el sistema de las casas de seguridad, antros de tortura y de fusilamientos, ordenó el asesinato de políticos presos, el rastrillaje de ciudades enteras y de distritos agrarios, etc. Ya antes la CIA había importado al país la técnica de asaltar a bala los lugares de refugio de los izquierdistas, para acabar con ellos y no tener la molestia de encarcelarlos. Fue tanta la bestialidad demostrada en sus acciones punitivas por el esmirriado, acicalado y neurótico gorila, gorila cien por cien, que la Cristiana Asociación de Damas Paceñas se creyó obligada a condecorarlo. Se sabía campeón de la lucha anticomunista y anticomunismo significaba para él la eliminación física de los catalogados como seguidores del marxismo, cualquier otra forma de lucha anti extremista la clasificaba como filo-comunismo. Este su extremismo totalitario y su brutalidad lo colocaron bien pronto a la derecha del equipo castrense gobernante.

Selich era la ambición hecha hombre y su furioso anticomunismo fue puesto al servicio de esa ambición de poder sin límites. Invocaba su obra de destrucción de los núcleos foquistas para reclamar "su derecho" de gobernar a los bolivianos. Cuando fue depuesto a fines de 1971, había convertido el Ministerio del Interior en una fortaleza armada y con el apoyo de algunas unidades del ejército se aprestaba a asaltar el Palacio de Gobierno. Ya entonces Bánzer desarrolló en toda su amplitud la técnica que utilizó para desembarazarse, uno por uno y sucesivamente, de sus adversarios y de la que no estaba ausente del todo la mentalidad de Víctor Paz: rodear sigilosa y cuidadosamente al adversario, mientras crece y ramifica su influencia, para luego asestarle el golpe fatal, sólo cuando por su volumen se torna realmente peligroso. Invariablemente, en cada operación represiva se apoyaba en alguno o algunos de sus adversarios aún débiles o simplemente potenciales y no pocas veces los destruyó enfrentando a unos contra otros. Los movimientistas, los clanes castrenses de Zenteno Anaya, Adet-Zamora, etc., algunos de ellos fueron eliminados a su turno por Bánzer, se lanzaron como perros enfurecidos contra el conspirador Selich, acrecentando así el poder de Bánzer. El héroe del golpe contrarrevolucionario iniciado en Santa Cruz el 19 de agosto de 1971, el que decidió su victoria con la presencia de las tropas a su marido (todo esto era considerado hasta ese momento como algo incontrovertible),

fue denunciado como un mercenario, que exigió grandes sumas de dinero antes de pronunciarse en favor de los golpistas.

Selich nació el 8 de diciembre de 1927, en la ciudad de La Paz, de padres croatas. Educado en colegios religiosos particulares, egresó del Colegio Militar, con grado de subteniente, el año 1951. Se especializó en ingeniería militar. Por razones de sus ocasionales estudios rozó la universidad y aquí mantuvo relaciones con la juventud comunista, dato que parecen ignorar los columnistas de la prensa. En su calidad de Comandante del regimiento Rangers de Santa Cruz, tuvo activa participación en la lucha contra los focos armados de Ñancahuazú y llevaba como trofeo de guerra el reloj que había arrancado de la muñeca del Che Guevara. Muchos lo suponían un anticomunista orgánico, en realidad ostentaba la deliberada belicosidad del renegado.

El impulsivo Ministro del Interior sostenía que había acabado con los extremistas desembozados y se planteó la tarea inmediata de purgar del equipo gubernamental a los "comunistas" en cubiertos, particularmente a los movimientistas, contando en esta campaña con el respaldo de Falange Socialista Boliviana y de parte del ejército. Esta lucha "anticomunista" se convirtió en la cobertura para su activa labor conspirativa. El pretexto parecía viable porque se apoyaba en la real lucha, unas veces encubierta y otras franca, que se libraba dentro del frente gubernamental; pero, era inoportuna, esto porque la existencia del frente suponía la coexistencia de tendencias en pugna dentro de los partidos civiles y del mismo ejército, uno de los requisitos para la supervivencia del gobierno gorila y su consolidación por algún tiempo. A la larga, esta contradicción en el seno del Frente Popular Nacionalista se proyectó como factor escisionista y punto de partida de los movimientos golpistas en las filas de las fuerzas armadas.

Cuando se decretó su relevo del Ministerio del Interior, se resistió a entregar el edificio y sublevó a algunas unidades del interior del país. Esto está demostrando la medida en que su acción penetró en el ejército y la decisión de imponerse que le animaba. No puede haber la menor duda de que se trataba de uno de los enemigos más peligrosos que tenía Bánzer.

Como muchos otros conspiradores de charreteras (el gorilismo ha impuesto una especie de fuero militar, en cuya virtud los elementos uniformados gozan de privilegios incluso cuando caen en desgracia como políticos golpistas), Selich fue enviado al exilio dorado con el título de embajador en Asunción (enero de 1972). Con un pie en la escalera del avión que le iba a conducir al destierro, prometió retornar para acabar con los comunistas. A los pocos meses, el 17 de mayo de 1972, fue destituido de su cargo diplomático y denunciado como conspirador. En su respuesta, acusó en tono airado al gobierno, reveló que en su seno existían muchos enemigos del ejército. Convertido en adversario del oficialismo, fue relegado a la reserva activa del ejército.

Sus parciales hacían circular sueltos contra los comunistas incrustados en el gobierno y Selich proclamó la necesidad de volver a luchar contra el extremismo y que para necesidad eso había que derrocar a Bánzer.

“Gobierno develó complot subversivo. Murió Selich”, rezaba el titular con el que “Presencia” abrió su edición de fecha 15 de mayo de 1973. Este hecho luctuoso actuó como detonante para el estallido de una descomunal carga explosiva que fue acumulando la despótica actividad gubernamental. Dos días antes, el 12 de mayo, se produjo un tiroteo entre efectivos policiales y una pareja de miembros del ELN, en la parte alta de la ciudad. Cayeron muertas dos personas. Mónica Erlyt Osvaldo Usqui, sindicadas por los servicios de inteligencia de haber estado comprometidos en el atentado contra el coronel Quintanilla y de ser dos ex-miembros y renegados “elenos”. Siguiendo lo que era ya costumbre, todos callaron y los rumores decían tratarse de un acto de vendeta por parte de la policía. La coincidencia con la muerte del coronel Selich no deja de ser sospechosa. Las autoridades complicadas con su asesinato no se cansaron de señalar que había una acción conspirativa coordinada entre los extremismos de derecha y de izquierda. Un poco más tarde, cuando se precipitó la crisis dentro del ejército, volvió a decirse que los extremistas eran autores del suceso y que querían aprovecharse de él para retomar el poder, etc. Se hubiese o no fabricado la coincidencia ad libitum, lo cierto es que se hizo todo lo posible para utilizar la presencia de los cadáveres de los foquistas como cortina de humo para encubrir la desaparición del coronel Selich.

La muerte del ex-Ministro del Interior, del que en su momento fue el hombre fuerte dentro del gorilismo, no pudo pasar desapercibida y precipitó un conflicto político de grandes proporciones, no sólo se evidenciaron las tendencias en pugna dentro de las fuerzas armadas, junto con sus vinculaciones civiles, sino que afloró y -sorpréndase el lector- escandalizó a todo el país, incluidos demócratas de todo pelaje, nacionalistas y hasta adictos al régimen, la brutalidad y los métodos de terror utilizados en la campaña represiva contra los elementos políticos disidentes. Además, salió a primer plano imponente toda la debilidad interna del régimen y el movimiento defuerzas centrífugas que se agitaban incesantes dentro de él. Las protestas airadas y la repulsa de los métodos policiales vigentes estaban demostrando que las modalidades fascistas de gobierno se estaban agotando en su práctica diaria y convirtiéndose en obsoletas.

Los bolivianos estaban acostumbrados a que un comunicado de circunstancias emitido por las autoridades pusiese punto final a los asesinatos de los opositores (asesinatos consumados ya en las guaridas de los izquierdistas o en las mismas celdas policiales; caer preso significaba poner en serio riesgo la cabeza) y luego podía correr por los cauces, que desease el rumor popular. Comentar y sacar conclusiones constituían un grave delito. El totalitarismo sirvió muy bien condimentado el alimento cotidiano para la mente de los ciudadanos y autoritariamente pretendió imponer un rígido marco a la imaginación.

La muerte de Selich fue utilizada como pretexto para la rebelión contra este estado de cosas. Lo normal era que el verdugo hiciese firmar confesiones falsas a las víctimas, para que estos papelitos sirviesen de justificación ante la opinión pública, pero en la nueva coyuntura las víctimas obligaron al verdugo a confesarse públicamente, a desnudarse. Esto era ya un tremendo castigo asestado a los perdonavidas del Ministerio del Interior.

Para no perder la costumbre, el Ministerio del Interior lanzó un escueto comunicado, seguro de que todos dirían amén: "Los servicios de inteligencia y seguridad del Ministerio, detectaron el ingreso clandestino del ex-coronel Andrés Selich Chop quien tomó varios contactos en algunas ciudades del país. En la ciudad de La Paz, realizó también reuniones tendientes a la organización de un plan subversivo para derrocar al gobierno, aprovechando el anunciado viaje al exterior de S.E., el señor Presidente de la República.

"Hoy, después de medio día fueron sorprendidos algunos conjurados, los mismos que serán sometidos a la jurisdicción de los tribunales respectivos, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.

"La Paz, 14 de mayo de 1973".

Se luchó larga y tenazmente para conseguir que los presos políticos fuesen juzgados por los tribunales ordinarios de justicia y así evitar la desesperante perspectiva de perder la vida en alguna prisión el momento menos pensado. Se trató de una elemental reivindicación democrática. El anterior comunicado fue redactado para dar la impresión de que las autoridades policiales obraban dentro del marco de la ley y del respeto a la "dignidad humana", estribillo que se recitó en todas las conferencias de prensa. El cadáver del coronel Selich, tendido en el piso de cemento de la morgue, desenmascaró elocuente e incontrovertiblemente la impostura.

Aproximadamente al medio día del 14 de mayo, la policía rodeó y atacó una casa situada en la avenida Busch de Miraflores, donde se encontraban reunidos el coronel Selich y otros elementos uniformados y civiles, según las autoridades conspirando, aunque no se dijo si trataban de desencadenar un golpe de Estado o simplemente de prepararlo, como parece serlo más evidente. Como consecuencia fueron aprehendidos los coroneles Miguel Azurdu y Estenssoro, Juan Luis Gonzáles y Natalio Morales, el teniente Miguel Azurduy Salinas, el capitán Carlos Casso Michel y los señores Gustavo Navarro (hijo de Marof) Roger Bazán Roca y Remberto Silva Mariscal. Otros seis implicados lograron huir a la Argentina y uno de los perseguidos, el ex-alcalde de Bermejo Armando Moreno, murió ahogado en el río Bermejo.

Inmediatamente ganó las calles y se apoderó de gran parte del ejército el insistente rumor de que el Coronel Selich había sido asesinado en manos de los organismos de represión, siendo responsables el Presidente de la República y el Ministro del Interior. Este último, visiblemente aturdido por el enorme peso de los ocurrido, sólo atinó a dar una explicación pueril: "Como es de conocimiento público -dice el primer comunicado del gobierno- a primeras horas de la tarde del día de hoy, fuerzas del orden irrumpieron en una casa situada en la zona de Miraflores, sorprendiendo a un grupo de conspiradores encabezados por el coronel en retiro Andrés Selich, quien había ingresado clandestinamente al país, el grupo fue detenido sin haber ocurrida ningún hecho de sangre. El coronel Andrés Selich y otros detenidos fueron esposados y conducidos al Ministerio del Interior. Más tarde, por razones de seguridad, fue trasladado a una dependencia del ministerio en la región de Calacoto.

“En circunstancias en que el coronel, Selich subía las escaleras al segundo piso de la casa, presa de una crisis nerviosa trató de fugar. En ese momento se precipitó por las gradas, no pudiendo evitar o aminorar la caída por tener las manos esposadas. No habiéndose logrado que recuperara el conocimiento, fue informado de este hecho el Ministro del Interior que se hallaba en su despacho, el que a su vez dio parte al Excelentísimo señor Presidente de la República, quien mandó de inmediato a su médico personal para que atendiera al detenido. Lametablemente, a su llegada el facultativo comprobó que el coronel Selich había fallecido.

“El Ministro del Interior ha dispuesto que se practique la autopsia de ley, que deberá ser llevada a cabo por médicos forenses y a la cual han sido invitados otros profesionales médicos de reconocido prestigio.

“Las conclusiones de la autopsia serán dadas a publicidad y los restos mortales entregados a sus familiares”.

Lo anterior es por demás sugerente y permite creer que fue redactado por un pésimo abogado, como seguramente es el ex-Ministro Alfredo Arce Carpio, con la finalidad exclusiva de dejar jalonadas una serie de coartadas que ayudarían a escurrirse al asesino. El Poder Ejecutivo no tenía la fuerza suficiente para limitarse simplemente a informar al país acerca de la eliminación física de un político opositor. Tuvo que explicar satisfactoriamente lo sucedido, justificarse. Por primera vez se habló de que el Ministerio del Interior utilizaba “casas de seguridad” para arrancar a la fuerza declaraciones a determinados elementos, lo hizo. porque quería evitar que se descubriese que Selich dejó de existir en la casa del propio Ministro del Interior. La anunciada autopsia se convirtió en irrefutable prueba contra el gobierno.

El acta legal de la autopsia presenta la conclusión de que el deceso de debió a “traumatismo en la cara anterior de base de tórax y parte superior del abdomen con múltiples fracturas costales, desgarró y estallido del hígado, hemorragia consiguiente”. La muerte por ocasional accidente ya no servía como explicación.

Un titular a siete columnas y con tinta roja en la página ocho del vespertino “Nueva Jornada” (La Paz, 18 de mayo de 1973) decía: “Una brutal paliza provocó la muerte de Andrés Selich Chop”. Al filo de la media noche del 17 de mayo, el Ministro del Interior leyó, en conferencia de prensa, su confesión: “Esta conspiración (de Selich) habría sido hábilmente aprovechada por la extrema izquierda, con el riesgo de la total destrucción de la institución tutelar de la nación, así como el enlutamiento de muchos hogares bolivianos. Mi deber inexcusable como Ministro del Interior era adoptar las medidas para neutralizar la conspiración, detener a los implicados y establecer sus ramificaciones”⁶. Este párrafo del documento estaba destinado a calmar la tremenda inquietud reinante en los medios castrenses y amedrentarlos con el fantasma de una izquierda dispuesta a destruir a todo el ejército.

La información prosigue: Habiendo sido el Cnel. Selich, en otro tiempo, participante del régimen nacionalista y ex-oficial de las Fuerzas Armadas, era obvio que yo debía

6- “Muerte de Selich se aclara”, La Paz, 18 de mayo de 1973.

tener el mayor cuidado en preservar su seguridad personal. Hacer que los organismos de inteligencia lograran de él, como principal protagonista de la conspiración, informaciones complementarias a las que ya poseíamos”.

El Ministro del Interior en ejercicio declaró solemnemente que su deber era nada menos que preservar la vida del detenido, esto por las varias razones que puntualizó y que buscaban subrayar su naturaleza de incondicional servidor de las fuerzas armadas, pero el prisionero se convirtió, virtualmente en manos del gobernante, en cadáver. La explicación sobresale otra vez por su puerilidad: los agentes encargados de su custodia y de “arrancarle” las informaciones complementarias, no cumplieron las instrucciones dadas por él. Olvidó señalar que esos agentes eran, si se toma en cuenta su conducta normal, producto del monstruoso aparato represivo montado por el gorilismo y la CIA, que les ha enseñado a lograr informaciones a golpes y con ayuda de la tortura y, también a no alarmarse si algunos presos dejan de existir en los espeluznantes interrogatorios. Arce Carpio, que no se cansó de relieves que era hombre de derecho y cristiano, demostró, sin quererlo, que no era más que un aditamento del aparato represivo. Un hombre de derecho y respetuoso de la dignidad humana no podía conformarse con ser Ministro de un gobierno que puso en vigencia la Constitución Política de manera condicional y que adoptó como norma el retener indefinidamente a los presos en sus mazmorras antes de pasarlos a los tribunales ordinarios.

En el lapso de pocas horas el Ministro del Interior presentó ante el país dos versiones diferentes y contrapuestas sobre la muerte del coronel Selich, habiendo indicado una y otra vez que no tenía más norma como gobernante que decir la verdad y nada más que la verdad, por muy amarga que esta fuese. Todo permite suponer que en ambas oportunidades no dijo la verdad y que se esmeró en señalar pistas falsas, a fin de que no se descubriese a los verdaderos autores del crimen. El gran guiñol pretendió justificar sus contradicciones con el argumento de que fue engañado por sus subalternos y entregó a los periodistas copias de los informes arrancados a los agentes Zambrana, Betancourt y Cassis, en los que ellos se declaraban autores materiales de la muerte de Selich: “Ante la negativa del detenido para narrar la forma en que había ingresado a Bolivia y las personas que habían intervenido en la conspiración juntamente con él, le propinamos algunos golpes, sin el ánimo de causarle mayor daño y sí para amedrentarlo y hacer que de ese modo nos respondiera al interrogatorio. El detenido cayó al suelo y lo levantamos y estando ya recuperado lo volvimos a interrogar... Luego se negó a seguir hablando ... A esta negativa uno de nosotros se acercó y le propinó un solo puñete en el costado derecho, a consecuencia del cual volvió a caer, perdiendo esta vez el conocimiento. Cuando vimos que no recuperaba y su rostro adquiría palidez, alarmados comunicamos de inmediato el hecho al teniente Moyano del Ministerio del Interior... En este informe queremos expresar nuestro dolor y poner en evidencia que sólo queríamos obtener una declaración del coronel Selich y para lo cual hicimos uso de la fuerza, dando algunos golpes al detenido. Jamás nuestra intención fue la de victimario, ni siquiera causarle lesiones o heridas que lo invalidaran, deformaran o causaran algún daño mayor a su persona”. Los familiares de los agentes que firmaron la declaración han manifestado públicamente que la misma les fue impuesta por el Ministro del Interior Arce. Este último acotó: “Todavía

este informe no es del todo satisfactorio, puesto que no explica la fractura de las costillas. Sin embargo, es preciso puntualizar que la causa real del fallecimiento debe estar en la fragilidad del hígado en avanzado estado de cirrosis" (esta malévola insinuación recuerda la inveterada afición de Selich por el alcohol).

El Ministro anunció que los "tres agentes responsables" serían pasados a la justicia ordinaria. El Presidente Bánzer, buscando acallar las protestas y rumores tendenciosos ordenó se constituyera una "comisión investigadora", conformada por representantes de numerosas instituciones, intento que fracasó porque la iglesia, los periodistas y abogados se negaron a enviar a sus representantes, con el argumento de que en el país existían tribunales de justicia para investigar el caso.

La implicación política más importante de la muerte de Selich fue la reacción castrense, reacción de repulsa sin atenuantes frente a la conducta gubernamental y a los excesos cometidos por los "políticos". Se afirmó la tendencia del ejército a recobrar su independencia con relación al mismo gobierno y al Frente Popular Nacionalista, que su desarrollo no podría menos que convertir a las fuerzas armadas en árbitros de la situación política tambaleante y en candidatos seguros al golpe de Estado. La crisis fue descargada sobre una víctima de relieve: el candidato a la Presidencia de la República y comandante en Jefe general Joaquín Zenteno Anaya. Bánzer aprovechó la lección, sin poner orden en el ejército y sin su control total no podría estar seguro de permanecer por mucho tiempo en el Palacio Quemado.

A la presión castrense se sumó la protesta unánime de la prensa, de la Iglesia, de los partidos políticos y hasta de los sindicatos, por los brutales métodos de represión utilizados desde agosto de 1971. Inicialmente pareció, es lo que se desprende de las publicaciones de prensa, que el Alto Mando y los ministros militares ratificaron su confianza al Presidente y al mismo Ministro de Gobierno, señalado por la opinión pública como uno de los autores del asesinato del ex-ranger Selich. El que hubo sido necesario destacar comisionados para visitar las guarniciones del interior y explicar lo sucedido, demostró las dimensiones que adquirió la protesta castrense. Zenteno Anaya, incapaz de desconocer la presión salida de los cuarteles y seguro de que podía apoyarse en ella para satisfacer sus menguadas ambiciones, se rectificó públicamente y lo hizo en tono airado. No sólo que pidió (20 de mayo) drásticas sanciones para los responsables, sino que puso en tela de juicio la vigencia del equipo ministerial. La suerte del Ministro Arce estuvo sellada desde el momento en que la Policía Boliviana, en la noche del 18 de mayo, pidió su relevo (subrayando su pedido con una especie de amotinamiento) por ser el causante del enfrentamiento entre la policía y el ejército ⁷. Rápidamente se dibujó en el horizonte la perspectiva de la constitución de un gobierno puramente militar para sustituir al régimen cimentado en el Frente Popular Nacionalista. Zenteno estaba seguro de haber encontrado un excelente "pie de amigo" y arremetió impetuoso: "Las Fuerzas Armadas no intervienen en política ni forman parte del FPN, su nombre está siendo utilizado desaprensivamente por algunas personas, sin tener en cuenta que la Ley Orgánica de la institución prohíbe terminantemente su referencia, cosa que mi Comando hará cumplir estrictamente"

7- "Movilización militar en torno a Palacio causó alarma anoche", La Paz, 19 de mayo de 1973.

⁸. El anuncio del desahucio del régimen encabezado por Bánzer fue expresado así: "Añadió que la institución armada está observando la vigencia del régimen 'mientras cumpla sus compromisos contraídos anteriormente, de los cuales en fecha pasada y en documento de las Fuerzas Armadas, ya hicieron notar muchas transgresiones que también conoce la opinión pública". Señaló los casos de inmoralidad, nepotismo, demora de planes de desarrollo, sectarismo político y abandono de las metas prioritarias en que incurrió el FPN.

7

El alto mando y el FPN

La actitud de la jerarquía castrense con referencia al Frente Popular Nacionalista (MNR, FSB, este último con el respaldo de los barrientistas que se sumaron a ella, que muestra una curiosa curva de desarrollo, se convirtió en una de las claves para explicar la evolución del gobierno.

En la constitución del Frente estuvo presente el ejército, representado por sus más altos personeros y entonces era cosa de todos los días escuchar hablar del pacto político concluido entre las fuerzas armadas, el MNR y FSB. En los Estatutos del FPN aparece la firma del general Zenteno Anaya, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y en uno de sus párrafos se lee: "Las fuerzas armadas de la Nación, como órgano responsable de la integridad y seguridad nacionales, coadyuvan a la acción del Frente Popular Nacionalista en defensa de la estabilidad institucional y los derechos ciudadanos". Pero, hay algo más, la jerarquía castrense formaba parte de los organismos dirigentes del FPN, es decir, estaba orgánicamente dentro de él. El artículo cuarto de los Estatutos establecía: "El Consejo Nacional es la autoridad superior de conducción y está constituido por el Presidente del gobierno nacionalista, coronel Hugo Bánzer S. (la permanencia en el Palacio Quemado le permitió convertirse en general de brigada, G. L.) quien la presidirá; el jefe del MNR, doctor Paz Estenssoro, el jefe de FSB, doctor Mario Gutiérrez; el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el sub-jefe del MNR y el sub-jefe de FSB". Los partidos políticos firmantes del contubernio no pusieron reparos a esa virtual preeminencia de los elementos castrenses en el seno del FPN. El esquema se repite en todas las instancias de dirección. El artículo noveno, al referirse al Comité Ejecutivo, dice: "estará constituido por cuatro representantes de FSB, cuatro del MNR y dos coordinadores de las Fuerzas Armadas". De manera deliberada se asimiló a las Fuerzas Armadas a la condición de partido político. Con todo, estas consideraciones no agotan el problema.

A esta altura del relato aparece evidente que el general Bánzer llegó a la Presidencia y se convirtió en el carnicero del pueblo boliviano y particularmente de los trabajadores, no por sus atributos y taras personales, sino por representar, acaso de una manera fortuita, poderosas tendencias totalitarias dentro del ejército y particularmente de

8- "FF.AA. observan errores del FPN", en "El Diario", La Paz, 23 de mayo de 1973.

la jerarquía castrense. Esto explica en gran medida por qué las fuerzas armadas aparecieron dentro de un organismo político como el FPN.

Los desaciertos iniciales del FPN, el estrepitoso fracaso de los planes gubernamentales encaminados a imponer la paz social y la estabilidad jurídica y política, las apenas disimuladas pugnas entre falangistas y movimientistas, que tienen inmediato reflejo en las filas del ejército, generando en su seno a las llamadas tendencias institucionalistas, que se fueron acrecentando cuantitativamente con el correr del tiempo. Los institucionalistas hicieron política activa detrás de la careta del apoliticismo y propusieron que el ejército tuviese su pureza y no se comprometiese con los trajines del Frente o con los desaciertos del gobierno. Se empujaron buscando colocarse por encima del país y de sus discrepancias internas y pretendiendo officiar de árbitros de las pugnas y diferencias que todos los días se presentaban entre los intereses de la metrópoli imperialista y los de los empresarios bolivianos. Su felicidad habría sido grande si hubiesen logrado plasmar un gobierno de corte bonapartista, esto sin dejar de defender los privilegios de la derecha criolla y la armoniosa coexistencia con los Estados Unidos.

Si Selich, que debe ser considerado como expresión de una determinada corriente castrense, imponía a golpes su inflexible e irreflexiva política contrarrevolucionaria, Bánzer, contrariamente, se distinguió por haber ejecutado la misma política a través de oscilaciones y de sinuosos acomodamientos a las presiones que, desde diversos ángulos, se ejercitaban sobre él. Estos variados modos de imposición del fascismo determinaron que Selich y sus seguidores se colocasen a la derecha del derechista Bánzer. Este último no pudo menos que mostrarse sensible a las exigencias de independencia de ciertos sectores militares y por esto el 31 de diciembre de 1971 dijo: "Las Fuerzas Armadas de la Nación son el respaldo institucional del Gobierno. No forman parte del Frente Popular Nacionalista, ni constituyen un partido político"⁹(9).

Esta tendencia hacia la independencia del ejército comenzó a perfilarse cuando se delimitó con referencia al Frente Popular Nacionalista e invariablemente ha creído de su deber puntualizar su solidaridad y su respaldo al general Bánzer convertido en Presidente de la República. Quiérase o no, se trató de una diferenciación política con el régimen imperante, sólo que, por oportunismo, esa diferenciación pareció referirse exclusivamente a su basamento civil, esto porque era el más vulnerable. El fortalecimiento y evolución de esta tendencia la llevó a entrar en conflicto franco, no encubierto como se patentizó durante mucho tiempo, con el mismo general Bánzer. Muchos dirán que la tendencia indicada no era otra cosa que la suma de ambiciones de algunos elementos uniformados que se sentían presidenciables. Seguramente que ese factor existió y no es del todo despreciable para los análisis políticos, pero no puede explicar por sí solo la evolución seguida por las fuerzas armadas. Una serie de fenómenos sociales de dimensión nacional contribuyeron a fisonomizarla.

Cuando en 1979 se enjuició personalmente a Bánzer como responsable del gobierno por él presidido se incurrió en una incongruencia política. El responsable era el ejército

9- Cnl. Hugo Bánzer S., "Mensaje del año", La Paz, 1971.

y no un general. Como la caricatura democrática para poder existir dependía de la venia del Alto Mando, todas las tendencias, incluyendo a la socialista burguesa, no se atrevieron a sentar en el banquillo del acusado a las fuerzas armadas. El juicio de "responsabilidades", la única actuación del Legislativo que concitó algún interés, concluyó en una vulgar pantomima.

En la medida en que los explotados se levantaron contra el Gobierno fascista (lo que importó el repudio al Frente Popular Nacionalista), casi inmediatamente después de que creía haberse consolidado, se patentizó el fracaso de éste como régimen totalitario, destinado a imponer orden y trabajo forzado, al margen del ordenamiento jurídico del país y utilizando cualesquier métodos. El ejército, actuando como partido político, dio de inmediato su respuesta a esta frustración y de manera titubeante propuso determinadas soluciones en el plano gubernamental. Este hecho permitió el florecimiento de las tendencias institucionalistas castrenses.

Fue suficiente que el oportunista Zenteno Anaya hablase fuerte para que se produjese la trizadura del gabinete ministerial: Arce Carpio, sindicado como uno de los autores de la muerte de Selich, fue sustituido por un uniformado en el Ministerio del Interior; se organizaron comisiones investigadoras de "alto nivel", para dar la impresión de que las autoridades se sometían dócilmente a la ley (parecieron olvidar que la única ley que existía era la voluntad despótica del dictador). Zenteno creyó llegada su hora: soñaba con dar el salto al poder, apoyándose en la real efervescencia que la muerte de Selich produjo en el ejército. Desahució al gabinete y al Frente Popular Nacionalista, llevando así a su punto extremo los postulados de los institucionalistas. Esa ambición sin límites cayó derrotada al no encontrar el consecuente respaldo de los institucionalistas, que por ser tales desconfiaban del taimado general Zenteno que ha dejado el testimonio de su aventura. Hizo mutis por el foro, pero antes tuvo el cuidado de hacer una respetuosa reverencia a Bánzer, una buena forma de cuidarse las espaldas: "Tengo el honor de dirigirme a V.E. -le dice Zenteno a Bánzer, en su carta de renuncia de Comandante en Jefe-, para expresarle que lamento la interpretación distorsionada que se ha dado a las declaraciones formuladas por mi persona..., las mismas que fueron enunciadas con el propósito de salvaguardar a S.E. y velar por los fueros de la Institución.

Infortunadamente, tales declaraciones -tal cual manifestó S.E.-, han causado inquietud y desconfianza en el Alto Mando en torno a mi persona y ocasionando la censura de los Comandantes de pequeñas unidades de la Guarnición, no obstante haber estado inspiradas en un amplio plano de sinceridad y sanos propósitos para despejar el clima de incertidumbre surgido a consecuencia de informes contradictorios expresados en diferentes guarniciones de la República, a raíz de los últimos acontecimientos".

Esta lucha de rivalidades y ambiciones culmina con la misteriosa desaparición de Zenteno Anaya, que cayó por obra de unos mercenarios en una silenciosa y casi oculta avenida de París. Murió, a los 53 años de edad a la una de la madrugada del día 11 de mayo de 1976. Cuando se desempeñaba como Comandante de la VII División del ejército boliviano, en 1967, luchó contra el Che y sus seguidores. Corrió el rumor de que también Reque Terán, tan vivamente interesado en sepultar para siempre los

secretos que poseía el opositor de Bánzer, estaba complicado en el asesinato.

La crisis que estamos comentando era expresión de que se ingresó a un período conflictivo entre el Presidente Bánzer y el ejército. Aquel estaba ya lejos de limitarse a ser un simple firmante y tampoco se conformaba simplemente con que las fuerzas armadas le enviaran ministros de Estado. Existen pruebas inequívocas en sentido de que se empeñó por conformar su propio grupo, una camarilla que le obedeciese únicamente a él. Los mal llamados ministros independientes eran cien por cien banzeristas. El caso de Arce Carpio ilustra muy bien acerca de cómo el Presidente supo aglutinar elemento humano alrededor suyo. El personaje creció políticamente bajo el ala protectora del general Bánzer, que lo llevó a su lado, le dio tareas, le ayudó a cobrar volumen hasta que ... el 23 de abril de 1973 lo hizo Ministro del Interior en sustitución del todopoderoso Adet Zamora. Arce no era un coloso, ni una potencia con efectivos que le respaldasen, era únicamente un incondicional del Presidente. Como ministro de Estado siguió siendo el obsecuente de siempre y se limitó a hacer lo que le ordenó su amo y así cayó en buena ley, por eso pudo, en el momento de su derrumbe, lamentarse de la siguiente manera: "El destino me ha jugado una mala pasada, pero me voy tranquilo". Agradeció a nombre de su esposa y de sus hijos, la amistad que les brindó el Primer Mandatario. Incluso en momentos tan amargos para él, siguió cumpliendo los encargos de Bánzer: apuntando a Zenteno, indiscutiblemente, dijo casi entre lágrimas: "Ahora que he dejado de ser ministro del Interior, señor Presidente..., el coronel Selich no ha venido a Bolivia a conversar con sus amigos, a jugar ajedrez o a visitar a su familia. Vino a conspirar señor Presidente, con alguien. Ese alguien es ahora el que el señor ministro del Interior debe establecer. Sensiblemente el fallecimiento del coronel Selich ha cubierto con cortina de humo y para evitar esa cortina de humo yo salgo del Ministerio del Interior y me la llevo conmigo" ¹⁰.

Desde el llano, Arce Carpio siguió cumpliendo las funciones de escriba del general y se convirtió en gestor de sus negocios.

El ejército impuso como Ministro del Interior al coronel Walter Castro Avendaño y precipitó la caída del "doctor" Arce, uno de los indiscutibles predilectos del Presidente Bánzer. Dos potencias: las fuerzas armadas y su "Capitán General" se mostraron los dientes. Pero no todo fue pérdida para Bánzer, pudo eliminar, apoyándose en los propios sectores castrenses y en la mayoría de los partidos políticos componentes del FPN, a uno de sus más serios competidores, el general Zenteno.

En síntesis: la debilidad del gobierno Bánzer en ese momento estuvo determinada por dos factores: la oposición de la clase obrera y de las masas populares (que cada día era más poderosa políticamente y más maduras, firmemente convencidas que su felicidad y liberación pasaba por el aplastamiento del gorilismo; y, por otro lado, la creciente tendencia castrense que buscaba independizar a las fuerzas armadas del esquema gubernamental para poder convertirse, como consecuencia mecánica de su propio desarrollo ascendente, en amo indiscutido de Bánzer y en árbitro supremo de la política. No eran, ciertamente, tendencias coincidentes, sino fuerzas en constante

10- "Hoy", La Paz, 22 de mayo de 1973.

pugna que convirtieron la política en mas proceloso. Bánzer se encaminaba, empujado por las poderosas fuerzas de la historia, a zozobrar inevitablemente en esas aguas turbulentas. Hubiera sido tonto exigir que entonces se señalen plazos y circunstancias concretas en los que debería consumarse el naufragio, mucho más si se tiene en cuenta la ductilidad en la maniobra que ha demostrado poseer el gorila Bánzer. Lo evidente es que ni él, ni los institucionalistas podían ignorar, al consumir sus maniobras, a las masas, que nuevamente estaban presentes en el escenario político.

Los acontecimientos que estamos comentando enseñan que, las tendencias castrenses institucionalistas y las otras, junto a los ambiciosos que pueden siempre apoyarse en ellas, tienden, en una situación de aguda crisis gubernamental, a cristalizar un régimen puramente militar. Los dirigentes del Frente Popular Nacionalista hicieron campaña alrededor de las razones por las cuales no convendría al país una junta militar. Todos sus argumentos podían reducirse al siguiente: la junta militar permitiría a los extremistas de izquierda destrozar a las fuerzas armadas. En 1980, cuando la tambaleante y ficticia democracia criolla cayó en descrédito, surgió un grupo militar, bajo el rótulo de "Pueblo", proponiendo un gobierno militar, como respuesta a una imperiosa necesidad planteada por la historia. ¹¹.

El fracaso de Zenteno -como hemos indicado- fortaleció momentáneamente a Bánzer y le permitió lograr el monopolio del control sobre el ejército. En los inicios de la maniobra actuaron los jóvenes del MNR y FSB, quienes dócilmente juraron fidelidad al "caudillo" y le expresaron sus deseos de morir por su honor y su salud. Seguidamente Bánzer ajustó los puestos claves dentro del ejército y seguro como estaba de que sin el control directo sobre este organismo, de influencia política decisiva y de gran potencia represiva, no era posible gobernar, no tuvo el menor reparo en consumir un golpe de mano que le permitiese convertirse en su amo indiscutido. Bánzer dictó un decreto autoproclamándose Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. En alguna forma tuvo que justificar el rudo golpe asestado a la independencia política del ejército, a la limitación de sus movimientos en este terreno, y no le fue difícil encontrar el pretexto: "Que la actual organización del Alto Mando no se encuentra debidamente adecuada a la realidad institucional de las Fuerzas Armadas ni a la dinámica introducida en las instituciones fundamentales del Estado", etc. Este amontonamiento de palabras y otros que le siguen en la parte considerativa del mencionado decreto no dicen nada. El artículo primero y único reza: "El Presidente de la República y Capitán General de las Fuerzas Armadas de la Nación, asume el Comando en Jefe de las mismas, en forma transitoria, mientras se proceda a una definición en las estructuras de mando de la Institución Armada y a la redacción de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas" ¹². Primero el golpe de fuerza, después la promesa de una nueva Ley Orgánica del ejército. Para consolar a los tontos Bánzer dijo que su dictadura sobre el ejército sería transitoria; se atribuyó la tarea de modificar la estructura del ejército y faccionar una nueva Ley Orgánica.

11- "El Diario", La Paz, 27 de enero de 1980.

12- "Bánzer asumió comando en Jefe de las FF.AA.", en "Presencia", La Paz, 29 de mayo de 1973.

El Presidente de la República como Capitán General del ejército, podía designar algunos altos cargos de la jerarquía castrense, fuera de esta atribución era, hasta entonces, más un título honorífico que otra cosa. Ni siquiera durante la guerra del Chaco, el Capitán General pudo, tratándose de las operaciones bélicas, supeditar a su voluntad al Alto Mando. El Poder Ejecutivo, vale decir, el Presidente de la República se relacionaba con el ejército a través del Ministro de Defensa. Teóricamente, las atribuciones y rol de las fuerzas armadas dentro del mecanismo estatal estaban señalados por la Constitución Política del Estado y no por las reacciones del momento del Presidente de la República. Por voluntad de Bánzer todo este esquema quedó profundamente subvertido. Se impuso una política vertical, una sola voluntad desde la Presidencia de la República hasta el Alto Mando del ejército. El Ministro de Defensa fue relegado a un segundo plano, esto porque personalmente el Presidente de la República dirigía a las fuerzas armadas. Estas, como institución, tenían o podían alcanzar a tener independencia con relación al Presidente y su equipo ministerial, tenían la posibilidad de imponer ministros, etc, como se vio en el conflicto político mencionado. Esa independencia fue perdida, el ejército tuvo que expresarse por intermedio del Presidente de la República.

El Capitán General Bánzer tomó el control total y efectivo de las Fuerzas Armadas, no después de un valeroso asalto frontal, sino por medio de una maniobra artera. Llegó a ser Capitán General, Comandante en Jefe del Ejército y, por añadidura, jefe supremo del FPN, Santísima Trinidad fascista, elevó a su punto más alto la naturaleza totalitaria del régimen imperante. Fue acentuado uno de los rasgos fascistas de la criatura nacida de la contrarrevolución de agosto de 1971. Bánzer se fue asemejando a Franco.

La discusión acerca de si las fuerzas armadas eran o no parte integrante del oficialista Frente Popular Nacionalista, pareció haber sido resuelta por su propio peso. Si el Comandante en Jefe del ejército era, al mismo tiempo, jefe supremo del Frente, no podía ya argumentarse que la institución castrense permanecía al margen del contubernio sellado por FSB y el MNR. Todo esto está bien como ejercicio discursivo. La verdad es que una gran parte de las fuerzas armadas concluyeron rebelándose contra esa forzada incorporación al odiado Frente. Seguramente el usurpador del poder creía haber anulado una de las tendencias más peligrosas que animaban grandes capas militares: la tendencia hacia la independencia y a actuar políticamente por encima del Presidente de la República, para poder reemplazarlo el momento menos pensado. La jerarquía castrense, al menos momentáneamente, se vio impedida de actuar como toda una potencia frente al Poder Ejecutivo; como quiera que su Capitán General y su Comandante en Jefe eran dos caras de la misma cabeza, quedó reducida a la triste condición de muñequillo totalmente dependiente de la voluntad del titiritero. Para redondear las características totalitarias del régimen hasta la policía fue intervenida militarmente, buscando evitar así cualquier brote de amotinamiento, respuesta inmediata al intento de revuelta sucedido el día 17 de mayo al amanecer.

Una cosa fueron los sueños dictatoriales de Bánzer y otra muy distinta la realidad social, que emergía debidamente modelada por los antagonismos clasistas. Ya

hemos indicado que las tendencias castrenses institucionalistas fueron una respuesta democratizante al hundimiento de la política banzerista (que no fue más que una forma particular de materialización de la voluntad imperialista yanqui) frente al nuevo ascenso de las masas bolivianas, que, en último término, definieron la naturaleza del momento político. La maniobra de Bánzer pudo neutralizar temporalmente a las tendencias militares institucionalistas, pero no eliminarlas físicamente, de la misma manera que tampoco pudo arrancar de cuajo a la izquierda revolucionaria.

8

La presencia de las masas

Fueron las fuerzas militares las que precipitaron la crisis política citada y también ellas las que señalaron el camino de las soluciones. Esto pese a que las masas supieron manifestarse estarse de las maneras más diversas, pero no aun como decisiva, lo que es ya sugerente, sobre todo si tenemos en cuenta lo sucedido a fines de 1972 y principios de 1973.

Las masas arremetieron, durante la crisis, alrededor de un eje: la defensa de las garantías democráticas, siguiendo así la línea que venían desarrollando desde tiempo atrás. Es significativo el que ciertas capas militares y civiles derechistas hubiesen logrado aprovecharse de ese empuje para sus propios fines, que ciertamente eran y son contrarios a los de las mayorías. La derecha democratizante se presentó envalentonada: habló en voz alta de elecciones, de garantías para sus actividades (la alianza PDC-PRA y el minúsculo partido de los generales llamado Social Demócrata llenaron las páginas de los periódicos con solicitadas en las que demandaban una junta militar y elecciones inmediatas), etc.

Las garantías democráticas pueden ser defendidas desde la derecha y desde la izquierda (el oficialismo dijo durante la crisis política que existía un acuerdo entre ambos extremos), pero la perspectiva con la que se formulan esos planteamientos varía radicalmente ya vengan de la rosca y de los sirvientes del imperialismo o bien de la clase obrera y sus aliados. En la lucha diaria muchas veces los límites entre arribas actitudes parecen esfumarse, esto se debe a que uno de los extremos pierde, momentáneamente o por un lago período, sus objetivos estratégicos. Durante la etapa que analizamos y también después las masas aparecieron sin perfiles claros y propios, en cierta medida las demandas parecían no diferenciarse de lo que dijo e hizo la derecha; el desarrollo posterior de los acontecimientos obligó a las necesarias diferenciaciones. Los obreros actuaron como si no tuviesen objetivos políticos propios, como si no poseyesen salidas gubernamentales acordes con sus intereses. Esto parece estar en contradicción con lo sucedido a fines de 1972, cuando los explotados se presentaron en el escenario político con inconfundibles rasgos clasistas.

La crisis políticas futuras probaron que los grupos militares, apoyándose o no en determinados sectores políticos civiles, buscaron imponer variaciones al esquema gubernamental dentro de las grandes líneas fijadas por el gorilismo después de 1971.

Por lo menos la propaganda porista dijo con claridad que se esperaba un cambio de guardia en el Palacio Quemado (que las masas tendrían todavía que pasar por esa experiencia) bajo la bandera de la forzada "democratización" del gobierno; que cualquiera que fuese el grupo golpista se vería obligado, para justificar su conducta, a rectificar la línea seguida por Bánzer, democratizándola en alguna medida. Por momentos esta tesis apareció rectificadas. Menudearon los grupos militares que, enarbolando la bandera de la acentuación de la lucha anticomunista, llegaron al extremo de propugnar la purga de los elementos movimientistas de las cumbres gubernamentales. Esta tendencia se prolongó hasta algunas capas de los partidos oficialistas. Frente a tal agravación de la tendencia derechista, apareció como una novedad un general Bánzer que se dio modos para llenar de contenido fascista atenuado el rótulo de las reivindicaciones democráticas.

Se dijo, desde la izquierda, que las masas deberían estar prestas para sacar toda la ventaja posible de las crisis por las que necesariamente pasaría el gobierno gorila. Esta generalización careció de contenido. Para que ese aprovechamiento de la crisis fuese posible no era suficiente, conforme enseñó la experiencia, que las masas actuasen, sino que no se apartasen de la gran línea de la independencia clasista (no hay independencia clasista si no existen soluciones políticas propias propugnadas por el proletariado), lo que importa que la lucha diaria, y también la desarrollada alrededor de la reconquista de las garantías democráticas deben subordinarse a la estrategia de la clase obrera. Este planteamiento actualizaba la necesidad de vigorizar al partido revolucionario. Ni duda cabe que el funcionamiento y fortaleza del Frente Revolucionario Antiimperialista eran indispensables para la victoria revolucionaria; un FRA viviente y poderoso supone un partido revolucionario vigorosamente estructurado y enraizado en las masas.

9

La clase media

El otro triunviro, el general Jaime Florentino Mendieta, se conformó con jugar papeles de segundo orden, de vivir en paz como la sombra del Presidente Bánzer.

Desde el primer día, el gorilismo buscó apoyo popular y consiguió arrastrar a capas considerables de la clase media, fue su base social y el punto de apoyo para la ejecución de algunas de sus primeras medidas. Más, este apoyo se vio cuantitativamente limitado porque necesariamente tuvo que arremeter contra los sectores urbanos ultraizquierdistas, conformados básicamente por la clase media y por sus capas más interesantes (estudiantes, universitarios, maestros, profesionales, etc). Con todo, ese apoyo de la clase media (FSB y MNR) le permitió a Bánzer convertirse de gorila en fascista.

"Presencia" del 23 de agosto de 1971 informó: "Desde antes del medio día fueron congregándose grupos de ciudadanos convocados por la emisora del Estado para brindar su apoyo al gobierno establecido por el Frente Popular Nacionalista". El MNR

y FSB se emplearon a fondo y competitivamente para arrastrar a sus parciales, a los elementos descontentos con el régimen depuesto y a los que habían depositado sus esperanzas de trabajo y prosperidad en los nuevos gobernantes. Los dirigentes políticos del momento tenían plena conciencia de que quien ganaba la batalla callejera por arrastrar mayor cantidad de admiradores tendría mayores posibilidades políticas en el futuro.

Grupos de movimientistas, que habían sentado su cuartel general en la calle Colón, frente al cine Tesla, recorrían las calles de la ciudad, en camiones y otros vehículos motorizados, haciendo propaganda para que todos se sumasen a la concentración. Otro tanto, aunque demostrando menor actividad, hacían los falangistas, que habían asaltado el local de la Confederación de Estudiantes de Secundaria (calle Yanacocha) para instalar su secretaría. Esta competencia por mostrar mayor cantidad de adherentes estaba destinada a impresionar bien al ejército, que no en vano era el árbitro indiscutido de la situación.

La multitud concentrada en la Plaza Murillo no fue pequeña, pero estuvieron ausentes universitarios y obreros. Se agruparon alrededor del MNR y de FSB capas de la clase medía, particularmente pequeños comerciantes y propietarios, empleados públicos, desocupados y empresarios, seguros de que les llegó su cuarto de hora de prosperidad y de que para efectivizarla sólo faltaba el establecimiento de un régimen de estabilidad institucional, social y política y de ilimitadas garantías para ellos, los pequeños propietarios, los industriales y los comerciantes. Los desocupados, cuyo número crecía sin cesar, buscaban afanosamente dónde trabajar y estaban seguros de haber encontrado la solución con el advenimiento del gobierno gorila. Las consignas que comenzaron a agitarse tendían a satisfacer, por lo menos verbalmente, estas exigencias: fin a la anarquía y al abuso; amanecer del orden social y legal; trabajo y disciplina; respeto ilimitado a la propiedad privada; destierro del comunismo y de la violencia, etc.

El entonces coronel Hugo Bánzer, desde los balcones y con ingenua sinceridad, aunque en castellano titubeante e imperfecto, definió nítidamente su filiación política, que, por otra parte, no fue ninguna sorpresa: "Seguiré los pasos de Busch, Villarroel y Barrientos". Hasta ese momento nadie se había atrevido a decir en voz alta que tenía como programa el retorno a Barrientos, señalado como la personificación de la arbitrariedad, de la masacre y otras calamidades. En tono sentencioso hizo saber que seguía siendo el gorila que se levantó en armas junto al general Miranda y que su sueño más caro no era otro que continuar la política fascista de Barrientos. Ya no fue tan categórico, demostrando, más bien, la tremenda confusión que se apoderó de su cerebro, cuando proclamó un nacionalismo tan puro y excluyente, que dentro de él ya no sería posible hablar de derechas ni izquierdas. Bien pronto se pudo demostrar que no era más que una utopía. La derecha, encarnada en Bánzer, precisamente, no cesó de luchar contra la izquierda en todas sus manifestaciones. Nadie dudaba, entonces que Bánzer era ya la derecha con referencia al gobierno Tórres, aunque ambos hablaron de nacionalismo y eran expresiones particulares del proceso nacionalista pequeño-burgués iniciado en 1952. Hay que volver a repetir que Bánzer no es igual que Tórres y que entre ambos hay una gran diferencia.

El golpe contrarrevolucionario de agosto y la estructuración del régimen fascista... contaron con el incondicional apoyo del Frente Popular Nacionalista, estructurado alrededor del contubernio falanjo-movimientista. Políticamente se ha justificado este frente como una alianza contra el comunismo, es decir, contra el movimiento revolucionario protagonizado por la clase obrera. Los barrientistas uniformados estaban ya dentro del gobierno y los civiles giraron, alrededor de Bánzer desde el primer momento. Los "partidos políticos barrientistas" se sumaron a FSB en abril de 1973.

El jefe movimientista argumentó que su alianza con FSB y también con los militares barrientistas (esta alianza debutó como FPN) era necesaria para tomar por lo menos parte del poder. Su primera actitud fue la de poner en pie a su maltrecho partido, que despertó interés en amplios sectores de la clase media y que no se cansaba de presentarse como vanguardia de la clase obrera y del "pueblo". Se descartaba su relativo crecimiento numérico inicial (la prensa informó que en Oruro, inmediatamente después del 21 de agosto informó que en Oruro, inmediatamente después del 21 de agosto de 1971, se inscribieron 1.500 personas en los registros movimientistas), crecimiento, igual que el de FSB, operado a costa de los funcionarios públicos y que rápidamente se detuvo. El MNR ya no pudo convertirse en el polo aglutinante de las masas. Inclusive en la pequeña burguesía politizada llegó a generar poderosas resistencias. El crecimiento falangista fue menor y gran parte de su trabajo organizativo estuvo dedicado a recuperar a su vieja militancia y a evitar futuras escisiones. Las células movimientistas y falangistas no pudieron neutralizar a las capas radicalizadas del magisterio y de los estudiantes universitarios y de educación media. Las direcciones pertenecientes al FPN e impuestas despóticamente desde arriba, fueron cediendo a la poderosa presión de las bases y se vieron obligadas a utilizar un lenguaje radical y hasta antigubernamental. A lo largo de la existencia del gobierno gorila, movimientistas y falangistas consideraron como cuestión de vida o muerte el demostrar que sus organizaciones eran multitudinarias, conforme pregonaban todos los días sus jefes.

FSB tenía menos posibilidades que el MNR para realizar maniobras que le permitiesen presentarse como partido de grandes masas, confiaba más bien en su férrea y vertical organización (una y otra vez fueron repudiadas públicamente las tendencias fraccionalistas), en su retorno a la época en que era inconfundible grupo de choque al servicio de la reacción. Sus pretensiones obreristas le han costado sumamente claro, de esos ensayos data la aparición de una tendencia de izquierda y que ha concluido escisionando a la organización. En último término, Gutiérrez pareció en el primer momento cifrar inmensas esperanzas en la lealtad de Paz, lo que importaba que olvidó las enseñanzas de la historia y voluntariamente cerraba los ojos ante la cotidiana pugna que libran en todos los niveles militantes de los dos partidos del FPN. Las tradiciones falangistas y numerosos sucesos ocurridos después de agosto de 1971, permitían esperar que, en determinadas condiciones de crisis política, los seguidores de Unzaga podrían actuar de acuerdo con sectores gorilas contra sus ocasionales aliados. Bánzer y su equipo de seguidores fueron los que permitieron mantener el inestable equilibrio existente entre el MNR y FSB.

Víctor Paz se animó a integrar el frente con los falangistas, sabiendo que este paso podía comprometer todo su futuro político, porque estaba seguro, en mayor medida que los falangistas, que le serviría, a la larga, para lograr el control total del poder. Pensaba que le sería sumamente fácil deshacerse de generales y coroneles utilizando la triquiñuela de las elecciones. El camino parecía allanado después de que la guarnición de La Paz hizo un pedido en ese sentido. Es verdad que las corrientes institucionalistas parecían sugerir que verían con simpatía el repliegue militar a los cuarteles, pero la operación tendría que pasar, necesariamente, por un otro gobierno castrense. Las esperanzas de Paz no coincidieron con los planes y ambiciones de los gorilas.

Los militares propiciaron la creación del Frente Popular Nacionalista como parte de un programa político sumamente ambicioso: buscaban la formación de un nuevo partido nacionalista poderoso, donde se disolviesen el MNR, FSB y otras agrupaciones llamadas barrientistas y nacionalistas, que no sería otra cosa que el partido único destinado a apuntalar políticamente a un gobierno castrense, capaz de dominar al país por varios decenios. Los esfuerzos hechos en este sentido fracasaron y también el empeño del equipo castrense gobernante para poner en pie un partido político propio, todo se redujo en la formación de una camarilla de civiles que giraba alrededor de Bánzer o de algún otro conspirador uniformado.

En 1980, cuando crecientes sectores de la derecha comenzaron a arremeter utilizando como careta una ácida crítica anti-parlamentaria, volvió a surgir la formulación de que el ejército era el único que podía desarrollar una política conveniente para el país¹³. El escriba y oportunista Diez de Medina, que levanta la pluma no bien percibe alguna posibilidad de medrar, se apresuró en desarrollar la teoría de que a Bolivia le correspondía imitar el unipartidismo mejicano. Entre nosotros el partido único estaría conformado por las fuerzas armadas, los trabajadores, los empresarios, etc.¹⁴.

Lo que tiene que comprenderse con claridad es que generales y coroneles se apoyaron en el FPN y se sirvieron de él, pero no se subordinaron políticamente al contubernio MNR-FSB. Los gorilas siguieron su propio camino, importándoles muy poco las opiniones y gestos de los jefes del MNR y FSB. Las ambiciones de poder de algunos caudillos de segundo orden de estos partidos les empujaron a moverse alrededor de los líderes uniformados, tendencia que amenazó con destrozar a los partidos políticos de derecha. La jerarquía castrense siguió su propio camino y parecería que hizo muchas cosas con la exclusiva finalidad de diferenciarse políticamente de sus obligados aliados, actitudes que no pudieron menos que molestar a éstos y hacerle perder popularidad (deben señalarse desde los reiterados y públicos homenajes al gorila Barrientos, pasando por los apresamientos y atropellos a los militantes del FPN y otras tropelías, hasta la ocupación de la universidad). El MNR y FSB no tuvieron más remedio que ajustar su política a la línea fijada por el gorilismo, esto porque de otra manera no habrían podido permanecer cerca del Palacio de Gobierno, en espera de que se produjese la vacancia de la silla presidencial. Este sometimiento al sable no fue tan doloroso y humillante para FSB, desde el momento que confió en que

13- "El Diario", La Paz, 27 de enero de 1980.

14- F. Diez de Medina, "El documento de la juventud militar", La Paz, 30 de enero de 1980.

los generales pueden siempre realizar sus sueños de estructuración del gran Estado totalitario y por sus viejas vinculaciones organizativas con el gorilismo.

Los trabajos militares encaminados a la estructuración de un propio aparato político tuvieron relativo éxito en el campo del sindicalismo campesino. Es claro que no podía hablarse de verdaderos sindicatos del agro sino de corruptas burocracias de caciques que usurparon su nombre. La impostura barrientista del pacto militar-campesino volvió a actualizarse y quedó en evidencia el sometimiento de la burocracia campesina a los gorilas, que lograron poner en pie a su propia Confederación, la que no permitía que nadie ingrese al agro, ni siquiera los afiliados de los generales. El movimiento campesino acabó convertido en coto privado de los gorilas.

Mucha gente que inicialmente se aproximó al MNR y FSB concluyó desilusionada al no haber logrado beneficiarse con los cargos públicos, limitados en extremo frente al enorme volumen de desocupados. Víctor Paz tuvo que explicar crudamente, o mejor brutalmente, la imposibilidad material de satisfacer las exigencias de sus allegados. Es la tragedia de un país atrasado y cuya economía se mueve en los límites estrechos de la monoproducción: los técnicos y hasta los obrero calificados con importados juntamente con la maquinaria y los dólares y la limitada industrialización no permite absorber toda la fuerza de trabajo disponible, razones por las que gran parte de la población se vuelca hacia la burocracia estatal.

Víctor Paz, en un largo documento fechado en Lima en el mes, de agosto de 1971, pretendió justificar "teóricamente" su alianza con los gorilas y con FSB. Se trata de la respuesta del político que sabe que su ingreso al contubernio con los fascistas ha comprometido seriamente el futuro de su partido "popular" y timonel de la revolución de 1952. Por extraño que parezca, la argumentación de Paz reprodujo el basamento político del golpe contrarrevolucionario del 21 de agosto de 1971, consumado para cerrar el paso a las masas radicalizadas y dirigidas por el proletariado. Se trató de un documento antipopular y antiproletario. Muchos dirán que el Paz que suscribió la declaración que señalamos no era el Paz de 1952, que tronó históricamente contra el imperialismo y que no tuvo más que dictar algunas medidas radicales bajo la insoslayable presión de las masas y no previstas en el programa del MNR. Creemos que el movimientismo tradicional y Víctor Paz como su expresión más elevada, eran y siguen siendo los mismos, lo que no desmiente el hecho que bajo el látigo de los explotados hubiesen dicho y hecho cosas de las que posteriormente renegaron.

A lo largo de este trabajo hemos puntualizado que el nacionalismo de contenido burgués lleva en sus entrañas el germen de la claudicación frente al imperialismo y a las tendencias derechistas criollas. La derecha de este nacionalismo, muchas veces encarnado por sectores castrenses, puede, al acentuarse, concluir utilizando métodos fascistas de gobierno. La historia del MNR ilustra, de manera por demás impresionante, el desarrollo integral de esta tendencia del nacionalismo. Los grupos movimientistas cismáticos (Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, Bloque Obrero, Grupo Siles, etc) inútilmente pugnaron por retrotraer el nacionalismo de 1952. Se trató y se trata de un intento utópico porque ignora que las masas, al sobrepasarlo políticamente, le han empujado en brazos del imperialismo y de

la derecha criolla y esto de una manera definitiva. Mientras Siles Zuazo se aferró al pasado, Víctor Paz se fue colocando a la cabeza de las tendencias que fueron desarrollando hasta su punto culminante el derechismo fascistizante ya contenido en el viejo MNR.

No sería posible comprender la conducta movimientista al margen de la profunda transformación operada en la correlación de las fuerzas internas de la revolución. La profunda diferencia de la situación política posterior a 1971 con la de 1952 radica en el alto nivel alcanzado por el desarrollo del movimiento obrero. El llamado nacionalismo revolucionario resultó francamente reaccionario (lo que no quiere decir que sea la misma cosa que el imperialismo). En 1952 sus promesas arrastraron a la mayoría nacional y ésta obligó a incorporar al programa emeenerrista muchas de las consignas del radicalismo proletario; posteriormente el nacionalismo choca frontalmente con la perspectiva del socialismo, única finalidad estratégica capaz de emocionar y movilizar al proletariado y a los sectores mayoritarios de las masas explotadas, antes el nacionalismo hizo esfuerzos por identificarse con el proletariado o por lo menos por disolverlo en su seno, luego, para poder defender el régimen de la propiedad privada y la coexistencia con el imperialismo, se ha postrado ante el sable desenvainado. En 1952, los explotados veían en el MNR a su propio partido y le atribuían la capacidad de realizar sus aspiraciones más profundas, es por esto que Paz tuvo que usar la demagogia para dar a entender que su decisión era complacerlos, posteriormente buscaron por todos los medios, estructurar su partido y su gobierno propios. El MNR, reubicado en sus viejas posturas, se encaminó naturalmente hacia la posiciones falangistas. Este proceso se cumplió a través de una línea zigzagueante, Paz volvió, una y otra vez, a hablar de las masas, de su oposición a las medidas antipopulares (recordar la actitud asumida con motivo de la devaluación monetaria). Con todo, el MNR, por su conducta diaria, es coresponsable de todo lo que hizo el desgobierno fascista.

Paz soñó con retomar, tarde o temprano, el hilo que fue roto en 1964 y de un modo definitivo, por el gorilismo barrientista, lo que no haría más que acentuar la diferenciación política con las masas, que se han colocado mucho más a la izquierda que los grupos mayormente izquierdistas del MNR. Retornar al esquema que regía durante la segunda presidencia de Paz habría sido nada menos que un franco retroceso histórico, esto con referencia a las tendencias que se movían en el seno de las masas. La situación creada por la victoria gorila no pudo prolongarse indefinidamente, las fuerzas progresistas pugnaron por encontrar una salida verdaderamente de izquierda.

El jefe movimientista, en su vano empeño de borrar el criterio predominante en sentido de que se entregó maniatado al gorilismo y a FSB, a fin de saciar sus apetitos personales y de permanecer apegado al poder, desarrolló la peregrina tesis de que el "nacionalismo revolucionario" era nada menos que el tránsito hacia el socialismo y que para llegar a esta etapa debía apoyar con todas sus fuerzas al general Bánzer, pues así ayudaba a cumplir la tarea previa de la superación del atraso del país (es decir, liquidar y superar las tareas democráticas); se trataba, como se ve, de materializar la teoría stalinista de la revolución democrático-burguesa, de la revolución por etapas, que ha sido totalmente sepultada por la historia. Víctor Paz nos habla del

nacionalismo como tránsito al socialismo desde 1952. Los hechos demuestran que el nacionalismo pequeño-burgués en lugar de llevarnos al socialismo nos ha empujado a la barbarie fascista. Este planteamiento supone que el simple y normal desarrollo del nacionalismo conduce indefectiblemente al socialismo, aquí radica su falacia y su peligrosidad, pues de él arranca la tesis de la "izquierda nacional" en sentido de que la clase obrera no tiene, en la presente etapa, más misión que apuntalar decididamente a los gobiernos nacionalistas, sobretodo si éstos son castrenses. El socialismo sólo puede implantarse después de la derrota política del nacionalismo. Otra cosa sería que se diga que, en determinadas condiciones, las masas necesariamente tienen que pasar por la experiencia del nacionalismo.

Es fácil hablar, como lo hizo Víctor Paz, de socialismo para un futuro indeterminado y empeñarse en la acción diaria a poner a salvo la propiedad privada y el sometimiento al imperialismo. Si se sostiene que previamente debe cumplirse la etapa democrática de manera total, es claro, como demuestra la experiencia movimientista de doce años, que el proceso seguirá empantanado y que no será posible formular y realizar el socialismo. Por este camino se vuelve a abrir la posibilidad de los golpes fascistas. Hemos tenido un 21 de agosto, es decir, la contrarrevolución gorila, porque la clase obrera no pudo, por muchas razones, llegar al poder. Víctor Paz hizo una formulación estrictamente antisocialista, es decir, reaccionaria.

El teórico movimientista lamentó que el Comando Político hubiese expulsado de su seno a dicha organización. Lo sucedido en las jornadas de agosto de 1971 y después, pone en evidencia que el Comando Político no se equivocó al caracterizar al MNR del Pacto de Lima como una fuerza reaccionaria y pro-gorila.

Un proceso de profundas transformaciones estructurales no puede menos que violentar el derecho de propiedad privada burguesa, el que protesta porque esto se hubiese perfilado durante el gobierno de Tórres, olvida que la revolución de 1952 marchó por igual camino y que los excesos contra los propietarios fueron infinitamente mayores.

La debilidad del MNR no puede reducirse a las limitaciones de sus enunciados programáticos a su inevitable confusión, esa debilidad radica en su carácter policlasista, lo que determina que los proletarios y la mayoría de los explotados sean arrastrados hacia posiciones contrarrevolucionarias por la pequeña-burguesía veleidosa, reformista y timorata, fielmente expresada en el pensamiento ecléctico del doctor Paz. Las posturas oscilantes en extremo del doctor Paz le llevaron desde la irresponsable y temeraria adhesión al marxismo ya la Tesis de Pulacayo hasta la mecánica repetición de los discursos del general Bánzer. Estas oscilaciones son típicas de la pequeña burguesía. Teniendo en cuenta tales antecedentes, no hay por qué extrañarse que el mismo Bánzer, que se aproximó a él obsecuentemente para deslizarle al oído algunos consejos para que pudiese cumplir mejor su papel de verdugo del pueblo boliviano, se prestó a jugar el papel de auxiliar del proceso democratizante. Se podía descontar que los futuros cambios políticos tendrían como punto de apoyo a alguna fracción movimientista.

Es la historia la que ha agotado lo que ha dado en llamarse nacionalismo revolucionario.

El jefe movimientista tiene la ocurrencia de creer que sigue en vigencia porque a él no le dejaron concluir su período presidencial, que se distinguió por su indiscutible entreguismo y por su conducta marcadamente antiobrera.

El MNR seguro de que llegó el momento de ganar las simpatías de los generales, se lanzó a proclamar la promesa de construir un Estado fuerte, consigna repetida por FSB desde hace decenios, de establecer el orden y un régimen de mayor trabajo y disciplina. Ya Barrientos enseñó que por ese camino se llega al empleo de los métodos fascistas de gobierno.

Las ambiciones de los cuadros de dirección movimientistas y falangistas y la pugna interpartidaria dentro del FPN, acentuaron las fisuras en la estructura gubernamental gorila. Casi toda la militancia de los partidos que sustentaban al régimen imperante se movía impulsada por su tremenda sed de ganar dinero fácilmente.

Los empleados públicos y los maestros presionaron para que se respetase la inamovilidad funcionaria y lograron algunos éxitos: el Presidente Bánzer y algunos ministros se vieron obligados a pronunciarse positivamente al respecto. Sin embargo, menudearon los casos de nepotismo, de creación de cargos fantasmas, etc. El Presidente del Banco Agrícola, un militante falangista, desencadenó todo un escándalo al ser descubierto en sus trajines de saquear los pocos recursos de la institución por medio de la ubicación en cargos nuevos a sus conmlitones, etc. Por su parte, el equipo castrense, organizado en gran medida alrededor de ilimitadas ambiciones materiales, controló ministerios claves y las instituciones autárquicas económicamente más poderosas (Comibol, YPFB, ENAF, Etc.).

El MNR y FSB sufrieron serias fracturas internas como consecuencia del contubernio sellado bajo el nombre de FPN y por haberse integrado en el gobierno gorila. Esas escisiones se produjeron por la derecha y por la izquierda. Los tradicionales grupos de izquierda de ambos partidos (los movimientistas Siles Zuazo y sus parciales, Alvarez Plata, Ñuflo Chávez, Jordán Pando, Agullar, L. Peláez, etc) formaron tiendas políticas diferentes. Los izquierdistas repudiaron la faseistización de sus partidos, el que se hubiesen comprometido con las medidas represivas contra los obreros y amplios sectores de la clase media, con la cancelación de la autonomía universitaria, etc. (el MNR fue siempre antiautonomista y sólo por demagogia llegó al extremo de hablar de co-gobierno). Los derechistas propugnaron acentuar la lucha anticomunista y repudiar las actitudes centristas de sus direcciones. La fractura por la derecha fue más profunda y peligrosa en FSB que en el MNR. El caudillo de derecha entre los falangistas fue Valverde Varbery, notable por su brutalidad y por sus ideas cavernarias.

A un gobierno se lo conoce por sus obras. Señalemos ligeramente los rasgos de la obra gubernamental de los (gorilas).

Por Decreto de 7 de septiembre de 1971 se puso en vigencia, de manera condicional, la Constitución Política del Estado de 1967 (ya en ese sentido se había pronunciado con anterioridad el entonces Presidente Bánzer), en la medida en que no violentase el espíritu de la "revolución del 21 de agosto". Esta era una manera encubierta de

dedique ninguna Constitución regía en el país y que no había más ley que la voluntad del dictador. Nadie ignoraba que la Constitución es la viga maestra del ordenamiento jurídico, marco del cual no pueden, al menos teóricamente, salirse los gobernantes, lo que sería inconcebible si la "ley de las leyes" no estuviese por encima de cualquier otra disposición y normando a todas ellas, que por algo los juristas llaman adjetivas. Aprobar la vigencia de una Constitución de manera condicionada, limitada por las interpretaciones que de ella hagan los miembros del Poder Ejecutivo y por las conveniencias momentáneas de los dueños del poder, importa subalternizarla. El gorilismo dictó la frondosa legislación en abierta contraposición con los derechos y garantías establecidos por la Constitución e inclusive con las otras leyes que, sin embargo, no fueron expresamente derogadas. La manía codificadora del general Bánzer sólo encuentra paralelo en nuestra historia con la del Mariscal Andrés de Santa Cruz. El rasgo común de los proyectados códigos Bánzer consiste en su espíritu retardatario, que violenta todo lo adquirido en materia legislativa por las sociedades modernas.

Surge la pregunta: ¿por qué Bánzer se apresuró en poner en vigencia la Constitución, claro que solamente en el plano de los enunciados líricos? Por lo menos objetivamente sirvió para la exportación, para darla impresión de estabilidad jurídica, exigencia formulada de manera invariable por los inversionistas.

Aparentemente una Constitución condicionada no podía molestar a un régimen dictatorial, esto porque no estaba obligado a subordinar sus actos y disposiciones a una norma preestablecida. Sin embargo, la simple enunciación de la vigencia de la ley constitucional se tornó negativa para el gobierno. Las masas y particularmente la clase obrera, tomaron a la Constitución como punto de partida y de apoyo para su lucha en defensa de las garantías sindicales y democráticas en general. Muchos de los movimientos populares tenían como divisa el respeto a las disposiciones constitucionales y a su estricto cumplimiento. Si para Bánzer y sus adláteres había una Constitución mutilada de todo lo que puede ser favorable para las mayorías nacionales; para los explotados esa Constitución debía estar vigente en su integridad y luchaban diariamente por efectivizarla. Para los trabajadores, en forma particular, este problema adquiría importancia: el libre desenvolvimiento de las organizaciones sindicales (la vigencia de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo), el respeto al fuero sindical, la libertad de reunión, de difusión de las ideas, etc, acertadamente fueron planteados como efectivización de principios y derechos consignados en la Constitución Política del Estado.

10

Los sindicatos

El gobierno debutó marginando de la actividad legal a la COB, a la Federación de Mineros, a las organizaciones universitarias y a numerosos sindicatos de las ciudades. Allí donde resultó imposible la simple eliminación de las organizaciones laborales, el gobierno impuso a sus parciales como dirigentes e inclusive les obligó a cambiar de

nombre. La izquierdista y batalladora Confederación Médica fue sustituida por un llamado Colegio Médico. El conocido traficante sindical Sanjinés Ovando fue colocado a la cabeza de los ferroviarios, violentando las decisiones de sus congresos y contra el repudio de las bases. A la Central Obrera Departamental de Santa Cruz se le propuso el rótulo de Unión sindical de Trabajadores. Para un organismo sindical que tiene su historia de luchas, de victorias y derrotas, el nombre no es algo superfluo, sino que forma parte de su tradición y está relacionado con sus objetivos y programas. Comprendiendo todo esto, los trabajadores cruceños, reunidos en ampliado en el mes de mayo de 1973, acordaron retomar, violentando así lo hecho por el gobierno, la tradicional denominación de Central Obrera Departamental.

Durante los días seis y siete de septiembre de 1971, se conoció la noticia de que las sedes de los sindicatos y federaciones de maestros de Oruro y La Paz, ocupadas militarmente, inmediatamente después de los acontecimientos del 21 de agosto (como también lo fueron los edificios de la Federación de Mineros en La Paz, Oruro, etc), fueron "devueltas" a grupos de maestros autotitulados "demócratas", que se declararon incondicionales servidores del oficialismo. Este paso, arbitrario desde cualquier punto de vista, marcó con nitidez los primeros pasos del avance del fascismo sobre el territorio nacional. Su marcha se vio entorpecida por la terca resistencia ofrecida, de manera abierta o no, por las organizaciones de base de la clase media (maestros y estudiantes, en Sucre se decretó la huelga general en protesta por las medidas adoptadas por el gobierno). En Uyuni, uno de los bastiones de la izquierda boliviana y punto estratégico militar y social, las organizaciones del magisterio fueron intervenidas por un coronel, que en 1973, sintiéndose incómodo por la muda resistencia de los educadores, hacía esfuerzos sobre humanos para la realización de elecciones amañadas. Falangistas y movimientistas no pudieron ganar la confianza de maestros y estudiantes y, las direcciones impuestas desde arriba conocieron momentos muy difíciles y el verificativo de elecciones libres marcó el inicio de su total bancarrota.

De un plumazo fueron desconocidas las organizaciones sindicales de los maestros y en su lugar los "demócratas" constituyeron comités provisionales. La Federación Nacional desarrolló clandestinamente sus actividades por más tiempo, pero al final fue también reemplazada por otro comité oficialista. Las organizaciones apócrifas no lograron constituirse en genuina dirección sindical debido al repudio y resistencia de los elementos de base; estaban formadas por elementos muy conocidos como traficantes y sirvientes incondicionales de todos los gobiernos (la Federación de Maestros Urbanos de La Paz difundió un comunicado en este sentido). Los usurpadores "demócratas" sólo pudieron actuar gracias al decidido apoyo que les prestó el oficialismo. El método consistió en la eliminación física de las direcciones sindicales. Algunos elementos fueron apresados, torturados e inclusive asesinados, otros enviados al exilio y los demás confinados y sañudamente perseguidos hasta que abandonasen el escenario. Luego se digitó a los nuevos dirigentes desde las oficinas del Poder Ejecutivo. Para el gobierno, preocupado como estaba en forjar un "sindicalismo" de su agrado y a su medida, ya no contaba para nada la voluntad del grueso de los sindicalizados. Estatutos y programas de las organizaciones laborales fueron también motivo de despiadada persecución, se los desconoció y sentenció a

ser devorados por las llamas.

Los sectores laborales de la clase media se vieron relegados a un segundo plano, pero no acallados totalmente; su muda resistencia no dio tregua al gorilismo y sin proponerse cuidaron las espaldas de los sindicatos obreros de las minas, asegurando así el porvenir del movimiento revolucionario. Si las autoridades hubiesen podido, habrían comenzado actuando en la misma forma frente a los sindicatos obreros en las minas y si no lo hicieron así fue porque eran conscientes de que la resistencia de estos sectores sería mucho más violenta y militante y porque en ningún momento lograron aplastar del todo a los focos de resistencia de las ciudades. Esto no quiere decir que la represión fascista no hubiese alcanzado a las organizaciones proletarias, conocieron sus consecuencias, pero sus efectos se fueron atenuando a medida que la ubicación geográfica y acción de esos sindicatos se alejaban de las grandes ciudades. Luego, los métodos fascistas de gobierno parecían haberse agotado en la tremenda lucha contra esa hidra de infinitas cabezas que es el radicalismo pequeño-burgués ciudadano. Los gorilas no tuvieron un solo momento libres las manos para poder arreglar cuentas a fondo con las organizaciones proletarias. Antes de que el fascismo pusiese orden en los centros vitales de su actividad, le sorprendió el nuevo ascenso de las masas. ¿Será permitido concluir que ya no era posible en el futuro la represión fascista en la minas? La deducción, si existió, fue arbitraria. El mismo Bánzer recurrió a esta última carta en un momento de desesperación. Ya hemos visto que existieron grupos castrenses que se organizaron y conspiraron teniendo como eje la idea de una mayor acentuación de la lucha anticomunista, es decir, antiobrera.

Los hechos anotados muestran el perfil inconfundiblemente fascista del gobierno castrense nacido del golpe contrarrevolucionario del 21 de agosto de 1971. El gorilismo, cuyo portavoz de turno era el flamante general Bánzer, no era únicamente un gobierno que utilizó métodos castrenses: la violencia estatal organizada fue descargada, principalmente, contra el movimiento obrero y los partidos políticos que pretendían expresar programáticamente sus intereses históricos. Para existir la dictadura totalitaria tuvo que destruir, necesariamente, las garantías democráticas y constitucionales; mas, esta destrucción no tuvo el mismo contenido ni alcances para todas las clases sociales, aunque es cierto que el país ingresó a un período de deterioro general de las normas legales, ideadas y puestas en vigencia en su momento para la defensa del régimen de la propiedad privada de los medios de producción¹⁵. Esta aclaración es necesaria porque también desde la derecha se demandó la vigencia de la Constitución y de las garantías democráticas.

El fascismo es la última y la más brava de las cartas que pueden utilizar el imperialismo y sus sirvientes criollos y se dice esto por su elevado costo y porque sus métodos brutales pueden alcanzar a ciertas capas de la misma clase dominante. La democracia formal constituye el marco ideal para el desenvolvimiento de los gobiernos de contenido burgués. Un régimen totalitario desarrolla, obligadamente, tendencias estatistas, aunque éstas choquen, como en el caso boliviano, con la decisión de garantizar el libre desarrollo de la empresa privada. Este estatismo, que por lo menos busca poner orden en la vida nacional, es lo que más molesta a los "demócratas"

15- "Política social y minera del gobierno", Bolivia, 1973.

burgueses. El cercenamiento de las garantías democráticas y la arbitrariedad convertida en norma gubernamental también alcanzan a la derecha. Es por todo esto que la reacción sólo excepcionalmente recurre al fascismo, prefiere antes dar manotazos dentro de la democracia formal. Aunque derecha e izquierda pidan la vigencia de las garantías democráticas, lo hacen dentro de perspectivas diferentes y hasta opuestas. La derecha precisa de la vigencia de la Constitución para el libre desarrollo burgués y para eso fue elaborado este cuerpo legal. La izquierda considera la lucha por las garantías democráticas como parte de su actividad revolucionaria que tiende a sobrepasarla democracia burguesa más perfecta para alcanzar el socialismo.

El desconocimiento y limitación de las garantías democráticas tiene diverso alcance ya se refiera a la derecha o a la izquierda. Tratándose del movimiento obrero, el objetivo del gobierno es su aplastamiento físico y hasta sangriento, el arrancar de cuajo toda posibilidad de vida política y hasta sindical y el impedir la difusión de sus ideas. A la derecha se le limitan simplemente las garantías democráticas, buscando que no vaya más allá del marco señalado por el gobierno.

El Ministro del Interior Adet Zamora no se cansó de repetir que todos los que formaron parte de la Asamblea Popular, por ejemplo, debían considerarse candidatos a la prisión y a toda su secuela de monstruosidades. La prensa revolucionaria se vio obligada a moverse en las tinieblas de la clandestinidad más estricta y su difusión fue severamente castigada. La tenencia de una hoja, de un libro, de un documento, editados por los partidos de izquierda constituía un grave delito. Las puertas de las fábricas y las graderías de las aulas universitarias se trocaron en silenciosos depósitos de donde la curiosidad se proveía de las hojas ilegales faccionadas por obreros y estudiantes. Cuando el descontento y la agitación crecían también se multiplicaban los impresos y aparecían sorprendentes siglas que se estampaban al pie de manifiestos y protestas. El Primero de Mayo de 1973 circularon decenas de impresos y en ellos se leían nombres de organizaciones hasta ese momento desconocidas y seguramente muchas de ellas formadas por dos o tres personas. Propaganda anónima y muchas veces escrita a máquina, consignas fijadas en un pedazo de papel con un marcador cualquiera, expresaban la decisión de seguir luchando contra la dictadura. Se convirtió en norma que los izquierdistas fuesen eliminados físicamente en las mismas celdas policiales; el despertar popular permitió a los familiares de Félix Sandoval Morón denunciar en voz alta su asesinato; la cursi explicación oficial dijo que un grupo de encapuchados lo victimó cuando se encontraba en manos de sus carceleros. Muchos de los nombres de las víctimas de esta época volverán a aparecer en 1979 con motivo del enjuiciamiento de Bánzer en el parlamento, aunque no alcanzó mayor trascendencia.

En Bolivia era inconcebible la reunión pública de un partido obrero o simplemente democratizante; incluso en 1977 sólo podían efectuarse pequeñas y rápidas reuniones políticas en la clandestinidad. La plana mayor revolucionaria estaba en las cárceles, en el exilio o llevando vida subterránea. Ningún izquierdista podía hacer política en el Prado de La Paz, cosa habitual en el pasado. Contrariamente, hubo una especie de oposición democristiana, nacionalista y derechista tolerada, que recordaba las disputas domésticas entre parientes. La derecha opositora fue ciertamente molestada por los

organismos de represión, amenazada y limitada en su acción. No pudo gozar a plenitud de las garantías democráticas y menos abusar de ellas, pero, sobre todo debido a su poderío económico y a la afinidad, en definitiva, de objetivos con el gorilismo, sacó todavía muchas ventajas de los enunciados constitucionales. Las agrupaciones de derecha publicaban solicitadas en los periódicos de gran tiraje, con críticas y reparos a algunas disposiciones y actos gubernamentales. No habían imprentas ni rotativos para la izquierda, que era mencionada únicamente para calumniarla. La gran prensa siguió publicándose, aparentemente sin mayores presiones, aunque salta a la vista que por lo menos imperaba la autocensura decidida por sus cuerpos directivos. "Presencia" de La Paz instaló nuevos talleres gráficos y oficinas en el mes de mayo de 1973. Menudearon las bendiciones eclesiásticas y estuvieron presentes el general Bánzer, que pronunció un discurso de circunstancias, y otras autoridades del gobierno. Los negocios prosperaron y parecían existir buenas relaciones entre la dictadura y los periodistas "independientes". Pero, en un período de aguda crisis política hasta el uso limitado de las garantías democráticas y de los derechos constitucionales molestan en extremo a la dictadura y entonces vienen las amenazas y las promesas de llevar a la cárcel a los reporteros que cometen el delito de inquirir noticias por su cuenta y sin ajustarse a los datos oficiales (eso ocurrió después de la devaluación monetaria y del asesinato del coronel Selich). Las radioemisoras eran a veces más osadas, acaso por ser menos controlables, y fue posible percibir en ellas la crítica velada o la información temeraria. Con todo, los periodistas y radialistas eran vigilados, se les interceptaba las conversaciones telefónicas y la correspondencia postal. El comentarista de Radio Fides, en los primeros días del mes de junio de 1973, se quejó de que en Bolivia, a diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos, nadie se escandalizaba porque los organismos policiales controlasen la vida privada de algunos ciudadanos.

No se podía señalar el grado de limitación de las libertades democráticas como algo establecido para siempre; era, más bien, el resultado de las vicisitudes de la lucha de clases. Por momentos setenía la impresión de que el gobierno arrasaría inclusive con el menor de los resquicios democráticos, otras veces el retroceso de las autoridades era ostensible, se trataba casi siempre del aflojamiento táctico frente a la presión adversa de la opinión pública o de la resistencia de las masas. Los gorilas estaban seguros de que no correrían el riesgo de ser derribados por defender o desahuciar una garantía democrática. Un ejemplo: en los polos extremos se tenían el desconocimiento del habeas corpus (consagrado por la Constitución, como principio fundamental) por simple decreto que autorizaba retener a los reclusos todo el tiempo que juzgasen necesario las autoridades, lo que equivalía a retornar a la barbarie feudal, y, como su antinomia, la declaración oficial en sentido de que el documento "Evangelio y violencia" (1973), pese a las acres y directas críticas al gorilismo, era constructivo, alentador y de ningún modo anti-gubernamental; contrariando declaraciones anteriores, expresadas por algunos ministros de Estado, se concluyó rodeando de garantías a sus firmantes. Tuvo que violentar a los que creían que el gorilismo sólo podía seguir una línea uniforme de negación de toda garantía democrática, sin operar retroceso alguno, la autorización dada para el retorno al país del dirigente fabril Valencia, pese a que se atrevió a decir en plaza pública y en voz alta que los

militares no eran más que monigotes de los yanquis ¹⁶. La propaganda porista hizo la siguiente caracterización de la línea cambiante del gobierno: "El gorilismo fascista -paradójicamente- es un gobierno débil, minado por tremendas contradicciones internas, en colisión con los empresarios privados, visto con desconfianza por ciertos organismos norteamericanos y, lo que es más importante, cada día más acosado por un pueblo que lo odia a muerte. Su conducta es oscilante, necesariamente oscilante, diríamos: va desde la represión (el asesinato llano y simple) hasta la tolerancia a regañadientes. Esto no debe movernos a engaño: Bánzer y su equipo ministerial no llegarán al extremo de permitir a la oposición obrera y revolucionaria ganar el marco democrático irrestricto, lo más que puede hacer es otorgar algunas concesiones democratizantes; no debe olvidarse que existe por su condición de carnicero de la izquierda" (Op. cit.).

El gorilismo consideraba como algo normal la cancelación de las garantías democráticas, utilizada en su lucha contra el movimiento obrero. No bien las masas ganaron las calles, el gobierno Bánzer se vio obligado a convertir el estado de sitio en un régimen permanente y volvió a actualizar la Ley de Seguridad del Estado, dictada por Barrientos para escarmentar a los izquierdistas.

Desde que las garantías democráticas fueron canceladas, los explotados comprendieron que su lucha debería centrarse alrededor de la reconquista de esas garantías y en este terreno se comenzó logrando algunas victorias significativas. Después de batallar un año, la Federación de Mineros pudo actuar legalmente y se le devolvió su local. Pese a las constantes protestas del oficialismo, funcionaba en Bolivia una rama de la organización internacional denominada "Justicia y Paz", estructurada a la sombra de la Iglesia y que se encontraba apuntalada por la también mundial Amnesty International. "Justicia y Paz" luchaba por el respeto de los derechos elementales de los detenidos, porque se les aplique la ley y les prestaba ayuda jurídica y moral. Como se sabe, repudia la violencia en esta sociedad basada en la violencia, pues no otra cosa es la lucha clasista. En estas condiciones, el mantenimiento de cientos de presos por mucho tiempo se convirtió en un serio problema político para el régimen dictatorial, razón por la cual comenzó ocasionalmente a remitir a los tribunales de justicia ordinarios a los reclusos, lo que permitió a "Justicia y Paz" conocer su cuarto de hora de popularidad.

El gorilismo fascista, por su propia naturaleza, tuvo en la actitud que asumió frente al movimiento obrero la piedra de toque de su verificación. Gorilismo y

16- Cuando parecía que los sindicatos habían logrado, gracias a la enérgica movilización de las bases obreras, una remarcable victoria frente a la política represiva y obligado al gorilismo a retroceder, el equipo ministerial reinició su ataque. El Ministro de Trabajo, Guillermo Fortún, expresó: "El señor Valencia no va a retornar al país porque no es dirigente sindical sino político. De hacerlo tendría que permanecer detenido ya que ha sido juzgado por la Ley de Seguridad del Estado. De todos modos, esa es la decisión del Gobierno, no volverá al país". Esta brutal advertencia formaba parte de una serie de medidas anti-obreras: mantener congeladas las remuneraciones hasta octubre de 1973, como respuesta a las demandas de compensación económica presentadas por bancarios y ferroviarios; negativa a autorizar la reapertura de la Central Obrera Boliviana.

Las mencionadas declaraciones fueron registradas en "Presencia" de La Paz de 12 de junio de 1973.

sindicalismo revolucionario son extremos polares que se excluyen. Los avances que hicieron las organizaciones laborales en materia organizativa, en la acentuación de la independencia clasista, importaron el consiguiente debilitamiento del gobierno totalitario y prepararon la futura victoria de la clase obrera. Así lo entendieron los trotskistas, que prestaron mucha atención a los progresos que tuvieron lugar en el plano sindical.

Pero, se preguntaron muchos escépticos, ¿cómo era posible que después del establecimiento de un régimen de corte fascista se tuviese que seguir discutiendo acerca del porvenir de los sindicatos? El fascismo, de la misma manera que la democracia no pueden considerarse como una abstracción, sino como el producto de condiciones políticas concretas, que siempre muestran notables particularidades. Lo único que se mantiene inalterable por encima de las variantes son los rasgos más generales de ambos regímenes. Hemos visto ya que el gorilismo se instaló en el Palacio Quemado después de su alzamiento y las batallas que ganó en La Paz y otros centros, pero resulta que sus disparos reiteramos- no dieron en el blanco que había elegido con anticipación (las organizaciones sindicales y políticas representativas de los mineros), esto debido al gran repliegue táctico que realizó oportunamente el movimiento obrero, maniobra que configuró toda la situación política posterior a agosto de 1971 y también muchas de las características del gobierno.

A la caracterización del gobierno de Bánzer como fascista se ha respondido que no es tal (algunos insinúan que era más bien bonapartista, sin precisar si tendía a radicalizarse hacia la derecha o hacia la izquierda) porque no contó con el apoyo de la clase media y porque los sindicatos siguieron funcionando, aunque con algunas limitaciones.

Hemos ya analizado que la constitución del Frente Popular Nacionalista demuestra que los conspiradores uniformados tuvieron como eje de sus operaciones a un sector de la clase media y que dieron muestras inequívocas de su afán de conquistar popularidad en el seno de las masas, que en caso de pleno éxito habrían visto facilitado el cumplimiento total de su programa antiobrero y antinacional. Otra cosa es que las exigencias de la empresa privada y del imperialismo (modernización del sistema de percepción de impuestos, cuya primera consecuencia sería la universalización de las cargas tributarias, devaluación monetaria, aranceles proteccionistas en favor de los industriales nativos y prohibición de importación de artículos que se producen en el país, etc.) hubiesen obligado a los gorilas a adoptar una política económica social contraria a los intereses más elementales de la mayoría de la clase media, que los pequeños y medianos comerciantes, que llevan una existencia semi-parasitaria, metidos en los poros de la sociedad, se hubiesen sentido defraudados por la brutal represión del contrabando, por las medidas de extorsión al vendedor al detalle, etc. (el apoyo de los industriales era para los gorilas más importante que los votos resolutivos laudatorios que periódicamente lanzaban, los buhoneros del mercado negro, que pese a todos los palos que recibieron siguieron puntalando al gobierno), que los miles de postulantes a cargos públicos se hubiesen vuelto "opositores" al verse condenados a seguir agonizando en la desocupación. La prédica del oficialismo en sentido de que es preciso llevar bienestar a la mayoría nacional, limitando los

excesos de las minorías de derecha y de izquierda, parece haber sido acuñada para impresionar a vastos sectores de la clase media, si esto no ocurrió es porque las condiciones económicas y políticas imperantes le fueron adversas en definitiva. Confío en que la gran afluencia de inversionistas ensancharía las fuentes de trabajo y crearía un ambiente de bienestar general lo que explica que se hubiese aprobado una ley de inversiones totalmente favorable al capital financiero y contrario a los intereses nacionales más elementales. La inestabilidad política y social y el carácter arbitrario de las normas legales adoptadas no permitieron que se ensancharan más las inversiones.

Como hemos señalado más arriba, la destrucción física de todas o las más importantes organizaciones obreras se realizó desde el primer momento porque no pudo el gobierno y no porque no quiso, pese a ser éste uno de sus proyectos más acariciados. El aplastamiento material de las organizaciones proletarias aparece inscrito en el programa del gorilismo desde los primeros días. Los críticos de las posiciones puristas se toman la libertad de olvidar, para justificar sus argumentaciones, que la liquidación de los sindicatos y de sus direcciones, en la medida en que eran producto de la voluntad de las bases, comenzó en las ciudades y la operación fue cumplida aquí en toda su profundidad. Pero, ocurre que en los grandes centros urbanos no está, precisamente, el sector fundamental del proletariado; las organizaciones sindicales son, en gran medida, de la clase media. El gorilismo no abandonó en ningún momento de su accidentada existencia su voluntad de someter a los sindicatos al Estado, de reestructurarlos integralmente de acuerdo con sus intereses, de eliminar de su seno y de sus direcciones a los elementos catalogados como extremista, etc. Los "sindicatos" para existir estaban obligados a convertirse en soportes del gorilismo, azar su misma "ideología" y ejecutar ajustadamente los planes del gobierno. Se trataba de la típica conducta fascista frente al movimiento obrero. Se puede añadir que no alcanzó a ser impuesto totalmente este programa, pero esto se debió únicamente al hecho de que los gorilas no tuvieron la oportunidad de ahogar en sangre al proletariado minero y de aplastar de manera total a los sectores de la clase media.

Independientemente de lo que Pudo o no hacer el gorilismo de manera inmediata y segura, no se debe olvidar que elaboró toda una "doctrina" en materia sindical y que fue, prácticamente, una declaratoria de guerra contra las organizaciones laborales revolucionarias, que partían de la independencia de clase del proletariado y de la lucha de clases. Es ese programa, al que los gobernantes pretendieron ajustar su conducta cotidiana, el que define el carácter del régimen castrense. Por otra parte, ese programa se desprende de todo lo que ha dicho y hecho el gorilismo a lo largo de su gobierno, otra cosa es que determinadas condiciones hubiesen impedido sea impuesto en su integridad.

El documento del gorilismo sobre "política social" de tres de febrero de 1973, expresó su posición frente al movimiento obrero, de una manera categórica y que no permitía torcidas interpretaciones. Bánzer, al presentar al país el larguísimo escrito, señaló que "las relaciones laborales y el movimiento sindical, forman parte básica de la política social del gobierno nacionalista", añadiendo que da "un contenido doctrinal a todo el esquema social".

El plan de política social no era ciertamente, un enunciado lírico, sino que llevaba la manifiesta intención de convertirse en justificación anticipada de la acción destinada a acabar con las convulsiones sociales e imponer "orden, paz y disciplina" (tríada básica de la doctrina fascista), como punto de partida de la "Bolivia nueva" ¹⁷.

El plan de política social era un documento de once capítulos y en cada uno de ellos se encontraba una fundamentación con el título de "consideraciones generales", a la que seguían los "objetivos" (ampulosa enumeración de metas muy generales), las "prioridades", donde se encontraba catalogado lo que realmente buscaba el gorilismo y los "instrumentos" que se pensaba crear en los campos legal, financiero y crediticio.

Precedía al documento una kilométrica y presuntuosa introducción que llevaba nada menos que el título de "La problemática social boliviana", cuya lectura revelaba la esencia del pensamiento de los gobernantes uniformados. Para comenzar: en los últimos veinte años -estamos siguiendo el documento- se han producido profundos cambios en el panorama social del país, denunciados por un acelerado y excesivo avance de los derechos y prestaciones sociales en favor de las mayorías nacionales, particularmente de la clase obrera, esto por una parte, y, por otra, por la preponderancia de las organizaciones laborales en todas las facetas de la vida nacional. Junto a este fenómeno se tiene la emancipación de los campesinos, como resultado de todo el proceso social, que determinó que una parte de ellos se convierta en asalariado o se asiente en las ciudades y, particularmente, gracias a las bondades de la reforma agraria. "Esa masa campesina, explotada y mediatizada, recuperó la plenitud de sus derechos y libertades, con la dictación de la Ley de Reforma Agraria. Esta medida trascendental, que marca un jalón sin precedentes en nuestra historia, provocó una conmoción social y política que revolucionó a la nación toda. De acuerdo al principio de la 'tierra de quien la trabaja', los colonos se convirtieron en propietarios de la tierra y sus derechos fundamentales fueron reconocidos, incorporándose gradualmente al mercado de consumo".

En el plano de las conquistas y derechos sociales se avanzó demasiado -según los gorilas- y se impusieron como tarea el realizar un alto en el camino, tal vez para efectuar reajustes secundarios en un mecanismo ya funcionando, pero de ninguna manera para ir más allá. Los avances en exceso, vale decir, ilógicos, chocaban -al decir de la dictadura-violentamente con el "bajo nivel socio-cultural de los elementos humanos activos, especialmente los campesinos". Vale la pena recordar que recién entonces se habló del estudio y establecimiento del seguro social campesino. El documento sostenía que había que educara las mayoría nacional para que se elevase hasta el alto nivel de las descomunales reivindicaciones ya logradas en el campo social. No sólo se trataba de educar a obreros y campesinos, sino de remodelarlos conforme a las características nacionales, porque, se añadió, la incultura se ve agravada por la entrega a "teorías alienantes", como el marxismo, por ejemplo. Esta conclusión constituía el hilo conductor de todo el plan de "política social" enunciado por el gobierno de entonces y era parte importante de su filosofía fascista.

17- El hombre de la calle estaba seguro que había mucho de verdad en el rumor sobre la militancia de Bánzer en la fascista Falange Socialista Boliviana; aquel tuvo que rectificar dicho extremo en forma pública: "No soy falangista, ni pertenezco a partido político alguno. Creo en Bolivia" ("Presencia", La Paz, 10 de febrero de 1973).

No puede reducirse el sindicato a una generalización, como si fuera únicamente la reunión de los obreros que trabajan en una empresa y nada más, que es lo que se desprende del documento faccionario por los gorilas. La tarea más elemental del sindicato es, ni duda cabe, la de defender a los obreros de la prepotencia y explotación patronales. Las más importantes organizaciones sindicales bolivianas constituyen poderosos instrumentos de movilización de las masas en la marcha hacia su liberación. El papel que cumpla el sindicato en favor o en contra de su clase, depende de la orientación que sigan sus direcciones, vale decir, de la política en que se inspiren. Los marxistas (trotskystas) sostienen que la lucha sindical es sólo parte de la política revolucionaria del proletariado y que la batalla por las reivindicaciones inmediatas debe tener como punto de referencia la misión histórica de la clase de la conquista del poder político. El partido revolucionario tiene la tarea de dirigir ideológica y políticamente a las organizaciones laborales. En la base de esta concepción se encuentra el principio de la independencia de clase y el respeto irrestricto a la democracia interna, vale decir a la voluntad de las bases. Son estos pilares los que el gorilismo pretendió destruir, a fin del llevar adelante su plan de estatización de las organizaciones laborales.

Al leer la obra maestra del oficialismo en materia social se podía comprobar que no era más que el plato recalentado de una de las concepciones fundamentales del general Barrientos: "es preciso erradicar, definitivamente, la anarquía, la falta de responsabilidad y la alienación doctrinaria en un país que requiere trabajo, disciplina y alto sentido patriótico". Estas palabras encerraban la proposición de destruir a las organizaciones sindicales existentes para luego reestructurarlas de acuerdo con los objetivos del oficialismo. Bánzer, de igual manera que todos los gobernantes de mentalidad policial, sostuvo, una y otra vez, que la naturaleza y conducta sindicales eran la obra exclusiva de los enemigos de la Patria, de los extremistas y demagogos. La conclusión de este planteamiento sólo podía ser una: marginar a estos malos elementos de los centros de trabajo e inclusive del territorio nacional. Su eliminación, para ser consecuentes con el pensamiento y tradición gorilas, era presentada como un alto deber patriótico. Como hemos visto, el asesinato en las mazmorras y el asalto a bala de los domicilios de los revolucionarios, a fin de asesinarlos antes de que llegasen a las prisiones, fueron elevados a la categoría de recursos preferidos para el mantenimiento del "orden público" y de la tranquilidad nacionales. Estos antecedentes y las creencias más acariciadas de los dueños del poder, es decir, su "filosofía", obligaron a concluir que el principio de la "erradicación definitiva de la anarquía" suponía la eliminación física de los extremistas. Los agitadores, extremistas y comunistas fueron simplemente colocados al margen de la especie humana y cuando las autoridades se referían al respeto de la dignidad del hombre, etc., es claro que no estaban pensando en ellos.

Sería arbitrario suponer que Bánzer se limitó a esto, fue mucho más lejos: la reestructuración de las organizaciones obreras y la total modificación de sus objetivos. "En el pasado inmediato, el proceso de desarrollo económico, encontró dificultades por causa de la desorientación y distorsión de los verdaderos objetivos de las organizaciones sindicales..." El Presidente de la República creyó poder modificar la realidad nacional conforme a sus deseos y que se bastaba el solo para tan descomunal

tarea: "Una de las causas de la convulsión social que ha caracterizado a la vida republicana, se debió a la falta de definiciones claras en lo económico y social". Prestamente tomó para sí la tarea de enumerar esas definiciones y estaba seguro que después de su enunciación y con la ayuda de algunos cadáveres de demagogos, la Nueva Bolivia estaría construida.

Sabemos que el nacimiento de los sindicatos es consecuencia del desarrollo histórico de la sociedad, un producto del capitalismo. Violentando esta evidencia, y no por casualidad, el general Presidente informaba que "el derecho de libre asociación sindical para la defensa de los intereses del sector laboral, no sólo tiene origen en las disposiciones legales de la República, sino fundamentalmente en el derecho natural", lo que venía a convertir al sindicato en una categoría de vigencia por encima del tiempo y de las transformaciones de la sociedad. Esta postura más que burguesa era tradicionalista reaccionaria y lo era toda vez que se refería a la defensa de los valores culturales autóctonos, etc. Bánzer estaba convencido que también el despotismo que ejercitaba sobre el pueblo boliviano arrancaba del derecho natural. El reordenamiento de las organizaciones obreras, la educación de los dirigentes obreros a medida y sabor del gorilismo, el acondicionamiento del movimiento obrero a los objetivos y necesidades del gobierno castrense de derecha, etc., eran considerados como el retorno al derecho natural. Bánzer se ha presentado ante el país como el regenerador de los sindicatos, que los consideraba prostituidos y entregados a intereses internacionales, o sea, antinacionales.

La finalidad más elevada que el gorilismo asignaba a los sindicatos era la de "participar activamente en las labores de orientación y ejecución de programas específicos de desarrollo" (programas fijados por el gobierno gorila, de acuerdo a sus planes económico y social y sin ninguna participación de las organizaciones obreras), lo que equivalía a convertirlos en simples tuercas del aparato estatal, en transformar a los dirigentes obreros en empleados fiscales. El futuro de los sindicatos, según Bánzer, radicaba en su estatización.

En el esquema de transformación de la mentalidad de los bolivianos, que eso era lo que, en definitiva, buscaba el gorilismo, el sindicalismo renovado ocupaba un lugar de importancia, esto porque tomaba en cuenta "la gravitación prioritaria que tienen las organizaciones laborales en todas las facetas de la vida social, trátase de la producción de la política o de la vida social". Se imponía modificar radicalmente la estructura y sentido del sindicalismo porque -según expresa el plan de política social- "la reconstrucción económica no será posible con el ímpetu social necesario si no se modifican determinados hábitos mentales y sociales en los hombres, si no se vence la costumbre, la rutina, y en suma, si no se ha creado una conciencia de desarrollo en la mente y en el corazón de cada uno de los participantes". Eso era lo que tenían que hacer los sindicatos bajo el directo control del gorilismo, pues era éste el poseedor de la suprema verdad.

Al sindicato se le asignaba ser en el futuro organismo de cooperación y armonía obrero-patronal, para esto era necesario obligarle a abandonar total y definitivamente el terreno de la lucha de clases. "Las organizaciones sindicales constituyen el medio, a

través del cual el Estado, en su papel de empleador, y la actividad privada, se vinculan con aquella (la clase obrera), en busca de soluciones adecuadas y armónicas para los diferentes problemas. Propender la implantación del diálogo entre empleadores y trabajadores con la finalidad de elevar los niveles de la productividad así como el mejoramiento de los niveles salariales teniendo como objetivo común defender y preservar la vigencia de las fuentes de trabajo adecuándose a la realidad”.

Es fácil comprender que para el gorilismo el enemigo número uno era la lucha de clases, lo que denunciaba su naturaleza pro-patronal y antiobrera. En Bolivia, país de descomunales y abismales contradicciones clasistas, esta nueva filosofía sindical no tenía cabida, ni por las tradiciones del sindicalismo ni por el alto nivel político alcanzado por la clase obrera. Pero, no nos engañemos, el gorilismo tenía decidido utilizar las ametralladoras en su incongruente y arbitrario empeño de erradicar la lucha de clases e imponer la imposible armonía obrero-patronal.

Los ingenuos quedaron bien impresionados cuando en el documento leyeron la especie de que los sindicatos debían ser “apolíticos”, lo que a veces se tomó como independencia del movimiento obrero frente al gobierno. Algunas frases dichas al desgaire sobre los fines propios de los sindicatos denunciaron que lo que se buscaba, más bien, era el sometimiento de las organizaciones laborales a la política del gorilismo. Puntualizamos algunos de los objetivos que se señalaron en este terreno:

Las organizaciones obreras debían abandonar su tradicional ideología, aquella que sirvió de eje para su estructuración como clase, y adoptarla dictada por el gorilismo, es decir, tenían que servir a la política de corte fascista, convertirse en su puntal y actuar como tal en el seno de las masas. Se les exigió que concluyesen como instrumentos de la política represiva contra las direcciones elegidas por las bases: “Desempeño de las organizaciones sindicales, sin convertirse en entidades que protejan a personas que, haciendo mal uso de la función sindical y distorsionando su verdadero sentido atenten contra los intereses de la colectividad o seguridad del Estado”. Despolitizar, en el lenguaje del gobierno castrense, quería decir quitarles sus rasgos revolucionarios, para cumplir este objetivo reaccionario, el gobierno no tuvo más camino que meter la mano en la vida interna de las organizaciones obreras y su documento sobre política social estaba destinado a justificar este paso.

La violencia gorila (violencia que, unas veces, ya ha dado pruebas inequívocas de lo que puede y que, en otras oportunidades, se condensa en el enunciado programático) se tiñó de patriotismo al expresar tácitamente que su finalidad era la de desmarxistizar los sindicatos, es decir, limpiarlos de ideas antipatrióticas y de impedir que continuasen “enfeudados” al exterior. La reiterada invocación de lo autóctono tenía el mismo sentido: volver a la tierra, dando las espaldas al marxismo extranjero. “Las organizaciones sindicales fueron transformadas en trincheras de lucha en base a doctrinas alienantes, frustrando, de esta manera, al grueso de los trabajadores que buscaban una respuesta a sus necesidades de orden económico y social”. En otro lugar se afirmaba: “La arriesgada pero grandiosa tarea que aguarda a los bolivianos, es la de probar si serán capaces de construir un mundo nuevo, sin recurrir a la violencia y al empleo de prácticas e ideologías ajenas a la cultura y a la

tradición de nuestro pueblo". El gorilismo, encarnación de la violencia reaccionaria, tuvo el cinismo de exigir a los sindicatos que repudiasen los métodos violentos, lo que importaba decir que se sometiesen dócilmente a los dictados del gobierno.

Con persistencia se buscaba minimizar al movimiento obrero, que se lo suponía hipertrofiado y prepotente; enseñarle (obligándole así a olvidar todo lo que había aprendido) que no puede ser clase dirigente y que su extrema incultura le imponía seguir y obedecer a los más capaces y a los predestinados, que no eran otros que los generales de la jerarquía castrense. Era para éstos que se escribió lo que sigue, con la intención de consagrarlos como caudillos por derecho natural: "No solamente todos y cada uno de los bolivianos deben saber hacia dónde marcha su revolución, cuál es su programa de trabajo, cuáles los objetivos principales y secundarios, cuáles las soluciones alternativas, sino que la vanguardia conductora debe estar firmemente cohesionada y actuar, eficiente y conscientemente, para vencer las vacilaciones y la confusión que surgen inevitablemente en todo movimiento social como resultado de las primeras dificultades".

Los sindicatos debían -según lo programado por el oficialismo- cooperar tan decididamente a los planes gubernamentales, que su primera misión consistía en moderar sus aspiraciones económicas, cuidar los intereses patronales y contribuir a la vigencia del equilibrio entre la producción y las remuneraciones. Más tarde (1979-1980) la burocracia de la COB volverá a repetir esta tesis capitalista. El movimiento obrero, dijeron los cazadores de brujas, conducía a la bancarrota, porque tenía en cuenta únicamente sus intereses de clase y no la prosperidad empresarial. Lo primero que tenía que hacerse era cortar las alas a los obreros, acostumbrados a formular demandas exorbitantes: "Empero, los derechos sociales deben, en términos generales, corresponder a un determinado estado y capacidad de la economía. Es preciso buscar un equilibrio completo entre ambos términos de la ecuación... La fórmula concordante entre la política social y desarrollo económico ha sido enunciada en términos simples al tratarse de economías desarrolladas: los salarios altos son el mejor medio para asegurar utilidades razonables a la industria. Es fundamental la adopción de una política social que se halle acorde con nuestra propia realidad..." El gorilismo buscaba encerrar al sindicalismo en los estrechos moldes del tradeunionismo más mezquino, que se conforma a limitar sus propios objetivos salariales a las posibilidades de los empresarios. El economismo propugnado por Bánzer estaba al servicio de una política totalitaria y reaccionaria, era parte de ella. La máxima concesión que se ofrecía a los obreros, esto para un futuro indeterminado, era la fijación del salario familiar y que no sería más que la reunión de todas las vigentes "prestaciones fraccionadas que... desaparecen en gastos superfluos (subsídios de lactancia, familiar, pre-familiar, matrimonial defunerales y del hogar)". De una manera general, las leyes sociales fueron presentadas como excesivamente generosas.

Partían de la certeza de que los obreros no tenían capacidad creadora y por tanto era absurdo pensar que pudiesen encaminarse hacia el poder; les parecía delirio y despropósito de malos bolivianos, que debían ser totalmente extirpados para felicidad de los propios trabajadores. Se sostuvo que si algo importante se hizo en el campo obrerista fue gracias a los nacionalistas, elementos extraños, en cierta manera, al sindicalismo. La historia fue falsificada y condicionada a las necesidades

de la reacción, siguiendo en este terreno lo ya hecho por los teóricos y escribas del MNR:

“Con las presidencias de Toro y Busch avanzó la política social, mediante la creación del Ministerio de Trabajo y la dictación de la Ley General del Trabajo. Durante el gobierno del segundo, se organizó la primera Confederación de Trabajadores, que llevó una vacilante y precaria vida hasta el gobierno del coronel Villarroel, durante el cual los sindicatos adquirieron mayor vitalidad. Es en este período que el movimiento obrero logró, por primera vez en Bolivia, hacerse presente –organizativamente- en el escenario de las luchas sociales. En 1952 se produce otra etapa de ascenso de las masas laborales, quienes prohijadas por el nacionalismo revolucionario fundan su Central Obrera Boliviana, sellando la unidad aparente del movimiento nacional”.

¿Por, qué el gorilismo marginó tercamente de la vida nacional a la COB, valiosa herencia -según su testimonio- del glorioso pasado del nacionalismo? Según las declaraciones al respecto del Ministro de Trabajo de Bánzer:

“Por el momento la Central Obrera Boliviana no se abrirá. Su apertura no se autorizará bajo ningún punto de vista”. Añadía -dice “Presencia”- que la decisión del gobierno era unánime, pese a que existían varias organizaciones laborales que realizaron gestiones para lograr el funcionamiento del máximo organismo sindical de la clase trabajadora del país ¹⁸. El movimientista Guillermo Fortún, Ministro de Trabajo a la sazón, puso interés en hacer resaltar que la actitud anti-cobista del gabinete era unánime, afín de hacer constar que también los representantes del MNR y de FSB respaldaban la línea adoptada por el grupo militar, encabezado por el general Bánzer. Si lo que sostiene el documento sobre Política Social correspondiese a la realidad, el anticobismo de los gorilas resultaría inexplicable y absurdo. El nacionalismo de contenido burgués y la COB han seguido dos líneas diferentes y diametralmente opuestas, habiéndose creado entre ambos extremos un profundo abismo, que los gorilas se han encargado de llenarlo de sangre. El no funcionamiento de la COB se convirtió en uno de los principios del gobierno, que sólo podía ser derribado por el poderoso empuje obrero y popular; llegado ese momento, los mismos que se negaron a aplicar el Código del Trabajo frente al pedido de funcionamiento del organismo laboral supieron encontrar argumentos legales para darle luz verde ¹⁹.

Se olvidaron las situaciones políticas concretas buscando convertir en una abstracción, en una generalización, el esfuerzo obrero por aumentar la producción e inclusive renunciar a sus propios objetivos inmediatos (salariales). Se pretendió convertir esta actitud, admirable por muchos conceptos, en la norma que debía guiar al sindicalismo de todos los tiempos. “Los trabajadores cumplieron un gran rol dentro de este esfuerzo nacional. Realizaron abnegados empeños para elevar la producción, como lo hicieron los mineros en los primeros meses que siguieron a la nacionalización de las minas; los campesinos, una vez dueños de la tierra, organizaron cooperativas y exigieron al gobierno ayuda en forma de maquinarias...” Al oficialismo esto le pareció

18- “Presencia”, La Paz, 12 de junio de 1973.

19- El mismo día en que desahuciaba el funcionamiento de la COB, el ministro Fortún dijo a la prensa: “tenemos la Ley General del Trabajo bajo el brazo y vamos a ejercerla en todo momento y en todo su rigor` (Declaraciones publicadas el día 12 de junio de 1973).

bien, pero eso no fue todo, sino que añadió que cuando los trabajadores comienzan a caminar solos se ensoberbecen, se entregan a los demagogos marxistas y se desvían de su rol dentro de la sociedad y del sendero patriótico: "Como consecuencia de esta realidad, la Central Obrera Boliviana se constituyó en segundo poder en el escenario social y político, con un rigor sin precedentes. Constituía la aristocracia sindical, nacieron bajo su protección algunos falsos dirigentes que desviaron los objetivos datan extraordinario movimiento obrero. Obtuvieron todas las ventajas posibles, coadyuvando en el manejo del poder político. Fueron grandes revolucionarios para la etapa de la "destrucción del viejo orden", la parte más fácil de una revolución; pero cuando se trató de acometer la segunda etapa, la de la construcción, no sólo que abandonaron el cogobierno (en realidad el co-gobierno fue desahuciado desde el Palacio de Gobierno, G. L.), sino que se pusieron al frente. Las excesivas demandas inundaron el ambiente y la Ley General del Trabajo fue minimizada por la multiplicidad de disposiciones emitidas para favorecer a los sectores laborales, sin tomaren cuenta la "débil capacidad económica nacional.

La tarea necesaria e inmediata -así fue presentado el intervencionismo estatal en materia sindical- de destrucción de los cuadros dirigentes, de su eliminación física, debía ser seguida por la formación de nuevos líderes obreros a medida del gorilismo. Ni duda cabe que fue al Estado a quien se le atribuyó la misión de formar a esos nuevos dirigentes: "Organización de cursos de capacitación sindical y promoción de encuentros y reuniones de trabajadores nacionales y extranjeros con el fin de elevar el nivel de dirección y la toma de conciencia acerca de las responsabilidades del dirigente sindical en las tareas del desarrollo económico y social del país". De esta manera las organizaciones sindicales podrían actuar como chaleco de fuerza colocado a los trabajadores, a fin de impedirles que superasen el cuadro marcado anticipadamente por el gorilismo.

Se dirá que en un país en el que predomina el analfabetismo y que está marcado a fuego por el atraso cultural, una escuela de capacitación sindical, por ejemplo, no estaba mal siempre, podría haberse aprendido algo en ella. La cuestión no era tan simple.

Los marxistas buscan convertir a los mejores sindicalistas en militantes revolucionarios y sostienen que es el partido político la escuela ideal para ellos. Los gorilas buscaban transformar a los dirigentes obreros en domesticadores de su clase, para que actuaran como avanzadas de la contrarrevolución en el seno mismo del proletariado. Esta finalidad concreta, contrarrevolucionaria y antiobrera, debía ser cumplida por el tan publicitado sistema de "capacitación sindical".

Habría sido, por otro lado, el colmo del simplismo confundir la "educación" sindical que proyectaban impartir desde el poder los generales fascistas con la formación de sindicalistas que realizaba, sistemáticamente, el reformismo en todas partes del mundo. Citemos un caso, remarcable por muchos aspectos: el Trade Union Congress (central nacional del sindicalismo británico) desarrolla un amplísimo programa de servicios educativos para sus miembros. Cada año, miles de obreros asisten a sus escuelas, se les conceden becas universitarias y reciben capacitación por

correspondencia. Este programa generoso no desea la educación por la educación, sino algo muy concreto: capacitar técnicamente a los sindicalistas para que sean capaces de desarrollar con eficacia la política tradeunionista, por ejemplo discutir satisfactoriamente un contrato colectivo, etc, todo dentro de la perspectiva del mantenimiento del orden social burgués. Los marxistas educan a los líderes sindicales para que sean capaces de conducir a los obreros a la conquista del poder político. Los gorilas fascistas, por su parte, buscaban formar "dirigentes" para que cumpliesen eficazmente el triste papel de carceleros y verdugos de sus compañeros.

Bánzer pudo maniobrar entre algunos sectores obreros atrasados e inclusive llegar al extremo de colocar a éstos, o a algunos de sus sectores, contra ciertos empresarios. Operaciones que se movieron dentro del cuadro político descrito más arriba. Algunas concesiones a las demandas inmediatas sirvieron (esto hasta que la situación económica del país no permitió hacer concesiones de ningún tipo) como puntos de apoyo para estas maniobras. Los generales soñaron con poder ensanchar, por este camino, su popularidad, tan menguada en ese momento.

Después de las consecuencias económicas desastrosas de la devaluación monetaria sobre las masas, para poder salir ileso de las graves tormentas sociales que azotaron al país, el gobierno castrense apresuradamente les otorgó el sueldo catorce (el llamado aguinaldo de Navidad es el sueldo número trece) a fabriles, maestros y empleados de comercio, beneficio que más tarde se hizo extensivo a los mineros y otros sectores laborales. Se trataba de una reivindicación formulada desde tiempo atrás en las filas sindicales. La concesión fue presentada demagógicamente como si hubiese sido lograda gracias a la formación de un bloque obrero gubernamental contra los empresarios, que tímidamente elevaron su voz de protesta por no haber sido convocados a las discusiones habidas al respecto. La finalidad táctica del gorilismo no era otra que fracturar el táctico frente que se había estructurado entre el movimiento obrero y el de la clase media, reduciendo a los mineros a una difícil situación de aislamiento, objetivo que fue logrado gracias a la criminal complicidad de las burocracias sindicales de bancarios, ferroviarios, de comercio e industria e inclusive de la Confederación Nacional de Fabriles.

En el meollo del plan se encontraba la defensa de la propiedad privada burguesa, que entre nosotros equivale a decir, básicamente, defensa de los intereses imperialistas.

El totalitarismo banzerista tenía no pocas contradicciones internas y una de ellas, se refería a que debiendo, por su naturaleza, concentrar a todas las actividades del país en manos estatales e impulsar ilimitadamente el capitalismo de Estado, reconocía, sin embargo, como pivote de su actividad diaria la defensa intransigente de la empresa privada y la libre contratación (en los hechos: derecho irrestricto de la patronal a despedir a los obreros que consideraba peligrosos, políticamente hablando, y a modificar las condiciones de trabajo imperantes, etc.), lo que importaba casi un retorno incondicional al liberalismo en materia económica. Las empresas estatizadas sufrieron duros reveses de parte de los militares que se lanzaron a la constitución de empresas y sociedades que les permitiesen acentuar su influencia en el campo de la economía. Se ideó que estas empresas destinadas a la explotación de materias primas

fuesen mixtas, para que así se filtrase, por esos canales, el capital financiero a los sectores estratégicos de la economía. SIDERSA, creada para convertirse en dueña de la metalurgia, apareció como la competidora y negadora de Comibol, como un paso serio en el camino de la desnacionalización de las minas. Toda vez que aparecían dificultades en las empresas estatizadas, el gorilismo inmediatamente proponía su fusión con alguna empresa imperialista para sacarlas del colapso.

El gorilismo rodeó de ilimitadas garantías a las empresas privadas, fomentó el aumento de sus ganancias y convirtió al gobierno en su incondicional servidor; se propuso, además y desconociendo formalmente la legislación vigente volver a implantar la libre contratación, buscando, como acertadamente dijeron los obreros organizados, despedir a los mejores cuadros sindicales y también a los trabajadores con más años de antigüedad, que eran los únicos que se opusieron a la acentuación del ritmo de explotación. De esta manera los empresarios sólo buscaron inflar sus ganancias, disminuyendo, al mismo tiempo, sus obligaciones hacia los obreros.

Eso no fue todo, se buscó la solución a los males del país en el aumento de las inversiones de capital financiero, que al realizarse bajo el dominio del gorilismo no hizo más que acentuar nuestra dependencia del imperialismo. "La única forma de dar solución a este problema ocupacional, consiste en incrementar la inversión del sector público y privado... creando las condiciones de paz social y estabilidad política para la inversión nacional y extranjera". No debe olvidarse que a la cabeza de los organismos canalizadores de las inversiones fue colocado el viejo sirviente de la gran minería Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, posteriormente sustituido por el barrientista Tapia Frontanilla.

En ningún otro aspecto se denunció más claramente la mentalidad pro-capitalista del plan que en la cuestión agraria. El perfeccionamiento y "profundización" de la reforma, que se la consideró demasiado adelantada, se vio en la posibilidad de que el campesino pudiese ejercer a plenitud el derecho de propiedad sobre la tierra, considerada dentro de los moldes del derecho romano. "El gobierno nacionalista, respecto a la reforma agraria ha dado los pasos necesarios para el afianzamiento y consolidación definitiva de esta medida irreversible. No significa otra cosa, el hecho de haber liberado al campesino del pago de la indemnización por las dotaciones de tierras y, consiguientemente, de la hipoteca legal... que no le permitía el pleno dominio de los derechos de propiedad. La consecuencia podía haber sido, si se hubieran dado determinadas condiciones, la concentración capitalista de la propiedad agraria. No cabe duda que eso era lo que buscaba el gorilismo. El problema central de las masas campesinas no era el usar y abusar del derecho de propiedad sobre sus minúsculas parcelas (cuya magra producción no abastecía ni abastece para alimentar a una familia durante doce meses), sino el salir de su tremenda miseria con todas sus consecuencias desastrosas. El proyecto de imponer, por decisión del FMI, el llamado impuesto único abrió la tenebrosa perspectiva de la agravación de esa miseria.

Los proyectos de alfabetización de los campesinos y de los propios obreros no eran más que la monótona repetición de lo que vienen diciendo desde hace un siglo los teóricos de la clase dominante acerca de sus sueños absurdos de liberar a los

explotados con ayuda del alfabeto y al margen de la violencia.

La proyectada ampliación de los programas de prestaciones sociales, construcción de viviendas, etc., que elementalmente debían correr a cargo de los empleadores y de "su" Estado, se la pensó financiar con el aumento de los aportes del sector laboral, pese a que sus miserables remuneraciones eran diariamente disminuidas como consecuencia de la antipopular y antinacional política monetaria del gorilismo.

El capítulo dedicado a las fuerzas armadas probaba el mesianismo que animaba a los gorilas y que era moneda corriente dentro del fascismo. Si el sindicalismo revolucionario era la negación misma de la patria (este es el punto de partida de la "filosofía" banzerista), el ejército constituía su encarnación. Si los extremistas buscaban precipitar la ruina de los bolivianos, éstos sólo podían conocer la felicidad si se abandonaban en brazos de los caudillos uniformados, etc. "Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituyen el fundamento de la nacionalidad. Surgieron junto con la Patria, y se han mantenido como única institución de carácter permanente, aglutinador e integrador de Bolivia". Los gorilas olvidaron que los mineros y fabriles en 1952 hicieron morder el polvo de la derrota a estos predestinados a la gloria.

Según los gorilas, al sindicalismo pervertido, que destruye los valores de la bolivianidad, se opone el ejército considerado como la más alta escuela de bolivianidad y de nacionalismo, como el único reducto donde los ciudadanos pueden aprender patriotismo. "En su seno se forma el carácter y el civismo del futuro ciudadano, que al ingresar a la vida civil con lleva la responsabilidad que exige la teoría y la práctica de un nacionalismo basado en la justicia social, en la defensa de los valores humanos, del patriotismo y de la cultura nacional".

Se pretendió justificar así el rol de caudillo que se otorga así mismo el gorilismo, el derecho al monopolio de la actividad política. Según las autoridades cuando los obreros hacían política cometían un delito, su obligación era trabajar y callar. Los problemas nacionales serían resueltos por los generales y coroneles.

Tanta grandeza y misiones tan elevadas que se otorgaban los caudillos uniformados en el papel, quedaron minimizados por su sanchopancismo. En el reparto de los recursos y servicios estatales los militares se llevaron la parte del león. El plan enumeró todas las obras que se harían (mejor, que ya se estaban haciendo) en beneficio directo de los miembros de las fuerzas armadas. Parecería que los elementos uniformados no debitaban en cambiar su puesto asegurado en la gloria por un puñado de lentejas. Cosas del gorilismo criollo. Nadie ignoraba que los militares, de manera pública o encubierta, se otorgaban una serie de beneficios de los que carecían los demás bolivianos.

El mesianismo castrense era uno de los ingredientes fundamentales del totalitarismo político. En los hechos, la jerarquía castrense se constituía en el único partido político burgués en toda la acepción del término. Se trataba del resultado de la evolución política operada en los últimos años en el campo de la derecha tradicional y del nacionalismo: el fracaso de los partidos políticos y de los métodos democráticos, de

gobierno, entregó la decisión de los problemas políticos a los líderes uniformados, poseedores de mando de tropa y dispuestos a imponerse a través de métodos castrenses.

Podría haberse pensado que el gorilismo era el amo indiscutido del país, Esto no era más que una ilusión y dentro del mismo obsecuente Frente Popular Nacionalista se sabía que las operaciones económicas estaban en manos del Fondo Monetario Internacional y la menor de las decisiones políticas precisaba, para ser ejecutada, la venia del embajador norteamericano Siracusa ²⁰(20). Esta era la realidad: el gorilismo sólo podía gobernar, tiranizar y asesinar si lograba el apoyo del imperialismo norteamericano, luego decía sí la Confederación de Empresarios Privados, que se daba el lujo de criticar la sabiduría de Bánzer y de sus "técnicos" en materia económica. Hay que repetir nuevamente: el gorilismo boliviano no era más que un instrumento del imperialismo y de los empresarios privados, es decir, de la misma anti-patria.

El embajador Siracusa sabía lo que hacía y tenía plena seguridad de que él, en su calidad de portavoz del imperialismo norteamericano, era el verdadero amo, siendo una de sus tareas "diplomáticas", señalar los rumbos que debía seguir el gobierno castrense: "El crédito y respeto ganados por Bolivia al solucionar los casos de nacionalización de las propiedades de la Gulf y de la Mina Matilde ayudarán a la larga a traer nuevas inversiones. El logro de este propósito, sin embargo, mucho dependerá del mantenimiento de la estabilidad económica y política y de cómo la inversión futura sea tratada".

¿Qué era Bolivia para los Estados Unidos?, el embajador se encargó de responder: "Bolivia es un país de vastas riquezas todavía no tocadas, que clama sólo por la estabilidad, la paz y el buen gobierno, bajo el cual los bolivianos puedan tener la oportunidad de sacar el mayor provecho de sí mismos y de su herencia natural" ²¹.

Muchos esperaban que los yanquis abrirían generosamente la bolsa para satisfacer las necesidades de los gorilas y resolver los problemas nacionales. Hubo tiempo para desengañarse: el imperialismo buscaba gobiernos políticamente seguros, pero, sobre todo baratos; los negocios no podían ser entorpecidos por la política. Los inversionistas, antes de largar un dólar, exigían garantías para obtener ganancias y para explotar al país en paz sin correr mayores riesgos. Cuando la economía norteamericana conoció algunos tropiezos, el gobierno Nixon no tuvo el menor reparo en lanzar al mercado los excedentes de las reservas de estaño, precipitando agudos problemas en un país monoprodutor como Bolivia. Ante las reclamaciones del gobierno, hechas en tono servil y suave respondió que primero estaba el deber de defender la economía norteamericana y que, como una concesión, esas ventas se harían en stocks no muy grandes, a fin de amortiguar sus efectos negativos sobre la economía boliviana.

El gobierno militar debutó en medio de una terca resistencia popular protagonizada

20- En junio de 1973 la prensa anunció que Siracusa había dejado de ser embajador en Bolivia y que cumpliría iguales funciones en el Uruguay. Desde hace años el Departamento de Estado lo lleva allí donde tienen que operarse cambios políticos de importancia.

21- Discurso pronunciado en el Consejo Boliviano Americano de Negocios, 20 de febrero de 1973.

por la clase obrera y por parte de la clase media, resistencia pasiva matizada con brotes de violencia, que a veces se tradujo en simple expectativa. Las noveles autoridades parecían ciegas, dando bastonazos a diestra y siniestra; sin embargo, las circunstancias les obligaron a adoptar una táctica visible a simple vista: no atacar frontalmente, por lo menos al comienzo, a los sectores proletarios más fuertes (menudearon las declaraciones en sentido de que no ingresarían tropas militares a los campamentos mineros, que se respetarían la inamovilidad de los trabajadores y el fuero sindical, exceptuando a los comprometidos en los acontecimientos de agosto de 1971, etc) y comenzaron aplastando a las organizaciones de la clase media.

Las universidades fueron militarmente ocupadas y, en los hechos, quedó brutalmente desconocida la autonomía (autogobierno, co-gobierno docente-estudiantil y manejo independiente de los recursos económicos). En este plano la "revolución" fascista no atenuó ninguno de sus rasgos desde el primer día.

Mediante decreto de 4 de septiembre de 1971, el gobierno militar suspendió las labores universitarias hasta fines de febrero de 1971. Sectores estudiantiles y también docentes insistieron inútilmente en su empeño deponer en marcha a las diferentes facultades, lo que constituía una amenaza inmediata para el gorilismo. Los militares, movimientistas, falangistas y también la izquierda, comprendían con claridad que se trataba de una medida extrema y sumamente delicada para el porvenir tanto del oficialismo como del movimiento revolucionario. Efectivamente, la lucha posterior de amplios sectores de la clase media y de las masas en general en contra del gobierno de Bánzer encontró uno de sus ejes en la necesidad de reconquistar la vigencia de la autonomía con todas sus derivaciones.

La universidad, hasta agosto de 1971, se había convertido en un centro de belicosa resistencia a la reacción en general y al propio nacionalismo pequeño-burgués. Como hemos visto, actuaba como una fuerza más en la lucha por el socialismo. Una y otra vez hubieron intentos de cancelar la autonomía universitaria, con la finalidad de convertir a las casas superiores de estudio en instrumentos dóciles al servicio incondicional de los gobiernos de turno. Tampoco faltaron los proyectos y maniobras tendientes a controlar, de manera directa o no, al movimiento universitario, en cuyas filas las tendencias marxistas reclutaban a sus adeptos. La radicalización de las masas trabajadoras y su politización se reflejaron directamente en los medios estudiantiles, cuya consecuencia fue, precisamente, la movilización de los núcleos intelectuales detrás del proletariado y la adopción por aquellos de la estrategia revolucionaria de la clase obrera. La lucha a muerte entre las tendencias revolucionarias y contrarrevolucionarias, es decir, entre la clase obrera, convertida en caudillo de toda la nación, y el fascismo, se expresó en el dilema de su mayor radicalización o bien de su destrucción. Los planes fascistas de aplastamiento físico de las organizaciones obreras y populares sólo podían funcionar si, previamente, se ajustaban las cuentas con las ciudades, vale decir, con el movimiento estudiantil.

En uno de los considerandos del mencionado Decreto se dice que el objetivo del gobierno no es otro que el de retomar a los sanos principios de la autonomía universitaria. Las modificaciones impuestas posteriormente demuestran que lo que

buscaba era, concretamente, la destrucción de la autonomía. El Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Educación Superior, subordinó a su voluntad a las casas superiores de estudio. Esa cancelación era ya evidente cuando, en plena vigencia de la Constitución Política de 1967 (en cuyo texto se incluye el régimen de la autonomía), se procedió a la suspensión de clases, al despido de la totalidad de catedráticos y altos funcionarios, a la fijación de fechas de exámenes al margen de los organismos tradicionales, a la constitución del equipo que proyectó la famosa "reforma universitaria", etc.

En otro lugar hemos consignado que para los marxistas la autonomía en manos de los sectores revolucionarios convierte a las universidades en importantes canales de movilización contra el gobierno enemigo del pueblo y sirviente del imperialismo. Esto explica por qué se considera a la lucha por la defensa de la autonomía en parte integrante de la lucha revolucionaria en su conjunto. No pocos estaban seguros, conforme a las primeras promesas del régimen, que el gorilismo se limitaría a controlar los puestos claves de la universidad, conservando intacta su autonomía. Momentáneamente podía servirle la maniobra, pero no quería correr el albur de que la izquierda volviese a reconquistar el control de la universidad autónoma. En 1973 creció la agitación estudiantil alrededor de la consigna del retorno al régimen de la autonomía y del co-gobierno paritario docente-universitario.

11

Excesos gubernamentales

Los primeros en sufrir las consecuencias de la destrucción de la autonomía fueron los partidos políticos que conformaban el FPN (FSB y MNR). Resultó enormemente mellado su prestigio en los medios estudiantiles e internamente se generó una oposición que hablaba del retorno a la autonomía. El primer antecedente de estas posturas se encuentra en el rechazo que hizo la Avanzada Universitaria del MNR (con posterioridad se creó otra Avanzada leal a la suprema jefatura partidista) de las medidas del gobierno, por considerarlas francamente fascistas.

Bolivia vivió momentos de febril inquietud después de la victoria de los generales y éstos impusieron un régimen de cuartel al que debía sujetarse toda la ciudadanía. Se emplearon violencia y brutalidad en el empeño de arrancar de raíz todo brote de izquierda a lo largo del país. Había que castigar duramente al pueblo por sus desviaciones izquierdistas y este criterio no era privativo de las altas capas del Ejecutivo, sino que se extendía hasta los encargados de gobernar las poblaciones. El Prefecto de Sucre, Gastón Moreira Ostría, resumió así su programa: "Mi labor funcionaria estará enmarcada dentro de la Ley y el respeto por todos los derechos humanos, pero advierto con energía que no permitiré so pretexto alguno brotes de anarquía y de caos que traten de sembrar la desunión de los chuquisaqueños" ²².

El Prefecto del Departamento de Santa Cruz, la zona brava y, por esos días, la
22- "Presencia", La Paz, 14 de septiembre de 1971.

mayormente convulsionada, con toda sencillez decretó la muerte civil de todo izquierdista sobreviviente: "El Prefecto del Departamento, Gustavo Melgar, advirtió que no permitirá el retorno a sus labores de aquellos trabajadores radialistas y periodistas que estuvieron detenidos durante los últimos sucesos políticos, sindicados de realizar actividades extremistas". La misma autoridad, en su nota enviada a la Asociación Boliviana de Radiodifusión, dice: "En nuestra revolución hubieron vencedores y vencidos. Respeto a las ideas de los vencidos pero no estoy dispuesto a permitir que éstos tengan cabida en las fuentes de trabajo que en corto o largo plazo serán utilizados como instrumento de las ideas vinculadas con la violencia, el caos y la anarquía". A renglón seguido el tremendo ukase: "prohibo terminantemente la recontratación de estos elementos" ²³.

Muchos hechos demostraron que era voluntad del gobierno cerrar todos los resquicios por donde pudiese asomar el pensamiento libre o la oposición y si ésta amenazaba con perfilarse, se volcaba sobre ella todo el aparato represivo para pulverizarla completamente. Cuando se probó que los estudiantes podían expresar en las calles su protesta, se procedió simplemente a cancelar el año escolar de 1971, faltando un poco más de un mes para el verificativo de los exámenes finales. Bánzer estaba seguro de haber destruido los gérmenes mismos de la rebelión estudiantil; lo que hizo la brutalidad fue únicamente postergar por algunos meses la protesta juvenil.

Los golpistas debutaron en Santa Cruz fusilando a ocho universitarios, por expresa orden del temible coronel Selich.

A mediados del mes de septiembre de 1971, portavoces del Ministerio del Interior hicieron saber que habían perdido la vida más de treinta presuntos guerrilleros en batallas que duque se desarrollaron en la selva oriental. De estas batallas nunca nadie supo nada. Los observadores más moderados expresaron que se trataba de otros tantos fusilamientos por los organismos de represión de quienes pasaban por comprometidos con organizaciones revolucionarias. En La Paz y en todo el país se supo que en el edificio universitario y en el cerro de Laika-Cota fueron pasados por las armas decenas de estudiantes y obreros.

Como en los mejores tiempos del general Barrientos, el crimen político fue convertido en método de gobierno. El ultimar a los adversarios políticos de manera sistemática no fue una creación de la maldad y picardía criollas, se trató de un método importado juntamente con la CIA, que todavía en 1980 seguía predominando en la política burguesa boliviana; para la organización represiva norteamericana no debía haber prisioneros de determinada categoría que pudiesen ser motivo de agitación popular, pudiendo, además, tarde o temprano, recobrar su libertad, debían haber cadáveres, mudos testigos de la bestialidad yanqui y gorila.

El balance de la represión desencadenada por el gobierno Bánzer en el lapso de veintidós meses, los más duros de la represión y nada más que un minuto en la historia de un pueblo, fue dantesco. Cientos de cadáveres cayeron en las prisiones, en las calles y en las ciudades, en los caminos y en la selva; cientos de hombres, 23- "Presencia", La Paz, 19 de septiembre de 1971. A mediados del mes de septiembre de 1971.

mujeres y niños soportaron una durísima prisión en condiciones subhumanas, en las cárceles y en los campos de concentración, donde la tortura era una norma reconocida por las autoridades ²⁴; miles de bolivianos de todas las condiciones sociales y políticas deambulaban por otros países, convertidos en parias y desgarrados por la miseria y la desesperación propias del ostracismo. Todavía no se ha escrito el Libro Negro de este infernal período, pero en la prensa diaria y en las hojas sueltas se encuentran los testimonios de quienes padecieron y fueron testigos de las torturas y de los padecimientos de los prisioneros políticos.

La policía con sus golpes obligó a los familiares de los presos a unirse y a prestarse ayuda recíproca; esta organización informal, sin ningún título rimbombante, fue la gran protagonista que inició la batalla por la defensa de las garantías democráticas. La iglesia profundamente escindida por la influencia que sobre ella ejercitaban las ideas revolucionarias de nuestra época, llevó una existencia azarosa y de continuas fricciones con el régimen totalitario. Iglesias y conventos fueron allanados y baleados por la "cristiana" jerarquía castrense. Los sacerdotes se levantaron una y otra vez para poner a salvo el derecho de asilo que la tradición, más que la ley, reconocía en favor de los templos, edificaciones y predios de la cristiandad. No fueron las ideas de los curas izquierdistas lo que más molestó al Ministerio del Interior, sino el que éstos ayudasen a los revolucionarios a escapar de sus garras. Las organizaciones cristianas han contribuido en mucho al conocimiento de las verdaderas dimensiones que adquirió la represión en el país. El FRA, desde el exterior, dedicó una parte de su actividad a la campaña de denuncias de las monstruosidades cometidas por la barbarie fascista, cosa igual hicieron las múltiples organizaciones nacidas bajo su amparo.

El gobierno fascista, totalitario por su esencia, tampoco podía soportar la existencia de una iglesia independiente y opositora, en cuya conducta podían influir, en alguna forma, las tendencias de izquierda. La iglesia independiente podía capitalizar, en cierto momento, el descontento popular y erigirse en un poder desafiante del gobierno central. Bánzer y sus seguidores se esforzaron por someter a la Iglesia a su voluntad, unas veces por medio del halago y el soborno y otras, por la intimidación. Los sacerdotes han consignado en un impreso el itinerario de su pugna con el Estado ²⁵ y que sintetizamos a continuación:

"Una característica importante del régimen durante los primeros meses de su llegada al poder fue la instrumentalización del sentimiento religioso popular. La 'Gran marcha de la Fe' del 17 de septiembre de 1971 fue ampliamente propalada como 'un apoyo al cambio político producido'. También los discursos oficiales del Presidente Bánzer, del Ministro del Interior, del Sub-secretario de Culto y otros, identificaban insistentemente

24- "Cuando aseguró a las señoras (familiares de los presos, G.L.) que no se aplicaban más las torturas, éstas le replicaron que sabían de casos de malos tratos. El Ministro dijo entonces que era necesario discriminar casos en que 'por disciplina', cuando se resistían a colaborar en algunas faenas de las detenciones, se les aplicaba golpes poco peligrosos" ("Presencia", La Paz, 14 de junio de 1973) . El Ministro Castro se declaró cristiano y dijo que por esto había ordenado humanizar el trato dispensado a los presos políticos, lo que, como se ha visto, no impidió el uso del garrote en las prisiones.

25- "La Iglesia Boliviana bajo el régimen del Coronel Bánzer", La Paz, 1º de noviembre de 1973. Se trata de una publicación anónima, multicopiada y de 4 págs, 21 x 33 cm.

su posición política y sus actitudes religiosas de defensa de los valores cristianos, lucha contra el ateísmo, profesión de fe católica, etc., al mismo tiempo que condenaban a los sacerdotes de avanzada y discriminaban entre partes del Evangelio y de los documentos eclesiásticos que no se deben predicar...

"El gobierno Bánzer se siente frustrado en su propósito de instrumentalizar a la Iglesia a través de su Jerarquía. Es posible de que ahora en adelante el Gobierno cambie de táctica con respecto a la Iglesia; fracasado en su propósito de identificarla con su propia política, tratará de intimidarla". Este fracaso explicaría la aparición en las filas del oficialismo, dé "un mal disimulado anticlericalismo de derecha".

Se pasa revista a los actos gubernamentales que desmienten la propaganda en sentido de que Bánzer fuese el "defensor de la fe": "Ha allanado reiteradas veces conventos e iglesias y ha apresado a sacerdotes y religiosas. Diez y ocho sacerdotes han tenido que abandonar el país por verse gravemente amenazados. Lo mismo sucedió con tres pastores protestantes y con cuatro religiosas católicas. Quince casas religiosas fueron allanadas, algunas por haber dado asilo a perseguidos políticos y otras por falsas sospechas. En el Convento de la Recoleta de Sucre, donde tradicionalmente se han refugiado muchos perseguidos políticos, fueron apresados dos jóvenes universitarios. Tampoco fue respetada la clausura papal del Convento de las Carmelitas de Santa Cruz. Repetidas veces se ha faltado al respeto a nuestros Obispos. La residencia de Monseñor López fue allanada dos veces por agentes del Ministerio del Interior. Monseñor Bernardo Chierhoff fue apresado por unas horas. Ante la protesta formal y enérgica de Monseñor Rodríguez por el apresamiento injusto de un sacerdote, el Prefecto de Santa Cruz emitió un documento torpe y ofensivo para la autoridad religiosa. Monseñor Manrique, Monseñor Gutiérrez y Monseñor Esquivel han sido calumniados por cierta prensa adicta al gobierno".

La Iglesia, pese a sus fisuras internas y a la persecución, no dejó de ser una gran potencia y así lo ha reconocido el gobierno, que con frecuencia acordó con ella pactos y treguas. "Ante las frecuentes violaciones del tradicional derecho de asilo y los reclamos de los señores Obispos, se llegó a un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno en el sentido de que la autoridad religiosa sería consultada antes de proceder a cualquier allanamiento de las iglesias o las casas religiosas. En algunos casos tampoco esto se respetó. En el convento de Achacachi el Sagrario fue violado sacrílegamente ...

Se sintió también molesta cuando el gobierno metió la mano en el campo de sus intereses invisibles: "El gobierno ha procedido de una manera sistemáticamente inconsulta con respecto a los problemas mixtos. Se dictó una Ley sobre Seguridad Social lesiva para los intereses de los colegios privados sin que mediase ningún tipo de consulta ... Los mismo sucedió con la Ley sobre la Organización de la Universidad Boliviana con respecto a lo que afecta a la Universidad Católica. Tampoco se ha hecho hasta ahora nada para indemnizar por la expropiación del edificio IBEAS. En la-expropiación del Asilo San José se ha ofrecido a las religiosas una suma que no llega a la mitad del valor real del terreno".

Luego se enumeran, a grandes rasgos, los casos más notables de violación de las garantías democráticas y de intimidación a los órganos de prensa:

“El apresamiento de varios periodistas, además del medio centenar que tuvieron que refugiarse en el exterior, creó amedrentamiento y temor en los ámbitos de la prensa oral y escrita. La auto-censura en la prensa escrita llega a límites insospechados. Ni “Presencia” a pesar de ser el periódico de la Jerarquía, se ha atrevido a romper lanzas en defensa de la más elemental libertad de expresión. Sigue primando en este periódico un criterio eminentemente comercial. Son muchos los cristianos y los sacerdotes que se sienten profundamente decepcionados por la docilidad y el servilismo con que “Presencia” acepta los criterios oficialistas.

“Otros medios de comunicación de la Iglesia como Radio FIDES y Radio Pío XII han sido presionados y amenazados por sus críticas, aunque en tono menor, frente a los excesos del gobierno.

“Desde el principio el gobierno procuró limitar la libertad sindical a los estrechos marcos localistas y oficialistas. Muchos dirigentes sindicales están prófugos o en las cárceles. El gobierno se niega terminantemente a permitir la reorganización de la COB... En el presente mes de octubre han sido tomados presos algunos dirigentes fabriles por el mero hecho de protestar contra el alza vertiginosa del costo de vida. Se han instrumentalizado algunas elecciones locales por medio de amenazas y encarcelamientos de los candidatos opositores y por medio de abundantes coimas”.

La Iglesia tampoco vio con buenos ojos la sistemática violación y olvido del ordenamiento jurídico: “La Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia presentó recurso de habeas corpus contra el Ministerio del Interior por el apresamiento de quince profesionales, el día 3 de junio de 1972. El mismo día se emite rápidamente el Decreto-Ley N° 10295 por el que se otorga a los Servicios de Seguridad la facultad de detener por tiempo indefinido e investigar en forma irrestricta todo delito referente al orden público y seguridad del Estado... Como medida intimidatoria el propio Presidente de la Confederación de Profesionales, doctor Manuel Morales Dávila, fue detenido por el Ministerio del Interior durante varios días ..

“La arbitrariedad con la cual se hace uso de la Ley tiene su fuerte en el Decreto supremo No. 09875 del día 7 de septiembre de 1971 por el que se puso en vigencia la Constitución Política del Estado de 1967, ‘en todo aquello que no contradiga el espíritu y naturaleza del Gobierno Nacionalista y sus realizaciones’. Con la presente norma legal el gobierno de Bánzer se auto-define como claramente dictatorial ya que se coloca sobre la Constitución y no debajo de ella como debería ser...”

El capítulo segundo del documento está dedicado a describir cuál fue la actitud de la Iglesia frente a esos lamentables hechos:

“La actitud de la Iglesia frente a hechos y posiciones anticristianos del gobierno ha pasado por varias etapas. También ha sido diferente según las personas. Algunos prepararon el cambio (Novena Preparatoria a la Fiesta de la Virgen de Cotoca) y

muchos se alegraron por pensar que el golpe significaba entrar en una etapa de orden, de progreso y de respeto a la dignidad de la persona. Frente al uso descarado del sentimiento religioso como factor político (procesión de los franciscanos), a los allanamientos de los conventos e iglesias, al apresamiento de sacerdotes y exilio de algunos, a la persecución, encarcelamiento, confinamiento y torturas de gran número de presuntos enemigos del régimen hubo una reacción valiente de parte de la Jerarquía, aunque algunos la juzgaron excesivamente institucionalista (defensa de la autoridad episcopal) o "gremialista" (defensa de los sacerdotes). Frente a nobles gestiones privadas en defensa de los derechos de las personas y ante la inutilidad de estos esfuerzos en la mayoría de los casos, llegó una especie de cansancio. La Iglesia se replegó sobre sí misma. El gobierno dejó de molestar directamente a los miembros de la jerarquía o del clero y 'un gran silencio' cubrió sus mutuas relaciones... Iglesia y gobierno optaron por seguir cada cual por su camino salvando las normas elementales de mutua convivencia.

...Nadie puede hablar... Solamente el Cuerpo Colegial de los Obispos tiene en estos momentos la autoridad, el respeto y la fuerza moral suficiente para decir la verdad. Las razones para hacerlo son claras y evidentes: apresamientos por simple denuncia anónima, detenciones en lugares insalubres, aplicación de la ley de fuga, fusilamientos sin juicio previo, torturas.

Algunos sacerdotes fueron incorporados al equipo gobernante (Zárate fue designado Alcalde de Potosí y Leónidas Sánchez Jefe de Relaciones Laborales en Comibol, este último pareció haber caído en desgracia bajo la sindicación de estar conspirando contra el gobierno desde la ultra-derecha), esto como un recurso utilizado para demostrar la veracidad de la tesis en sentido de que Iglesia y gobierno eran la misma cosa. Pero, una enorme cantidad de sacerdotes fueron obstaculizados en el ejercicio de sus funciones: "otros muchos ya no pueden hacer reuniones de concientización o revisión de vida, ni pueden predicar libremente la Palabra de Dios. Citar el Concilio de Medellín resulta peligroso. Muchos sacerdotes son controlados directamente por el Servicio de Inteligencia. En la práctica el gobierno no acepta más que una acción cultural y sacramentalista de parte de los sacerdotes".

Los hombres de la Iglesia sostuvieron que la función moralizadora de la institución estuvo ausente frente al grave problema de la corrupción que se origina en las cumbres mismas del Poder Ejecutivo y a la "total carencia de justicia distributiva":

"Una de las causas determinantes de la actual bancarrota económica ha sido la corrupción en la Administración Pública; durante el gobierno de Bánzer se han creado 6.000 puestos burocráticos, se ha aumentado un 40% el sueldo de los militares, se han comprado gran cantidad de vehículos oficiales, han sido liberadas de impuestos muchas importaciones consignadas a nombre de personas adictas al régimen, se ha realizado una intensa propaganda política oficialista a costa del erario público, se ha despedido de puestos técnicos a muchos especialistas para distribuir cargos de gran responsabilidad entre personas ineptas adictas al gobierno, muchos altos funcionarios concededores de la inminente desvalorización de nuestro signo monetario se han servido de sus influencias para obtener gran cantidad de dólares haciendo que

las reservas monetarias descendiesen de cuarenta y siete millones a veinte millones de dólares . . .”

Hicieron circular una especie de “carta-cadena”, fechada el 4 de noviembre de 1972²⁶ y que contenía denuncia detallada de los casos de violación de las garantías democráticas, de apresamientos, torturas, asesinatos, violación de mujeres, etc. “Queremos presentar -decía el documento- en forma esquemática pero totalmente verídica e imparcial una serie de hechos y de actos en los que se prueba las flagrantes violaciones de los derechos de las personas en los que incurre de modo sistemático y constante el actual gobierno de Bolivia”.

En esa pieza documental anónima se sostuvo que al finalizarse) año 1972 habrían 1.000 presos políticos y 42 mujeres. La cifra fue a todas luces abultada, exceptuando la que se da para las mujeres. Se comienza señalando la forma por demás arbitraria en que eran apresados los ciudadanos, por simple delación o sospecha y se añade que la represión también alcanzó a los propios partidos oficialistas: “Simples delaciones de palabra son suficientes para que se aprese a cualquier ciudadano... La represión se orienta en cualquier dirección, por eso nadie se puede sentir seguro. El mismo Paz Estenssoro, pro hombre del actual gobierno y miembro eminente del Frente Popular Nacionalista lo declara abiertamente en una carta dirigida al Presidente Bánzer: “En el curso del año y poco más, que lleva de vida el gobierno del FPN, el MNR ha sufrido la detención de varios de sus dirigentes y militantes. Unos han sido puestos en libertad merced a laboriosas gestiones llevadas a cabo en su favor; otros, empero, continúan detenidos sin haberseles probado culpabilidad” (“Presencia”, 5 de agosto de 1972).

Se describen los campos de concentración, comenzando por la Isla de Coati: “El acceso a este campo de concentración está totalmente prohibido. Los detenidos no pueden recibir ninguna visita ya sea de sus familiares o de algún médico. Tampoco se les puede hacer llegar ninguna clase de ayuda. Se les ha negado terminantemente aún la asistencia espiritual. Después que 56 detenidos lograron fugarse de Coati, el día 2 de noviembre (1972), se ha podido comprobar que muchos de ellos estaban afectados por graves enfermedades, debido, sobre todo, al régimen inhumano de vida al cual han sido sometidos...”

La reapertura por la restauración rosquera de Coati, enclavada en medio del lago Titicaca, como prisión para elementos políticos, estremeció a la opinión pública nacional e internacional. Venía precedida de una negra historia y fue cerrada por la revolución de 1952. Posteriormente a la huida de 56 prisioneros, Coati concluyó siendo anulada como prisión. Ni duda cabe que se trataba de una victoria lograda por la sistemática campaña hecha en defensa de los derechos humanos más elementales de los prisioneros políticos.

El documento que estamos glosando sostiene que en Achocalla, un vallecito que colinda con la ciudad de La Paz, “están detenidas 26 mujeres... Se sabe que algunas

26- “Violación de los Derechos Humanos en Bolivia”, sin lugar de impresión y fechado el 4 de noviembre de 1972. Documento anónimo, policopiado, 6 pp., 21 x 32 cms. La copia que poseemos lleva una inscripción a mano que dice: “Daniel Arroyo fue asesinado en Viacha”.

de ellas han sufrido torturas y amenazas de muerte para hacerles firmar documentos. Entre estas mujeres detenidas se dan casos patéticos como el de la señora Delfina Burgos, el de la Sra. Judith Durán y de la señorita Mercedes Urriolagoitia... A algunas señoritas se les ha obligado a permanecer desnudas durante interminables interrogatorios, se han dado casos frecuentes de violaciones”.

En Achocalla funcionó también una prisión para varones y allí estuvo hasta poco antes de morir Roberto Alvarado. En la parte baja de la quebrada existía un local de tortura, atendido por ex miembros del ELN. Una vieja práctica policial enseña que los peores verdugos para los militantes de un movimiento son los renegados del mismo.

Sobre el cuartel de Viacha (a 30 kilómetros de La Paz) se dice: “En los primeros meses del actual gobierno fue el lugar de detención más rígido y severo. Se piensa que en la actualidad (noviembre de 1972) solamente permanecen en él algunos elementos del Ejército de Liberación”.

Entre otros centros de detención se citan Chonchocoro, declarado anexo de la cárcel pública situada en la Plaza San Pedro de La Paz, que también servía para el encierro de elementos políticos, “dependencias de la Dirección Nacional de Investigaciones, Planta baja del Ministerio del Interior”, etc.

Alto Madidi, ubicado en la zona tropical y en las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental, también se convirtió en campo de concentración y de él logró huir un grupo de prisioneros, después de haberse apoderado de un avión de las fuerzas aéreas.

Los sacerdotes dedican un largo párrafo a las llamadas “casas de seguridad”, que se han hecho famosas porque en ellas es donde, con preferencia, se tortura a los políticos y se encierra a los más peligrosos: “Generalmente son las casas que fueron arrebatadas a los guerrilleros. Sin embargo, se conocen algunos domicilios que han sido directamente alquilados por el Ministerio del Interior con esta finalidad”.

Se consigna una escalofriante lista de personas fusiladas por las autoridades:

“En Santa Cruz fueron fusilados nueve jóvenes universitarios por orden de Selich y Mario Gutiérrez como represalia por la bomba que estalló en la Plaza en el momento de la manifestación...

“El 21 de abril de 1972 fue fusilado en plena calle el joven Jonny Moncada.”... El periodista Oscar Fernando Núñez, de Cochabamba, fue muerto por la policía. Su cuerpo fue llevado ocultamente esa misma noche, al Hospital Viedma por dos policías diciendo que probablemente se trataría de un borracho que había encontrado la muerte en la calle. En su cuerpo los médicos encontraron dos balas.

“El joven Pedro Morant Saravia es encontrado cerca de la frontera de Chile por soldados del ejército cuando se disponía a escaparse del país. Según las declaraciones públicas del Sr. Prefecto de Oruro es trasladado a La Paz y entregado a las autoridades del Ministerio del Interior. Al día siguiente el Ministro del interior declara a la prensa

que en la frontera con Chile, cerca de la localidad de Huachacalla, han muerto dos guerrilleros: Lisímaco Gutiérrez y Pedro Morant... La horrible verdad es que en las dependencias del Ministerio del Interior "se les fue la mano" a los esbirros del Gobierno.

"Hace apenas un mes, a consecuencia de las torturas recibidas, murió en el cuartel de viacha el joven universitario Ivo Stambuk, natural de Oruro. Murió al habersele engangrenado la pierna debido a profundas llagas que le hicieron en las torturas.

"El Dr. Roberto Alvarado murió en la prisión de Viacha a consecuencia de un edema pulmonar...

"El Cochabamba, el 23 de marzo de este año fue violada y posteriormente fusilada la señorita Elena Amalia Spaltro.

"En la localidad de Caracollo, cerca de Oruro, fue pasado por las armas el minero Cancio Plaza.

"Víctimas de la "ley de fuga" fueron muertos Jorge Helguero, Rainer Ipsen y Enrique Ortega.

"El joven universitario Carlos Barrón, según informe personal de la Sra. Yolanda de Bánzer, fue torturado y matado por agentes del Gobierno en el mes de octubre de este año (1972). Se ha podido comprobar que el Gobierno cometió un trágico error por no haber llegado siquiera a conocer la identidad de dicho universitario.

"Son muchas las personas de las cuales no se sabe el paradero y que presumiblemente han sido muertas: el Sr. José Ovando Ukaski, el estudiante Rodolfo Quinteros, el Dr. Antonio Sempértégui, el Sr. Jesús Saavedra, el Sr. Reynaldo Rengel, el Sr. Efraín Galarza".

La lectura del documento anónimo resultaba estremecedor cuando describe las torturas a las que eran sometidos los presos políticos:

"Celda inundada de agua, donde hay que pasar toda la noche; aplicación de cables con corriente eléctrica de 220 en las partes más sensibles del organismo; quemaduras con cigarrillos; simulacros de fusilamientos, golpes de correas; introducción de alfileres y pequeñas astillas de madera debajo de las uñas; suplicio del potro. Esta tortura practicada con frecuencia en la antigüedad han vuelto a actualizarla algunos elementos sádicos del Ministerio del Interior. El suplicio del potro es simple y eficaz ya que reúne las dos principales características que los torturadores desean: ser terriblemente doloroso y el no dejar rastro sobre el cuerpo de la persona. Una cuerda resistente cuelga del techo, en medio de la habitación. Al preso se le obliga a subirse de pie sobre una silla, le atan sus brazos sobre la espalda con la cuerda que pende del techo. De una patada sacan la silla y el pobre preso queda colgando de la cuerda, el dolor, sobre todo el de las conjunturas de los brazos con el hombro, es uno de los más agudos que se pueden soportar".

El capítulo quinto del documento está dedicado a relatar lo que llama "Algunos casos más patéticos". Nosotros sólo indicamos unos pocos:

Una anciana, la Señora Delfina Burgoa (69 años) pagó con un largo encierro la adhesión a la causa de los perseguidos. La joven Judith Durán (17 años), natural de Sucre, estuvo en las celdas del DIN de La Paz, en Achocalla y finalmente en Viacha. "A raíz de los malos tratos tuvo una hijita prematura el día 21 de marzo de 1972 en un oscuro cuartucho del regimiento Bolívar de Armería... En esa misma celda número cuatro fue bautizada por uno de los presos que le puso un nombre simbólico: Libertad Bolivia Judith".

Mercedes Urriolagoitia es una inválida de medio cuerpo, graduada en Ciencias Económicas de la universidad de Chile, se desempeñó como catedrática en las Universidades de Sucre y la Católica de La Paz. "Fue tomada presa en el mes de julio pasado (1972) y, a pesar de su delicado estado de salud, fue trasladada con los ojos vendados hasta una "casa de seguridad" donde se la tuvo cinco días y cinco noches consecutivas sentada en su carro de ruedas. El haber estado tanto tiempo en esa posición, sin permitirle recostarse, le produjo grave infección en el hueso isquión".

Algunos presos enloquecieron como consecuencia de las torturas.

Hay casos de extrema brutalidad para ser fácilmente creídos: "Es también muy conocido el caso de la Sra. NN que en las torturas, los agentes del Ministerio del Interior, llegaron al extremo de amputarle los pechos... En el Panóptico de La Paz dos jóvenes universitarios fueron castrados por el método de vasectomía. Otros han sufrido graves atrofas de los órganos genitales por golpes y crueles patadas".

Al finalizar se dan los nombres de los torturadores: "El responsable directo de toda la represión es el Coronel Rafael Loayza. Su colaborador más eficaz es Abraham Baptista. Son torturadores directos: Mario Jordán, Gary Alarcón, el "Mosca" Monroy, Víctor Ballivián, Guido Alarcán, "Danger" Salamanca, Capitán Mena y Capitán Vacaflo".

La descomunal y desigual lucha de los familiares de los encarcelados contra los organismos de represión se centró alrededor de los siguientes puntos: 1) juzgamiento de los presos por los tribunales ordinarios y conforme a las leyes generales vigentes; 2) cese del régimen de tortura y humanización del trato en las prisiones (asistencia médica, visitas de los familiares, control de la Cruz Roja Internacional, de la jerarquía eclesiástica, etc); 3) amnistía general.

Esta campaña se entrecruzó, aunque no coordinadamente, con la que desarrollaron los obreros organizados sindicalmente y que buscaban el respeto al fuero sindical y a la integridad física de las organizaciones laborales.

En 1973 se lograron notables éxitos y las autoridades del Poder Ejecutivo se vieron obligadas a retroceder. A comienzos del año un grupo de 81 presos fue pasado a la justicia ordinaria, aunque el trámite de formación de los expedientes demoró mucho tiempo.

El antecedente más lejano de esta verdadera conquista setiene en la huelga de hambre que realizaron los presos y sus familiares en 1972. Los varios planteamientos de habeas corpus que, aunque no tuvieron un resultado positivo inmediato (a uno de los fallos negativos respondió el Presidente de "Justicia y Paz" entregándose al Ministerio del Interior como rehén a cambio de la libertad de varias mujeres), contribuyeron en mucho a la campaña de presiones que, finalmente, obligó a las autoridades a someter a juicio a los detenidos. Aunque la justicia estaba totalmente envilecida y controlada muy estrechamente por el Poder Ejecutivo, era siempre preferible seguir sus tortuosos caminos antes que estar abandonado a las reacciones glandulares de sayones sádicos, así por lo menos se tenía asegurada la vida.

Esta terca campaña se potenció en 13 de junio de 1973, cuande, varias decenas de mujeres, es fosas, madres, hermanas y familiares de los presos políticos, se presentaron en las oficinas del Ministerio del Interior en calidad de rehenes, a fin de lograr que aquellos sean pasados a los tribunales ordinarios de Justicia o en su defecto liberados.

Algunos meses antes hubiera sido inconcebible semejante actitud y seguramente habría desencadenado una bestial represión. En 1973, el Ministro del Interior se vio obligado a dialogar con los representantes de las mujeres y a acceder a muchas de las demandas. La información oficial decía:

"1. Hoy a horas 17, el señor Ministro del Interior concedió audiencia a familiares de detenidos políticos y después de dialogar sobre los motivos por los que éstos se encuentran privados de libertad, manifestó el trato humanitario de que son objeto.

"2. El señor Ministro dijo que en observancia estricta de la Ley y en cumplimiento con la determinación del Gobierno Nacionalista, al igual que los 74 detenidos que fueron sometidos últimamente a la jurisdicción ordinaria, pasarán unos a los tribunales de justicia y otros, considerados dentro de los casos leves, recobrarán su libertad, previa evaluación exhaustiva de antecedentes.

"3. Asistieron a la reunión el R.P. Eric Wasseige, en representación de la Comisión de Justicia y Paz y el Dr. René Saavedra por el Colegio de Abogados.

"La Paz, 13 de junio de 1973".

Que las condiciones eran favorables para el exitoso desarrollo de la campaña, que importaba arrancara los presos políticos de las garras de sus verdugos y torturadores, se demuestra porque inmediatamente la actitud de las mujeres fue secundada por las organizaciones que ya se habían definido como avanzada en esta batalla.

Los esfuerzos estaban encaminados a conseguir, tarde o temprano, una amnistía general. Decía el comunicado de la Comisión de Justicia y Paz:

"La Comisión de Justicia y Paz ha recibido la carta que los familiares de los presos políticos enviaron el día de ayer al Sr. Ministro del Interior. Los impresionantes datos

que aportan nos revelan una vez más que en nuestra patria rigen intolerables sistemas de represión, Justicia y Paz une su voz a la de esas sufridas esposas y madres de los detenidos políticos, se solidariza plenamente con su legítimo pedido de justicia y pide muy respetuosamente al Excmo. Presidente de la República conceda amplia amnistía como el primer paso para la pacificación y constitucionalización el país”²⁷.

Los 99 firmantes del documento “Evangelio y Violencia” volvieron a la palestra y comenzaron denunciando que persistían la arbitrariedad y la tortura en la represión política:

“Los sistemáticos apresamientos por meras sospechas, la retardación de justicia, el total desconocimiento de la mayoría de los detenidos de las causas de su detención, las torturas, la provocación de crisis nerviosas que, como en el caso del profesor Víctor Vargas le indujo a amputarse uno de los dedos y las terribles muertes sufridas en los mismos lugares de detención como la del coronel Selich y la del Dr. Sandoval Morón, y misteriosas desapariciones tales como las de Daniel Arroyo, Carlos Barrón y Emilio Alem hacen que nuestro silencio y el de la Iglesia pueda aparecer como culpable ...

“En aras de los más altos intereses del país y en razón de esos principios cristianos que dice practicar el gobierno y como medida indispensable para que se inicie una era de paz, unimos nuestra voz a la de aquellas instituciones que solicitan una irrestricta amnistía para los presos políticos, como presagio de una era de paz social, de orden institucional y de prosperidad económica”.

La confederación de Profesionales y el Colegio de Abogados ya habían planteado la exigencia de la amnistía política irrestricta.

Hasta este momento las denuncias de torturas, violaciones, fusilamientos, etc. se hacían de manera anónima, en hojas copiadas en las sombras. El movimiento de las mujeres al que nos referimos volcó esas denuncias en la gran prensa diaria:

Las mujeres en su carta (12 de junio de 1973) “recuerdan que en otras oportunidades pidieron amnistía para los detenidos, pero que hoy “desengañadas” de las falsas promesas del gobierno” solicitan sólo justicia y el cumplimiento estricto y cabal de la ley”, porque juzgan que “la indulgencia es patrimonio exclusivo de los corazones generosos”. Por ello dicen que no esperan ya “absolutamente nada del tan mentado cristianismo de este gobierno” al que acusan de violar los derechos de las personas y la Constitución”.

“... los que adoptaron métodos no democráticos de oposición como los guerrilleros ya han sido asesinados en nuestras cárceles...”

“Citan los casos del Cnl. Selich y del Dr. Félix Sandoval Morón, diciendo que fueron asesinados en las cárceles”. Dicen que Luis Guevara de Oruro, “agoniza en estos

27- “Comisión de Justicia y Paz pide al Presidente amplia amnistía”, en “Presencia”, La Paz, 14 de junio de 1973.

momentos en el hospital” a consecuencia de torturas. Afirman que les consta que mujeres detenidas fueron violadas y que como consecuencia algunas esperan familia”²⁸.

Eran mujeres decididas a vencer y que hablaban en voz alta: “Para que la historia no nos juzgue como cobardes, de común acuerdo hemos decidido dar un paso decisivo en favor de la justicia y de nuestros propios derechos: el día de mañana a horas cinco de la tarde, nos presentaremos en el Ministerio del Interior para ofrecernos como presas voluntarias. Si nuestros familiares están detenidos durante tantos meses por el único delito de pensar de un modo distinto a lo que piensa este gobierno, nosotras, las abajo firmantes, también hemos cometido ese delito”.

La presión de los sindicatos demostró ser mucho más efectiva, pues logró liberar a muchos obreros presos. Lo que buscaban los sindicatos era que el fuero sindical fuese respetado irrestrictamente, de la misma manera que se permitiese el libre funcionamiento de la COB. Los fabriles hicieron huelgas parciales en demanda del retorno de los desterrados Valencia y Condori. Los constructores, reunidos en congreso en Sucre, durante la primera quincena del mes de junio de 1973, demandaron garantías para la COB y la constitucionalización del país, que deben entenderse no como la inclinación hacia el parlamentarismo vacuo, sino como la urgencia de implantar el respeto al ordenamiento jurídico.

El gobierno volvió a retroceder, hizo importantes concesiones a las demandas populares, pero eso no quería decir que casi diariamente no se siguiese apresando a los hombres de izquierda, que no se cometiesen con ellos excesos y no se los torturase. El retroceso momentáneo y parcial del oficialismo no impidió que siguiese hostilizando a los sindicatos, buscando cansar y atemorizar a sus dirigentes. El Ministerio del Interior persistió en su afán de erradicar de los sindicatos a los elementos considerados como políticos y el Ministro de Trabajo se ocupaba de catalogar si las huelgas eran “políticas”, sindicales o “provocativas”. Los mineros de Huanuni pararon las labores el 14 de junio de 1973 para subrayar así su repudio a la decisión gubernamental de no permitir el funcionamiento de la COB, etc. y el Ministerio del Trabajo tuvo la ocurrencia de sostener públicamente que ese paro era político y provocativo.

La radio “La voz del Minero” de siglo XX era, en ese momento, una de las pocas radioemisoras que realizaban una franca campaña de orientación política y entonces las autoridades creyeron que había llegado el momento de cerrarla. Se citó a su director, que era, a la vez, Secretario de Cultura del Sindicato de mineros, para que se presentase al Ministerio del Interior, buscando apresarlo o por lo menos atemorizarlo. Los sindicalizados consideraron que su deber no era otro que defender intransigentemente a un compañero que gozaba de fuero y comenzaron denunciando

públicamente la actitud antisindical y provocativa del Ministro de Estado:

“Nuevamente, en violación fuero sindical, Secretario de cultura y Director “Radio la Voz del Minero”, compañero Augusto León, fue notificado para presentarse

28- “Mujeres se declaran rehenes en defensa de presos políticos”, en “Presencia”, La Paz, 13 de junio de 1973.

Ministerio Interior La Paz. Caso no hacerlo presumiblemente será detenido en estos días. Amparo Ley General Trabajo y Constitución Política Estado solicitamos respeto libertades sindicales y consiguiente anulación orden Min. Interior.

“Atentamente. Firman: Osorio, Rojas, Capari Sindicato Siglo XX”,²⁹.

La prensa estaba llena de denuncias de este tipo. PRESENCIA de fecha 15 de junio informaba que los fabriles persistían en su pedido de libertad de Valencia y Condori: “La Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz, mediante comunicado, manifiesta que “los compañeros Valencia y Condori son dirigentes sindicales debidamente reconocidos por los empresarios y las autoridades nacionales, nombrados en elecciones democráticas y en consecuencia gozan del fuero sindical consagrado por la Constitución Política del Estado.

“Agregan que el “señor Ministro de Trabajo no puede desconocerlos con una simple declaración, tiene que demostrar con hechos que los mencionados trabajadores son dirigentes políticos y no con simples evasivas como ha ocurrido al presente.”

12

El Frente Revolucionario Antiimperialista

En las jornadas de agosto de 1971 quedó confirmada la estrategia política del proletariado, plasmada en los objetivos de la Asamblea Popular y que constituyeron una revitalización, si se quiere, de la Tesis de Pulacayo. Estamos obligados, por la gran confusión política que impera en la izquierda, a volver a expresar qué consiste esa estrategia: dictadura de la clase obrera, convertida en caudillo nacional (es decir, apoyada en forma directa y militante por el campesinado y los sectores mayoritarios de la clase media de las ciudades), y cuya finalidad primera será el cumplimiento pleno de las tareas democráticas para transformarlas en socialistas.

Como quiera que no hubieron tiempo ni condiciones para que la insurrección llegase a su punto culminante, esto porque el golpe contrarrevolucionario preventivo cortó el proceso en medio camino, no se produjo la conquista del poder por las masas timoneadas por el proletariado, sino su retirada estratégica y el advenimiento del gobierno gorila, totalitario y fascista. No se dio como salida política la democracia formal ni un gobierno popular nacionalista, conforme esperaban muchos. La salida revolucionaria sólo podía ser la dictadura del proletariado y al no producirse ésta dejó el terreno libre para el desarrollo de la experiencia castrense de derecha. Es esta frustración la que ha confirmado por negativa, la estrategia de la Asamblea Popular.

Los escépticos podrían argumentar que el proletariado no se había desarrollado suficientemente (tanto numérica como políticamente) como para poder cumplir su misión histórica, aunque las contradicciones de clase eran tan agudas que tornaron

29- “Presencia”, La Paz, 15 de junio de 1973.

insostenible e indeseable la situación política integrante. Este argumento parte del supuesto de que la importancia del asalariado en el proceso revolucionario arranca directa y mecánicamente de su número, de manera que planteando el problema en términos extremos, sólo puede llegar a ser clase políticamente dirigente si, con anterioridad se convierte en la mayoría de la población, lo que supone un gran desarrollo económico capitalista del país. Este argumento podría tener validez en el caso que se diesen dos premisas (en la realidad no hay lugar para ellas y sólo pueden formularse en el plano de la hipótesis pura): la existencia en el país únicamente de la burguesía y del proletariado y, sobretodo, que Bolivia se desarrolle dentro del marco estrictamente nacional y al margen de la economía mundial. La dialéctica del desarrollo de un país atrasado, como parte integrante del capitalismo mundial, se expresa en una peculiar dinámica de clases: la minoría proletaria (no existen posibilidades para que dentro del sistema capitalista se transforme en la mayoría de la población) tiene una importancia política proporcionalmente inversa a su número y está en directa relación con la insignificancia económica y política de la burguesía nacional. La incapacidad de la burguesía para solucionar las tareas democráticas agiganta políticamente al proletariado, pues le obliga a tomar en sus manos la particular formulación y solución de las tareas que históricamente corresponden a otras clases sociales. Así se transformaría en caudillo nacional, lo que supone que aplaste, en el terreno de la política, a las direcciones políticas extrañas. Las clases mayoritarias de la población (campesinos, clase media), que se asientan en los modos de producción precapitalistas, son las que con su gran explosividad llevan a la clase obrera hasta la conquista del poder político. Todo esto se da porque las fuerzas productivas se encuentran suficientemente maduras, internacionalmente consideradas, para transformaciones acaudilladas por el asalariado.

Una de las tendencias básicas del proletariado le empuja a convertirse en caudillo nacional, a dejar impresa su huella allí donde pone las manos, todo como consecuencia de ser la única clase revolucionaria. Lo que hace falta es encontrar la táctica adecuada que permita materializar esa tendencia congénita. Cuando el asalariado se estructura como clase su tendencia hacia la hegemonía en el seno de la sociedad actual se va afirmando más y más.

Lo que sí puede ser materia de discusión es la madurez o inmadurez política del proletariado para abrir las compuertas de la transformación socialista. De Pulacayo al congreso de la COB de 1970 se desarrolla la estructuración sindical de la clase obrera alrededor de un programa político claramente definido y que vuelve a expresarse en las bases constitutivas de la Asamblea Popular. Ese camino concreto recorre la evolución de la conciencia de clase. De manera paralela, o mejor, en interrelación dialéctica, observamos las vicisitudes que conoce el equipo político que pugna por poner en pie y fortalecer al Partido Obrero Revolucionario, cuyo fortalecimiento ideológico se proyecta al campo sindical. La estructuración de la Asamblea Popular como organización soviética tiene lugar después de reiterados anuncios en ese sentido. Hemos indicado los obstáculos que tuvo que vencer la nueva organización para ponerse de pie y marchar en medio de la más aguda pugna clasista. Si esto fue posible es porque representaba una de las tendencias más poderosas que se agitaba en el seno de las masas y muestra una realidad viviente, con irrefutable elocuencia,

contra quienes sostienen que no era más que una impostura ideada por algunos ideólogos para sorprender a incautos. La clase obrera que estructuró la Asamblea Popular había madurado lo suficiente para plantear la estrategia apuntada más arriba y se fortalecía, en el calor de la batalla, para llevarla a la realidad. Constituye otra prueba en favor de lo que venimos sosteniendo -como ya se ha indicado- el que el gorilismo hubiese preparado su golpe reaccionario teniendo como objetivo central el aplastamiento del proletariado y de las masas que se encaminaban abiertamente hacia el socialismo.

Hasta el 19 de agosto de 1971 las masas no hacían otra cosa que acentuar, más y más, su ascenso revolucionario; se encaminaban hacia la insurrección. El golpe fascista introdujo violentamente una modificación radical a este estado de cosas: cortó en seco esa movilización multitudinaria, a algunos sectores de las masas los aplastó físicamente y al proletariado le obligó a operar una retirada, que no debe tomarse como un simple ejercicio gimnástico, sino como un rudo golpe político. Una de sus consecuencias ha sido desmoralizar y desorganizar relativamente a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales y políticas. Hemos indicado que la retirada desde las posiciones ocupadas en Vinto hasta los lugares mismos de trabajo se realizó de una manera consciente y deliberada, lo que permitiría suponer que no podía haber lugar para desmoralización de ninguna clase en el seno del movimiento obrero. Se olvida que la clase trabajadora está muy lejos de ser completamente homogénea y que sus capas más atrasadas, que son las más vastas, son vulnerables en extremo a la presión que sobre ellas ejercitan las otras clases sociales. En los primeros meses que siguieron a agosto de 1971 se tenía la impresión de que el régimen gorila era inmovible y que sentaría sus reales por varios decenios; la brutalidad fascista arrollaba todos los obstáculos y sometía a su voluntad a todas las organizaciones. Este estado de ánimo se filtró en las filas sindicales a través de las mismas bases. En determinadas condiciones la mayoría atrasada neutraliza a la vanguardia e inclusive puede arrastrarla detrás de sí. La represión no pudo menos que desorganizar a los sindicatos y partidos políticos, claro que en diverso grado según la intensidad de los golpes recibidos y la mayor o menor fortaleza de su estructura organizativa. En el campo de la izquierda lo más grave fue la crisis interna que siguió al profundo cambio de la situación política y que, de una u otra manera, reflejaba la quiebra de la estrategia de la ultraizquierda y de otros sectores. En un comienzo, solamente al trotskismo y después al PC pro-Moscú no alcanzaron los efectos de esta crisis.

En ningún momento las bases fueron ganadas por el gorilismo, no surgieron en su seno ideas diametralmente opuestas a las expresadas por la Asamblea Popular, nadie, excepción hecha de la dirección de la izquierda tradicional, renegó de la obra y de la prédica de esta organización, contrariamente, fue defendida toda vez que se presentó la oportunidad de hacerlo, es decir, las masas no fueron arrastradas por la contrarrevolución. El cambio político se manifestó en el paso de la actitud ofensiva a la defensiva, cesaron de atacar para concentrarse alrededor de sus organizaciones, que fueran acalladas y atemorizadas momentáneamente. Este hecho no puede menos que tener significación en materia política y organizativa. Las consignas fundamentales de la Asamblea y que pueden sintetizarse en una sola: la conquista del poder por la clase obrera, se sumergieron en las profundidades de la subconciencia de la clase,

el observador superficial podía concluir que habían desaparecido. Con todo, es ya sugerente que los trabajadores defendiesen a la Asamblea, una y otra vez, como genuina obra suya. En circunstancias en que había que resistir y defenderse de la arremetida de la contrarrevolución en todos los lugares, saltaron al primer plano las debilidades organizativas, por fisuras volvieron a asomar la cabeza los dirigentes traficantes y aventureros. La Central Obrera Boliviana que tenía: el deber elemental de adoptar formas organizativas adecuadas a la época de la clandestinidad, asimilando y superando la experiencia de los sindicatos clandestinos del período barrientista, fracasó en su misión.

No se trata de un hecho sorprendente si se toma en cuenta que esta organización llegó disminuida y maltrecha a agosto de 1971. El origen de su profunda crisis, que ha pesado durante toda la etapa de lucha contra el gorilismo, se tiene que buscar en su defectuosa constitución durante el IV congreso nacional de trabajadores (1970): el lechinismo formó una dirección a su medida y en base de componendas con los sectores más dispares e insignificantes del movimiento obrero. Durante la lucha anti-gorila estuvo ausente una dirección centralizada nacional, o, por lo menos, un núcleo que intentase seriamente asumir ese papel; esta falla organizativa perjudicó seriamente los avances del movimiento obrero en su conjunto y fue causa de no pocas derrotas parciales.

Flota en el ambiente la siguiente pregunta: ¿por qué la otrora poderosa Central Obrera no cumplió ningún papel positivo en la lucha contra Bánzer, siendo así que los trabajadores recurrieron a todas sus reservas? Durante la crisis de fines de 1972 se hicieron esfuerzos para estructurar una dirección nacional ad-hoc, pero a nadie se le ocurrió hacer funcionar una COB clandestina o ponerla en marcha detrás de un rótulo cualquiera. La lucha por la vigencia de la COB se convirtió en un slogan muy general y que expresaba la voluntad de defender el derecho de libre asociación frente a los avances totalitarios del gorilismo. El problema no puede quedar reducido a la cuestión de la poca representatividad de sus miembros (cosa evidente y que ha contribuido en no poca medida a obstaculizar los trabajos reorganizativos), a deficiencias de estructura interna o a que su Secretario General, Francisco Mercado y otros se hubiesen pasado con toda su impedimenta al enemigo, esas traiciones repudiables de pigmeos no han podido dislocar al movimiento obrero en sí. El verdadero problema es de naturaleza política. El ejecutivo de la COB estaba lejos de expresar adecuadamente la Tesis Política aprobada en su IV Congreso, este programa se encarnó en la Asamblea Popular; contrariamente, los miembros cobistas trabajaron empeñosamente contra él, eran residuos del superado nacionalismo pequeño-burgués. La COB fue incluida en el Frente Revolucionario Antiimperialista por lo menos nominalmente; los que se decían sus representantes en el exilio tuvieron una actuación deslucida y turbia, esto porque lejos de fortalecer a la nueva organización se empeñaron por destruirla. Si la dirección de la COB hubiese llegado a agosto de 1971 totalmente identificada con la Asamblea Popular es claro que habría sabido encontrar los caminos para seguir luchando en la clandestinidad por la adaptación de su programa a las nuevas circunstancias. Fue arrastrada a la tremenda crisis que siguió a la quiebra de la perspectiva política nacionalista frente a la lucha del gorilismo contra el socialismo.

El asalto militar a los lugares de trabajo fue sustituido por los planes encaminados a desconocer la voluntad de las bases obreras y a imponer direcciones sindicales amañadas por el oficialismo. Constituyó una forma de oposición y una victoria sobre él, el funcionamiento sistemático de los sindicatos, el verificativo de elecciones y la victoria en ellas de listas izquierdistas estructuradas dentro del gran lineamiento impartido por el FRA. El antigorilismo se fue consolidando más y más en los sindicatos mineros y en otros de las ciudades. Se llegó a 1973 con un movimiento obrero alineado frente al gobierno.

No se trataba de un proceso que hubiese seguido una línea recta o que no hubiese conocido contratiempos. Inmediatamente después de agosto de 1971 se notó un notable decaimiento en la actividad sindical, particularmente en las ciudades, y, a veces, los equipos dirigentes democráticamente elegidos fueron sustituidos por camarillas adictas al gorilismo, aunque para ello se tuvo que recurrir, con mucha frecuencia al encarcelamiento y persecución de los titulares. No se puede dejar de puntualizar que en los primeros meses después del golpe contrarrevolucionario, únicamente las grandes organizaciones obreras, sobre todo las mineras, pudieron hacer escuchar públicamente su voz, a veces en tono muy airado y como protesta por los inconsultos apresamientos de trabajadores o por la falta de garantías para el normal funcionamiento de las Confederaciones y Federaciones. Este aumento incesante de la presión obrera sobre el gobierno dio un salto cualitativo a fines de 1972 y desde entonces parecieron haberse consolidado las organizaciones sindicales.

Ni siquiera en los momentos de mayor represión pudieron los gorilas imponer silencio a todo lo largo y lo ancho del país y se puede decir que siempre estuvo presente la resistencia pasiva de los sectores populares a los excesos del desgobierno fascista. Las protestas eran motivadas no sólo por atropellos inferidos a los trabajadores y a los sindicatos, sino también por una política inconfundiblemente entreguista. Resistencia pasiva, matizada de explosiones violentas, es cosa diferente al desbande y huida desordenados que siguen a las derrotas. El quid pro quo de la ultraizquierda radica en que tomó un fenómeno por otro y de aquí arrancó la conclusión absurda de que sólo tenía vigencia la táctica foquista y terrorista. Ni siquiera cuando se rompió las narices tuvo la inteligencia y el valor suficientes para reconocer su fatal error.

Después del 21 de agosto de 1971, los problemas de la táctica revolucionaria se centraron alrededor de la necesidad de convertir en resistencia activa y ataque generalizado los brotes de resistencia pasiva, que se daban como explosiones intermitentes y en grado diverso en las diferentes regiones del país, pero siempre teniendo como núcleo fundamental las minas, lo que sólo podría lograrse generalizando el descontento, elevándolo políticamente. Las organizaciones revolucionarias -y es esto lo que dijo el FRA- tenían la misión de realizar un trabajo paciente, sistemático, en el seno de las masas, para algunos tontos derrotadas para mucho tiempo, tendiente a organizarlas, a educarlas y a vincularlas con los explotados de las otras regiones del país. Sobre todo después de agosto de 1971, lo que hacía falta era paciencia y trabaja laborioso para ayudar a los explotados a superar su estado de momentánea postración. La dirección revolucionaria debería incorporarse y marchar junto con las masas, enseñando la vanguardia a no adelantarse mucho con referencia al lento

avance del grueso de la clase, a luchar por el logro de pequeñas demandas salariales o de vigencia de las garantías sindicales o constitucionales. La discusión sobre estos problemas fue, en último término, la discusión acerca de la misma revolución en Bolivia. Nos parece que únicamente el trotskismo comprendió con toda claridad que se trataba de adaptar la línea política de la Asamblea Popular a las nuevas condiciones creadas después de agosto.

El Frente Revolucionario antíimperialista fue constituido en el exilio (Santiago de Chile) como una proyección de la línea política antiimperialista y revolucionaria de la Asamblea Popular, que sólo podía existir en medio de las más amplias libertades democráticas y no dentro de las condiciones excepcionalmente duras creadas por la victoria gorila en agosto de 1971.

Las largas discusiones que precedieron a su formación y continuaron después se centraron alrededor de la fijación de un programa revolucionario y la subordinación de los partidos y tendencias de izquierda a él y a los métodos propios de la revolución proletaria. Por primera vez en la historia boliviana, todos los partidos radicales se subordinaron a la estrategia y táctica de un proletariado que había sido capaz de estructurar la Asamblea Popular, es decir, de señalar con firmeza el camino hacia la conquista del poder.

El FRA fue la victoria de la política obrera sobre la pequeña burguesa, sobre el reformismo y sobre el foquismo aventurero. Es fácil comprender que los sectores no revolucionarios ingresaron a su seno empujados por su militancia de base y por las mismas masas explotadas. Por esto mismo su inscripción en el frente no importó una verdadera comprensión de su programa y su consecuente práctica. Lo que fue su fortaleza en cierto momento, se trocó en la causa de su debilidad y de su fractura, no bien el FRA encontró dificultades para penetrar en el seno del grueso de los explotados.

Posteriormente a estos acontecimientos, lo que en el pasado próximo fue motivo de discusión a la luz de los principios programáticos, se trocó en materia de simple constatación de lo ocurrido. A fines de 1972 las masas de las ciudades y de las minas irrumpen nuevamente en el escenario, pasan de la resistencia pasiva a la activa, hacen retroceder al gobierno y se empeñan en defender tercamente las posiciones que han conquistado. El desarrollo de los acontecimientos enseña que lo que el FRA escribió en sus documentos correspondía a la realidad política de ese momento y que el proceso coincidió con los lineamientos trazados por aquella organización. Pero, esos principios se convirtieron en una especie de doctrina esotérica, sobre todo porque la ultraizquierda agotó todas las argucias concebibles para oponerse a su difusión. La razón era clara: la línea aprobada por el FRA desvirtuaba la conducta pasada, presente y futura del foquismo intrascendente. El que el FRA se viese obligado a vivir y desarrollarse en el exilio suponía ya una ruptura, mayor o menor, con las organizaciones que seguían actuando en el interior del país. Todo esto ha sido dicho para demostrar que la propaganda del FRA y sus instrucciones sólo podían haber influenciado en muy poca medida sobre los acontecimientos nacionales, pero que correspondían a efectivas tendencias que se agitaban en el seno de las masas.

Entre los partidos políticos integrantes del frente sólo el POR se identificó plena y totalmente con la línea política que había adoptado, no sólo en lo que se refiere a su inmediata realización, sino también a sus proyecciones futuras.

Las masas partieron efectivamente de brotes numerosos y aislados de resistencia pasiva al gorilismo, no se trataba de un supuesto ideado por algunos políticos que batallaban en el seno del FRA en su empeño por convencer a sus adversarios, esta era la realidad política del país y a nadie le estaba permitido ignorarla o suplantarla por cualquier superchería. El aumento cuantitativo de los brotes de resistencia pasiva fue constante hasta fines del año 1972, aunque la coordinación entre ellos, en el marco nacional, sufrió muchos contratiempos, como consecuencia, básicamente, de las deficiencias de organización y funcionamiento del FRA. Si se hubiesen calibrado debidamente los progresos efectivos que conocían las masas en su lucha diaria, en ese momento centrada no únicamente alrededor de la defensa de las organizaciones sindicales y de las garantías democráticas, sino de la urgencia de lograr mejores condiciones económicas y de defender algunas conquistas en este terreno, como los precios de pulpería congelados, por ejemplo, lo correcto habría sido trasladar la dirección del FRA al país, no para encubrir actos terroristas o la aparición de un foco guerrillero, como deseaban los ultraizquierdistas, sino para coordinar y darle un elevado contenido político a la resistencia pasiva. Fue decretado el traslado del FRA sólo después de que las masas protagonizaron los imponentes acontecimientos que eran la expresión de que habían pasado a la ofensiva y cuando su dirección se había fracturado totalmente. El comando revolucionario no pudo cumplir con el trabajo encaminado a coordinar los movimientos de todos los sectores de las masas e imprimirles un alto contenido político; las defecciones y derrotas temporales se debieron, principalmente, a este hecho.

Si el FRA comprendía acertadamente la situación política, como se atestigua por sus documentos, ¿por qué actuó tan mal y no contribuyó a asegurar a las masas condiciones favorables para sus luchas? Podría pensarse que no existía la menor relación entre la enunciación teórica de los problemas y la actuación diaria de las organizaciones. Esto importaría abrir las compuertas al empirismo a ultranza. Lo que ocurrió fue que una gran parte del FRA no se identificaba con sus documentos programáticos y cuando éstos se veían confirmados por las masas en las calles los ultraizquierdistas pugnaban empeñadamente por modificarlos. Aquellos que aceptaron esos enunciados por maniobra o sólo diplomáticamente se oponían tercamente a que fuesen llevados a la práctica, seguían soñando con desencadenar focos armados detrás de enunciados antifoquistas. Esta fue la causa última de la inacción del FRA en el momento más trascendental de la lucha de las masas contra el gorilismo.

La devaluación monetaria banzerista actuó como la fuerza propulsora que permitió a las masas pasar francamente a la ofensiva. El aumento cuantitativo motivó la transformación cualitativa. Las consecuencias de este fenómeno fueron notables: los explotados perdieron el miedo, que fue reemplazado por la confianza en sus propias organizaciones; volvieron a adueñarse de las calles y batallaron enconadamente no sólo para defender las posiciones ya conquistadas, sino para realizar mayores avances. Pese a la ausencia de una real dirección nacional,

la nueva ofensiva comenzó dándose en un alto nivel político: los explotados apuntaron como el autor del descalabro económico y como al mayor enemigo al gorilismo. Esta oposición revolucionaria se desarrolló dentro del marco de la independencia de clase del proletariado y tendió a canalizar todos los esfuerzos efectivos hacia la conquista del poder por la clase obrera, remarcable porque el movimiento comprendió a amplísimos sectores de otras clases sociales.

Inmediatamente después de agosto de 1971, parecía que la brutalidad de la represión daba fortaleza y estabilidad ilimitadas al gobierno. El impresionante número de fusilados y de prisioneros políticos, el trato bestial dado en los campos de concentración, eran presentados como expresiones de un régimen fuerte. Bien pronto se comprendió que se trataba de una simple ilusión. La protesta por los asesinatos, torturas y apresamientos inmotivados fue ganando a grandes capas de la población, convirtiéndose en un amplio movimiento subterráneo. No fue la lucha por el socialismo y sólo sí la librada por el respeto a las garantías democráticas, la que pudo arrastrar a gran parte de la población, lucha que se desarrolló en línea sinuosa, como si se tratara de avalanchas temporales. La presión popular y obrera exigiendo una amplia amnistía cobró dimensiones insospechadas antes de las Navidades de 1971 y 1972. En su momento le correspondió a Selich dar la nota pintoresca: estando pacificado el país y eliminados los extremistas -dijo- no correspondía dictarse amnistía de ninguna clase. Ciertamente que en un cementerio no hay necesidad de esta medida. Este primer empuje (que políticamente ha tenido la significación de demostrar el fracaso del plan gorila de un total aplastamiento de los sectores populares de las ciudades) no pudo vencer la terquedad del gobierno, todavía vivamente empeñado por imponer el respeto irrestricto al principio de autoridad. El retroceso del gobierno totalitario se efectuó revisando y pisoteando sus propias decisiones, lo que permite comprender que ante el empuje de las masas sucumben el principio de autoridad y demás ídolos. En la primera quincena del mes de febrero de 1972, volvió a crecer la ola de protesta contra los indiscriminados y largos apresamientos. Inesperadamente, "El Diario" publicó una carta, fechada en los lugares de presidio y dirigida al mismo Bánzer y al Ministro del Interior, demandando inmedata libertad; al pie de la nota aparecieron alrededor de doscientas firmas, entre ellas de diez mujeres. A las pocas horas, las emisoras y las agencias noticiosas propalaron la información en sentido de que esos presos políticos se habían declarado en huelga de hambre, a partir de las cero horas del día 8 de febrero de 1972, exigiendo que cese su encierro. Alrededor de cincuenta familiares, casi todas mujeres, secundaron la medida, después de concentrarse en la iglesia de San Agustín, ubicada en un lugar céntrico de La Paz. Cuando se hizo evidente el peligro de que la violencia gubernamental fuese descargada sobre las huelguistas, las altas cumbres de la iglesia no pudieron menos que salir en defensa de ellas. Después de la heroica huelga de hambre, los presos continuaron encerrados; con todo, su gran trascendencia consistió en ser la primera huelga política, después del 21 de agosto de 1971, que concentró la atención de todo el país y desencadenó un movimiento de solidaridad internacional.

En 1973 no se esperó que se aproximasen las fiestas de Navidad para demandar la dictación de la amnistía, después de recordar los sentimientos cristianos de las autoridades, la demanda se trocó en consigna permanente. No solamente se

modificaron los planteamientos, sino el tono en el que eran hechos. Estos cambios se explican si se tiene en cuenta que entre 1971 y 1973 han tenido lugar las grandes jornadas posteriores a octubre de 1972.

Como un prelude a lo que sucedió a fines de 1972, tenemos los numerosos movimientos anteriores alrededor de objetivos económicos, de resistencia a las medidas gubernamentales que tendían a empeorar las condiciones de vida de los bolivianos. Bánzer, mediante Decreto supremo, autorizó el aumento de tarifas eléctricas en la ciudad de La Paz, lo que motivó un generalizado movimiento de protesta, en el que participaron tanto los sindicatos obreros como las organizaciones populares. Aunque la empresa foránea Bolivian Power fue la que recibió los golpes directos, la repulsa adquirió un carácter marcadamente antigubernamental. Los sindicatos obreros creyeron llegada la oportunidad para recordar al gobierno su obligación de elevar los salarios en la misma proporción del encarecimiento del costo de vida. La escala móvil planteada en 1946, se trocó en la demanda más generalizada.

En los centros de trabajo, particularmente en las minas, no se dejó en ningún momento de reclamar por la concesión de garantías para los trabajadores, a fin de que pudiesen seguir produciendo en condiciones de normalidad, exigencia paralela a la demanda de garantías para el funcionamiento de las organizaciones laborales y del retiro de las tropas de los campamentos. A estas modestísimas reivindicaciones se añadió la lucha por lograr la confirmación e ciertos bonos, el cese de la hostilidad a algunos "extremistas", que comenzaron siendo trasladados a parajes insalubres o donde las ganancias eran menores. La tan pregonada política de austeridad del oficialismo se tradujo, principalmente, en la reducción de los gastos destinados a la seguridad industrial, en la limitación de los bonos, etc. que, en la práctica, significó una virtual disminución de los salarios. Tomemos un ejemplo. Durante el mes de junio (primera quincena) de 1973 los obreros de San José se declararon en emergencia y en pie de huelga demandando el normal aprovisionamiento de materiales y herramientas de trabajo y, al mismo tiempo, el cumplimiento de compromisos contraídos por Comibol. Las deficiencias anotadas incidían directamente en la disminución de los salarios, al extremo de que el sindicato planteó el cálculo del "sueldo 14" (llamado "aguinaldo patriótico") en base de los aguinaldos de 1972. Como quiera que esta actitud desagradó al Ministro de Trabajo, éste se tomó la libertad de negarse a "reconocer" a la dirección laboral democráticamente elegida. Acertadamente él respondió que para existir le bastaba la confianza de los obreros de base. Así quedó planteada la discusión acerca de la naturaleza de las organizaciones laborales. El sindicato de Siglo XX denunció que en la planta pre-concentradora Sink Float "se obliga al trabajador a duplicar su actividad laboral, los demás tienen que cubrir esa ausencia, sin el respectivo pacto de trabajo extra". También se exigió que los trabajadores de esta sección insalubre (el aire se encuentra permanentemente viciado por el polvo) recibiesen la misma compensación que los de interior mina, es decir, \$b. 150 en lugar de 135³⁰. Esos subhombres que se llaman cooperativistas plantearon que se

les liberase de una serie de imposiciones que tenían y tienen que soportar, como si fuesen grandes empresarios. Estos senderos, si se quiere prosaicos, siguió la lucha

30- "Presencia", La Paz, 14 de junio de 1973.

de clases cotidianamente y fue en este caldero, y no en las grandes elocuentes proclamas y acciones destinadas de antemano a la gloria, que el proletariado se

unificó, templó y aguzó sus métodos de lucha contra los opresores. La nueva situación política creada después de agosto de 1971 determinó que el factor dominante en las batallas contra el régimen banzerista fuese la defensa de las garantías democráticas, rasgo diferencial de toda la política posterior, por lo menos hasta 1978.

No pocos "teóricos", casi todos ellos alineados en la ultra izquierda, quedaron desorientados al observar la nueva realidad. Partían del esquema de que la clase obrera debería seguir una línea uniforme y siempre en ascenso hasta llegar al poder, sin comprender que la lucha de clases está llena de altibajos, de avances y retrocesos. Esta concepción totalmente mecanicista parte de la evidencia de que vivimos la época de la revolución socialista y de aquí se saca la conclusión de que la lucha por el socialismo se encuentra vigente en todos los instantes, que sólo ella es revolucionaria y no así aquella que coloca en primer plano las reivindicaciones democráticas e inmediatas. La realidad se encargó de rectificar brutalmente a los ultraizquierdistas: la oposición al gobierno Bánzer (eso que el FRA llamó resistencia pasiva, para remarcar su punto de partida y para diferenciarse de las tendencias desviacionistas) se expresó inicialmente a través de la lucha alrededor de consignas democráticas y de contenido sindical mínimas. La brutal presencia del gorilismo importó el arrasamiento de muchas de ellas y la amenaza inminente de que se acabase con todas. Las masas se vieron colocadas ante la necesidad de reconquistar lo perdido y defender lo poco que quedaba en pie; en estas circunstancias plantear lisa y llanamente la toma del poder político por el proletariado y el establecimiento del socialismo habría importado desembocar en el utopismo. A los "radicales" de café esto se les antojó una verdadera capitulación, con referencia a anteriores planteamientos, y un cobarde abandono de posiciones ya conquistadas por las masas. De enero a agosto de 1971 se luchó y se movilizó a los explotados alrededor de la bandera del socialismo, esto para referirnos a un período en el que con mayor nitidez se dio esa política; partiendo de esta evidencia, la ultraizquierda insistió en que debía persistirse en tal línea: insistir en la consigna agitativa de gobierno obrero y de socialismo para su inmediata realización. Los foquistas y terroristas consideraban que eran ellos, a nombre de las masas, los predestinados a cumplir ese programa, era eso lo que se desprendía de la propaganda del Ejército Revolucionario del Pueblo de la Argentina, por ejemplo. No cuentan para nada las masas, su estado de ánimo, su lucha diaria; consecuentemente, la minoría privilegiada puede tomar el poder cuando se le antoje, siempre que esté militarmente preparada para ello. A los trotskistas y comunistas pro-Moscú se les dijo dentro del FRA que no se trataba de buscar consignas limitadamente democráticas, pues esto significaba nada menos que una pérdida lamentable de tiempo, sino de poner mayor énfasis que en el pasado en la proclamación del socialismo como meta inmediata. Esta postura, aparentemente inexplicable, parecía ignorar que en el país se había operado un cambio político de importancia (sustitución de un gobierno castrense nacionalista de contenido burgués, vale decir, de orientación antiimperialista, por uno abiertamente fascista) y estaba segura que la simple enunciación de una consigna era suficiente para crear las condiciones necesarias para su materialización. El ultraizquierdismo, elemental y mecanicista por su esencia, estaba convencido que

cuanto más severas fuesen las condiciones represivas imperantes se justificaba en mayor medida la presencia de focos armados. Desde este punto de vista, habría que felicitarse por el advenimiento de Bánzer al poder. Los marxistas recordaron que las consignas debían corresponder ajustadamente a la situación política imperante en cierto momento. Las voces de orden que sirvieron en ciertas circunstancias resultan inoperantes en otras. Es esto lo que enseñó Lenin.

Los hechos demostraron que las masas, después de agosto de 1971, no comenzaron a movilizarse motorizadas por la urgencia de tomar el poder o de realizar el socialismo, sino alrededor de motivaciones democráticas y pequeñas reivindicaciones que tradicionalmente han sido catalogadas como sindicales. Ni duda cabe que existe el peligro de que la actividad diaria quede encerrada en el estrecho marco del tradeunionismo y es este el reparo de mayor peso que puede oponerse a la táctica señalada. La lucha cotidiana por estos modestísimos objetivos debe estar referida a la conquista del poder y del socialismo. La participación militante de la vanguardia proletaria en la vida cotidiana de las masas es imprescindible para garantizar la inidisoluble vinculación entre los objetivos inmediatos y la finalidad estratégica de la clase obrera. El trotskismo libró una trascendental batalla contra el foquismo y también contra las tendencias reformistas, que pugnaban por limitar la lucha a las garantías democráticas o a las mejoras salariales de manera que la revolución se convirtiese en un proceso puramente democrático.

Duramente golpeada por los acontecimientos que no pueden ser ignorados, la ultraizquierda se desplazó osadamente hacia las posiciones abiertamente burguesas; se tornó nacionalista y electorera, enemiga de la violencia y defensora incondicional del legalismo y de la Constitución. El MIR retomó las banderas de la revolución nacional y el PC-ML no tuvo el menor reparo en aliarse nada menos que con Víctor Paz, un descarado agente del imperialismo. Así hemos pasado por la experiencia de la política pequeño-burguesa tanto en su expresión radical como en la nacionalista, caras de la misma medalla.

Cuando se dijo que la situación política imponía la necesidad de luchar por las reivindicaciones democráticas (garantías constitucionales, en verdad, y no tareas democráticas nacionales) y sindicales, una parte del stalinismo y sectores izquierdistas moderados se alistaron rápidamente detrás de esta perspectiva, esto porque la lucha inmediata por objetivos tan modestos se acomodaba perfectamente a su concepción de la revolución y a su programa, parecía confirmarse la tesis de que en los países atrasados las fuerzas productivas han madurado sólo para hacer posible la revolución democrático-burguesa. Desde el primer momento se notó una fisura entre estos elementos y el trotskismo, que dijo con claridad que a la lucha por el socialismo se tenía que ir, dadas las condiciones políticas imperantes, a través de las batallas libradas en defensa de las garantías democráticas y sindicales. Para el POR, imprimir un elevado contenido político a los brotes de resistencia pasiva quería decir orientarlos hacia la lucha por el socialismo. La diferencia era clara: los "demócratas" se empeñaban por quedarse dentro de los estrechos límites de las reivindicaciones inmediatas y los trotskistas pugnaban por proyectarla hacia la conquista del poder por el proletariado.

Hemos indicado, una y otra vez, que el proletariado boliviano al igual que el de los otros países atrasados, llegará al poder en su condición de caudillo de las otras clases sociales mayoritarias, explotadas y oprimidas en la actualidad. La clase obrera (numéricamente minoritaria) sola y con sus propias fuerzas, podría en circunstancias excepcionales conquistar el poder, pero no mantenerse en él, instauraría un gobierno efímero e inoperante en medio de la hostilidad de la mayoría nacional. La revolución viable es siempre mayoritaria. Se ha repetido hasta el cansancio que la viga maestra de la estrategia revolucionaria radica en la alianza obrero-campesina, que no debe entenderse como matemáticamente limitada a proletarios y campesinos, sino que se refiere a una clase obrera arrastrando a los explotados que quedan al margen de las grandes fábricas, a la mayoría de la población generalmente asentada en las formas de producción pre- capitalistas, a los sectores mas vastos de la clase media de las ciudades. Cuando decimos que es la gran capacidad explosiva de los campesinos la que, en ciertas condiciones, empuja al proletariado al poder nos estamos refiriendo también a las capas de la pequeña burguesía de las ciudades (particularmente a los estudiantes) que tienen una gran importancia en las luchas políticas. El momento de la insurrección llega, precisamente, cuando estos sectores sociales, entre otros factores, oscilan profundamente hacia la izquierda, cuando se convencen que para ellos no hay más salida que las proposiciones hechas por el asalariado.

Parece que no se ha analizado suficientemente la naturaleza y consecuencias de una clase obrera convertida en caudillo nacional, que quiere decir arrastrando detrás de sí a varias clases sociales (a la nación oprimida), que, ni duda cabe, tienen, en último término, intereses diferentes y hasta opuestos, pero que, en los momentos culminantes del ascenso revolucionario encuentran puntos de coincidencia que les permiten una acción unitaria contra los dueños del poder político. El proletariado de las grandes metrópolis es la mayoría de la población, lo que le permite convertirse en el gobierno nacional por excelencia, al mismo tiempo que plantea y resuelve sus intereses de clase exclusivamente. La situación del proletariado de los países atrasados es diferente siendo una minoría (consecuencia del unilateral y deficiente desarrollo económico capitalista) no pudo tomarse la libertad de ceñir su conducta a la solución únicamente de sus problemas de clase y menos a poner en pie un gobierno puramente obrero, la consecuencia sería su total aislamiento del gran conglomerado de explotados del país y, para su propio mal, precipitaría la hostilidad de la mayoría nacional; esta debilidad inicial la supera ganando la dirección política de las otras clases sociales oprimidas y explotadas por el imperialismo, de un modo directo o no; ganar la dirección política de la mayoría nacional supone que, simultáneamente, se derrote a los partidos políticos no proletarios, lo que sólo puede lograrse a través del debate y del balance alrededor de la experiencia diaria de las diversas agrupaciones políticas con referencia a los enunciados de la estrategia y táctica revolucionarias, confrontación que puede darse más fácilmente en el marco de un frente de clases, que eso es el frente antiimperialista, pues es aquí donde se elabora y se impone un programa único que se convierte en la piedra de toque de la conducta de las diferentes direcciones políticas; el proletariado minoritario se agiganta políticamente porque las otras clases sociales, directamente interesadas en la superación de las manifestaciones económico-sociales precapitalistas, no tienen por sí solas la capacidad de realizar las tareas democráticas, éstas pasan a manos del proletariado, que no se

limita a repetirlas, sino que las subordina a su propia estrategia (no se contentará con cumplirlas y mantenerlas como tales indefinidamente, sino que las proyectará hacia el socialismo), de esta manera actúa como portavoz y dirección de la mayoría, de toda la nación oprimida; el proletariado desde el poder, actuando como caudillo nacional, tiene que cumplir, a su manera, las tareas propias de las otras clases sociales, lo que no supone que colocará lado a lado esas tareas, sino que las cumplirá de un modo integral, de manera que puedan ser transformadas en socialistas; el proletariado ni durante el ascenso revolucionario ni en el poder se diluye en el gran conglomerado nacional, sino que se afirma como clase, condición imprescindible para que pueda convertirse en dirección política de las masas en general, actúa como partido político e impone su estrategia y sus métodos de lucha, se da el caso de que asimile algunos que son propios de las otras clases pero, en este caso los transforma para adecuarlos a sus objetivos, este rol hegemónico y excepcional es consecuencia de su naturaleza de ser la única clase revolucionaria por excelencia de la sociedad, lo que determina que se estructure como clase en la medida en que afirma su independencia y se organiza como partido político. El proletariado llamado como está a liberar a la nación oprimida tiene que comenzar por liberarse dentro de ésta.

La revolución en un país atrasado, socialmente hablando, no puede ser puramente proletaria o minoritaria, sino que será protagonizada por toda la nación oprimida, vale decir, por las clases sociales oprimidas y explotadas por el explotador-opresor foráneo, a condición de que actúe bajo la dirección del proletariado. La presencia de éste como caudillo nacional de las masas y como dueño del poder, modifica las proyecciones de una revolución, no tiene más remedio que cumplir las tareas democráticas y abrir la perspectiva del socialismo. Dicho de otra manera, la revolución deja de ser democrático-burguesa o antiimperialista para transformarse en una revolución realizada bajo la dirección proletaria y de la que el cumplimiento de las tareas democráticas y la liberación nacional no son más que episodios de una profunda transformación que desemboca en el socialismo y en la revolución mundial.

En Bolivia, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, las grandes organizaciones sindicales de masas, aquellas que han dejado huella profunda en nuestra historia, han rebasado los límites estrictamente obreros, para englobar en su seno a varias clases sociales, será bien recordar el ejemplo de la Central Obrera Boliviana, particularmente durante la primera época de la revolución.

La Asamblea Popular fue una particular forma soviética que importó la efectivización del frente antiimperialista bajo la dirección de la clase obrera. En su corta pero fecunda historia no conoció desviaciones derechistas ni ultraizquierdistas y fue la estrategia del proletariado convertida en organización. Nació y vivió en un momento de extrema tensión de la lucha de clases. El 21 de agosto de 1971 no fue destruida físicamente, la nueva situación política determinó, de manera casi mecánica, su receso; sin embargo, su validez fue ratificada por los acontecimientos en la medida en que se demostró la justeza de la estrategia del proletariado. Estas son las razones por las cuales no se puede hablar tan sencillamente de su desaparición del escenario, como no podía esperarse la reiniciación de sus reuniones al día siguiente de instalado el gobierno Bánzer. El cambio de la situación política hizo caducar la forma organizativa

de la Asamblea, que correspondía a una etapa de gran ascenso de las masas y de la irrestricta vigencia de las garantías democráticas; pero, continuó en pie su línea política expresada en los documentos programáticos de la COB y en las Bases Constitutivas. Los que no percibieron el cambio de la situación política pugnaron, esto por algún tiempo, porque se volviese a convocar a la Asamblea Popular, mas, se olvidaron señalar cómo se haría para elegir en las bases populares a los delegados cuando imperaba el terror y habían sido destruidas las garantías democráticas. Lechín fue uno de los portavoces de esta curiosísima posición, pero lo hizo porque sabía que así mantendría la calidad de Secretario Ejecutivo del descomunal conglomerado de las izquierdas, que solamente podía darse después de agosto de 1971; en esos momentos emergía un FRA con dirección colectiva y pugnando por sepultar el absurdo caudillismo que tanto daño ha hecho al movimiento sindical boliviano. Una Asamblea sin la reunión de cientos de delegados, sin deliberaciones públicas, sin posibilidad de actuar como el polo catalizador de las tendencias revolucionarias y populares, resulta inconcebible. Después de 1978, cuando volvieron a ponerse en práctica las garantías constitucionales y las masas se fueron radicalizando gradualmente, al señor Lechín y a otros "izquierdistas" se les olvidó actualizar la consigna de la Asamblea Popular y prefirieron extraviarse por los equívocos caminos de frentes puramente tácticos, a espaldas de las finalidades históricas del proletariado.

La Asamblea apareció en el momento de mayor movilización de las masas, cuando éstas se encaminaban firmemente hacia la conquista del poder político. Es esta circunstancia la que explica su nacimiento, como respuesta a una necesidad histórica concreta, y sus características. La sola constatación de que las masas después de agosto ya no eran, cierto que momentáneamente, dueñas de las calles, debía llevar al convencimiento de que no podía funcionar esa gran organización de masas que fue la Asamblea. La estrategia del proletariado tenía que encontrar otro tegumento organizativo para poder expresarse. No sólo que caducaron ciertas formas organizativas, sino que el cambio de situación política obligó a modificar los objetivos políticos inmediatos: ya no se trataba de la conquista del poder de manera inmediata, sino de poner en pie de combate a las masas (de transformar la resistencia pasiva en activa). Lo que quedaba como conquista era la línea política maestra enunciada por la Asamblea Popular: utilizar las reivindicaciones inmediatas para movilizar a los explotados hacia la conquista del poder y mantener la hegemonía política del proletariado en todas las facetas de la lucha. La Asamblea le permitió a la clase obrera convertirse en dirección del conglomerado de clases y este hecho se tradujo numéricamente en la hegemonía de los delegados obreros; esto ya no era posible en las nuevas condiciones imperantes; sólo se podía luchar porque todos los sectores reconociesen la preeminencia del programa del proletariado. Cuando decimos que el FRA no hizo otra cosa que proyectar a la Asamblea Popular en la nueva situación política, no queremos significar que se mantuviesen invariables las formas organizativas de ésta, sino que el FRA encarnó la estrategia de la clase obrera.

La finalidad estratégica del proletariado emerge del desarrollo objetivo de la sociedad y se modifica por las modificaciones coyunturales de la política, permanece como tal en tanto la sociedad no se trueque en otra. Esas modificaciones pueden determinar que de consigna agitativa se transforme en propagandística. Lo que cambia es la

táctica, que está destinada a efectivizar la estrategia revolucionaria por la reforma del capitalismo, y por esto mismo por su permanencia, deja de ser revolucionario para convertirse en vulgar reformista.

Superando la discusión, la realidad diaria impuso una profunda transformación estructural en la nueva organización encargada de adecuar la estrategia del proletariado a las nuevas condiciones políticas. Los observadores superficiales se apresuraron en subrayar que entre la Asamblea y el Frente Revolucionario Antiimperialista no había absolutamente nada en común. Algo más, se lanzó la especie de que éste, la nueva piel dentro de la cual se vio obligada a meterse la estrategia revolucionaria del proletariado, era nada menos que la negación de la Asamblea. La ignorancia y la mala fe se hermanaron en la irresponsable acusación de que el FRA deliberadamente marginaba al proletariado de su dirección. En los momentos de depresión y de clandestinidad, el proletariado sólo puede expresarse adecuadamente a través de su vanguardia política; en pleno período de ascenso, la vanguardia trabaja abiertamente y se exterioriza por medio de sus cuadros de militantes que actúan en el seno de las organizaciones de masas.

Después de los trágicos acontecimientos de agosto de 1971 se planteó ante los revolucionarios y la clase obrera la necesidad de darse organizaciones adecuadas para la lucha contra el gorilismo en las condiciones de clandestinidad imperantes. Dos tendencias pugaban por anular la perspectiva revolucionaria: una de ellas tendía hacia la disolución de la clase obrera y de sus principios programáticos en el gran conglomerado democratizante y la otra se encaminaba a aislar a aquella del resto de los explotados. La imposición de cualesquiera de estas tendencias habría sido fatal para el porvenir del movimiento revolucionario. Los que pretendían encarnar la política de la Asamblea lucharon contra esas dos desviaciones y propugnaron un frente político que continuase dentro de la línea de aquella: un frente de las mayorías explotadas (esta vez representadas principalmente por sus partidos políticos) bajo la dirección de la clase obrera. Es este requerimiento histórico el que obliga y justifica el nacimiento del Frente Revolucionario Antiimperialista.

Su ideología fue la prolongación consecuente de la Asamblea Popular, pero su estructura organizativa estuvo definida por las nuevas condiciones políticas imperantes en el país. Criatura legítima de un pueblo sojuzgado por la bota militar, no pudo escoger a voluntad el lugar de su nacimiento. Sus primeros pasos fueron los titubeos de la izquierda en el exilio y pagó muy caro el no haber podido vincularse debidamente y desde el primer momento con quienes batallaban en el interior del país por los mismos objetivos que había proclamado a tiempo de venir al mundo.

Los oponentes al FRA no han dicho hasta ahora qué otra táctica se debía haber seguido. ¿El aglutinamiento alrededor de la COB? Esta organización es ya un frente de clases y demostró su inoperabilidad en la lucha clandestina. ¿Formar un frente único del proletariado? Seguramente entre el POR y alguno de los partidos comunistas. Por su programa los partidos stalinistas son inconfundiblemente pequeñoburgueses. ¿Entre el POR y los sindicatos? Las condiciones imperantes no permitían el funcionamiento de tal bloque. El frente puramente proletario habría tenido el defecto capital de

abandonar a la mayoría de los explotados a la dirección del nacionalismo pequeño burgués, es decir, que habría levantado deliberadamente un obstáculo insalvable en el camino de la revolución. El frente único proletario no es táctica adecuada para un país atrasado. Para ser fieles a la Asamblea Popular, los que se reclamaban de la revolución estaban obligados a batallar para que esa mayoría explotada se moviese bajo la dirección política del proletariado, que eso fue el FRA, es precio repetirlo.

Algunos "teóricos" europeos, particularmente los empíricos de la OCI, señalaron que el Frente Revolucionario Antiimperialista era repudiable porque importó un colaboracionismo clasista, queriendo dar a entender que el proletariado había abandonado sus objetivos históricos para seguir la línea señalada por la burguesía nacional. Llegaron a esta conclusión no después de analizar los documentos programáticos del FRA, sino partiendo de una deducción principista: allí donde están lado a lado proletarios y sectores de las otras clases sociales hay ya colaboracionismo clasista, abandono de la línea revolucionaria. Si hubieran sido consecuentes deberían haber aplicado este "principio" también a la Asamblea Popular. El origen de esta aberración principista se encuentra en su errónea concepción de la revolución en los países atrasados. Si ésta es realizada por las mayorías nacionales (no únicamente por el asalariado) bajo la dirección del proletariado, debe igualmente ser repudiada, desde el momento en que en su desarrollo se encuentran lado a lado clases sociales diferentes. La clave del problema radica en saber qué clase social arrastra detrás de sí a ese conglomerado. La especie de que en los países atrasados la revolución será hecha únicamente por el proletariado, para lo que esta clase social no sólo debe diferenciarse de las otras (punto de partida para lograr la independencia de clase), sino repudiarlas por reaccionarias, nada tiene que ver con el marxismo y mucho menos con la revolución. "Por otra parte, el proletariado es revolucionario frente a la burguesía, porque habiendo surgido sobre la base de la gran industria, aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista, que la burguesía quiere perpetuar. Pero el "Manifiesto" añade que las "capas medias... se vuelven revolucionarias (o adoptan actitudes revolucionarias) cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado".

"Por tanto, desde este punto de vista, es también absurdo decir que frente a la clase obrera no forman (todas las demás clases, según dice el texto íntegro del Programa de Gotha, G.L.) más que una masa reaccionaria", juntamente con la burguesía y, además -por sí fuera poco- con los señores feudales" (Marx)³¹.

No está en discusión la tesis de que en Bolivia la protagonista de la revolución será la nación oprimida, sino el problema de saber qué clase social dirigirá a esa mayoría nacional.

El esquematismo a ultranza consideró que el Frente Revolucionario Antiimperialista quería decir limitar la lucha revolucionaria a los objetivos limitadamente antimperialistas, vale decir, a la liberación nacional, o que, obligadamente, se señalaba como finalidad la instauración de un gobierno popular antimperialista, etc., como sostienen los

stalinistas y otros demócratas. Si esto fuera evidente importaría considerar el Frente Antiimperialista como una estrategia y no como una medida táctica, que

31- C. Marx, "Crítica del Programa de Gotha", Buenos Aires, 1957.

eso es en realidad. La clase obrera debería abandonar sus objetivos estratégicos e inclusive sus reivindicaciones de clase para no molestar a sus aliados burgueses y abandonarse en brazos de éstos, limitándose a actuar como fuerza de choque para que los demócratas materialicen sus aspiraciones. Estas características tuvieron dos frentes antiimperialistas organizados por el stalinismo (en puridad se llamaron ligas antiimperialistas) y que, en los hechos, fueron dirigidos por la burguesía nacional o la pequeña-burguesía. Se precisa una excesiva estrechez mental para reducir todos los frentes antiperimperialistas que pueden darse al esquema stalinistas. La experiencia del frente organizado por los revolucionarios bolivianos puso un excesivo cuidado, desde el primer momento, para diferenciarse de los movimientos antiimperialistas internacionales del pasado y debutó agregando a su rótulo el término "revolucionario", para subrayar que era el proletariado quien dirigía políticamente dicho frente.

Hay que comenzar por distinguir claramente a los frentes antiimperialistas dirigidos por la burguesía nacional y que sirven a la estrategia de esta clase social, en los que el proletariado pierde totalmente su fisonomía y no hace más que apuntalar objetivos que le son extraños y se disuelve como clase en el conglomerado nacional, de los frentes organizados alrededor del programa del proletariado y políticamente dirigido por éste. Estos últimos frentes adoptan como su programa la estrategia de la clase obrera, encaminan a la masa de explotados hacia la dictadura del proletariado, es, en resumen, una táctica de lucha al servicio de la estrategia esencialmente revolucionaria. El frente antiimperialista supone que la clase obrera derrota políticamente a los partidos de las otras clases sociales y les arranca el control de sus bases, es así como se marcha hacia la revolución.

El frente antiimperialista constituye el marco adecuado para que el proletariado pueda convertirse en caudillo nacional y cierre el paso definitivamente al nacionalismo pequeño-burgués. La unidad de la clase, en un país como Bolivia, sólo puede darse dentro de la perspectiva del frente anti imperialista. El frente antiimperialista es una táctica al servicio de la toma del poder por el proletariado y su vigencia se justifica por la necesidad de que esta clase acaudille a la mayoría nacional, que es una de las condiciones para su victoria. Su programa es el programa de la revolución acaudillada por el proletariado, y del cual la liberación nacional es sólo uno de sus aspectos.

Se ha censurado la inclusión de la burguesía nacional dentro del frente antiimperialista. Se olvidó que hay que saber diferenciar entre nación opresora y nación oprimida. Allí donde la burguesía nacional existe y entra en fricción con el enemigo foráneo, su inclusión está justificada. En el caso boliviano la argumentación carece de sentido, por la sencilla razón de que una verdadera burguesía industrial está ausente del escenario y dentro del FRA no estaba incluido ni siquiera el MNR, pese a ser un partido pequeño-burgués que se reclama de las posiciones de izquierda.

El Frente Revolucionario Antiimperialista comprendió a toda la gama de la izquierda boliviana, desde las tendencias que en alguna forma entroncaban en el nacionalismo, cuyo ciclo se inicia en 1952, que todavía no ha llegado a su fin y cuyas expresiones derechistas se encarnaron en ese monstruo que fue el gorilismo banzerista, hasta la ultraizquierda. Junto al PRIN estaba VALOR, un desprendimiento por la izquierda

del MNR y del silismo, y en cierto momento se tuvo la esperanza de que fracciones disidentes del oficialismo, que formaron tienda aparte, se sumasen al FRA. Esto de que casi todo el espectro de la izquierda estaba dentro del FRA, fenómeno sorprendente por muchos motivos, se les antojó una monstruosidad a algunos críticos "marxistas". Ellos hubieran querido un frente únicamente de revolucionarios químicamente puros, como si en sus países no hubiesen protagonizado alianzas y contubernios del más variado jaez. Someter a los izquierdistas de las posiciones más diversas a la dirección obrera sólo puede darse en condiciones de gran evolución política de las masas, como una imposición de éstas, cosa que se vio con claridad en el caso de la Asamblea Popular. Por otro lado, un frente de este tipo allana el camino de la revolución en lugar de obstruirlo. El MNR -estamos hablando de los independientes y silistas, no del partido de V. Paz- se negó terminantemente a integrarse dentro del FRA porque estaba interesado en vivir la aventura de las alianzas con los conspiradores uniformados. En su seno estaban también las organizaciones nacidas de la múltiples escisiones del tronco marxista, incluyendo a los foquistas. Se podría argumentar que este último aspecto importaba concesiones y la capitulación ante la ultraizquierda, el abandono del programa tradicional. La experiencia y las pugnas habidas dentro y fuera del FRA demuestran todo lo contrario, la ultraizquierda tuvo que someterse, para poder permanecer dentro del frente, a la estrategia del proletariado, este es, entre otros, uno de los grandes méritos de esta organización.

Cuando se habla de los partidos componentes del FRA se percibe de inmediato sus profundas diferencias con la Asamblea Popular. Fue visible y notable la presencia de los grupos eseisionistas del MNR, del Partido Socialista, del ELN y de los militares antigorilas agrupados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las FAR constituían síntoma sugerente de la futura escisión del ejército bajo la presión de un proletariado en pleno ascenso revolucionario.

No se exagera cuando se dice que el FRA ya nació en las jornadas de agosto de 1971, esto porque la ultraizquierda, como consecuencia de los reveses sufridos, no pudo menos que convencerse que el aislamiento de las masas conducía indefectiblemente a la derrota. La adhesión del ELN al FRA, y esto desde los primeros momentos, fue un ejemplo aleccionador al respecto. Desde la época de la Asamblea Popular, los marxistas sabían que debían someter a la ultraizquierda al programa del proletariado, esto si no querían ver obstaculizada su lucha por las desviaciones pequeño-burguesas, en el seno del FRA continuaron desarrollando esta línea.

En esta concentración de tendencias diversas el problema de la dirección cobró enorme importancia. La línea política del proletariado quedó patentizada en el seno del FRA en sus documentos constitutivos y en la declaración de que consideraba como su punto de partida -según expresa la resolución- la Tesis Política de la Central Obrera Boliviana y el antecedente de la Asamblea Popular (así exteriorizó su voluntad de asimilar las enseñanzas de esta experiencia). Claro que no es suficiente la aprobación de un buen programa para estar seguro que un frente no sufrirá oscilaciones y desviaciones hacia la derecha o la ultraizquierda, que no capitulará ante el imperialismo o que no concluirá en golpes aventureros, peligros que pueden aflorar en cualquier momento. El problema se agudizó cuando el PRIN pugnó por abrir las puertas de la organización

a toda una gama de tendencias movimientistas, con la intención apenas disimulada de inclinar la correlación de fuerzas en su favor. Si el FRA hubiese caído en manos de una dirección extraña a la clase obrera, como es el nacionalismo pequeño-burgués proclive a someterse al imperialismo, su programa se hubiera visto desvirtuado por la acción diaria contraria a la estrategia revolucionaria. La única forma de garantizarla hegemonía proletaria dentro del FRA consistía en asegurar una dirección política que expresase adecuadamente la estrategia obrera. Las grandes organizaciones de masas, entre ellas las proletarias, fueron incorporadas al FRA, pero este simple hecho no garantizaba la hegemonía de la estrategia proletaria. En las condiciones imperantes después de 1971 se vio obstaculizada la expresión de la voluntad de las masas y las direcciones sindicales de alto nivel no siempre reflejaban esa voluntad, por esto decimos que la simple adhesión no era garantía de predominio político de la clase obrera. La hegemonía numérica de las agrupaciones nacionalistas (expresiones de la pequeña-burguesía radicalizada, muchas veces) en la dirección, habría obligado al FRA a apartarse de la estrategia proletaria. A la discusión teórica siguió la pugna por lograr que las decisiones políticas quedasen en manos de los partidos que en sus programas y en su acción diaria expresaban los intereses históricos de la clase obrera. Los marxistas se esforzaron por encontrar una forma de armonizar la amplitud en materia de nuevas adhesiones, de manera que esté representada toda la izquierda, con la necesidad de que la participación nacionalista y pequeño-burguesa sea minoritaria en la dirección del FRA. La tendencia marxista pagó caro su extrema liberalidad en la materia. Nacionalistas y ultraizquierdistas formaron un solo frente contra ella, de manera que toda nueva adhesión hacía peligrar el propio programa del FRA. En cierto momento las disputas y maniobras alrededor de este punto lo inmovilizaron completamente.

Esa amplia unidad que fue el FRA sorprendió al observador por dos razones: 1) se trataba de un frente de tendencias que se decían revolucionarias, bajo el predominio de los marxistas; nacionalistas y ultraizquierdistas ni habiendo sido mayoría ocasional lograron modificar el programa frentista, como era su deseo y 2) se dio alrededor de ideas claramente establecidas sobre las finalidades estratégicas y métodos de lucha propios de la clase obrera. Los diversos grupos parecían estar conformes (al decir esto pensamos en el PC pro-Moscú, que en otros niveles ha aparecido como partidario de la evolución pacífica hacia el socialismo, etc.) en aceptar como métodos la acción directa de masas y la lucha armada. Suficiente recordar estos antecedentes para comprender la gran significación histórica del frente.

El FRA, como toda organización de masas (la COB, los sindicatos, etc.), no podía asegurar una política revolucionaria por el solo hecho de existir físicamente o por haber aprobado en cierto momento determinados documentos radicales, esa política podía ser desarrollada únicamente por una dirección que correspondiese a sus declaraciones programáticas iniciales.

Fue notable el método seguido para lograr la materialización del FRA y ciertamente opuesto al hasta entonces empleado en los trabajos frentistas. Generalmente se procedía partiendo del ocultamiento de las diferencias principistas y todo se limitaba a subrayar las circunstanciales coincidencias de objetivos inmediatos. La discusión

sobre la estrategia se la consideraba superflua. La experiencia enseña que por este camino no se pudo construir jamás nada importante, todo se redujo a frentes efímeros e intrascendentes, que, a su manera, expresaban la poca evolución política del país, de sus masas, y consiguientemente de sus partidos políticos. Estos frentes, cimentados en las hipócritas declaraciones unitarias, comenzaban por exigir de sus integrantes la renuncia al derecho a la menor crítica y concluían pulverizados no bien se hacían públicas las discrepancias ideológicas y políticas. La defensa intransigente del derecho a la crítica del pensamiento y conducta de los ocasionales aliados es fundamental para los revolucionarios, porque constituye un recurso que les permite educar a las masas, por medio del desenmascaramiento de sus falsas direcciones. Es la crítica la que demostrará oportunamente qué partidos políticos actúan en contra del programa aprobado por el Frente. El partido de la clase obrera -dijeron en su oportunidad los trotskystas- no puede renunciar a su ambición de ganar para su programa, en el caso que nos ocupa el programa del FRA, a la mayoría de la clase y sólo puede hacerlo si demuestra que los otros partidos se quiebran o claudican en la lucha diaria.

El Frente Revolucionario antiimperialista para constituirse escogió un camino diverso: se procedió a la previa y cuidadosa delimitación de posiciones, de las diferencias políticas e ideológicas de los partidos interesados en integrarse en él. Partiendo de esta encarnizada y radical discusión ha sido posible elaborar una estrategia y métodos de lucha únicos que debían aplicarse -así dicen los acuerdos- de manera conjunta. Consciente o inconscientemente se siguió el consejo de Lenin: para unirnos debemos previamente delimitarnos, saber lo que somos y cuáles son nuestras verdaderas divergencias. De esta manera quedó a salvo, por lo menos en principio, la mutua crítica entre las organizaciones que conformaban el FRA. Crítica apasionada que tuvo lugar todos los días, dentro de los organismos del frente y fuera de él. Sin embargo, la aplicación del acuerdo sobre libertad de crítica dentro del FRA no siempre pudo aplicarse de manera normal, organizaciones políticamente débiles no pudieron soportar sus consecuencias y una y otra vez se rebelaron contra lo que ellos mismos habían acordado, hubo intentos de prohibir publicaciones partidistas porque contenían críticas a las ideas y conducta de las otras organizaciones.

Los marxistas incurrieron en un grave error al no haber determinado que para la aceptación de nuevos adherentes al FRA debía previamente constatarse si sus documentos partidistas y su conducta diaria no contrariaban las bases fundamentales del frente, como se lo hizo, por otra parte, en la Asamblea Popular.

Rápidamente se alinearon dos tendencias políticas dentro del FRA. Los trotskystas actuaron junto al Partido Socialista, al MIR de Zabaleta y al PC pro-Moscú. Su finalidad confesa no era otra que cumplir fiel y lealmente los documentos del FRA y su estrategia, que no era, repetimos, más que una continuación de la línea política de la Asamblea Popular. En el polo opuesto se aglutinaron los ultraizquierdistas y algunos sectores del nacionalismo pequeño-burgués, que en todo momento pugnaron por revisar la línea frentista y subordinar el FRA a las maniobras foquistas, aventureras y hasta golpistas. Repitieron la conducta que observaron en la Asamblea Popular. Ante el peligro que se perfilaba en el horizonte por acción de algunos militares golpistas y

que decían contar con el respaldo por lo menos de parte del FRA, la fracción proletaria (la llamaremos así porque se guiaba por el apotegma de todo con las masas, nada sin ellas o contra ellas) hizo aprobar un voto resolutivo repudiando todo golpe de Estado, por importar un intento se sustituir la acción de las masas por la osadía de algunos generales o coroneles.

La lucha fraccional dentro del FRA llegó a un punto muerto cuando ambas tendencias lograron contar casi con igual número de votos en el presidium. La inacción y la esterilidad contrastaron con las grandes acciones de masas que se desarrollaron dentro del país a fines del año 1972 y a principios de 1973. Es dentro de tales circunstancias que el Presidium resuelve disolverse y trasladar la dirección dentro de las fronteras de Bolivia.

En Bolivia el funcionamiento del FRA se vio seriamente obstaculizado por la represión, que se tornó sumamente grave debido a la penetración policial en muchas organizaciones políticas. Sin embargo, en los centros obreros, particularmente en las minas, el sentimiento fraista demostró ser muy poderoso. En las elecciones sindicales de Siglo XX (junio 23 de 1973) postularon dos fórmulas que ostentaban las siguientes siglas: Frente Obrero Revolucionario antiimperialista (ya estuvo presente en las elecciones de 1972 y se impuso por abrumadora mayoría sobre la lista oficialista), conformada por los trotskistas y el Frente Revolucionario Antimperialista Sindical, integrado por stalinistas y prinistas.

El que el FRA no hubiese podido entroncar en la gran movilización de masas fue la causa que impidió su fortalecimiento dentro del país. La disgregación ganó sus filas. Cuando la izquierda se tornó democratizante y pro-burguesa, el FRA fue duramente combatido y quedó prácticamente como una consigna defendida únicamente por los trotskistas.

Cuando Lora publicó su opúsculo titulado "De la Asamblea Popular al golpe fascista", la ultraizquierda y los nacionalistas lanzaron el grito al cielo y dijeron que se trataba nada menos que de una delación, porque revelaba documentos secretos y ponía en serio riesgo la integridad física de la organización y de sus componentes. La furia de los ultras se justificaba. Por primera vez se hacían conocer las bases programáticas y los métodos de lucha (en su fundamentación teórica) adoptados por la organización, lo que demostraba que ultraizquierdistas y nacionalistas habían capitulado en toda la línea frente a la estrategia del proletariado. El deber elemental de los revolucionarios consistía en dar la mayor publicidad posible a estas conclusiones, que por otra parte, podía encontrarse en numerosos libros marxistas. Nos limitamos a reproducir la última parte del mencionado libro.

1. En la carta fundamental de constitución del FRA se lee: "El Frente Revolucionario Antiimperialista se organiza para la toma del poder. El pueblo de Bolivia ha alcanzado un alto nivel de conciencia revolucionaria que lo habilita para la lucha por el socialismo como finalidad política". La Asamblea Popular se definía a sí misma como órgano de poder de las masas y del proletariado, cuyo objetivo central era el de conquistar el poder político y construir el socialismo. Esto demuestra que la Asamblea

estratégicamente se proyectó en el FRA.

2. Ni duda cabe que el FRA tenía como objetivo inmediato la lucha contra la dictadura castrense, contrarrevolucionaria y fascista del banzerismo. No se planteó como tarea realizar la oposición por la oposición, actitud que, como enseña la historia trágica de Bolivia, puede concluir coadyuvando los trajines golpistas de las camarillas formadas alrededor del mismo poder, sino que se fijó con meridiana claridad el tipo de gobierno que debía instaurarse como resultado de la victoria de la lucha frentista: un gobierno dirigido por el proletariado, concepción en la que se sintetizaba toda la experiencia anterior de las luchas sociales, asimilación de las lecciones de la Asamblea Popular y que expresaba, en un elevado nivel político, la tendencia fundamental de los explotados hacia la constitución de su propio gobierno y la construcción del socialismo.

En el Frente Revolucionario antiimperialista, de igual manera que en la Asamblea Popular, estaban conjuncionados los partidos de izquierda y las grandes organizaciones de masas (sindicales, campesinas, estudiantiles, populares, etc). Parte de la izquierda boliviana, bajo la influencia del trotskysmo, que tuvo el acierto de sacar las debidas conclusiones políticas del palpitante desarrollo de los acontecimientos, asimiló debidamente la certidumbre de que la revolución social será hecha por las masas y por nadie más. El proletariado concluye convirtiéndose en caudillo de la nación subvertida, que lucha y se unifica buscando romper los lazos de sujeción que le atan al imperialismo. Sería absurdo, por no decir utópico, plantear la posibilidad de una revolución puramente proletaria o socialista, en la que la clase obrera pueda darse el lujo de marchar sola contra la mayoría nacional.

Los partidos políticos frentistas estaban interesados en actuar con referencia a amplios sectores de las masas, actividad que supone lucha interpartidista, pues sólo mediante ella podía imponerse la línea política del FRA.

3. La izquierda boliviana se ha dividido y subdividido en numerosas oportunidades alrededor de disputas y divergencias sobre los métodos de lucha a emplearse en el proceso revolucionario, discusión que lleva implícita la concepción partidista acerca de la mecánica de clases, en la que se manifiesta una de las particularidades del país.

En Bolivia, las tendencias políticas que sostienen la posibilidad del tránsito pacífico del capitalismo al socialismo no han tenido el suficiente valor para formular su tesis en forma franca y sistemática, hecho que debe atribuirse a la poderosa presión sobre ellas de un país radicalizado en extremo. Lo que hacen es tratar de desvirtuar o atenuar los métodos que parten de la acción directa de masas. Después de 1977, la izquierda derechizada se ha tornado parlamentarista a ultranza.

La discusión se centró alrededor del foquismo, que en cierto momento pretendió presentarse como sustituto del partido político de la clase obrera y que luego siguió una azarosa línea de búsqueda de contacto con el pueblo (los populistas prefieren utilizar éste término, olvidando que el "pueblo" está escindido en clases sociales), y de la lucha insurreccional del proletariado convertido en caudillo nacional. Estas posiciones se presentaron, a cierta altura del debate, como irreductibles en su

oposición, lo que correspondía exactamente a la realidad. La disputa teórica, por sí sola, no tenía posibilidades de obligar a los foquistas recalcitrantes a modificar sus posiciones y a someterse a la dirección de la clase revolucionaria, lo que es diferente al reconocimiento lírico de la hegemonía política del proletariado en el proceso de la transformación revolucionaria. El choque de las concepciones foquistas con la terca realidad y los catastróficos descalabros que ha motivado, han obligado a su tácita revisión y han forzado a buscar afanosamente la forma de plasmar un movimiento en alguna forma referido a las masas. Las influencias de los Tupamaros del Uruguay y del ERP de la Argentina han tenido importancia en este aspecto.

La gran madurez política del proceso revolucionario boliviano (madurez de las masas y no precisamente de sus expresiones políticas) se mide por el hecho de que la izquierda concentrada en el FRA logró formular un planteamiento unitario sobre los métodos a emplearse en la revolución. Esta unidad fue una de las grandes virtudes del Frente (añadiremos que también constituye la mayor de las victorias logradas por el trotskismo sobre las tendencias ultraizquierdistas), porque permite dedicarse cuidados y pacientemente a los trabajos preparatorios de la insurrección, de la movilización de las masas, sin correr el riesgo de un aborto del proceso o de reducirlo a la postración en medio de la inoperancia. Nunca será suficiente recalcar el hecho de que la extrema izquierda se ha sometido, por instantes a regañadientes y casi siempre pensando realizar una artera maniobra, a los métodos propios de la revolución proletaria, Bien pronto se confirmaron estas sospechas, los foquistas se dedicaron a preparar por su cuenta sus empresas aventureras y fueron sorprendidos, una y otra vez, en medio camino. En las discusiones dentro del FRA, la ultraizquierda quería que el frente quedase totalmente sometido a la comandancia militar, para así tener carta blanca para sus aventuras.

En uno de los documentos básicos del FRA se sostiene:

“El Frente Revolucionario antiimperialista establece que la lucha revolucionaria en Bolivia no descarta ningún método, por el contrario, reconoce la validez de todos. Sin embargo deja establecido que no sitúa a todos ellos en el mismo nivel, y declara que la preeminencia de uno sobre los otros, dependerá del condicionamiento político en cada fase de la lucha insurreccional, debiendo ser todos, y en todo tiempo, los que son propios de la revolución proletaria, en cuya base se encuentran la movilización de las masas y la acción directa, que puede adquirir formas diversas según el momento político, desde las manifestaciones y huelgas hasta las diversas modalidades de la lucha armada”. Aunque esta declaración descarta, por su meridiana claridad, toda posibilidad de aventura foquista, la ultraizquierda no quiso comprender que las acciones armadas y el armamento de los grandes sectores de explotados, y no únicamente de las minorías terroristas, debían marchar de acuerdo con la movilización de las masas. El propio problema del armamento, presentado como insoluble por muchos izquierdistas, está en relación con la presión que ejercita el ascenso revolucionario sobre el ejército, de la capacidad que tenga de escisionarlo internamente o de hacerle perder su capacidad de fuego.

Es la dirección política del proceso revolucionario por el proletariado la que determina

que las formas de lucha devengan expresiones de los métodos propios de la revolución proletaria. Para el FRA la lucha armada tiene que ser, necesariamente, una manifestación concreta de la lucha de las masas. Todo lo anterior puede resumirse en la siguiente fórmula, que venía siendo repetida por el POR desde antes de agosto de 1971, todo con las masas, nada sin ellas o contra ellas. La lucha armada adquiere trascendencia en la medida en que se convierte en una actividad propia de los explotados, entonces puede llegar a ser experiencia de la clase y contribuir a la evolución de la conciencia del proletariado. La experiencia vivida en los últimos años y la discusión habida alrededor de la validez del foquismo y del terrorismo urbano, nos llevan al convencimiento de que el error básico de los grupos ultraizquierdistas radicó en que, de manera natural y obligada, concluyeron moviéndose como organismos extraños a las masas, aunque declararon su voluntad de aproximarse a ellas y se movieron de manera paralela a los sindicatos.

La subordinación de las diversas organizaciones a los métodos del FRA fue expresamente establecida: "Cada una de las organizaciones que componen el FRA debe actuar de acuerdo a un plan político-militar colectivamente elaborado. El incumplimiento de este plan así como las actuaciones o decisiones que contraríen esta forma de trabajo revolucionario y unitario, que tengan carácter sectario, fraccional o divisionista, deben ser enérgicamente repudiados".

La acción directa de masas adquiere las formas más diversas y una o algunas de ellas pueden alcanzar vigencia en determinadas condiciones políticas, relegando a un segundo plano a las otras. El FRA, por ejemplo, no desconoce ni rechaza por principio las acciones comando o la guerra de guerrillas, cuando éstas con expresiones de la lucha de las masas, pero las subordina a las necesidades creadas por un determinado momento político, que está definido, básicamente, por la actitud que asumen las masas y por las modificaciones que se operan en su conciencia. Es esta realidad la que determina la vigencia o no de determinado método de lucha. No se trata simplemente de un cambio de la situación política, sino de que las masas sólo han madurado para utilizar eficazmente un determinado método de lucha. Las fuerzas revolucionarias se ven ante la necesidad de sobre montar en su lucha determinados obstáculos y la respuesta que dan a este requerimiento (necesidad histórica) no es otra cosa que la adopción de un determinado método de lucha ya existente o la creación de otro nuevo.

4. El FRA constituye un frente de partidos políticos que, indiscutiblemente, son una minoría inclusive con referencia a la minoritaria clase obrera. Este comando minoritario tiene la misión de poner en pie de combate y dirigir hacia la victoria a las masas, lo que sólo puede lograr si realmente se insume y sigue las tortuosas vicisitudes de la lucha de clases. Constituye una preocupación insoslayable el soldar a la vanguardia con el grueso de la clase. Los primeros trabajos del FRA estuvieron destinados a movilizar a las masas, partiendo del descontento que existía frente a la conducta gubernamental, de la sorda resistencia al gorilismo.

El FRA señaló que la tarea inmediata consistía en unir, coordinar y elevar políticamente los brotes de descontento, la lucha por las garantías democráticas, lucha que debía

proyectar a las masas hacia la toma del poder. El objetivo inmediato era poner en pie de combate a las masas, en ese momento dispersas, en cierta medida, e imprimir un carácter político a su movilización. Esto sólo se podía lograr si cotidianamente se seguía, paso a paso, la línea marcada por el desarrollo de la lucha de clases. Los obreros viven y se movilizan cada instante alrededor de pequeños objetivos.

Las consignas lanzadas debían cumplir la función de servir de puente que permitiese a las masas movilizarse hacia el poder (o mejor, de aproximarse cada día más y más hacia ese objetivo), partiendo de sus necesidades inmediatas. La defensa de las garantías democráticas, del fuero sindical, de las conquistas sociales más elementales, de la vigencia de la Constitución, de las riquezas e intereses nacionales, etc., adquirieron enorme importancia revolucionaria después de agosto de 1971. La experiencia directa vivida por las masas, por muy pequeña que hubiese sido, contribuyó a su madurez política, en mayor medida que la difusión de los principios y consignas abstractas del socialismo. Marx tenía razón cuando sostenía que "cada paso del movimiento real vale más que una docena de programas". Los bolivianos aprendieron y maduraron más, por ejemplo, participando en las jornadas de fines de 1972, que con la lectura de los periódicos y folletos que publicaron los izquierdistas, si es que publicaron.

Es errónea y absurda la tesis en sentido de que las organizaciones obreras no estuvieron presentes en el Frente Revolucionario Antiimperialista. Lo que ocurrió fue que en esta nueva etapa la expresión de los intereses históricos del proletariado se dio más adecuadamente a través de los partidos y la actuación sindical quedó muy limitada. La Tesis Política de la COB señala la línea maestra en sentido de ser indispensable la formación de un frente antiimperialista para lograr la liberación nacional, táctica que podría ayudar a superar la debilidad del factor subjetivo de la revolución, es decir, que el FRA podría permitir el fortalecimiento del partido revolucionario de los obreros. Cumpliendo este mandato, connotados dirigentes laborales creyeron de su deber impulsar la formación del FRA y redactar sus documentos básicos. Muchos de los dirigentes de los partidos políticos que se reclaman del proletariado son, al mismo tiempo, sindicalistas. Por su tradición y por sus ideas, ninguno de los dirigentes obreros que protagonizaron el nacimiento del FRA, ni los partidos marxistas, sobretudo después de la experiencia de la Asamblea Popular, podían aceptar el marginamiento de la clase obrera de la nueva organización, que buscaba llevara las masas a aplastar al fascismo.

Los trotskystas manifestaron que su concepción del frente antiimperialista partía de las resoluciones del IV Congreso (1922) de la Internacional comunista al respecto.

En el mes de junio de 1973, tres organizaciones del FRA (de nueve que la componían) concluyeron un acuerdo político con el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR), timoneado por Hernán Siles Zuazo. Esas tres organizaciones eran el PRIN, el Partido Comunista de Bolivia M-L (pro Pekín) y el Partido Comunista de Bolivia (pro-Moscú). Este nuevo frente político no adoptó una denominación capaz de identificarlo y se limitó a lanzar un "Llamamiento al pueblo boliviano"³².

32- "Llamamiento al pueblo boliviano", en A.B. (publicación del PC-ML), junio de 1973.

Se trató de una actitud francamente contraria al FRA, no sólo porque le opuso un otro frente político, constituido para tomar el poder, sino porque propugnó objetivos que estaban en franca discrepancia con la línea trazada por aquel.

El señor Siles Zuazo, que se movió durante bastante tiempo para lograr este pacto político, creyó de su deber hacer constar por escrito que "El MNR no fue consultado ni forma parte del FRA". La verdad es que la incorporación del MNRI al Frente Antiimperialista fue objetada en cierta medida, muchos partidos expresaron que no era una organización revolucionaria y el FRA no tenía por qué cargar con el peso muerto de la herencia movimientista.

En un acápite del documento se lee: "Los partidos que suscriben este llamamiento, a tiempo de ratificar su independencia ideológica, política y orgánica, dejan constancia de que el mismo, no afecta acuerdos bilaterales y multilaterales como el FRA y otro tipo de contactos, propios de la naturaleza de las relaciones políticas". Los tres partidos izquierdistas que hemos indicado aparecieron, por propia decisión, militando en dos frentes políticos contrapuestos. Muchos políticos han sacado ventaja, por lo menos en el pasado, de su habilidad de correr siempre en dos caballos, lo que les permitió trabajar efectivamente para la derecha y tener bien cubierto su flanco izquierdo. No puede menos que sorprender, por ejemplo, que el señor Lechín hubiese visitado, sin inmutarse y como si se tratase de la cosa más natural, tanto la isla de Formosa como la China de Mao. En el caso que tratamos el problema no se redujo a que dichos partidos no distinguían el rojo del amarillo o del negro, sino que llegaron al convencimiento de que los postulados del FRA, resultaban de muy difícil realización y que debían ser considerados como hechos para un futuro lejano. Esto quiere decir que llegaron a la conclusión de que el FRA no era viable, por lo menos por ese entonces, y por eso escogieron otro campo de acción. Se subraya que el nuevo pacto fue materializado en un plano realista al fijar los objetivos y la necesidad de lograr "un gran entendimiento nacional de las fuerzas democráticas, populares y revolucionarias".

Se buscaba un frente sin fronteras claramente delimitadas y a este propósito respondió la deliberada vaguedad de los enunciados. A dicho frente podían ingresar todos los que se reclamaban de la democracia o que ocasionalmente se opusiesen a determinadas medidas gubernamentales. Era manifiesta la apertura hacia los partidos de la oposición derechista, se buscaba reeditar la tristísima y vergonzosa experiencia del Frente Democrático Antifascista (creado para derrocar a Villarroel-MNR del poder y que no fue otra cosa que el contubernio de los progenitores de los dos Partidos Comunistas con la rosca). El Partido Demócrata Cristiano de Benjamín Miguel, el PRA, el PURS, el Partido Liberal, cuya adhesión a los principios democráticos nadie puede discutir, tenían abiertas las puertas para sellar su alianza con Lechín, Siles y los partidos comunistas. En este juego lo único novedoso era la presencia en el contubernio del nacionalismo movimientista, representado por el derechista Siles.

Los "marxistas" de los partidos comunista comenzaron por olvidarse de la lucha de clases y de indicar qué rol jugaría en todo esto la clase obrera. Hablaron del pueblo

en abstracto.

Uno de los objetivos del flamante frente era nada menos que defender “la seguridad e integridad del territorio patrio”. También esto repetían los gorilas. ¿Defender de quién? La respuesta no se encontraba en el texto y el olvido era muy grave. La amenaza contra Bolivia y la realidad de su opresión es debida al imperialismo norteamericano. Ni una palabra al respecto de parte de los “marxistas”.

La estrategia de estos “demócratas” quedó al descubierto cuando dijeron que buscaban “el establecimiento de un gobierno democrático y nacional” para una finalidad modestísima: “la plena vigencia de las libertades y derechos hoy avasallados”. El FRA propugnó un gobierno timoneado por la clase obrera para abrir la perspectiva del socialismo. El nuevo frente dio un giro acentuado hacia la derecha y buscaba un gobierno de corte burgués democrático y nacional y que se limitase a otorgar garantías democráticas.

La plataforma que plantearon contenía medidas limitadamente reformistas y de corte democrático.

¿Qué buscaba con todo esto, que es inexplicable después de la aparición del FRA? Nada más que estructurar el apoyo civil de algún golpe castrense, timoneado por algún jefe “demócrata” a la peruana. Este era el fondo del problema. Hacía tiempo que el MNRI andaba metido en tales trajines golpistas, luego el PRIN y los partidos comunistas se prestaron a respaldarle en su aventura. Estos partidos olvidaron que el FRA se pronunció de manera concreta contra el golpismo moviéndose a espaldas de las masas.

Durante el gran desplazamiento de las masas hacia el polo burgués (1977-1978) los izquierdistas y los democratizantes se lanzaron a organizar frentes políticos amplísimos, dentro de la política burguesa, con la finalidad expresa de atrapar a las masas en las redes democratizantes. La UDP y la Alianza-MNR pueden ser consideradas como formas frentistas totalmente opuestas al FRA. El que participasen en ellas algunos de los protagonistas del Frente Revolucionario Antiimperialista fue consecuencia de un profundo cambio político operado en el país.

Capítulo X

Nuevo ascenso de masas

1

el problema económico

El 27 de octubre de 1972 fue dictado del "Decreto-Ley de estabilización monetaria con desarrollo", como gustó llamar el oficialismo a la devaluación monetaria ¹, que, conforme enseña la experiencia de 1956, no fue otra cosa que un corte profundo asestado a los salarios reales.

Bánzer ha repetido una y otra vez que la medida de establecer una nueva paridad cambiaría para el peso boliviano (de 12 \$b. a 20 por dólar americano, G.L.), tuvo que ser adoptada por el gobierno nacionalista, aún a costa de su propio prestigio, con carácter de urgencia en octubre de 1972... "Esa medida "tuvo que ser adoptada" porque así lo decidió el Fondo Monetario Internacional, según confirmó el mismo Paz Estenssoro por escrito: "La presión del Fondo Monetario Internacional había venido ejercitándose, en forma constante y concluyó por convertirse en una exigencia previa para cualquier financiamiento internacional..." Seguidamente acotó el cotidiano paceño "El Diario" que tales revelaciones desmentían lo afirmado categóricamente por el gobierno en sentido contrario, cuando tuvo que rechazar las sindicaciones de proimperialismo lanzadas por la oposición contra el Poder Ejecutivo. Esto no suponía que la situación económica del país, a fines del año 1972, hubiese sido bonancible; lo que dijo el Fondo Monetario Internacional fue que el evidente malestar debía resolverse cargando las tintas sobre la mayoría nacional. Bánzer, en su Mensaje del 6 de agosto de 1973, expresó: "Al presente, por efecto de la política cambiarla, las divisas de libre convertibilidad alcanzan hoy a cuarenta y cinco millones de dólares en comparación con un saldo negativo de dos millones de dólares registrados en octubre de 1972".

La devaluación fue decretada en la proporción del 66.6%, paralelamente se congelaron las remuneraciones hasta octubre de 1973, se concedió una compensación mensual de 135 \$b. (no más del 50% de la pérdida del poder adquisitivo del salario tipo de 500 \$b./mes) y se adoptaron otras medidas impositivas. La disposición perjudicó en mayor grado a quienes vivían del sueldo y del salario, desde el momento que la compensación estuvo muy lejos de cubrir la tremenda pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones. Esto explica que los primeros sectores en reaccionar violentamente fueron los proletarios y los empleados. El impacto fue mucho más violento en los asalariados de las ciudades, que, a diferencia de los de las minas, no

1- "Mensaje del Presidente Bánzer a la Nación", en "Presencia", La Paz, 9 de agosto de 1973.

cuentan con el beneficio de la provisión de artículos alimenticios a precios congelados. Sin embargo, la alta politización de los mineros les permitió colocarse inmediatamente a la cabeza de la movilización contra la disminución de salarios. Los campesinos, que se caracterizan por atesorar pequeñas cantidades de moneda en, billetes, fueron también víctimas de la devaluación, esto porque se vieron en posesión, de la noche a la mañana, de billetes desvalorizados. La reacción antigubernamental de los grupos campesinos, en primer lugar de los más estrechamente vinculados con el mercado, se produjo, aunque tardó algo en manifestarse. "Enfrentados ante la evidencia del aumento exorbitante de los transportes y de los precios de las mercancías en general, además del cobro coercitivo de elevados impuestos en los límites provinciales y departamentales, etc., no tienen más remedio que luchar contra la devaluación monetaria y en favor de la fijación de los precios de los artículos agropecuarios de acuerdo a las leyes del mercado" ².

Los campesinos de Ucareña (valle Cochabambino), pequeños propietarios dedicados al comercio, en una imponente y "agitada asamblea", reiteraron su rechazo a la devaluación monetaria, "desconocieron a los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de la Federación Campesina de Cochabamba", por considerar que eran organismos burocratizados por no representar a los explotados del agro y que serían obsecuentemente alas autoridades. Oscar Céspedes, conocido burócrata que fuera elegido ejecutivo nacional en el controlado y fraguado congreso de Sacaca, no pudo sobreponerse a las rechiflas de los concurrentes. Los campesinos solicitaron con insistencia la fijación de precios razonables para sus productos ³.

El gorilismo volcó todos sus efectivos sobre el valle cochabambino para imponer sus medidas y acallar la protesta. Un oficial fue herido y otros dos tomados como rehenes por los enfurecidos vallunos. Ucareña y Cliza fueron invadidas militarmente y se procedió a la captura de decenas de líderes dlidicales, bajo la acusación de ser extremistas. La Confederación de campesinos servil al gobierno se felicitó públicamente por la marcha punitiva sobre el agro. La prensa paceña se esmeró en ignorar que la tumultuosa asamblea de Ucareña estuvo presidida por el Ministro de Asuntos Campesinos, por el Jefe de la DIN y otros funcionarios militares. La agitación ganó las zonas rurales de los Departamentos de La Paz y Oruro y las medidas represivas no se dejaron esperar. La prensa diaria no dijo casi nada acerca de todo esto.

Sin embargo, la devaluación, al disminuir la capacidad de absorción del mercado interno, como consecuencia del empobrecimiento de las masas, perjudicó seriamente a la industria y a la construcción. A esto se añadieron el aumento de las cargas impositivas y los problemas emergentes de la competencia de las mercancías producidas en los países del Pacto Andino.

La devaluación monetaria actuó como motor impulsor de la movilización de las masas, que ciertamente venían luchando desde hacía tiempo por el aumento general de salarios. La acumulación cuantitativa del descontento popular sufrió un salto

2- "Masas" N° 920, sin lugar de edición, diciembre de 1972.

3- "Los Tiempos", Cochabamba, 11 de noviembre de 1972.

cualitativo y las masas pasaron de la resistencia pasiva a la activa (peticiones, manifestaciones callejeras, huelgas, etc). La acentuación de la miseria tiene consecuencias diferentes según el estado de ánimo de las masas.

La dirección se vio rápidamente polarizada en los obreros fabriles; los otros sectores, particularmente los de la clase media y los estudiantes, adoptaron una actitud ya tradicional en ellos: someterse a la dirección proletaria. En el calor de la lucha, y en vista de los serios obstáculos existentes para el funcionamiento de la Central Obrera Boliviana, se constituyó un esbozo de dirección unitaria nacional: el Comité de Defensa de los Trabajadores, que enarbó la siguiente plataforma:

Solidaridad laboral para la defensa de los derechos socio-económicos de los obreros.

Rechazo del decreto de devaluación monetaria y de la miserable compensación de 135 y 150 \$b. (150 para todos los trabajadores del interior mina, G.L.).

Exigir el congelamiento y control de los artículos esenciales en sus niveles anteriores al 27 de Octubre (de 1972).

Lucha contra el congelamiento de salarios dispuesto por el gobierno en su nueva política económica.

Exigir que se cumpla la inamovilidad de los trabajadores. Lucha intransigente por el respeto al fuero sindical y a la libre expresión de los trabajadores.

Demandar garantías para la actividad de los dirigentes de la Federación de Mineros y de la Central Obrera Boliviana.

El gobierno vio con suma desconfianza la existencia del Comité y tercamente mantuvo su negativa a reconocerlo como entidad representativa de los trabajadores en todos los trámites que siguieron. Desgraciadamente no pudo consolidarse esta dirección unitaria, hecho que se convirtió en un factor negativo en la lucha entablada, sobre todo por la traición de algunos dirigentes burocratizados y que fácilmente se prestaron a entrar en el juego del oficialismo.

En La Paz se desarrollaron los acontecimientos más importantes, donde las masas, encabezadas por los obreros fabriles, salieron a las calles para protestar contra las medidas antiobreras y antipopulares del gobierno. Este sacó sus tanques y sus efectivos militares para obligar a retroceder a los trabajadores, que, sin embargo, respondieron con energía a los atacantes. Las zonas fabriles fueron militarmente ocupadas, pero pese a todas estas medidas extremas los explotados no retrocedieron, atacaron a los elementos armados y asaltaron los puestos policiales en los barrios populares. Las masas movilizadas redujeron a la impotencia a todo el enorme aparato represivo montado por el gorilismo; en las jornadas trágicas hubieron decenas de heridos. Las posiciones que ocuparon los obreros se transformaron en conquistas definitivas y las luchas futuras partieron de este punto de arranque.

Los acontecimientos bolivianos fueron comentados por la prensa mundial, para los observadores resultaba sorprendente la rápida recuperación del movimiento obrero, que sólo puede explicarse si se tiene en cuenta que no fue derrotado en las jornadas de agosto de 1971 y que se limitó a verificar una maniobra de retroceso.

En "Le Monde" de París del 1º de noviembre de 1972 encontramos una nota titulada "Varias centenas de obreros manifestantes en La Paz contra el alza del costo de vida" y que dice:

"Violentos encuentros se produjeron el lunes 30 de octubre en La Paz. Centenares de obreros salieron en manifestación en la capital boliviana contra las recientes medidas económicas tomadas por el Gobierno del coronel Bánzer. Los sindicatos de obreros de la industria reunidos el lunes en sesión extraordinaria, decidieron un paro de labores de ocho horas; varias radios independientes difundieron en la mañana comunicados de protesta emanados de los sectores de la banca, ferrocarriles y de la construcción.

"A las primeras horas de la tarde, los manifestantes se reunieron en el centro de la capital bloqueando la circulación, representantes de varios sindicatos usaron de la palabra calificando al Gobierno de "fascista y antiobrero". La policía hizo uso de gases lacrimógenos; se produjeron varios disparos. Los estudiantes se unieron a los manifestantes para lanzar piedras contra los policías.

"Según las informaciones oficiales, los enfrentamientos dejaron un saldo de catorce heridos entre los manifestantes, tres de ellos graves".

En el "Sluddeutsche Zeitung" de Alemania (2 de noviembre de 1972), leemos:

"Ola de huelgas en Bolivia. Disparos en La Paz.

"El gobierno militar boliviano bajo el Jefe de Estado, coronel Hugo Bánzer, ponía en posición tanques en lugares estratégicamente importantes de La Paz, para impedir la continuación de la agitación que se creó como respuesta a las últimas medidas económicas del Gobierno. Durante estas agitaciones, había sido muerta una chica y aproximadamente 20 personas.

"A pesar de las advertencias de las autoridades de que no se tiene que perturbar el orden público, el proletariado boliviano reaccionó el martes con una ola de huelgas, que, sobre todo en la capital paralizó la mayoría de las empresas. Dirigentes sindicales declararon que se trata de "protestas activas" contra las últimas medidas económicas ..."

Fueron apresados elementos activos del sindicalismo por decenas, sin embargo, lo que es muy significativo es que esto marca el inicio del retroceso de las autoridades en su política represiva, la firmeza de los trabajadores y las huelgas arrancaron materialmente a estos activistas de las garras policiales.

La convulsión del ambiente social y político parecía no inquietar al Presidente Bánzer,

que declaró en Cochabamba, el 5 de noviembre de 1972: "que su gobierno está satisfecho por los resultados alcanzados hasta la fecha por las medidas adoptadas el 27 de octubre".

2

la respuesta obrera

Los fabriles plantearon la exigencia de una compensación mensual de 540 \$b., los otros sectores urbanos hicieron planteamientos que giraban alrededor de esta cifra. Por su parte, los mineros formularon una compensación en la misma proporción que la devaluación y todos los sectores insistieron en la necesidad de conquistar el congelamiento del precio de las mercancías. Esta diversidad de planteamientos y el hecho de que cada rama laboral formulase y tramitase sus reivindicaciones por cuenta separada, estaba demostrando que el Comité de Defensa de los Trabajadores no pudo vigorizarse y así no hubo una dirección única nacional durante durante este colosal conflicto social, Estas debilidades contribuyeron a impedir el logro de una completa victoria sobre el gorilismo. Pese a todo esto, se debe reconocer que la modificación profunda sufrida por la conciencia de las masas ingresó a la historia social como un hecho fundamental y definitivo.

La movilización en las minas fue vigorosa y se orientó claramente a lograr la unidad de todos los explotados para poder defender eficazmente el pedazo de pan de la familia obrera. Con todo, esta tendencia no logró imponerse sobre la desorientación y atomización de los otros sectores. En Siglo XX hubo una gigantesca manifestación, a la que asistieron alrededor de 20.000 personas (mineros, campesinos y pobladores) y cuyo desarrollo fue transmitido por una cadena radial. La movilización se realizó bajo el signo de repudio a la conducta antiobrera y proimperialista del gorilismo. Las conclusiones del mitin se hicieron conocer a los otros sectores laborales mediante nota del Sindicato de Siglo XX (firmaron Augusto León, Secretario de Cultura y Angel Capari, Secretario de Conflictos Block Caving). "Los trabajadores mineros, conscientes de nuestro deber revolucionario, nos vemos en la necesidad de recurrir a Uds. en esta hora presente, para soldar de una vez por todas la unidad férrea de todo el movimiento obrero nacional junto al pueblo oprimido, para defender nuestros intereses económicos frente a la devaluación monetaria, la defensa de nuestras riquezas naturales, la defensa de los derechos democráticos, la defensa de las libertades sindicales, la vigencia de la Central Obrera y de la FSTMB.

"Los trabajadores mineros de los diferentes sindicatos y el pueblo en general de nuestro distrito, después de una apoteósica manifestación de repudio de la antiobrera y antinacional medida del gobierno, culminó en una grandiosa asamblea general, donde se determinó discutir en el ampliado y a nivel nacional de los trabajadores mineros, a realizarse en Huanuni el 18 del presente (mes de noviembre de 1972), los siguientes puntos:

"1. Aumento general de sueldos y salarios.

“2. Salario Mínimo Vital complementado con la escala móvil de salarios.

“El primero, a juicio nuestro, tiene las siguientes particularidades:

a) Es un aumento circunstancial, porque el gobierno no garantiza el valor adquisitivo del salario real frente al permanente alza del costo de vida;

b) El gobierno tampoco garantiza la estabilidad de los precios de los artículos de consumo, porque el comercio y la industria se encuentran en manos de la empresa privada y fundamentalmente del monopolio extranjero;

c) La devaluación monetaria de ningún modo significa el desarrollo industrial ...

“Los anteriores puntos demuestran que el aumento de sueldos y salarios es una bandera de lucha circunstancial, que no garantiza la estabilidad económica del trabajador en general.

“Las anteriores consideraciones respaldan plenamente los planteamientos del salario mínimo vital, complementado por la escala móvil, como camino para consolidar el salario real del trabajador frente al constante alza del costo de vida.

“Compañeros fabriles: el momento histórico exige al movimiento obrero nacional cerrar filas en torno a nuestras máximas organizaciones sindicales para desarrollar una lucha común en base a un solo postulado...

Prácticamente todo el pueblo boliviano se puso en pie para repudiar las medidas económicas del gorilismo y en esta lucha cobró trascendental importancia el XVI ampliado minero, realizado en Huanuni a fines de noviembre de 1972. La delegación de Siglo XX, que resultó ser la más representativa del espíritu de combate que animaba a los mineros, dio la línea política a la reunión, a través de un amplio documento que fue presentado a la discusión y partiendo de él se aprobaron las diversas conclusiones. El ampliado comenzó rindiendo cálido homenaje a César Lora, Isaac Camacho y otros luchadores que cayeron en plena batalla.

El documento de siglo XX hace un severo análisis de la política reaccionaria del gorilismo y tipifica con claridad el golpe del 21 de agosto de 1971 como preventivo y contrarrevolucionario:

“El ascenso revolucionario de las masas bolivianas fue cortado en seco por el golpe contrarrevolucionario financiado por el imperialismo y el gorilismo internacional, que se materializó el 21 de agosto del año pasado llevando al poder al militarismo respaldado por los partidos contrarrevolucionarios que actualmente gobiernan ...

“Esta dura e insoportable situación nos exige a los trabajadores mineros del país, salir en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses afectados por el plan estabilizador...

“Se impone en la hora presente, fortalecer a nuestra gloriosa Federación de Mineros, respaldando plenamente a los dirigentes elegidos en el último congreso minero, vigilando celosamente cualquier traición y colaboracionismo con nuestros enemigos de clase ...

“Colocados frente a un gobierno antiobrero, consideramos que la tarea más urgente del momento radica en defender la existencia física de las organizaciones laborales y lucha por la vigencia de la COB, condenando a los reestructuradores que pretenden poner a las organizaciones sindicales al servicio del Palacio de Gobierno y del mal llamado FPN...

Entre las principales resoluciones del ampliado tenemos las siguientes:

1. Aumento general de sueldos y salarios para todos los trabajadores de la minería nacionalizada y privada, complementado con la escala móvil de salarios.
2. Reajuste en los precios de contratos, especialmente de interior mina, en la proporción al salario básico aumentado.
3. Anulación de los impuestos del 20 y 40%, sobre valores netos de los minerales entregados a las empresas dependientes de Comibol por los trabajadores “arrendatarios”, “locatarios”, “canaletas de lamas”, veneristas ...
4. Incremento en las rentas de los trabajadores mineros pasivos, en la proporción al constante alza del costo de vida. Hacer extensivos a este sector las “compensaciones”, “subsidios” y otros beneficios que se concedan a los trabajadores activos en la proporción del 100% y en forma general.
5. Congelamiento y control de precios en los artículos de primera necesidad de uso y consumo, liberación del recargo del 10% por concepto de gastos de administración y transporte.
6. Las reservas para beneficios sociales, acumuladas en gestiones anteriores a los DD.SS. de 27 de octubre (de 1972) deben ser recalculadas en función al nuevo tipo de cambio ...

La lucha de las masas no era exclusivamente contra las medidas económicas, que por haber adquirido las características de movilización de los explotados en general contra el Estado era indiscutiblemente política, sino que se fusionaba con reivindicaciones de respeto a las garantías democráticas y sindicales. Esto aparece con toda claridad en las resoluciones del ampliado minero:

Respeto al derecho de organización sindical y garantías para la vigencia de las libertades democráticas. Respeto al fuero sindical.

Vigencia de la COB.

Amnistía general e irrestricta para todos los trabajadores, estudiantes, campesinos, dirigentes sindicales y políticos desterrados, identificados con las luchas de liberación nacional.

Después de un año de batallar se logró, al fin, que el gobierno permitiese el funcionamiento de la Federación de Mineros, un éxito realmente sorprendente. El Ampliado creyó de su deber decir al país que ese hecho de importancia no se debió a una graciosa concesión gubernamental, sino que fue una conquista lograda gracias a una lucha intransigente y larga: "Declaran que la vigencia de la FSTMB es producto de la lucha permanente de los trabajadores mineros del país".

El documento de Siglo XX señaló que el movimiento sindical perdía posiciones como consecuencia de la táctica distraccionista utilizada por las autoridades y que la lucha conducía a la "organización de la huelga general nacional de los trabajadores explotados de todo el país". El planteamiento fue retomado por el Ampliado, aunque de una manera muy moderada: "La situación impone a los trabajadores a echar mano a todos los medios que la tradición revolucionaria nos enseña, hasta llegar, si ellos es necesario, a utilizar la huelga, instrumento de lucha que la Constitución Política del Estado contempla como medio de defensa frente a los atropellos e injusticias que se originan en el abuso del poder".

Fines de octubre y parte de noviembre de 1972 fueron semanas convulsionadas y las masas vivieron una existencia afiebrada. Los acontecimientos y la conducta de dirigentes y dirigidos estuvieron dominados por el empuje de las bases, su voluntad se impuso autoritariamente. El personaje más destacado del Ampliado Minero, la reunión más importante durante todas estas jornadas, fue, precisamente la poderosa presión de las bases, que impuso su línea a los que titubeaban o coqueteaban con los gorilas. Era de conocimiento público que muchos dirigentes sindicales se habían comprometido con el régimen imperante, demostrando muchas debilidades y que incurrieron en traiciones, pero en los momentos de mayor tensión social, fue decisiva la presencia física e imponente de las bases obreras y los malos dirigentes sólo atinaron a traducir en palabras y hechos el radicalismo de los obreros. Volvieron a hablar el lenguaje tradicional de los explotados. En esos momentos parecían haberse rehabilitado todos.

No hubo tiempo, condiciones ni decisión para ir a la huelga general, que, en las circunstancias imperantes en ese momento, hubiera puesto en el tapete el destino del gobierno. La huelga general sólo se esbozó como un espectro en el horizonte.

En diciembre comenzaron las largas discusiones entre las autoridades y las organizaciones sindicales, alrededor de los planteamientos formulados hasta ese momento, discusiones llevadas dentro del esquema que previamente habían fijado las autoridades. Las masas pasaron a segundo plano, ocupando su lugar los dirigentes, muchos de ellos, como hemos dicho, comprometidos con el gorilismo, que soportaron de manera directa la presión de las autoridades, de la opinión pública y ya no de sus bases. Nuevamente se dieron los casos de dudas, cobardía, defecciones. Los mineros de los sindicatos grandes y en menor medida los fabriles, dieron muestras

de que habían aprendido a vigilar estrechamente a sus dirigentes en los períodos de tramitación de los conflictos.

El gobierno logró, utilizando como señuelo la concesión de un sueldo préstamo, que los bancarios postergasen sus peticiones de compensación por varios meses. Luego lanzó la promesa del sueldo 14 para quebrar a los empleados de comercio y a los fabriles. Las autoridades del Ministerio de Trabajo aparentaron haber formado un frente obrero-gorilismo contra los empresarios. Se trataba de una vieja reivindicación agitada por estos sectores. Acontecimientos posteriores han demostrado que su aceptación como suficiente compensación por la rebaja de salarios fue hecha por los dirigentes sin conocimiento de las bases. Así, los mineros quedaron totalmente aislados en su intransigencia y en condiciones tan lamentables que no tuvieron más remedio que aceptar el ofrecimiento gubernamental, pese a la actitud firme e intransigente de Siglo XX.

Los mineros constituyeron una comisión económica, en la que participaron varios delegados de base, encargada de llevar adelante las conversaciones con el gobierno. A los planteamientos de los trabajadores, Comibol respondió con su oferta de aumento del 7.17% y el sueldo 14. La propuesta fue llevada en consulta a las bases obreras de las distintas minas. Es aquí donde se puso al desnudo la traición de varios dirigentes, señalados por muchos como agentes del oficialismo, que dieron informaciones tendenciosas; muchas veces se sostuvo que la oferta de la empresa importaba un aumento del 42% sobre los salarios (en estos cálculos maliciosamente se incluían los bonos de compensación, familiar, etc). Sólo en Siglo XX fracasaron todas las maniobras. En un principio los oficialistas lograron arrancar a Catavi su aceptación, pero un poco más tarde rectificó su conducta y se alineó junto a Siglo XX. En muchos distritos se dijo que los mineros aceptaban la limosna sólo por encontrarse solos.

Una gigantesca manifestación de Siglo XX (más de 4.000 obreros) subrayó el repudio y rechazo a los ofrecimientos salariales del gobierno. Los discursos que fueron pronunciados expresaron el profundo odio hacia la dictadura fascista. Los dirigentes de la Federación de Mineros fueron censurados por convertirse en portavoces del oficialismo, se les acusó de no haber organizado la lucha nacional de los explotados. Se adoptó la siguiente resolución: 1) rechazar el ofrecimiento de aumento del 7.17% y el sueldo 14 por constituir un insulto al sacrificio del trabajador minero; 2) unidad del proletariado para luchar por un aumento salarial que guarde relación con el alza permanente del costo de vida; 3) luchar por la vigencia de la COB.

Los delegados de Siglo XX Cirilo Jirnez y Dionisio Coca ante la comisión Económica no firmaron el convenio con el gobierno y contribuyeron en mucho a la huelga de 48 horas que fue la respuesta de los radicalizados mineros a la impostura gubernamental y a la traición de algunos dirigentes de la Federación de Mineros. El documento de referencia, fechado el 15 de marzo de 1973 y dirigido a la FSTMB y a su Comisión Económica, decía:

Los delegados que a continuación firmamos, interpretando fielmente las resoluciones de la Asamblea General de nuestro distrito y para deslindar responsabilidades

posteriores con la suerte del movimiento obrero, nos permitimos exponer los siguientes puntos:

“1. Consideramos que la aprobación de la propuesta del Gobierno significa una derrota política para el movimiento obrero del país, es decir, que las peticiones económicas de los diferentes sectores no tienen ningún porvenir de triunfo en razón de que inclusive se ha desmoronado la unidad del sector minero, más aún, se evidencia que los trabajadores mineros ante la derrota frente a las posiciones del gobierno no se encuentran en pie de combate.

“2. Como consecuencia lógica, los planteamientos económicos de los compañeros trabajadores de la minería privada y de los rentistas pasivos no tendrán posibilidades de imponerse frente a la negativa de los empresarios y de la Caja nacional de Seguridad Social, porque no existe la suficiente fortaleza de lucha y unidad en el movimiento minero, como para arrancar soluciones que satisfagan las más premiosas necesidades de estos dos sectores de trabajadores.

“3. El gobierno ha logrado, con la colaboración de algunos miembros de la FSTMB, divorciar a los compañeros del sector nacionalizado de la unidad de los compañeros fabriles, minería privada, rentistas y demás sectores, arrinconando al sector más combativo (minero) del movimiento obrero del país.

“4. Los trabajadores mineros, conscientes de los resultados a los que se ha llegado, no pueden seguir comprometiéndose en las vergonzosas discusiones frente a las maniobras gubernamentales y de las posiciones serviles de algunos conocidos miembros de nuestra entidad matriz, que antes de organizar al movimiento obrero le sirven de escollo. Permanecer en las negociaciones significa seguir colaborando con el Gobierno en sus nefastos propósitos de liquidar a las fuerzas restantes de la FSTMB.

“5. Si la posición intransigente de los delegados de Siglo XX de mantener con altura y firmeza sus resoluciones y los intereses de la clase obrera es motivo para que la FSTMB nos excluya de la Comisión Económica, dejamos a juicio de los compañeros trabajadores mineros cualquier contingencia que podría motivar el problema que nos ocupa”.

No bien fue fracturada la unidad de los trabajadores y se logró hacer retroceder a algunos sectores, el gobierno abandonó sus proyectos de doblegar el espinazo de los explotados mediante la violencia. Pacientemente fue reduciendo uno a uno a los diversos gremios. De esta base real partió su viraje democratizante.

A todo lo largo del año 1973 continuó la lucha de los trabajadores de los diversos sectores de la producción alrededor de la necesidad de lograr algunas reivindicaciones económicas que pudiesen aminorar las nefastas consecuencias de la incesante elevación el costo de vida. El gobierno prometió que a los pocos meses de la devaluación se vería fortalecida la economía y que el país sería invadido por los inversionistas, también sostuvo que los precios no sólo serían congelados, sino que dis-ninuirían. Partiendo de estas premisas optimistas, se prometió formalmente

proceder al aumento general de remuneraciones en octubre de 1973.

Se logró que el sueldo 14, más tarde bautizado como "bono patriótico" se generalizara en favor de todos los trabajadores y empleados; sin embargo, muchos sectores se vieron obligados a recurrir a la huelga para lograr que esa medida fuese efectivizada.

Inesperadamente, en el mes de agosto de 1973, Bánzer declaró que el promedio de aumento de salarios ya se produjo con la concesión del "bono patriótico". La especie fue inmediatamente rechazada por la Federación de Fabriles de La Paz.

La paridad del peso boliviano con el dólar fue difícilmente mantenida, lo que, en último término, significaba que seguía ajustadamente la curva de devaluación el dólar. Los precios de las mercancías no conocieron tregua en su aumento y a las medidas gubernamentales de tipo policial tendientes a disminuirlos se respondió con la escasez de los artículos alimenticios y su ocultamiento. La situación de la familia obrera se vio agravada por el congelamiento de los salarios.

Al aproximarse el mes de octubre de 1973 se asomó en el horizonte el espectro de una descomunal agitación social, motivada por la necesidad de conquistar mejores salarios y acabar con la miseria. Ante tal perspectiva, el Presidente Bánzer inició un nuevo viraje político: cesó de hablar de democratización, de amnistía y de elecciones, para tomar las providencias necesarias que permitiesen rechazar la arremetida obrera, que esta vez se dio en un nivel político muy superior al que reinaba en 1972, pero sin un comando único, pese a todos los esfuerzos hechos para poner en pie a la COB. La avalancha laboral sólo pudo ser rechazada mediante la violencia. A fines de agosto se constató una acentuación de las medidas represivas contra las tendencias revolucionarias y el movimiento obrero.

3

la represión de fines de 1973

El día domingo 23 de septiembre de 1973, una noticia ya desacostumbrada encontró lugar en los periódicos, cierto que algunos de ellos se esforzaron por minimizarla ⁴. El Ministerio del Interior informó que la noche anterior, a horas 21 y 30 (hora poco usual para este tipo de operaciones) fueron detenidos, después del allanamiento de un domicilio y el ritual tiroteo, dos elementos del ELN. "Salustio Choque Choque, sobreviviente de la guerrilla de Ñancahuazú es uno de los apresados y el otro se llama Julio Llanos, militante del POR vinculado al ELN".

Salustio Choque era un conocido provocador policial y se hizo visible en tal papel con motivo de las acciones armadas encabezadas por el Che Guevara. Inmediatamente la dirección nacional del POR dejó establecido que Julio Llanos no figuraba en los

4- "Presencia", La Paz, 23 de septiembre de 1973.

registros de su militancia. Saltaba a la vista que el Ministerio del Interior se había encargado de fraguar el "refugio guerrillero", operación que formaba parte de un plan más vasto. Tal fue el preludio de la represión. Demostrando una ingenuidad sin límites, los "veteranos" del foquismo habían acumulado en una pieza en la que habitaban cantidad considerable de armamento, que sirvió para fotografiarlo y convencer a los lectores de la prensa que los extremistas se traían entre manos algo serio. Las autoridades se encargaron de dar detalles del operativo antiguerrillero:

"Agentes del Ministerio del Interior, en base a informaciones fidedignas realizaron anoche una operación envolvente en una zona de Villa Armonía (ubicada en la periferia de La Paz, G.L.) y cuando procedían a requisar algunas viviendas sospechosas, ubicadas detrás del templo del Señor de la Sentencia, fueron atacados por elementos que se encontraban en una tienda redonda, cuyos ocupantes empezaron a disparar. Los agentes lograron reducir a dos, mientras que un tercero fugó, después de abrirse paso disparando ráfagas de ametralladora ...

"Redactores de "Presencia" visitaron el refugio guerrillero y los agentes mostraron cuatro pistanes, un fusil Garant, dos Sick, alrededor de 600 proyectiles de diferentes calibres, bombas molotov, una bolsa de dormir y propaganda del ELN".

El mismo día 23 (seguramente se escogió un día domingo para dar a entender la extrema gravedad de la noticia) el Ministro del Interior llamó a los periodistas a su despacho para proporcionarles detalles acerca de un complot subversivo que los servicios de inteligencia acababan de descubrir. La información fue ampliada en otra conferencia de prensa que tuvo lugar el día 26 de septiembre.

En el transcurso del día 22 fueron detenidas alrededor de cien personas, siendo dirigentes sindicales la mayor parte de ellas, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, ciudades donde la actividad obrera era importante.

Según el plan que el Ministro del Interior atribuyó a la oposición marxista, se habría organizado la Alianza de Liberación de Izquierda Nacionalista con la finalidad exclusiva de derrocar al Presidente Bánzer y obedeciendo instrucciones de gobiernos extranjeros. La ALIN estaría formada por los dos partidos comunistas, el POR, el MNRI (Siles Zuazo), el ELN, el Partido Socialista, el PRIN, el MIR y las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias, un grupo de militares y carabineros exiliados después del golpe contrarrevolucionario del 21 de agosto de 1971). Esta era la primera y descomunal impostura: no existía la ALIN formada por nueve organizaciones que se reclamaban de la izquierda.

El 21 de mayo de 1973 fue lanzado un panfleto multicopiado de tres páginas y que llevaba el título de "Llamado a la formación de la Alianza de la Izquierda Nacional". Este frente, que se estructuró alrededor del general Juan J. Tórres, al que equivocadamente se le daban posibilidades de aglutinar a gran parte de los hombres de izquierda. Sus propiciadores, que correspondían a la tendencia llamada de la "izquierda nacional", alimentaban la esperanza de poder disolver a las organizaciones partidistas, porque su finalidad era nada menos que dar nacimiento a una fuerza no

sólo diferente, sino negadora de las viejas direcciones políticas. A este frente, cuyo programa era acentuadamente derechista, sólo se podía ingresar individualmente. Del texto del "llamado" se infiere que estos nacionalistas no irían a un pacto con los partidos marxistas bolivianos. Este segundo llamado existió realmente.

En el mes de junio de 1973 se difundió, desde Santiago de Chile, un otro "Llamamiento al pueblo boliviano", suscrito por cuatro partidos políticos: los dos Partidos Comunistas, el PRIN, el MNRI. Los firmantes no creyeron oportuno adoptar una denominación que los identificase y se limitaban a proponer el agrupamiento de las fuerzas revolucionarias, capaz de dar nacimiento en el futuro próximo, a un poderoso frente. Las ideas que se esbozaron fueron igualmente nacionalistas y deliberadamente moderadas.

Pese a que los dos anteriores "llamamientos" tenían como eje a elementos castrenses implicados en trajines golpistas, salta a la vista que nada tenían que ver con la ALIN ideada exclusivamente por los funcionarios del Ministerio del Interior. Las organizaciones políticas mencionadas, excepción hecha del MNRI, seguían siendo formalmente miembros del FRA; pero, seguramente por deficiencias de información o por falta de habilidad del Ministro del Interior, se dio el caso extraño de que este frente no fue mencionado para nada en el plan conspirativo.

Carecía de verosimilitud en ese momento colocar a los partidos políticos que se dicen marxistas junto al MNRI, cuya admisión en el FRA fue cuestionada varias veces y él mismo, creyó más conforme con sus intereses permanecer lo más alejado de organizaciones tildadas públicamente y sobre todo por los Estados Unidos, como extremistas.

El Ministro del Interior sostuvo que la ALIN contaba con el apoyo y el financiamiento de Cuba, del gobierno chileno de Allende y del ERP argentino. Esta afirmación, hecha a la ligera, no tenía más finalidad que hacer consentir que la extrema izquierda boliviana se movía manejada y financiada desde el exterior y que, por tanto, sus planes no podían menos que formar parte de una conjura de alcances internacionales.

Después de la caída de Allende no se pudieron exhibir documentos (excepción hecha de algunas piezas falsificadas como la lista de "marxistas bolivianos" publicada en Santiago) que pudiesen probar que ese personaje o su gobierno hubiesen ayudado a movimientos revolucionarios de otros países o intervenido en ellos. Las tremendas dificultades del régimen de la Unidad Popular y que no le abandonaron en ningún momento, le impidieron prestar a otros movimientos la ayuda a que le obligaba un deber elemental de solidaridad; puede ser que para la adopción de esta actitud hubiese contribuido también su resistencia a ciertas corrientes ideológicas de izquierda, sobre todo, tratándose del caso boliviano. No debe olvidarse que Allende y la UP en forma pública se pronunciaron contra la experiencia de la Asamblea Popular, punto de Partida de la constitución del FRA.

La ayuda cubana, partiendo de toda la experiencia sobre los movimientos de izquierda latinoamericana, era la menos objetable. Sin embargo, la forma en que

plan gubernamental presentó esta "ayuda" era por demás risible. Se habló de envíos de armas en aviones con matrícula cubana (como su fuera obligatorio exhibir el origen nacional de un trabajo altamente clandestino) desde Visviri, donde no existe pista de aviación, hacia el Oriente, región en la que menudeaban los lugares donde desembarcaban sus mercancías los contrabandistas.

El ERP argentino era una organización de concepciones foquistas y terroristas, venía del trotskismo y ha negado esta doctrina como viable en el plano de la teoría y también de la práctica. Es sumamente dudoso que hubiese apuntalado a un frente tan heterogéneo como el ideado por la mentalidad infantil del coronel Castro Averídaño, lo más probable es que hubiese entrado en pugna con la mayor parte de los partidos que arbitrariamente fueron colocados en la misma bolsa.

Muy alegremente se sostuvo que la ALIN tenía sus comandos ubicados en la ciudad argentina de Salta, después de haber sido desalojados de Santiago de Chile por los gorilas golpistas que lograron la victoria. En los "comandos" fue colocado como primera figura el ex-Presidente Hernán Siles Zuazo y como sus colaboradores Lechín, chato Peredo y otras figuras de menor relieve. Siles, desde Santiago de Chile, se encargó de desmentir cablegráficamente tal afirmación, añadiendo que en momento alguno se alejó de Santiago, su habitual residencia por ese entonces. Lechín apareció asilado, juntamente con otros bolivianos, en la embajada paraguaya en Santiago. Los datos proporcionados por el Ministro del Interior se desmoronaron por sí mismos, nadie dio crédito a la leyenda y este hecho constituyó la mayor desgracia para el gobierno.

El novelón cuenta en una de sus partes que los conjurados tenían decidido acabar a balazos con la vida del Presidente Bánzer en ocasión de su proyectado y posteriormente suspendido viaje a la Argentina. Para respaldar esta aseveración se hizo escuchar una cinta magnetofónica que contenía la confesión de un elemento que decía haber estado vinculado con el ELN; se trataba de la pieza clave de todo el plan, pues en él estaban contenidos los datos principales. El sentido común no aconsejaba que se diese crédito a lo sostenido por tal elemento, probablemente un agente policial incrustado en las organizaciones ultraizquierdistas.

El Ministro del Interior exhibió un otro documento que dijo era el "plan operativo del complot" y que, según dicha autoridad, habría sido preparado por el Partido Comunista de Bolivia. El "plan" era por demás infantil y se refería a la forma cómo debían actuar los diferentes grupos durante el levantamiento en la ciudad de La Paz. Este plan contenía nombres de personas y algunas de ellas acabaron con sus huesos en la prisión. Se informó, además, que cursaba en poder del servicio de inteligencia un kardex de afiliados del PCB, puede ser que hubiese habido en todo esto algo de cierto porque fueron apresados muchos elementos viejos, alejados de la política y que no tenían más antecedentes que haber militado alguna vez en las filas del stalinismo.

Por razones comprensibles, el objeto era descabezar a los sindicatos que pudiesen oponer resistencia inmediata a las medidas económicas que se estaban estudiando,

se incluyó en el supuesto esquema conspirativo una lista de nombres de conocidos dirigentes sindicales, particularmente de fabriles y bancarios. Como quiera que una táctica elemental aconsejaba no abrirse inútilmente un nuevo frente en las ciudades, no se involucró a los universitarios. Mario Paz Soldán, Ejecutivo de los bancarios en escala nacional, y Luis López, máximo dirigente fabril de La Paz, figuraron entre los elementos apresados y de mayor relieve. A lo largo del país fueron aprehendidos dirigentes de otras categorías y de los gremios más diversos, principalmente fabriles.

Bien pronto se puso en evidencia de que el "descubrimiento" de este nuevo plan conspirativo extremista estaba destinado a encubrir y viabilizar una operación económica concreta: otra disminución de los salarios reales mediante la astronómica elevación de los precios y la concesión de un bono muy por debajo de ésta. Se volvía a repetir el caso de la zafra roja que sirvió como auxiliar de la devaluación monetaria y más tarde se volvió a hablar de otras conspiración roja cuando el gobierno creyó oportuno, para servir mejor los intereses capitalistas y foráneos, proceder a un nuevo aumento de los precios de las mercancías.

El Presidente Bánzer pareció haberse decepcionado, desde el primer momento, por el poco impacto que hicieron las revelaciones truculentas del Ministro del Interior, eso se desprende de sus declaraciones hechas a la prensa el día 25 de septiembre:

"A tiempo de expresar su preocupación por la nínimización que, según dijo, se había hecho de esa noticia (del complot, G.L.) en las informaciones periodísticas, el general Bánzer afirmó que los organismos seguridad del Estado venían siguiendo desde hace ,aún tiempo los hilos de la conspiración, dijo que el gobierno podía haber dejado que las cosas siguieran su marcha para reprimirla y conjurarla en el momento oportuno, pero que como tal solución hubiese implicado inevitable derramamiento de sangre, se prefirió desbaratar de inmediato la conspiración aplicando las pedidas preventivas que se conocen, como la detención de políticos y algunos dirigentes sindicales que estaban comprometidos en plan de utilizar a los trabajadores repujándolos a huelgas y actitudes de hecho. previstas en el plan subversivo" ⁵.

La novedad del "plan" radicaba en que la agitación social y las huelgas (lo que obligó a incluir los nombres de algunos dirigentes sindicales en las listas de conspiradores o en los esquemas de las asonadas) tenían la finalidad de crear un ambiente de malestar propicio para el golpe de Estado, que de eso se trataba y no de ninguna otra cosa. Las organizaciones obreras como tales y los dirigentes que permanecían fieles a sus documentos ideológicos fundamentales (esos documentos altamente políticos han modelado y organizado de manera particular al proletariado boliviano) estaban alineados en una posición revolucionaria, que involucraba la lucha por el gobierno propio de los trabajadores, y por esto mismo no podían comprometerse con golpes de Estado, fraguados y consumados a espaldas de las masas, aunque en estos trajines estuviesen comprometidos "líderes" obreros. Es oportuno reiterar que el FRA difundió esta posición de manera por demás clara y tajante.

Las palabras de Bánzer permiten descubrir que se buscaba arrastrar a toda la

5- "Presencia", La Paz, 26 de septiembre de 1973.

opinión pública e inclusive a las bases obreras (por algo el Ministro del Interior se esforzó en atraer al diálogo al grueso de los obreros mientras detenía y desterraba a sus dirigentes) con la especie de que el complot tenía carácter internacional y buscaba vietnamizar y polonizar del país, alrededor de este punto se volcaron los esfuerzos tendientes a demostrar tesis tan peregrinas. No debe perderse de vista que el proletariado y las demás clases de Bolivia son indígenas por excelencia, carecen de fuertes ligazones internacionales y prácticamente viven de espaldas al mundo. En las declaraciones presidenciales se leía:

“Según adelantó el Presidente Bánzer..., no se trata de un simple complot en que un partido trata de arrebatar el poder a otro, sino de una vasta confabulación contra la Nación misma, con ramificaciones internacionales y en la cual se contempla la vietnamización del país.

“Afirmó el general Bánzer que la conspiración tenía ramificaciones en el exterior, principalmente Chile por las facilidades que brindaba a las conspiraciones el régimen de Allende, cuya caída -dijo el Presidente- alteró en algo el ritmo del complot que, pese a tal contratiempo, siguió adelante”.

Se insistió en el carácter internacional de la conjura para demostrar que era sumamente peligrosa:

“Afirmó que en sus dos años de gobierno surgieron tres complots: el de Selich que estaba en La Paz y que murió ⁶ -acotó-, el de Valverde que al ver fracasado su plan buscó asilo en el Paraguay, y el actual que por sus concomitancias internacionales y proyecciones era el más grave y peligroso”. El general Bánzer creyó de su deber desmentir un rumor que por ese entonces ganó las calles y que casi inmediatamente después fue confirmado a plenitud: “Refiriéndose a versiones de algunos sectores sindicales en sentido de que el complot fue fraguado para posibilitar una represión y evitar reacciones laborales ante nuevas medidas de tipo económico, el Presidente dijo que una norma de su gobierno y de conducta personal suya es no falsear la verdad y tomar las medidas que se consideran útiles para el país, abiertamente, sin utilizar subterfugios de ninguna índole. Citó como ejemplo las medidas de estabilización monetaria de octubre del año pasado”.

6- Refiriéndose indudablemente a Bánzer la viuda de Selich escribió lo siguiente : “En la comedia judicial que se ha montado en Bolivia, para esclarecer el brutal asesinato del que fuera mi esposo coronel DIM DEM Andrés Selich Chop, indudablemente el gobierno se empeñará en evitar que se establezca la verdad de los hechos.

“Cuando se recuperen las libertades en mi Patria, cuando exista la independencia de Poderes que la Democracia exige, sólo entonces me constituiré en parte civil para identificar en forma clara, no sólo a los autores materiales de crimen tan monstruoso, sino también a los autores intelectuales. Sobre todos ellos debe caer el peso de la ley y de la Justicia.

“Sepa pues el país que espero esta oportunidad y entonces si presentaré mi demanda y no antes. “Asunción, 29 de septiembre de 1973.” Socorro Salinas v. de Selich”.

4

las huelgas obreras

Al apresamiento masivo de dirigentes sindicales y activistas se respondió con la huelga general de bancarios y el paro fabril de 48 horas en La Paz y de 24 en los demás departamentos, excepción hecha de Santa Cruz, donde la dirección laboral pretextó desconocimiento del problema y de las instrucciones de la Confederación ⁷.

Una vez más los hechos demostraron que no funcionaba la dirección nacional del movimiento obrero. Se explica que la COB no hubiese podido poner de relieve su pujanza, no había tenido tiempo de incorporarse y menos de ajustar sus cuadros superiores. Lo lamentable fue que el Pacto Intersindical no pudo coordinar los movimientos de los diversos sectores obreros y de la clase media y tampoco elevarse por encima de las tendencias particularistas y hasta anárquicas. Este fue el mejor servicio que pudo prestarse al oficialismo: pudo arrinconar uno tras otro a los diferentes grupos obreros e imponerles su voluntad. Sólo sus agudas contradicciones internas (contradicciones que se proyectaron básicamente al plano de las discusiones alrededor de los decretos sobre materia económica) y la resistencia de sectores militares, impidieron que el gobierno acentuase mucho más sus medidas represivas contra las organizaciones laborales.

La huelga bancaria, pese a su carácter general y nacional, resultó, por su aislamiento, tan débil que no pudo arrancar a sus dirigentes de las garras policiales. Los paros fabriles pasaron desapercibidos, se tuvo la impresión de que la Confederación del ramo los llevó adelante casi como un formalismo. El Pacto Intersindical no estuvo presente ni para fortalecer los paros ni para ordenar su suspensión. Como un acto desesperado, los dirigentes bancarios ingresaron a la huelga de hambre, cuando era evidente de que las bases sindicales comenzaban a mostrar cansancio. Las autoridades al sentirse fortalecidas no dieron la menor importancia ni siquiera a la mediación de la Iglesia.

La huelga bancaria, que comprendió a las empresas de seguro y a la CNSS, se inició a las cero horas del día 24 de septiembre, y fue disciplinada y ejemplarmente acatada por todos los empleados. Muchos bancos abrieron sus puertas y en otros pocos los empleados de jerarquía cumplieron algunos servicios al público. La policía y agentes civiles del Ministerio del Interior custodiaron los edificios y hasta se ubicaron en los pasillos de las oficinas. La militancia falangista cumplió como siempre la función de fuerza de choque: insultó y agredió a los huelguistas. La dirección sindical se vio obligada a instruir que los elementos de base permaneciesen en sus domicilios en espera de instrucciones. Se actuó con mucho tino para evitar prosperasen las provocaciones.

No se constituyó un comité de huelga y el hecho es sugerente en vista de que en el sindicalismo boliviano es ya una tradición su funcionamiento. De una manera general, el Comité de huelga canaliza las tendencias opositoras a la dirección oficial

7- "Presencia", La Paz, 25 de septiembre de 1973.

que se generan en el seno de los sindicatos. La alta dirección bancaria gozaba, como demostraron los acontecimientos, de la total confianza de los sindicatos y adquirió mucho ascendiente moral, lo que permitió que no prosperasen las acusaciones calumniosas lanzadas por las autoridades.

Buscando quebrar la huelga, el gobierno dijo, una y otra vez, que no estaba dispuesto a ceder a las presiones (estas no eran lo suficientemente poderosas para hacer retroceder al Poder Ejecutivo que se sabía fortalecido) y determinó que los bancarios que no obedeciesen las conminatorias de retornar al trabajo serían reemplazados por jubilados y otros elementos que desearan ocupar los puestos vacantes (partiendo de las disposiciones de la Ley General del Trabajo los sindicalizados han logrado establecer en la práctica la carrera bancaria y cuando un militante falangista pretendió incorporar en altos cargos del Banco Agrícola a sus allegados, los sindicalizados respondieron con un paro de labores), con tal finalidad se abrieron libros de inscripción, de aspirantes, etc. En un sector de la clase media esta amenaza adquirió contornos dramáticos. A los empleados se los puso ante la perspectiva de permanecer fieles a su organización y arriesgar su carrera y su porvenir. El caso era diferente, en alguna forma, al de los obreros en huelga: podían perder su trabajo y en este caso irían a buscar colocación en otras empresas. Estaba en vigencia la utilización de las listas negras para eliminar de los centros de trabajo a los mejores activistas.

Como quiera que las autoridades no pudieron exhibir ninguna disposición legal que les autorizase a dar semejantes pasos, buscaron otra especie de argumentos. La huelga fue tipificada como política y al servicio de la conspiración. El recurso, por muy manoseado, resultó inoperante: "La declaratoria de huelga dice que la decisión "obedece únicamente a la defensa del fuero sindical y a la defensa de los derechos de los trabajadores, rechazando implicaciones de carácter político ...

"Los dirigentes Ruperto Ferreyra y Eduardo Tapia reiteraron posteriormente que la huelga es "completamente apolítica" y que "se trata de una actitud en defensa de un líder sindical".

Los huelguistas y otros dirigentes sindicales mantuvieron entrevistas con el Ministro del Interior y este no perdió la oportunidad para reiterar que los nombres de los elementos apresados aparecían en los documentos del complot. Nadie dio crédito a estas aseveraciones, a tal grado de desprestigio habían llegado las autoridades. "Ambos (dirigentes bancarios; -G.L.) dijeron que durante la entrevista que habían sostenido horas antes con el Ministro del Interior, Cnel. Walter Castro, éste les había enseñado documentos respaldando la acusación de conspiración que pesa sobre Paz Soldán. Dijeron que ellos habían replicado que no daban valor a esa documentación porque los papeles pueden ser fácilmente fraguados.

"Se nos dijo -añadieron- que el dirigente Paz Soldán estaba participando en un plan subversivo. Pero tampoco se pudo verificar el grado de responsabilidad efectiva. Las afirmaciones del Ministro dan margen a la duda" ⁸.

8- "Presencia", La Paz, 25 de septiembre de 1973.

El Ministro del Interior visitó personalmente los bancos, a fin de poder presionar para que los empleados pudiesen levantar la huelga. Simultáneamente, brigadas de choque de FSB intervinieron algunas entidades bancarias y sembraron el terror a su paso.

El 25 de septiembre la Caja de Seguridad Social y el Banco Agrícola (ambas entidades dirigidas por connotadas figuras de FSB) fueron ocupados por brigadas falangistas, que posesionaron a interventores. Para evitar que una cosa similar ocurriese (los interventores violaron archivos, escritorios, etc.), la Caja de ferroviarios tuvo que pedir auxilio de la fuerza policial y así mantener a raya a los falangistas. "Presencia" de 26 de septiembre registra una información sobre la forma en que se operaban estas intervenciones.

"Ayer (15 de septiembre) a horas 11, aproximadamente, un grupo de militantes falangistas con el ánimo exaltado, ingresó en las oficinas de la Caja Nacional de Seguridad Social, prorrumpiendo en amenazas y palabras de tono subido contra los empleados ausentes de esa entidad. Uno de ellos, el que encabezaba el grupo, blandía un revólver.

"... al bajar el grupo al banco Agrícola, las dos periodistas lo siguieron en cumplimiento de su misión noticiosa. Siempre dentro de un ambiente tenso, el grupo ingresó a las oficinas del Gerente de esa institución, Luis Mayser (militante falangista), y al no encontrarlo bajó al piso subsiguiente.

"En ese momento, el hombre armado realizó dos disparos al aire produciendo el pánico entre los pocos funcionarios y la consiguiente alarma entre las reporteras . . .

"Ante la reacción de las periodistas, sobre el hecho presenciado y su censura a que se dispare en un edificio público y de que grupos civiles porten armas, un señor de nombre Roberto Freire F., que dijo ser el Interventor de la entidad, extrajo un arma de fuego y esgrimiéndola dijo a una de las reporteras: Yo también tengo mi pistola y no la voy a usar a menos que usted me obligue a hacerlo.

"En ese momento, en el cuarto contiguo se escucharon imprecaciones que hacían presumir que los exaltados habían regresado. Se produjo pánico en las periodistas y los funcionarios que estaban en el despacho, ante la posibilidad de que se repitieran los disparos. Ingresaron algunos militantes falangistas, que, luego de consideraciones sobre la huelga y el momento político, ofrecieron seguridades..."

Formalmente retrató de una intervención del FPN "para preservar el orden público": "El gobierno, con el respaldo de las fuerzas políticas que forman parte de él, hará cumplir sus determinaciones para hacer frente a la huelga, dijo el Subsecretario del Interior, Freddy Vargas... Sólo en La Paz persiste la actitud de los trabajadores, empujados a una acción irresponsable por dirigentes comprometidos políticamente con el extremismo".

"El Frente Popular Nacionalista, en un primer paso para poner fin a la huelga, intervino

entidades estatales cuyos empleados se adhirieron a la huelga bancaria. Militantes de Falange y del MNR ocuparon esos centros de trabajo y hoy se harán cargo de los empleos aquellos funcionarios que no se hagan presentes" ("Presencia", 26 de septiembre).

La verdad era que la militancia movimientista no participó en dichas intervenciones. La política represiva fue coordinada entre el Ministro del Interior y FSB. No se pudo ocultar la falta de unidad de movimientos y de concepción política ente los partidos que conformaban el FPN.

La huelga bancaria fue buena si se toma en cuenta el sector social que la protagonizó. En todo momento imperó la unidad entre la dirección y las bases y su mayor acierto consistió en haberse transformado en general; su debilidad, repetimos, vino de su aislamiento. Una prolongación del conflicto amenazaba con quebrar a los sindicatos de base, que soportaban la poderosa presión de las autoridades. Una reunión realizada el 26 de septiembre determinó la suspensión de la huelga y acto seguido ingresaron en huelga de hambre veintisiete dirigentes sindicales en el edificio del Arzobispado. Esta última actitud puede valer como protesta contra la prepotencia gubernamental, que violentando sus promesas de enjuiciar en el país a los presuntos conspiradores los desterró al Paraguay; pero, ya no podía hacer retroceder a las autoridades, que vieron mayormente consolidadas sus posiciones con la suspensión de la huelga bancaria.

5

Intentos democratizantes

La represión sindical fue desencadenada con mucha energía y demostró que obedecía a un plan cuidadosamente establecido; en los primeros momentos se tuvo la impresión -que más tarde fue necesario rectificar- de que las autoridades consideraron llegado el momento de pulverizar a toda la organización laboral, particularmente a los mineros, sin cuya destrucción no puede considerarse aplastado el movimiento obrero. Por minutos se esperaba el ingreso de las tropas del ejército al seno mismo de las masas, grandes concentraciones proletarias y se indicó que algunos regimientos se encontraban en estado de apronte, versión que no pudo ser confirmada. De haberse visto materializada esta suposición, habría importado un total abandono del desplazamiento democratizante, que tan afanosamente vinieron efectuando el general Bánzer y su equipo de colaboradores, y su sustitución por una línea dura o sea el retorno a las prácticas de represión que siguieron al 21 de agosto de 1971 (Bánzer-Selich). Hay mucha gente que piensa que la política es tan simple y esquemática como su propia mentalidad. Para llegara la última conclusión olvidaron algunas premisas importantes. No pocas veces los líderes y los gobernantes son víctimas de sus propias obras y de sus promesas, éstas cobran un impulso inusitado y llevan a aquellos a extremos para ellos insospechados. El general Bánzer consideraba todavía en ese entonces que el proceso electoral (amañado de manera que pudiese estrangular la voluntad revolucionaria y sustituir a la libre expresión nie las masas,

etc) podía contribuir a materializar sus ilimitadas ambiciones políticas, así concluyó convirtiéndose en parte integrante de su propio porvenir como gobernante, como caudillo político y militar. En 1978 presidió unas elecciones reconocidas fraudulentas por todos. Esto explica que hubiese exteriorizado tanta amargura al comprobar que no todos los sectores se alinearon rápidamente alrededor de un Bánzer "demócrata y Presidente constitucional". Pueden citarse muchas actitudes del Presidente que confirman lo expresado. Por su patetismo es sugerente el discurso que pronunció en Santa Cruz el 24 de septiembre ⁹. No ocultando su descontento y preocupaciones dijo que iba al encuentro de su pueblo (Bánzer es cruceño) y en busca de su apoyo, porque sólo este apoyo podía inclinarlo a aceptar la ya tan ajetreada candidatura presidencia. En otros pasajes de su arenga añadió:

"Acudo a esta cita histórica porque falsos amigos de ayer, fraguados compañeros de lucha, confundiendo circunstancialmente nuestros ideales con sus intereses, al ver perdidas sus esperanzas de lograr conmigo sus innobles propósitos, se empeñaron en la conjura traicionera, alentando y hasta financiando la contrarrevolución".

Enfatizó que abría su pecho y desnudaba su corazón, "invadido de tristeza, porque yo también podría exclamar como César al ver un ser querido en la conjura "¿Y tú también hijo mío?".

"... Los naturales vaivenes políticos suelen interpretarse en forma errada. Los eternos traficantes de la fe popular, los que piensan obtener ganancias en la confusión, no se dan cuenta de que esas crisis pasajeras y que son vencidas porque nos acompaña la fe de un pueblo que confía en nosotros... La responsabilidad de gobernar Bolivia es grande y agotadora, pero nadie puede rehusar su concurso personal y material. Aceptamos esa responsabilidad con la seguridad de que nada haría vacilar nuestra fe en la Patria".

Bánzer estaba seguro de poder constituir un poderoso partido político alrededor de su nombre, donde se disolverían las enemistades y las amenazas de la reaparición de tendencias izquierdistas que se agitaban en el seno del MNR y de FSB, además de aglutinar ahora posible manifestación nacionalista. El sueño era un partido único detrás del caudillo, capaz de gobernar por decenios y de transformar totalmente el país. Estas ilusiones rápidamente se fueron diluyendo. Los esfuerzos y proposiciones de fusión en el partido único hechas a los jefes civiles del FPN chocaron con la intransigencia puesta para defender la independencia de los viejos partidos. Lo que más desilusionó a los jefes militares fue la apenas disimulada pugna dentro del FPN, pugna por ganar posiciones, por arrastrar detrás de sí a parte del ejército y, sobre todo, por defender, a través de posturas y de actitudes adoptadas forzosamente, el porvenir político.

Más tarde, Bánzer abrigó la certeza de que su candidatura a la Presidencia, lanzada muy precipitadamente, arrastraría a todo el FPN y le permitiría adquirir la solidez y operabilidad que no alcanzó a tener en momento alguno. Esta nueva circunstancia

9- "Ultima Hora", La Paz, 25 de septiembre de 1973.

no hizo más que acentuar las divergencias falanjo-movimientistas, pues el problema de la supervivencia política se planteaba como una cuestión de vida o muerte, estrechamente ligada a la táctica electoral, ésta podía ayudar a delimitar las posiciones y a clarificar la conducta de un partido con referencia a su competidor. Así se explica que el MNR se hubiese mostrado tan reticente en el problema de la proclamación de la candidatura de Bánzer. FSB dio la impresión de subordinar todas sus esperanzas a la mayor grandeza del Presidente golpista en trance de ceñirse la banda constitucional (seguramente que buscaba dar esta impresión de desprendimiento para mejorar en algo su popularidad); la maniobra ocultaba una desmedida ambición y el propósito de potenciar sus acciones en el manejo del aparato estatal. Un buen día las paredes de la ciudad de Santa Cruz aparecieron empapeladas con propaganda en favor de su candidatura del binomio MNR Bánzer--Gutiérrez. Mientras tanto el MNR maniobraba por no pronunciarse y alimentar la especie de que, finalmente, iría a elecciones con sus propias listas aún en el caso de que se viese obligado a apuntalar el nombre del general Bánzer como candidato presidencial.

Ante este sombrío panorama del frente oficialista, dominado más que por la incertidumbre por la pugna enconada interpartidista, fue creciendo la resistencia de ciertos grupos militares a la candidatura de Bánzer. Parece que elementos con mando de tropa le hicieron saber que si realmente quería candidatear debía dejar su cargo de Presidente de la República. No hay por qué extrañarse que algunos institucionalistas comenzasen a conspirar, o a acentuar sus trajines, con el pretexto de salvara las fuerzas armadas de la ilimitada ambición del general Bánzer.

El Presidente, buscando neutralizar a sus encubiertos enemigos uniformados, no se cansaba de repetir que sólo iría a elecciones si así lo determinaban las fuerzas armadas. A los políticos civiles, enceguecidos por la ambición y el odio, les advirtió que estaba dispuesto a prescindir de ellos y llegar a la silla presidencial gracias únicamente a su enorme ascendiente sobre la mayoría nacional, particularmente sobre los campesinos, no en vano era, pues, "líder campesino". El 6 de octubre, en la concentración campesina de Banduriri, donde se lo volvió a proclamar candidato único, dejó correr expresiones cargadas de doble intención: "Ayer he perdido el tiempo renegando con los políticos en lugar de estar en medio de mis hermanos campesinos, ayudándoles con escuelas y hospitales". Incitó a sus "hermanos" para que no se dejen engañar por los políticos, pintados por el general empeñado en hacer politiquería como demagogos, pérfidos y ambiciosos. "No voy a hacer lo que los políticos quieren que haga porque soy líder de los campesinos y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas y los campesinos quieren que lleguemos a las elecciones, vamos a llegar, pero si ellos no quieren tampoco yo voy a arrastrarlos a lo que ellos no quieren" ¹⁰.

Inmediatamente después algunos órganos de prensa comenzaron a hablar de la conveniencia de postergar la fecha de las elecciones hasta tanto "el país encuentre un rumbo preciso" ¹¹.

10- "El Diario", La Paz, 14 de octubre de 1973.

11- "Ultima Hora", 20 de octubre de 1973.

La conducta de Bánzer dejó la impresión de que, por voluntad del oficialismo, el país se había alejado mucho de la meta electoral. Las variaciones políticas operadas en el FPN y en las fuerzas armadas determinaron ese nuevo zig-zag.

Tampoco se tuvo en cuenta, para calibrar la amplitud e intensidad de la represión (muchos consideraban que los apresamientos de dirigentes sindicales eran nada menos que un simple preámbulo de una segura masacre, acto que se consumaría al mismo tiempo que la ocupación de las minas), las crecientes fricciones dentro del FPN y su relación con la delimitación e los alcances de los decretos "correctivos" de la devaluación monetaria de octubre de 1972, uno de los motivos que obligó a las autoridades a fraguar el complot subversivo. El grave incidente político que concluyó con la destitución del Ministro Secretario de Economía y Planificación, Julio Prado Salmón, echó mucha luz sobre la forma como se planificó y dirigió la represión, prácticamente desde el Palacio de Gobierno.

Falange y también sectores movimientistas adictos a Paz Estenssoro, desencadenaron una campaña frontal contra el Ministro Prado, que a causa del fracaso del bullado empréstito de los 225 millones de dólares, tramitado en los EE.UU., se presentó políticamente vulnerable. En declaraciones de prensa Prado expresó que esperaba de parte del Presidente, a título de lealtad, una aclaración acerca del verdadero curso que siguió la tramitación e dicho empréstito y que, mientras tanto, él se veía impedido de hacerlo. La respuesta no se dejó esperar, el general Bánzer con una breve nota destituyó a su colaborador, que todos sabían que era uno de sus predilectos. La carta fechada el 5 de octubre, decía:

"La prensa de hoy registra una declaración suya, en la que, con referencia al crédito de dólares 225.000.000, deja usted entender que por lealtad "no aclara los aspectos en duda" del mismo, hecho que me lleva a prescindir de sus servicios, para que, liberado del principio que usted invoca, quede en libertad de hacerlo públicamente".

No puede pedirse una mayor muestra de la prepotencia de quien se sabía muy por encima de las pequeñeces partidistas y humanas. EL DIARIO (6 de octubre) consignó la noticia con el título de "Tajante severidad de Bánzer con ministro".

Prado había redactado una larga carta de renuncia de su cargo, que le fue devuelta por la Presidencia de la República ¹². En este documento se hace una historiación de la

12- El comunicado de la Presidencia decía: "1. Que el Sr. Julio Prado Salmón se hizo presente, a la reunión ordinaria de gabinete del día de hoy (viernes 5), firmando como Ministro Secretario del Consejo Nacional de Economía y Planificación, Decretos supremos.

"2. A horas 12:45 personalmente el Sr. Edecán de Servicio hizo entrega al Sr. Julio Prado Salmón de la carta mediante la cual S.E. el Sr. Presidente de la República prescinde de sus servicios.

"3. A horas 14:45 de hoy 5 de octubre y con fecha de ayer 4 de octubre, fue presentada a S. E. una carta de renuncia como Ministro Secretario del Consejo Nacional de Economía y Planificación, firmada por el Sr. Julio Prado Salmón.

"4. La carta de renuncia, rechazada por su contenido, fue devuelta por cuanto el Sr. Julio Prado Salmón, ya no ejercía las funciones a las que renunciaba.

"5. Los ministros en Consejo de Gabinete expresaron a S.E. en forma unánime su total adhesión personal y partidaria, repudiando al mismo tiempo las actitudes del ex-Ministro Julio Prado Salmón.

labor cumplida por Prado Salmón en el seno de los diversos equipos ministeriales del general Bánzer, a partir de agosto de 1971. Prado diferencia claramente a los ministros movimientistas, interesados en subordinar la política gubernamental a los intereses de las grandes mayorías, de sus colegas falangistas, portavoces de la ambición desmedida, de los afanes de lucro de ciertos intereses, es decir, de la empresa privada y de los inversionistas: "los que vieron en la Secretaría de CONEPLAN un instrumento útil a la satisfacción de intereses personales y de grupo, se vieron defraudados porque en dicha dependencia estatal encontraron un freno a sus apetitos de enriquecimiento desmedido. Justamente, este ataque se expresó de manera más vehemente en oportunidad de haber ejercido interinamente las funciones de Ministro de Finanzas. Conviene recapitular, a propósito, que estudiadas las disposiciones contenidas en el Plan de Estabilización con Desarrollo, la suerte de presiones surgidas en el propio Consejo de Ministros desvirtuaron la esencia ética de la medida en donde la carga y el peso de la devaluación debía distribuirse equitativamente entre todos los sectores de la población. A raíz de estas presiones de grupos minoritarios desvirtuaron el espíritu de justicia social que informaba esa medida, convirtiéndola en el inicio de una tensión social originada por la escasez y carestía de artículos de primera necesidad y una merma ostensible en la capacidad adquisitiva de los sectores más humildes de la población. Retomando el hilo de estos acontecimientos imaginables de estos grupos que habían distorsionado el Plan de Estabilización con Desarrollo y que requerían aún más privilegios del Gobierno".

Las acusaciones contra FSB eran francas y denunciaban la profundidad adquirida por las divergencias y pugnas dentro del FPN. La Cancillería se esforzó en levantar los cargos lanzados por Prado: "En el orden internacional debo señalar algunos aspectos negativos de la política sectaria. En efecto, con absoluta prescindencia de la opinión de las FF.AA. de la Nación, del Ministerio de Minería y Metalurgia y del propio Consejo Nacional de Economía y Planificación, en actitud sin precedentes en los anales de la historia de Bolivia el Canciller de nuestro país suscribió un convenio de venta de gas al Brasil comprometiendo la entrega de volúmenes apreciables de este recurso energético, sin tomar en cuenta la política de desarrollo siderúrgico que ha formulado el supremo Gobierno, para industrializar los yacimientos del Mutún y, lo que es peor, sin conocer efectivamente el volumen de reservas positivas probables y posibles de este hidrocarburo.

"Por otra parte, el intercambio de Notas Reversales con el Ecuador, efectuado en forma inconsulta con el Consejo de Ministros, ha significado un enorme perjuicio para el desarrollo de industrias ya establecidas en el país, ubicándolas en situación desventajosa con sus similares del Grupo sub-Regional andino.

"Además y como muestra de la inconsistencia de nuestra política exterior, Bolivia se ha adherido a la moción israelí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, vulnerando toda doctrina moral sustentada por las FF.AA. de la Nación, haciéndonos signatarios de una resolución por la cual nos comprometemos con los principios de

"6. El Jefe Nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario expresó al Primer Mandatario que, la actitud del Sr. Julio Prado Salmón, no representa el sentir del partido que jefaturiza".

la Cancillería chilena sobre derechos y territorios arrebatados a un país, víctima de una guerra injusta”.

Se percibía el enorme empeño de Prado Salmón por ganarse el aprecio del ejército, lo que tenía importancia cuando FSB, según denuncia de aquel, hacía trabajos para distanciarlo del MNR: “No escapa al ilustrado criterio de S.E., el hecho que, en términos políticos, el MNR haya contribuido sustancial tiente al mantenimiento de la inestabilidad política del Frente Popular Nacionalista. En efecto, no puede sindicársele al MNR de ningún acto de deslealtad o inconsecuencia política con el gobierno que Ud. preside. Por el contrario, he observado constantemente, desde el Consejo de Ministros y desde la Jefatura Nacional de la Juventud del MNR una tendencia cada vez más perceptible de la dirigencia falangista para indisponer a mi Partido, desde declaraciones oficiales hasta oficiosas de los cuadros de FSB comprometidos con la asonada derechista y abortada en Santa Cruz, hasta las emitidas por la dirigencia falangista, el MNR ha pasado por alto estos agravios para preservar la alternativa histórica que supone la unión de las fuerzas verazmente nacionalistas”.

No se trataba simplemente de la agudización de pugnas internas dentro del FPN, sino de su quiebra total como instrumento para la realización de determinadas metas: “Esta situación de deterioro en el FPN se agudiza por el hecho de que los grupos de presión enquistados en el Consejo de Ministros ejercitan una permanente acción de búsqueda de satisfacer los desmedidos apetitos a los cuales he hecho referencia en párrafos anteriores. En la medida que mi posición ideológica atiende básicamente al interés de las mayorías nacionales, resultó ser el objeto de una suerte de agresiones y calumnias, que reflejan una vez más la predisposición contra la doctrina del MNR que sustenta planteamientos sociales necesariamente divergentes a los intereses minúsculos -pero no por ello menos poderosos- que no vacilan en sostener como doctrina la entrega de la Patria y el método de la fuerza como razón... no puedo como joven político seguir por más tiempo sustentando un esquema en el que ya no creo, pagando con lealtad actitudes que no merecen ese sacrificio, he hipotecado el futuro de una generación con profundo sentido social que cree en su Jefe Nacional”.

En la parte final del documento que hemos glosado se da a entender la extrema gravedad de las medidas económicas que en ese momento estudiaba el gobierno: “Finalmente, Excelentísimo señor Presidente, el fundamento principal que me obliga a alejarme de las funciones de Gobierno, reside en la aprobación de un paquete de medidas económicas, preparadas por un grupo de consultores especiales de la Presidencia de la República, ya que estoy consciente que dichas disposiciones nuevamente son el reflejo de la presión ejercitada por intereses a los que no he vacilado en denunciar en esta carta de renuncia y en cuanta oportunidad me fue posible...”¹³.

Se habrá notado que el ministro renunciante o destituido hizo lo imposible para aparecer como portavoz movimientista, como el defensor de los intereses y porvenir del MNR y hasta ensalza al Jefe Nacional (V. Paz); obligado a arremeter contra FSB y el mismo Poder Ejecutivo, quería cuidarse las espaldas y no abrir inútilmente un

13- “Presencia”, La Paz, 6 de octubre de 1973.

otro frente por su izquierda. Pero, una cosa fueron las esperanzas de Prado y otra las conveniencias políticas del Jefe Nacional del MNR. Este último no rectificó en momento alguno la afirmación que se le atribuyó en el Palacio de Gobierno, en sentido de que Prado no representaba los sentimientos ni la política del MNR. Paz aprovechó la oportunidad para poner orden dentro de su propio partido; bajo su inspiración, Prado fue destituido de la jefatura de la Juventud movimientista y colocado en su lugar un sujeto cualquiera, más dócil a las instrucciones de la alta dirección ¹⁴.

Las cosas no quedaron ahí. Prado no era un pinche sin importancia. Sus ambiciones eran ilimitadas, formó un considerable grupo dentro del MNR y mantuvo estrechas vinculaciones con jefes castrenses (pariente de Gary Prado), posteriormente trasladado del poderoso regimiento Tarapacá a la dirección del Colegio Militar, como parte del alejamiento en puestos claves de un grupo de militares presumiblemente (conspiradores).

Inmediatamente Prado Salmón soliviantó a parte considerable de la militancia movimientista contra la desleal conducta de Víctor Paz; una parte del ejército expresó su descontento por la destitución del ex-ministro y en este sentido presionó sobre el Presidente Bánzer y la alta jerarquía movimientista. Paz no tuvo más remedio que recurrir a los servicios del ubicuo Humboldt Barrero buscando un entendimiento con Prado.

14- La resolución mediante la cual se destituyó a Prado de la dirección de la juventud del MNR decía: "Que se han suscitado una serie de acontecimientos en el seno de la juventud partidista, que constituye un serio riesgo para la armónica marcha de la organización nacional, dados los alcances y proyecciones de los hechos acaecidos;

"Que se hace imperativo superar radicalmente la crisis de dirección operada en el seno del Comando Nacional a raíz de la negativa gestión impresa desde la Jefatura Nacional de la organización matriz de la juventud partidaria, traducida en grave quebrantamiento de las normas más elementales de la ética política;

"Que la persistencia de este factor, ha provocado la justificada reacción de las organizaciones regionales de la Juventud del MNR y por ello es necesario asumir las medidas tendientes a superar el impasse.

"Por tanto, resuelve:

"1º. suspender al c. Julio Prado Salmón de las funciones de Jefe Nacional de la Juventud partidaria, mientras se esclarezca su posición al tenor de las denuncias producidas en el curso de los últimos días, en la prensa cotidiana.

"2do. Dejar claramente establecido el respaldo moral y material a las autoridades partidarias legalmente constituidas en la XI Convención Partidaria y al Frente Popular Nacionalista liderizado por el Gral. Hugo Bánzer Suárez, repudiando todo tipo de actitudes que vayan en desmedro de la moral y honestidad revolucionaria.

"3º. Por determinación general de las organizaciones regionales del país y del Comando Nacional en pleno, a partir de la fecha asume la Jefatura Nacional de la Juventud partidaria, el c. Segio Otero Gómez, en acción mancomunada con los miembros legítimamente elegidos por el VI Congreso Nacional de Juventudes del partido, hasta la realización del próximo evento nacional a convocarse próximamente.

"Es dado en la Sala de Sesiones del Comando Nacional de Juventudes del MNR, a los 5 días del mes de octubre de 1973".

6

Nueva elevación de precios

Cediendo a presiones del fondo Monetario Internacional, que consideraban que los precios subvencionados eran factor inflacionista y una de las causas del creciente contrabando, el Presidente Bánzer constituyó una comisión extra gabinete, conformada por representantes de la industria privada (aparece como cerebro visible de este sector Adalberto Violand, que se autocalificaba de empresario de nueva mentalidad) y por técnicos de algunos ministerios, encargada de estudiar una serie de medidas económicas destinadas a acomodar a la nueva realidad la política de devaluación iniciada en octubre de 1972. No bien se filtró esta noticia a los periódicos, los precios dieron un tremendo salto hacia arriba y se hizo patente la especulación y el ocultamiento de las mercancías. Partiendo de esta realidad se perfilaba una descomunal tormenta social.

El hecho de que los empresarios privados, que gozaban de gran ascendiente sobre el gobierno, llevasen la voz cantante en el seno de la comisión eran suficiente indicio para esperar que los anunciados decretos económicos estarían íntegramente dirigidos contra los intereses de la mayoría nacional y principalmente contra los trabajadores.

Violand, que apareció como el teórico del nuevo rol que debe jugar la empresa privada dentro de la economía boliviana, sostuvo que el Estado y el sector público (empresas estatizadas) tenían la misión fundamental de garantizar el libre desenvolvimiento y prosperidad de aquellas, que necesitaba como eje central una voluminosa inversión de capital financiero, que debía operar bajo el amparo gubernamental. No se trataba de que la empresa privada todavía podía existir, al lado del capitalismo de Estado, que necesariamente debía crecer a costa de aquella, sino de que necesariamente debía fortalecerse en desmedro del sector público. Violand razonó que la nueva empresa privada buscaba el bienestar de las masas, porque, al ensanchar su campo de acción, crearía nuevas fuentes de trabajo y al fortalecerse mejoraría la productividad y los salarios.

El proyecto de la comisión especializada contenía disposiciones que, en caso de haberse aplicado, habrían tenido efectos catastróficos. Se buscaba la total eliminación de los precios subvencionados de la harina (20 millones de dólares al año), la carne, el café, del transporte colectivo (30 millones de \$b. en todo el país y veinte en la ciudad de La Paz), para colocarlos al nivel del mercado internacional, lo que importaba doblar los que hasta ese momento regían, esto con una triple finalidad: liberar al Estado de la pesada carga de las subvenciones; cortar de raíz el contrabando y lograr el abarrotamiento de mercancías. Al mismo tiempo, se concedió el bono general de 200 \$b., considerado como aumento salarial definitivo. Se satisfacía un viejo anhelo empresarial al poner en vigencia la libre contratación (en la práctica una despiadada purga de los activistas sindicales y del personal antiguo) y la disminución de las regalías mineras.

Es alrededor de este tema que se desencadenó, en el seno del gabinete, la lucha

política entre FSB y el MNR y que, en último término, delimitó los alcances de la política represiva que ya había sido puesta en marcha por las autoridades.

Falange defendía la aprobación del proyecto empresarial sin mayores modificaciones (Prado Salmón estaba seguro que esta iba a ser la actitud del gabinete), lo que habría exigido una extrema acentuación de las medidas represivas: el descabezamiento total de los sindicatos y hasta la masacre. Todo permitía suponer que el plan conspirativo del Ministerio del Interior fue ideado dentro de esta perspectiva.

Los ministros movimientistas, que en cierta manera cargaron sobre sus espaldas la responsabilidad de la política económica del gobierno, batallaron por modificar el proyecto original, de manera que se acomodase a la situación política y no desencadenase la agitación social. El ministro movimientista Pinell dijo, a tiempo de presentar los decretos: "Las medidas propuestas por la comisión no son las que ha adoptado el Gabinete, porque hay cierta frialdad en los técnicos; los técnicos no le ponen adecuadamente el ingrediente político... Nosotros hemos tratado de acomodar a cifras reales una situación que ya el país vivía. Nosotros no estamos desencadenando un problema, hemos encontrado ya el problema, o sea que le hemos puesto el correctivo legal. El desabastecimiento de harina es un hecho ya conocido... el precio de la carne ya era más elevado, incluso que el actual, simplemente hemos dado forma a una situación real del mercado interno"¹⁵.

¿Qué debe entenderse por el "ingrediente político" añadido al proyecto original? Nada más y nada menos que su casi total revisión, para condicionarlo al momento político. Acertadamente se dijo que no era suficiente un frío estudio técnico, hacía falta detectar debidamente la capacidad de resistencia que todavía tenían las masas y, al mismo tiempo, las posibilidades de los partidos del FPN de movilizar a los explotados alrededor de las nuevas medidas, de neutralizar los conflictos sociales que necesariamente buscarían precipitar las tendencias y elementos opositores al régimen. En la política del MNR debía también tenerse presente su afán de presentarse como abanderado de los intereses populares, como partido democrático empeñado en evitar la violencia, sobre todo cuando está dirigida contra los sindicatos, en fin, de poner a salvo su porvenir y hacer algo por recobrar su popularidad.

No fueron eliminadas las subvenciones en su totalidad (menos de la mitad para la harina), los precios se elevaron alrededor de un 40%; las tarifas del transporte no fueron tocadas; se rechazó formalmente, aunque no en los hechos, la libre contratación y también la demanda de disminución de las regalías mineras; se concedió el bono compensatorio de 120 \$b/mes en favor de los sectores que no contaban con pulpería barata, etc.

La R.S. (11 de octubre de 1973) que elevó los precios fue dictada -según las autoridades- como una medida tendiente únicamente a precautelar los intereses populares. El texto decía:

"Vistos y considerando:

15- "Presencia", La Paz, 12 de octubre de 1973.

“Que el Supremo Gobierno tiene la obligación íneludible de precautelar la economía del pueblo, fijando precios de artículos de primera necesidad, para evitar el agio y la especulación.

“Que los precios de importación de harina han sido incrementados como resultado de las fluctuaciones monetarias internacionales, incrementando el monto de los subsidios con detrimento del presupuesto nacional.

“Que así mismo el reajuste de los precios internacionales del café vigentes en el país, incentivan actividades ilegales de exportación, privando al mercado local de tan importante artículo de primera necesidad.

“Que es conveniente regular los precios de la carne vacuna para asegurar el normal abastecimiento de los principales centros de consumo interno.

“Se resuelve:

“Artículo 1°. A partir de la fecha, fijase el precio de venta al consumidor del quintal de harina de trigo en pesos bolivianos 117.-

Artículo 2°. Asimismo se fija el nuevo precio del quintal de café torrado y molido en pesos bolivianos 13.-

“Artículo 3°. Fijase el precio de la carne vacuna en pesos bolivianos 12.- el kilogramo, puesto en Trinidad, y en pesos bolivianos 15.50 el kilogramo, puesto gancho frigorífico La Paz.

“Los precios al consumidor, de los diferentes cortes serán los siguientes:

“Hueso kilo \$b. 14.50. Pecho y costilla kilo \$b. 16.50. Pulpa kilo 17.50. Cortes especiales libre”.

Esta elevación de precios fluctuaba en el papel alrededor del 40% y en la realidad superó en mucho dicha cifra. De hecho el pan se estabilizó, en el mejor de los casos, en 33.33 centavos (tres unidades por un peso); pero, la verdadera elevación de su precio no tiene que buscarse en este dato (de buena o mala fe, la R.S. No menciona el peso del pan de batalla, que teóricamente era de 68 gramos la unidad), sino en la tremenda disminución de su peso (en los paquetes de galletas se disminuyó su cantidad). De esta manera, el precio del pan fue reajustado en más del 50%.

El precio de la harina de 177 \$b. los 46 kilos seguía siendo bajo (no fue eliminada en su integridad la subvención estatal) con referencia al mercado internacional, razón por la cual no desapareció el contrabando, teniendo en cuenta, sobre todo, que existía una marcada tendencia alcista mundial de la cotización del trigo. La harina continuó no solo subvencionada, sino racionada. El mercado boliviano se veía obligado a absorber harina más cara proveniente del contrabando.

Los ministros dijeron que los tres artículos motivo de los decretos económicos tenían en Bolivia los precios más bajos del mundo. Esta referencia por sí sola no dice absolutamente nada, para darle algún sentido se la tenía que ubicar en relación con las remuneraciones tremendamente bajas que imperaban en el país. Es cierto que el precio boliviano del café es inferiores mucho, pese al reajuste decretado por el gobierno, al que rige en el exterior. Esta disparidad de precios creaba una incontenible corriente hacia la exportación, lo que determinó su escasez y la elevación fraudulenta de su precio (disminución del peso, mezcla con otros productos).

Con la carne ocurrió un fenómeno parecido. Las autoridades impusieron a los ganaderos (el capitalismo penetraba vigorosamente en esta rama de la economía) la obligación de destinar al mercado interno 2.5 kilos de carne por cada kilo exportado. Los enormes beneficios que los capitalistas tenían vendiéndola en el exterior, determinó que una parte de la producción fuese contrabandear la y otra exportada ilegalmente con la complicidad de funcionarios venales. Las autoridades prometieron elevar la proporción 1:25 kilos a 1:4; en los momentos críticos se recurrió al expediente de prohibir su exportación, lo que, claro está, no impedía su contrabando. Mientras exista disparidad entre los precios internos e internacionales, no se podrá sostener, con certeza, la desaparición de la tendencia a la escasez de la carne. El terreno estaba debidamente abonado para que fructificase la especulación, como se demostró por los datos obtenidos inmediatamente después de la dictación de los decretos de carácter económico que comentamos. El haberse declarado libre el precio para los "cortes especiales" fue aprovechado por los comerciantes al detalle para vender la carne muy por encima de los límites señalados por la Resolución suprema, lo que obligó, posteriormente, a señalar el tope máximo de 22 \$b. por kilo; de una manera natural, todos los precios tendieron a alcanzar esa cifra.

Uno de los decretos fijó el bono de compensación de 120 \$b/mes y levantó el congelamiento de sueldos y salarios establecido un año antes. La parte resolutive de dicha disposición decía:

"Artículo 1º.. A partir de la fecha y con carácter general, se levanta el congelamiento de sueldos y salarios establecido un año antes. La parte resolutive de dicha disposición decía:

"Artículo 2º. Cada organización sindical, reconocida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales o los trabajadores de cada empresa negociarán con su correspondiente empleador, a partir de la fecha y hasta el 15 de diciembre del presente año, convenios sobre aumentos salariales de conformidad a las modalidades y procedimientos de la Ley General del Trabajo. Estos convenios entrarán en vigencia en lo relativo a los aumentos salariales, a partir de la fecha de presentación del respectivo pliego petitorio.

"Para los empleados públicos de la Administración Central, de las Administraciones Departamentales. Municipalidades, Universidades e instituciones públicas, se establece a partir del primero de octubre de 1973 el bono de \$b. 120 mensuales o cuatro pesos por jornada de trabajo, que deberá estar sujeto sólo a la cotización del 3.5% establecido por el régimen de seguridad social.

“Artículo 3°. A partir del primero de octubre del presente año, con excepción de las empresas que mantienen el régimen de precios congelados de artículos esenciales, los empleadores otorgarán a sus trabajadores un reajuste salarial de carácter provisional de \$b. 120 mensuales o sea \$b. 4 por jornada de trabajo, en tanto se concluyan los respectivos convenios obrero-patronales.

“Este reajuste provisional formará parte del incremento salarial que se convenga de acuerdo a lo dispuesto por el artículo anterior.

“Artículo 4°. Las negociaciones a que se refieren los artículos anteriores se llevarán a cabo solamente entre la empresa y su sindicato o directamente con sus trabajadores, en caso de no existir una dirección sindical.

“Artículo 5°. Los acuerdos que se celebren entre sindicato, trabajadores y empresa, tendrán vigencia obligatoria no menos de un año y se consignarán en los convenios respectivos, de acuerdo a procedimientos establecidos por la Ley General del Trabajo”.

El Decreto transcrito es digno de la mentalidad demagógica del jefe movimientista. De entrada se encargó de disipar el temor de los trabajadores en sentido de que el congelamiento podía ser prorrogado por un año más; por esto el equipo movimientista esperaba que aquellos apoyarían eufóricamente la medida. Las condiciones rígidas que establecía para la tramitación de los reajustes fueron ideadas con la finalidad de favorecer a los empresarios. Al establecer la “vigencia obligatoria” de por lo menos un año de los acuerdos que se celebrasen entre sindicato y patrón (Art. 5°) no hacía otra cosa que volver al congelamiento de remuneraciones, aunque en forma temporal y atenuada. Así se pretendió echar las bases de la estabilidad social y salarial, considerada indispensable por la empresa privada y los inversionistas para asegurar un determinado tipo de ganancias.

Según el decreto, cada “organización sindical negociará con su correspondiente empleador” convenios sobre aumentos salariales (artículo 2°.), lo que suponía el desconocimiento de las federaciones, confederaciones, y con mayor razón de la Central Obrera Boliviana, como direcciones encargadas de dirigir y centralizar los conflictos sociales, el gobierno buscaba que aisladamente cada sindicato fuese aplastado por los patrones y, por tanto, político, que cada empresario, de acuerdo a sus posibilidades e intereses (la angurria de ganancia, el egoísmo y las limitaciones son tremendamente mucho mayores en el empresario aislado que en el representante estatal de la clase dominante), concediese los aumentos que creyese convenientes o que sencillamente no los diese, quedando en pie únicamente el bono de ciento veinte pesos. Los cálculos movimientistas fallaron a medias: los obreros no mordieron el anzuelo y rápidamente se orientaron a faccionar pliegos petitorios a nivel de federaciones, repudiando la modalidad de reclamaciones establecida por la disposición legal. Los empresarios se apresuraron a declarar que ellos se atenderían a lo dispuesto por el gobierno y el Ministerio de trabajo empleó todos los recursos para empujar a los trabajadores a conflictos parciales. En este terreno se produjeron conflictos y distanciamientos entre movimiento obrero y el Poder Ejecutivo.

Los movimientistas en ningún momento buscaron la ruptura con el sector empresarial y se esmeraron en darle garantías de que sus intereses quedarían a salvo, por eso, en el artículo cuarto se volvió a repetir que las negociaciones salariales "se llevarán a cabo solamente ente la empresa y su sindicato, o directamente son sus trabajadores, en caso de no existir una dirección sindical". Era este uno de los aspectos capitales para los empresarios y también para el gobierno. Si los trabajadores, en caso de no existir una directiva sindical". Era este uno de los aspectos capitales para los empresarios y también para el gobierno. Si los trabajadores, como se perfiló desde el día mismo del conocimiento de los decretos económicos, rompían estas limitaciones y se lanzaban a una lucha unitaria se habrían derrumbado todos los esquemas gubernamentales, habiéndose así abierto la posibilidad de imponer un aumento general de remuneraciones en condiciones favorables para los explotados. La fijación del 15 de diciembre de 1973 como fecha tope para la negociación de los reajustes salariales y la disposición de que éstos entrarían en vigencia "a partir de la fecha de presentación del respectivo pliego petitorio" (artículo 2º.) tendían a presionar en sentido de que los sindicatos presentasen rápidamente sus peticiones en forma aislada. Posteriormente y buscando siempre evitar la generalización de los conflictos, el plazo de presentación se prorrogó hasta el 10 de enero de 1974.

El bono de 120 \$b./mes fue considerado insuficiente por todos los sectores; estaba muy por debajo del aumento de precios de las mercancías. El reajuste operado en el pan, la carne y el café determinó el aumento de precios en el resto de los artículos en proporciones insospechadas. Por otro lado, el pago del bono de compensación fue descargado excepción hecha de la minería sobre los compradores, lo que, a su vez, motivó una mayor elevación de los precios. Así quedó abierto el ciclo inflacionario. La compensación dada por las autoridades concluyó reducida a su mínima expresión.

En el cálculo del bono de compensación, según información proporcionada por los Ministros de Estado ¹⁶, se partió de datos deliberadamente falsos. Para una familia de 5 miembros (la familia obrera y campesina en el país está compuesta por un promedio de más de tres hijos) se calculó el consumo de 20 unidades diarias de pan (olvidando que el peso verdadero del pan de batalla no pasaba de 35 a 40 gramos), en circunstancias en que para un inmenso sector (aquel cuyo salario apenas si alcanzaba a 500 \$b./mes) el almuerzo y la comida eran sustituidos por una taza de sultana con pan. Lo menos que consumía esa diminuta familia (diminuta para los bolivianos) era la cantidad de 40 unidades del disminuido pan por día. El bono de compensación fue, en la realidad, casi íntegramente absorbido, por el mayor precio del pan. El quebranto económico para la mayoría de las familias radicaba en la elevación de los precios de los otros artículos alimenticios, sin contar vestido, vivienda, energía eléctrica, transporte, etc. La cerveza, una de las bebidas populares, soportó un aumento del 60%.

El gabinete calculó el consumo de medio kilo diario de carne. Demás está decir que esta cantidad era miserable. Si consideramos el consumo modestísimo de un kilo y su precio promedio de 18.60 \$b. se llega a la conclusión de que se imponía un desembolso extraordinario de 210 \$b. al mes, que estaba muy por encima del monto

16- "Presencia", 12 de octubre de 1973.

del bono otorgado.

Seguramente el presupuesto familiar aumento en 400 \$b. o más al mes y el bono apenas si llegó a cubrir el 30% de este aumento, lo que significaba que las remuneraciones de 800 a 1.000 \$b./mes perdieron un tercio de su poder adquisitivo.

“Rechazamos... como cuestión de principio, la libre contratación. Dentro de una situación como la que confronta el país, no haría más que agravar los índices de desocupación, rebajar el nivel medio de las remuneraciones y disminuir la capacidad adquisitiva del mercado interno.

“El MNR se hizo cargo, eso si, de que es indispensable elevar la productividad de la mano de obra y cooperar a que la industria manufacturera sobreviva frente a los obstáculos que le representa la pequeñez del mercado nacional y la competencia desleal del contrabando. No se opuso, por eso, a la reposición de los preceptos sobre empleos, contemplados en la Ley General del Trabajo, pero puso como condición que se obligara a las empresas a no disminuir sus planillas tanto en el número de obreros cuanto en el monto total”¹⁷, informó Paz Estenssoro en una declaración escrita.

El derecho de no ser despedidos arbitrariamente por los patrones, lo que cortó el uso de las disposiciones de la Ley de Trabajo, como subterfugio para justificar las continuas pugnas del personal de las empresas, fue impuesto por los obreros después de larga y tenaz lucha. Durante años se ha observado una permanente tensión en las relaciones obrero-patronales alrededor del discutido sistema de libre contratación. Los empresarios, invocando la necesidad de aumentar los índices de producción, no han dejado de pugnar por reconquistar el derecho de despedir a los trabajadores toda vez que creyesen conveniente. La firme acción de los sindicatos y de los propios obreros evitaron al menos momentáneamente, que prosperasen estos planes. Lo que no pudieron conseguir los patrones de una manera frontal, fue logrado por la astucia y demagogia de los movimientistas.

“La reposición (hasta el momento prácticamente en suspenso, G.L.) de los preceptos sobre empleos, contemplados en la Ley General del Trabajo”, aunque se respetase, por parte de las empresas, la condición de “no disminuir sus planillas, tanto en el número de obreros cuanto en el monto total”, importaba ni más ni menos que permitir que los empleadores despidiesen en el momento para ellos conveniente, a los obreros considerados como agitadores o que tuviesen alguna antigüedad. Veamos lo que dice la Ley General del Trabajo al respecto:

El artículo trece de dicho cuerpo de leyes, modificado por la Ley de 8 de diciembre de 1942, establece implícitamente el derecho del patrono de retirar a un “empleado u obrero por causal ajena a su voluntad”, como fundamento del interés del capitalista de estructurar debidamente su empresa. “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo...”. El artículo 66, modificado por

17- “El Diario”, La Paz, 13 de octubre de 1973.

Ley de 23 de noviembre de 1943, obliga a jubilarse a los empleados en general que hubiesen llegado a la edad de sesenta y cinco años.

Los obreros, vivamente preocupados en el primer momento por el problema salarial, no se percataron de la maniobra movimientista en favor de los empresarios y en perjuicio directo de ellos y del movimiento sindical. Fue necesario que los patrones utilizaran las ventajas de las disposiciones citadas para que los trabajadores comprendiesen la gravedad de la situación creada. Cuando la realidad golpeó brutalmente, menudearon las protestas sindicales por los sistemáticos despidos de trabajadores. Un ejemplo: Un despacho periodístico desde Santa Cruz (31 de enero de 1974) hizo saber que "Algunas empresas locales están procediendo a retirar dirigentes y trabajadores fabriles "por el simple hecho de haber acatado el paro de 24 horas" (decretado por la Confederación de Fabriles como protesta por la elevación de las mercancías decretada en enero de 1974, G. L.) ("Presencia", La Paz, 1º. de febrero de 1974).

La amnistía tributaria y facilidades para la constitución de nuevas sociedades fueron dictadas para complacer a los empresarios.

Al mismo tiempo que el equipo ministerial movimientista delineó la fisonomía definitiva de los decretos económicos, señaló también la táctica que debía observarse frente al movimiento obrero. Dividir el frente laboral y hacer que el impacto de la elevación de los costos no fuese muy grande, estos extremos debían estar destinados a inmovilizar a los trabajadores. Al sector minero se lo eliminó, al menos teóricamente, de los efectos de la elevación de los precios (se mantuvo el sistema de pulpería con precios congelados de cuatro artículos), del bono compensatorio y, consiguientemente, de la posible agitación social. Se pensó que sin los mineros los conflictos que pudiesen desencadenarse, protagonizados por la minoría obrera totalmente escindida, no constituirían ningún peligro para la estabilidad política. Debe añadirse que también los ferroviarios gozaban de pulpería congelada.

Debe tenerse en cuenta que si bien las más grandes concentraciones obreras corresponden a la minería nacionalizada, una cantidad considerable de trabajadores es ocupada por las mineras mediana y chica. En éstas, de una manera general, no hay pulpería congelada y, por tanto, se aplicó el bono de \$b. 120.

La Federación de Mineros y los sindicatos de la minería nacionalizada, expresaron que la elevación general de los precios afectó el presupuesto de sus afiliados y que los trabajadores de las mineras mediana y chica soportaron sus efectos de manera más directa.

Los fabriles de La Paz fueron los primeros en lanzar su voz de repudio a las medidas económicas y siguieron su ejemplo los bancarios, entre las organizaciones de clase media. El rechazo se generalizó rápidamente. La acción unitaria, por lo menos en el plano de las federaciones, se impuso a la dispersión en cientos de sindicatos, como quería el gobierno.

En los primeros momentos se trató de una enérgica protesta, pero sólo en el papel. No

se pasó a la acción directa. En este sentido se pudo observar una enorme diferencia con la reacción de las masas e irrupción a la calle que siguió al decreto de devaluación monetaria de octubre de 1972.

7

Impotencia de la dirección sindical

La extrema debilidad e incapacidad de la dirección sindical tiene mucho que ver en el enorme retraso observado en el paso del aumento cuantitativo de la resistencia a las medidas gubernamentales al cambio cualitativo de la ofensiva osada y franca. Esta debilidad se hizo evidente en el momento de crisis, que fue originada, precisamente, por la tensión de las masas y la ausencia de una acción que le correspondiese debidamente. Las direcciones se fortalecen y actúan entroncándose en la movilización de masas y pueden, si se orientan correctamente y muestran capacidad, acentuar en mucho esa movilización. El retardo que apuntamos debe atribuirse en gran medida a los errores de dirección.

Contra todos los pronósticos del gobierno y del equipo movimientista, los precios en general se elevaron por encima de los cálculos más optimistas y la escasez de alimentos continuó con altibajos. El Ministerio de Industria y Comercio daba listas de precios, que rápidamente la municipalidad los declaraba arbitrarios, porque nadie se sujetaba a ellos. Así gradualmente se fue acentuando la miseria y fue ésta la que actuó como el más poderoso subvertor contra el gorilismo. Las masas y los sindicatos tuvieron que desarrollar toda su capacidad creadora para superar la inoperancia de sus direcciones.

La experiencia de 1972 enseñó que no se puede ir al combate sin una poderosa dirección nacional, es por esto que todos los sectores se orientaron hacia la búsqueda de una acción unitaria y poderosa.

No bien fueron dictados los decretos económicos, que el pueblo con su infalible instinto los motejó de hambreadores, cesó la persecución a las direcciones sindicales. Las medidas policiales cayeron hasta su punto más bajo. Nuevamente se volvió a hablar de elecciones, esta vez junto a la evidencia de que una tendencia se encaminaba a postergarlas indefinidamente, hasta que se den las condiciones favorables.

¿Cuál fue el sentido de la represión limitada? Se trató de una oscilación hacia las medidas totalitarias dentro del gran viraje democratizante que ejecutó el gobierno militar de Bánzer. Se demostró que no existían en ese entonces las condiciones políticas indispensables para el retorno pleno a la barbarie de los primeros meses que siguieron a agosto de 1971 y que se reactualizarán un poco más tarde.

Algunos olvidan que el poderoso ascenso de masas y la imposición de su voluntad sobre el gobierno, tienen que traducirse en la conquista continua y progresiva de las garantías democráticas. Se puede decir que éstas serán puestas en vigencia por la

acción y voluntad de los explotados. No puede concebirse la marcha de la revolución de una otra manera. Al calor de manifestaciones multitudinarias se organizaron y pusieron en marcha Centrales Obreras Regionales en Siglo XX (diciembre de 1973) y Huanuni (enero de 1974).

El finalizar el mes de octubre se realizó, en la ciudad de La Paz, el Ampliado Nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (asistieron los secretarios generales y los delegados de base de las diferentes federaciones departamentales). La reunión estudió el problema económico y resolvió demandar el salario básico de 1.900 \$b., además de otros beneficios colaterales, "no obstante de tener un estudio salarial técnico para nuestro sector laboral fabril, que establece la suma de \$b. 3.671 mensual, como mínimo vital...". El salario básico fue establecido "tomando en cuenta la actual situación de las empresas y la perspectiva de las industrias" ¹⁸. Para los sueldos y salarios superiores al básico de 1.900 (obreros calificados), se solicitó un aumento porcentual. Como reivindicación colateral fue planteado "el pago de bono de movilidad para todos los trabajadores fabriles en general".

La demanda del salario básico fue formulada ante la Cámara de Industrias y al gobierno se presentaron otras reivindicaciones:

"Solicitamos al gobierno excluir a los trabajadores fabriles de cualquier nuevo reajuste sobre el pago del impuesto por servicios personales. Al mismo tiempo se pronuncia contra la libre contratación.

"Solicitamos que el impuesto del 1% pro-edificaciones escolares sea rebajado al 0.5% porque dicho gravamen, aparte de atentar contra la economía del trabajador, sirve para mantener la frondosa planta burocrática sin beneficio para la niñez boliviana.

"Protección a la industria nacional otorgando créditos de rehabilitación industrial por parte del Gobierno a aquellas industrias que requieran de los mismos.

"Reconocimiento del incremento de \$b. 120.- en favor de los trabajadores fabriles del sector pasivo".

El Ampliado exigió también un reajuste de los subsidios familiares y del hogar: "como a la fecha las cotizaciones a la CNSS se pagan sobre el total ganado, significa un incremento considerable para la institución aseguradora. En consecuencia, no es posible que los subsidios se mantengan estáticos, por esa razón la CNSS tiene el deber de aumentar estos beneficios en proporción a la subida de los aportes, tanto para el sector activo, como para el sector pasivo de la clase fabril del país".

El Ampliado Fabril resultó ser la primera reunión que rompió la virtual prohibición gubernamental para que se efectuasen, en escala nacional, encuentros de los delegados obreros.

18- "Presencia", 31 de octubre de 1973.

La Comisión Económica y el Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros aprobaron un pliego de peticiones que se presentó a la Cámara Nacional de Minería, a Comibol, a la Asociación de Mineros Medianos y al Instituto Boliviano de Seguridad Social. El documento contemplaba los siguientes puntos:

“1. Aumento de un cien por ciento a sueldos, jornales y precios de contrato a destajo, como compensación a los efectos de la devaluación monetaria, las medidas correctivas y el encarecimiento del costo de vida.

“2. El aumento de sueldos, jornales y precios de contrato en el porcentaje señalado, debe beneficiar a nuestros afiliados conforme al Art. 2º. del Decreto Supremo N° 11123 de 11 de octubre de 1973, o se, a partir del primero de octubre de 1973.

“3. El personal al que comprende este pliego es el de todos los trabajadores (obreros y empleados) que prestan servicios a la minería privada sin excepción alguna”.

Los portavoces de la Federación de Mineros subrayaron que no se trataba de un aumento salarial, sino únicamente de lograr una compensación adecuada a los efectos negativos de las medidas de devaluación monetaria y de elevación de los precios de las mercancías.

El Ministro de minas, Bedregal Gutiérrez, hizo el consabido comentario al conocer dicho pliego, aunque él estaba seguro de introducir algo inédito en las relaciones obrero-patronales; dijo que se mostrarían a los obreros documentos probatorios de la incidencia de los salarios en los costos de producción. Esto era ya viejo y los mismos trabajadores fueron los que pidieron conocer los secretos del manejo económico de Comibol. Durante el gobierno de Tórres correspondió a personeros de la Federación de Mineros estudiar y encontrar la forma de reponer los salarios que habían sido disminuidos por decreto por el fascista general Barrientos sin incidir en el presupuesto de la empresa; se procedió a una redistribución del mismo, asestando duros golpes a la burocracia.

Las demandas presentadas al IBSS:

“1. Demandar el pago de \$b. 120.- a todos los rentistas y derecho-habientes mineros, a partir del primero de octubre, compensación reconocida por el Gobierno en el artículo 2º del Decreto Supremo N° 11123 del 11 de octubre del presente año.

“2. Reajuste de rentas del sector pasivo minero en la proporción que logren los trabajadores activos de este sector en base a sus demandas de carácter social.

“3. Demandar la fusión del bono de compensación a la renta mensual”.

La FSTMB pidió a las entidades patronales abrir de inmediato las negociaciones obrero-patronales contempladas en la Ley General del Trabajo.

Sólo después de presentados los pliegos de reivindicaciones, los personeros de la

Federación llegaron hasta las bases y el XV Congreso Minero en busca de apoyo a tales planteamientos.

Los pliegos de reivindicaciones por federaciones, modalidad que finalmente se impuso, constituyó, en el primer momento, una enorme victoria sobre los esfuerzos hechos por el gobierno y los patronos en sentido de obligar a los obreros presentar pliegos separados por empresas. Sin embargo, se pudo notar la carencia de una coordinación en escala nacional, cada federación actuó por su cuenta y riesgo, sin interesarse por el resto de la clase. La preparación de las reivindicaciones salariales ocupó todo el tiempo y todas las energías de los dirigentes, lo que trajo una especie de caos en las demandas. Mientras los periodistas exigieron el 100% de aumento a sus remuneraciones, los constructores plantearon un bajísimo salario mínimo (\$b. 1.200.90 por mes) pese a sus cálculos sobre el costo de vida mensual:

Alimentación	\$b. 1.695.-
Vestuario	370.-
Vivienda	235.-
Educación	610.-
Gastos varios	151.-
Total necesario	\$b. 3.095.- ¹⁹ .

Así se inició el conflicto, sin que hubiese habido tiempo ni voluntad para poner en pie una dirección nacional única. Se tenía la impresión de que cada Federación consideraba posible solucionar su problema salarial por su propia cuenta y contando únicamente con sus propios efectivos.

Mientras tanto, los precios de las mercancías, pese a todas las declaraciones en contrario de las autoridades, seguían subiendo por decisión oficial. Al alza del precio de la cerveza, siguió el de la carne de pollo y de los huevos (30%), de los papeles valorados, etc. El panorama social tendía a tornarse catastrófico. Simultáneamente, se aceleraron los trajines golpistas de los opositores "demócratas" y de ciertos sectores militares, conforme denunció el Ministro del Interior.

El PDC, actuando a través de su juventud, se equivocó en el ritmo de la marcha de los obreros. Descontaba que ganarían inmediatamente las calles y por eso convocó a un mitin para el día 27 de octubre, bautizado como el "Día del Hambre". La izquierda marxista se limitó a consignar suprotesta y su pensamiento por escrito.

En vísperas del día 27, Walter Vargas, jefe de la juventud del PDC fue apresado y la manifestación impedida policialmente. El Ministro del Interior justificó con estas palabras sus medidas de fuerza: "Preguntado sobre medidas adaptadas o por el Ministro del Interior y sobre la detención de un dirigente de la juventud del PDC, el Cnel. Castro Avendaño indicó que, efectivamente, su 'Despacho adoptó como es su obligación algunas medidas preventivas para evitar posibles desmanes del hampa'.

"Confirmó, asimismo, la detención de un joven de la democracia Cristiana que, al

¹⁹- "Presencia", 31 de octubre de 1973.

parecer, fue utilizado, no sabemos aún si consciente o inconscientemente, por el extremismo que fue el verdadero promotor de la proyectada marcha del hambre”.

“El Ministro Walter Castro, al exhibir volantes que habían circulado en zonas populares con las siglas del MIR, ELN, FRA y POR, denunció que el extremismo tenía el propósito de aprovechar la manifestación demócrata cristiana para hacerla derivar en una “marcha de hambre” y convertir ésta en una asonada callejera”²⁰.

El día 30 de octubre fueron detenidos Benjamín Miguel, Presidente del PDC, Julio Prado Salmón, ex-ministro de Bánzer, el Cnl. Michel, miembro del CEN del MNR y el My. Elías Belmonte, vinculado a grupos derechistas. Se les acusó de conspirar. Lo más sugestivo fue el apresamiento y posterior alejamiento de la dirección de los servicios de inteligencia castrenses del general César Ruiz Velarde, lo que hablaba por sí mismo de la gravedad que adquirieron los movimientos de resistencia a Bánzer en el seno del ejército.

Todo permitía suponer que las autoridades gubernamentales decidieron desinflar un complot antes de que se agudizase el problema social.

Al mismo tiempo, se hicieron esfuerzos para dar la impresión de que el preparativo de las elecciones seguía viento en popa. El Ministro del Interior, sin cuidarse de justificar sus medidas represivas, no se cansaba de repetir que había total tranquilidad en el país. El último día del mes de octubre se anunció que las elecciones se realizarían el primer domingo del mes de junio de 1974 y que el decreto de convocatoria, así como la amnistía irrestricta, serían dictados oportunamente y conforme a ley.

Con todo, el gobierno Bánzer tuvo un breve respiro. El descontento por la acentuación de la miseria no explotó de inmediato y fue canalizado hacia la lenta y fraudulenta tramitación legal de los pliegos de peticiones presentados por las diversas federaciones. Se trató de un plazo otorgado al régimen castrense y a la propia burocracia sindical, que podía maniobrar a sus anchas en el terreno del papeleo legalista. Inclusive los lacayos de las supuestas federaciones de maestros se dieron el lujo de protestar por el encarecimiento del costo de vida y pidieron el visto bueno del gobierno para presentar sus reclamaciones económicas. La proximidad de la Navidad y la perspectiva de cobrar el sueldo-aguinaldo contribuyeron en mucho a dar largas a la explosión de los conflictos sociales.

Belmonte y Michel fueron rápidamente expulsados al Paraguay. El segundo, pese a su calidad de dirigente del MNR, no gozaba de gran popularidad; Prado Salmón sí y por éste reclamó diplomáticamente Víctor Paz, con la finalidad, sobre todo, de acallar las protestas que el atropello motivó dentro de su propio partido. En carta de 31 de octubre, dirigida al Presidente de la República, el jefe movimientista apuntó: “Esta mañana me permití adelantar a Su Excelencia la honda y generalizada preocupación que existe en las filas del MNR a raíz de la detención del Ing. Julio Prado Salmón y de otros militantes del Partido cuya jefatura ejerzo.

20- “Presencia”, 28 de octubre de 1973.

“Dadas las circunstancias de que el Ing. Prado Salmón ha sido hasta hace poco miembro de su Gabinete Ministerial y Jefe de la Juventud del Movimiento, elegido en el último Congreso, solicito a Vuestra Excelencia quiera instruir que los mecanismos de seguridad del Gobierno efectúen, en la brevedad posible, una investigación exhaustiva sobre la conducta de los citados ciudadanos actualmente detenidos, a fin de ver si efectivamente existen razones valederas para medida tan extrema. Ello permitirá que tanto el Partido como la opinión pública conozcan, en su caso, los justificativos de la acción policial llevada a cabo”.

Como se ve, Víctor Paz aceptó en principio el apresamiento e interrogatorio de los dirigentes de su Partido, lo que denuncia el papel subalterno que jugaron el FPN y sus componentes. Algunos ingenuos esperaban que el jefe movimientista plantease la libertad de sus parciales como ultimátum.

Cuando los periodistas preguntaron al Ministro del Interior acerca del apresamiento del general César Ruiz, éste respondió cautelosamente que dar esa información correspondía a las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa pretendió encubrir el apresamiento y posterior alejamiento del ejército del jefe del servicio de inteligencia castrense de la Siguiete manera:

“El Ministro de Defensa Nacional, Gral. Jaime F. Mendieta, al ser interrogado sobre la situación del general César Ruiz, que cumplía funciones de jefe de Inteligencia Militar y asesor de la Presidencia aseguró: “No hay ninguna detención en las Fuerzas Armadas, de esto estén seguros” (fueron los familiares de Ruiz los que dieron la información de su apresamiento, G.L.).

“El titular de Defensa explicó que el Gral. César Ruiz Velaras “ha pasado a jubilación por tener los años de servicio necesarios”. Respondiendo otras consultas, dijo que el nombrado militar tenía 31 o 32 años de servicio y que la Ley Orgánica de la institución castrense indica que a los 30 años, debe tramitarse a la letra de disponibilidad para jubilarse, y que las Fuerzas Armadas adoptan determinaciones finales, ya que no hay límite de edad ni tiempo de servicio si el caso requiere”²¹.

La Cámara de Industria se negó sencillamente a considerar el pliego petitorio presentado por la Confederación de Fabriles, con el argumento de que las determinaciones gubernamentales obligaban a las tratativas salariales entre las empresas y sus sindicatos individualmente considerados, y porque no podía imponer nada a sus asociados en esta materia. Desde las oficinas del Ministerio de Trabajo se presionó poderosamente sobre las organizaciones gremiales de base para que presentasen a las gerencias de sus fábricas sus peticiones. “Masas” denunció, una y otra vez, que malos dirigentes fabriles de la Federación de La Paz, cosa que también ocurría en el interior del país, se daban modos para coadyuvar los planes divisionistas de la patronal y de las autoridades. Funcionó un amplio frente antiobrero que conspiró sin tregua contra el pliego único.

El decreto que establecía el bono compensatorio fue concebido de tal manera que

21- “Presencia”, La Paz, 2 de noviembre de 1973.

obligaba a los mismos obreros a presionar a sus dirigentes para que se apresurasen en el planteamiento de los aumentos. De esta manera, a medida que pasaba el tiempo (el Decreto supremo decía que los aumentos se concederán desde el momento de la presentación de los pliegos de reivindicaciones) la posición de la Confederación y de las Federaciones Fabriles se veían más y más debilitadas. El Ministro de Trabajo publicaba diariamente largas listas de las empresas que habían logrado concluir acuerdos con sus obreros, aunque se cuidaba mucho de señalar el monto de los aumentos salariales logrados. Sabemos que los reajustes fluctuaban del 15 al 25%, es decir nada frente a la desenfrenada carrera de los precios.

Momentáneamente los patrones y el gobierno habían logrado una victoria, cierto que a medias, y los obreros impotentes no hicieron otra cosa que concentrar calladamente su descontento y su odio.

La maniobra patrono-gubernamental pudo imponerse con relativa facilidad gracias a la complicidad de la burocracia -sindical. Muchos de los viejos dirigentes dependían más del gobierno y de las gerencias patronales que de las bases obreras y, sin embargo, seguían siendo reelegidos en los plebiscitos y en las reuniones nacionales. De una manera general, la inercia del movimiento obrero apuntalaba a la burocracia.

Cuando crece la agitación social o se acentúa la movilización de las masas, éstas chocan con los dirigentes burocratizados y descargan contra ellos su repulsa; estos últimos, sacando toda la ventaja posible de su capacidad de mimetización, se desplazan rápidamente hacia la izquierda y hablan un lenguaje atrevidamente radical, para así defender sus cargos y sus privilegios.

8

Estremecimiento del equipo gubernamental

El 26 de noviembre de 1973, a horas 15, a través de la red radical y la televisión, el general Bánzer, leyó con voz trémula un largo mensaje anunciando su renuncia a la candidatura a la Presidencia de la República, su decisión inquebrantable de preparar las condiciones para el verificativo de elecciones generales en fecha próxima (posteriormente señaló que esa fecha sería 1975), la sustitución de su equipo ministerial político por otro de administración, la conservación el esquema del Frente Popular Nacionalista. Pese a sostener que logró la estabilidad y tranquilidad políticas y la paz social, colocó como telón de fondo de su mensaje la amenaza del ataque extremista, que estaría en acecho para dar el zarpazo el momento menos pensado:

“El extremismo de izquierda que amenazaba seriamente la existencia de Bolivia como nación, se ha replegado. Sin embargo, no olvidemos fácilmente los sufrimientos y los peligros pasados. La amenaza subsiste. Busca nuestra desunión. Quiere dividir al nacionalismo para intentar aventuras, que no pasarán”.

En las anteriores palabras puede encontrarse un desmentido a la existencia de las

numerosas conjuras extremistas que el gobierno dijo haber descubierto y que, de manera extraña, sólo sirvieron para viabilizar determinadas medidas antipopulares.

"Se ha dicho -prosigue el Presidente polemizando con las fuerzas armadas y con quienes desahuciaron el FPN- que el Frente Popular Nacionalista es un fracaso. Que no cumplió el papel para el que fue creado. Que sólo sirvió para encumbrar a políticos y que no tiene perspectivas. Sostengo lo contrario. He manifestado... que la labor de unir a las dos corrientes políticas más importantes del país, tiene como factor adverso un aspecto de tradicional beligerancia, casi superada, y los celos de algunos políticos. Pero los movimientistas y falangistas honestos, la juventud de esos partidos y los dirigentes sanos y patriotas, saben que Bolivia requiere de un ente político fuerte y capaz". Aquí se descubre la decisión -alentada, ni duda cabe, por sectores castrenses- de intentar seriamente la formación de un soporte civil del gobierno fusionando a los sectores incondicionales de los partidos constituyentes del FPN, particularmente el MNR y que en los hechos produjo una verdadera conmoción política.

Atribuyendo gratuitamente al FPN el milagro (debe ser tomado como un argumento más en boca del general Bánzer) de haber logrado "un perfecto equilibrio entre los diversos factores de poder, en un clima de paz social y estabilidad institucional", se vio obligado a criticar los errores de las direcciones políticas y al subrayar la necesidad de su superación, así se buscaba convertir al FPN en dócil-instrumento de las decisiones presidenciales y de las FF.AA.: "La defensa que hacemos del FPN, para el presente y para el futuro, necesaria ante la Historia, de ninguna manera justifica los errores que pudieron haberse cometido, ni la labor negativa realizada por algunos miembros de la organización suprapartidaria, con sus actividades, han tratado de desprestigiar al gobierno y a los partidos políticos de los cuales forman parte. Otra falla que se puede señalar, fue el hecho de que no obstante mi deseo y la decisión de las FF.AA. para que se abra el FPN a otros partidos políticos y corrientes también nacionalistas, primó el exclusivismo, a pesar de todo lo negativo, que por hidalguía hacia el pueblo no se debe callar, el FPN ha cumplido con Bolivia".

Bánzer reiteró su criterio de que el FPN no debía ser la palestra de las disputas sectarias en busca de posiciones políticas, sino un instrumento homogéneo en manos de los caudillos militares; la actitud de Paz, que por todos los medios buscaba aparecer como el líder del viraje democratizante, había llegado a molestar en extremo a ciertos círculos castrenses: "... sin dejar de hacer política de gran alcance, es preciso que olvidemos quién es el más fuerte, quién es el líder y quién cree tener más seguidores. Los sectores mayoritarios del país, la clase media y la opinión pública, están cansados de las discusiones y rencillas internas de hombres y grupos que, no obstante hablar el mismo idioma, han perturbado durante toda nuestra historia la tranquilidad con problemas insubstanciales, mientras que el país requiere obras, hechos concretos y menos palabras. No es posible que la actividad política del pueblo -legítima y necesaria- sea distorsionada por posiciones antagónicas de partidos o grupos que tienen origen y tradición común. Los extremistas, de derecha e izquierda, aquellos que desean destruir el orden y pretenden dar soluciones exóticas o interesadas a nuestra realidad, a pesar del 19 de agosto y no obstante ser minoría, tal vez no se den por vencidos... Que las desavenencias dentro de nuestro propio esquema, no les

sirvan de aliento”.

Reiteró que seguían vigentes las exigencias para el verificativo de elecciones y proclamó que su tarea no era otra que garantizar la realización de éstas no en beneficio propio sino de un otro candidato. Una gran parte del mensaje estuvo dedicado a agradecer a los sectores sociales, partidos y personas que proclamaron su nombre como candidato a la Presidencia constitucional, lo que se explica si se toma en cuenta que Bánzer se había lanzado de lleno y abiertamente a la campaña proselitista. ¿Por qué, en estas circunstancias, llegó a renunciara sus pretensiones? Actuaron poderosas presiones en ese sentido, sobretodo porque falló su intento de movilizar arrolladoramente a toda la opinión pública detrás de su nombre. El FPN debía convertirse en el eje de esta operación política, pero fracasó ruidosamente, particularmente por obra de la actitud calculadora de Víctor Paz: en secreto felicitaba a Bánzer por su candidatura y públicamente daba margen a pensar que, en determinado momento, el MNR lanzaría su propia fórmula, un poco más “izquierdista” que la militar. (“Doy gracias al Dr., Mario Gutiérrez, que con su partido me honró con la postulación de candidato a la presidencia y al doctor Víctor Paz Estenssoro, quien no sólo a mi persona, sino también al Alto Mando, hizo conocer la conveniencia de que intervenga como candidato ofreciendo el respaldo de su partido”, se sostuvo en el mensaje). La dramática decisión adoptada poredel general Bánzer sólo pudo haber sido resultado de la presión ejercitada en ese sentido por sectores decisivos de las fuerzas armadas, que ya le hicieron saber que para continuar con su campaña electoral debía abandonar la Presidencia. El candidato Bánzer sin respaldo del ejército y apoyándose en un FPN internamente debilitado y sin mucho predicamento entre la ciudadanía, no sólo que no habría tenido muchas posibilidades de imponerse en las urnas, sino que no habría podido sobrevivir a un golpe de Estado militar. De esta manera no tuvo más camino que resignarse a cumplir el modesto papel de guardián del Palacio Quemado y de director de la farsa electoral destinada a encumbrar a un otro calidillo uniformado. Claro que en todos estos cálculos parece haberse ignorado a las masas, que, conforme enseñan los acontecimientos, podían dar muchas sorpresas. Sigamos lo que dice el mensaje:

“Cuando en junio del presente año (1973), anunciamos la constitucionalización de los poderes públicos, lo hicimos firmemente convencidos de que los aspectos básicos de la etapa de afianzamiento de nuestro proceso político habían sido de la etapa de afianzamiento de nuestro proceso político habían sido logrados. Hoy seguimos creyendo lo mismo. Nos hallamos convencidos que no existe mejor forma de gobernar que consultando directamente al propio pueblo, para saber qué es lo que quiere, quién y cómo desea que se lo gobierne.

“Al mismo tiempo de reiterar mi firme deseo de que el país constitucionalice sus poderes públicos, debo anunciar a la nación mi indeclinable decisión de no postular como candidato en las elecciones generales anunciadas en junio pasado. Me hallo plenamente seguro que los miembros de las Fuerzas Armadas y cuantos me apoyan, sabrán comprender esta determinación. Los intereses de la Patria están por encima de las personas...”²².

22- “Presencia”, La Paz, 27 de noviembre de 1973.

Podría pensarse que la decisión de Bánzer estaba destinada a asegurar el verificativo de las elecciones en 1975; sin embargo, debe tenerse en cuenta que era el Alto Mando del Ejército el que tenía en sus manos las últimas determinaciones. Por otro lado, la realización o no de elecciones estaba supeditada a lo que hiciesen y pensasen las masas explotadas; si el ejército hubiera considerado que podía ser vencido en las urnas o sobrepasado por la movilización popular, no habría trepidado en postergar indefinidamente las elecciones. La promesa de elecciones fue reiteradamente utilizada dentro del plan gorila de perpetuarse en el poder.

El mensaje de Bánzer contenía ya el anuncio de la crisis de gabinete, la misma que se produjo a las dos horas de haber sido pronunciada la alocución presidencial. Rápidamente se reunieron con el Presidente de la República el Alto Mando Militar (generales Eladio Sánchez Lironda, Carlos Alcoreza Melgarejo, Xavier Pinto Tellería, Oscar Adriázola Valda, los jefes de Estado Mayor Gutemberg Barroso, Luis García Pereira, Armando Alvarez, general Oscar Quiroga Terán, Inspector General de las fuerzas armadas) y los ministros militares Jaime F. Mendieta, Wálter Castro Avendaño, Juan Pereda Asbún y Alberto Natusch Busch. A las 23:20 juró el nuevo equipo ministerial. En la oportunidad, el Presidente Bánzer fijó un plan mínimo de realizaciones hasta el anunciado cambio de gobierno en 1975. De esta manera se subrayó el pretendido carácter administrativo del flamante gabinete, que bien pronto quedó desmentido, pues la única novedad consistió en la acentuación de los rasgos derechistas de la política que venía desarrollando el gobierno militar apuntalado por el Frente Popular Nacionalista.

La simple relación de los hechos demuestra que fue el Alto Mando militar el artífice del ajuste político protagonizado por Bánzer, del cambio ministerial y de la fractura del MNR. Esta línea que acentuaba el monopolio militar en las cumbres políticas se irá acentuando más y más hasta fines de 1974.

El nuevo gabinete correspondió a la acentuación de la influencia del ejército (el jefe falangista Mario Gutiérrez fue reemplazado por el general Alberto Guzmán Soriano en el Ministerio de Relaciones Exteriores), de la empresa privada (en el Ministerio de Finanzas el movimientista Armando Pinel -pazestenssorista y principal autor de las medidas económicas- fue reemplazado por Jaime Quiroga Mattos, que hasta la víspera se desempeñó como gerente de la todopoderosa empresa EMUSA de la minería privada) y se introdujo como cuña escisionista del MNR al movimientista disidente de Víctor Paz (Raúl Lema Patiño) y estrechamente vinculados a los empresarios (Alfredo Franco Guachalla, que fue nominado como Ministro de Trabajo, uno de los puestos claves en medio de la convulsionada situación laboral). El Alto Mando y el Presidente Bánzer sabían perfectamente que sus disposiciones y el estudio de un nuevo reacondicionamiento de la política económica debían necesariamente contrariar a Víctor Paz, por esto coadyuvaron en el fortalecimiento de un grupo fraccional capaz de arrinconar y reemplazar en sus funciones hasta al mismo jefe movimientista. Lo que en verdad se esperaba era que el astuto y envejecido político rompiera violentamente con el gobierno.

La empresa privada, pese a todas las modificaciones de la situación política, no dejó

de tener influencia decisiva en el gobierno militar.

Al anochecer del día 27 de noviembre, la dirección movimientista difundió un comunicado que ratificaba y justificaba su retiro del gobierno, el documento estaba cuidadosamente redactado, buscando capitalizar políticamente la crisis que había sido desencadenada con deliberación:

“En agosto de 1971, el MNR participó en el esquema del Frente Popular Nacionalista e integró el gabinete en la convicción de que con esa actitud cooperaba, decisivamente, a superar uno de los momentos más difíciles de la vida de la nación. Había incertidumbre y estancamiento, el odio dividía a los bolivianos en clases y regiones y la nacionalidad misma se hallaba al borde de la quiebra.

“La victoria de entonces, puso como orden prioritaria del día las tareas del desarrollo económico y las de reconstrucción del país. Para llevar esto a la práctica, era imperioso conseguir estabilidad política y social, factores que raramente se puede alcanzar sin exigir sacrificios, sobre todo a las grandes mayorías. El MNR aceptó esos sacrificios, desgastándose políticamente, a sabiendas, pero convencido de que sin la reconstrucción, el país podía acabar en el caos, y que el desarrollo es el único medio de crear riqueza, que debe distribuirse de un modo socialmente justo, entre todos los bolivianos. El partido colaboró en estas labores, asimismo, con la certidumbre de que las Fuerzas Armadas, por su carácter institucional, constituyen un elemento político integrador, del que no puede prescindirse para la creación de un orden sólido, y de que es necesario cooperar con ellas, buscando coincidencias dentro de los grandes lineamientos del nacionalismo revolucionario.

“El resultado está a la vista. Los riesgos que amenazaban a la nación han desaparecido; el país ha recuperado el sentido de su nacionalidad; hay confianza en el presente, a pesar de las dificultades transitorias que enfrenta el pueblo; se tiene fe en el mañana inmediato, y se ha creado, como el Presidente de la República lo ha reconocido al prometer elecciones generales, las condiciones necesarias para devolver a los bolivianos el ejercicio pleno de la soberanía.

“Por tales antecedentes, el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Consultivo del MNR, han llegado a la conclusión de que la presencia del partido en el gobierno ya no es, pues, imprescindible. En la última etapa que se ha abierto con la reciente crisis de gabinete ` considera que servirá mejor al país desde una serena expectativa. Libre de las limitantes responsabilidades del poder compartido y, por lo tanto, con mayor aptitud para continuar su largo e inquebrantable servicio a los anhelos e intereses de obreros, campesinos y gentes de las clases medias.

“Esta decisión tiene, además, otro fundamento no menos importante. La última crisis de gabinete ha resultado en beneficio, no de las Fuerzas Armadas, cuya esencia popular debe velarse cuidadosamente, ni de los partidos políticos del Frente, que tienen ineluctables responsabilidades para con quienes representan. Ha favorecido, directamente, a la gran empresa privada, cuyos intereses no siempre son coincidentes con los de la Nación ni con los de las grandes mayorías, ya cuya acción ha encomendado

los campos económicos, financieros y sociales, del aparato estatal.

“Por último, es conveniente aclarar que los militantes movimientistas que han aceptado funciones ministeriales, lo han hecho a título estrictamente personal y se hallan, de modo automático, marginados de las filas partidarias, de acuerdo con la resolución conjunta adoptada el 26 del presente por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Consultivo del MNR”.

En declaraciones posteriores, el mismo Víctor Paz indicó que el alejamiento del gobierno le permitiría al MNR recobrar su verdadera fisonomía de partido de izquierda y de verdadero defensor de los intereses populares. Todas estas manifestaciones estaban destinadas a concentrar la atención de los sectores mayoritarios alrededor de la maniobra ejecutada.

Los documentos destinados a la publicidad, además de rezumar demagogia, tenían como una de sus finalidades, la misión de encubrir el sentido y las verdaderas motivaciones de la operación. El argumento de que el retiro del gobierno se imponía frente a la creciente influencia de la empresa privada en su seno, resultó sumamente forzado si se torna en cuenta que para todos, y mayormente para el jefe del MNR, era ya evidente el enorme peso de la empresa privada dentro del equipo gobernante y esto desde el mismo 21 de agosto del año 1971, por la sencilla razón de que aquella ayudó a preparar y financiar el golpe contrarrevolucionario. Por otro lado, es lo que menos se podía esperar del máximo dirigente de un partido que partía de la necesidad de actuar juntamente con los sectores de la llamada burguesía progresista, etc. Víctor Paz y el MNR en su conjunto se han distinguido siempre por un pragmatismo de la peor calidad e invariablemente han dado las espaldas a las consideraciones principistas. Olvidando su propia historia, se sumaron a las huestes formadas por sus jurados enemigos políticos y por los golpistas de noviembre de 1964. A cambio de intervenir, en alguna forma, en el manejo de la cosa pública se avinieron a formar parte del gobierno de la contrarrevolución; contribuyendo así a cerrar el ciclo recorrido por la pequeña-burguesía nacionalista, que comenzó proclamando, en tono destemplado, su odio al imperialismo y concluyó prendido del gorilismo. Sería el colmo de la ingenuidad sostener que la ruptura movimientista con el gobierno obedeció a la necesidad de salvaguardar los principios programáticos del MNR, la integridad de la ideología esbozada por sus líderes, etc. Admitir esta argumentación importaría reconocer que Víctor Paz dio un paso trascendental impulsado por motivaciones secundarias, pues para él era y es secundario todo problema ideológico. Puede tener mayor asidero la especie de que la permanencia en el seno del gobierno importaba para los movimientistas un enorme desgaste político; pero, a la altura a que llegó el proceso político boliviano en ese momento, el desgaste era tan tremendo que no podía remediarse con una simple retirada.

Víctor Paz sólo pudo abandonar el gobierno, luego de haberse comprometido a fondo con su política antinacional y antiobrera, después de haber llegado al convencimiento de que su viraje político contribuiría a la efectivización de un golpe de Estado timoneado por algún conspirador uniformado, porque él y su partido solos carecían de la suficiente capacidad para consumarlo. Para servir mejor de cobertura civil al

cuartelazo nada era tan recomendable como la adopción de un gesto democratiza y hasta izquierdista. Paz no estaba obligado a repudiar al nuevo gabinete, podía simplemente agachar la cabeza, como ya lo hizo tantas veces, y esperar una situación más propicia para exteriorizar su ruptura con el régimen Bánzer. Si se atrevió a pasar el Rubicán fue por razones poderosas y la más importante de todas ellas se refería a que los trajines conspirativos de un sector militar llegaron a su culminación. Otra cosa es que, seguramente porque los servicios de inteligencia del gobierno detectaron oportunamente esos movimientos, no hubo tiempo para el estallido y victoria de la conjura. La sistemática y larga represión desatada contra el MNR pazestensorista y los constantes cambios de destino y desplazamiento de altos jefes militares, fueron las pruebas indirectas que se tuvieron de todos estos manejos.

Lo que pudo comprobarse fue que la postergación de la convención movimientista de enero a febrero de 1974, determinada por el propio Víctor Paz, obedecía a un plan claramente delineado: lograr que dicha reunión coincidiese con la creciente agitación social, a fin de aprovechar la oportunidad para adoptar posturas radicales, todo para crear el clima propicio para el reemplazo de Bánzer por una Junta Militar, que, a cambio de un apoyo militante, mejoraría las posiciones del MNR dentro del equipo gobernante.

Las cosas no ocurrieron conforme a los designios de Paz, sino que todo se precipitó como consecuencia de un golpe preventivo asestado por el oficialismo contra las fuerzas pazestensoristas. El jefe movimientista no pudo desplazarse libremente por la estrecha vigilancia que sobre él ejercitaban los servicios de inteligencia y dio pruebas de que estaba seguro de su expulsión del país, cosa que efectivamente ocurrió en medio del asombro de sus parciales y la complacencia de la opinión pública.

La primera operación gubernamental consistió en consumir y sellar la división del MNR. El grupo incrustado en el gobierno, timoneado por Ciro Humboldt, se encaminó gradualmente al desconocimiento de la jefatura de Paz. En los primeros momentos fueron aglutinados todos los movimientistas dependientes del presupuesto (ante la amenaza del hambre en el hogar zozobró toda posibilidad de mantener en alto la fidelidad al jefe) con el argumento, aparentemente formalista pero de mucho peso, de que habiendo sido una reunión nacional la que acordó la integración del FPN, sólo otra reunión de estetipo podía sancionar el retiro del gobierno. Para dorar la píldora, los disidentes juraron por consigna fidelidad a Víctor Paz y le reconocieron todos los méritos menos el del apego a las normas democráticas. En las elecciones del Comando Departamental de La Paz, que resultaron de importancia decisiva en los momentos críticos que se vivían, Paz se dio modos para hacer triunfar a su candidato, pero los escisionistas proclamaron vencedor al suyo y concentraron a sus parciales en un teatro (se notó la asistencia de delegados del gobierno, de FSB, etc.). Humboldt y sus amigos declararon que estaban en el gobierno a título de movimientistas y que desconocían las decisiones adoptadas por Paz Estenssoro hasta tanto no fuesen ratificadas por un congreso partidista. Así se le fue limitando al jefe movimientista su capacidad de maniobra.

Al medio día del 8 de enero de 1974, Víctor Paz y algunos de sus colaboradores fueron

desterrados al Paraguay, según hizo saber un escueto comunicado del Ministerio del Interior:

“El Ministerio del Interior, Migración y Justicia, comunica a la opinión pública lo siguiente:

“1. El día de hoy fueron detenidos y extrañados del país a la República del Paraguay, los señores Víctor Paz Estenssoro, Julio Garret, Eduardo Olmedo López, Eufronio Amurrio, José Ugarte Calvi y Juan Loayza Ayoroa.

“2. Los cargos que pesan sobre estos ciudadanos y que han determinado estas medidas son:

“a) Desviacionismo de la esencia de la Revolución de Agosto de 1971, constituyéndose en factores de disociación, agitación y perturbación; atentando de esta manera contra la estabilidad del Gobierno y la seguridad del Estado boliviano;

“b) Intento divisionista dentro de las FF.AA. y Policía Boliviana ejercitando una campaña planificada de rumores en detrimento de la honorabilidad de distinguidos jefes y oficiales de ambas instituciones;

“c) Agitación sistemática en los cuadros laborales con la finalidad de crear anarquía y malestar social;

“d) Inconsecuente conducta con la responsabilidad que tienen en la dictación de las medidas económicas;

“e) Contacto a través de enlaces con grupos de extrema izquierda en el exterior e interior del país, con propósitos evidentemente subversivos;

“f) Extorsión a la industria requiriendo fondos para fines conspirativos.

“3. Es cuanto informamos consecuentes con las normas que este Despacho Ministerial se ha impuesto.

La Paz, 8 de enero de 1974”.

Las causales invocadas para justificar el destierro de Paz Estenssoro fueron tan numerosas y abigarradas que no se pudo menos que llegar a la conclusión de que muchas de ellas debían ser ciertas, pues iban desde las consideraciones puramente políticas e ideológicas hasta las sindicaciones de conspiración contra la seguridad del Estado. De esta manera el Ministerio del Interior apareció no únicamente como encargado de cuidar la seguridad del gobierno, sino también la pureza ideológica de los políticos.

La obra comenzada por los disidentes movimientistas, empeñados en cuerpo y alma en el propósito de apoderarse del MNR, fue complementada, de manera autoritaria y

brutal, por los organismos de represión. La rama movimientista oficialista no sólo que estuvo comprometida en la preparación del atropello, sino que públicamente respaldó al gobierno de Bánzer, no ocultando en ningún momento su repudio a Víctor Paz. Esta sucia maniobra es explicable si se tienen en cuenta los antecedentes políticos de Ciro Humboldt, timonel del grupo oportunista. Se inició como liberal y desde esta posición se desplazó osadamente hasta el polo opuesto: FSB. Cuando era evidente que se podía hacer fácil carrera personal bajo las banderas movimientistas, se plegó al partido nacionalista victorioso y dentro de él pasó por toda la gama de las tendencias internas: lechinismo, silismo pazestensorismo. Los observadores políticos sostienen que para él todo cambio de ropaje político siempre ha estado acompañado por la traición. Pese a todo, Paz se limitó a cosechar lo que había sembrado.

Como es ya habitual, Paz negó las sindicaciones del Ministerio del Interior. Violentando normas elementales de lealtad, Humboldt se esmeró en atacar al desterrado y rápidamente se autoproclamó jefe: "... no puedo sustraerme a la decisión de la militancia y de los cuadros directivos que exigen la preservación de la unidad partidaria a cualquier costo y la continuación del esquema político nacionalista que preside el general Hugo Bánzer Suárez. He sido informado, por otra parte, que el Dr. Paz ha aceptado pasivamente ausentarse definitivamente del país, rompiendo de este modo el compromiso adquirido con la militancia ya que un dirigente jamás debe admitir el abandonar a sus cuadros, por muchos que sean los sacrificios que para ello tenga que afrontar.

"En consecuencia, a partir de la fecha, asumo la Jefatura Interina del MNR, en conjunción con el Secretario Ejecutivo del Partido y el Secretario General elegidos democráticamente por la XI Convención Nacional. Se reestructurará un nuevo Comité Político Nacional y un Comité Ejecutivo a fin de que las decisiones que adopte el Partido sean el resultado, no de la voluntad de un hombre o de un grupo, sino que representen el sentir del MNR en su conjunto.

"De acuerdo con el Secretario Ejecutivo c. Rubén Julio Castro, con el c. Secretario General, c. J. José Rivera, y con la mayoría de los jefes de los Comandos Departamentales del país, la XII Convención del Partido queda postergada hasta el mes de agosto del presente año, oportunidad en la que será analizada la gran problemática nacional, la posición del MNR y se elegirá una dirección titular. La Paz, 8 de enero de 1974"²³.

Con la firma de los dirigentes movimientistas adictos al oficialismo y de otros muchos que hasta ese mismo momento aparecían como pazestensoristas, se publicó tardíamente una solicitada repudiando la conducción de Paz y, prácticamente, solidarizándose con las medidas de fuerza adoptadas por las autoridades contra hasta el entonces jefe del MNR. Entre los firmantes apareció Ernesto Ayala Mercado, subrayando con su firma su total degeneración política; por oportunismo, conforme han demostrado los hechos, se desplazó del POR al MNR y en el seno de este partido sólo atinó a apoyarse en los sectores que detentaban el poder. Su carrera política concluyó de la manera más vergonzosa, figuró como candidato a senador en las

23- "Presencia", La Paz, 9 de enero de 1974.

listas del general Pereda (1978). Apareció también el nombre de Antonio Gaspar, que en cierto momento hizo noticia como un honesto dirigente sindical y concluyó como un burócrata más, cuyas actitudes e ideas estaban y están en función del sueldo que percibe. El documento de referencia sostiene, entre otras cosas, lo siguiente:

“La autocrática conducción del MNR ejercitada por el Dr. Víctor Paz Estenssoro, que lesiona la institucionalidad y estructura democrática del Partido, agravada aún más por su sistemática actitud de desconocimiento de la dirección del mismo, a la que ha tratado de suplantar con un grupo de amigos personales constituidos en una camarilla encumbrada ilegalmente en posiciones de dirección; los permanentes desaciertos del Jefe Nacional, que no supo responder a la dinámica del cambio, habiendo desvalorizado las acertadas exigencias del Partido para enfrentarse a la nueva realidad nacional y continental; las contradicciones de su conducción, manifestada en su apoyo al gobierno y sus medidas económicas y sociales, desvirtuadas posteriormente en un breve lapso en el que retira a sus amigos del gobierno, dando una imagen falsa y errónea del MNR... Todos estos desaciertos de conducción han puesto en peligro la unidad del MNR y su continuidad en el proceso histórico político del país.

“Las bases del Partido vienen exigiendo, desde hace tiempo, una conducción que supere el desgastado esquema de las camarillas, a las que el doctor Paz es tan afecto, utilizándolas para servirse del Partido antes de servirlo al mismo. Son estas camarillas las responsables de la caída del gobierno del MNR en 1964, y de la frustración del proceso de la Revolución Nacional que ocasiona un retroceso histórico que desembocó en la instauración de un gobierno anarquizante, al cual se lo desplazó en el pasado inmediato”. Para no contrariar al general Bánzer no se hace referencia al golpe contrarrevolucionario protagonizado por el general Barrientos. De todas maneras, se trata de una crítica tardía y oportunista de los errores de conducción partidista que se dice cometió Víctor Paz.

“Por sobre todos los intereses subalternos -continúa la declaración- estamos ligados al proceso iniciado en agosto de 1971, porque creemos en la validez del esquema del Frente Popular Nacionalista liderizado por el señor general Hugo Bánzer Suárez, esquema que cuenta con el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas y, por este hecho garantiza la estabilidad política y la paz social, necesarias para emprender la lucha contra el subdesarrollo y la dependencia.

“Finalmente, entre tanto se realice la XII Convención Nacional del MNR el compañero Subjefe Nacional, el compañero Secretario Ejecutivo Nacional y el compañero Secretario General, conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, asumen la alta conducción del MNR”²⁴.

El MNR jefaturizado por Ciro Humboldt continuó dentro del FPN, frustrándose así uno de los objetivos de Víctor Paz, provocar la crisis dentro del sostén civil del gobierno y por este camino presionar sobre el ejército para que explotasen sus contradicciones internas, tan difícilmente contenidas hasta entonces.

24- “Presencia”, La Paz, 9 de enero de 1974.

La voz de los pazestensoristas fue acallada utilizando la violencia, fueron sometidos a una sistemática persecución y se lograron romper sus vinculaciones con los militares conspiradores. De esta manera se tuvo la impresión de que el desplazamiento de Víctor Paz de la jefatura de su partido se operó sin mayores complicaciones. El ambiente fue dominado por las declaraciones y maniobras de los movimientistas adictos al oficialismo. La prensa matutina del 9 de enero ²⁵ registró las declaraciones cínicas y cargadas de odio de Rudy Arce, "teórico", dirigente y portavoz del MNR en el seno del FPN: "se desconoció a Víctor Paz Estenssoro como jefe del IVINR y ese lugar estará ocupado por Ciro Humboldt, enfatizó Rudy Arce, Secretario Administrativo del FPN, cuando ayer salía de Palacio de Gobierno al promediar las 17 y 45 horas. Dijo que esta determinación fue asumida considerando que Paz tuvo una actitud negativa dentro del FPN al haber decidido inconsultamente retirarse de este organismo ... Al consultársele acerca del exilio de Paz al Paraguay, dijo simplemente que 'ya mucho antes había autorizado su viaje a Lima'".

La sorpresa y la protesta callada siguieron al destierro de Víctor Paz, inclusive dentro de las filas movimientistas, si se exceptúan explosiones de furor e impotencia como las demostradas por el sacerdote derechista Leónidas Sánchez. Las cosas fueron relatadas de la siguiente manera por los periodistas:

"Causó sorpresa en la población el destierro del jefe del MNR Víctor Paz Estenssoro y otros de sus partidarios... cuando la mañana parecía transcurrir completa tranquilidad, de pronto se suscitó cierto nervioso movimiento en las cercanías del Palacio de Gobierno ...

"Como suele ocurrir en estos casos, muchos curiosos se apeaban hacia el sector de la casa de gobierno. La guardia presidencial -muy celosa de sus obligaciones- insistía continuamente que la gente se retire a diez o quince metros más allá de la puerta. Esta actitud, sin embargo, no cobró vigencia cuando un grupo de turistas tomó fotografías a los guardianes del Colorados. Los hombres de prensa -con su estoicismo ya tradicional- soportaron durante toda la tarde la inclemencia del tiempo lluvioso y frío, mientras algunos extraños y 'oficiosos comentaristas' hacían toda suerte de conjeturas acerca de la situación política del país. Señalaban, por ejemplo, que el exilio de Paz significaría un triunfo para él; que si se realiza la Convención es posible que desconozcan a Humboldt; que Víctor Paz ha sellado la división del MNR, en fin opiniones diversas". Los oficialistas utilizaron todos sus recursos y ventajas para realizar una fraguada Convención del MNR, que no tuvo más papel que el de ratificar todo lo ya hecho por el gobierno y por los obsecuentes movimientistas.

Otra crónica periodística llevaba el expresivo título de "Estupor y tranquilidad en militancia del MNR ante expulsión de su jefe" y en algunos de sus acápites sostenía:

"Estupor y tranquilidad, al mismo tiempo, se advirtió ayer en la militancia movimientista, tras anoticiarse de la expulsión de su jefe Víctor Paz Estenssoro, mientras las oficinas del Comité Político y Comando Departamental permanecieron herméticamente cerradas.

25- "Hoy", La Paz, 9 de enero de 1974.

“Muchos altos dirigentes del MNR desconocían hasta las 15 horas la medida adoptada por el gobierno, otros se encontraban visiblemente nerviosos y muchos allegados a Paz decidieron acogerse al asilo ...

“Otros desconocían en absoluto la medida y paseaban tranquilos las principales arterias de la ciudad. Jaime Caballero Tamayo, ex-Ministro de Información, recibió sorprendido la noticia.

“El café del Club de La Paz, era escenario también de actividades nerviosas de algunos de los dirigentes leales a Paz. Jorge Alurralde conversó con un redactor de “Hoy” y una hora más tarde su esposa informó que éste había buscado asilo en la Embajada Argentina”²⁶.

Para llenar el vacío dejado por la Convención aplazada y a fin de dar forma organizativa a la militancia que estaba obligada a permanecer dentro del marco oficialista, se convocó a un ampliado de dirigentes del MNR, que tuvo lugar el 14 de enero de 1974, teniendo como escenario el salón de actos del Ministerio de Planificación. Estuvieron presentes un delegado del Presidente Bánzer, dirigentes e Falange Socialista Boliviana y los ministros movimientistas.

El objetivo no era otro que ratificar la adhesión del MNR al Presidente Bánzer, relieves la presencia movimientista en el seno del FPN, repudiar y destituir a Víctor Paz como jefe movimientista y colocar a la cabeza de la organización a Ciro Humboldt.

El discurso político central estuvo a cargo de Humboldt, que fue dicho dentro de la conducta bifrontal que observó a lo largo de todo este período: agradecer la labor de Víctor Paz como fundador del MNR y delineador de su programa, para luego descargar sobre él la responsabilidad de todos los errores reales o imaginarios: “Los dirigentes que fuimos fieles a esas posiciones mantuvimos nuestra lealtad inquebrantable; ese nuestro apoyo nunca pudo ser obsecuente ni incondicional..., nuestro apoyo nunca pudo ser a las personas, sino en torno a los principios irrenunciables de carácter ideológico.

“El culto a la personalidad trae como resultado el mito del hombre infalible, pese a que la experiencia nos señala que errar es humano. Cuánto daño han hecho al Partido aquellos adulones que lograron distorsionar la antes tan clara visión de nuestros más respetados líderes para sumirlos en la nebulosa ilusoria de un engañoso embrujo ajeno a nuestra realidad... Los nacionalistas no somos utópicos ni demagogos para adoptar poses infanti listas en procura de una falsa popularidad.

“Debo reiterar en esta ocasión nuestro apoyo y solidaridad al líder del nacionalismo boliviano, al general Hugo Bánzer Suárez. Nuestro Presidente ha penetrado profundamente en el corazón de las masas, como ejemplo de responsabilidad cívica, espíritu constructivo y abnegación ilimitada. Este apoyo y solidaridad se vuelven imperativos cuando se está jugando el destino de la Patria”²⁷.

26- “Hoy”, La Paz, 9 de enero de 1974.

27- “Presencia”, La Paz, 15 de enero de 1974.

En la parte final reiteró la adhesión del MNR al FPN y repitió una de las ideas centrales de Bánzer: abrir las puertas del FPN a todas las tendencias y personas nacionalistas. "Rindió homenaje a los fundadores del MNR porque ellos fueron los que hicieron posible la existencia del Partido".

La presencia decorativa de Raúl Lema Peláez, considerado como un héroe de la resistencia, sirvió para dar a entender que la tendencia timoneada por el advenedizo Humboldt entroncaba en la tradición movimientista.

Una claqué aleccionada coreó los nombres de Humboldt, Bánzer, Julio, etc., y se esforzó por acallar a todo aquel que daba vivas a Víctor Paz.

El ampliado aprobó un largo manifiesto dirigido al país, en el que formalmente se desconocía la jefatura de Víctor Paz y se resumían todas las acres críticas que se le hicieron a lo largo de la reunión:

"La unipersonal e inconsulta decisión del doctor Víctor Paz Estenssoro, de retirar al partido del esquema del gobierno, rompiendo la legalidad establecida en los estatutos y lesionando la democracia interna del MNR, puso en riesgo la unidad partidaria y la materialización de los objetivos del actual gobierno nacionalista ...

"El desconocimiento a la autoridad del doctor Víctor Paz Estenssoro, ha permitido al Ampliado Nacional dar al MNR una nueva dirección que estará al servicio del partido y con sus principios, así como en permanente contacto con las bases del mismo".

Se declaró que el MNR ratificaba su permanencia en el esquema del FPN, "más aún cuando las perspectivas de constitucionalización del país, abren los cauces para la continuidad del proceso de la Revolución Nacional".

Al hacer pública la adhesión al Presidente Bánzer sostuvo: "cuya personalidad y conducta han sido factor aglutinante en las trincheras de la lucha revolucionaria y porque su gobierno constituye el único camino de garantía para que el pueblo boliviano, en un futuro próximo, pueda elegir libre y democráticamente a sus conductores".

Paz Estenssoro demostró no tener una idea exacta de la magnitud de la maniobra montada por la quinta columna oficialista dentro del MNR. En Asunción declaró a la agencia noticiosa AP: "que carece de toda trascendencia el ampliado nacional del MNR... las resoluciones del ampliado nacional en ningún caso traducirán el pensamiento ni el sentir del partido". Señaló que se fraguaron representaciones de varios dirigentes medios y que la mayoría de la militancia estaba amedrentada"²⁸. Y desde Buenos Aires, después de desmentir que hubiese estado preparando una conspiración, añadió: "El Presidente Hugo Bánzer quiere un MNR que no sea ni nacionalista, ni revolucionario. Valiéndose de algunos elementos del MNR, especialmente funcionarios, organizó un seudo congreso ampliado de la agrupación, que no responde al sentimiento de la masa partidaria... Ese grupo está formado exclusivamente por funcionarios..."²⁹.

28- "Presencia", La Paz, 15 de enero de 1974.

29- "Presencia", La Paz, 15 de enero de 1974.

Un MNR timoneado por Paz cumplía la tarea de morigerador de las poderosas tendencias totalitarias y derechistas que actuaban en el seno del gobierno; pero la maniobra de Paz no fracturó al FPN y más bien le dio cierta homogeneidad, desde este punto de vista aquel no tuvo razón en sus apreciaciones. Bánzer no pudo menos que felicitarse por los resultados del Ampliado del MNR y volvió a reiterar su fe en la viabilidad del FPN: "El Presidente Hugo Bánzer confirmó la vigencia del Frente Popular Nacionalista y le dio todo su apoyo, a tiempo de que ese organismo suprapartidario, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, reafirmó su decisión de continuar como fuerza de respaldo dentro del esquema del gobierno" ³⁰. A su turno el FPN, en su reunión del Comité Ejecutivo (16 de enero), incorporó a su esquema organizativo las ideas que venía sosteniendo el Presidente Bánzer:

"Reafirmación de la vigencia histórica del FPN, dentro de la actual situación política del país, y necesidad de impulsar y vigorizar su acción política en todos los campos de la actividad ciudadana.

"Materialización del concepto básico de la ampliación del FPN a todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanos independientes afines con el "nacionalismo popular", que al inscribirse al FPN comprometen definitivamente su actividad política.

"Aceptación de la participación de la Fuerza Revolucionaria Barrientista con delegación propia ante el FPN y no simplemente a través de FSB".

Sorprendió el hecho de que uno de los más recios caudillos de la última época hubiese sido tan fácil y pacíficamente desterrado del país e inclusive destituido de la jefatura de su partido. Ya hemos dicho que la causa inmediata de todo lo sucedido tiene que buscarse en el equívoco de Paz acerca de la inevitabilidad de un golpe militar, en cuya preparación estaba complicado. Sin embargo, existen motivaciones más profundas y lo sucedido dentro del MNR no es más que una de las expresiones de la descomposición del equipo gobernante formado alrededor del fascista general Hugo Bánzer, exponente de una tendencia derechista poderosa dentro de las fuerzas armadas.

El MNR, en el punto más bajo de la curva de su caída (identificación con las posiciones pro-imperialistas y contrarrevolucionarias del fascismo uniformado), dejó de ser partido de masas e inclusive una vigorosa agrupación política, esto de una manera definitiva, para ser sustituido por una montanera de arribistas y ambiciosos que sólo buscaban aprovecharse del presupuesto nacional y de las ventajas que da el ejercicio del poder. En tales condiciones, era absurdo hablar de democracia interna dentro del MNR, de respeto a sus estatutos, etc., todos se movían conforme a los deseos de quien pudiese dispensarles canonjías de todo tipo.

Más que trágico fue cómico el fin del dirigente movimientista. Habiendo abandonado todas sus posiciones doctrinales, habiéndose entregado a sus propios adversarios, concluyó siendo eliminado de la dirección de un partido que no era ya más que cascarón vacío, como consecuencia de su agotamiento político y de sus veleidades

30- "Presencia", La Paz, 19 de enero de 1974.

tácticas. A Paz le quedaba el camino de permanecer fiel dentro de su caduco ideario nacionalista, actitud que le habría obligado a permanecer alejado del poder, pues para llegar hasta él no tenía más remedio que sumarse a los seguidores de algún jefe militar golpista, inclinarse decididamente mucho más hacia la derecha, a cambio de los privilegios del poder y del total desgaste político, cosa que ha ocurrido en definitiva, o bien identificarse con la clase obrera, extremo imposible si se tiene en cuenta que siempre se opuso tercamente a la posibilidad de un gobierno de la clase obrera.

Los disidentes del MNR, los silistas, batieron palmas ante la desgracia de Paz, esperando que ella pudiese inflar sus filas y permitirles convertirse en carta segura de algún golpista uniformado. Se olvidó que el nacionalismo en su conjunto estaba políticamente agotado y, al no poder ofrecer una atrevida perspectiva a los explotados, tenía cerradas las puertas para poder convertirse en una poderosa dirección revolucionaria de las masas.

9

Otro golpe contra la economía popular

Mientras las crisis políticas se sucedían una tras otra, la población se agitaba peligrosamente como respuesta a la carencia de víveres y a la incesante elevación de sus precios. Las autoridades se limitaban a indicar que no habría devaluación de la moneda (el hombre de la calle interpretaba como sinónimo de no variación de los precios) y que los mercados serían rápidamente abarrotados. "Presencia" del 4 de enero de 1974 decía, por ejemplo: "Aclaración oficial. Precios de carburantes no sufrirán alteración. Cotización del dólar se mantendrá invariable y no habrá nueva alza de artículos esenciales. El gobierno aseguró ayer que no habrá ninguna elevación en los precios de los carburantes ni en los artículos esenciales, y que la actual paridad con el dólar se mantendrá inalterable. El anuncio del gobierno fue formulado por el Ministro de Informaciones, Guillermo Bulacia Salek, ante la persistencia de rumores que, en los últimos días, daban por inminente una nueva variación de precios en artículos esenciales como carne, harina, manteca y aceite comestible ..." Y el 19 de enero el gobierno reiteró: "No habrá devaluación"³¹. Por lo mismo, hombres y mujeres formaban interminables colas en busca de alimentos, pues sabían por propia experiencia, que toda vez, que las autoridades anunciaban la no variación de precios, ésta se precipitaría casi de inmediato y, efectivamente, así sucedió.

Con fecha 20 de enero de 1974, el gobierno volvió a lanzar a la circulación decretos y resoluciones ministeriales en materia económica, que tenían relación con los precios de las mercancías y los salarios.

La Resolución Ministerial 15.600 resultó la más importante porque elevaba los precios de seis artículos alimenticios hasta los niveles internacionales. El gobierno dijo que la medida fue dictada para favorecer a los sectores mayoritarios de la población, pues

31- "Presencia", La Paz, 19 de enero de 1974.

así se cortarían el contrabando y se lograría abastecer normalmente los mercados. El considerando respectivo decía: "Que el normal abastecimiento de varios productos esenciales se ha visto alterado en las últimas semanas, debido fundamentalmente a las variaciones de precios en el exterior, originando unas veces dificultades en la importación y, en otras, incentivando al contrabando y la ocultación, con grave detrimento del poder adquisitivo de las clases populares del país".

Los nuevos precios importaban un aumento de más de 150% con referencia a los anteriores: azúcar, el kilo 7 \$b; arroz, el kilo 8; harina, el kilo 6.60; pan, 0.50 la unidad; fideos, el kilo 8.05.

Teóricamente, según el gobierno, los aumentos debían circunscribirse a estos seis artículos de primera necesidad; pero, casi inmediatamente, las autoridades tuvieron que autorizar nuevas elevaciones y esta vez inclusive del transporte urbano. Se puede decir que el costo de vida se elevó por lo menos en un 100%.

El Decreto Supremo número 11.300 creó el bono compensatorio de 400 \$b./mes para obreros y empleados. La parte dispositiva, entre otras cosas, determinaba:

"Artículo 1º. Créase a partir del primero de enero del año en curso, con carácter general, para todos los trabajadores activos de los sectores públicos y privado, un bono fijo mensual de \$b. 400 por mes trabajado o sea \$b. 13.33 por jornada de trabajo.

"Artículo 3º. El sector pasivo recibirá el 50% del indicado bono.

"Artículo 4º. El monto del bono para los empleados u obreros de empresas en las cuales exista el régimen de pulpería subvencionada, estará sujeto a negociación directa entre las partes.

"Artículo 7º. El presente bono es independiente del aumento concedido o por concederse en virtud de los acuerdos obrero-patronales emergentes del Decreto Supremo número 11.123 de fecha 11 de octubre de 1973

Tomando en cuenta los sueldos y salarios promedio vigentes, se llegaba a la conclusión de que el bono no alcanzaba ni siquiera al 50 por ciento y no compensaba de manera alguna la integridad de la elevación del costo de vida. En el mejor de los casos, estas medidas económicas determinaron que las remuneraciones perdiesen la mitad de su poder adquisitivo, lo que, en otras palabras, significaba que la mayoría de la población no tuviese más remedio que reducir a la mitad su ya muy magra ración alimenticia.

En la misma fecha y agravando el tenebroso panorama, fue creado un confuso impuesto al arroz y al azúcar (Decreto Supremo número 11.301).

La población estaba segura que sobrevendría el aumento de la paridad del peso boliviano con referencia al dólar, para devolver la confianza a la opinión pública

se estableció la cláusula oro en favor de los ahorristas (Decreto Supremo número 11.302).

Las anteriores medidas precipitaron la explosión del descontento de las masas, lo que demuestra que su capacidad de resistencia había llegado a su límite extremo y que la acumulación del creciente descontento se tradujo en odio y violencia.

“Presencia” del 22 de enero de 1974 (el 21 se publicaron las medidas) abrió su edición con un titulara nueve columnas que decía: “Duro impacto en la economía popular” y en la crónica se podían leer párrafos como los que transcribimos:

“A pocas horas de conocidas aquellas medidas, el ambiente en las calles de La Paz era, en algunos casos, de amarga sorpresa, en otros de incredulidad y, en no pocos, de protestas bulliciosas protagonizadas por amas de casa que, de un día para otro, se encontraron con que el café, el azúcar, el arroz, la harina, el pan y los fideos habían duplicado sus precios... Las espontáneas marchas de protesta fueron dispersadas por la policía, casi todas pacíficamente, aunque en algunos casos los agentes tuvieron que acudir a los gases lacrimógenos. Por la noche, algunos trabajadores decidieron permanecer dentro de sus fábricas. En la fábrica Said, algunos obreros dijeron que pasarían la noche en sus talleres. Varias mujeres que trabajan en esa fábrica dijeron a un reportero que “el paro no debe ser confundido con agitación ni debe pensarse que somos comunistas: lo que pasa es que la economía popular ha sido golpeada y tratamos de defenderla...”

Espontáneamente las gentes humildes improvisaron manifestaciones, hubo discursos e intentos de asaltar los puestos de venta de víveres. Las medidas represivas no atemorizaron a nadie, era evidente que los explotados estaban decididos a luchar en las calles. Las jornadas de octubre de 1972 se repetían en un plano político superior.

“El gobierno, partiendo de la experiencia de octubre de 1973, estaba seguro que las protestas no pasarían de los votos resolutivos, por eso no acompañó a las medidas económicas con la simultánea elaboración de un plan subversivo para atribuirlo a los sindicatos (muy tardíamente se dio la noticia de haberse descubierto muchos complots). Los hombres y las mujeres lloraban de rabia y apretaban los puños, en tono amenazante. Las autoridades sólo atinaron a dar explicaciones mediante sus diversos ministros. A las manifestaciones siguieron las barricadas y a éstas las huelgas obreras. La policía fije rápidamente movilizadas, pero los efectivos del ejército permanecieron encuartelados, se supo que la joven oficialidad manifestó su desacuerdo con las medidas del gobierno y expresó su deseo de no salir a reprimir a los obreros.

10

Respuesta: la huelga

Los trabajadores mineros se encontraban reunidos en Ampliado, a fin de estudiar la mejor forma de llevar la lucha alrededor del reajuste del 100% de los salarios, resuelto en el XV Congreso de dicho sector. La reacción ante las nuevas medidas económicas fue violenta y fue aprobado un voto resolutivo al respecto:

"1. Cuando el gobierno actual, en octubre de 1972 impuso el llamado "Plan de Estabilización con Desarrollo", los trabajadores mineros pusimos de manifiesto nuestra certeza de que a partir de ese momento se estaba dando vía libre a un proceso de elevación de precios de los artículos de más amplio consumo popular, que después no podría ser atajado por nadie. Lamentablemente esta nuestra previsión se viene cumpliendo en medida superlativa, determinando que la víctima propiciatoria de esta política económica sea el pueblo, y el forma especial los trabajadores de todo el país, cuya situación de hambre y miseria se agudiza más por cada día que pasa.

"2. Consecuencia de esta línea económica señalada son las medidas decretadas el día de hoy, que constituyen toda una agresión al nivel de vida del pueblo. En efecto, la elevación de los precios del arroz, azúcar, la harina, significará un nuevo ascenso en la escala del encarecimiento de la vida, puesto que tendrá una repercusión inmediata sobre los precios de todos los artículos de uso y consumo. Una prueba palpable de ello es la denuncia que han formulado los sindicatos de casi todas las minas informando que apenas conocidos los Decretos, los establecimientos comerciales de distritos mineros han cerrado sus puertas, obviamente para conseguir imponer precios por encima de los señalados oficialmente, cosa que deja establecido el hecho de que las medidas económicas gubernamentales: son la base que propicia una desembozada especulación.

"3. La compensación fijada por el gobierno de ninguna manera será una solución a la situación de hambre y miseria en que están sumidas la masas trabajadoras; al contrario, la compensación de \$b. 400. es nada más que un paliativo concedido en dinero cuyo poder adquisitivo está esencialmente devaluado.

"4. Por estas razones y cumpliendo un deber elemental de defender los intereses de la clase trabajadora y obligados por la situación creada por el propio gobierno, los trabajadores mineros nos sentimos emplazados a mantener nuestra lucha por la consecución de un salario que nos permita vivir humanamente.

"En consecuencia:

"El Ampliado Nacional de secretarios generales y la FSTMB, resuelven:

"Decretar paro de protesta en todas las minas nacionalizadas a partir de las cero horas del día miércoles 23 del presente por el lapso de veinticuatro horas, debiendo reiniciarse labores a las cero horas del día 24. Los puestos considerados de emergencia

en cada una de las empresas quedan autorizados para continuar sus labores”.

Los trabajadores fabriles de La Paz iniciaron un paro de protesta de 48 horas desde la tarde del día 21. Las partes principales del vehemente pronunciamiento de este sector decían:

“No es justo que con tanta frialdad y persistencia se trate de descargar el costo del desarreglo económico sobre las espaldas de las clases humildes y desposeídas, mientras las empresas extranjeras, los plutócratas y los altos tecnócratas y burócratas viven en mundos exclusivos de la bonanza y el privilegio, olvidándose que el deterioro del nivel de vida de la clase obrera y de los demás sectores populares, aún en la pequeña industria nacional, se hace más álgido y doloroso cada día que pasa gracias a los famosos “paquetes económicos” con los que no se soluciona sino se empeora nuestra lamentable situación, pues la compensación de \$b. 400 dispuesta últimamente no compensa en lo mínimo la subida de precios siquiera de dos artículos.

“La Federación por otra parte se pregunta: ¿Cómo es que, si Bolivia recibe mayor cantidad de dólares por sus exportaciones, no hay fondos para abastecer plenamente a un pueblo de escasa población cuya masa consumidora es tan reducida y que no pasa del millón, es decir, que tiene una densidad menor que otras ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo y otras? ¿Cómo es que, si se ha aumentado el gasto público con más de 100.000 nuevos empleados y se tiene mecanismos de represión política y antisindical de un perfeccionamiento inusual en nuestro medio, no se puede frenar, contener, y desbaratar el ocultamiento, la especulación y el contrabando de cuarenta y dos millones de dólares, según el mismo gobierno, de salida de los artículos esenciales?”³².

Por la mañana del día 22, los fabriles paceños se dieron cita en la cancha fabril (camino a El Alto), para deliberar acerca de los pasos a darse y recibir de sus dirigentes los informes acerca del desarrollo del conflicto. No bien llegaron a las inmediaciones de la zona, se percataron que había sido ocupada por efectivos del cuerpo de carabineros fuertemente armados y con la manifiesta intención de impedir la reunión obrera. Sin embargo, la fuerte presión de los sindicalizados obligó a la autoridad policial a revisar su decisión de oponerse a toda asamblea y ésta se realizó en medio de fuertes críticas contra las medidas económicas del gobierno. Los asambleístas acordaron recurrir a la huelga general e indefinida hasta lograr una adecuada compensación a la elevación del costo de vida decretada por el propio gobierno. Los dirigentes se tomaron la libertad de ignorar tan trascendental acuerdo. También fueron severamente censurados los personeros de la Confederación por no haberse hecho presentes en el mitin³³.

A las 13 horas la policía cercó el local de la Federación Fabril paceña (Plaza San Francisco); más, el subsecretario de Trabajo logró el retiro de las tropas. Así pudo realizarse el Ampliado que aprobó exigir el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad; la compensación de 1.200 \$b./ mes y el establecimiento de la escala móvil de salarios.

32- “Nueva Jornada”, La Paz, 22 de enero de 1974.

33- “El Diario”, La Paz, 22 de enero de 1974.

A su vez, la Confederación de Fabriles decretó un paro de veinticuatro horas en todo el país. Los trabajadores cochabambinos, por su parte, protagonizaron una huelga de 48 horas. La siguiente es una crónica de la conferencia de prensa convocada por los dirigentes de la Confederación Nacional:

"... se refirieron a varios aspectos derivados de la estabilización monetaria de 1972, dijeron que desde que se adoptó esa medida, los fabriles están sujetos a salarios de hambre y que las gestiones que se realizaron para lograr aumentos salariales no tuvieron el éxito esperado.

"Al criticar las disposiciones gubernamentales adoptadas la madrugada del lunes por el actual gobierno, dijeron que como un repudio a las mismas decidieron decretar un paro de 24 horas en escala nacional"³⁴.

Pese a la debilidad del sector, los trabajadores y empleados de industria y comercio se sumaron a la huelga de protesta de 24 horas, a partir de las cero horas del día 23 de enero. Ellos dijeron: "es necesario demostrar ante las autoridades del Gobierno Nacionalista que la clase trabajadora de comercio, no está dispuesta a que se mantenga tal estado decoras, es decir, a postergar indefinidamente nuestro legítimo derecho a un mejor nivel de vida que despeje para siempre de los hogares bolivianos el fantasma del hambre, la miseria y la desocupación. Que es necesario asimismo denunciar ante la opinión pública el pretendido despido indiscriminado de trabajadores de comercio, y hacer notar a las autoridades del trabajo este extremo, que sólo servirá para agudizar más la crisis económica y social de los trabajadores". La parte resolutive del comunicado:

"1. Decretar como medida de protesta por las últimas medidas adoptadas por el supremo Gobierno, el paro de labores de carácter nacional en todo el sector de comercio, a partir de las cero horas del día 23 con duración de 24 horas, hasta las cero horas del día jueves 24 del presente mes de enero.

"2. Decretar estado de emergencia en todo el sector de comercio con carácter nacional, hasta que desaparezca el peligro de la desocupación, la escasez, el ocultamiento, el agiotismo y el contrabando organizado.

"3. Exigir al Supremo Gobierno la creación de una oficina de control de precios para evitar la desmesurada elevación en los artículos de uso y consumo populares"³⁵.

El movimiento de protesta se generalizó rápidamente. Las medidas económicas fueron repudiadas inclusive por las direcciones sindicales que hasta entonces demostraron su adhesión al oficialismo. Los petroleros y ferroviarios se sumaron al rechazo de las medidas económicas e indicaron la insuficiencia del bono de 400 \$b. Los constructores, los gráficos, los cinematografistas, los periodistas, los trabajadores en harina, etc, se declararon en emergencia y en pie de huelga.

34- "Presencia", La Paz, 23 de enero de 1974.

35- "Presencia", La Paz, 23 de enero de 1974.

En Cochabamba se hizo más patente, a partir del día 21, la decisión obrera de ganar las calles. En Quillacollo, después de una ruidosa manifestación de los trabajadores de la fábrica Manaco, se procedió a bloquear el camino que conduce a Cochabamba y también el que va a Oruro, operación en la que participaron igualmente grupos campesinos. Bien pronto esta forma de lucha se generalizó en todo el Departamento. La policía dispersó a bala a los manifestantes y alcanzó a herir a cinco personas.

El día 24 subió el transporte urbano en un 30% y el pesado (interprovincial) en una proporción mayor, medida que afectó directa y brutalmente a la débil economía de los campesinos que normalmente comercian con las ciudades.

En 1979, nuevamente el aumento del precio del transporte motivó un poderoso movimiento campesino de bloqueo de caminos. El gobierno dio muestras de su deseo de desinflar el empuje sindical inmovilizando algunos sectores y obedeciendo a esa táctica el Presidente en persona ofertó a los mineros un aumento del 25% sobre sus salarios (10% más del propuesto por Comibol). En el primer momento los dirigentes y el Ampliálo rechazaron la proposición, por considerarla insuficiente frente al enorme aumento de los precios.

Recién a esta altura de los acontecimientos y cuando era evidente que la avalancha de las masas iría creciendo más y más, la autoridades se acordaron de vincular la protesta obrera con supuestos trajines de los "extremistas". El Ministro del Interior advirtió "que no está decidido a tolerar nuevas manifestaciones y actos que contribuyan al desorden. Afirmó también que a partir de las cero horas del viernes (25 de enero) no permitirá más huelgas ni paros de trabajo y que los responsables de esas actitudes, así como de cualquier acto que afecte la seguridad del Estado, se harán pasibles de las penas establecidas por la Ley de Seguridad del Estado. El Ministro Castro Avendaño expresó que pedirá al Ministerio de Trabajo que declare ilegal toda nueva huelga y paro de actividad que se produzca a partir de hoy ...

"Refiriéndose a los sucesos de Quillacollo y de Cochabamba, informó que resultaron heridos cinco miembros de las fuerzas del orden, añadiendo que no tenía conocimiento de ningún muerto.

"Informó que los organismos de seguridad han detenido a 47 personas, entre agitadores políticos y subvertores del orden público y elementos anti-sociales.... De los interrogatorios a que fueron sometidos, dijo haberse establecido que una mayoría pertenecen al ELN, MIR, Partido Comunista y UCAPO, afirmando que se ha verificado la intervención directa del extremismo de izquierda sobre todo en los sucesos de Cochabamba.

"Informó que en Cochabamba fueron capturados. Por su participación directa en los desórdenes, varios elementos extranjeros y exiliados que se encontraban en la Argentina. Sobre estos últimos señaló que los organismos de seguridad habían perdido toda pista sobre su paradero, después que desaparecieron del territorio argentino. 'Ahora han sido encontrados en Cochabamba', dijo. Añadió que esos

elementos ingresaron clandestinamente a Bolivia”³⁶.

Los trabajadores mineros de San José (día 22) acertadamente intervinieron las pulperías, a fin de controlar el despacho de los alimentos existentes. En Siglo XX, igual que en otras minas, se realizaron ruidosas manifestaciones, donde se protestó por la escasez de víveres y la elevación de los precios. La Central Obrera Regional decretó una huelga que abarcó prácticamente a casi todos los sectores de la población. En este clima de agitación apareció la necesidad impostergable de reestructuración de la Central Obrera, como se demuestra por las decisiones adoptadas en Huanuni. En Colquiri también hubieron manifestaciones. La Central Regional de Siglo XX no pudo sobrevivir a la dura represión gubernamental.

El día 24 de enero se realizaron los paros de constructores y bancarios.

A las cero horas del día 25 debía comenzar el paro que habían acordado los radialistas y que venía a acrecentar la ola huelguística. La Federación del ramo en su pronunciamiento entregado a la prensa afirmó que el “aumento de precios de los artículos de primera necesidad en un 130% originará una espiral inflacionaria”. Añadió que el bono de 400 \$b. de ninguna manera compensaba el efecto multiplicador de los precios en los artículos de primera necesidad. Al mismo tiempo, se declaró en estado de emergencia permanente hasta la solución de los problemas que atingen a los trabajadores radialistas y de televisión; solicitó al gobierno el congelamiento de precios y un aumento en el bono de 400 pesos³⁷.

En la tarde del mismo día fueron apresados dos dirigentes radialistas y su libertad fue negociada a cambio del aplazamiento indefinido del paro.

Se puede decir que era el país todo el que se puso en pie de combate contra las medidas gubernamentales y el movimiento ejerció una poderosa presión sobre los sectores que hasta entonces habían permanecido fieles al régimen Bánzer (universitarios, campesinos, por ejemplo). La Federación Universitaria paceña, con la firma de los falangistas Oscar KelleMBERGER, Carlos Recacochea y Fernando Ríos, difundió un pronunciamiento sorprendente por muchos conceptos, pero explicable en las circunstancias dentro de las cuales fue aprobado:

“1. Decretar estado de emergencia y movilización general del universitariado.

“2. Protestar enérgicamente en contra de las medidas económicas dictadas últimamente bajo presiones de grupos privilegiados, que se han constituido en asesores del actual gobierno.

“3, Exigir al gobierno que el bono simbólico de compensación fijado en 400 \$b. sea reajustado a la realidad y a las necesidades del pueblo boliviano.

“4. La inmediata congelación de precios de los artículos de consumo no consignados

36- “Presencia”, La Paz, 25 de enero de 1974.

37- “Presencia”, La Paz, 25 de enero de 1974.

en el Decreto Supremo número 11.301.

“5. Exigir al gobierno el respeto a la libertad de opinión y prensa y asimismo las garantías necesarias para aquellos dirigentes sindicales que luchan en justicia por las necesidades de subsistencia.

“6. Respaldo moral y materialmente a los organismos sindicales, laborales y cívicos en sus demandas por mejoras sociales y económicas”.

La FUL oficialista se venía moviendo, desde hacía tiempo, en condiciones difíciles, pues desde dentro mismo de la universidad se levantaba, capitalizando todo el descontento, el Comité Inter-facultativo, que casi inmediatamente después hizo conocer un pronunciamiento contra la política económica del gobierno.

Las autoridades comenzaron a mover a sus fichas para dar la impresión de que sus medidas contaban con apoyo popular y que era posible un entendimiento con los sindicatos. La apócrifa Federación de Maestros firmó un acuerdo aceptando el aumento del 25% sobre los sueldos del magisterio. El día 25 se organizó un espectáculo en el Palacio de Gobierno con la asistencia de los personeros de la Confederación Nacional de Campesinos (pronto se demostró que no era más que un sello actuando contra los intereses de quienes decía ser su portavoz), en cuyo desarrollo los supuestos campesinos reiteraron su apoyo al gobierno ya sus medidas y “el presidente Bánzer les exhortó a empuñar las armas cuando peligre la revolución”³⁸.

Miles de campesinos del valle cochabambino se volcaron sobre los caminos que unen la capital del Departamento con Santa Cruz, el Chapare, Oruro y Sucre, para bloquearlos, demandando la revisión de las medidas gubernamentales que elevaron los precios de los artículos alimenticios. Según han indicado las mismas autoridades, se enviaron infructuosamente comisiones de todo tipo buscando disuadir a los hombres del agro de su conducta, los mismos que tercamente persistieron con los bloqueos, que rápidamente se proyectaron sobre algunas regiones de los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí.

Es entonces que el gobierno “denunció tres planes subversivos” en marcha, dos de ellos de inspiración y conexiones internacionales y otro de alcance local³⁹. Se trataba, ni duda cabe, de presionar a los trabajadores y campesinos para que abandonasen su intransigencia y también de utilizar la denuncia como pretexto para tomar drásticas medidas represivas. El día 29 de enero fue decretado el estado de sitio en todo el país, con el pretexto de que los “bloqueos de caminos y otras acciones” eran parte de un vasto plan subversivo⁴⁰.

A Cochabamba fueron enviados efectivos del Tarapacá y tanques de asalto. El gobierno difundió la falsa noticia del apresamiento del Interventor Militar de Cochabamba, general Juan Pérez Tapia, por los campesinos, mientras cumplía un recorrido por la

38- “Presencia”, La Paz, 24 de enero de 1974.

39- “Presencia”, La Paz, 27 de enero de 1974.

40- “Presencia”, La Paz, 29 de enero de 1974.

zona bloqueada para convencer a los insurgentes a deponer su actitud.

La mentira pretendió justificar la masacre. Inmediatamente después entraron en acción efectivos militares y carros de asalto para reducir a la impotencia a los campesinos y levantar los bloqueos, cosa que se hizo durante varios días y en forma sucesiva en las diversas rutas. Cayeron victimarios cerca de una centena de hombres del agro y los heridos y desaparecidos alcanzaron la cifra de varios centenares.

Así se rompió el mito del apoyo campesino al gobierno y la impostura del pacto militar-campesino quedó reducida a una piltrafa en medio de la sangre que tiñó el valle de Cochabamba. Este movimiento fortaleció enormemente a los obreros y abrió la posibilidad de una victoria rápida. Pero las direcciones sindicales actuaron con una ceguera inconcebible y en estrecha vinculación con las autoridades de gobierno.

De manera espontánea fue sellada la acción unitaria de los trabajadores, que casi todos tomaron la misma actitud y el mismo camino frente a la agresión gubernamental. Sin embargo, no se aprovechó esta excepcional coyuntura favorable para poner en pie un comando único nacional (vigencia del Pacto Intersindical o de la COB, por ejemplo), Tampoco se quiso comprender que la nueva elevación de los precios de los alimentos creaba una situación nueva que podía permitir la facción de un único pliego de reivindicaciones que contemplase la elevación general de las remuneraciones y la escala móvil de salarios. No se hizo nada de eso y se persistió en continuar pleiteando legalmente los reajustes que quedaban pendientes.

Cuando las condiciones políticas eran totalmente desfavorables para el gobierno, cuando era posible arrancarle importantes concesiones, la burocracia de la Federación de Mineros firmó un acuerdo con Comibol aceptando el 25 % de reajuste y dejando pendiente la discusión sobre el monto del bono de compensación. Esta actitud, que acertadamente fue calificada por los obreros de base como una traición, dejó desamparados y en mala situación al resto de los trabajadores de las ciudades y a los campesinos a merced de la brutalidad de los efectivos militares.

El convenio fue firmado con toda la solemnidad requerida para fines de publicidad. En su discurso el Secretario General de la Federación dijo que el aumento era irrisorio y que no satisfacía las necesidades más elementales de los obreros, sin embargo, no tuvo el menor reparo en estampar su firma al pie del convenio faccionario por el general Vía Solíz. Este el documento de la traición:

“Primero. En respuesta al pliego petitorio de 29 de octubre de 1973 presentado por la FSTMB, la Corporación Minera de Bolivia por instrucciones del señor Presidente de la República concede con carácter general el incremento del 25 % a los sueldos, jornales y precios de contrato vigentes al 1° de enero de 1974.

“La FSTMB y los dirigentes de base hacen constar que el incremento concedido por la Comibol y el gobierno es insuficiente y no satisface las expectativas de los trabajadores mineros frente al elevado costo de vida.

“Segundo. El campo de aplicación comprende a todos los trabajadores regulares dependientes de la Comibol y afiliados a la Federación de mineros.

“La forma de aplicación del incremento del 25 % a que se refiere el primer punto, será determinado por acuerdo de una Comisión Conjunta constituida al efecto.

“Tercero. La aplicación el presente convenio para los trabajadores mineros de Matilde se procederá de acuerdo a un análisis conjunto entre Comibol y el Sindicato y la FSTMB.

“Cuarto. La corporación Minera de Bolivia garantiza y continuará manteniendo los cuatro artículos (carne, azúcar, arroz y pan) con precios subvencionados o congelados, de acuerdo a las modalidades y costumbres existentes ...” al Pie aparecieron las firmas de los dirigentes de la Federación y de algunos militantes del PCB.

Los delegados de siglo XX, Catavi, San José y la Unificada de Potosí repudiaron el convenio, lo denunciaron como un burdo engaño y se negaron a firmarlo. El Ministro del Interior inmediatamente dijo que en estos distritos había infiltración extremista y agitación social, lo que tuvo que entenderse como un preaviso de persecución, además hizo saber que para el gobierno existían algunos dirigentes buenos y comprensivos y que los demás eran comunistas.

Una parte del documento de repudio al convenio firmado con Comibol sostenía:

“1. La compensación del 100 % de las remuneraciones aprobada por el XV Congreso minero, como respuesta a la disminución de los salarios reales determinada por la antipatriótica, antipopular y proimperialista política económica gubernamental, resulta insignificante si se toma en cuenta la descomunal elevación de los precios de las mercancías decretada por el desgobierno imperante en fecha 21 de enero último. Lo menos que se puede exigir e imponer es la compensación del 100 %, esto porque apenas sí puede cubrir parte de algunas de nuestras necesidades más premiosas y elementales. Ante esta dramática evidencia carecen de significación los argumentos y mentiras de Comibol y de los gobernantes. Los mineros no somos responsables del desbarajuste de la empresa estatizada, de sus pérdidas, de su mala administración, de la crisis energética mundial o de las dificultades internacionales. La situación de iliquidez de Comibol es responsabilidad exclusiva del gobierno y de los administradores de la empresa y los obreros -privados del derecho de pensar, de defendernos y de alimentarnos como seres humanos por la despótica voluntad de los gobernantes- no tenemos por qué cargar con sus consecuencias. Han perdido el derecho a la existencia la clase social y el gobierno -vale decir, la sociedad imperante- que son incapaces de asegurar la ración alimenticia que asegure la vida humana de los obreros. Cuando se trata de evitar que la miseria dantesca destruya nuestros hogares, sólo puede haber un objetivo y un argumento el aumento general de los salarios y toda otra consideración debe ser desechada. Los dirigentes y los delegados que olvidan esta verdad elemental incurren voluntariamente en un acto de traición a su clase. La capacidad de resistencia de los trabajadores ha llegado a su punto máximo, si se acentúa todavía más la miseria , su destrucción física se consumará a

un ritmo acelerado. El Sr. Presidente de la República y el gerente de Comibol nos han dicho que la empresa estatizada está económicamente imposibilitada de conceder un aumento salarial mayoral 25 %, lo que significaría que ellos la han llevado al desastre económico, técnico y administrativo -pese a las fabulosas cotizaciones de los minerales-, al extremo de que ya no puede preservar la integridad de la fuerza de trabajo para poder seguir explotándola mañana en condiciones normales. Violenta la lógica y los intereses capitalistas el mantenerla producción de hoy a costa de la destrucción física de los obreros. El Ministro del Interior nos ha conminado a abandonar la intransigencia en nuestras peticiones porque existiría un clima subversivo. Los obreros no somos responsables de la amenaza golpista, creada por la política gubernamental y por las ambiciones de los grupúsculos, uniformados o no, que deambulan por las graderías del Palacio Quemado. Este argumento y esta amenaza no merecen tomarse en cuenta cuando se trata del problema salarial.

"2. El garrote nos ha convertido en semi-ciudadanos: se nos apalea, encarcela o destierra toda vez que nos atrevemos a pensar políticamente; la política se ha convertido en un privilegio reservado a los dueños del poder. Los decretos económicos -que tan sagazmente el hombre de la calle los llama decretos hambreadores- nos privan del derecho de vivir como seres humanos y nos relegan a la condición de bestias mal comidas: por orden superior debemos reducir nuestra alimentación a los 4 artículos de pulpería de precios congelados. Se nos dice que para nosotros no hay aumento del costo de vida y que sólo por una graciosa concesión se nos reconoce parte de los bonos concedidos a los trabajadores de las ciudades. La verdad es que las medidas económicas dictadas por el gobierno han generado un aumento general de los precios y en esta medida elevan el costo de vida para los mineros.

"La elevación de los precios decretada últimamente creó una nueva situación muy diferente a la que imperaba cuando demandamos la compensación del 100 %, que debía permitirnos faccionar un nuevo pliego exigiendo el aumento general de salarios, coyuntura que debía haberse aprovechado para superar los errores cometidos en el pasado.

"Al no haber actuado así, el Ampliado ha asestado un rudo golpe a los intereses de la clase obrera.

"3. El XV Congreso Minero dio a los dirigentes de la Federación el mandato imperativo de lograr la estructuración del comando único nacional, condición impostergable para hacer posible la victoria de nuestras demandas. Nada se ha hecho al respecto y se pretende justificar esa inconducta con pretextos, sin ningún valor. Denunciamos que la alta dirección de la Federación es la única responsable de que nuestro conflicto se desarrolle en condiciones adversas.

"4. Algunos compañeros han argumentado que se debe concluir un acuerdo con Comibol, poniendo a salvo nuestros derechos y la posibilidad de replantearlos en mejor oportunidad. Se trata de una postura demagógica y capitulante. Ni el 25 % de aumento de salarios ni el bono de 150 \$b/mes en reemplazo de los 400 otorgados al resto de los trabajadores, satisfacen ni siquiera en forma mínima nuestras

necesidades y nuestras exigencias. Este paso no haría más que cerrar la posibilidad de lograr una verdadera mejora salarial y esto por, mucho tiempo. Lo que se haría sería renunciar a nuestros derechos y condenar al hambre a nuestros compañeros. Nosotros, representantes de Siglo XX, no cometeremos esta traición.

“Otros compañeros sostienen que una vez firmado el compromiso de arreglo con Comibol debemos ir a las bases para someterlo a discusión. Estamos cansados de esta forma de engaño a los obreros de base. En el Congreso minero se nos presentaron hechos consumados y no tuvimos más remedio que aprobarlos, así salió la demanda de la compensación del 100 %, que nos colocó en condiciones de inferioridad con referencia a los compañeros fabriles, por ejemplo.

“El respeto a las bases sindicales exige que se vaya a discutir con ellas los problemas antes de firmar acuerdo alguno con Comibol. En esa discusión debe incluirse la facción de un pliego único con los otros sectores obreros, exigiendo un aumento general de salarios, complementado con la escala móvil, y la estructuración de un comando único nacional.

“No obrar así significa traficar vilmente con los intereses de los mineros y este crimen no cometeremos los delegados de Siglo XX. Anunciamos al Ampliado que no firmaremos acuerdo alguno con Comibol que vaya en contra del mandato que hemos recibido de nuestras bases. Algo más, denunciaremos ante el país todo y ante los mineros, todo acto que signifique traición o dócil sometimiento a las exigencias gubernamentales o patronales.

“Así salvamos nuestra dignidad de luchadores sindicales y alertamos a nuestra clase de las traiciones cometidas contra ella”⁴¹.

En Siglo XX se realizó una monstruosa manifestación, en la que participaron campesinos de la región y se remarcó que la lucha giraba sobre tres puntos: a) Repudio al convenio sobre el 25 % de aumento; b) demanda de provisión de artículos de primera necesidad; e) protesta por el genocidio cometido en el valle cochabambino. En ese distrito minero y en otros centros hubieron paros de protesta de 48 horas y marchas por las calles. Los burócratas de la Federación, prácticamente desconocidos por las bases, pusieron todo su empeño en ejecutar el convenio.

Los campesinos de las provincias paceñas de Aroma y Loayza fueron dispersados a bala cuando realizaban una concentración y cientos de ellos trasladados presos a la ciudad de La Paz; sin embargo, llegaron a acordar un voto de protesta contra las medidas económicas del gobierno y denunciaron que sus compañeros de Cochabamba fueron masacrados por pedir un pedazo más de pan.

Pese a todas las medidas represivas, continuó la agitación social, muy difícilmente mantenida en niveles subterráneos como consecuencia del estado de sitio. Los fabriles acordaron pedir el bono de 1.200 \$b/mes y la concesión del régimen de pulpería con cuatro artículos congelados, de manera similar a la existente en las minas.

41- “Masas”, N° 442, febrero de 1974.

Los constructores aprobaron un pedido de aumento del bono de compensación, de medidas que pudiesen superar la creciente desocupación y la situación generada por la incontrolada elevación de precios de los artículos necesarios para la construcción.

Así se fueron dando las bases para hacer posible la estructuración de un comando único nacional; la COB comenzó a fortalecerse gracias a la formación de las centrales regionales; de la efectivización de la alianza obrero-campesina y, finalmente, se fue abriendo paso la idea de faccionar un pliego único de reivindicaciones.

La masacre campesina de Cochabamba tuvo emergencias insospechadas. No sólo se trató de la minimización del pacto militar-campesino, sino que se proyectó sobre las fuerzas armadas cuya aparente unidad muy difícilmente era mantenida.

En el momento de la represión los criterios dentro del ejército estaban divididos. El general Pérez Tapia expresó a la prensa que él no fue tomado como rehén, que recibió trato fraternal por parte de los campesinos y que creía ser posible un arreglo pacífico del problema. Lástima, agregó, que sus sugerencias fueron desoídas por el comandante que iba a la cabeza de los efectivos motorizados, con la decisión de castigar a los bloqueadores. Un campesino herido en Tolata (camino a Santa Cruz) dijo a los periodistas que eran tres mil los hambrientos que se habían volcado a los caminos y que cuando retornaban a sus casas se les dijo que volviesen a conversar con el Presidente Bánzer y así lo hicieron, habiendo sido sorprendidos por efectivos militares y carros de asalto que vomitaban fuego, sin previa explicación alguna.

Posteriormente, la masacre flotaba como un espectro sobre los generales y provocó divisiones en el seno mismo del equipo gobernante. Con todo, su influencia más poderosa fue la ejercida sobre el proletariado, pues demostró que los explotados del agro seguían siendo sus aliados naturales, hecho que contribuyó a fortalecer sus posiciones y a empujar hacia adelante su evolución política.

Bánzer, colocado entre el creciente descontento de las masas, el concentrado odio de los campesinos, la resistencia de los empresarios que demostraron tener plena conciencia de que las medidas económicas gubernamentales les perjudicaban, la resistencia y divisionismo castrenses, respondió con un exabrupto a la situación política creada en gran medida por sus propios actos. En una reunión con un grupo de campesinos de la Provincia Omasuyos, en el Palacio de Gobierno, dijo lo siguiente: "A ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si no me lo traen aquí para que se entienda conmigo. Yo les daré una recompensa. A ellos les interesan el desorden y pobreza que es el caldo de cultivo"⁴².

Lo anterior expresaba la desesperación y la impotencia del Presidente. Semejante amenaza era hasta absurda, importaba una confesión en sentido de que en el país no imperaba la Constitución ni las leyes, sino la voluntad despótica del dictador. Nadie se atemorizó por la amenaza, lo que hizo fue despertar una ola de protestas y ahondó mucho más el malestar dentro de las fuerzas armadas. Las radios, la Iglesia,

42- "Presencia", La Paz, 13 de febrero de 1974.

los partidos políticos "democráticos", etc, repudiaron las expresiones presidenciales. El propio Bánzer parece haberse dado cuenta de la inutilidad de su amenaza, de lo contraproducente que resultó la bravuconada. El 12 de febrero volvió a recibir a un centenar de campesinos, esta vez de la provincia potosina Alonzo de Ibáñez (zona triguera, surcada de valles abruptos que sufren el azote de las tormentas y las mazamoras) y el discurso que pronunció ante ellos fue por demás sugerente. Volvió a referirse, de un modo deliberado, a su famosa consigna y sólo para introducir en ella una tajante rectificación: no se refirió para nada a la autorización presidencial de matar a los extremistas, les pidió que trasladasen al Palacio Quemado al primero que pillen. Utilizando los recursos demagógicos de mayor calibre, no debió en sostener ante los campesinos atónitos que las medidas económicas que motivaron el bloqueo de caminos fueron dictadas en beneficio directo del trabajador del agro, porque gracias a ellas tenían la posibilidad de vender sus productos a precios muy elevados

⁴³.

Creció el malestar económico en la empresa privada, en las mineras mediana y pequeña y en las cooperativas. Parecería que los asesores económicos del Poder ejecutivo sólo atinaron a calcular la incidencia del bono de compensación de 400 \$b. en el presupuesto fiscal, que bien pudo equilibrarse con los millones de dólares ahorrados como consecuencia de la eliminación de las subvenciones a varios artículos. Pero, tratándose de la actividad privada esa medida ocasionó una serie de dificultades. Los empresarios se encaminaron a presionar al gobierno para lograr la rebaja de una serie de tributaciones, lo que no pudo menos que traducirse en un desequilibrio del presupuesto. El gobierno no tuvo más remedio que ceder a las exigencias patronales, a fin de eliminar este nuevo frente opositor. Efectivamente, el 8 de febrero se dictaron una serie de medidas para favorecer a los empresarios privados y permitirles cumplir con el pago del bono compensatorio. A los transportistas se les reconoció la rebaja del 50 % de los gravámenes aduaneros por la importación de doscientos automóviles y doscientos camiones, el decreto respectivo sostenía: "es deber del Supremo Gobierno propender al mejoramiento del autotransporte urbano de la república, porque el constante crecimiento demográfico de las ciudades requiere de una renovación parcial de vehículos precautelando de esta manera las seguridades necesarias para los usuarios. Que la Confederación sindical de Choferes de Bolivia ha solicitado la liberación de gravámenes aduaneros par la importación de camiones con capacidad de carga superior a 3.000 kilogramos".

Se disminuyeron los impuestos sobre los cigarrillos nacionales. También se rebajaron los gravámenes aduaneros en favor de las maquinarias y materias indispensables para la industria. El sector minero se favoreció con una disminución de los gravámenes de exportación ⁴⁴, que sin embargo, lo consideró insuficiente.

Estas medidas "colaterales" no amenguaron en nada el malestar social, como consecuencia de la insuficiencia del bono compensatorio. Ante la terca oposición demostrada por Siglo XX y otros distritos al convenio con Comibol sobre el reajuste salarial del 25 %, esta empresa, contando con el beneplácito de la burocracia sindical,

43- "Presencia", La Paz, 10. de febrero de 1974.

44- " El Diario", La Paz, 9 de febrero de 1974.

utilizó otros medios de presión. La empresa hizo saber ⁴⁵ que estaba decidida a excluir de las planillas a los mineros renuentes a aceptar el aumento del 25 %: "Los trabajadores de los distritos mineros que han rechazado el aumento del 25 % acordado por Comibol no percibirán este incremento en las planillas respectivas, se hizo conocer en esa entidad ayer (8 de febrero)".

Resultaba repudiable, desde todo punto de vista, que se utilizase el hambre de los hogares obreros para pretender imponer las decisiones gubernamentales, tan repudiable como el uso de los fusiles.

En Huanuni durante una reunión de cinco horas se criticó con dureza a los miembros de la Federación de Mineros por haber firmado el convenio con Comibol acerca del 25 % de reajuste, al mismo tiempo que se denunció la política hambreadora del gobierno. También se rindió homenaje a los campesinos masacrados en Cochabamba y se subrayó la urgencia de concluir un acuerdo con los explotados del agro. Fue adoptada una resolución de cinco puntos:

1. Aceptar como imposición el aumento salarial del 25 % sin renunciar a mejores salarios y mejores condiciones de vida.
2. Luchar intransigentemente por la vigencia de la COB.
3. Luchar en forma unitaria por la obtención de un mejor bono ofrecido.
4. Lucha intransigente por el mejor aprovisionamiento de la pulperías.
5. Emitir un pronunciamiento de apoyo a los compañeros campesinos y censurar por la masacre sufrida por este sector mayoritario por parte del gobierno.

Saltaba a la vista que no sólo Comibol, sino el propio gobierno, tenían vivo interés en aplastar a la avanzada minera, particularmente a Siglo XX-Catavi, esto porque señalaban la perspectiva de la lucha de los proletarios a la cabeza de la mayoría de la población de las ciudades y de los campesinos. Esta perspectiva quedó señalada claramente en la gran manifestación del 1º de febrero. Concurrieron, además de los sindicatos mineros de Siglo XX, Catavi, los obreros de Cerro Azul, los veneristas y lameros, los transportistas, comerciantes y campesinos, efectivizándose así la dirección de la Central Obrera Regional. Se afirmó la unidad obrero-campesina y se acordó efectivizar el pacto minero-campesino (respuesta revolucionaria a esa impostura que se llamó pacto militar-campesino), al mismo tiempo que se dispuso el aporte de cinco pesos por trabajador para socorrer a las víctimas de la masacre de Cochabamba. Los dirigentes de los campesinos del Norte de Potosí, pertenecientes a la Federación Independiente de Campesinos, pronunciaron discursos en quechua y repudiaron el pacto militar-campesino, llamaron asesino a Bánzer, denunciaron la miseria y el atraso en que vivían y siguen viviendo los hombres del agro y, finalmente, protestaron estar dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias junto a los obreros de las minas y de las ciudades. Uno de los oradores, refiriéndose

45- "Presencia", La Paz, 9 de febrero de 1974.

al pacto minero-campesino, dijo que no se trataba de firmar un nuevo acuerdo, sino el de efectivizar el ya firmado en 1970 por ambos sectores, juntamente con los universitarios en Siglo XX, precisamente. Mucho más tarde, en 1979, volverá a actualizarse el pacto entre mineros y campesinos en Colquiri y que constituyó un paso firme en el camino de la efectivización de la alianza obrero-campesina.

Los mineros de siglo XX lanzaron un vibrante manifiesto a todos los trabajadores de Bolivia, que, en sus partes salientes, decía:

“En primer lugar, nos corresponde expresar ante las bases fabriles y demás sectores obreros y populares, ante nuestros hermanos campesinos, especialmente ante los que en estos momentos están enfrentándose, en Cochabamba y otros lugares, al ejército masacrador, nos corresponde expresarles que los mineros de siglo XX y los mineros de base de todo el país en ningún momento les hemos abandonado ni los abandonaremos en su heroica lucha; la traición no ha partido de las bases mineras sino de unos cuantos burócratas incrustados en nuestra gloriosa Federación de Mineros, unos cuantos dirigentes vendidos, traficantes, vacilantes y reformistas han sido los causantes de la firma de un convenio, con el gobierno fascista. Los mineros de base repudiamos ese convenio, no sólo porque el 25 % es una burla a nuestro sacrificado trabajo, sino, sobre todo, porque constituye un acto de sabotaje, de traición ala lucha de todos los explotados del país, en vez de preocuparse por conformar un Comando Unico de lucha y un pliego único de reivindicaciones de todos los obreros y sectores populares, en vez de mantenerse firmes en la lucha, los burócratas y algunos dirigentes vacilantes han preferido levantar las manos, claudicar ante el gobierno hambreador, permitiéndole así que reprima con más facilidad a otros sectores. De la misma forma que, por ejemplo, en el seno de los fabriles y campesinos existen amarillos y traidores como los Casto Padilla y los Oscar Céspedes, así también entre los mineros existen traficantes de ese tipo. La lección que tenemos que aprender, una vez por todas, los explotados es que mientras estén a la cabeza de nuestros sindicatos y organizaciones matrices canallas de esa naturaleza, nuestra lucha acabará siempre siendo traicionada y negociada por esos elementos, mientras la clase obrera y todos los explotados no conquistemos nuestra independencia de clase y no nos mantengamos fieles a ella, sufriremos derrota tras derrota en manos del fascismo y del engaño de los partidos y gobiernos burgueses y pequeño-burgueses.

“El país está viviendo, después de mucho tiempo, la movilización combativa de las masas campesinas, que a lo largo y a lo ancho del país han empezado a rebelarse contra los explotadores gorilas y moví-falangistas. El gobierno, que pretendía tener controlado y domesticado al campesinado, por intermedio de algunos caciques a sueldo, se ha roto las narices contra el puño airado del campesinado cansado del hambre y la miseria. El tan cacareado y glorificado pacto militar-campesino ha caído hecho pedazos y ensangrentado al basurero de la historia, el gobierno gorila tia tenido que masacrar a los campesinos del valle de Cochabamba para acallarse protesta y rebelión. Sólo los explotados de las minas y de las ciudades, los mineros, los fabriles, etc., podemos brindar un apoyo inquebrantable a los explotados del campo, Toda la experiencia revolucionaria de los oprimidos, las luchas de abril de 1952, las masacres obreras y campesinas, nos enseñan con claridad que el único medio de

nuestra liberación es la unidad de obreros y campesinos y la instauración del gobierno propio de los explotados, el gobierno de las mayorías nacionales, el gobierno obrero-campesino y la construcción del socialismo. Los mineros de Siglo XX, repudiamos la sangrienta masacre ejecutada por el gorilismo y apoyamos plenamente a nuestros hermanos campesinos. Los llamamos a firmar el pacto minero-campesino, el pacto obrero-campesino...

"En estos momentos de rebelión creciente de las masas y de preludio de grandes acontecimientos revolucionarios, los mineros de siglo XX nos dirigimos también a nuestros hermanos soldados, clases y oficiales jóvenes del ejército para que se coloquen a nuestro lado y den las espaldas a la casta de generales y coroneles masacradores. Llamamos a los soldados, clases y oficiales jóvenes, que son hijos y hermanos de los obreros y de los campesinos, a no disparar contra nosotros, sus fusiles tienen que pasar a nuestras manos y ser dirigidos contra los explotadores".

La manifestación aprobó los siguientes puntos:

"1. Repudiar y condenar el acto traidor de algunos dirigentes de la Federación de Mineros y dirigentes de base al haber firmado un convenio con el gobierno, porque se trata de un aumento miserable y porque se abandonó a su suerte a los compañeros campesinos en lucha y demás sectores.

"2. Rechazar el aumento de 25 % por ser ridículo e insuficiente para hacer frente al enorme y permanente alza del costo de vida. Reiterar la decisión de luchar por un aumento general de salarios en proporción al costo de vida, por un salario mínimo vital y por la escala móvil de salarios, lucha que realizaremos en forma conjunta con todos los sectores obreros.

"3. Respaldar la valiente actitud de los compañeros delegados de base de Siglo XX, Catavi, Potosí y San José y de determinados miembros de la Federación de Mineros, por no prestarse a semejante traición y por haber defendido hasta el final, en forma valiente y revolucionaria los intereses de la clase obrera minera de todo el país.

"Conminar a la Federación de Mineros a que corrija sus errores y vacilaciones, a que se mantenga fiel a los principios obreros establecidos en la Tesis de Pulacayo y en la Tesis de la COB. Exigir que cumpla los mandatos del XV Congreso Minero de Potosí y ponga en pie un comando Unico Nacional de todos los sectores obreros y campesinos, que conforme un solo pliego de reivindicaciones de todos esos sectores, para así afrontar unidos al fascismo y derrotarlo.

"5. Condenar enérgicamente la masacre de campesinos ejecutada criminalmente por el gobierno gorila-movifalangista. Solidarizarnos ampliamente con la lucha de los compañeros campesinos. Rendir homenaje con un minuto de silencio a sus víctimas.

"6. La inmediata firma del pacto minero-campesino, que debe convertirse en realidad en un pacto obrero-campesino.

"7. Repudiar el estado de sitio impuesto por el gobierno fascista y declarar estado de emergencia en las filas mineras ante los planes y acciones represivas del régimen gobernante.

"8. Llamar a los soldados, clases y oficialidad joven del ejército a no disparar más contra los obreros y campesinos ni contra el pueblo explotado en general. Llamarlos a engrosar nuestras filas para aplastar al imperialismo y a sus sirvientes encaramados en el poder.

"9. Luchar firmemente por el gobierno de las mayorías explotadas, dirigido por la clase obrera, y por la construcción del socialismo.

"10. Realizar una manifestación y un paro de 48 horas como respaldo militante a nuestros compañeros campesinos en lucha, como condena por la masacre a la que los está sometiendo el gorilismo opresor, y como protesta y rechazo al convenio suscrito por la Federación de Mineros y el gobierno.

"11. Apoyar e impulsar militantemente con nuestra acción directa a nuestra Central Obrera Distrital.

"12. Exigir a la Federación de Mineros que a la brevedad posible se realice un Ampliado Minero en Siglo XX, a fin de orientar y señalar nuestros futuros pasos en la lucha por las reivindicaciones inmediatas e históricas de la clase obrera.

"¡Viva la unidad de las clases obrera y campesina!

"¡Muera el gorilismo masacrados! ¡Muera el imperialismo y sus lacayos!

"¡Viva el gobierno de obreros y campesinos! ¡Viva el gobierno de los explotados!

"Siglo XX, 1º de febrero de 1974".

Es verdad que la resistencia obrera no logró un sustantivo aumento salarial, pero el movimiento en su conjunto dio un paso hacia adelante en la marcha hacia su liberación, hacia la construcción del gobierno obrero-campesino (dictadura del proletariado). No es casual que en el desarrollo de los acontecimientos, sintetizados y anticipados por lo hecho y dicho por siglo XX, hubiese tenido mucha influencia la propaganda desarrollada clandestinamente por el Partido Obrero Revolucionario, a través de su vocero "Masas".

A la unidad de acción y dirección de las masas, que tan lenta y difícilmente se fue logrando en las bases mismas, se debe añadir la comprensión de ser imprescindible la efectivización de la alianza obrero-campesina y la insistencia en la propaganda dirigida a parte del ejército, a fin de lograr que pase a las posiciones revolucionarias. Tales las más grandes adquisiciones de todo este período.

Pasados los bloqueos de caminos y las huelgas, acallados la mayor parte de los sectores por la despótica aplicación del estado de sitio, se tenía la falsa impresión de que toda la agitación pasada acabó en nada. Ciertamente que las masas ya no

estaban en las calles, pero tampoco se desbandaron, sino que se concentraron en sus organizaciones. El movimiento tendió a cobrar mayor profundidad, la movilización se hizo más lenta, pero, también, más profunda. La mayor agravación de la miseria motivó mayores explosiones sociales en el futuro próximo.

En este ambiente de aparente clama, la burocracia sindical estaba segura que le llegó su cuarto de hora, que podía entenderse con las autoridades, recobrar su autoridad ante los sindicalizados mostrando su habilidad como negociadora. Una prueba de que se sentía fuerte tenemos en su desafío y arremetida contra los sectores más radicalizados.

El Secretario General de la Federación de Mineros, Víctor López, un poco tardíamente respondió, mediante documento público, al manifiesto de los sindicatos de Siglo XX-Catavi, en tono desafiante y provocativo, como quien tiene detrás a alguien que le respalde (los obreros de base sabían perfectamente que era el gobierno el que estaba detrás de los burócratas sindicales):

"El Secretario General de la FSTMB ..., expresa que con criterios sectarios sólo se busca dividir al movimiento sindical minero. Víctor López Arias, al defender la unidad principista y organizativa de la FSTMB, afirma que en el convenio que se firmó con Comibol sobre reajustes salariales, se dejó claramente establecido la insuficiencia del porcentaje del 25 % por el alza del costo de vida.

"En el documento entregado a la prensa, López Arias dice que se sabe que el Sindicato de Siglo XX rechazó tal aumento, pero la FSTMB quiere dejar constancia que suscribió dicho convenio en beneficio de todos los trabajadores. Concretar ese rechazo, hasta sus últimas consecuencias lógicas, es problema de los dirigentes del Sindicato de siglo XX. Nosotros naturalmente reconocemos el pleno derecho que les asiste para así hacerlo ..."

"Por otro lado, acusa a algunos grupos políticos de pretender manosear al movimiento sindical a su antojo y añade que esté tipo de posiciones en vez de beneficiar al movimiento obrero, al final lo perjudica.

"En cuanto a la COB dice que es un hecho irrefutable la necesidad de su vigencia... La necesidad de defender la situación económico-social, estamos seguros, orienta a todas las capas populares, incluidos los compañeros campesinos, a buscar su unidad y nosotros no encontramos otra vía práctica para ello que no sea la vigencia de la COB.

"También acusa a dirigentes de Siglo XX de tergiversar, actuar con deslealtad, falseando la verdad de los hechos y de emplear adjetivos propios de agentes provocadores, lo que claramente demuestra una actitud sectaria...

"Califica al manifiesto del Sindicato de siglo XX como una expresión que no involucra a todos sus componentes y que su intención podría identificarse con un deseo de quebrar la unidad de los trabajadores del sector.

“Y esa no es la forma de hacer frente a los enemigos, en razón de que ni con proclamas líricas, ni atacando a la Federación Minera se va a atacar al fascismo.

“Refiriéndose al pedido de la realización de un Ampliado Nacional minero en siglo XX..., López sostiene que es parecida a la acción de algunos elementos que tratan de provocar la división en la dirección sindical y las bases manejando a su antojo este organismo”⁴⁶.

Los resúmenes de prensa pasaron por alto una curialesca defensa de López de su actitud frente al movimiento campesino: “nadie nos encomendó nada al respecto”, dijo. No se trataba de eso. En Siglo XX se señaló que el bloqueo de caminos por los campesinos era una actitud revolucionaria y que, por tanto, fortalecía al movimiento obrero en lucha y debilitaba políticamente al gobierno y a la reacción (en esas condiciones favorables hasta los reformistas amarillos podían arrancar enormes concesiones a Comibol); los revolucionarios estaban obligados a actuar teniendo como punto de referencia lo que hacían los explotados del agro. El convenio no fue otra cosa que una puñalada a los aliados campesinos, esto desde el punto de vista político. La existencia del bloqueo de caminos daba ya una tarea insoslayable a los dirigentes sindicales: tomar decisiones que fortaleciesen al movimiento en su conjunto y a los campesinos en particular (en el momento más agudo del conflicto se convirtieron en la pieza clave) y abstenerse de actuar en sentido contrario.

El dirigente de la FSTMB pretendió salvar su responsabilidad con el argumento de que en el convenio se incluía la declaración de que el reajuste del 25 % no satisfacía las necesidades de los obreros; bueno, esto lo dijeron todos. Los burócratas fueron censurados porque actuaron contra esa declaración al firmar el convenio. La conducta traidora, en este caso, estaba cubierta con el oropel de las frases y declaraciones líricas y vacías. No era suficiente decir que la mayoría del Ampliado no aprobó democráticamente tal conducta; los traidores no hicieron caso del pedido de consultar a las bases acerca de los alcances del convenio antes de suscribirlo, esto era lo democrático.

López dijo que la Federación actuó en representación de todos los obreros y, sin embargo, en su respuesta aconsejó a los de Siglo XX ir hasta las últimas consecuencias en su actitud, vale decir, hasta la huelga aislada. Esto no sólo era sectarismo, sino que era criminal: empujar a un sindicato aislado a la batalla. Los de Siglo XX, al trabajar en favor de la dirección única nacional, lucharon firmemente contra esta conducta divisionista.

Estaba bien que se dijese como declaración que era indispensable poner en marcha a la COB. Lo concreto era que los burócratas, olvidándose de las recomendaciones de las reuniones nacionales, pusieron todo de su parte para evitar que esa declaración se efectivizase. En el Ampliado se demostró que la Federación no dio un solo paso encaminado a poner en marcha el Pacto Intersindical.

La unidad del movimiento obrero debía hacerse partiendo de una conducta

46- “Hoy” y “Presencia”, La Paz, 12 de febrero de 1974.

revolucionaria y consecuente, no encubriendo traiciones y vendimias, no cerrando los ojos ante las bellaquerías de los agentes del gobierno. Los traidores debían ser desenmascarados, este era el primer paso en el camino de la verdadera unidad obrera. Para fortalecer al movimiento sindical había que expulsar a los traficantes de sus filas.

Cuando se pone en duda la honestidad de la conducta de una dirección sindical, cuando es cuestionada su labor en aspectos fundamentales, se impone una reunión nacional de autocrítica. López y sus seguidores amenazaron, una y otra vez, con hacer abandono de sus funciones y cuando se les pidió un Ampliado Nacional rechazaron la sugerencia con argumentos pueriles.

Con todo, la actitud de Siglo XX y la repercusión que tuvo en el seno de todo el movimiento obrero, constituyeron un paso adelante en el camino del verdadero fortalecimiento de las organizaciones obreras y del avance de la movilización de las masas. Los acontecimientos demostraron que los trabajadores no tenían una dirección digna de su radicalismo y de su elevada politización. Lo dicho y hecho en Siglo XX constituyó un avance en la estructuración de una dirección sindical capaz, honesta y valiente.

La política de mano dura; la orden de asesinar a los extremistas, el estado de sitio, la masacre de campesinos, etc, le fueron impuestos a Bánzer por el sector más derechista de Falange Socialista Boliviana y de las fuerzas armadas, que alentaron una conjura militar cuyo objetivo no era otro que resolver la amenazante agitación social con la ayuda de la acentuación de los métodos fascistas de gobierno, se buscaba reeditar el caso chileno. El programa fue ejecutado, contando con la complicidad del MNR de Humboldt, pero no pudo ser acallado el descontento y menos contenido el avance obrero, que centró su atención en la lucha antiburocrática.

El general Bánzer creyó oportuno demostrar a los sectores castrenses que las relaciones entre el gobierno y los campesinos no habían sido mayormente deterioradas por los acontecimientos de Cochabamba y que podía considerarse vigente el pacto militar-campesino. Este recurso fue utilizado para salvar la crisis producida en el seno del mismo gabinete, como consecuencia del uso abusivo que se hizo de la violencia en el problema agrario. La operación fue ejecutada teniendo como pivote a la supuesta Confederación Campesina y como actor principal al traficante Oscar Céspedes. Efectivamente, el 12 de febrero tuvo lugar en el Palacio de Gobierno una publicitada reunión con los caciques oficiando de dirigentes. Bánzer derramó algunas lágrimas por los masacrados:

“Es triste para mí recordar estos hechos. Cuánto nos ha costado decidir que intervengan las fuerzas armadas en el valle para imponer el orden y expulsar del agro a los canallas extremistas, quienes aprovechándose de la ingenuidad y pureza de nuestros hermanos campesinos, hacen que esté enlutado el corazón de quien les habla”⁴⁷.

47- “El Diario”, La Paz, 13 de febrero de 1974.

Los caciques no formularon reclamación ni observación alguna por la difícil situación económica de los campesinos. En la relación de una supuesta conferencia -verificada en pleno estado de sitio- se limitaron a cumplir las órdenes impartidas por el mismo Bánzer. Violentando los hechos, certificaron la ingerencia "extremista" en los sucesos de Cochabamba. Ratificaron el pacto militar-campesino, es decir, el pacto entre la víctima y el verdugo.

"En materia sindical -dice "El Diario"- proclaman su determinación de rechazar enfáticamente la vigencia de la COB, proponiendo la creación de la Central Unica de Trabajadores, con participación proporcional de campesinos y hacer que ese máximo organismo se dedique a la actividad gremial y no a la politiquería". Se ha observado muchas veces que supuestos partidos "indios" o burócratas disfrazados de "dirigentes sindicales" han tomado para sí la tarea de aislar a los campesinos del movimiento obrero, de intentar desviar el ascenso revolucionario, con el argumento pueril de que a los hombres del agro les corresponde la dirección de todas las organizaciones porque son demográficamente la mayoría. Esta actuación en ningún momento ha respondido a los intereses de los hombres del agro, sino que ha estado orquestada por los gobiernos de turno y por el imperialismo.

Los visitantes ratificaron su confianza en el Ministro de Asuntos Campesinos, coronel Ramón Azero, uno de los renunciantes del gabinete después de la masacre de Cochabamba y pidieron se castigase severamente a los autores del bloqueo de caminos, etc.

Lo hecho por el Presidente Bánzer era un vano intento de aplastar la realidad, de enmendarla, con ayuda de un sello que dice Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Los campesinos sellaron su unidad con los obreros en la batalla y el Presidente tuvo la ocurrencia de hacer recitar un discurso antiobrero a Céspedes. La conferencia campesina tronó contra la política y los partidos, esto como una advertencia a los componentes del propio FPN, tan interesados en realizar proselitismo en el campo, cosa que no podía permitir el sector castrense. La historia no es el diálogo ni el juego entre fantasmas, es el producto de la lucha de las masas.

Con fecha 14 de febrero se dio una nueva estructura al Poder Ejecutivo, con la finalidad de "dinamizar la administración" ⁴⁸, como expresó el Presidente Bánzer, Hubo resistencia a llamar crisis de gabinete la provocada por la renuncia de Guido Valle y se insistió que se trataba de un simple ajuste administrativo. La verdad fue muy diferente, como se pudo constatar por el cambio del equipo castrense e independiente en el seno del gabinete.

Los ministros del Interior y de Asuntos Campesinos fueron reemplazados por otros: tal fue la consecuencia del tremendo malestar creado en el valle de Cochabamba. Los sectores militares que repudiaron el uso indiscriminado de la violencia exigieron una rectificación de la conducta gubernamental. Algo más, apareció como Ministro de Industria y Comercio el coronel Miguel Ayoroa, hasta la víspera comandante de la poderosa División acantonada en Santa Cruz. Se trataba de que el clan conspirador

48- "Presencia", La Paz, 15 de febrero de 1974.

de los Ayoroa Miranda ganaba posiciones en el seno del gobierno. Tampoco se podía desechar la variante de que esa incorporación al gabinete era el resultado de una conocida maniobra de Bánzer: anular a un competidor gastándolo en el ejercicio del poder.

El Ministro de Estado Waldo Cerruto fue eliminado con más su cartera y destinado a un cargo diplomático en la Argentina. Este político publicitó con exceso su campaña moralizadora y las medidas que adoptó chocaron con los intereses del mismo Bánzer. El gobierno gorila había llegado a un grado de extrema podredumbre para permitirse el lujo de llevar adelante una amplia y profunda campaña moralizadora. Los grandes negociados y la inmoralidad partían del propio Palacio Quemado.

Desde el punto de vista puramente administrativo se dio mayor racionalidad a la estructura ministerial. Se eliminaron ciertas carteras y se fusionaron otras para evitar dualidad de funciones; de diez y ocho los ministerio se redujeron a trece.

Capítulo XI

El autogolpe de noviembre de 1974 y la clase obrera

1

Tendencias que prefiguraron el autogolpe

Hemos indicado que el propio desarrollo político alentó la aparición en los medios castrenses de una poderosa tendencia que buscaba la eliminación de los partidos políticos (FSB y MNR) de la cúpula gobernante. Las agrupaciones políticas civiles (una que tradicionalmente correspondía a inconfundibles posiciones derechistas-fascistas y la otra que había debutado como confusa posición antiimperialista, cuya conducta fue por demás tortuosa e inconfundiblemente contradictoria) fracasaron completamente, después de 1971, en su propósito de arrastrar detrás de sí a los sectores mayoritarios de las masas y mantenerlos indefinidamente bajo el control gubernamental, en esa medida resultaron poco o nada útiles para el gorilismo, que estaba seguro de haber iniciado todo un período histórico.

El proyecto central del gobierno militar (militar contase o no con adornos civiles, esto porque era la espada la que definía su destino) era nada menos que el desarrollo capitalista del país, ciertamente que bajo el ala protectora del imperialismo y siguiendo los canales del cumplimiento de los planes colonizadores de éste, lo que nos obliga a recordar su filiación nacionalista de derecha. El banzerismo, a su modo, vino a completar el propósito nacionalista de cumplir las tareas democráticas, no sólo siguiendo el camino de Bismarck, sino acentuando la opresión imperialista. La frustración del proceso iniciado en 1952, definitiva pese a las rimbombantes proclamas miristas por retomarlos, puso en evidencia, una vez más, la caducidad de la burguesía criolla como fuerza capaz de cumplir sus propias tareas y se convirtió en el antecedente que podía permitir predecir anticipadamente la quiebra de los planes "progresistas" del gorilismo. Los partidos políticos nacionalistas que ocupaban posiciones extremas, mas no antagónicas, nada ya pudieron hacer para revitalizar un esquema político y social que resultó hecho añicos en su choque con la realidad. El fracaso de la extrema derecha o fascista no tuvo más virtud que subrayar tal quiebra.

De 1971 a 1974 no pudieron ni siquiera efectivizarse en toda su dimensión los esquemas fascistas. Los generales confiaban que esta efectivización podría todavía traducirse en el milagro del desarrollo pleno y de la prosperidad nacionales. Vana ilusión: está demostrada la inviabilidad del esquema del total y pleno desenvolvimiento del país en el marco capitalista y los acontecimientos posteriores se limitaron a confirmar esto. El banzerismo persistió en el propósito y el nacionalismo volvió a fracasar.

En el interín se ensayó el camino de la efectivización del esquema definiendo más concretamente los rasgos brutales del fascismo: se buscó que la violencia ayudase a la clase a trasmontar su congénita debilidad.

En la génesis del nacionalismo movimientista se encuentra el esfuerzo hecho por emancipar a Bolivia de la opresión yanqui, cierto que recorriendo caminos muy torcidos, pero en la práctica dio pruebas de su total incapacidad para consumir la liberación nacional y para estructurar el gran Estado nacional independiente, del que ha vuelto a hablarse durante el llamado proceso de democratización (1978-1980) En cierto momento la tarea democrática de la liberación nacional cobra primacía con relación a todos los demás objetivos burgueses, esto porque constituiría el marco adecuado para un desarrollo capitalista integral e independiente, meta que se ha tornado inalcanzable para la clase dominante criolla, incluidos todos sus sectores y tendencias. Las ametralladoras que respaldaron al general Bánzer tampoco pudieron hacer nada en este aspecto. Sin una formulación coherente y realizable de la liberación del país de la opresión imperialista ya no puede concebirse el nacionalismo burgués.

Los generales golpistas se apoyaron en expresiones derechistas y reformistas de la clase dominante para lograr alguna estabilidad como gobierno, para que éste adquiriese contornos populares. La gran y profunda transformación de un país sólo puede realizarse si se logra arrastrar a la mayoría nacional detrás de este objetivo. A FSB y al MNR se les señaló la importantísima misión de efectivizar ese sueño. Cuando los aliados de un momento fracasaron y fueron echados del poder, Bánzer y sus seguidores (el caudillo castrense logró aglutinar alrededor suyo a un grupo de civiles ambiciosos, no pocos tecnócratas desesperados de escalar rápidamente los peldaños del carrerismo económico y social) se emplearon a fondo en el propósito de obligar a todos los bolivianos a marchar disciplinadamente tras la consigna de la reconquista de una salida soberana sobre el mar. Qué fácilmente se olvidó, esta vez cayeron en el olvido los sectores políticos más diversos y hasta izquierdistas, que una modificación del mapa del Continente no puede darse invocando únicamente los principios abstractos del derecho internacional, sólo puede ser el resultado del gran potenciamiento económico, portanto militar, de un país. Es la incapacidad de la burguesía nacional para hacer posible que se desarrolle plenamente el capitalismo en Bolivia, la que ha determinado la bancarrota de las propuestas burguesas frente al problema de la mediterraneidad, tanto la reivindicacionistas como la practicista, que a lo largo de los años únicamente han acumulado toneladas de papel impreso y destruido los sentimientos más profundos de la mayoría nacional. El trotskysmo fue la única organización política que pudo levantarse contra la poderosa presión de la opinión pública, ganada en ese momento para los planteamientos practicistas (trueque territorial), y formuló la imposibilidad de la solución de la mediterraneidad mientras los gobiernos burgueses se mantengan en el poder y persista la opresión imperialista: únicamente la clase obrera, a través de los Estados Unidos socialistas de América Latina, logrará que Bolivia aproveche el mar para su propio desarrollo.

La poderosa tendencia militar que buscaba eliminar a los partidos políticos del gobierno castrense, como una forma de lograr la popularidad de éste y de dar cierta satisfacción al creciente descontento de los bolivianos frente a las medidas antinacionales de

los generales, encontró el momento de efectivizarse cuando se tornó intolerable la inmoralidad de los funcionarios. Las direcciones y la militancia de FSB y del MNR aparecieron como la encarnación de todos los excesos y del nepotismo, aunque en la realidad todo esto fue también protagonizado por los elementos uniformados. Es en ese momento que sonó la hora del despido del seno del gobierno a los políticos civiles, a los que podemos considerar profesionales de la politiquería. Lo anterior no pretende ignorar que los militares nunca han dejado de ser parte integrante de la política boliviana, unas veces, como ocurrió durante gran parte del siglo XIX, porque eran los que mejor podían encarnar el caudillismo y, otras veces, porque la espada fue desenvainada cuando los partidos tradicionales zozobraron en medio de la impotencia toda vez que se propusieron realizar sus propias tareas.

El esquema gorila-fascista se había agotado prácticamente como el recurso utilizado por la clase dominante criolla y por el imperialismo en su emperio por contener a las masas, por obligarles a trabajar más aceleradamente y en paz, requisitos para hacer posible la paz social y la estabilidad jurídica. Sin embargo, el esquema gubernamental emergente de las jornadas de agosto de 1971 se sobrevivió. La crisis política encontró una válvula de seguridad en la sistemática lucha contra los equipos de dirección de FSB y del MNR lucha en la que se desempeñaron tan a fondo los militares. No se trató, ciertamente, de una total prescindencia de los civiles en las funciones de gobierno, sino de una operación castrense que dio la impresión de que el ejército había decidido extirpar todas las excrescencias malsanas encarnadas en movimientistas y falangistas. Seguidamente Bánzer dio pruebas suficientes de que había incluido en sus planes de perpetuarse en el poder, lo que ciertamente rebasaba los iniciales proyectos de las cumbres castrenses, la conformación de un equipo político civil que le fuese totalmente incondicional. No se debe olvidar que desde diferentes posiciones militares se pugnó porque tanto FSB como el MNR se disolviesen para dar paso a un único, nuevo y poderoso partido político, capaz de servir de sustentación a un vigoroso gobierno estructurado por las fuerzas armadas, Ese partido único, tan acariciado por los generales estaba destinado a funcionar como chaleco de fuerza colocado a la mayoría nacional. Lo que más desilusionó a los protagonistas del golpe contrarrevolucionario de 1971, fue el constatar que las ambiciones sectarias, en alguna forma reflejo de la insignificancia y miseria de la clase dominante, hicieron fracasar los esfuerzos que estuvieron encaminados a poner en pie a un poderoso partido político que pudiese convertirse en un nuevo polo aglutinante de los sectores mayoritarios del país. Sería equivocado sostener que los generales estuvieron interesados en estructurar un gobierno elitista y a espaldas de la mayoría nacional, la verdad es lo contrario: se buscó por todos los medios ganar a los bolivianos en favor del plan de los gorilas, pues únicamente de lograrse este propósito podría funcionar un régimen militar sin mayores contratiempos y efectivizarse la trilogía de "paz, orden y trabajo". Hay que repetir nuevamente que una dictadura se transforma en fascismo cuando logra apoyarse en el descontento de vastas capas de la clase media.

La evolución de este proceso político es por demás claro: cuando no se logró que FSB y el MNR se disolviesen en un partido único, Bánzer se lanzó a poner en pie su propio partido, una de cuyas últimas versiones fue ADN.

2

Consecuencias del autogolpe

En la historia boliviana ha sucedido muchas veces que tras la apariencia de un espectacular golpe destinado a desorientar a la opinión pública se ha consumado un profundo reajuste en la composición y hasta en la orientación gubernamentales como consecuencia de acuerdos logrados en las cumbres políticas. El método ha sido registrado como "mamertazo", en homenaje al nombre del personaje que se prestó a escamotear el resultado de las elecciones de 1951 mediante el fácil recurso de entregar el timón del Estado a la jerarquía castrense. El autogolpe de noviembre de 1974 se inscribe dentro de esta modalidad golpista. Es comprensible que el gorilismo se incline a utilizar con frecuencia este recurso porque le permite "solucionar" los problemas políticos a espaldas del país, evitando en lo posible la peligrosa participación de las masas.

El reajuste de noviembre buscó remozar la política oficialista, insistir en el propósito de ganar el respaldo de grandes sectores de la ciudadanía y, al mismo tiempo, endurecer los métodos fascistas de gobierno. Uno y otro extremo se condicionaron mutuamente.

Tenemos señalado que hasta ese momento el gobierno reaccionario era básicamente militar, aunque incluyó a su sero a dos partidos de la clase dominante, esto porque la política y decisiones quedaron en manos de los jefes castrenses. Hay que reiterar que FSB y el MNR estaban viviendo una etapa de su frustración y de su desintegración, como parte del hundimiento político de la burguesía nacional, proceso que no se detuvo por el hecho de que esos partidos ya tradicionales hubiesen retornado por breve tiempo al Palacio Quemado cogidos de la espada del gorilismo, volvieron no como expresiones políticas de las masas que eran dueñas de las calles, por esto mismo con la suficiente capacidad para imprimir su huella en todo el proceso histórico, sino como sirvientes de los que en ese momento monopolizaban el poder encarnado en las armas. La desintegración de FSB fue más veloz que la del MNR, esto porque aquella organización en ningún momento llegó a penetrar profundamente en las capas mayoritarias del país, nació y vivió como fuerza de choque de la derecha burguesa. La atrofia y el arteroesclerosis del movimientismo (hay que tener presente que fue la expresión más atrevida, después del liberalismo, de la tendencia que planteaba la posibilidad del desarrollo capitalista pleno e independiente del país), fue mucho más prolongada y dramática. Todas sus tendencias, desde la "izquierda" silista hasta la derecha guevarista, pasando por el pazestenssorismo, existieron y existen en la medida en que logran el favor del imperialismo, la negación más acabada del libre desarrollo independiente de un país atrasado.

El autogolpe permitió la radical reestructuración del Poder Ejecutivo, de manera que quedó íntegramente en manos castrenses y se acentuó mucho más el propósito de estatización de los sindicatos y la limitación de su funcionamiento. La universidad ya dependía del gobierno central, pero esta vez sus autoridades comenzaron a funcionar estrechamente como agentes de los organismos de represión.

El despido de FSB y del MNR del seno del gobierno, tuvo como inmediata consecuencia la limitación de movimientos de la oposición, incluida la burguesa. La actividad legal de todos los partidos políticos fue erradicada de la manera más secante que fue posible.. En cierta medida y en determinado momento, eran únicamente los generales los que hacían política de manera ostensible y tenían la seguridad de que sólo sus decisiones debían imponerse en el ámbito nacional. Como quiera que los partidos burgueses carecen de estructura, más que de recursos (**no en vano** son los dueños de los medios de producción), para poder desarrollar una sostenida actividad clandestina, voluntariamente dejaron de actuar. La izquierda en general se colocó en posición ventajosa, pues ya venía moviéndose en medio de las sombras de la vida subterránea. Mas, esto no quiere decir que hubiese desaparecido la oposición burguesa, lo que hizo ésta fue adoptar una nueva cobertura: se desplazó hacia las organizaciones que había puesto en pie la Iglesia y hacia aquellas que decían defender los derechos humanos. Se tornó democratizante y rápidamente este objetivo político unificó a toda la oposición, también a la obrera.

A la acentuación de los métodos fascistas de gobierno se respondió acentuando el carácter democratizante de la lucha antigorila. Ciertamente que el propio desarrollo político objetivo obligaba a colocar en un plano prioritario, inclusive con referencia a las demandas salariales y otras que tenían estrecha relación con las condiciones de vida y de trabajo de los explotados, la lucha encaminada a reconquistar la vigencia de las garantías constitucionales y sindicales, que importa la lucha por el respeto a la ley, que también en estas circunstancias si se quiere dramáticas sigue siendo la voluntad de la clase dominante expresada con ayuda de los principios del derecho que emana de la propiedad privada y de la necesidad de su preservación. Así se dieron las condiciones para que la lucha opositora durante el período que se abrió con el "mamertazo" de noviembre de 1974 apareciese como predominantemente democrática, como la expresión de la unidad de todas las clases sociales que de manera diferente tuvieron que soportar las consecuencias de la dictadura gorila y fascista, como si las clases hubiesen limado sus aristas y abandonado sus intereses, que son diferentes aunque no siempre excluyentes, como si estuviesen interesadas exclusivamente en ofrecer un frente unido contra los detentadores del poder.

Más tarde, en 1980, Bánzer dirá que las medidas que adoptó después de 1974 fueron básicamente temporales.

La clase obrera, que, como hemos visto, llegó a un alto grado de desarrollo de su conciencia, al extremo de que pudo estructurar nada menos que la Asamblea Popular, uno de los puntos más elevados de la lucha revolucionaria en escala continental, lenta e imperceptiblemente se fue disolviendo en el serio del vasto frente democrático, que en alguna forma resultó ser la expresión de la nación oprimida. En un país atrasado como Bolivia, en el que la liberación nacional es una de las grandes tareas democráticas que insoslayablemente debe consumarse, la conclusión de Marx en sentido de que la clase obrera para poder libertarse no podrá menos que libertar a toda la sociedad, adquiere características particulares y una profundidad sin paralelo.

Diluirse en el seno de la nación oprimida importa perder los contornos clasistas de la

ideología propia, el planteamiento de las reivindicaciones clasistas y hasta colocarle un chaleco de fuerza a la actividad instintiva y atenuar la conciencia de clase, renunciar a la ideología propia y al particular enunciado de los objetivos clasistas, todo con miras a subordinarse a la política burguesa, a colocar a las organizaciones obreras al servicio del enemigo de clase. La necesaria lucha por la vigencia de las garantías democráticas, que en nuestro caso venía de muy lejos, se acentuó hasta el extremo en la etapa iniciada con el autogolpe de noviembre de 1974 y tuvo un precio muy elevado para los explotados bolivianos: perder momentáneamente todo lo que habían conquistado hasta entonces y cuya expresión más elevada fue 1971.

Si todo el proceso político llevaba a los explotados hacia las trincheras burguesas democratizantes, esa marcha se vio acentuada en extremo por la presión que en el mismo sentido ejercieron los tradicionales partidos de izquierda. Los obreros, que poseen el enorme capital de su instinto, se mueven describiendo constantes zig-zags y cuando la corriente los empuja hacia la derecha pueden concluir confundiéndose con la burguesía, pero, en su momento y empujados por la lucha que se genera alrededor de sus necesidades más apremiantes y cotidianas, vuelven a retornar a la izquierda en busca de su eje revolucionario tradicional, de la experiencia acumulada a lo largo de su historia. El caso de dos partidos políticos es diferente (es erróneo y sumamente peligroso confundir de manera simplista a la clase con la expresión política de sus intereses históricos, que se concentra en la vanguardia). Cuando los partidos abandonaron su programa, que importa un abandono de sus concepciones acerca del desarrollo social y de sus leyes, de la función y mecánica de clases, etc., lo hacen de manera definitiva, no les está permitido abandonar la estrategia con la misma facilidad con que uno se cambia de ropa sucia. Hay que meditar acerca de por qué la socialdemocracia y el stalinismo, luego de haberse desplazado hacia las posiciones de la burguesía, nunca más han podido retornar a las posiciones revolucionarias del marxismo. Si pudieran todavía hacerlo nos permitiría la estructuración de nuevos partidos destinados a retomar la bandera revolucionaria, habría que persistir necesariamente en la lucha opositora en su seno. En el caso boliviano es fácil comprobar que la izquierda tradicional que tan osada y entusiastamente se desplazó hacia el polo burgués, ya no pudo ni podrá salirle las redes con ayuda de las cuales la atrapó la clase dominante, esto porque ese desplazamiento importó el abandono total del programa que pretendía pasar como revolucionario, conclusión que también vale para las organizaciones que no poseen programa escrito, pero que en el pasado se movieron alrededor de algunas proposiciones clasistas y hasta radicales.

El sistemático desplazamiento de las masas y de la izquierda hacia las posiciones burguesas democratizantes apareció inicialmente como una postura inconfundiblemente revolucionaria, no en vano la lucha por la vigencia de las garantías constitucionales se presentaba como una necesidad emergente de todo el proceso político, que arrastró a las masas a posición tan equívoca. En el caso de las agrupaciones que pretendían ser nada menos que la vanguardia organizada de la clase obrera no puede y no debe hablarse de que fueron arrastradas fácilmente por el torrente del momento, sino que las condiciones políticas permitieron que aflorasen las corrientes reaccionarias y pro-burguesas que llevaban ocultas y como tendencia en el seno de su ideología imprecisa, altisonante y contradictoria, que era ya potencialmente pro-burguesa. Las

nuevas circunstancias les obligaron a presentarse de cuerpo entero. Arrojaron por la borda sus disfraces de oropel, la terminología prestada, casi siempre mal empleada, y convirtieron en consignas "tácticas" lo que en ellos era esencia de su teoría y de su política. Lo malo no está en que se hubiese luchado por la vigencia de las garantías constitucionales, hemos dicho que formaba parte de una actitud imprescindible y provechosa, sino en que a esa lucha se la hubiese despojado de toda proyección revolucionaria, en que se la hubiese convertido en la etapa final durante el presente período. Hasta los que se presentaron como trotskizantes concluyeron postulando la revolución por etapas, planteamiento necesario de todo movimiento nacionalista de contenido burgués, de toda capitulación ante los sectores democráticos de la clase dominante.

La izquierda capituladora se apartó definitivamente de la estrategia revolucionaria y de los intereses históricos del proletariado, esto porque contribuyó decididamente a que la burguesía se afirmase como dirección política de la nación oprimida. El pretexto táctico, que según nuestros izquierdistas puede asumir no importa qué fisonomía, inclusive la más reaccionaria y la menos obrerista, sirvió para dar las espaldas a la revolución y dictadura proletarias, de las que se dejó de hablar inclusive como promesa para un futuro indeterminado. De esta manera la táctica se trocó en estrategia y, por tanto, la izquierda obrerista en francamente pro-burguesa. No se comete ninguna exageración cuando se dice que la izquierda voluntariamente se convirtió en derecha, modificó su contenido de clase y esto no puede menos que ser definitivo, se refiere a una cuestión capital programática.

La sostenida lucha contra la acentuación de las medidas fascistas de gobierno que siguió a 1974 empujó a la clase revolucionaria, que esta sólo como posibilidad hasta tanto no afirme su conciencia de clase, es decir su diferenciación política y organizativa, a perder su fisonomía propia en el seno de la nación oprimida, es decir, su independencia clasista, esto porque siguió, sabemos que temporalmente, la política propia del enemigo de clase. La vasta masa atrasada del proletariado cobró su revancha al afirmarse alrededor de las proposiciones difundidas por las corrientes políticas que en alguna forma expresaban los objetivos de la burguesía nacional, que reiteradamente fracasó en su empeño de materializarlos, lo que viene a demostrar que su reactualización como consignas populares no podía menos que adquirir una fisonomía inconfundiblemente reaccionaria. El grueso de la clase arrastró detrás de sí y mediatizó a la vanguardia, depositaria de todos los progresos hechos en la evolución de la conciencia de los explotados. Esta vez la comedia se mudó en inconfundible tragedia. La izquierda capitulante es la responsable de que este proceso hubiese adquirido tan insospechada profundidad, que prácticamente se ha convertido en su propia sepultura, pues ha perdido la posibilidad de aparecer como dirección revolucionaria de las masas en los momentos de su mayor radicalización; está condenada, para poder sobrevivir, a complacer las exigencias de las diversas expresiones políticas de la clase dominante, que tienen como rasgo común la lucha sistemática contra la radicalización de aquellas, la subordinación al parlamentarismo y el virtual abandono de la acción directa. Esta izquierda se ha convertido en portavoz de la política burguesa en el campo obrero y su expresión más acabada dentro del sindicalismo ha llegado a ser la burocracia cobista.

No se trata de un hecho excepcional, sino más bien de una tendencia persistente en el desarrollo histórico. La izquierda stalinista o filo-stalinista, por lo menos desde 1938, demostró su vocación de servir con obsecuencia a determinados sectores de la clase dominante, que a partir de 1946 llegó a su punto culminante con el contubernio entre el PIR y la rosca. En la etapa que estamos analizando el fenómeno apareció por demás sorprendente debido a la gran radicalización y evolución política de la clase obrera, que contrataban brutalmente con la actitud equívoca de sus direcciones tradicionales.

El retorno de los explotados a su eje revolucionario, que tanto vale decir su radicalización, no sólo que aisló a esa izquierda, que a medida que pasaba el tiempo perdía la popularidad que pudo conquistar, lo que no importa que no hubiese podido ganar asientos en el parlamento o consumir algunas maniobras frentistas, sino que precipitó su crisis ideológica y orgánica. Todo permite concluir que esa izquierda saldrá maltrecha de su aventura oportunista. Sería equivocado confundir esa izquierda con la dirección revolucionaria, pues en caso afirmativo su quiebra significaría la peor desgracia para los explotados. La perspectiva de la revolución no está del todo perdida: de los escombros de la actual izquierda emergerá pujante la nueva dirección que merece la admirable clase obrera boliviana.

El proletariado que ha sido capaz de poner en pie a la Asamblea Popular tiene que organizarse en un poderoso partido político, esto si realmente busca emanciparse. El primer paso que en este camino tiene que darse consiste en someter a una severísima crítica la conducta de la izquierda; al margen de esta crítica será imposible elaborar la teoría de la revolución, el programa que señale la estrategia de la clase obrera y, por lo tanto, las normas organizativas que pueden ayudar a poner en pie al estado mayor de los explotados. Se tiene que comprender con toda claridad que los partidos que han adquirido un contenido de clase diferente a la proletaria no pueden ser reformados, sólo merecen ser destruidos. El partido del proletariado es cualitativamente diferente a ellos, aunque puede nutrirse mediante la asimilación de algunas de sus fracciones. Finalmente, volvemos a puntualizar que lo que ahora aparece con meridiana claridad acerca de la conducta de la izquierda no es más que el punto culminante de la que se presentó como germen peligroso después del auto golpe gorila de noviembre.

Si la extrema acentuación de los métodos de gobierno fascistas planteó para los explotados la necesaria lucha por la vigencia de las garantías constitucionales, pisoteadas por la Junta Militar, resultó inevitable la ubicación en la misma trinchera tanto de los trabajadores como de los amplios sectores burgueses democratizantes, así se fue perfilando la tendencia hacia la "democratización" temporal de la clase revolucionaria. El proceso puede ser limitado en el tiempo por dos fechas: 1974 a 1978. Esto no quiere decir que se trata de una línea recta, contrariamente conoció constantes avances y retrocesos. No pocas veces el proletariado pareció confirmarse como clase y como dirección de la nación oprimida, eso sucedió, por ejemplo durante la gran avalancha huelguística que entroncó con el movimiento iniciado por las cuatro mujeres mineras a fines de 1977, pero esos lampos de luz no hicieron más que relieves el desplazamiento masivo hacia la derecha. Lo que fue impulso ciego para las masas, actitud que opacó la conciencia e independencia clasistas, se convirtió

en nada menos que abandono programático para los partidos tradicionales de la izquierda boliviana, es decir, en un desplazamiento definitivo de una postura clasista a otra, esta vez identificada con la burguesía. De claudicación ocasional, de maniobra, se convirtió en línea política predominante. En 1974 y después, mientras las masas no atinaban a emanciparse del control político de la burguesía, los oportunistas de "izquierda" parecían fortalecerse, ganar predominio en medio de los explotados. En contraposición, resultaba por demás evidente el aislamiento y soledad del partido revolucionario, que creyó de su deber poner a salvo el programa marxista, tanto vale decir, el porvenir del proceso político boliviano, frente a la derechización de los obreros, de los campesinos y de los izquierdistas.

La acentuación de las medidas fascistas de gobierno sirvió para convertir en realidad el plan de empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, como la mejor forma, desde el punto de vista de la burguesía criolla y del imperialismo, de superar las dificultades económicas del momento y de aumentar las ganancias patronales. Tal era la motivación última del autogolpe. Ya dijimos que la agravación de los rasgos fascistas del gobierno castrense comenzaron dándose en el papel ¹, pero cuya efectivización estaba subordinada a la posibilidad futura de derrotar efectivamente al movimiento obrero, que seguía en alza y arremetiendo vigorosamente contra el gorilismo. Los explotados estaban seguros de que habían obligado a la dictadura a retroceder y que así, siguiendo el camino de la acción directa, concluirían venciendo.

La prohibición de las actividades políticas y sindicales estaba escrita, pero los obreros, particularmente los mineros, marchaban a tambor batiente detrás de objetivos concretos y utilizando sus propias organizaciones y sus métodos de lucha. Una vez más se pudo constatar que el ascenso de las masas no puede menos que imponer la vigencia de determinadas garantías democráticas, que abandona la clandestinidad y el sigilo para hacerse presente en el escenario de manera bulliciosa y multitudinaria. Este inconfundible ascenso se prolongó hasta mayo de 1976, fecha de realización del congreso minero de Corocoro, esto violentando todas las prohibiciones. La huelga que le siguió dio oportunidad a los generales a asestar un rudo golpe a los trabajadores, a derrotarlos y obligarles a abandonar las posiciones que habían ido conquistando. A partir de esta fecha comienza la efectivización de la política gubernamental dura y el sensible empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo.

Las masas, obligadas a retroceder después de su derrota, abandonaron su tradicional radicalismo y encontraron un motivo de aglutinamiento y una forma de defensa de sus organizaciones tan seriamente amenazadas de ser barridas por el huracán fascista, en la lucha por la defensa de mínimas garantías democráticas. No bien los explotados marcharon el polo burgués y se sometieron a una línea política que les era extraña, dieron las espaldas al FRA, que es la táctica del frente antiimperialista bajo la dirección de la clase obrera.

La derechización de la izquierda le impidió comprender debidamente en qué consiste la lucha democrática, tan importante en un país atrasado, que lo es en la medida en que quedan pendientes de efectivización importantes tareas burguesas. En el período

1- G. Lora, "Movimiento Obrero Contemporáneo", La Paz, 1979.

de desplazamiento de las masas hacia el polo burgués y luego en el dominado por su radicalización, el esclarecimiento de este problema se convirtió en uno de los más importantes de la actividad política.

Lo primero que tiene que esclarecerse es que una cosa es la lucha democrática por el cumplimiento de las grandes tareas burguesas, y ese es el sentido que le dan los clásicos, y otra diferente la que se entable por la efectivización de las garantías constitucionales y que puede tener vigencia también en los países de desarrollo capitalista avanzado.

El cumplimiento de las tareas burguesas, contenido de la revolución democrática, es inseparable del problema de saber qué clase social, en esta etapa de desintegración del capitalismo monopolista, es capaz de conducir a la nación oprimida hacia esa meta. La formulación no ofrece la menor fisura que permita plantear la separación entre la estrategia y la táctica de la política revolucionaria. Desde el punto de vista del proletariado, corresponderá al gobierno de esta clase social cumplir debidamente las tareas burguesas pendientes, a fin de transformarlas en socialistas. Es abusivo el reducir este proceso a la limitadísima lucha por la vigencia de la Constitución y de las leyes dictadas por la clase dominante, recurso que utiliza la izquierda derechizada para justificar su total capitulación frente a la burguesía. La vigencia de las garantías constitucionales puede lograrse en el marco de la sociedad burguesa, sin que sea preciso modificar las relaciones de producción, por algo el ordenamiento jurídico está destinado a garantizar el régimen de la propiedad privada.

Nuestros socialistas han reducido el planteamiento de la democratización a la vigencia de las garantías democráticas, aunque de tarde en tarde opusieron a la dictadura gorila la necesidad de convocatoria a elecciones, todo dentro de un proyecto de perfeccionamiento de la democracia, que se ajustaba debidamente a la capitulación frente a la burguesía. La democracia y el fascismo, que de ninguna manera deben ser identificados o confundidos, no son más que dos formas gubernamentales del Estado burgués y aparecen en diferentes momentos del desarrollo del capitalismo.

La política revolucionaria no puede menos que enfrentar y resolver la cuestión de la "revolución democrática", como gustaban decir los marxistas rusos, pero esto no supone que se esté planteando como meta de la presente etapa el perfeccionamiento de la democracia formal, es decir, del Estado burgués, ni siquiera el perfeccionamiento del parlamentarismo. Hacerlo significaría acabar como reformista, porque el tan publicitado perfeccionamiento de la democracia no sería otra cosa que el perfeccionamiento del régimen capitalista, una reforma que no pasa de ser una utopía. El reformismo genera la tesis de la pacífica transformación del capitalismo en socialismo y se complementa con ésta. Cuando las masas se abandonan fugazmente en brazos del parlamentarismo, se deja que actúe libremente la ilusión de que cuando los socialistas logren controlar la mayoría del parlamento (el 51%, por ejemplo) llegado sería el momento de la pacífica y gradual transformación de la sociedad, con ayuda de los recursos legales y no de la violencia de las masas. Ni duda cabe que en esta deformación del planteamiento de la perspectiva revolucionaria hay mucha dosis de moralismo pequeño-burgués.

El más grande error de la izquierda al servicio de la burguesía, un equívoco que entronca en su verdadera concepción programática, por otra parte, consistió en haber convertido la lucha por las garantías democráticas, pequeña dentro de la perspectiva histórica aunque puede convertirse en prioritaria en determinado momento, nada menos que en una finalidad estratégica, lo que importó luchar por la reforma y mantenimiento de la sociedad burguesa. La finalidad de la clase obrera no puede consistir en otorgarle rasgos democráticos al capitalismo, esto porque su tarea histórica consiste, precisamente, en destruirlo. No sirve el justificativo de que se obró así por imposición de circunstancias concretas de determinado momento del desarrollo político, esto porque, como llevamos indicado, cuando la izquierda procederle esta manera lo que hace en realidad es abandonar definitivamente el programa de la revolución.

La lucha por las garantías constitucionales se explica si sirve de puente para la movilización de las masas y para conducir las hacia el cumplimiento de su finalidad estratégica.

Una y otra vez la izquierda tradicional se esforzó por contribuir a que la clase obrera perdiese sus perfiles propios y se confundiese con la masa democratizante, esto al apartarle de su meta de la revolución y dictadura proletarias. Hay una diferencia substancial entre el partido y la clase, no sólo porque aquel es nada menos que la organización de la vanguardia del proletariado, sino porque la masa obrera es instinto socialista, que gracias a la acción transformadora partidista puede llegar a ser conciencia, lo que no debe considerarse igual a la expresión programática (ciencia social) de las leyes de la transformación de la sociedad. Aquí se encuentra la explicación de por qué la clase puede retornar a su eje revolucionario pese a todos sus ocasionales extravíos, por muy graves que éstos sean, y no así el partido político.

3

¿La democracia es la imprescindible escuela política del proletariado?

La izquierda tradicional, actuando y hablando desde el campo del enemigo de clase, formuló la tesis de que la terca batalla que libró, juntamente con la burguesía democratizante y enarbolando como estandarte las ideas de éstas, se encaminó a poner en pie una generosa democracia que fuese capaz de convertirse en la escuela política primaria del proletariado. En este planteamiento la democracia burguesa aparece como una etapa necesaria y previa para el logro de los objetivos socialistas, Aparentemente stalinistas, nacionalistas y sus seguidores, no reniegan del gobierno propio de los obreros, se limitan a hacerle preceder de la etapa democrático burguesa. La teoría y la experiencia enseñan que cuando la revolución proletaria es relegada hasta las calendas griegas, de finalidad estratégica de lucha (de la lucha actual, ni duda cabe) se convierte en sueño utópico.

La izquierda pro-burguesa pretende estrangular los objetivos proletarios dentro del

estrecho marco de la democracia formal. Una prueba suplementaria se la tiene en su teoría de que la democracia en la que ella interviene ya no es estrictamente burguesa sino que presentaría rasgos de una forma gubernamental superior, sería social, económica, popular o, en fin, una nueva democracia, todo a gusto del cliente. Esta formulación es por demás peligrosa porque da a entender que el Estado burgués puede transformarse internamente hasta devenir en socialista. De esta manera se supone que el ministerialismo y el colaboracionismo reemplazan a la lucha de clases. Si hubiese algo de verdad en dicha tesis habría que descartar el camino insurreccional para poder llegar al nuevo Estado y plegarse a la creencia de que es posible el paso gradual y pacífico de una sociedad a otra.

La revolución por etapas, que importa el abandono definitivo de la estrategia proletaria, se niega a reconocer que pueda materializarse como resultado de la lucha cotidiana de los explotados y espera que éstos se encuentren totalmente preparados y educados en la escuela de la democracia burguesa, para luego emprender su gran aventura liberadora. Nos encontramos frente a dos concepciones diametralmente opuestas de la revolución.

El programa de transición adquiere singular importancia porque plantea la posibilidad de que los explotados puedan movilizarse hacia la revolución, como parte integrante de su actividad cotidiana y partiendo de su real evolución como clase, sin ignorarse atraso y sus prejuicios, através del puente de las reivindicaciones transitorias, que han sido formuladas para poder superar el descomunal abismo que para la socialdemocracia, por ejemplo, separaba el programa mínimo (reforma y lucha diaria) del máximo (programa socialista). La revolución por etapas parece haber estratificado definitivamente esta separación entre reforma y revolución y ya no las considera como aspectos del proceso único de la madurez y necesaria transformación de la sociedad. El programa de transición (la Tesis de Pulacayo, la Política del IV Congreso de la COB y otros documentos ideológicos capitales del movimiento obrero siguen este método) una táctica y estrategia, reforma y revolución, como partes inseparables y que se condicionan mutuamente, de la política del proletariado.

En el planteamiento de stalinistas, nacionalistas y sus seguidores, es explicable que se espere la previa madurez y educación de los explotados para que en el futuro puedan cumplir las tareas socialistas. No debe olvidarse que la urgencia de encadenar a la clase obrera a la limitadísima lucha por una "democracia", que tanto vale decir por el capitalismo estructurado como estado democrático, encuentra su fundamentación "teórica" en el presupuesto de que en Bolivia, como se denuncia por su rezagado desarrollo económico, social y político, las fuerzas productivas únicamente han madurado para hacer posible la revolución democrático burguesa, que necesariamente supone la subordinación de la clase obrera a la "burguesía progresista o revolucionaria". El desarrollo democrático (superación del atraso en el marco capitalista) permitía que la clase obrera se transforme, gracias a una amplia y sostenida industrialización ya la maquinización del agro, en demográficamente mayoritaria y que, además, políticamente se vigorice y estructure, sacando así ventaja de la generosa vigencia de las garantías democráticas. En resumen: esa clase obrera, de incipiente se convertiría en política y organizativamente madura y de esta

manera estaría recién capacitada para plantearse, en el plano de la realidad y no de la utopía, la revolución proletaria. La etapa democrática, para utilizar ajustadamente el planteamiento stalinista, debe servirla imprescindiblemente porque constituirá la necesaria preparación de la futura revolución socialista, meta última de la humanidad, etc.

De esta manera, la estrategia del proletariado, anacrónica en medio del aterrador atraso industrial del país, que permite tipificarlo como pre-capitalista, debe ser relegada para un futuro indeterminado, estando obligada la clase obrera a plegar las alas para merecer la protección y la orientación política de la burguesía, lo que le debe llevar a hacer suyas las finalidades que la clase dominante "progresista" busca materializar en el momento presente: el funcionamiento de una amplísima democracia y la tardía plasmación del gran Estado nacional soberano.

No puede haber la menor duda de que la vigencia de las garantías constitucionales puede permitir a los explotados organizarse más fácilmente, lo que les obliga a luchar por su efectivización. Sin embargo, la clase obrera se organiza y educa para libertarse y no para remachar sus cadenas, que no otra cosa significa señalarse como meta de la presente etapa el perfeccionamiento de la democracia. La democracia debe permitir la movilización de las masas hacia la conquista del poder, es decir, hacia la destrucción de la democracia. Democracia y parlamento son creaciones burguesas, como campo propicio para que los dueños de los medios de producción puedan imponerse y someter a su despótica voluntad a la mayoría nacional. En ciertas circunstancias políticas, que son aquellas que todavía no permiten que los trabajadores solucionen los problemas cardinales de la política con sus propias manos y sus propios métodos, puede resultar inevitable participar en la lucha por la democratización y en el seno mismo del parlamento, que es tanto como meterse en el campo enemigo a batallar en favor de un programa inconfundiblemente antiburgués. En este caso esa difícil lucha debe encaminarse a destruir a la democracia y el parlamentarismo burgueses, única manera de orientarse hacia la estructuración de una nueva sociedad. Para esto esa lucha debe estar estrechamente subordinada a la estrategia de la revolución y dictadura proletarias.

No se trata de perfeccionar al capitalismo, es decir, a la democracia formal, sino de destruirlos. Si no olvidarnos la lucha de clases y la explotación de la fuerza de trabajo por los empresarios en la que se basa, se tiene que subrayar que la democracia burguesa más perfecta no deja de ser una dictadura de la clase dominante, en la que las garantías constitucionales tienen vigencia plena en favor de los dueños de los medios de producción y su extensión a la mayoría nacional se ve restringida en extremo. Los explotados conocerán las bondades de la democracia en toda su plenitud, y esto por primera vez, bajo el régimen de la dictadura del proletariado.

Plantearse como objetivo de la actual lucha de las masas el perfeccionamiento de la democracia importa partir de la evidencia de que todavía es posible en Bolivia el pleno e independiente desarrollo del capitalismo. En este caso, la liberación nacional no tendría más finalidad que permitir el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco capitalista. Las formulaciones de la izquierda pro-burguesa adquirirían

alguna coherencia si se dijese que ese desarrollo de las fuerzas productivas puede convertirse en el basamento material de un generoso desenvolvimiento de la democracia burguesa.

Pese a todo, la anterior conclusión violenta las verdaderas leyes del desarrollo y de la transformación del país. Si tomamos en cuenta el período de desintegración al que ha ingresado el capitalismo monopolista y la presencia en el escenario político del proletariado como clase, se tiene que llegar a la conclusión de que están cerradas las posibilidades del desarrollo capitalista pleno e independiente de Bolivia. El necesario desarrollo de las fuerzas productivas tendrá lugar a través de métodos socialistas: la estatización de los medios de producción y la planificación de la economía, que de una manera necesaria y radical serán materializadas por el Estado obrero. La izquierda proburguesa no ha tenido el tino de demostrar la factibilidad de su proyecto de un pleno desarrollo capitalista del país, precisamente cuando el capitalismo se hunde en escala internacional y de manera irremediable.

Si ya no es posible el desarrollo capitalista pleno del país en la forma que se tiene indicada más arriba, se tiene que llegar a la conclusión de que tampoco podemos tener un período de amplio florecimiento de la democracia burguesa. No existen condiciones materiales para ello y esto resulta palpable en la actualidad. ¿En qué sector social puede apoyarse la democracia formal? Los izquierdistas no se formulan esta importante pregunta y tampoco creen oportuno responderla. Ciertamente que no en la clase obrera, que, como se tiene indicado, es instintivamente socialista y que solamente cuando todavía no se ha estructurado como clase, es decir, cuando sigue la política burguesa, puede creer que su objetivo central es la democracia burguesa, pues para ello tendría que estar convencida de que en el marco parlamentario y con ayuda de la papeleta electoral limpia y universalmente utilizada, es posible no sólo la satisfacción de sus demandas inmediatas, sino su propia liberación como clase. En el período liberal se dio este caso, pero no bien los explotados cuestionaron la capacidad revolucionaria del partido gobernante, plantearon la posibilidad de una respuesta clasista a los problemas políticos. En nuestra época no es posible esperar que la clase obrera funcione como la pieza clave de la democracia parlamentaria, esto por su gran evolución política, extremo que alientan los sectores burgueses, lo que no es más que reformismo pequeño-burgués y socializante.

El gran desarrollo capitalista, particularmente en los países enriquecidos a costa del saqueo de casi todo el mundo, ha generado paralelamente una vasta y enriquecida clase media, la nueva clase media, tan interesada en integrarse en la gran burguesía; es esta clase media, que actúa como amortiguadora de las agudas contradicciones que existen entre las clases polares de la sociedad y como fuente que nutre al reformismo, la que se convierte en el pivote alrededor del cual fructifica la democracia y funciona el parlamento, al que le da elemento humano y su ideología. En este caso se patentiza cómo la gran burguesía actúa a través del reformismo de la clase media. Esa capa social enriquecida se mueve de esa manera por estar segura que así se realizará en el presente y porque precisa de tranquilidad para aprovechar debidamente su bienestar. Las capas intelectuales socializantes que se forman en su seno plantean la pacífica transformación de la sociedad, la desaparición de las

desigualdades sociales con ayuda del ordenamiento jurídico, el atajo a las injusticias sociales, etc., a través de la actividad parlamentaria. Esta clase media cuando logra ejercer decisiva influencia sobre el asalariado concluye sometiéndolo a la política burguesa, entonces el parlamentarismo puede desarrollarse sin mayores tropiezos: la armonía de clases constituye el mejor clima para su florecimiento.

El hecho de que en Bolivia el capitalismo se dé como economía combinada, que en alguna forma está denunciando que vino como elemento invasor y que no es producto nativo, ya demuestra que no puede esperarse que atravesase por una etapa de vigoroso y total desarrollo del modo de producción capitalista y también explica por qué está ausente una clase media rica, que su lugar está ocupado por una capa social empobrecida y estrangulada en su desarrollo, esta masa depauperada en extremo (la mayoría de la clase media vive en condiciones aún peores que las del proletariado, que ya son lamentables) no puede cumplir la función de atenuador de la lucha de clases, sino que actúa como carga explosiva y se moviliza constantemente como aliada natural de los trabajadores. En Bolivia el parlamentarismo no encuentra un adecuado sustento social, está colgado de las nubes y por lo mismo no puede desarrollarse en gran medida. Nuevamente se comprueba que se trata de un lujo que sólo pueden darse los países ricos y que está vedado para los pobres como el nuestro. Se puede concluir que la democracia burguesa es inviable en Bolivia porque ya no conocerá un pleno desarrollo capitalista. De esta manera, repetimos, la tesis en favor del establecimiento de la forma democrática gubernamental no pasa de ser una utopía alimentada por los sectores burgueses y servilmente repetida por la izquierda tradicional rechazada.

¿Un simple error táctico de esa "izquierda"? Ciertamente que no. Se trata de un grave error programático acerca de la concepción misma de la revolución en Bolivia. Los democratizantes se limitan a desarrollar la política burguesa en lo que se refiere al desarrollo de las fuerzas productivas y se enfrentan abiertamente con la estrategia de la clase obrera: la revolución y dictadura proletarias, que es descartada por ellos como inalcanzable.

La actitud de la izquierda a partir de 1971 fue por demás contradictoria: inicialmente se aferró a su lucha tradicional ultrista, creía que en todo momento se encontraba a la orden del día la posibilidad de precipitar la lucha armada y de capturar el poder, esto aproximadamente hasta 1974. Se trataba de un grueso error táctico, estrechamente vinculado con los equívocos de su programa filo-foquista; ignoraba por completo a las masas y el estado real en que se encontraban, a fin de poder más fácilmente reemplazarlas con los explosivos. Entonces dijo el P.O.R. que la actitud revolucionaria no podía ser otra que la de partir de la lucha real de los explotados, a fin de poder potenciar políticamente: había que unir y generalizar los brotes de resistencia de las masas al gorilismo, las actitudes de defensa de las garantías constitucionales y sindicales y las demandas de aumentos salariales, de respeto a la dignidad de los obreros, etc.

Después de 1974 cambió radicalmente la conducta de la izquierda: abandonó todo su anterior programa terrorista y ultimata y se volvió democratizante a ultranza,

como hemos señalado más arriba. Se perdió en medio de la lucha cotidiana alrededor de modestísimas demandas y concluyó olvidando la gran meta de la conquista del poder, esto si alguna vez sus actos estuvieron referidos a ésta.

Durante todo este período la "izquierda" partió de la certidumbre de que la contradicción fundamental en Bolivia no era otra que la existente entre fascismo y democracia y de que era falso orientarse teniendo como referencia la antinomia fascismo y socialismo. En este caso democracia hay que entenderla ajustadamente como una determinada forma gubernamental del Estado burgués. No puede discutirse que hay enormes diferencias y también contradicciones entre fascismo y democracia, pero están muy lejos de conformar la contradicción fundamental, que, ni duda cabe, sigue siendo la existente ente fascismo y socialismo. Dicho de otra manera: el verdadero aplastamiento del fascismo sólo puede darse con la destrucción del régimen de la propiedad privada. Históricamente el fascismo ha nacido del vientre de la democracia burguesa. Limitarse a reformar al capitalismo importa sentar las bases para la futura aparición del fascismo.

Por todo esto, la lucha por la vigencia de las garantías constitucionales debe servir para movilizar a los explotados hacia la destrucción de la sociedad burguesa, solarmente así se arrancará de raíz al peligro fascista.

4

Enseñanzas de las trágicas jornadas de noviembre de 1979

A las escandalosamente fraudulentas elecciones generales del año 1978, siguieron también las fraudulentas, aunque en menor grado, e igualmente antidemocráticas de 1979, pues tuvieron como punto central la negación de la ciudadanía plena en favor de la mayoría campesina que es analfabeta. Se podía suponer que habiendo el pueblo soberano designado a sus ocasionales representantes para que legisasen a su nombre, estaba ya asegurado el funcionamiento del régimen democrático, que se lo supone sinónimo de estabilidad política, social y jurídica. La realidad obligó a los ingenuos a colocar los pies sobre la tierra cuando apareció evidente el prematuro fracaso de la democracia criolla. El parlamento no resolvió ningún problema nacional o social de alguna importancia y ni siquiera pudo funcionar como un verdadero poder del Estado, capaz de efectivizar las prerrogativas que le acuerdan las leyes. Organismo inocuo, se perdió en medio de minucias y en todo momento tuvo que pedir la venia a los sables para poder seguir sirviendo de escenario a los discursadores de plazuela.

La derecha respondió rápidamente al fracaso del parlamentarismo y bajo el pretexto de poner orden en el caos precipitado por las elecciones generales, consumó, a través del fascismo encarnado en los gorilas, su golpe de Estado de noviembre de 1979. Las dubitaciones e inoperancia del gobierno Guevara (salida parlamentaria y del total agrado del Departamento de Estado de los EE.UU. de N.A., al supuesto empate electoral entre los frentes burgueses llamados UDP y Alianza-MNR) plantearon la

necesidad de un reajuste del equipo estatal; pero, para todos ese reajuste debía seguir los canales democráticos o parlamentarios. Guevara ha contado que insumía gran parte de su tiempo y esfuerzos de "estadista" conversando interminablemente con los generales golpistas, a fin de convencerles acerca de la postergación de su decisión anticonstitucional y de la urgencia de que se sumasen, más bien, a su tan acariciado proyecto de prórroga del mandato que había recibido del Legislativo. En ese momento no había quien, excepto la ilimitada ambición de los golpistas uniformados y de los nacionalistas civiles que se cogieron de sus levitas, buscarse o desease el golpe de Estado y menos que nadie el todopoderoso amo del Norte. Todo esto permitía adelantar el fracaso de la operación castrense consumada bajo el comando del coronel Natusch.

La desgracia del movimiento gorila no fue otra que el haber nacido totalmente aislado, en medio de la hostilidad de todas las clases sociales, de los empresarios y del imperialismo norteamericano y sin contar con el apoyo decidido del ejército. Si bien podía haberse consolidado como una dictadura derechista, como la expresión de la burguesía que no cree en la democracia, aunque utiliza el rótulo para encubrir sus inconfesables fines, estos siempre que las condiciones políticas se hubieran modificado, no tenía posibilidades de afirmarse como fascismo, no estaban dadas las condiciones para que importantes capas de la pequeña-burguesía pudiesen servirle de apoyo político civil.

Los golpistas actuaron dentro del esquema de ganar rápidamente la confianza de la mayoría nacional, que habría actuado como poderosa fuerza de presión sobre el Departamento de Estado de los EE.UU. Esto explica por qué debutaron como "demócratas", dando ilimitadas garantías para el funcionamiento del parlamento, aunque entre sus profundas motivaciones se encontraba la negación de la democracia representativa, de los partidos políticos y de los sindicatos, sin excepción alguna. Al coronel Natusch le habría gustado ser ungido Presidente "de facto" nada menos que por quienes oficiaban de representantes de la voluntad popular. Ya sabemos que el esquema no se cumplió, pero volvió a demostrar la inviabilidad de la democracia y a probar que el fascismo proviene del serio de la democracia. Rápidamente fue confirmado lo que hasta entonces podía ser únicamente producto de especulaciones teóricas: los golpistas y los parlamentarios "constitucionales", juntamente con portavoces de los partidos políticos que decían estar dispuestos a luchar y morir en defensa de la sacrosanta "voluntad popular", emprendieron las difíciles discusiones encaminadas a lograr un acuerdo con elecciones generales y el funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Parlamento "constitucionales" y pese a la manera por demás arbitraria de interpretar las leyes por parte de los demócratas, de que en Bolivia el verdadero monopolizador del poder y de las armas es el ejército.

De una manera instintiva y elemental, las masas ganaron las calles y se enfrentaron con los golpistas, que fueron catalogados como gorilas que no podrían menos que destruir todas las conquistas sindicales y democráticas, dispuestos a imponer el retorno a los mejores tiempos de los generales Barrientos y Bánzer. La aguda tensión de la lucha permitió que se afirmase inconfundible la independencia de clase y la tendencia proletaria hacia la hegemonía sobre toda la nación oprimida, esto no como

una explosión desesperada y excepcional, sino como parte integrante del retorno de las masas hacia su tradicional eje revolucionario, hacia el reencuentro con la línea política interrumpida en 1971, en fin, hacia su tradición, que cuenta mucho en la formación de la clase y en la vida política.

Si el total aislamiento de los golpistas se tradujo en una extrema inestabilidad gubernamental, la presencia militante y desafiante de los explotados se convirtió en la fuerza decisiva que determinó la derrota del régimen Natusch.

Dando las espaldas a la burocracia democratizante, dominada por los afiliados de la UDP, los explotados recurrieron a la acción directa de masas y casi de una manera natural desembocaron en las explosiones huelguísticas. Se podía constatar que los trabajadores se encaminaban a derrocar a los usurpadores, en tanto que la burocracia sindical pugnaba por lograr un acuerdo con los gorilas e inclusive dio pasos para poder conformar el proyectado gobierno tripartito (ejercito, parlamento y COB). Así quedó patentizada la contradicción entre las tendencias genuinamente proletarias, que se encaminaban a destruir el régimen imperante, con sus derivaciones fascistas o pseudo-democráticas pro-burguesas tan empeñadas en reformar al capitalismo en el marco de la democracia formal, inclusive buscando entenderse con los golpistas, es decir, traicionando los ideales democráticos elementales.

La situación imperante, dentro de la cual las masas usando la acción directa jugaron el papel de fuerza decisiva, se tornó excepcionalmente favorable para la victoria casi inmediata de la huelga general. Si realmente se quería derrocar al gorilismo golpista lo único que correspondía era decretar de manera inmediata la huelga general indefinida, lo que habría puesto en manos de la clase obrera la solución del problema político, que equivale a decir que se hubiera abierto la posibilidad de que el proceso de transformación rompiera los estrechos límites capitalistas y democráticos. A pesar de que las masas estaban demostrando con su vigorosa y heroica acción que estaban dispuestas a luchar hasta la victoria de sus aspiraciones más profundas, las direcciones sindicales e izquierdistas persistían en su democratismo, en su empeño de estrangular a los obreros dentro de los canales del reformismo de contenido burgués. Se hizo evidente el afán desmovilizados de los explotados. Los demócratas se apoyaban en lo que hacían las masas sólo para hacer reflotar el esquema democrático, no para ir a derribar al capitalismo. De esta manera quedó planteada la inevitable fricción entre los explotados y sus ocasionales direcciones, cosa que no tardó en aflorar vigorosamente.

En todo momento detensión entre las clases antagónicas de la sociedad salta a primer plano la experiencia acumulada en el pasado, vuelve a formularse la unidad férrea de las fuerzas combatientes. Sin embargo, lo que es anticipo del frente revolucionario antiimperialista (es decir, la nación oprimida moviéndose acaudillada por el proletariado) para la clase obrera, a los sectores democratizantes y proburgueses se les antoja una cobertura capaz de contener el ímpetu revolucionario de los explotados. Cuando la situación política que siguió al golpe de Natusch llegó a su punto crítico, la COB convocó a los partidos políticos del más diverso matiz, lo que era ya muy sospechoso, a conformar un Comité Democrático, rótulo acuñado

a priori y que anticipaba qué contenido político y de clase se le pensaba imprimir. El POR concurreó a esas reuniones porque consideraba que bien podían ser, en alguna forma la reactualización e la experiencia de 1970 y efectivamente fue así. La unidad de las fuerzas populares ganó nuevamente el terreno de la actualidad, se la consideraba la respuesta más adecuada e inclusive como la clave para resolver todos los problemas políticos. Sin embargo, como la política burguesa mantenía engrillada a la izquierda se planteó la tesis de estructurar rápidamente un frente tras la consigna difusa de lucha democrática, sin mayor precisión programática o ideológica. Para la izquierda esta actitud, comprensible en quienes tan tercamente se afanaban por no desprenderse de los partidos y frentes burgueses, importaba el abandono de su anterior fraseología aparentemente radical, de su historia y de sus actitudes provocativas, todo buscando ganar la confianza de la clase dominante; por otro lado, los burgueses democratizantes podían darse por felices: los partidos presuntamente marxistas les aseguraban su preeminencia en medio de los explotados. Lo menos que podían exigir los revolucionarios era la delimitación, a través del establecimiento de normas programáticas, de los participantes en el frente. Partiendo de esta consideración elemental e imprescindible tratándose de un bloque político, el POR propuso que los participantes debían someterse a la Tesis Política de la COB, exigencia que debía resultar normal para los dirigentes sindicales, pero éstos ya habían decidido archivar el programa ideológico de la Central Obrera, por considerar que su aplicación estaba reservada para un futuro indeterminado, cuando sonase el momento de la efectivización de la estrategia, pues en ese entonces sólo podía aplicarse la táctica, la menuda maniobra a gusto de la clase dominante, casi siempre estrechamente electoralista.

Era indiscutible que la situación política era propicia para que pudiese prosperar un frente revolucionario de las tendencias que se reclamaban de las posiciones de izquierda y que realmente estuviesen al servicio de la estrategia del proletariado. Pese a esta realidad, se pretendió estructurar el frente con la finalidad exclusiva de que los burgueses democratizantes pudiesen maniobrar a sus anchas teniendo como punto de apoyo dicho eje, que, además, les permitiría engatusar y arrastrar a los trabajadores detrás de sí. Como quiera que la preocupación fundamental de los burgueses era lograr un entendimiento, precario o no, con los gorilas golpistas, no dieron mayor importancia al famoso Comité, que apenas si fue utilizado como una pantalla para encubrir las posturas destinadas a entenderse con los golpistas. El proyecto de frente se diluyó en la inoperancia como resultado del error inicial de no haberse fijado los límites programáticos de la organización. Únicamente cuando el ensayo naufragó los "izquierdistas" parecieron haberse dado cuenta que un frente sin objetivos claros no puede menos que servir a la burguesía.

La huelga general indefinida fue decretada muy tarde, después que los gorilas tuvieron tiempo para ajustar sus propias filas, no se aprovechó su debilidad inicial, lo que fue sumamente grave en la lucha de clases, como en toda guerra, por otra parte.

La burocracia sindical utilizó dos argumentos para rechazar las proposiciones que desde el campo proletario se hicieron: que algunos sectores podían oponerse a medida tan radical, cosa que siempre ocurre, pero en determinadas condiciones

los sectores radicalizados neutralizan y arrastran a los dubitantes, y que, como quiera que la huelga general supone la guerra civil, sólo podía utilizarse ese gran recurso si previamente se ultimaban los preparativos para la insurrección. El último argumento, que se lo presentó como el más categórico y el de mayor peso, fue usado abusivamente; la huelga general lleva la posibilidad (únicamente la posibilidad, lo que importa que pueda o no materializarse, en la práctica muchas huelgas transcurren y se agotan solamente como tales) de concluir en guerra civil, uno de los momentos de mayor agudización de la lucha de clases. La guerra civil, si se da, será el producto del propio desarrollo de la huelga, de que se efectivice su gran capacidad de movilización no sólo de la clase, sino de la misma nación oprimida, es decir, será la consecuencia de que los explotados maduren para la guerra civil a través de su propia acción y no de que pasen por un itinerario fijado anticipadamente por la mente afiebrada de tal o cual politiquero. Trotsky en "1905" sostiene que la huelga general política es la insurrección, pero esto no significa que lo sea desde el primer momento, pues la misma huelga constituye un proceso en continua transformación, sino de que puede desembocar en la insurrección.

Pese a que la huelga general fue decretada a destiempo, cuando no estaban dadas las condiciones para la estructuración de una poderosa dirección y ni siquiera para poner en pie un comité nacional de huelga, que, conforme enseña la rica experiencia boliviana, no habría tardado en convertirse en órgano de poder de las masas, demostró su gran poderío y prácticamente rechazó la brutal represión y precipitó la caída de los gorilas golpistas.

Cuando las masas estaban decididas a imponer en las calles su voluntad, cuando se hizo evidente que la huelga había convertido al proletariado en caudillo nacional e indiscutido árbitro de la situación política, la burocracia suspendió inconsulta e inoportunamente la huelga general. Su solo mantenimiento habría dado lugar a que la respuesta política se hiciese conforme a la estrategia de la clase obrera, cosa que ninguna manera esperaba ni deseaba la burocracia sindical enfeudada a la clase dominante. De esta manera se evitó que las masas diesen una respuesta plebeya al problema de cómo extirpar de raíz el peligro golpista del fascismo. La torpe retirada de la burocracia cobista permitió que el impase fuese superado a través del entendimiento "constitucional" entre golpistas y parlamentarios ², lo que dio lugar a que persistiese la amenaza del golpe fascista.

5

El ejército y la clase obrera

El gran período de revolución social que se abre con la rebelión de las fuerzas productivas contra las ya estrechas relaciones de producción (propiedad privada burguesa) llega a su punto culminante, se efectiviza, cuando la clase obrera está madura y encuentra las condiciones propicias para consumir el desalojo de la burguesía del poder, que no otra cosa es la insurrección.

2- G. Lora, "Enseñanzas de la Semana Trágica" La Paz, 1979.

Sabemos que la faceta más importante que se cumple entre el momento en que comienza la rebelión de las fuerzas productivas, marcada por las crisis económicas cíclicas, por las guerras y por las revoluciones, y en el que se efectiviza el desplazamiento de una clase por otra del poder, es aquella que se refiere a la transformación del proletariado de clase en sí en clase para sí y a la formación del partido revolucionario, requisitos sine qua non para hacer posible la materialización de la revolución social (cumplimiento de las leyes de la transformación de la sociedad), que constituye promesa de victoria sine die. La construcción del partido concluye resumiendo todos los problemas de la revolución y de la misma humanidad, se convierte, en ese momento, en más importante que la misma economía.

La insurrección se dará cuando el proletariado se convierta en caudillo nacional, cuando las clases medias protagonicen un profundo desplazamiento hacia la izquierda, cuando se efectivice la alianza obrero-campesina, cuando sea evidente el hundimiento de la clase dominante, como estado y como ideología, proceso que permitirá que la clase obrera gane para sus posiciones a los mejores elementos de las otras clases sociales. El resquebrajamiento del aparato estatal se da como la quiebra de sus pilares fundamentales de sustentación, que son basamento del régimen imperante, y entre los que se cuentan al ejército y a la Iglesia; esta última conoce actualmente la quiebra más aguda de toda su existencia, pues se trata de una quiebra de sus mismos fundamentos ideológicos: de guardián celoso de la propiedad privada se va convirtiendo en trinchera de lucha contra ella.

El problema del ejército adquiere, como enseñan los acontecimientos producidos al calor de las luchas sociales, capital significación para la liberación de los explotados y para el triunfo de la revolución por el camino insurreccional, el único expedito, por otra parte. No puede darse la insurrección victoriosa frente a un ejército intacto, que conserve toda su capacidad represiva y de fuego. Esta institución (criatura de la clase dominante, vaciada conforme a los intereses de ésta, que no tiene posibilidades de colocarse al margen de la lucha de clases, cuyo destino está señalado por las vicisitudes que conoce esta última) puede perder y pierde su verticalidad y su disciplina tradicional, destinada a acallar a su ancha base social y a permitir que se exprese políticamente sólo a través de su alto mando, bajo la poderosa presión de ascenso revolucionario. Normalmente las fuerzas armadas responden, en alguna forma, a las ideas de la época y a la opinión pública oficial, que reflejan las ideas de la clase dominante, pero en los momentos de convulsión, cuando se acentúa la tensión entre las clases antagónicas de la sociedad puede derrumbarse la ideología de la institución castrense, como resultado de que en sus filas logran filtrarse las ideas heréticas que enarbolan las masas subvertidas. En ese momento la mayoría del ejército comienza a pensar y a decidir y es cuando la disciplina tradicional llega a su fin; las fuerzas armadas se proyectan hacia la escisión, una parte de ellas puede ser ganada por la revolución, o por lo menos quedar neutralizada, entonces aquellas pierden su capacidad de fuego, ya no funcionan como instrumento represivo. Es este proceso el que puede permitir que los arsenales se abran para el pueblo y éste tenga la posibilidad efectiva de armarse. La rebelión de la mayoría uniformada contra los mandos tradicionales y contra las normas férreas del ejército forma parte del ascenso revolucionario y no es más que la expresión de la poderosa presión que

sobre la institución que concentra la capacidad compulsiva y la violencia estatales ejercitan las masas subvertidas.

Cuando el estado burgués se desmorona quiere decir que la ola revolucionaria está llegando a alturas insospechadas, entonces sería imposible que las fuerzas armadas conserven su tradicional unidad, aunque muchas veces ésta es sólo aparente. La lucha de clases, que en ningún momento deja de influenciar sobre el ejército, cierto que esa influencia puede recorrer los caminos más insospechados y poco visibles, se traduce de las maneras más diversas en la política de las instituciones militares.

Durante el alza del movimiento revolucionario, que a eso llamamos ascenso revolucionario, las ideas revolucionarias prenden en soldados, clases, suboficiales y jóvenes oficiales, y de esta manera se convierten en fuerza material que mina internamente al ejército tradicional, lo convierte en posible aliado de la clase social llamada a transformar estructuralmente a la sociedad burguesa. Este proceso, además de formar parte de la crisis de la clase dominante, abre la perspectiva de la identidad de grandes capas de uniformados con la política de la clase obrera. Es entonces que los soldados se niegan a disparar contra las gentes del pueblo y los fusiles pueden dirigirse contra la alta jerarquía castrense y contra los generales gorilas. En todo momento es la política la que orienta la acción de los fusiles.

La propaganda partidista dirigida al ejército no deja de tener importancia, pero es incapaz de sustituir la poderosa acción de las masas radicalizadas, si este fenómeno no se da, la más inteligente actividad propagandística podrá muy poco. El partido revolucionario puede ayudar a la evolución de las fuerzas armadas propagando el marxismo, la interpretación según el materialismo histórico, de su naturaleza y rol, acumulando y generalizando la propia experiencia militar en la lucha de clases.

Cuando la ancha base social del ejército se politiza, éste se convierte en deliberante y entonces se puede descontar que él o una parte se sumarán a las huestes revolucionarias. Este movimiento de subversión puede comenzar aglutinando el descontento y la inquietud alrededor de problemas típicamente castrenses, que son pequeños con relación al gran problema político del alineamiento de los uniformados detrás de la clase obrera. Es posible que se materialice la última variante cuando es toda la sociedad burguesa.

La historia enseña que para la victoria del asalto al poder, tanto el consumado por la reacción o por la revolución, ha sido indispensable la paralización del ejército como guardián de la estabilidad gubernamental o su incorporación al bando de los rebeldes.

Es falsa la suposición de que el conjunto de oficiales y jefes es orgánicamente reaccionario. Este criterio puede impedir que la acción transformadora del ejército se dirija a una de las capas castrenses más interesantes, la constituida por los jóvenes oficiales.

Los jóvenes oficiales, en cuyas filas se recluta una especie de inteligencia castrense, soportan la poderosa presión de las masas oprimidas a través de los soldados, de

los clases y suboficiales, con quienes conviven cotidianamente, por lo menos hasta el grado de capitanes. Por otro lado, estos jóvenes, aún no integrados a los círculos de privilegiados que se organizan alrededor del presupuesto o de otras granjerías, muestran una enorme sed de aprender, de informarse y de orientarse, esto no sólo por su edad, sino como consecuencia de la gran inquietud que sacude a toda la sociedad que ha comenzado a desmoronarse. La alta jerarquía se esfuerza por eliminar estos peligros y tiene dictadas disposiciones que buscan convertir a los oficiales en un estamento privilegiado y extraño a la ancha base social del ejército. También hay trabajos encaminados a afirmar la ideología militar oficial, buscando así cerrar el paso a las ideas revolucionarias. Los núcleos revolucionarios pueden comprender desde los soldados hasta los jóvenes oficiales. La labor partidista en esta época debe encaminarse a plasmar en realidad este objetivo. Es la clase obrera la que encarna la violencia revolucionaria y ésta sólo es tal cuando es expresión de la actividad de las masas. Ese ejército tradicional, organizado como la máxima expresión de la violencia que precisa la clase dominante para permanecer en el poder, se transformará en portadora de la violencia revolucionaria cuando políticamente se oriente por el sendero señalado por la clase obrera. Demás está decir que la violencia por sí misma no es sinónimo de revolución, muchas veces puede constituirse en uno de los requisitos para la victoria de la contrarrevolución.

Ciertamente que la escisión interna del ejército y el desplazamiento de una parte de él hacia las posiciones del proletariado, lo que se traduce en la pérdida de su tradicional capacidad de represión, son los requisitos imprescindibles para la victoria de la insurrección. De aquí se deduce que es absurda la tesis en sentido de que es preciso antes de tomar el poder constituir un ejército de los explotados tan poderoso o más que el oficial, a fin de poder aplastar a éste en batalla frontal. Las masas vencerán a ese ejército, pese a estar sumariamente armadas y organizadas, porque previamente ha sido ya lo suficientemente minado, lo que le impide utilizar a plenitud todos sus recursos bélicos.

Si recordamos que la insurrección importa que la política revolucionaria se expresa, excepcionalmente, utilizando el lenguaje de las armas, será fácil comprender la enorme importancia que tiene para la clase obrera una clara delimitación de su actitud frente al ejército y de su misma política militar. El proletariado boliviano y su partido tienen al respecto una rica experiencia. Importantes sectores del ejército boliviano no cesan de rebelarse contra el estado de cosas imperante, contra el desorden y la inoperancia del orden burgués, pero lo hacen de una manera por demás contradictoria, apoyando a las tendencias burguesas de izquierda, al llamado nacionalismo revolucionario. Estos sectores encontrarán su verdadero camino al radicalizarse mucho más al influjo del ascenso de las masas. La participación de las fuerzas armadas en la política constituye un hecho inevitable y seguirá acentuándose en el futuro. Nos referimos a la participación de capas siempre más vastas y no al monopolio de la actividad política por parte del alto mando.

Nuestras fuerzas armadas han ingresado a un activo proceso de desintegración; bajo la presión creciente de las masas y de su ideología van perdiendo la confianza en sí mismas y en la infalibilidad de su conducta, se empeñan por coordinar sus actos

con los de la mayoría nacional. Como consecuencia ya se perciben profundas fisuras en la tradicional disciplina. Los jóvenes oficiales cuestionan a diario la conducta de sus superiores y los elementos comprometidos en actos de represión contra las masas son acremente censurados y aislados del resto de la oficialidad. En síntesis: se están creando las condiciones para que el ejército se escisiones y una parte de él se sume al movimiento revolucionario, que tanto importa decir que están madurando las condiciones para la victoria de la política proletaria.

La crisis de la
Central Obrera
Boliviana

Naturaleza de la crisis de la COB

En 1997 se constata una aguda crisis de la Central Obrera Boliviana, acaso la más grave de toda su historia. Al respecto, se ha desencadenado una polémica embrollada, que casi no aclara nada y que tiende a defender determinadas posiciones clasistas.

La opinión dominante -no por dominante menos falsa- sostiene que se trata de la quiebra del movimiento obrero; los más osados llegan al extremo de sostener que las masas se encuentran en reflujó, que han dejado de luchar contra los empresarios y su gobierno. Los que dicen encarnar estos planteamientos no hablan de manera directa de los dirigentes -en ningún momento se refieren a la burocracia como un tumor maligno del sindicalismo- y pareciera que los consideran víctimas del desbande de las masas.

¿Quiénes adoptan esta postura? La clase dominante en su conjunto, el gobierno de turno, los que alimentan las filas de la burocracia sindical: los revisionistas, los reformistas, los democratizantes, los colaboracionistas y también los stalinistas en desbande. Es indiscutible la cooperación que existe entre la burocracia y los que continúan autodenominándose izquierdistas. actitud que no es sorprendente pues todos ellos se emplean a fondo para lograr la preservación del orden social imperante, pese a que éste se debate en medio de la podredumbre y la desintegración.

Acotemos que la burocracia sindical está compuesta por dirigentes que se han emancipado del control directo de sus bases, han conformado pandillas que luchan por sus propios intereses y siguen el sendero accidentado del colaboracionismo clasista. Cuando las direcciones sindicales se han burocratizado dejan de luchar por los intereses obreros, dan las espaldas a la finalidad estratégica del proletariado -la revolución social- y siguen el camino del colaboracionismo clasista. Este proceso lleva a esos dirigentes a desclasarse. Dicho de otra manera, la burocracia sindical concluye cambiando de contenido de clase, lo que quiere decir que sustituye la finalidad estratégica proletaria por la burguesa.

El sindicato comenzó estructurándose como una organización de resistencia a los excesos de parte de los patrones y del Estado; en ese momento su lucha se limitaba a la satisfacción de las necesidades inmediatas. La evolución del capitalismo y la propia experiencia acumulada por los trabajadores gracias a su lucha diaria -factor de importancia primordial para el desarrollo de la conciencia de clase- ha transformado a los sindicatos en canales de movilización de las masas que luchan por su liberación y por forjar una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.

La organización sindical nace y se desarrolla en medio de la lucha de clases; su orientación y hasta su forma organizativa depende de las presiones que soporta en determinado momento de parte de una de las clases extremas de la sociedad, del proletariado o bien de la burguesía. Esa realidad está demostrando que el movimiento obrero se convierte en el escenario del choque de la política revolucionaria del proletariado con la política conservadora de la clase dominante. Las direcciones

laborales expresan esa lucha a su manera, en la medida en que traducen la influencia de la política revolucionaria o bien de la burguesía.

Las masas radicalizadas que traducen la conciencia de clase del proletariado constituyen la más seria amenaza para la supervivencia de la burguesía como clase dominante, desde el momento en que el ascenso revolucionario de los explotados y oprimidos, que se traduce en lucha política, lleva en sus entrañas los gérmenes de la insurrección.

La política conservadora de la clase dominante se difunde y actúa en el seno de las masas por los canales de las capas más atrasadas y de los sindicatos burocratizados. Para la burguesía es altamente importante lograr el control directo de las burocracias sindicales, por eso que se esmera en corromperlas, en prostituir las y en empujarlas a una vida ajena a la que llevan los explotados.

En la historia social boliviana ha sido el Movimiento Nacionalista Revolucionario el mayor corruptor de las direcciones sindicales y ha demostrado mucha picardía en su trabajo encaminado a controlar a las masas a través de la burocracia sindical. Frente a la política revolucionaria del proletariado la del nacionalismo de contenido burgués representa la contrarrevolución. El MNR, en el llano y en el poder, lo más que ha podido hacer es expresar los objetivos de la burguesía nacional ausente en el país y ha fracasado ruidosamente en su empeño de impulsar el desarrollo global e independiente del país, como consecuencia del ingreso de la economía capitalista mundial a su etapa de decadencia. Esta consideración es aplicable a las corrientes nacionalistas del más diverso tipo, a las pronazis -o gorilas- como ADN y a las que pretendieron demagógicamente identificarse con la izquierda y el socialismo, la UDP, por ejemplo. Las burocracias sindicales que caen bajo el control del nacionalismo demuestran en su actividad de que han acentuado su carácter contrarrevolucionario.

El papel nefasto del stalinismo y del colaboracionismo clasista

Resulta incomprensible la historia del movimiento obrero boliviano si se pasa por alto un elemento importante: el stalinismo y el movimientismo son -ideológicamente- primos hermanos. Estas dos corrientes políticas, que no han dejado de actuar en el campo sindical, se nutren tanto de la teoría de la revolución por etapas como del socialismo en un solo país. Aquí se encuentra el basamento de la política colaboracionista entre los gobiernos nacionalistas y las diversas expresiones stalinistas. Hemos visto marchando del brazo a movimientistas tradicionales, a gorilas con careta nacionalista, a silistas proyectándose hacia la izquierda, etc., con stalinos moscovitas, maoistas, albaneses y thermidorianos con posturas puritanas.

Antes de que viniese al mundo el Partido Comunista de Bolivia, el stalinista Partido de la Izquierda Revolucionario marchó del brazo con la feudal-burguesía, con la rosca minera y con el imperialismo "democrático", particularmente con Estados Unidos, la nación opresora de la semicolonias boliviana. Para servir mejor a los opresores

y explotadores no dubitó en masacrar a los mineros potosinos. El PCB siguió esta misma línea.

El PCB de los primeros años declaró -abierta y contundentemente- que el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro era revolucionario, antiimperialista y que todo marxista bien nacido estaba obligado a colaborar con él, sino procedía así y más bien se atrevía a combatirlo, estaba demostrando que era un agente de Estados Unidos. Esta línea política maestra de los stalinistas se la ha venido prolongando hasta hoy, con variantes, con diferentes matices, con oscilaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, según la coyuntura del momento. Hasta hoy no ha sido debidamente interpretado este fenómeno que nos da la clave para comprender el colaboracionismo clasista del stalinismo y el papel nefasto que ha jugado y juega en el campo sindical.

En nuestra época de decadencia del capitalismo mundial, la clase dominante está interesada en controlar de cerca al movimiento sindical, de estatizarlo y de limitar y hasta violentar las garantías que en este terreno contemplan las viejas constituciones. En 1997 observamos que es la OIT -estrangulada por el bloque patrono gubernamental- la que timonea la actividad encaminada en "modernizar las relaciones obrero-patronales" y de adecuar la anunciada nueva Ley General del Trabajo a los logros que se obtengan en este terreno. Se busca crear condiciones favorables para la actividad de las transnacionales a costa del empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del asalariado. Para lograr la materialización de esta política francamente antiobrera se ha desencadenado una campaña sistemática encaminada a despolitizar a los explotados y arrancar de sus cabezas toda idea revolucionaria. No hay que olvidar que tanto el oficialismo como la misma clase dominante persisten en su empeño de que las organizaciones sindicales desconozcan, con precisión y energía, la Tesis de Pulacayo; este propósito tiene la finalidad de desbrozar el camino para que la burguesía concluya imponente su propia ideología a los explotados y oprimidos.

Para materializar esta política reaccionaria, la burguesía y su gobierno de turno, se apoyan en la burocracia sindical stalinista -PCB, PRP, maoistas, salistas- y ni duda cabe que también en los militantes de los partidos burgueses, oficialistas u opositores. El viraje hacia las posiciones burgueses se viene operando en las altas cumbres de la dirigencia cobista. ¿Una traición a sus principios ideológicos y a lo que dijeron e hicieron en el pasado los stalinistas? De ninguna manera. La inconducta de los burócratas no es más que la aplicación a las circunstancias actuales de las teorías de la revolución por etapas y del socialismo en un solo país. Puede ser que la persistencia del estalinismo en la política reaccionaria aparezca ahora en toda su desnudez, esto como consecuencia del descalabro internacional de la burocracia manejada desde el Kremlin.

Lo que está buscando la OIT -propósito apuntalado por el gobierno burgués de turno- es imponer sus planes con la ayuda decidida de la burocracia cobista, vale decir, del stalinismo. Los revisionistas, que no debitaron en el pasado destruir la Tercera Internacional; ahora están empeñados en entregar los sindicatos a la patronal y al gobierno de ésta, política que encaja perfectamente en la línea que

sigue la restauración del capitalismo que tiene lugar en Rusia, después de que ha sido impuesta la Perestroika por parte de los discípulos de Stalin.

Nos encontramos ante la crisis de las direcciones sindicales y no de la COB, organización de las masas

Los propios dirigentes de la Central Obrera Boliviana reconocen que la alta dirección sindical atraviesa por momentos difíciles y que ha perdido convocatoria en las masas, de manera que toda huelga -y hasta las manifestaciones callejeras- convocadas por ella están destinadas al fracaso. La discusión cotidiana entre ellos gira alrededor de saber si a esta altura deben plantearse las grandes demandas y en vinculación con la lucha política contra la burguesía-imperialismo o solamente los pequeños problemas salariales. Por tanto, el método de lucha debe partir y concluir en el diálogo entre el COB y el gobierno, a fin de evitar los grandes enconzonazos huelguísticos y callejeros, destinados al fracaso por la ausencia de grandes contingentes de oprimidos y explotados.

¿La causa de este lamentable estado de cosas? Al responder a la pregunta, ciertamente la más punzante del momento, los burócratas descartan de entrada la suposición de que se debiese a su conducta equívoca, colaboracionista, reaccionaria y hasta cobarde; se sienten satisfechos al descargar toda la responsabilidad sobre las masas, a las que consideran derrotas, dispersas, sin ánimo de luchar y de enfrentarse con el gobierno. De su conducta diaria se desprende que su táctica consistiría en esforzarse por conseguir conquistas modestas por su pequeñez y que están al alcance de la clase dominante y de su gobierno, a fin de que partiendo de esas victorias minúsculas se pudiese alentar a los oprimidos a emprender en el futuro luchas mucho más ambiciosas por sus objetivos.

Los stalinistas se aferran a la viejísima división entre programa mínimo (logro limitado e inmediato de las reivindicaciones inmediatas) y programa máximo o socialista, cuyo logro debe considerarse relegado a un futuro indeterminado. Este retorno a un pasado indefinido no es un equívoco coyuntural o pasajero, sino la consecuencia inevitable de la política colaboracionista y reformista que distingue a la burocracia sindical conservadora.

Para la actual dirección de la Central Obrera Boliviana es algo inconcebible el programa de las reivindicaciones transitorias, que liga en un único proceso la lucha por el logro de las reivindicaciones inmediatas con la marcha hacia la conquista del poder político. La respuesta a las necesidades del momento de las masas es ya la lucha por el poder, no siempre como la efectivización del objetivo estratégico sino como el avance hacia esa finalidad.

El programa de transición -en Bolivia se lo conoce con el nombre de Tesis de Pulacayo, una de las grandes propuestas trotskystas- resulta inconcebible para los burócratas stalinistas porque siguen entrampados en la teoría de la revolución por etapas. Para ellos, en este país atrasadísimo las fuerzas productivas apenas han madurado para hacer posible la revolución burguesa, que únicamente debe enarbolar

las reivindicaciones democráticas. No corresponde plantearse -porque en el mejor de los casos es utópico- la dictadura del proletariado. La lucha debe tener como objetivo final el gobierno de unidad nacional, de las cuatro clases sociales que se enfrentan al imperialismo, bajo la dirección política de la burguesía "progresista". Solamente cuando se agote totalmente este proceso se pueden lanzar las consignas de la revolución socialista y de la dictadura del proletariado. Como en tantos otros países, también en el nuestro esta política ha sido llevada a la práctica -teniendo como medida táctica el frente popular- e invariablemente su resultado ha sido someter a las mayorías a la voluntad y política de los partidos de clase dominante. Como hemos visto, es explicable que la burocracia stalinista se aferre a esta política francamente antiobrera y antinacional, esto porque la burguesía boliviana en su conjunto es sirviente e instrumento del imperialismo, particularmente del norteamericano.

El planteamiento de la dirección cobista en sentido de que el actual y lamentable estado de cosas que viene estrangulando, inmovilizando, a la otrora poderosa Central popular, con inconfundibles rasgos de frente antiimperialista, debe ser totalmente atribuida a la etapa de reacción por la que atraviesan las masas bolivianas, es equivocado, mal intencionado.

Siguiendo los datos que proporcionan hasta los medios de comunicación de la burguesía y que están al alcance de todos, se constata que diversos sectores sociales -unos más que otros,- vienen ganando las calles y protagonizando conflictos sociales, que ciertamente no se generalizan y concluyen agotándose. Es permanente la explosión de pronunciamientos de repudio a la política, a la conducta del gobierno y del empresariado. Las leyes de privatización de las empresas y de los servicios públicos han sido impuestas en lucha contra la resistencia popular, pero ahora sigue siendo repudiadas, etc. En este momento, en vísperas del cambio de equipo humano en la dictadura burguesa, la inquietud social y los conflictos sectoriales, tienden a profundizarse. En resumen, las masas se radicalizan más y más, la situación revolucionaria se proyecta hacia arriba, bajo el impulso de las masas que luchan, proceso que lleva en sus entrañas gérmenes de lucha política, general, contra el gobierno burgués de turno, en fin, insurreccionales.

Lo normal sería que la dirección cobista comience a prepararse para cumplir su papel de dirección de las masas convulsionadas el día de mañana; pero, viene actuando en sentido contrario, se empeña en desarmar a los oprimidos y explotados y en remachar sus ataduras con los gobiernos burgueses y con los organismos internacionales que sirven al imperialismo. En pocas palabras, la burocracia sindical -tanto la stalinista como la oficialista- se sienten derrotadas y son francamente reaccionarias, contrarrevolucionarias.

Lo expresado hasta aquí pone al desnudo la raíz de la crisis descomunal de la dirección de la Central Obrera Boliviana y que se constata diariamente como una total separación y choque entre las orientaciones contrarias que siguen la burocracia y las masas. Los burócratas marchan hacia la derecha, se esfuerzan por someterse más y más al gobierno burgués y al imperialismo, para justificar esta traición a las mayorías del país inventan el cuento de las masas inmersas en el proceso contrarrevolucionario.

Contrariamente, las masas marchan hacia la izquierda, potencian an su radicalización y se proyectan hacia la lucha política -que es lucha de clase contra clase-, antigubernamental. Ya se percibe que los conflictos sectoriales buscan generalizarse, camino que conduce a la lucha política y antigubernamental.

En síntesis, el potenciamiento de la situación revolucionaria actual se trocará en insurrección. Se constata que en este proceso la burocracia es la expresión de la política burguesa en el seno de la COB y de las masas. En el otro polo, las masas radicalizadas expresan la política revolucionaria del proletariado, antiburguesa y antiimperialista. La burocracia es la reacción y el proletariado la revolución. Es oportuno remarcar que Marx señaló que cuando se da la lucha entre burguesía y clase obrera se abre la perspectiva de la dictadura del proletariado. En Bolivia, país particular en la que se refractan las leyes general de la economía mundial en actual decadencia, están dadas las condiciones -gracias a la radicalización de las masas y al alto grado de evolución de la conciencia de clase del proletariado- para se materialice la conclusión de Carlos Marx.

Por lo expresado, no existen condiciones para que la burocracia thermidoriana pueda concluir maniatando a las masas en lucha, para entregarlas a la voluntad de la burguesía y del imperialismo. En oposición a esto, lo que está planteado y cuyo desarrollo ya ha comenzado es la rebelión de los explotados y oprimidos contra la actual dirección cobista, cuyo derrocamiento y entierro por voluntad de las bases están ya decretados.

La burocratización -y hasta la estatización de los sindicatos- tienen en el país una larga historia. La burocratización y la movimientización de los sindicatos ya se afirmaron con nitidez en el primer y tardío congreso de la COB (1954), cuando la Tesis de Pulacayo fue reemplazada por una Declaración de Principios redactada por el equipo oficialista y de la que ya nadie se acuerda. En ese congreso la punta de lanza del oficialismo, Juan Lechin declaró a Víctor Paz Estenssoro, cuya condición de instrumento del imperialismo estaba ya fuera de toda duda, nada menos que "Emancipador Económico de Bolivia". La lucha de los explotados contra esa degeneración vergonzosa de las direcciones sindicales se perfiló más tarde.

La lucha actual contra la extrema degeneración e impopularidad indudable de la burocracia sindical tiene la perspectiva de culminar en una rotunda victoria, esto por la madurez política de los oprimidos. Lo que corresponde es estudiar en qué condiciones se darán esa batalla y esa victoria. Sabiendo la finalidad de la batalla que se aproxima corresponde afinar la táctica que debe emplearse para asegurar el triunfo contra los lacayos de la burguesía y del imperialismo.

Estrategia y táctica

Las corrientes reaccionarias, oficialistas, y francamente pro-burguesas -en nuestro país esto es sinónimo de proimperialismo- están vivamente interesadas en lo que hipócritamente llaman perfeccionamiento de la democracia formal. Quieren hacer creer que esta postura es progresista, olvidando que -según enseñó Lenin- la

democracia más perfecta es una dictadura de clase. Muchas veces hemos señalado que en el país está ausente esa democracia y que virtualmente ha sido reemplazada por la acción directa. Cuando los burócratas stalinistas plantean así la cuestión están confesando veladamente que su finalidad es la de preservar y conservar el orden social burgués. Este sueño ha sido ideado para encubrir el contenido burgués de su política. Igualmente, la formulación reiterada de las reivindicaciones inmediatas -cuyo logro sería el objetivo último de la lucha- lleva en sus entrañas el programa reformista: mantener a la burguesía como dueña de los poderes económico y político, a condición de que mejore su atención a los problemas sociales y humanice la economía de mercado, por ejemplo. Todo esto quiere decir que el contenido de clase de la política de la burocracia stalinista es burgués.

Tiene que abandonarse radicalmente tal planteamiento. El movimiento sindical tiene que partir de otra premisa, la política revolucionaria del proletariado, cuyo objetivo estratégico es la revolución social, es decir, la dictadura del proletariado. La liberación de los explotados y oprimidos se logrará expulsando del poder a la burguesía y sustituyéndola por el proletariado, reemplazando la gran propiedad privada de los medios de producción por la propiedad social. Esta estrategia condiciona la táctica revolucionaria que debe emplearse. Esta estrategia y táctica condicionan la unidad de la política revolucionaria, que supone la inter-relación entre ambos extremos. La preeminencia de la estrategia arranca del hecho de que enraíza en las leyes de la historia. La táctica tiene la finalidad de contribuir a la materialización de la finalidad estratégica.

En último término, solamente se puede comprender -en toda su profundidad- el problema de la crisis de la dirección de la COB si no se pierde de vista su relación con la finalidad estratégica que involucra la política revolucionaria del proletariado.

Las masas en lucha plantean la urgencia de fortalecer la política del proletariado, su finalidad estratégica, cotidianamente la lucha antigubernamental. Este proceso importa el fortalecimiento de las masas, por tanto, del sindicalismo, en fin, de la Central Obrera Boliviana. Su fuerza impulsora se encuentra en la lucha diaria de los oprimidos. Las masas empeñadas en ese combate chocan, en su marcha hacia adelante, con el obstáculo de la burocracia sindical, que encarna la crisis de la dirección sindical. Del análisis de esta realidad se desprende que la tarea del momento consiste en el. potenciamiento de la Central Obrera Boliviana, inconcebible sino se la desburocratiza, sino se reemplaza la política burguesa por la proletaria.

La burguesía y sus sirvientes reformistas y revisionistas, encubren el problema con su planteamiento de modificar la estructura orgánica de la COB, a fin de que se acomode a las transformaciones operadas en la realidad social. La clase dominante busca controlar a la Central Obrera de masas, que hasta hoy ha venido girando alrededor de la política revolucionaria del proletariado, esto contribuyendo a entregarla a la dirección de una clase social que no sea la obrera. En otras palabras, lo que busca concretamente es imponer su política opresora a la Central Obrera Bolivia a través de sectores de la clase media o de los campesinos, que de alguna enraízan en la propiedad privada. Hay que volver a repetir que lo que distingue a la clase obrera y

determinan su particular política son el lugar que ocupa en el proceso de la producción y el no ser propietaria de los medios de producción.

Lo que no deja dormir a la burguesía y a sus gobiernos de turno es la política del proletariado, porque al imponerse en el seno de las masas y de sus sindicatos pone en grave riesgo el destino de la bolsa de los explotadores y su dictadura gubernamental.

Las clase dominante no está equivocada cuando espera que a través de otra clase social que no sea la proletaria concluirá imponiendo a las masas su política explotadora, opresora. Esta maniobra, que cuenta con la complicidad de algunas capas de la burocracia sindical, tiene que ser combatida con energía.

Se tiene que defender de manera intransigente la dirección política proletaria de la Central Obrera Boliviana, lo que concluye determinando las formas organizativas de los sindicatos. No hay que olvidar que hasta el concepto de sindicato ha sido impuesto a los bolivianos por el movimiento obrero mundial; no hay la menor duda de que las particularidades nacionales han impreso sus huellas indelebles sobre el sindicalismo.

Debe desecharse el argumento de que la disminución del volumen numérico de la clase obrera -consecuencia obligada de la crisis capitalista estructural que impera en escala mundial y que determina la paralización de parte del aparato productivo, vale decir, el imperio de la desocupación masiva- impone no tomar en cuenta su política revolucionaria, expresión de la ley de la historia cuando la sociedad parte de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción.

Si se busca la liberación de los oprimidos y que la COB sirva de canal de movilización en la lucha de aquellos, tiene que ser la expresión sindical de la política revolucionaria del proletariado. Es un problema secundario e interno el establecer la inter-relación entre los diferentes sectores sociales.

Se sobremontará la crisis de la dirección -supone la expulsión de la burocracia sirviente de la burguesía, reaccionaria e incapaz- cuando se logre que la Central Obrera Boliviana retorne a la política revolucionaria del proletariado, tanto como finalidad estratégica como táctica. Esto obligará a realizar un ajuste inclusive organizativo, a fin de que la Central Obrera cumpla el papel de auxiliar valiosísimo en la materialización de los objetivos básicos de la política revolucionaria del proletariado. La poderosa organización de masas debe expresar con claridad y precisión esa política que se proyecta hacia la sociedad sin clases sociales, sin explotados ni explotadores.

La lucha revolucionaria obligará a la COB a actuar como la organización de la independencia ideológica y organizativa de los explotados y oprimidos frente a la burguesía y los objetivos de ésta, como el instrumento valioso de la lucha que busca la revolución social y la implantación de la dictadura del proletariado.

Acción directa de masas y el FRA

El proletariado lucha por liberarse, por dejar de ser asalariado. Cuando es clase minoritaria tiene que saber encontrar los medios que le permitan transformarse en dirección de la mayoría nacional oprimida por el imperialismo y lo hace convirtiéndose en dirección de las otras clases y nacionalidades.

Su método de lucha propio es la acción directa de masas, expresión de la violencia revolucionaria. La lucha parlamentaria -que en determinadas condiciones puede ser utilizada por el asalariado- no sirve para aplastar a la burguesía y para sustituirla por un Estado capaz de sentar las bases materiales del comunismo.

La acción directa se expresa a través de maneras múltiples, siendo la huelga general -lleva los gérmenes de la insurrección- una de las más características. Hay que subrayar que la acción directa puede trocarse en las formas múltiples de la lucha armada.

La clase obrera puede, en determinadas circunstancias, verse obligada a recurrir a los métodos de lucha de las otras clases sociales; en este caso los subordinará a la acción directa y a la finalidad estratégica del proletariado.

Si consideramos que las fuerzas motrices de la revolución son el proletariado y el campesinado y que este último es demográficamente muchísimo más numeroso que la clase obrera minoritaria, se tiene que encontrar una táctica que potencie a esta última de manera tal que la convierta en dirección de la nación oprimida por el imperialismo. Solamente en estas condiciones se puede esperar que se imponga la finalidad estratégica de la revolución social y de la dictadura del proletariado.

Para los marx-leninistas de las metrópolis capitalistas avanzadas la táctica adecuada es el frente único proletario, que busca aglutinar al asalariado, a los trabajadores -sobre todo a los que militan en las filas de la socialdemocracia y de otras organizaciones reformistas- en el partido bolchevique.

Esta táctica no puede ser aplicada en los países atrasados, que se caracterizan porque el proletariado es una clase numéricamente minoritaria, esto porque empujaría a la clase obrera al aislamiento con referencia a las masas. La experiencia boliviana es aleccionadora al respecto. En el congreso minero extraordinario de Pulacayo (noviembre de 1946) se lanzó la consigna del frente proletario, pero casi inmediatamente sus autores comprendieron que se trataba de un error y la sustituyeron con la de frente antiimperialista, siendo el FRA -Frente Revolucionario Antiimperialista- su expresión más clara y probada por el desarrollo histórico de la lucha de clases del país.

El frente antiimperialista es una táctica opuesta a la del frente popular o de la unidad nacional bajo la dirección de la burguesía. Se trata de la unidad, de la concentración de la nación oprimida por el imperialismo alrededor de la política y bajo la dirección proletarias. En Bolivia el FRA aglutinó a toda la gama de la llamada izquierda -incluyendo al foquista Ejército de Liberación Nacional- y a las grandes organizaciones

populares, sobre todo a la COB, en el marco de la política del proletariado, en esa oportunidad diseñada por el Partido Obrero Revolucionario.

Solamente en estas condiciones puede esperarse el potenciamiento efectivo de la Central Obrera Boliviana, de manera que pueda contribuir decisivamente a la materialización de la revolución social y de la dictadura del proletariado.

No hay que olvidar que la Central Obrera Boliviana de la primera época -cuando efectivamente aglutinó a la mayoría nacional- era una expresión acaba del frente antiimperialista, que efectivizó y desarrolló la dualidad de poderes.

Si queremos salvar a la COB tenemos que comenzar librando una gran batalla ideológica, dirigida a orientar y a aglutinar a las masas, al mismo tiempo que a aplastar a la burocracia corrupta y agonizante. Será a partir de la política revolucionaria que podrá estructurarse una dirección cobista que le corresponde, compuesta de elementos revolucionarios probados, honestísimos y valientes.

¿Cuándo y en qué condiciones se podrá aplastar a la actual burocracia sindical corrupta y reemplazarla por una dirección revolucionaria? Las pandillas de burócratas, que han dejado de representar los intereses y voluntad de las bases, para luchar por sus objetivos mezquinos y hasta personales, se han dado modos para montar pandillas de sus secuaces en los sindicatos de base. Por esta razón los congresos y ampliados no interpretan el pensamiento de los trabajadores ni reflejan con fidelidad su estado de ánimo. Es claro que en esas reuniones amañadas, inclusive prostituidas con ayuda del cohecho, del compadrerío y de la falsificación, solamente puede darse el apoyo incondicional a los burócratas, a los oficialistas y a los reaccionarios. Será muy difícil, casi imposible, que en los congresos o ampliados pueda ser reemplazada la burocracia sindical por direcciones revolucionarias.

Tienen que ser las masas las que en sus movilizaciones puedan desbaratar y aplastar a los carillas burocratizadas. Será en el combate y emergiendo desde las entrañas de las masas, cuando los revolucionarios probados puedan ocupar las direcciones de los sindicatos.

Para lograr esto tiene que comenzarse desde ahora a organizar, politizar y movilizar a las masas. Esta tarea tiene que ser cumplida por los militantes revolucionarios, por los poristas. Es fácil comprender que esta descomunal tarea queda en sus manos.

Ni duda cabe que el partido de la clase obrera, que es expresión de la conciencia de clase y cuyo programa encarna la finalidad estratégica y la táctica del proletariado, está llamado a cumplir un papel de primerísima importancia en esta lucha por salvar a la Central Obrera Boliviana, al sindicalismo, del descalabro, por desburocratizarla y poner en pie una dirección que esté al altura de la política del proletariado.

Agosto de 1979

G.Lora

Comentarios

René Lopez Murillo (periodista)

"Historia del Movimiento Obrero" (primer tomo) de Guillermo Lora. Editorial "Los Amigos del Libro".

Al terminar la lectura y al cerrar el libro el lector quedará pensando si no será mejor que Guillermo Lora se retire de la política para dedicarse a la investigación histórica, pero es innegable que el dirigente político no podría vivir apartado de las dos cosas.

En el prólogo, Lora nos explica las dificultades que tuvo que vencer para dar forma a su libro: "Ninguno de mis anteriores escritos me ha exigido tanto esfuerzo como éste. Me he visto obligado a acumular cientos de kilos de folletos, periódicos y archivos". Así se escribe la historia, investigando y no recogiendo anécdotas y cosas oídas de terceros que no tienen mayor validez que la memoria de los cuentistas.

Los sometidos a la influencia de los convencionalismos y prejuicios tradicionales no verán con buenos ojos el libro de Lora y tampoco lo entenderán.. Generalmente, y a veces con sobrada razón, a los marxistas se los presenta como producidos en serie, con anteojeras, y como incapaces de salir del ABC de los cánones impuestos por su doctrina, pero ese criterio sólo es aplicable a los recién iniciados, a los que empiezan a hojear las primeras obras de Marx y Engels y no así a los que han dedicado media existencia a estudiar estos problemas...

"Historia del movimiento obrero boliviano" se diferencia de todas las publicaciones hasta ahora sobre el mismo tema, por el método empleado y por su abundante bibliografía.

La obra completa comprenderá tres libros (hoy abarca siete volúmenes, N. de R.). Este primer tomo es suave y no levantará polvareda entre aquellos que se creen propietarios del movimiento obrero (particularmente aquellos que suelen decir "mi pueblo, mis bases, mi Bolivia, mis indios". Digo "suave" porque solamente abarca hasta el año 1900. En otras palabras, Lora pudo haber añadido a su prólogo: "Todos los actores de esta obra están muertos, tiesos, enterrados. Los sucesores no podrán desmentirme porque también heredaron las taras de su antepasados".

En la primera parte del libro, Lora nos muestra el escenario donde actúa y actuará el movimiento obrero. El retrato es conocido y no merece mayor comentario. De paso conocemos el pensamiento del jefe del Partido Obrero Revolucionario (POR) sobre algunos problemas del país. Escuchémoslo: "Dentro de la actual relación de fuerzas en América Latina y de la naturaleza clasista de sus gobiernos, la solución de la mediterraneidad boliviana es imposible y si ocasionalmente se la agita es con fines mezquinos. No hay más camino que los Estados Unidos Socialistas de América Latina para librar a Bolivia de su condena al enclaustramiento en medio de las montañas, enclaustramiento que contribuye a acentuar su atraso". Por coincidencia, los socialistas y comunistas chilenos piensan igual. ¿Cómo entender esto? Sencillo. Si Bolivia quiere mar debe luchar por la implantación del socialismo en el continente. Si no... No hay caso. ¿Qué les parece?

Algunas de sus afirmaciones son desafortunadas y representan lagunas en su espíritu investigador. Refiriéndose a la República dice: "Su creación en 1825 como República 'soberana e independiente' (no tenía por qué poner comillas) fue consecuencia de la coyuntura creada por la realidad entre las zonas geográficas que formaban parte de los virreinos coloniales de Lima y Buenos Aires y, en cierta medida, contribuyó a neutralizarlas". Los autores de la proclama de la Junta de Gobierno de 1809 y los guerrilleros de la independencia deben estar revolcándose de rabia en sus sepulcros por semejante afirmación.

La segunda parte del libro analiza el trasfondo de la política del siglo XIX, la formación de la clase dominante, la miseria de "la época heroica", el comercio internacional y a los políticos de ese tiempo. Es la mejor parte de la obra. En cada página existe más de un sorpresa.

En este primer libro hay mucho de la historia del periodismo boliviano, de su literatura, su comercio y su minería. Tratándose de esta última no podía faltar la familia Aramayo que comparada con otras es digna de admiración. En cambio Aniceto Arce tiene otra dimensión y si algo debemos admirar en él es que como hombre defendió lo que creía que estaba bien contra el sentir de la mayoría de sus compatriotas. Los chilenos deberían dedicarle tantas estatuas como las que levantaron a Baquedano, Lynch, Prat, Santa María y Balmaceda.

La última parte está dedicada al movimiento obrero en el Siglo XIX. Muchos de sus temas se prestan para concursos de conocimientos. ¿Cuándo se empleó por primera vez en Bolivia la palabra comunismo? ¿Por qué se puede sostener que Belzu no pudo haber conocido las obras de Marx? ¿Quién fue el primero en hablar de socialismo en Bolivia? ¿Cuáles fueron los primeros gremios y qué características tuvieron sus reglamentos? ¿Qué papel jugaron las Escuelas de Artes y Oficios en los primeros años de la República?

En síntesis: un libro que constituirá texto de consulta de historiadores, sociólogos y de todo aquel que quiera saber algo más del pasado del país.

(Tomado de "Clarín Internacional", La Paz, febrero de 1968. Revista dirigida por Sergio Almaraz).

Otro comentario de René Lopez Murillo

"Historia del movimiento obrero boliviano", tercer tomo

En realidad la Historia está constituida por muchos aspectos y es difícil tener una visión de conjunto si no se incursiona en ellos, de otra manera lo que se escribe es una relación sectorial. Quizá por ello la mayoría de los narradores de los hechos del pasado prefieren concentrar sus energías en desarrollar un aspecto y no todos, salvándose de esta manera del peligro de caer en lo anecdótico y en el detalle intrascendente.

La "Historia del movimiento obrero" de Guillermo Lora, desde la publicación de su primer tomo, tiene la virtud de mostrarnos la cara desconocida de nuestro pasado; los obreros como sujetos de la historia. Aquí los personajes centrales ya no son

los entorchados ni los hombres de levita, sino determinados dirigentes gremiales que luchan en las ciudades, en las minas y en el campo para que las masas tomen conciencia de su existir y de su poder.

Es una batalla dura, llena de suspicacias, de dudas e incomprendiones, donde algunos mueren olvidados por sus propios beneficiarios. Otros, de ultra izquierdistas van pasando al papel de frustrados, convirtiéndose en renegados y traidores de sus ideas iniciales, para terminar como tráfugas e incondicionales de los gobiernos de turno.

Cuando expreso que los uniformados y los hombres de levita no son los actores principales del libro no debe entenderse que Lora los hace desaparecer de un borrón, sería imposible hacerlo teniendo en cuenta que el decenio 1923-1939 se caracteriza también por masacres, cuartelazos y represiones; luego, los entorchados y los levados van del brazo, mancomunados en sus ideales para defender sus comunes intereses, que son contrarios al de los trabajadores.

Muchos de los personajes del libro pasean por las calles. Es bueno tener una idea de cómo eran cuando tenían 18 o 21 años. Algunos hasta fueron "condenados a muerte" por mantener sus ideas pacifistas frente a la orden que exigía "pisar fuerte en el Chaco". En cambio hubo otros que pese a su posición revolucionaria prefirieron tomar el fusil y defender a su país de la agresión extranjera. ¿Quiénes tuvieron razón? Algunos quedaron para siempre en los matorrales del Sudeste. Los pacifistas están vivos y bien "vivos".

Pero esto no es lo principal en la "Historia del movimiento obrero boliviano". Es simplemente un detalle ínfimo. En esta obra el lector podrá seguir paso a paso los congresos organizados en todo el país, la influencia del marxismo, las ponencias y los primeros contactos de tipo internacional.

Además constatará que el mote de comunista con que se pretende frenar las demandas salariales y desprestigiar a los líderes obreros no es un recurso reciente sino que viene desde tiempo atrás, especialmente del lapso 1923-1933 en que estuvo en su apogeo.

El período analizado es tal vez el más rico en circunstancias que gestan la mayor parte de los partidos políticos de actual vigencia en Bolivia. Es curioso comprobar que un ciclo de tiempo encierra una serie de acontecimientos que se repiten periódicamente, como si la actividad humana se redujera a un devenir constante, a un círculo que vuelve siempre al punto inicial. Los sucesos de ayer, con algunas variantes, parecen repetirse y ser los de hoy. El escenario sufre ligeras variaciones y es más o menos el mismo, lo único que cambia es el actor, pese a llevar consigo las contradicciones que hereda. Así podemos ver socialistas que provienen de una matriz rosquera y comunistas que se enmascaran como nacionalistas de izquierda.

A propósito del fin del celibato, no son los sacerdotes los primeros en preocuparse de este problema, pues ya en un congreso obrero de 1927 se pidió que se suprimiera el privilegio de la pernada que los curas habían heredado del medioevo y de todas las fiestas religiosas. En el libro figuran algunos sacerdotes notables que dejan la sotana después de que protegidos por ella se dieron de revolucionarios.

Las luchas sociales vistas desde el ángulo gremial son apasionantes. El obrero y el dirigente sindical se muestran como individuos que saben lo que quieren, y que velan, sobre todas las cosas, por los intereses de sus mandantes y muchas veces sin prever que con sus actos están contribuyendo a cambiar las estructuras del país.

Cuando se promulga una ley o se dicta un decreto existe toda una montaña de facetas desconocidas que hicieron posible su materialización, y que sin embargo se ocultan con maestría para favorecer a un proponente circunstancial. Todo esto, y mucho más, se descubre en el libro.

Es triste enterarse de algunos episodios, como el de aquel viejo luchador, cansado, hambriento, vencido y próximo a quedar ciego, se apersona ante el "líder obrero" don Juan Lechin para pedirle apoyo, pero el semi-dios de la revolución de abril le niega su concurso.

También desconcierta la trayectoria de algunos que pasan de anarquistas a piristas y que no se ruborizan al convertirse en movimientistas. En medio de todo este revoltijo, conmueve y levanta el ánimo la vida de Cesáreo Capriles López, una de las más brillantes y dramáticas de esta historia.

En síntesis, una obra que solamente Lora pudo escribirla, tanto por su condición de político consecuente como por los documentos que lo respaldan. Un gran servicio al país y al despertar obrero.

(Tomado de "Masas", 9/V/1971).

Comentario de Joaquin Rojas G.

La avanzada política de un país son los trabajadores, ellos constituyen la clase social más combativa y la base de sustentación de todo el ordenamiento social. Son ellos los que crean la riqueza nacional y los que vanguardizan la lucha de los pueblos.

En Bolivia era de suma necesidad tener una historia de nuestro proletariado, de los hombres y mujeres que con sudor y sangre forjaron nuestra bolivianidad, en realidad nuestra personalidad como nación.

Guillermo Lora, militante revolucionario e historiador, que la mayor parte de su existencia estuvo ligada al movimiento obrero, en particular al sector de los trabajadores mineros, llenó el vacío que era sentido por los bolivianos que deseaban conocer en qué medida los trabajadores contribuyeron a forjar la historia patria, escribiendo "HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO", Ed. Los Amigos del Libro, tres tomos hasta la fecha.

En las siguientes líneas nos ocuparemos del tercer tomo, el cual comprende los años de 1923 a 1933.

A través de hechos históricos, muy bien documentados y, con su profundo conocimiento sobre el tema, Lora nos hace ver que las páginas más brillantes de la historia boliviana las ha escrito su heroico pueblo obrero. "Junto a una burguesía caduca y envilecida y al campesinado que soporta una tradición milenaria, se ha estructurado un proletariado joven, vigoroso y de gran energía combativa, que se apodera de lo más avanzado de la doctrina revolucionaria. Esta es una de las razones, entre otras muchas, por las que la clase obrera del país más atrasado se ha colocado a la vanguardia revolucionaria de Latinoamérica" (G.L.).

La "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" tiene valor, y podríamos decir el principal, en su enfoque nuevo de la historia boliviana, lo que nos permite, en muchos casos, clarificar nuestros conceptos sobre lo que fue y será Bolivia, y por ende nuestra América morena.

En la primera parte del tercer tomo, Lora nos presenta una bien documentada historia de los primeros congresos obreros, comprendidos entre los años 1921 (Primer Congreso de Oruro) y 1930 (Cuarto Congreso de Oruro).

En el capítulo segundo, Guillermo Lora hace una historiación del anarquismo en Bolivia. Muestra los primeros pasos (1926) de los anarquistas para la formación de la Federación Obrera Local de La Paz, buscando así oponerse a la FOT. Lora señala que "ni duda cabe que la FOL pretendió ser una central nacional. Sin embargo, el anarquismo sólo logró controlar completamente dos organizaciones de masas: la FOL paceña y la FOT de Oruro, en los demás distritos se manifestaban en el seno de las diversas federaciones".

Luego de señalar las diversas actuaciones del anarquismo en el movimiento sindical boliviano, Lora pasa a presentar reseñas de algunos anarquistas de ese tiempo (R. P. Tomás Chávez Lobatón y Luciano Vértiz Blanco).

En la segunda parte de la obra vemos la influencia que tuvo el socialismo en los obreros bolivianos.

"La convulsión social creada por la primera guerra mundial dio aliento a los intentos de organizar el partido político de la clase obrera. La necesidad era propia de la evolución político-social boliviana, pero su manifestación consciente se apoyaba y se nutría en la influencia ideológica y experiencia internacionales. Los obreros de otros países vecinos, principalmente de Chile y la Argentina, se habían organizado políticamente en los partidos socialistas obreros, bajo la bandera de la Segunda Internacional. En Bolivia este período es por demás breve y casi no deja huellas en la historia. Los intentos son varios, pero todos fracturados en el tiempo y en el espacio. Retrospectivamente se observa que el Partido Socialista, muchas veces llamado Partido Socialista Obrero o, también, Partido Laborista, es un crisol donde se desarrolla la pugna entre el socialismo pequeño-burgués de proyecciones nacionalistas y las tendencias proletarias afines al comunismo. La lucha destruye al Partido y da nacimiento a pequeños grupos que inútilmente pugnan por estructurarse. En esos primeros ensayos se encuentran militantes que más tarde serán líderes de partidos y de las tendencias más opuestas" (G. L.).

En el capítulo tercero se lee la "revolución" de Villazón, la agitación anti-gubernamental y la movilización contra la guerra.

En lo referente a la oposición de los trabajadores a la guerra contra el Paraguay, Guillermo Lora anota lo siguiente: "El internacionalismo proletario no conduce a servir al gobierno enemigo, sino a que fraternicen los soldados de ambos frentes, con la finalidad de transformar, también en ambos frentes, la guerra internacional en civil. El revolucionario, cuando llega su turno, viste la jerga de soldado y continúa realizando propaganda en favor de sus ideas, lo que significa poner en peligro su propio pellejo. Algunos llevaron su celo político hasta la temeridad y concluyeron ante el pelotón de fusilamiento. El ejemplo de Raúl Bejar ha ingresado a la leyenda. El derrotismo y el exilio sirvieron, por desgracia con mucha frecuencia, de refugio a la cobardía y

hasta a la delincuencia. De esta manera las corrientes marxistas se vieron enturbiadas”.

El capítulo cuarto está dedicado a Gustavo A. Navarro o, lo que es lo mismo, a Tristán Marof.

Lora muestra la importancia que tuvo Marof dentro del movimiento obrero boliviano, ya que “de una manera natural todos (antes y después de la guerra) reconocían en Marof al jefe por derecho propio. Entre los que pensaban así se encontraban las gentes simples de la calle y sin partido, para deseosas de un cambio social profundo, los que se habían definido como stalinistas o antiburócratas y hasta los mismos anarquistas. A lo largo de nuestra historia seguramente nadie como Marof llegó a convertirse en el depositario de las ilusiones, de las tendencias y de las clases sociales más diversas. Y tampoco nadie como él llegó a desengañar de manera tan brutal a todo un pueblo”.

Guillermo Lora tiene palabras duras para Gustavo A. Navarro, lo califica de “panfletista”, con una vida “agitada y discutida que resume todo un período de luchas sociales y que por momentos llegó a ser guía fulgurante del sentimiento socialista del país”, pero que “concluye de un modo inesperado y vergonzoso: postrado ante la rosca y sirviendo de secretario privado de Hertzog y Urriolagoitia, ambos empeñados enemigos del movimiento obrero”.

La tercera parte de la “Historia del Movimiento Obrero Boliviano” contiene las diversas conquistas que obtuvieron, en el campo legal, los trabajadores, señalando como la principal la jornada de trabajo de ocho horas.

El libro termina con un apéndice sobre el periodismo obrero en el siglo XIX.

Todo lo anteriormente expuesto y que es un pálido reflejo de lo que contiene la obra, muestra la importancia que tiene este libro para todos los bolivianos interesados en su historia. (Tomado de “Informativo Literario Amigo”

Nº 2, 1970).

Algo sobre un historiador boliviano

Continuando con las entrevistas a los escritores nacionales, hecho que comenzamos en nuestro número anterior, con un cuestionario a la escritora Yolanda Bedregal, presentamos en este espacio una charla de AMIGOL con Guillermo Lora.

Guillermo Lora nació en la localidad minera de Uncía... El hecho de que Lora vio el drama minero desde su infancia hizo que más tarde se identificara plenamente con las aspiraciones del proletariado nacional.

Estudió derecho en las universidades de La Paz y Cochabamba. En 1947 fue elegido diputado por la Provincia Gustillo del Departamento de Potosí. Desde 1953 es el principal dirigente del Partido Obrero Revolucionario.

Al comenzar nuestra entrevista a Guillermo Lora, reunión que muy gentilmente nos dispensó, quisimos conocer cuál fue su primer escrito. No le fue fácil contestar

esta pregunta, la memoria, que no siempre responde como quisiéramos, comenzó a trabajar, para luego indicarnos que fue un escrito sobre la teoría determinista de Jaime Mendoza contenida en algunas de sus creaciones. A partir de esta su primera creación, Lora ha continuado escribiendo, teniendo hasta la fecha gran cantidad de folletos y libros salidos de su pluma, entre los cuales podemos indicar: "Sindicatos y Revolución", "José Aguirre Gainsborg" (ensayo biográfico), "Lo esencial del marxismo", "La Revolución Boliviana (análisis crítico)", "La Frustración de Mendoza", "El caso Pasternak" e "Historia del Movimiento Obrero".

"En realidad no soy literato sino político", nos remarcó nuestro entrevistado, por esta razón sus escritos versan sobre la política o el movimiento sindical.

La obra que mayor satisfacción personal le dio fue la ya famosa "Tesis de Pulacayo" (8 de noviembre de 1946. Este fue uno de los documentos que marcó época en el sindicalismo boliviano y ha sido una de las banderas de lucha, por mucho tiempo, de los mineros del país.

Aunque la "Tesis de Pulacayo" es para Lora la obra más querida, la "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" (publicada por la Editorial Amigos del Libro), de tres tomos hasta la fecha, la considera como la más completa y en la que realizó mayor investigación. Al leer la "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" estamos viendo al país a través de la clase obrera, nos manifestó.

Como escritor, quisimos saber, qué pensaba de los autores bolivianos, a lo que nos dijo que "desgraciadamente desde 1952, año que se quiebra la cultura rosquera, no han aparecido valores que estén a la altura de los tremendos problemas bolivianos. El escritor boliviano --continuó-- intenta reflejar las inquietudes del país, lo que no supone sea buen escritor".

En la actualidad se habla mucho sobre la libertad de expresión, especialmente los periodistas son muy celosos al respecto, y en este sentido, Lora considera que en Bolivia hay una relativa libertad de expresión, pero que, otra cosa es que uno pueda hacer conocer lo que escribe, obstaculizado por una serie de obstáculos materiales, consecuencia del orden social imperante, lo que limita la libertad de expresión.

El autor de la "Tesis de Pulacayo" está sorprendido por la cantidad de libros que se editan en Bolivia y que hubiese gente de empresa que financie estas ediciones, tomando en cuenta las limitaciones del mercado interno y la imposibilidad de la exportación, esto por los altos costos de los libros bolivianos. Lora nos remarcó que habrá que encontrar alguna forma para que nuestros libros ganen los mercados del exterior, para que de esta manera los escritores nacionales se beneficien del éxito de los escritores latinoamericanos.

Guillermo Lora tiene el proyecto de escribir un enjuiciamiento sobre la historia de Bolivia desde el punto de vista marxista, para el efecto tiene acumulado una gran cantidad de documentos, no sin razón posee una biblioteca de unos diez mil volúmenes.

La entrevista no fue muy larga, pero en estas cuantas líneas mostramos algunos puntos de vista del historiador boliviano Guillermo Lora.

(Tomado del número 2 de "Informativo Literario AMIGOL, La Paz, 1970

Comentario de José Fellman Velarde

Guillermo Lora, el jefe del Partido Obrero Revolucionario, empezó una monumental "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" que va por su cuarto volumen.

Está lúcidamente ordenada y es riquísima en datos antes desconocidos o ignorados, además de estar llanamente escrita...

La oratoria (de la época contemporánea), encarrilada ya en el tipo expositivo gracias a la madurez alcanzada por las audiencias, tuvo cuatro buenas expresiones en Ñuflo Chávez Ortiz, Guillermo Lora, Renán Castrillo y Ernesto Ayala Mercado.

(Tomado de "Historia de la cultura boliviana. Fundamentos socio-políticos", La Paz, 1976).

Comentario de Luis Raul Durán

Veinte nombres en la bibliografía boliviana

Guillermo Lora

Guillermo Lora parece ser el único escritor político o político escritor, pues a él corresponden las mayores contribuciones historiográficas sobre los partidos políticos de Bolivia y el movimiento obrero boliviano.

De otro lado es un crítico literario zahorí. "Ausencia de la gran novela minera en la literatura boliviana" y una minibiografía del pintor Miguel Alandia Pantoja, por ejemplo, resultaron atracción en las ferias de libros y autores, cumplidas en esta ciudad y algunas del interior de la república.

(Tomado de "Ultima Hora" de La Paz, 28 de diciembre de 1979).

Comentario de Inés Diaz

(trotskysta argentina)

"Movimiento obrero contemporáneo (1952-1959)

Este libro editado por "Ediciones Masas" viene a ser el quinto y último tomo de una obra sobre la historia del movimiento obrero boliviano y fue publicado luego de los tres primeros volúmenes editados por "Ediciones Amigos del Libro". (Recientemente esta editorial lanzó el cuarto tomo).

El libro que acá comentamos analiza casi treinta años de actividad de la clase

obrero boliviana (1952-79), en un rico período que incluye a la revolución de 1952, la importante experiencia nacionalista burguesa, su superación y la creación de la Asamblea Popular, primer soviét de América Latina. Pero el autor no sigue una simple evolución cronológica de los acontecimientos, sino que divide el libro en cinco partes donde analiza los conceptos políticos fundamentales que se desprenden de la revolución de 1952, la historia de la Federación de Mineros después de este año, de los trabajadores fabriles, de otras organizaciones sindicales y de la Central Obrera Boliviana. Debe destacarse que en cada una de ellas se evidencia la preocupación por ofrecer una abundante y detallada información de modo que se hace posible el mayor rigor científico en el análisis.

Pero G. Lora no es simplemente un historiador. Como fundador (dato inexacto, N. de R.) y dirigente del POR, partido de larga tradición de lucha en el seno del movimiento obrero boliviano, su objetivo principal es el de analizar la experiencia del proletariado en función de la comprensión del camino que el partido trotskysta debe seguir para convertirse en el dirigente de la revolución boliviana.

El autor marca como punto de partida del proceso revolucionario del 52 la aprobación en 1946 de las tesis de Pulacayo, momento en que la clase estructura su independencia política materializada en un programa propio (pues señala toda una estrategia), al plantearse como tarea la lucha por un gobierno obrero. La justeza y vigencia de sus consignas serán luego confirmadas por la propia realidad cuando la irrupción revolucionaria de las masas en abril de 1952 coloca a la orden del día la necesidad y la posibilidad de efectivizarlas. El partido de la pequeña burguesía, llevado al poder por una revolución que se realizó a pesar suyo, se verá obligado a tomarlas por exigencias de las masas y a partir de ahí buscará deformarlas para dar lugar a la reestructuración del Estado burgués contribuyendo a la desmoralización y posterior reflujo de la clase obrera. De esta forma estrangulará la movilización revolucionaria y armará un reacondicionamiento de las relaciones con la potencia opresora. Nacionalizará las minas pasando por alto la necesidad de complementar esta medida con la nacionalización del resto de la economía; frente a la imposición del control obrero, reemplazará la clase por un puñado de burócratas, convertirá a las milicias obreras y campesinas en apéndices del nacionalismo, pasando después a su destrucción total y a la reestructuración del ejército profesional.

Sólo después de un largo período en el cual las masas van procesando su experiencia y van agotando sus ilusiones en la dirección pequeñoburguesa es que, según el autor, se producirá el cuarto congreso de la COB de 1970, "un reencuentro con la línea señalada en Pulacayo, momento en el que los explotados abandonan francamente al nacionalismo y van en pos de su propia finalidad estratégica y de su propio gobierno" (pag. 502). En dicho congreso el lechismo será colocado en el banquillo de los acusados y la idea central de las Tesis, que es la constitución del gobierno de la clase obrera, es lo que luego permitirá la constitución de la Asamblea Popular. Es también en base a este documento que más tarde será posible estructurar el Frente Revolucionario Antiimperialista ante el golpe contrarrevolucionario de Bánzer (pag. 527).

La revolución boliviana

El autor señala varias etapas de la revolución boliviana que permiten ir viendo la evolución política que se opera en las masas como así también los flujos y reflujos que se manifiestan en el movimiento.

Un primer momento estaría caracterizado por el ascenso de las masas que culmina

con la victoria de abril de 1952. La COB emerge con características soviéticas y la clase obrera es dueña de la situación imponiendo sus consignas al gobierno de Paz Estenssoro. Existe una dualidad de poderes en la que el oficialismo se ve obligado a satisfacer las exigencias obreras.

A partir de octubre de ese año se entraría en una segunda etapa en la que el ascenso obrero comienza, producto de las maniobras nacionalistas y un cierto cansancio de las masas. Este período dura varios años y en él se produce la burocratización de la COB, se destruyen las milicias, mientras que el POR sufre una crisis al ser escisionado por un sector de intelectuales que se pasa al MNR.

Con el viraje derechista bajo el gobierno de Siles Zuazo (1956) las masas comienzan su lento proceso de radicalización en la lucha contra el plan económico y la persecución sindical. A la marcha firme de los mineros hacia la superación del nacionalismo, el gobierno sólo puede oponer la represión más feroz como fue la masacre de Sora Sora bajo el último gobierno de Paz Estenssoro y la de Huanuni ya bajo el gobierno del derechista Siles Zuazo. Los obreros, en contra de su dirección, comprenden el carácter gorila del golpe del general Barrientos lo que hace acelerar el proceso de diferenciación del nacionalismo.

En agosto de 1971 se frustran los planes fascistas con una maniobra de retroceso que permite preservar físicamente a la clase. En 1976 los mineros realizan autoritariamente el Congreso de Corocoro donde se decreta huelga general reivindicando un aumento salarial. La huelga fracasa porque no logra estructurar una dirección capaz de llevarla a la victoria, a lo que se suma el trabajo del stalinismo en favor de su fracaso.

Con esa derrota se inicia un corto período de retroceso que acaba a fines de 1977 con la huelga de hambre de cuatro mujeres minera que, al empalmar con la tendencia a una nueva arremetida obrera, consigue extender el movimiento que exige amnistía general, la vigencia sindical y la lucha contra la miseria. El gobierno se ve obligado a recular concediendo la amnistía general y esto transforma la situación política del país, abriéndose un período de democratización con las elecciones fraudulentas de 1978 y las del año siguiente.

Hoy podemos verificar que pese al golpe gorila la reacción no consigue estabilizarse, razón por la cual este período aún no se ha cerrado.

Las enseñanzas de la revolución

¿Cómo explicar el que una revolución como la protagonizada por las masas bolivianas en abril de 1952, que ya habían adoptado un programa de características revolucionarias, que acaban con uno de los pilares del Estado burgués, que crean las milicias y luego dan lugar a la existencia de un doble poder entre el gobierno central y la COB, sea entregada por las propias masas trabajadoras al partido de la pequeña burguesía?

Para entender este punto, el autor destaca el fracaso del stalinismo en su empeño de convertirse en partido de masas producto de la rápida disgregación del PC clandestino de los años 20 y su traición por el sometimiento a la política de coexistencia pacífica liderada desde el Kremlin y que en Bolivia se materializó en el pacto político con la rosca y el apoyo al imperialismo norteamericano. Esto sumado a la debilidad del partido revolucionario y la insignificante conciencia de clase de los trabajadores, hace que estos sean atraídos por la importante actividad desarrollada por los activistas sindicales ligados al MNR y que su búsqueda de una nueva dirección sea canalizada

por el nacionalismo.

Lora sostiene que la lucha librada en Bolivia contra el gobierno movimientista fue una importante herramienta para la estructuración del partido obrero al permitir que el trotskismo penetrara en el seno de las masas y se convirtiera en una de las corrientes obreras más poderosas. El objetivo que el partido se trazó fue, en lo inmediato, el de educar a las masas sobre las limitaciones del nacionalismo en la medida que éste pasaba aliado transitorio del proletariado.

El autor señala que la crítica no significa resistencia a concluir acuerdos con el nacionalismo o el stalinismo. Pero, dice, "estas alianzas, si están al servicio de la revolución, no deben permitir que la clase obrera pierda su independencia y menos su política propia; contrariamente, la política de alianzas debe permitir al partido revolucionario convertirse en caudillo nacional, objetivo que pasa por la lucha encaminada a arrancar a las masas del control político del nacionalismo y otras direcciones que le son extrañas" (pag. 28).

El mayor mérito del POR fue, para Lora, el haber tenido una caracterización y un pronóstico político correctos en relación al nacionalismo desde antes de 1952, lo que sólo fue posible con la ayuda de la teoría de la revolución permanente. Esto permitió a su partido colocarse a la cabeza del proceso de "desmovimentización" de las masas.

De la experiencia nacionalista Lora desprende una ley más general de las revoluciones en los países atrasados, que consiste en que "la dirección política nacionalista puede siempre acaudillar a las masas en la lucha contra el enemigo foráneo y por el desarrollo y modernización del país, pero no bien el proletariado se incorpora a la lucha y cobra su propia fisonomía se empeña por llevar el proceso más allá de los límites burgueses, vale decir, más allá de los intereses de nacionalismo de contenido burgués, mientras la dirección burguesa está condenada a detenerse en medio camino de las realizaciones, el proletariado pugna por llevarlas hasta sus últimas consecuencias..., que supone necesariamente la supresión del régimen de la propiedad privada, basamento indispensable para la existencia y actuación de la burguesía y de la clase media" (pgs. 20-21). (Esta afirmación coloca en discusión el significado de las expropiaciones efectuadas por el castrismo...).

Al plantear la necesidad de defender al gobierno nacionalista cuando, por las medidas que adopta es atacado por el imperialismo y la reacción interna, Lora sostiene que el solo hecho de que la burguesía nacional plantee la solución de las tareas democráticas y comience su ejecución, está demostrando que es diferente a la reacción interna, a los sectores burgueses más ligados al feudalismo y a aquellos que se limitan a servir a la metrópoli opresora y mucho más a la burguesía internacional (pag. 27). Señala que sobre este punto existen divergencias con la llamada izquierda nacional, el stalinismo y algunos sectores trotskistas, e indica que esa defensa es un deber elemental de los revolucionarios y no debe confundirse con el apoyo al gobierno burgués o con el seguidismo a su política.

Frente a los que sostienen que el error del POR fue no haber tomado el poder en 1952, responde que ellos no comprenden las ilusiones que las masas tenían depositadas en el MNR en ese momento, al punto de atribuirle su propio programa. Para Lora las masas "necesariamente tenían que pasar por la amarga experiencia de los gobiernos del MNR, esto antes de poder encontrar a su verdadera vanguardia" (pag.30); mientras ellas no maduran políticamente el partido revolucionario no podrá pasar de los pequeños círculos. Solamente en determinado nivel de desarrollo político se abren las posibilidades para que se transforme en una organización de masas.

Después de analizar minuciosamente la evolución política y organizativa de los sectores de mineros y fabriles, donde se destaca el papel de vanguardia del primero debido en gran parte a su mayor experiencia política y al escaso desarrollo de la industria fabril boliviana, el autor centra su atención en la lucha librada en el seno de la COB.

La COB es caracterizada como el centro de la experiencia organizativa e ideológica del movimiento obrero, sólo superada por la Asamblea Popular. Su origen se encuentra en la lucha contra el stalinismo que llevan adelante el POR y el MNR antes de 1952, subrayando la necesidad de la unidad efectiva del movimiento obrero (pag. 244) (i).

La COB nace basada en la Tesis de Pulacayo y es un producto del ascenso revolucionario de 1952, cuando se constituye en el único amo del país pues la radicalización de las masas pasa a través de ella y la torna en la dirección revolucionaria de la nación oprimida.

Lora señala que su fuerza, que va más allá de la actividad gremial, es una compensación por la ausencia o la debilidad del partido obrero. Sin embargo, se remarca que la organización sindical no puede suplantar al partido. La democracia sindical no puede ser reemplazada por el centralismo democrático ya que éste requiere de unidad teórica y política.

En el período inmediatamente posterior a la revolución, la COB adquiere un perfil soviético en la medida que las masas la consideran como única dirección y único gobierno.

Con el progresivo control de la misma por parte del MNR deja de representar el poder obrero para pasar a ser un apéndice del gobierno.. En este proceso de "movimientización" el lechinismo juega un rol fundamental fomentando las ilusiones en el cogobierno COB-MNR, que no es más que la coexistencia en el poder de diferentes sector del partido oficialista.

La traición de la dirección cobista se profundizará luego con el apoyo al "plan de estabilización monetaria" propugnado por el FMI y tendrá su punto culminante en la capitulación ante el golpe de Barrientos con la tesis de la aproximación al ejército. Esto determinará la pérdida de la influencia de la COB por todo un período en el que se encontrará totalmente desvinculada de las masas.

Esta situación se revierte decisivamente en el IV Congreso de 1970 donde se verifica un creciente abandono del nacionalismo por parte de las masas. Es allí donde se aprueban las Tesis Políticas en las que el proletariado vuelve a trazar su propia estrategia a un nivel superior ya que la experiencia nacionalista contribuyó a elevar considerablemente su conciencia de clase con la superación de sus ilusiones en las salidas burguesas.

La participación del POR en la elaboración de estas tesis fue decisiva y Lora defiende fervientemente la aprobación de las mismas por los militantes poristas frente a las críticas que sufrió desde distintos sectores trotskystas internacionales. Pablistas y lambertistas consideraron una capitulación la alianza que el POR efectuó con nacionalistas (no existió, N. de R.) y stalinistas alrededor de las Tesis. Lora señala que aquellos se olvidaron de las enseñanzas leninistas sobre la diferencia entre burguesía imperialista y burguesía nacional y los acusa de caer en posiciones sectarias y esquemáticas al acusar al POR por haber votado un documento que contiene pasajes contrarios al trotskysmo.

Lo que según el autor no comprenden sus críticos es que el stalinismo y los nacionalistas fueron los que capitularon ante un documento de concepción fundamentalmente trotskysta. Para Lora su posición se demuestra absolutamente correcta en el hecho de que fueron estas Tesis las que posibilitaron la formación del organismo de poder de masas más importante de América Latina como fue la Asamblea Popular boliviana.

Este documento cuyo título es "Unidad revolucionaria contra el imperialismo para forjar una Bolivia socialista" proclama que la misión de los trabajadores es la lucha por el socialismo para lo cual asumen un papel dirigente aliados a los campesinos, la gente pobre de las ciudades y todas las fuerzas antiimperialistas. Se descarta la posibilidad de un desarrollo integral y armónico de los países atrasados por medio de salidas burguesas, señalando que sólo el proletariado como dueño del poder político es capaz de realizar las tareas democráticas pendientes.

Con referencia al proceso de tipo democrático-burgués por el que se estaba atravesando (gobierno Ovando) no tiene posibilidades de mantenerse, por lo tanto, se lo debe transformar en socialista mediante la toma del poder por la clase obrera o se fracasará. Coloca además la necesidad de mantener la independencia de clase frente al nacionalismo caracterizándolo como incapaz de resolver el problema nacional y las contradicciones de la sociedad.

Las Tesis proclaman que para los trabajadores la lucha antiimperialista solamente puede entenderse como lucha por el socialismo.

En una parte el stalinismo consigue introducir confusamente la teoría de la revolución por etapas con lo que se rompe la línea que seguía el documento, pero luego se vuelve a colocar la necesidad de la toma del poder por la clase obrera por lo cual, según Lora, lo anterior no llega a desvirtuar la concepción predominante.

El internacionalismo proletario es considerado base fundamental de la conducta de la COB, por lo que se plantea la tarea de la integración de la COB en el movimiento obrero revolucionario mundial. Sólo así, plantea el documento, se podrá consolidar el gobierno obrero y la posterior estructuración de la sociedad sin clases. La unidad latinoamericana, dicen las Tesis, se dará bajo la forma de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

Sin embargo el lechinismo, a la hora de la votación, consigue monopolizar los cargos de dirección. Según Lora, esto es una reedición de la paradoja de muchos congresos obreros en los que las batallas ideológicas y políticas las ganan los marxistas, en particular los trotskystas, y a la hora de designar dirigentes la dirección pequeñoburguesa obtiene la mayoría de votos, lo que significaría que "los marxistas representaban una fuerza del porvenir" (pag. 501).

El golpe de 1971 hizo muy dura la lucha por lograr el libre funcionamiento de la Central Obrera Boliviana. Solamente en 1973 se consigue realizar una conferencia de fabriles en la ciudad de La Paz, donde se declara la vigencia de la Central Obrera Boliviana. Pero esta declaración no contó con el suficiente apoyo del movimiento de masas.

Se inicia entonces un largo período en donde se intenta lograr la recuperación de la sede de la Central Obrera Boliviana hasta que el año 1979 se logra realizar el quinto Congreso cobista, esta vez bajo el signo de la lucha política contra las tendencias populistas que pugnaban por controlarlo, personificadas en la Unión Democrática Popular con el apoyo del Partido Comunista de Bolivia por un lado y la Alianza del

Movimiento Nacionalista Revolucionario por el otro, con el apoyo del PCML (pro chinos). Esta batalla es ganada por la UDP con lo cual los principales puestos del directorio pasan a manos del stalinismo, al mismo tiempo que Juan Lechin del PRIN vuelve a ser ratificado como Secretario Ejecutivo.

6 de julio de 1981.

(Tomado de "Internacionalismo", Buenos Aires, VIH/981)

Comentario de Sheldon B. Liss

(University of California)

Guillermo Lora

Conocido por los marxistas a lo largo de América Latina por su estilo vigoroso y su análisis crítico mordaz, Guillermo Lora es uno de los más claros exponentes del trotskismo en el área. Hace cuarenta años fundó (dato no exacto N. de R.) el POR boliviano (trotskysta), al que sirvió posteriormente como Secretario General. Pese a haber sido hostigado por las autoridades bolivianas durante décadas, Lora ha continuado sus estudios de erudito y escribiendo. Pero sus activos esfuerzos para construir un movimiento trotskysta en América Latina han sido disminuidos.

"Historia del Movimiento Obrero Boliviano" de tres volúmenes (1967-70), ganadora de gran aceptación en América Latina, Gran Bretaña y EE.UU., es un tributo a su alto nivel académico y tenacidad, especialmente a la luz de lo que califica de limitaciones de trabajar con los pobres recursos de bibliografía, bibliotecas y archivos en Bolivia, y a lo que atribuye la baja calidad de los trabajos de historia que se hacen. Más que cualquier otra pieza de erudición, esta monumental historia social retrata la evolución de la clase obrera boliviana, analiza la estructura clasista de la nación, señala el rol del país en la economía de Sud América y trata de entender cómo piensan los intelectuales bolivianos. Lora explica algunas de las generalizaciones de T. Marof, estudiando muchos de los mismos problemas, pero usando un enfoque más científico que el de su compatriota.

Muestra cómo, en la época colonial y el inicio de la república, las masas indígenas fueron virtualmente esclavizadas y cómo, luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883) los EEUU se convirtieron en preeminentes en la economía boliviana. Clarifica cómo, durante la segunda mitad del siglo XIX, los liberales bolivianos comenzaron a reemplazar y competir con la oligarquía conservadora por el poder político. Relieva el ingreso del capital monopolista en el país a larga escala entre 1870 y 1880 y cómo, en esta etapa superior del imperialismo, el capital financiero empezó a abandonar el país.

De acuerdo con Lora, uno de los primeros socialistas que tuvo impacto significativo en Bolivia fue Gerardo F. Ramírez, admirador de los anarquistas europeos, que publicó en 1921 el panfleto "La Sociedad Futura", delineando un plan para un Estado Federal socialista. Lora consigna que, más tarde, en los años veinte, Ricardo Jaimes Freyre (1868-1933) fue militante socialista en la Argentina; poeta modernista, historiador y diplomático, estudió a Marx, Tolstoi, Ingenieros y Palacios, difundió sus ideas en

Bolivia.

Lora también nos informa de los trabajos del socialista argentino Alfredo Palacios y del marxista chileno Luis Recabarren, que tuvieron influencia en el movimiento obrero de Bolivia. Mencionó que los primeros sindicatos bolivianos estuvieron basados en el marxismo clásico y que la Federación de Estudiantes de los años veinte, una emergencia del movimiento de la reforma universitaria de 1918, se apoyó grandemente en Marx.

Trabajador intelectual más que manual, Lora se identificó y fue activo en el movimiento obrero boliviano. Cree que quien controla las minas bolivianas controla el país. Por mucho tiempo ha atribuido un papel especial a los trabajadores mineros como una vanguardia revolucionaria que reemplazará a los militares, que tradicionalmente se han apropiado del poder político.

En 1946 la Federación de Mineros adoptó la Tesis de Pulacayo de Lora, es la primera vez que un sindicato latinoamericano aceptó formalmente las ideas trotskistas de la revolución permanente.

La Tesis -basada en la idea del proletariado como la nueva clase en Bolivia y los trabajadores mineros como el sector revolucionario más avanzado de aquella-- planteaba que la lucha contra el capitalismo internacional era premisa para la lucha por el socialismo, que los trabajadores mineros deberían conducir la pelea, que todos los trabajadores deberían armarse, y que el gobierno de los trabajadores debía ser la dictadura del proletariado.

Rechazaba la alianza de compromiso con la burguesía nacional, pero estrechaba lazos con los campesinos y artesanos, que llenarían el rol tradicional de la burguesía democrática en la transición al socialismo. La tesis de Lora se afirmaba en la teoría de Trotsky de que en los países atrasados la revolución democrático-burguesa contra el feudalismo y la revolución socialista contra el capitalismo seguirían una a otra en un proceso continuo.

La adhesión a la Tesis de Pulacayo marcó el punto alto en la historia del movimiento obrero boliviano en la medida en que se contraponía al MNR, que llamaba a un movimiento basado en el nacionalismo policlasista conducido por una élite de clase media, una posición que Lora atribuye al excepcional atraso del capitalismo en Bolivia, que era incapaz de efectivizar la revolución democrática.

En su Balance de la Huelga Minera (1963), Lora presentó una crítica de los años en que el MNR controló Bolivia, cuando el movimiento sindical estaba regido por la burocracia gubernamental, los stalinistas y los trotskistas comprometidos con el reformismo. Retrataba los sindicatos de esa época como anacrónicos, jugando en manos del imperialismo a través de la Comibol, el gobierno capitalista de Estado (no obrero) controlaba la Corporación Minera fundada después de la nacionalización de las minas en 1952.

En "La revolución boliviana" (1964), Lora describe al movimiento sindical boliviano como seguidor de un modelo norteamericano durante la época de Mc Carthy. Pese a su retórica antiimperialista, los sindicatos bolivianos estaban controlados por la burguesía y no eran representativos de una clase obrera independiente. Su análisis del Movimiento Nacionalista Revolucionario y de la revolución nacional boliviana se aproxima a los puntos de vista del cubano Julio Antonio Mella y a los de José C. Mariátegui sobre el aprismo. Todos ellos ven las respectivas luchas del MNR y del

APRA como contrarrevolucionarias; dirigidas contra el imperialismo no para abolir la propiedad privada, sino para proteger la propiedad privada nativa frente al imperialismo extranjero.

Además de los estudios de los movimientos obreros y de la revolución nacional boliviana, el infatigable G. Lora escribió una breve historia de la lucha guerrillera. Este libro se refería bastante a los trabajos de Mao Zedong de China, el general vietnamita Vo Nguyen y Che Guevara sobre Cuba. Lora explicaba que Guevara se equivocó cuando planteó que el foco armado no podría triunfar cuando el gobierno en cuestión tiene apoyo popular y apariencia de legalidad constitucional. Lora sostiene que un movimiento guerrillero podría prepararse aun cuando exista un gobierno legítimamente elegido, si el ejército está subordinado al poder imperialista y si otras condiciones para la revolución son favorables, tal como un partido organizado para dirigir la insurrección.

El sostiene que una milicia obrero-campesina constituía un buen contrapeso al viejo ejército y apuntaba que un factor en el fracaso de la revolución nacional boliviana fue la reorganización del ejército como un arma del imperialismo yanqui y que el gobierno desarmó al pueblo. Argumenta que las guerrillas necesitaban ser coordinadas por un partido político y debían pasar por un proceso continuo de educación revolucionaria como lo hizo el ejército de Fidel Castro. Está de acuerdo con Marx y Clausewitz en que "la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios" y dice que una acción militar puede ser útil pero que el partido político, actuando como la vanguardia del proletariado, puede elevar el nivel de la lucha guerrillera y permitir que la guerrilla se convierta en una fuerza más regular.

Indica que esperar las condiciones apropiadas para una guerra de guerrillas es para los socialdemócratas o partidos comunistas ortodoxos; y también sostiene que la situación y el desarrollo político (conciencia) son desiguales en todos los países de América Latina y que uno no puede aplicar simplemente Cuba a Bolivia y esperar el triunfo.

Lora piensa que Guevara no debía haber esperado que un foco cree un partido revolucionario en Bolivia y que fracasó en 1967 porque se desvió mucho de Lenin no adhiriéndose a la necesidad de un partido cohesionado y desarrollado para que dirija la insurrección guerrillera.

Posturas como las descritas arriba, generalmente articuladas en libros bien investigados, razonados y eruditos, ayudaron a solidificar la posición de Lora, como la de uno de los más creativos marxistas "esclarecidos" que prefirió las ideas trotskystas, pero que siempre trabajó abierta y flexiblemente. Lora, como sus compañeros pensadores marxistas bolivianos, tuvo la visión de su país remontando su posición inferior en el sistema capitalista y asumiendo un rol productivo y no competitivo entre las naciones socialistas desarrolladas y en desarrollo en el mundo. El y sus compañeros no tenían falsas ilusiones acerca del "éxito instantáneo" ya sea en lograr la transición al socialismo o desarrollar una economía rica y diversificada. Ellos se dieron cuenta que el desarrollo económico en Bolivia había estado históricamente limitado por la concentración de la industria minera y que las perspectivas para una revolución socialista victoriosa no eran óptimas en una nación que no había logrado un standard mínimo de desarrollo y que la mayor parte de su historia había languidecido bajo el control de un ejército subordinado a la clase nativa propietaria de minas y tierras y sus amos extranjeros.

De 1964 hasta 1982 varios gobiernos militares o controlados forzaron permanentemente a los radicales bolivianos a vivir en la clandestinidad o el exilio.

(Tomado de "Marxist thought in Latin America", 1984).

Comentario de "Los Tiempos"

Guillermo Lora

Más conocido por la serie de importantes obras publicadas sobre la "Historia del Movimiento Obrero Boliviano"... es la primera vez que postula para la primera magistratura de la nación. Su actuación en anteriores gobiernos fue solo a nivel sindical ya que mantiene a un amplio sector trotskysta en filas mineras y universitarias.

... Ya tuvo una destacada actuación en el congreso de 1948 cuando divulgó con gran escándalo los sucesos de la masacre de Potosí, contribuyendo de esa forma para que toda la discusión posterior a la masacre recaiga en culpa sobre el PIR.

(Tomado de "Los Tiempos". Cochabamba, 11 de julio de 1985).

Comentario de "Ojo de vidrio"

("Los Tiempos")

Guillermo Lora, jefe del POR, y autor de la "Historia del Movimiento Obrero Boliviano", en cinco tomos, piensa que el desmantelamiento de las empresas estatales y la crisis orgánica de la Central Obrera Boliviana, lejos de ser una derrota para el movimiento popular, constituyen un gran acontecimiento que ha logrado barrer a la burocracia sindical y ha concentrado la conciencia de clase del proletariado en sus intereses históricos.

La relocalización, en criterio de muchos analistas, es un arma oficial para desarticular a la clase obrera desde su base económica, quitándole sus fuentes de trabajo. Para don Guillermo la quiebra del aparato productivo nacional no afecta a la clase obrera porque persiste su conciencia de clase, Un obrero aunque pise coca, aunque elabore cocaína, aunque se vuelva narcotraficante, sigue siendo obrero porque persiste su conciencia de clase.

(Tomado de "Los Tiempos", Cochabamba, 25 de enero de 1987).

Comentario de Rosalid Boyd Jeeroburkhan

(Universidad Mc Gill, Canadá)

En las semanas pasadas (abril-mayo de 1980, Edit.) he estado leyendo su libro de

Cambridge "Historia del Movimiento Obrero Boliviano". El descubrimiento del trabajo de toda su vida en las luchas de Bolivia ha sido una tremenda revelación.

Nos sentimos verdaderamente honrados de que usted esté deseoso de venir a acompañarnos en este importante coloquio internacional (se refiere al Coloquio sobre Temas Laborales Internacionales, preparado por la Universidad Mc Gill del Canadá y que se realizó del primero al tres de mayo de 1980; G. Lora asistió al mismo como invitado, Edit.).

Si usted requiere más información con el fin de obtener su visa para viajar, por favor no vacile en pedirla, queremos hacer todo lo posible para asegurar su participación en el Coloquio.

Con los mejores deseos, sinceramente,

Rosalid, Boyd, Jeeroburkhan.

(Tomado de la carta sin fecha precisa, enviada a G. Lora).

Comentario de G. Rodriguez O.

La otra historia:

Conciencia de clase y cultura minera (1825-1923)

La tradicional dicotomía clase en sí (nivel económico-corporativo) y clase para sí (nivel político estatal) ha marcado fuertemente los análisis sobre el proletariado boliviano. Así, leyendo la obra de Guillermo Lora, "Historia del Movimiento Obrero Boliviano", se tiene la impresión de estar trepado en un ascensor de la lucha de clases que abandona los distintos pisos conceptuales hasta por fin concluir, en 1946, con la "Tesis de Pulacayo". En cada tomo Lora narra cómo la clase "aprende" y se desarrolla en una forma lineal y acumulativa. En el tomo primero la clase es pasiva e inorgánica, en el segundo comienza a organizarse y hacer huelgas, en cambio en el tercero transita del anarquismo al marxismo y en el cuarto construye "su" partido y hace política. En esta reconstrucción la clase obrera "avanza" abandonando su pasado, renunciado a sus orígenes.

Así no hay lugar para la "memoria histórica". Las representaciones y metáforas que no encajan estrictamente dentro de lo político-estatal son relegadas al mundo de la "Falsa conciencia".

Pero ¿acaso no tiene por ejemplo valor político el culto minero al "tío"? ¿No forma parte de su identidad y visión del mundo? ¿Acaso para reflexionar conceptualmente, la conciencia de clase es sólo el universo de representaciones políticas? y ¿no incluye los hábitos, tradiciones y costumbres "de la clase"?

Por suerte los procesos sociales no suceden como Lora los recrea. Particularmente la vida y luchas sociales de los trabajadores mineros en el período que analizamos estuvieron inundados de mundos e imágenes que evocaban conductas que sólo pueden entenderse rastreando el pasado. Pero no es sólo esto, sus propias actitudes frente a la empresa o al Estado estuvieron permeadas no sólo por las ancestrales tradiciones mineras, sino que revelaban una combinación cultural de los dos mundos (minería-agricultura) por los cuales transitaba continuamente el trabajador minero.

Esto último nos remite a un otro espacio analítico virtualmente ignorado por Lora. Cualquiera que hubiese leído su obra quedaría sorprendido por la ausencia de referencias de la matriz estructural y del proceso histórico en el cual se constituyen las clases sociales. Hablando del proletariado minero, que es el objeto de nuestro análisis, ¿encontró el lector datos, aun vagos, sobre las características de las empresas mineras, de las formas de administración, de los modos de reclutamiento espacio-temporal de los trabajadores mineros, del medio geográfico-social donde se desenvuelven los mineros? ¿Tendrá efectos sobre la conciencia de clase una composición minera étnicamente heterogénea? ¿O una fuerza de trabajo que se inserte ocasionalmente en el trabajo minero y que presenta por tanto una alta tasa de rotación? Deberíamos guardarnos de suprimir estas consideraciones pues quedaríamos virtualmente expuestos a no entender el proceso de conformación histórica de los mineros o lo haríamos no a partir de lo que fue, sino de cómo nosotros idealmente quisimos que fuera.

Estas brevísimas consideraciones no tiene otro propósito que cuestionar al lector sobre un tema vital como es la conciencia de clase minera y su proceso de constitución histórica. No pretendemos, por motivos de espacio, agotar un debate sobre el problema. De otra parte, los datos y reflexiones concretas sobre el proceso boliviano resumen, al límite, los resultados preliminares de un trabajo de investigación ejecutado en el IESE de la UMSS. Se fijó como punto de partida a 1825 por ser el inicio de la vida republicana. 1923, la llegada cronológica, coincide con la "masacre de Uncía" momento en el cual los trabajadores mineros se movilizan por vez primera por el derecho a organizarse sindicalmente.

Capitalismo minero y fuerza de trabajo

Al tratar de recrear la cultura minera en el Siglo XIX no puede pasarse por alto, para repetir las ausencias de Lora, el entorno en que se desenvolvían estos trabajadores. En primer término, a grosso modo, hasta mediados de ese siglo predominaba la producción manufacturera (subsunción formal) que descansaba sobre la habilidad y conocimiento de los trabajadores. Esto permitía que algunas categorías de trabajadores, sobre todo los calificados, conservar a prerrogativas "artesanales" de uso del tiempo, disciplina. En segundo lugar, el mercado de trabajo fue casi siempre estrecho, reflejando la inexistencia de un fuerte proceso de acumulación originaria. La demanda de trabajadores superó casi siempre a la oferta lo que posibilitó que los mineros pudieran imponer buena parte de las condiciones en su relación con el empresario. En tercer término, desde mediados de siglo fue un grupo de trabajadores básicamente masculino, sólo el inicio del auge minero (1850-1900) insertó a las mujeres y a los niños de un modo preponderante en la fuerza de trabajo. Finalmente, en su gran mayoría, constituyeron un proletariado en movimiento. Los núcleos de mineros profesionales fueron pequeños y el predominio de trabajadores, generalmente campesinos comunarios, fue amplio. es decir, eran individuos que no vivían permanentemente en la mina y cuya supervivencia dependía menos del salario que de las redes comunales y agrarias en las que estaban insertos. Se trata por tanto de un proletariado en transición.

Tradicición y cultura minera

¿Cuál es el universo de las representaciones mineras en el siglo XIX republicano? De entrada debemos advertir que carecemos de un detallado análisis sobre "lo

popular” en ese período. Por lo que a lo sumo podemos establecer aspectos relativos al ámbito interno de estas imágenes y tradiciones, o sea aquellas que se relacionan con el proceso inmediato de producción.

Marx acude al concepto de subsunción formal para designar el momento en que el capital debe resignarse a operar aun dentro de procesos de trabajo precapitalistas. La relación trabajo-capital es formal en tanto el piso material que la soporta es el mismo de la anterior relación, feudal, esclavista, etc. Es decir, se produce mercancías mediante el antiguo sistema laboral aunque las relaciones sociales precapitalistas han cedido en favor del trabajo precapitalista. Fácilmente podemos extender la intuición de Marx hacia el ámbito de lo cultural. Parece obvio sostener que tampoco el capital por su mera puesta en escena, rompa con los hábitos y tradiciones que cargan los ahora asalariados. Su rutina, su ritmo de uso del tiempo, sus códigos de comportamiento frente al poder, subsisten como punto de referencia aunque hubieran desaparecido las relaciones de producción que los enmarcaban.

Es el proceso concreto, al nacer el capitalismo minero a mediados del siglo XX encontró en Bolivia una tradición minera, formada siglos atrás, constituida por una particular percepción del uso del tiempo. Como hemos detallado en otro trabajo (Rodríguez, 1986) los trabajadores mineros no concebían su tiempo en términos de mercancía. El tiempo libre, destinado a fiestas colectivas (carnaval, patronos regionales, etc.) o actividades personales formaban parte central de las preocupaciones mineras. Esto ocasionaba un mundo de indisciplina plagado de deserciones al trabajo minero. Las empresas enfrentaban continuas interrupciones por la falta de trabajadores, particularmente los días lunes (San Lunes). A ello se sumaba el entrecruzamiento entre el ritmo minero del tiempo, tendiente al uso permanente del mismo, y los ciclos agrarios, y que sólo liberaban fuerzas de trabajo para uso de las minas entre siembra y cosecha, lo cual ocasionaba la reducción de la escala del “laboreo minero”.

A este cuadro, ya preocupante para los empresarios capitalistas en ciernes, se sumaba el robo de mineral. Durante el período colonial esta actividad, denominada juqueo y cajcheo, formaba parte de un mecanismo destinado a atraer trabajadores y mantener bajos los salarios de las “mingas” (trabajadores libres). Durante la minería republicana el robo constituye un verdadero derecho consuetudinario que para trabajadores y empresarios formaba parte de las reglas del juego del contrato de trabajo. Por lo menos hasta muy entrado el siglo XIX el robo podía entenderse, por su magnitud y extensión, como un complemento al salario. La reproducción del trabajador y su familia se realizaba por tanto no sólo a partir del salario, sino que implicaba una suerte de “saqueo legal” de la mina.

Reestructuración capitalista y cultura de resistencia

Este tejido de normas sociales y reciprocidades comenzó a ser reestructurado a partir de mediados del siglo pasado. El capital en ciernes intentó dotarse de una clase obrera “sobria y amante del trabajo”. Para ello instituyó un nuevo tipo de relaciones sociales que buscaban terminar con las viejas prácticas laborales. Con distinta secuencia cronológica partiendo de las mayores minas, los empresarios reclamaron un uso más capitalista del tiempo. Para ello consignaron el llamado de lista, multaron a los atrasados, persiguieron a los vagabundos, reestructuraron el sistema de fiestas, condenaron y sancionaron el robo. Todo lo que anteriormente era aceptado se convirtió en un freno al “Progreso”. ¿Cómo reaccionaron los trabajadores mineros frente a este atropello de sus ancestrales costumbres? En otros lugares, como durante la industrialización europea, el conflicto entre la nueva economía política del capital y las tradiciones motivó fuertes movimientos contestatarios de los trabajadores, Los

“Ludittas” (destructores de máquinas), la revuelta de clase, el motín de subsistencia constituyeron parte central de esta “guerra industrial” (Thompson 1979). Aquí sin embargo, a pesar de existir las condiciones para el surgimiento de fenómenos similares las respuestas fueron más bien individuales. Los trabajadores se refugiaron en sus antiguas costumbres. Inmersos en una auténtica cultura de resistencia continuaron, en la medida de lo posible, practicando el San Lunes, defendieron su derecho al robo, propiciaron fiestas y representaron alegóricamente su situación mediante ritos y canciones.

Sólo en contados momento acudieron al motín y la amenaza de resguardar sus costumbres. En 1858, en el distrito minero de Corocoro se amotinaron por la rebaja de salarios, en la Compañía “Huainacucho de Aullagas” los trabajadores dejaron de trabajar por falta de pago. En 1891, en Colquechaca frente a un intento de rebajar los salarios, anónimos presagiando la pronta voladura de la “compañía” aparecieron pegados a la puerta de la Iglesia. En 1899, en el marco de la “Revolución Federal, mineros y campesinos comunarios asaltaron las instalaciones de la mina Remedios, perteneciente a la Compañía Corocoro de capital chileno. Los disturbios mineros fueron empero esporádicos, violentos, sin un plan definido previamente. Surgieron, con excepción del de 1899, cuando las compañías transgredieron totalmente las reglas de la reciprocidad. Así, en el siglo XIX los mineros bolivianos sólo en el momento de máxima emergencia acudieron a la acción y sin duda dejaron pasar innumerables situaciones críticas sin actuar. Prefirieron la resistencia pasiva en la defensa de sus costumbres precapitalistas.

Tiempo, salario y organización

El siglo presente vio el surgimiento de una nueva fase de desarrollo en la minería capitalista. Los “Barones del Estaño”... complementaron la reestructuración del proceso de producción iniciada por los “patriarcas de la plata”. De una parte se trataba de un proletariado más acostumbrado al “despotismo de la fábrica”...

1987.

Comentario de Irma Lorini

(historiadora)

Dentro de las publicaciones bolivianas relacionadas con la temática (historia del movimiento obrero, Red.), debe señalarse, en primer lugar, la obra completa publicada por el político trotskysta boliviano Guillermo Lora.

Entre sus publicaciones destaca como la más importante su “Historia del Movimiento Obrero Boliviano”, contenida en tres tomos. esta obra abarca casi un siglo de historia social boliviana, es decir, de 1848 a 1933. Este estudio es lo más sobresaliente que se ha escrito hasta ahora en relación a las diferentes etapas de organización del movimiento obrero boliviano. En ella se encuentra abundante material para desentrañar influencias y tendencias que se dieron dentro del movimiento obrero, como también las organizaciones políticas que lo acompañaron. Es el primer autor que escribe cronológicamente esta historia social en relación al sector asalariado boliviano. Para la etapa “embrionaria” del movimiento socialista, esta obra tiene un valor documental. En el tomo III de este trabajo, en su segunda parte, se encuentra una rica información documental de los Partidos Socialistas que se organizaron en la década del 20. allí el investigador puede encontrar fuentes partidistas (programas,

proclamas,etc.) que no se ubican en ningún otro archivo boliviano ni extranjero...

"El movimiento socialista 'embrionario' en Bolivia", 1994.

Solapa del libro resumen

"A History of the Bolivian Labour Movement"

Cambridge

Latín American Studies 27

Este libro es un resumen y traducción de la historia de cinco volúmenes de Lora. Se refiere al fortalecimiento y radicalización del movimiento obrero boliviano organizado, que culminó en los cambios revolucionarios drásticos de los años 50.

La primera parte ofrece una reinterpretación de la historia boliviana en el siglo que precede a la revolución, vista desde la perspectiva de la clase obrera. La segunda parte discute en mayor detalle los eventos políticos más importantes y temas doctrinales de los pasados treinta años, un período en el cual el autor, como secretario del trotskysta Partido Obrero Revolucionario jugó frecuentemente una parte activa.

Al margen dei levantamiento radical que ocurrió en los 50 y la movilización de amplios sectores de la población al rededor de objetivos tan radicales como cortes di rectos a la propiedad, ministros nominados por los sindicatos, y control sindical, militar y obrero, el movimiento obrero fue incapaz de mantener sus conquistas en los 60. Los capítulos finales describen el período de la nueva represión militar y los esfuerzos continuos del movimiento obrero para resistir.

Traducido por Christine Whitehead
Cambridge University Press, 1977

Traducido por Christine Whitehead Cambridge University Press, 1977

Introducción del editor

Una Bolivia independiente ha existido por siglo y medio, aunque las fronteras actuales son más recientes. A través de ese período han habido tos actividades económicas principales: una agricultura de muy baja productividad para consumo local, y unas industrias extractivas de relativa alta productividad para mercados remotos del mundo. Hasta la erradicación de la malaria más o menos hace 30 años, casi toda la fuerza laboral estaba concentrada en el tercio occidental del actual territorio, esparcida a través de paisaje lunares del Altiplano o amontonada en las pocas cuencas de valle templado sobre saturadas. Ya sea que estuvieran ligados a la agricultura o a la minería, las condiciones de los trabajadores bolivianos eran miserables, y aún en los años 60 el promedio de ingreso per cápita se reducía al mínimo que cualquiera de las otras repúblicas sudamericanas. (Este cálculo ya no es real desde 1974, cuando el petróleo y el gas natural sobrepasaron a los minerales por primera vez como el principal recurso del intercambio de Bolivia con el extranjero, pero aunque el ingreso promedio puede ahora estar subiendo aceleradamente, los beneficios se distribuyen

desigualmente.)

Tan miserables eran las condiciones de salud y nutrición de la mayoría de los bolivianos, que el promedio de crecimiento vegetativo de la población permanecía bajo; y tan remota e inaccesible era la república de los mercados mundiales que virtualmente ningún inmigrante podría ser atraído. Por el contrario, en el siglo XX los trabajadores bolivianos migraron por decenas y miles a las minas de nitrato del norte de Chile, a los campos azucareros del norte de Argentina, y más recientemente a las fábricas de Córdoba y los lugares de construcción de Buenos Aires. La actual población boliviana de alrededor de 5 millones es opacada por la de sus vecinos de la costa: hay el doble de chilenos, tres veces peruanos, casi cinco veces argentinos, y veinte veces brasileños. Es entonces fácil olvidar qué diferente era el balance demográfico que se creía existía cuando comienza esta historia. Ya en 1851 José María Dalence (calculando en la base de datos censales inadecuados entonces a su alcance) reportaba que Bolivia era la tercera república de mayor población en Sud América -sólo sobrepasada por Brasil (con una población calculada en 2.29 veces la de Bolivia) y Perú (1.09 veces su tamaño). Con 2.1 millones de habitantes, se pensaba que habían 50% más bolivianos que chilenos y se creía que Bolivia tenía más del doble de la población de la Argentina. Por añadidura de la economía boliviana había, por casi tres siglos, estado engranada a la gran riqueza de la plata de Potosí, con el resultado de que la producción artesanal se había desarrollado hasta una considerable perfección, buscando un mercado que, para los standards del continente en esa época, era remarcablemente grande y sofisticada. Las condiciones de los artesanos (que se discute en el libro inicial de esta historia) no debería entonces ser considerada como históricamente insignificante.

Ciertamente hacia el siglo XX el peso de Bolivia en el sub continente había descendido hasta casi nada. Demográficamente agonizante, militarmente nada efectiva, físicamente inaccesible, y finalmente a punto de lograr algún dinamismo exportador del mercado mundial, Bolivia bien parecía uno de los lugares en que menos pudiera encontrarse algo como un proletariado moderno y consciente. En efecto, el censo de 1900 hace evidente cuán incipiente había sido el desarrollo, ya que registra solamente 12.625 trabajadores mineros (una categoría que incluía propietarios junto con trabajadores asalariados) haciendo el 0,8% de la fuerza laboral y solamente 439 trabajadores gráficos. Estas cifras pueden ser comparadas con aquellas de trabajadores engranados a varios sectores de la producción textil -alrededor de 320.000 casi totalmente utilizando técnicas pre-industriales. Estas proporciones indican por que Juan Albarracín Millón dice sobre Bolivia en los años considerablemente más prósperos de 1913: 'Los pequeños sindicatos de artesanos y los grupos socialistas incipientes en los centros mineros fueron impotentes para actuar aún hacerse escuchar. Su presencia es significativa principalmente como un antecedente histórico a la formación de la conciencia política entre la población Boliviana, más que como un elemento activo en las luchas de aquella época'.

No se niega la estrecha base social en la cual la primera organización moderna de trabajadores de Bolivia descansó originalmente; tampoco se puede afirmar aún ahora que una gran escala de asalariados comprende una gran proporción de la fuerza de trabajo boliviana. Tan recientemente como 1950 el censo sólo registraba 36.000 asalariados a tiempo completo en las minas, sólo 44.000 en la industria, y 22.000 en la construcción; y las estadísticas para 1970 reunidas de las 1.000 empresas más grandes sólo registraban una fuerza de trabajo de 21.000 personas -ej. el promedio de tamaño de plantea era de 21 trabajadores, y escasamente un promedio de empresas empleaba más de 100 trabajadores. (La empresa minera nacionalizada Comibol, empleaba 23.000 trabajadores sin embargo, y las 22 principales minas

privadas empleaban otros 5.000.). Sin embargo la historia de Lora aclara que la organización laboral modelada en ideas generadas por los socialistas europeos, que llegaron a Bolivia principalmente a través de Chile, tuvo una larga historia durante la república e intervinieron extensamente y en ocasiones decisivamente en el curso de los asuntos nacionales. En este tipo de sociedad las organizaciones con una cantidad de miembros relativamente pequeña se mostraron capaces de movilizar, al menos temporariamente, muchas veces sus propios números. Para obtener un cuadro realista de la importancia relativa de los trabajadores organizados en la vida política de Bolivia la cifra que figura en el censo de 1950 de 102.000 asalariados no agricultores indicada arriba puede ser comparada con datos acerca de las categorías ocupacionales de la clase media. Sin embargo, en vísperas de la revolución de 1952 la república tenía solamente 1.100 abogados en ejercicio, alrededor de 700 médicos y 700 ingenieros civiles y arquitectos, junto a pocos centenares de otros profesionales graduados. De manera similar el censo de 1950 también registraba sólo 12.400 estudiantes universitarios (sólo 1.400 eran mojetes), la mayoría de los cuales nunca se graduaron. Pero gobiernos posteriores encontraron que sólo se requiere unos pocos centenares de estudiantes movilizados por un asunto bien escogido para sacar a la calle a miles de estudiantes de secundaria a través de cuyas familias la agitación se puede extender a la mayoría de la población urbana.

Este libro no es, por supuesto, el trabajo de un historiador académico. Guillermo Lora sí trabajó por un año (1970-71) como catedrático de historia social en la Universidad de San Andrés de La Paz, pero eso no puede competir con los más de 30 años que ha dedicado a establecer en el movimiento obrero boliviano una variante altamente específica de la doctrina socialista europea, llamada trotskysmo. El texto original en español, del cual el presente volumen ha sido resumido, fue escrito esencialmente para los dirigentes obreros bolivianos y los estudiantes activistas y contenía largos párrafos explicando la teoría marxista, o realizando polémicas contra movimientos políticos rivales. La primera mitad del original en español (hasta la guerra del Chaco) fue publicado en La Paz en tres volúmenes (En ciertos campamentos mineros de Bolivia se dijo que activista del partido prestaban el libro en, pocos centavos por un tiempo a los trabajadores mineros que querían conocer algo de historia pero no podían gastar para comprar libros). Los tres primeros volúmenes pueden por tanto ser comparados con el resumen en inglés. Tal comparación podría mostrar que una gran cantidad de investigación e interpretación ha sido omitida, de modo que el efecto didáctico del original ha sido considerablemente disminuido. En justificación se debe señalar que la versión inglesa abarca un tercio de la extensión del original. Sin embargo, la responsabilidad total del resumen descansa en mí, esta versión ha sido observada por el autor, que aprobó mi decisión de enfatizar tanto como sea posible el cauce principal de la exposición histórica.

Todavía no hay ninguna edición en español con la que la segunda mitad de este volumen pueda compararse (aparte del último capítulo, La Asamblea Popular, que está inflexiblemente resumido de "Bolivia: de la Asamblea Popular al golpe del 21 de agosto", un libro publicado en Chile en 1972, pero ahora virtualmente imposible de obtener). Los años 1930-70 estaban listos para publicarse en La Paz en 1971 pero cuando el General Bánzer llegó al poder ese proyecto se hizo imposible. Una vez más se alistaron para su publicación en Santiago en 1973, pero el gobierno del General Pinochet naturalmente destruyó toda huella del trabajo. En adición a estos retrasos, Lora gastó gran parte de los últimos años esquivando el apresamiento y buscando mantener hasta cierto grado la organización partidista clandestina. Esto ha hecho imposible que él consulte a bibliotecas públicas y hasta su propia colección de libros ha sido repetidamente parcelada, asaltada y movida de escondite en escondite. Ha sido por tanto imposible mantener el standard normal de referencias bibliográficas

en este volumen.

Algo del estilo de vida del autor puede haberse puesto de manifiesto del recuento de sus dificultades con la publicación. Más información biográfica está contenida en la propia historia, que, desde mediados de los cuarenta adelante, se convierte más en un recuento documentado de un participante activo que en la reconstrucción de eventos por un historiador. El nació en el pueblo minero de Uncía en 1922. Su padre puede verse en la fotografía publicada en la portada de "La Masacre de Uncía" de G. Rivera. la fotografía muestra a 4 víctimas de la "masacre de Uncía" de 1923 (descrita aquí en el capítulo II) con una pequeña reunión de observadores simpáticos en el fondo, uno de los cuales era su padre. Un esbozo biográfico de su hermano César se incluye en el capítulo 21. Guillermo Lora leyó sobre leyes en la universidad de Oruro pero carecía de la inclinación para completar sus estudios y nunca se graduó o practicó como abogado. Desde los cuarenta ha sido Secretario General del Partido Obrero Revolucionario (POR), con el resultado de que el estaba en París, asistiendo a una conferencia de la Cuarta Internacional el momento de la revolución de abril de 1952. Desde 1954 su partido rompió con la Cuarta Internacional (que reconoce un grupo rival dentro de Bolivia), aunque tomó parte en algunos grupos internacionales que intentaban reconstruirla Cuarta Internacional.

Agradecemos a la traductora, Christine Whitehead, que perseveró aún enfrentándose a los bolivianismos intratables del siglo diecinueve. Agradecemos también al Profesor David Joslin, que ofreció gran aliento a tan temeraria propuesta, a mi secretaria, Philippa Gibson y a la Sra. Patricia Williams y a White de la Prensa de la Universidad de Cambridge que la hicieron práctica.

Laurence Whitehead Febrero de 1977

(1) José María Dalence, "Bosquejo Estadístico de Bolivia", Chuquisaca, 1851, pp. 204/5. Todas estas cifras se refieren a los años 1840, cuando se creía que había apenas 300.000 paraguayos y sólo 180.000 uruguayos.

(2) "El Poder Minero en la administración liberal", Editora Urquiza, La Paz, 1972, p. 197.

(3) Sin embargo, el Ministro de Trabajo estimaba que en 1975 habían 250.000 sindicalistas en Bolivia, divididos en 600 sindicatos: 63.000 trabajadores fabriles, 50.000 trabajadores mineros, 35.000 en comercio, 25.000 en construcción, etc. Esta lista omite a los profesores urbanos y rurales, pese a su considerable peso e influencia.

Comentario de Herbert S. Klein

Historia del movimiento obrero boliviano. 1848-1900. Por GUILLERMO LORA. La Paz, 1967. Editorial "Los Amigos del Ubro". Enciclopedia Boliviana. Ilustraciones. Notas. Bibliografía. Pp. 455. Periódico.

Aunque autores clásicos del siglo XIX como Sotomayor Valdés, Domingo Cortés, María Dalence y René Moreno dedicaron considerable atención al desarrollo económico y social de la nueva república Boliviana, historiadores posteriores han descuidado totalmente este tema. Los trabajos de Alcides Arguedas concierne exclusivamente a la historia política narrativa, y excepto por la oportunidad de conocer el libro único de

Casto Rojas sobre la historia financiera del siglo XIX, se ha realizado poca investigación sobre esta época crucial. Hechos como la aparición de la moderna minería de la plata a mediados de siglo no han sido estudiados, tampoco sabemos nada sobre los masivos y numerosos levantamientos campesinos del período, excepto el trabajo de Condarco Morales sobre el levantamiento del altiplano en 1899.

Por ello la primera entrega de la historia del movimiento obrero boliviano de Guillermo Lora proyectada para varios tomos es doblemente bienvenida. No solamente ofrece la primera investigación sistemática sobre el tema, sino que es la mejor introducción disponible a la historia general económica y social del siglo XIX en Bolivia. Al margen de las limitaciones del título, Lora intenta analizar el contexto amplio en el cual se ha desarrollado el movimiento obrero. Su discusión del conflicto sobre el librecambismo, de la política económica y social de Belzu, y sobre los primeros mineros de la plata y sus empresas son los primeros datos detallados de estos problemas en la literatura de secundaria. Pero el corazón del trabajo viene a ser la exhaustiva enumeración y documentación de todas las organizaciones laborales, sociedades, prensa e intelectuales pro-obreros en este período, basados en una revisión extraordinaria de panfletos.

La historia del movimiento laboral organizado en Bolivia se inició bajo el aliento del Presidente Manuel Belzu (1848-1855) con la creación de los gremios de carpinteros y sastres en La Paz. El gobierno populista de Belzu también encaró la creación de la primera prensa obrera y otros mecanismos importantes como escuelas de artesanos. Pero los primeros gremios fueron dominados por una mentalidad extremadamente proteccionista y eran exclusivamente los asuntos de los maestros artesanales propietarios. Aún cuando muchos gremios se unieron para formar la Junta Central de Artesanos de La Paz en 1860, excluyeron a los jomaleros y aprendices de sus miembros. Lo mismo ocurrió cuando se fundó una organización similar en Oruro en 1876. Para la mayoría de los artesanos ciudadanos, una efectiva organización no se produjo hasta las últimas décadas del siglo y entonces bajo el control directo de los grupos no laborales como Masones y Jesuitas. Este amplio movimiento, que empezó con la fundación de la Sociedad Fraternal de Artesanos de Socorros Mutuos de La Paz en 1877, fue orientado hacia objetivos mutualistas y fraternales. A diferencia de los gremios, sin embargo, estas sociedades a menudo incluían indiscriminadamente a miembros de trabajadores, intelectuales y aún elementos de clase media. Eran también las primeras organizaciones públicas en Bolivia que tuvieron una activa participación femenina.

Pero aún con la formación de numerosos gremios y sociedades fraternales en el último cuarto del siglo XIX, el movimiento obrero boliviano permaneció frágil y extremadamente conservador aún para los standards latinoamericanos. No tuvieron impacto en la vital industria minera, y sus miembros estaban reducidos a un fragmento de la fuerza laboral nacional.

En este uso de la inexplorada literatura panfletaria del siglo XIX y en su concienzuda investigación de documentación sobre los temas básicos sobre el desarrollo económico y social de inicios de la república, Guillermo Lora ha logrado un gran paso en este tema previamente, descuidado. Mientras mucho permanece sin hacer en minería, demografía y el desarrollo de la economía en ese período, el estudio de Lora nos provee ahora de una base crucial sobre la cual deberán estar basados los futuros estudios.

Universidad de Columbia
Herbert S. Klein
NEW SOCIETY

2 febrero 1978

Comentario de Paul Preston

Guillermo Lora

Una Historia del Movimiento Obrero Boliviano 1818-1971

Cambridge University Press, L. 12.50

Más de 10 años después del abortado intento de Che Guevara de encender la revolución en Bolivia, la situación de la clase obrera boliviana se mantiene desesperante. Vivienda subhumana, salarios abismales, analfabetismo y masacres periódicas por parte de las fuerzas del orden hacen la tarea de organización virtualmente, imposible. Guillermo Lora, ahora perseguido por la policía, es un trotskysta y una de las razones por las cuales existe un movimiento obrero en Bolivia. En este hábil resumen por Laurence Whitehead, su libro es una mezcla de historia propaganda y agudeza visual honesta y altamente leíble. Cuenta una historia feroz que merece ser mejor conocida.

Paul Preston

Revista Internacional de Historia Social

LORA, GUILLERMO. Una historia del movimiento obrero boliviano 1848-1971. Editado y resumido por Laurence Whitehead. Traducido por Christine Whitehead. Cambridge University Press, Cambridge, Londo, New York, 1977, x, 408 pp, L. 12.50.

Tres volúmenes de la Historia del Movimiennto Obrero Boliviano, de Lora que se refieren al movimiento obrero hasta la guerra del Chaco, fueron publicados en La Paz durante los años 1967-1970. De estos volúmenes y de los todavía no publicados el editor ha preparado un resumen en inglés. El ha cortado el elemento didáctico, de manera que los hechos históricos y acotaciones del documento permanecen.

International Review of Social History, No. 3, 1978

Artículo en revista M. N/A

Choice Chicago, Ill.

M. N/A, Julio, agosto 1978

LORA, Guillermo. Una historia del movimiento obrero boliviano, 1848-1971, editado y resumido por Laurence Whitehead, traducido por Christine Whitehead. Cambridge, 1977, 408p. (Cambridge Latin American studies, 27), index 76-22988. 24.95IS13N 0-521-21400-9. C.L.P.

Lora, un sindicalista trotskysta, se ha propuesto lograr dos objetivos: presentar una revisión histórica del movimiento obrero en Bolivia y, además explicar los

métodos e impacto de la izquierda sobre el movimiento obrero y la política boliviana. El ha tenido un éxito parcial. Desde los albores del siglo XIX a los 1930 el texto es fino, bastantes acotaciones de manifiestos y plataformas e interrumpido con apuntes biográficos periódicos de líderes del movimiento obrero y de la izquierda, material ciertamente no disponibles en inglés en ninguna parte. Con los 1930, el recuento se vuelve más personal, ya que fue el último período en el que Lora se dedicó a expandir la teoría marxista a la clase obrera boliviana. Lora (con su hermano César) se involucró grandemente en el conflicto socioeconómico y político del período, y sus perspectivas son claramente de interés. Sin embargo, si alguien de otra creencia -el líder sindical Juan Lechín por ejemplo- hubiese hecho este recuento de eventos, ¿cuán diferentes habrían aparecido? La literatura es escasa, la comparación es difícil. Lora no es un historiador y no está, por tanto, atado a la técnica erudita -aunque pone varias notas de pie de página. El texto en español de Lora fue traducido por Chirstine Whitehead, la parte que trata el período de la Bolivia antes de 1930 ha sido luego recortado en dos tercios por el editor Laurence Whitehead e injertado dentro de un manuscrito en español todavía inédito que cubre el período 1930-1970. El resultado no es enteramente satisfactorio- aunque no está claro en quién recae la responsabilidad. Un comentario importante, el estudio se recomienda a egresados y bibliotecas profesionales y para estudiosos bolivianos que, si son bilingües, podrán hacer mejor uso del original si este estaría disponible.

Comentario de John Hillman

G. Lora: Una Historia del Movimiento Obrero Boliviano 1848-1971, ed. L. Whitehead, trans. C. Whitehead (Cambridge: Cambridge University Press, 1977, L 12.50). Estudios Latinoamericanos de Cambridge, N° 27.

Guillermo Lora es un trotskysta que ha jugado un rol importante en la historia de la clase obrera Boliviana. Su "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" es un trabajo sumamente ambicioso, que no solo intenta un recuento comprensible del movimiento obrero Boliviano y sus organizaciones constituyentes, líderes, ideologías y luchas, sino que también trata de situar ese movimiento dentro de la estructura de la sociedad Boliviana como un todo. Los primeros tres volúmenes, que cubren el período desde el Presidente populista Belzu a la guerra del Chaco, fueron publicados en La Paz entre 1967 y 1970. Los regímenes de Bánzer y Pinochet han evitado la publicación de la segunda parte que continúa la historia hasta el intervalo de Tórres de 1970-71. Esta parte corresponde al período en el cual Lora era un participante activo y sobre el cual ya ha publicado extensamente. Lora está bien informado y ha reunido una gran cantidad de material de archivo, de modo que su "Historia" tiene un doble significado, como la obra más madura de un importante marxista Latino Americano y como la mayor contribución a la historia de su país.

La versión inglesa es un resumen riguroso de la "Historia" completa. El original estaba pobremente organizado y editado y contiene mucho material repetitivo y redundante, pero el editor ha ido más allá delatar en decondensar y editar y realizó una reorganización substancial. Ha optado por una aproximación cronológica selectiva que utiliza las palabras del original, pero dentro de una estructura diferente.

El punto de partida de la "Historia" es doble: la observación sociológica de la clase obrera y una parte inseparable de la vida de la nación, reflejando tanto sus virtudes como defectos, y la esperanza política de que esta clase conducirá a la nación a acabar con su dependencia del capitalismo imperialista. La historia de la clase obrera no puede, sin embargo, escribirse como un estrecho estudio de las organizaciones

laborales, ya que está íntimamente ligada a la historia de Bolivia. Esta perspectiva permite a Lora empezar su narración mucho tiempo antes de la existencia de una clase obrera como tal, y tiene una fina exposición de la estructura de la sociedad Boliviana en el siglo XIX, su economía y sus escisiones y alianzas. Esto también está presentado en el resumen, aunque la supresión del propio material introductorio de Lora hace difícil apreciar la significación de la narración. No solamente provee del marco sin el cual la historia boliviana del Siglo XX sería inentendible, sino que establece parámetros de análisis que se evidencian menos a medida que el movimiento obrero se toma más y más políticamente central. El editor también ha eliminado la mayoría de análisis de la estética en el cual Lora discute la emergencia del modernismo en Bolivia como un paralelo cultural a la Revolución Federal de 1898, y su relación con el modernismo en Latino América en general. Se muestra algo del material del poeta socialista Ricardo Jaimes Freyre, que fue activo tanto en Argentina como en Bolivia, pero sin el marco que permita una apreciación de su importancia y limitaciones. El proyecto de Lora es, sin embargo, más rico que lo que se evidencia en el resumen.

Lora divide la historia del movimiento obrero en dos fases políticas: la primera en la cual está dominado por el gobernante Partido Liberal, y la segunda en la cual descubre su independencia y actúa en su propio beneficio. La transición es extensa y complicada, pero la vertiente tiene que buscarse en los lejanos 1920's, que también marca un cambio importante tanto en la política boliviana como en la estructura de la economía del estaño. Esto sugiere una revisión radical de la periodización convencional de la historia de Bolivia y el rol atribuido a la revolución de 1952. Lora provee de una relación sobre todo interesante a las organizaciones laborales, especialmente a las asociaciones mutualistas, pero su historia del período entre 1898 y la guerra del Chaco se reduce a una narración de la formación de sindicatos y confederaciones, círculos culturales progresistas y **de** sus variadas luchas. El material importante se mantiene en este resumen, aunque la forma de presentación tiende a complicar el relato. Lora tiene poco material sobre la composición de la clase obrera y las relaciones del movimiento obrero a la estructura clasista de Bolivia. No puede, por tanto, proveer una valoración de la política obrera en este y los subsiguientes períodos.

Al describir la re-formación del movimiento obrero después de la guerra del Chaco, el relato permanece estrechamente político, pero se hace más tranquilo. Lora es capaz de ligar muchos temas complejos -el proceso de radicalización, no solamente de sectores del movimiento obrero, sino también de las clases medias y los militares, los intentos de incorporar al trabajo dentro de la estructura política y el modelo inestable de política que entonces sobrevino. Se nos muestra la polarización de las relaciones de clase y la dominación en aumento del movimiento obrero por una perspectiva revolucionaria socialista. Es este el período de las propias victorias políticas de Lora y él escribe sobre aquel compulsivamente.

Durante la revolución de 1952 el movimiento obrero estableció una nueva confederación, la Central Obrera Boliviana, que era más que una asociación de sindicatos. Incorporaba campesinos, mujeres, estudiantes y controlaba las milicias revolucionarias, y muchos, tanto en la derecha como en la izquierda, la vieron como un soviet Boliviano. Durante el período del MNR, la historia del movimiento obrero estaba dominada por la relación entre la COB y el gobierno del MNR. Originalmente esta relación fue denominada "co-gobierno" y muchos consideraron que permitió a la COB actuar como un Estado dentro de otro Estado y, por tanto, ejercitar el poder irresponsablemente. Lora muestra la superficialidad de esta punto de vista. Durante 1952 la COB mantuvo hegemonía política, pero permitió a la iniciativa del MNR controlar sectores de la propia COB. Por otro lado, el tratamiento que hace Lora del período post-revolucionado es bastante insatisfactorio. Explica la pasividad y

debilidad de la COB como consecuencia de la influencia creciente del estalinismo y el lechinismo, pero trata tal fenómeno moralística y polémicamente. El no puede, por lo tanto, explicar porqué los trotskystas perdieron su influencia, porqué fallaron en la construcción de un partido revolucionario de masas, y cómo la clase obrera Boliviana podía haber detenido las desastrosas series de reveses que sufrió desde 1952.

El libro se interrumpe abruptamente con el golpe de Bánzer de 1971 que acabó con la última manifestación del poder natural del movimiento obrero Boliviano. El relato de Lora del régimen de Tórres no da una indicación de que el movimiento en efecto se liberó de ninguna de sus tempranas debilidades, excepto tal vez aquella respecto a la personalidad de Juan Lechín. No hay una conclusión, ni evaluación de cómo la clase obrera podría leer su propia historia y aprenderde sus errores. Tampoco hay ninguna indicación de cómo Lora ahora observa sus propias posiciones políticas anteriores con la ventaja de su relato histórico comprensible. El aquí falla en darse cuenta totalmente de la promesa inicial del libro.

Los estudiantes bolivianos ya han incursionado extensamente en los materiales contenidos en el original, y esta edición permitirá hacerlo a muchos más. El editor ha provisto de bibliografía útil y una batería de notas; es una lástima que no haya provisto de una guía a las fuentes propias de Lora y a las secciones no traducidas. Es más lamentable que el publicista no haya producido un importante volumen en los altos standards de otros en estas series.

Universidad de Trent, Peterborough, Ontario

Jhon Hillman

Comentario de D. Ortuño

“Historia del Movimiento Obrero Boliviano”

por: Guillermo Lora

Ed. “Los Amigos del Libro”. La Paz, 1970. 421 Pgs. Tomo tercero.

Está en circulación el tercer tomo de la “HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO” de Guillermo Lora, que presenta una relación histórica impresionantemente documentada del movimiento obrero entre los años 1923 y 1933. Es un nuevo aporte que contribuye al conocimiento de la historia de los desposeídos y que los escritores al servicio de la feudal-burguesía la han olvidado deliberadamente.

En la primera parte se encuentra una detallada descripción de los cuatro primeros congresos del movimiento obrero. La preocupación fundamental de estos cuatro eventos es mantener a los trabajadores independientes de la influencia feudal-burguesa, preocupación que de un modo efectivo ha evitado la preponderancia de la corriente perniciosa del colaboracionismo clasista. Otro de los objetivos impostergables del movimiento obrero, según el autor, es organizar una dirección sindical nacional, necesidad que llegará mucho después debido a la influencia del movimiento artesanal cuyos objetivos son localistas y limitados.

En los dos primeros congresos de 1921 y 1925 se aprueban documentos de inconfundible filiación marxista. Sólo a partir del tercer congreso de 1927 se presenta

una pugna entre socialistas y ácratas, pugna que en el congreso de 1930 se define por el predominio anarquista que Lega a controlar organizaciones fuertes como la Federación Obrera Local de La Paz.

Dada la importancia del anarquismo en la historia sindical de Bolivia, Lora hace un detallado estudio de la actuación de esta tendencia entre los años 1920 y 1933, de las organizaciones de masas que controlan y de sus caudillos más connotados.

A partir de 1927 se presenta el anarquismo orgánicamente diferenciado del conjunto de las tendencias marxistas, aunque se encuentran sus antecedentes en el Centro Obrero Libertario. La Federación Obrera Local de La Paz es la organización que se convirtió en la trinchera desde la cual movilizaron profundamente a las masas tras la consigna de la jornada de ocho horas. Otras organizaciones que controlan los anarquistas en esta época son: la Federación Obrera Femenina, la Federación Obrera del Trabajo de Oruro, en su segundo período, la Federación Agraria Departamental de La Paz.

El libro cita a los connotados caudillos anarquistas, hombres de gran capacidad de lucha e incorruptibles ante la campaña corruptora de los gobiernos de turno. Son dignos de mención el cura Tomás Chávez, Luciano Vertiz Blanco, los hermanos Moisés, Cesáreo Capriles, etc.

La segunda parte del libro hace un amplio análisis de los múltiples intentos que se hacen por organizar el partido de la clase obrera, objetivo que marcha paralelo a la organización de una dirección sindical en escala nacional. Uno de los primeros intentos de estructurar un partido obrero, según Lora, es la organización del Partido Socialista en 1914. Posteriormente, en 1919, se funda el Partido Obrero Socialista en Oruro; un año después también es fundado en La Paz otro partido similar al anterior. Más adelante se fundarán muchos otros partidos, todos de inconfundible corte reformista, convencidos de que dentro del imperio de la Ley es posible cambiar la suerte de los explotados, partidos que aparecen y desaparecen en las campañas electorales.

El Partido Socialista Revolucionario de Bolivia, en los años 1929 y siguientes, hizo una profunda campaña antibelicista bajo las consignas de "guerra a la guerra", convertir la guerra imperialista en guerra civil", etc. Su acierto fue el señalar que el caudillo de la futura revolución será el proletariado.

Lora da una información amplia acerca de la organización de la Internacional Sindical Roja, bajo la inspiración de los bolcheviques rusos, con el propósito de contrarrestar a la tradición reformista y parlamentarista socialdemócrata de los obreros europeos. La Internacional Sindical Roja organizó su sección latinoamericana denominada Confederación Sindical Latinoamericana, organización a la que estaban afiliados los sindicatos bajo el control marxista de nuestro país. Posteriormente se realiza la conferencia de la C.S.L.A. en el Uruguay donde se discute la posición de los obreros bolivianos conviación a la guerra que se avecina con el Paraguay.

El libro registra que en 1930 y años posteriores se desata una profunda agitación contra el gobierno de Siles, agitación que se manifiesta bajo las consignas de la "nacionalización del clero"; la impugnación de la Ley de "Defensa Social", que pretende anular la libertad de pensamiento; "movilización contra la guerra". Agitación que concluye en una brutal represión gubernamental. La guerra del Chaco significa una muralla que separa, según el autor, la tradición revolucionaria de la pre guerra y los movimientos revolucionarios de la post guerra.

Para Lora, Tristán Marof es un circunstancial caudillo que en determinado momento contribuye a la radicalización de los obreros bajo sus propias banderas, un socialista libre pensador que se resiste a todo tipo de organización revolucionaria, un aventurero impregnado de las corrientes europeas. Marof significa para el movimiento obrero una esperanza y una frustración a la vez.

Se encuentra en el libro un capítulo dedicado a la campaña derechista financiada por la feudal--burguesía frente a la creciente ola revolucionaria, cuyos representantes más visibles son: Román Paz, Octavio Salamanca y Nicolás Fernández Naranjo.

Finalmente, la "HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO" dedica sus últimas páginas a las diversas conquistas logradas por el movimiento obrero en el campo legal: la jornada de ocho horas y las primeras leyes de protección social para el obrero, el niño y la mujer.

Noviembre de 1970

D. Ortuño

(de "Temas sociales", Publicación de la Facultad de sociología de la UMSA, La Paz, Bolivia, marzo de 1971, N°7)

Un libro nacional de este tiempo

Comentario leído en "Ciclo cultural", que, bajo la dirección de Raúl Salmón y Mario Guzmán Aspiazú, se difunde por "Radio Nueva América" de La Paz.

Título: Historia del Movimiento Obrero Boliviano. Autor: Guillermo Lora.
La obra ha llegado a su segundo tomo. Está editada por "Los Amigos del Libro".

El primer tomo de Historia del Movimiento Obrero Boliviano captó páginas y capítulos escabrosos de la primera etapa de la insurgencia social en nuestro país.

Tarea complicada para el político combatiente que, a través de su libro, se convirtió en el historiador minucioso, pleno de documentos. Buscados sin fin de todo cuanto se hizo o no se hizo en la larga y quebrada trayectoria de las luchas sociales de Bolivia.

Y ahora está el segundo tomo: Es otro examen que arranca del año 1900 hasta el año 1923.

Guillermo Lora abandona -diría el comentarista- el ensayo del que aprecia los fenómenos sociales con su acerada crítica, para jugar el papel del historiador.

Este el documento valioso. Guillermo Lora expone -nada más que expone- con mucha sobriedad, todo cuanto pasó en los inicios de las batallas sindicalistas del país.

Y su contribución histórica tiene más mérito cuando señala el ángulo en el que se movió el artesano. El gremialismo.

SE detiene el examen en las federaciones anarquistas.

Lora encuentra que ya en 1911 hubo un congreso universitario. Desmiente a los

historiadores de nuevo cuño, cuando hablaron de que la lucha social y política de los universitarios tuvo su rostro fijo en 1928.

Y Guillermo Lora, con su estilete habitual de escritor, escarba la historia de las masacres de trabajadores mineros en Uncía. Describe toda la historia del suceso, con frialdad. Y decimos frialdad en el momento en que Lora presenta únicamente documentos y más documentos! ...

Quien sea el que lea la Historia del Movimiento Obrero Boliviano desde cualquier posición política, ideológica, admitirá que es un aporte de primera magnitud para el enjuiciamiento del proceso de Bolivia en el abierto e incesante camino de las luchas sociales.

Guillermo Lora ha enjuiciado y sigue enjuiciando con calidad, con responsabilidad, la vida obrera del país! ...

Ese es un mérito que nadie puede desconocerlo!

Y la Historia del Movimiento Obrero Boliviano pronto llegará a los cinco tomos. Deseamos que la tarea de Guillermo Lora, en cuanto a esclarecimientos se trata, quede cumplida. Pero su libro, el segundo tomo de Historia del Movimiento Obrero Boliviano, es el libro de los últimos días ... Es el libro que hace noticia!

(de "Masas" N° 359,
La Paz, 26 de Junio
de 1969)

Comentario de "Clarín"

Historia del Movimiento Obrero

(Publicado en "Clarín" del mes de octubre de 1969).

(2do Tomo) por GUILLERMO LORA. Imprenta de la Universidad Mayor de San Andrés, para Editorial "Los Amigos del Libro". La Paz, 1969. 448 Págs. Ilustraciones.

Guillermo Lora, el conocido dirigente porista, ha publicado el segundo tomo de su "Historia del movimiento obrero boliviano".

En prosa fluida se historia, en este volumen, el origen de las organizaciones sindicales del país.

El autor subraya dos etapas en este proceso de iniciación del fenómeno laboral. La primera -dominada por el signo de la feudal-burguesía- se extiende hasta 1920. Esta etapa se caracteriza porque los trabajadores empiezan a agruparse en torno a organizaciones de tipo mutualista, fuertemente controladas e influenciadas por la política oficialista.

Pero de aquí, de estas organizaciones primarias, de estructura feudal, nacerán después los cuadros laborales con doctrina eminentemente sindicalista. Y, con ellos, se iniciará la segunda etapa del movimiento obrero boliviano.

Dentro del marco político y social de la época, Lora describe el delirante proceso de formación ideológica y estructural de la clase trabajadora. Las primeras agrupaciones laborales como la Unión Gráfica Nacional, la Federación de Artes Gráficas, el Centro Social de Obreros, la Federación Obrera del Trabajo, etc, adquieren significación vigente.

En este período se desarrollan algunas de las luchas sociales más importantes de nuestra patria (1900-1923). Guillermo Lora, conocedor de este proceso dramático, lo describe y enjuicia, aunque -como es lógico-, desde su punto de vista doctrinal. De esta manera ubica al lector en acontecimientos tan importantes como los primeros congresos universitarios, la formación de la Federación Universitaria Boliviana y su vinculación con el proceso social del país. Desfilan en este volumen, los precursores del movimiento obrero boliviano. Se subraya la influencia marxista en organismos como el Centro Obrero de Estudios sociales, fundado en 1914, y en algunos órganos de prensa, que como "Bandera Roja", fueron de inspiración abiertamente socialista.

Lora finaliza su obra con la masacre de Uncía, de 1923, acontecimiento que inicia la historia épica y sangrienta del minero boliviano, durante el presente siglo.

Es un libro vibrante por su contenido y por su estilo. Constituye indudablemente, un valioso documento para la interpretación socio-política de Bolivia.

(de "Masas" N° 364, La Paz, 14 de Enero de 1970)

Vive un anarquista

Desiderio Osuna nos informa que está en pie un anarquista (aunque no ciertamente de combate), como se leerá en la carta que transcribimos. Al respecto, en el tercer tomo de la Historia del Movimiento Obrero de G. Lora, que circulará estos días, se dedica un amplio y documentado capítulo a las organizaciones y personalidades anarquistas (Osuna volverá a leer referencias sobre él). Acerca de la inmovible fidelidad de nuestro héroe al ideario ácrata, debemos recordar que después de la contrarrevolución rosquera del 21 de julio de 1946 se vio convertido en elemento clave de la Policía Municipal. En la epístola suscrita por el viejo redactor de "Humanidad" leemos que le obligaron a cumplir tan desdorado fin, nosotros retrucamos que nadie le puede empujar a actuar contra sus convicciones ideológicas y mucho más si éstas se inspiran en la doctrina anti-autoritaria. REDACCION.

La Paz, 27 de Enero de 1970

Señor

GUILLERMO LORA

Ciudad

Distinguido amigo:

Acabo de leer el segundo volumen de su libro "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" en cuyas páginas encuentro varios errores y deficiencias seguramente por falta de informaciones verídicas que le han proporcionado, particularmente me refiero a una carta abierta que yo le hubiera dirigido al señor José Vera Portocarrero en junio 1923, carta que yo no la escribí porque yo nada tenía que hacer con dicho señor. Puede que mi hermano Santiago le hubiese dirigido por entredichos ideológicos.

En la misma página Ud. manifiesta que "a su vez he tenido un final desdorado". ¿Cual es la forma desdorado con que he finalizado? Tal vez Ud. se refiere a los cargos públicos que he desempeñado por mandato de las federaciones y sindicatos en los que militaba y contra mi voluntad. Nunca he pertenecido a partido político alguno, ni he merecido favores de ellos, porque todos los partidos políticos, comenzando de los conservadores, terminando en los comunistas, son conglomerados de farsantes y ambiciosos.

Para ser historiador hay que tener datos verídicos y no atenerse a informaciones interesadas, discriminando a actores de hechos conocidos por el pueblo. Por ejemplo: nada dice Ud. en su historia de la poderosa Federación Obrera Local precursora del movimiento sindical revolucionario desde el año 1924; de sus luchas callejeras; de sus huelgas; de la conquista de la jornada de ocho horas en La Paz, etc, la persecución y confinamiento del grupo libertario "La antorcha" que denunció en un vibrante manifiesto la masacre de los trabajadores mineros de Uncía el año 1923 y muchos otros pasajes de la vida sindical de las organizaciones libertarias. Eso no es ser historiador imparcial.

Sobre la labor del semanario "Bandera Roja" Ud. hace resaltar solamente a los intelectuales que estuvieron en la dirección en un principio y maliciosamente no menciona los nombres de los directores obreros que se hicieron cargo posteriormente. Además "Bandera Roja" no fue comunista porque era un órgano de combate de las reivindicaciones obreras en general y su marcado tinte anticlerical, fue por la posición del gerente-propietario Sr. Felipe Reque Lozano.

Entre los periódicos obreros de esa época no menciona a "La Protesta" órgano de la F.O.T. de Oruro; "Humanidad" de la FOL de La Paz, "La Antorcha", "La Tea", "Acción Sindical", etc. En cuanto a la supervivencia de la Federación Obrera del Trabajo, Ud. le da vida activa hasta el año 1930, siendo la verdad que con la fundación de la FOL el año 1923 aquella Federación prácticamente no existía y los escasos dirigentes de ese pequeño núcleo, más se preocupaban de ajetreos políticos que de aspectos sindicales. Todas las actuaciones de la Federación Obrera Local, Ud. lo adjudica a la F.O.T., tomando datos falsos de la "Correspondencia sudamericana" que no trasluce la verdad de muchos actos del movimiento sindical boliviano.

La redundancia de datos sin mayor importancia, como transcripción literal de Estatutos; personificar a determinados elementos en la actuación de las luchas sindicales que no tenían mayor respaldo entre los trabajadores de esa época, quitan el valor de la historia que escribió como obra de consulta.

Al terminar estas breves observaciones, mi propósito es dejar constancia que su historia es incompleta y sectaria y ojalá en sus posteriores publicaciones sobre el movimiento obrero en Bolivia, esté alejado de parcialidad.

Con este motivo lo saludo cordialmente.
Desiderio Osuna A.

(de "Masas" N° 366, La Paz, 25 de Febrero de 1970)

Opiniones sobre la obra de G. Lora

Juan Siles Guevara:

"Lora, Guillermo: Historia del movimiento obrero boliviano, La Paz - Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro; Impr. Burillo, 1967-68 - Tomo 1 (1848-1900) 455 -13 pág.; tomo II (1900-1923), 426 - 22 pág.

"Importante contribución a la historia social del país, hecha en base a una documentación impresionante".

("Bibliografía selecta de ciencias sociales" en "Aportes" N° 17 (París, julio de 1970).

Carlos Castañón:

"El segundo tomo de "Historia del Movimiento Obrero Boliviano", de Guillermo Lora, es, como el primero, una investigación seria cumplida en medio de folletos desconocidos y testimonios prestados por varios protagonistas de los sucesos. El tema era casi desconocido. El segundo tomo comprende los años 1900 a 1923. El autor ya no incursiona en apreciaciones de índole literaria como ocurrió en el tomo anterior, donde zarandeó a gusto y no muy justamente a los poetas románticos".

"Documentos políticos de Bolivia"

Por Guillermo Lora, es una interesante recopilación de material político del pasado y del presente, sin mayores comentarios. El libro se inicia con la proclama de la Junta Tuitiva y mensajes de Bolívar y Sucre; sigue con "Mi defensa" de Casimiro Olañeta, los programas de los diferentes partidos, y termina con el actualísimo Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación".

(de "Presencia", 6 de agosto 1970)

(de "Masas" N° 378, La Paz, 30 de Septiembre de 1970)

Sobre la "Historia del Movimiento Obrero"

Transcribimos de "Presencia" (La Paz, 18 de noviembre de 1970) el siguiente comentario:

La fecunda investigación dentro del campo político y social que cumple el escritor y político Guillermo Lora acaba de entregar a los lectores una nueva obra: el tercer tomo de la "Historia del Movimiento Obrero Boliviano" (Editorial "Los amigos del Libro").

El presente volumen, en más de cuatrocientas páginas se ocupa del decenio correspondiente a 1923-1933 cuyos acontecimientos son divididos e interpretados

por el autor mediante tres partes:

“La gran lucha ideológica”, “Los obreros y el socialismo” y “Conquistasen el campo legal”. En la primera parte se ocupa de I) primeros congresos obreros y II) El anarquismo. La segunda de: 1) Los partidos socialistas, II) La internacional sindical Roja, III) La “revolución” de Villazón. Agitación antigubernamental. La movilización contra la guerra con el Paraguay, IV) La legendaria figura de Marof y V) La derecha contra la amenaza de la “revolución social”. La tercera parte se ocupa de I) La jornada de ocho horas y II) Las primeras leyes sociales. Completa este tercer tomo un apéndice sobre el periodismo en el siglo XIX.

A tiempo de presentarla nueva obra de Lora, los editores afirman: “Sabemos -porque nos consta- que quienes leyeron los dos tomos anteriores de la obra de Lora, esperan la aparición del presente con marcada impaciencia no sólo porque la historiación va acercándose a la época actual, sino porque abarca un lapso apasionante de las vicisitudes obreras en la conquista de sus derechos. Al ritmo creciente de la aparición de talleres industriales y de la tecnificación de las explotaciones mineras, se desarrolla un proletariado combativo, dotado de información doctrinaria y consciente de su rol en la sociedad boliviana semifeudal”.

Un excelente complemento del libro habría sido un índice onomástico, del que carece el libro (que a primera vista tampoco se lo identifica como el tercer tomo de una historia por falta del dato preciso en la tapa o el lomo). Una historia, a fin de facilitar su empleo como fuente de consulta necesariamente debe tener un índice onomástico.

Con el nuevo libro, Guillermo Lora suma a su producción bibliográfica más de una decena de títulos entre estudios literarios, biografía y ensayos socio-políticos.

(de “Masas” N° 383, La Paz,

Comentario de R. Alexander

Comentario sobre un libro de Guillermo Lora

El Movimiento Obrero Boliviano

Por Robert J. Alexander Profesor del Departamento de Economía de State University of New Jersey,. New Brunswick (Comentario publicado en “Industrial and Labour Relations Review”)

Historia del movimiento obrero boliviano 1848-1975 por Guillermo Lora (editado y compendiado por Laurence Whitehead; traducido por Christine Whitehead). New York; Cambridge University Press, 1977,X, 408 p.p. \$us 24.95

Este es un compendio y traducción excelentes de una obra mucho más extensa, la primera parte apareció en tres volúmenes en Bolivia y alguna parte no ha sido nunca publicada anteriormente, ni siquiera en español. Está escrita por un hombre que fue partícipe en gran parte de lo que se escribe en el período después de los años 30 y muestra las marcas de la posición ideológica particular que ha mantenido desde su ingreso a asuntos sindicales y políticos hace casi cuarenta años.

Guillermo Lora, el dirigente del trotskismo en Bolivia, es quizá la figura más

importante que ese movimiento ha producido en toda Latinoamérica. Su hermano César, fue un dirigente importante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros por un número de años en la década de 1950 y de 1960, hasta que la policía del presidente Barrientos lo mató en 1966. El mismo Guillermo Lora, aunque nunca fue un trabajador manual, ha participado en las actividades de la Federación de Mineros y en la Central Obrera Boliviana, en todo momento que las condiciones políticas lo han permitido.

Lora descubre los orígenes del movimiento obrero de Bolivia en la mitad del Siglo XIX entre los artesanos de Sucre, La Paz y otras cuantas ciudades. Como él indica, los artesanos dominaron el movimiento obrero hasta por lo menos la década de 1920, cuando los ferroviarios, mineros y otros trabajadores en los sectores más modernos de la economía empezaron a formar sus propias organizaciones. La parte del libro que cubre el período desde la Guerra del Chaco (1932-35) se concentra densamente en la historia de los trabajadores mineros y su federación.

Aunque siendo modesto acerca de su propia participación en asuntos sindicales, Lora revela algo que fue ampliamente comentado en la época anterior, que él fue autor de la famosa "TESIS DE PULACAYO", la declaración trotskysta de principios adoptada por la Federación de Trabajadores Mineros en noviembre de 1946. También revela algo que no fue hasta ahora de conocimiento público, que el principal dirigente minero Juan Lechín, por un período fugaz, en la última parte de la década de 1940 mantuvo militancia secreta en el partido trotskysta, el Partido Obrero Revolucionario.

Lora explica extensivamente la evolución política del movimiento obrero boliviano. Anota su cercana asociación con el Partido Liberal en la última parte del siglo diecinueve y las primeras dos décadas del presente siglo, y su asociación con el Partido Republicano por un corto período antes y después que los republicanos tomaron el poder en 1920. Indica el surgimiento desde entonces de la influencia comunista y anarquista en los años que preceden la guerra del Chaco, y las luchas entre los comunistas, trotskystas y elementos del movimiento Nacionalista Revolucionario, "MNR", desde comienzos de la década de 1940.

En su tratamiento de los dirigentes obreros que fueron activos antes que él empiece a tomar parte en el sindicalismo y la política, Lora es sorprendentemente objetivo, incluso generoso, con aquellos cuya ideología obviamente siente estaba equivocada. Es menos benevolente hacia aquellos que erraron en su entendimiento de los designios de la historia en el período subsiguiente.

Comprensiblemente, el enfoque de Lora sobre el Movimiento Obrero Boliviano está basado en el supuesto rol revolucionario de éste (en un país cuyo 60% de su población todavía está compuesta por campesinos), como la vanguardia y, dentro del sindicalismo en general, basado en los mineros como a vanguardia de la vanguardia. Su disputa con Juan Lechín y otros dirigentes obreros del MNR es que ellos no vieron este rol y no continuaron a comienzos de la década de 1950 hasta el establecimiento de una dictadura del proletariado.

Lora argumenta que el movimiento obrero podría haber instituido un régimen en los tempranos días del régimen del MNR, después de la revolución de abril de 1952, si no hubiese sido por la "traición" de Lechín y los otros dirigentes del MNR. En ese tiempo, indica, el gobierno del MNR dependía para su existencia de la milicia de trabajadores, particularmente de los mineros, y ellos podían "fácilmente" haber expulsado el régimen de Víctor Paz Estenssoro y poner uno "propio".

Este argumento pasa por alto un número de cosas. Primero, ignora el hecho de que virtualmente el único lugar en que devotos de la dictadura del proletariado tenían influencia real eran los sindicatos de las minas, e incluso ahí el MNR era predominante en esos años. Ignora el hecho de que los trabajadores fabriles, ferroviarios y otros grupos sindicales estaban casi exentos de influencia trotskysta. También pasa completamente por alto el hecho de que el gobierno del MNR rápidamente armó a los campesinos, con los fusiles y municiones tomadas del ejército nacional disuelto, y así al menos después de los primeros meses cualquier intento de establecer una dictadura de los mineros habría encontrado una resistencia impetuosa por parte de los campesinos dominados por el MNR. También, aunque acusa de ser "simplista" al autor de esta reseña por su argumento que el aparente control trotskysta del grupo central de obreros, la COB, durante los primeros meses de la revolución fue artificial, él no ofrece una explicación contraria sustancial. Tampoco él indica cómo los trotskystas perdieron tan repentinamente el control de la COB una vez que ellos lo usaron para desafiar al gobierno en el asunto de cómo las tres grandes empresas mineras deberían ser nacionalizadas.

Sin embargo, descuidando los desacuerdos que uno pueda tener con la interpretación de Guillermo Lora de los eventos de la década de 1950, este es un libro muy valioso. Es particularmente útil para seguir el desarrollo de las luchas continuas y vigorosas de los trabajadores mineros y por su relato casi diario de la temporal derrota del movimiento obrero por los regímenes militares de 1960. El libro termina con la toma del poder por el Gral. Hugo Bánzer en agosto de 1971.

Es el único estudio actual serio en inglés del movimiento obrero boliviano. Es altamente recomendado a cualquier persona interesada en movimientos obreros comparativos o la historia comparativa de política radical.

(de "Presencia", La Paz, Bolivia, 25 de marzo de 1979)